CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Colección Memorias

ESPAÑA
2000

ECONOMÍA TRABAJO Y SOCIEDAD

MEMORIA
SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LABORAL

CES

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Departamento de Publicaciones
NICES: 266-2001

Colección Memorias
Número 8

La reproducción de esta Memoria está
permitida citando su procedencia.

Primera edición, junio de 2001

© Para esta edición: Consejo Económico y Social. España. 2001
Derechos reservados conforme a la Ley:
Consejo Económico y Social.
Huertas, 73. 28014 Madrid. ESPAÑA.
Tel.: 91 429 00 18 - Fax: 91 429 42 57
E-mail: institucional@ces.es
Información Internet: **http://www.ces.es**

ISBN: 84-8188-143-0
Depósito legal: M. 29.483-2001

Preimpresión: Marasan, S. A.
José Romero, 2 - 28039 Madrid

Imprime: ELECE Industria Gráfica
Río Tiétar, 24 - 28110 Algete (Madrid)

MEMORIA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE ESPAÑA EN 2000

Aprobada en la sesión extraordinaria del Pleno
del Consejo Económico y Social
celebrada el 30 de mayo de 2001

CES
CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL

PRESENTACIÓN

Un año más tengo el honor de presentar al Gobierno y también a toda la sociedad española la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Nación correspondiente al año 2000, aprobada en el Pleno extraordinario celebrado el 30 de mayo, esto es, dentro del plazo legalmente establecido (cinco primeros meses de cada año), ciertamente reducido para la envergadura del trabajo a realizar. Un simple repaso del índice de materias que aborda, pone de manifiesto el intenso esfuerzo de los Consejeros componentes de la Comisión de Trabajo que elabora la propuesta a debatir en el Pleno y de los servicios técnicos que la apoyan.

Dividida en tres capítulos, como viene siendo habitual, consolida una estructura que se ha manifestado claramente conveniente y adecuada para efectuar un diagnóstico completo de la problemática española en sus tres grandes campos: económico, laboral y social y de calidad de vida, con el valor añadido de ser plenamente compartido por las organizaciones representadas en el Consejo: empresariales, sindicales, agrarias, marítimo-pesqueras, de consumidores y usuarios y de la economía social.

En esta presentación no voy a tratar de los contenidos de los referidos capítulos puesto que un resumen de los aspectos básicos se recogen en las respectivas introducciones que anteceden a cada uno. Más bien y, como en otras ocasiones, quisiera estimular la lectura, llamando sólo la atención sobre las cuestiones más relevantes y aquellas otras significativas que, también siguiendo el estilo de otras Memorias, han tenido especial protagonismo, al punto de requerir, más o menos específicamente, una atención monográfica.

De esta forma, el capítulo I, destaca cómo durante el ejercicio 2000 la economía española fue capaz de mantener, por cuarto año consecutivo, un ritmo de crecimiento elevado, 4,1 por 100, aunque a lo largo del año se observó una cierta tendencia a la desaceleración, relacionada con el gradual debilitamiento del principal motor de la actividad: la demanda interna, y que se mantiene en los primeros meses de 2001. El fuerte crecimiento del PIB permitió lograr una significativa creación de empleo que se tradujo en una importante reducción de la tasa de paro

hasta alcanzar el 14,1 por 100 de la población activa como promedio del año 2000, cuestión que se trata con detalle en el capítulo II.

Esta positiva evolución del empleo, junto a la de la actividad económica, ha favorecido, igualmente, la continuación del proceso de reducción del déficit público. Con el objetivo de asegurar en el futuro una mayor disciplina presupuestaria, ha surgido durante el año 2000 el Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria que, además de involucrar a todos los niveles de la Administración, supondrá el establecimiento de una limitación del gasto público en función de los ingresos.

Diversos factores, casi todos exógenos, han afectado a la inflación española que ha alcanzado en el ejercicio 2000 el nivel más elevado de los últimos cinco años, con la preocupación añadida de que durante el período se ha producido una mayor filtración de los factores inflacionistas hacia la parte más estructural del índice de precios, medida por la inflación subyacente. La restricción monetaria aplicada por el Banco Central Europeo para el conjunto de la zona euro no fue suficiente para sofocar las tensiones inflacionistas españolas; de hecho, el diferencial de inflación con los principales socios comunitarios se volvió a ampliar, deteriorando así la competitividad-precio.

A su vez, estos mismos factores evitaron que la balanza de pagos se beneficiara de la mejoría que en términos reales experimentó el saldo exterior, favorecido por el menor empuje de la demanda interna y el dinamismo del comercio internacional. De hecho, en términos monetarios, la apreciación del dólar respecto al euro y el encarecimiento del crudo —materia prima cuyo valor viene expresado en la divisa norteamericana— provocaron un aumento sustancial en el valor de las importaciones frente al de las exportaciones.

Como todos los años, esta visión panorámica de la economía española que se efectúa en el capítulo I, termina con una revisión de los principales acontecimientos vividos en el ámbito de la Unión Europea, marcados principalmente por el Tratado de Niza que define el marco en el que se producirá la ampliación hacia el Este de Europa.

El capítulo II dedica un amplio estudio a las cuestiones más relevantes ocurridas en el año 2000 que afectaron al mercado de trabajo, las relaciones laborales y las políticas de empleo, a partir del consenso básico, de los interlocutores sociales integrantes del Consejo, en las conclusiones y valoraciones más o menos implícitas que en el mismo se contienen.

Un hecho significativo de este ejercicio han sido los positivos resultados que se aprecian en la evolución del mercado de trabajo, donde, además del crecimiento del empleo, se observa un gran dinamismo del empleo femenino, y un importante

aumento en el empleo de los jóvenes de 20 a 24 años. No obstante, entre los datos no tan positivos, también se observa un incremento relativamente bajo del número de ocupados en el grupo entre 25 y 54 años. Respecto a la tasa de temporalidad, aun persistiendo tasas elevadas, es de destacar el mayor ritmo de aumento del empleo indefinido en el sector privado, frente al incremento del empleo temporal en el sector público.

El año 2000 ha sido el tercero de puesta en práctica de la estrategia europea de empleo definida en el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997, lo que ha venido dando lugar a la elaboración de sucesivos Planes Nacionales de Acción para el Empleo. Como no podía ser de otra manera, el Consejo avala esta estrategia y se hace eco de los resultados del Plan del año 2000 y de las perspectivas para el año 2001. Además —y ésta es, sin duda, una de las principales aportaciones de la Memoria— continúa con el complejo análisis de las medidas de fomento del empleo emprendidas por las Comunidades Autónomas; la existencia de diversos Pactos de Empleo, con dispares vigencias y medidas, dificulta una conclusión definitiva sobre el impacto global del conjunto de estas políticas.

Con relación a la protección por desempleo, dos circunstancias deben ser destacadas: por un lado que, pese al incremento de las tasas de cobertura, se aprecia nuevamente una disminución en el número de perceptores del subsidio de desempleo; y por otro, que en esta Memoria se analiza el Programa de Renta Activa de Inserción, sin dejar de recordar la necesidad de una profunda reflexión sobre el sentido y alcance de este tipo de rentas en particular, y sobre las prestaciones por desempleo en general.

La negociación colectiva, como en ediciones anteriores de la Memoria, continúa siendo pieza clave de este capítulo. De la consideración de los principales datos, contenido y estructura del año, se concluye que la negociación colectiva ha dado escasos pasos para la implantación del modelo ideal propuesto en el Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva. Se presenta como novedad la profundización en el estudio de los contenidos tradicionales, como son salario, jornada, empleo, contratación laboral y clasificación profesional sobre una muestra importante de convenios colectivos, representativa de los distintos ámbitos de negociación.

Siguiendo pautas de años anteriores, se presta atención al diálogo social. Fruto de la negociación entre los interlocutores sociales a lo largo del año, la Memoria recoge y analiza el Tercer Acuerdo Nacional de Formación Continua, y el Segundo Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos. Sin embargo, la no renovación del Acuerdo de Estabilidad en el Empleo, ha dado lugar a la aprobación por el Gobierno del RDL 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, cuyas principales novedades se describen.

Cuestión también de ineludible tratamiento en este capítulo es la siniestralidad laboral, fenómeno en el que confluyen intensos esfuerzos, de todo orden, con el fin de identificar y definir posibles líneas de solución, al constituir uno de los problemas fundamentales del mercado de trabajo español. En el texto se aborda el desarrollo de las acciones contempladas por el Plan de Acción contra la siniestralidad y el arranque definitivo de la Fundación para la prevención de riesgos laborales, como principales actuaciones realizadas en el año 2000.

Finalmente, el capítulo III prosigue el enfoque adoptado en anteriores ediciones de la Memoria del CES, de tratar una serie de grandes cuestiones elegidas como indicativas de la calidad de vida de los españoles. En todas hay, en el repaso del año 2000, aspectos destacables, cada uno de los cuales invita a la lectura de los correspondientes apartados: el debate sobre la reforma del sistema educativo, que atañe a todos sus niveles; la necesidad de instrumentar políticas eficaces para la coordinación de un sistema sanitario público que se encamina a su completa descentralización al tiempo que precisa atender a nuevas y crecientes demandas; los pobres resultados del plan de vivienda, indudablemente ligados al problema de la oferta de suelo; la constante discusión sobre el reparto del agua, que se reavivó con la presentación del plan hidrológico nacional; la alarma social que suscitó, ya a finales del año, la aparición de los primeros casos de "vacas locas" en toda Europa, que en nuestro país se tradujo en una espectacular retracción del consumo; la polémica adjudicación de licencias en la llamada telefonía móvil de tercera generación; el superávit de las cuentas de la Seguridad Social y la problemática de las pensiones.

Pero, por su alcance, quizá el aspecto más interesante del capítulo III reside en esta ocasión en el último apartado dedicado al tratamiento de la inmigración. Cabe recordar que —como se señala en la introducción del capítulo— a lo largo del año se sucedieron los debates en los ámbitos jurídicos y políticos sobre esta materia: una Ley Orgánica, la 4/2000, vino primero a reformar la hasta entonces vigente, de 1985; y otra más, la 8/2000, reformó casi inmediatamente la aprobada pocos meses antes. Pero el motivo que llevó a abordar el tratamiento de esta cuestión en la Memoria, excede con mucho tal circunstancia, por no hablar de otras que en su día tuvieron una notable repercusión pública. Una y otras no son sino expresiones de cómo el aumento de la población inmigrante en España repercute, para bien y para mal, en todos los ámbitos de una sociedad que la propia inmigración está transformando. Sin embargo, el apartado no es sino un punto de partida, pero contiene una rigurosa descripción de la situación actual en aspectos básicos —empezando por quiénes y cuántos— que hacen su lectura imprescindible si se quiere contribuir con opiniones, desde la razón, sobre el presente y el futuro de la inmigración en nuestro país.

FEDERICO DURÁN LÓPEZ
Presidente del Consejo Económico y Social

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I. **PANORAMA ECONÓMICO** 1

1. INTRODUCCIÓN 3

2. UN CONTEXTO INTERNACIONAL FAVORABLE 11

2.1. Comercio mundial: mejor de lo esperado 11
2.2. Buenos resultados de la economía internacional, aunque con signos de debilitamiento 14

3. ELEVADO CRECIMIENTO CON TENDENCIA A LA DESACELERACIÓN 21

3.1. Se superaron las previsiones 22

3.2. Industria y energía, protagonistas del crecimiento 34

3.2.1. Aportación positiva del sector primario 36
3.2.2. Elevado crecimiento del sector industrial 41
3.2.3. Decae la edificación residencial y se recuperan las obras públicas 47
3.2.4. Ligera desaceleración de la actividad terciaria 49

3.3. Elevado crecimiento de todas las regiones españolas 54

3.3.1. Actuaciones estructurales comunitarias a favor de las regiones españolas 57
3.3.2. Las regiones españolas en el marco de una Unión Europea ampliada 59

4. TRAYECTORIAS DIVERGENTES DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA 63

4.1. La demanda interna pierde impulso 63

4.1.1. El consumo privado frenó su ritmo de crecimiento 64
4.1.2. La inversión se desaceleró 67

4.2. Sector exterior: aportación más favorable de lo esperado 69

4.2.1. Balanza de mercancías: deterioro por la factura energética 74
4.2.2. Moderada mejora del turismo 80
4.2.3. Rentas, transferencias y balanza de capital 82
4.2.4. Inversiones españolas en el exterior y extranjeras en España 83

5. INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 85

5.1. El IPC duplicó las previsiones oficiales 86
5.2. Política monetaria del Banco Central Europeo 98
5.3. Mercados financieros 103
5.4. La debilidad continuada del euro 108

6. SECTOR PÚBLICO: HACIA EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 111

6.1. La liquidación del Presupuesto del Estado para 2000 112

6.1.1. Ingresos no financieros 113
6.1.2. Gastos no financieros 116
6.1.3. Endeudamiento y financiación 118

6.2. Presupuesto para 2001: equilibrio presupuestario 120

6.2.1. Principales líneas de los Presupuestos Generales del Estado para 2001 121
6.2.2. Principales políticas de gasto para 2001 125

6.3. Novedades tributarias 127

6.4. La política presupuestaria en el marco del Programa de Estabilidad y Crecimiento 131
6.4.1. Las Leyes de Estabilidad presupuestaria 134

7. UNIÓN EUROPEA 136

7.1. Panorama general 137

7.2. Unión Económica y Monetaria 140

7.2.1. El ciclo económico alcanza su máximo 141
7.2.2. La debilidad del euro en los mercados de divisas 145
7.2.3. Armonización fiscal en la Unión Europea. Una perspectiva del debate 152
7.2.4. Reforma fiscal 155
7.2.5. Más apoyo para las empresas europeas 160

7.3. Política europea de empleo y política social 161
7.3.1. Empleo 161
7.3.2. La nueva Agenda Social 163

7.4. La Conferencia Intergubernamental y sus consecuencias: el Tratado Niza. Reforma de las instituciones y ampliación 171

7.5. Otras políticas 176

7.5.1. Políticas estructurales y de cohesión 176
7.5.2. Agricultura, pesca, medio ambiente y consumo 177

CAPÍTULO II. **MERCADO DE TRABAJO, RELACIONES LABORALES Y POLÍTICAS DE EMPLEO** .. 181

1. INTRODUCCIÓN 183

2. PANORAMA GENERAL DEL EMPLEO 196

2.1. Evolución y perspectivas de la ocupación, la actividad y el paro 199

2.1.1. Evolución por sexo y edad 205
2.1.2. Perspectiva sectorial 207
2.1.3. El empleo asalariado, motor del crecimiento de la ocupación ... 210
2.1.4. Nuevo descenso de la temporalidad 212
2.1.5. El tiempo parcial en 2000 219
2.1.6. Perspectiva territorial 222

2.2. Flujos de entrada y salida 227

2.2.1. Panorama de la contratación 228
2.2.2. Fin de la vigencia del AIEE 240
2.2.3. Extinciones del contrato y despidos 258

3. POLÍTICAS DE EMPLEO 263

3.1. Marco Europeo 263

3.2. Plan Nacional de Empleo y Pactos y Medidas de Empleo en las Comunidades Autónomas 270

3.2.1. Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España 2000 270
3.2.2. Pactos y medidas de las Comunidades Autónomas a favor del empleo 280

3.3. Políticas activas y pasivas 313

3.3.1. El papel de la formación 313
3.3.2. Otras políticas de generación de empleo 323
3.3.3. La protección social al desempleo 334
3.3.4. El gasto en protección por desempleo 344

4. EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN UN SISTEMA DE RELACIONES LABORALES EN EVOLUCIÓN 347

4.1. Resumen de la negociación colectiva del año: principales datos, estructura y contenidos 349

4.1.1. Planteamiento y curso de la negociación colectiva 350
4.1.2. Estructura de la negociación colectiva 357
4.1.3. Articulación de la negociación colectiva y evolución de las unidades de negociación 371
4.1.4. Contenidos de la negociación colectiva 375

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 423

5.1. Evolución de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 423
5.2. La estrategia contra la siniestralidad: prioridades de acción 428
5.3. Iniciativas autonómicas contra la siniestralidad laboral 437

6. CONFLICTIVIDAD LABORAL 444

6.1. Huelgas, cierres patronales y conflictos colectivos 445
6.2. Procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales: principales resultados del año 452

6.2.1. Balance del Acuerdo Interconfederal de Solución Extrajudicial de Conflictos 452
6.2.2. Balance de los Acuerdos Autonómicos 458

CAPÍTULO III. **CALIDAD DE VIDA Y PROTECCIÓN SOCIAL** 463

1. INTRODUCCIÓN 465

2. CALIDAD DE VIDA 477

2.1. Educación 477

2.1.1. Enseñanza no universitaria 478
2.1.2. Reforma de las enseñanzas mínimas en ESO y en bachillerato. 484
2.1.3. Universidad 485
2.1.4. Educación y acceso al empleo 489
2.1.5. La educación en la Sociedad de la Información 498

2.2. Sanidad 511

2.2.1. Panorama general 511
2.2.2. Demoras excesivas: un problema de accesibilidad al sistema 522
2.2.3. Política de uso racional del medicamento 526

2.3. Vivienda 540

2.3.1. Panorama general 541
2.3.2. Política de apoyo a la vivienda 552
2.3.3. Vivienda, urbanismo y cohesión social 561

2.4. Medio ambiente 566

2.4.1. Indicadores ambientales 566
2.4.2. Aspectos generales 568
2.4.3. Plan Hidrológico Nacional: el problema del reparto del agua 572

2.5. Consumo 581

2.5.1. Indicadores básicos 583
2.5.2. Consultas y reclamaciones de los consumidores 590
2.5.3. Transacciones electrónicas 593
2.5.4. Seguridad alimentaria 599

2.6. Sociedad de la Información 602

2.6.1. Panorama general 602
2.6.2. Políticas de implantación y promoción 606
2.6.3. Empleo y Sociedad de la Información 614
2.6.4. Seguridad en la red 617

3. Protección Social 627

3.1. Indicadores básicos de la protección social en España y en la Unión Europea 629
3.2. Las cifras de la Seguridad Social 636

3.2.1. Superávit financiero 636
3.2.2. Cobertura financiera 638
3.2.3. Los gastos de la Seguridad Social en la perspectiva del Pacto de Toledo 641

3.3. Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de la Seguridad Social 649
3.4. Previsión social complementaria: la exteriorización de los compromisos por pensiones 660

4. Inmigración, mercado de trabajo e integración social 668

4.1. Los perfiles de una nueva realidad 668
4.2. Inmigración y mercado de trabajo 673
4.3. La reforma de la regulación de los derechos y libertades de los extranjeros en España 685
4.4. Políticas de integración social 690

ÍNDICES 697

ÍNDICE DE CUADROS 699
ÍNDICE DE GRÁFICOS 705
ÍNDICE DE TABLAS 709
ÍNDICE DE ANEXOS 711

CAPÍTULO I

PANORAMA ECONÓMICO

1. INTRODUCCIÓN

Durante el ejercicio 2000, la economía española ha mantenido, por cuarto año consecutivo, un elevado ritmo de crecimiento, del 4,1 por 100, ocho décimas por encima del alcanzado por la media de la Unión Europea. Este resultado, en términos de crecimiento, no puede calificarse más que de positivo, y se alcanzó mediante una composición del mismo más equilibrada, con una desaceleración de la demanda interna y una recuperación del sector exterior. Esta última mejora no se reflejó en la balanza de pagos debido a la fuerte elevación de los precios del petróleo, uno de los principales acontecimientos que marcaron el año.

La actividad a lo largo del ejercicio mostró una tendencia hacia la desaceleración, con un claro perfil de debilitamiento de las principales macromagnitudes internas que, unido a la ralentización experimentada igualmente desde finales de año en el entorno económico internacional, presagia para el año 2001 unos resultados de la economía española no tan favorables.

El fuerte crecimiento del PIB en el año 2000 se tradujo, según la Encuesta de Población Activa, en una significativa creación de empleo que, incluso con el aumento registrado en la población activa, permitió una nueva reducción de la tasa de desempleo. La reducción del déficit público, que apenas alcanzó unas décimas del PIB, como antesala quizás del pretendido equilibrio de las cuentas públicas en

2001, fue también un aspecto destacable del ejercicio. Por el lado negativo, los precios de consumo volvieron a ensombrecer los favorables resultados alcanzados en las magnitudes anteriormente mencionadas, pues el incremento del nivel de precios que se produjo a lo largo del año duplicó el objetivo oficial de inflación y amplió, además, el diferencial respecto a la zona euro, con el consiguiente deterioro de la competitividad-precio de la economía española.

A lo largo de las siguientes páginas de este capítulo se pretende ofrecer una panorámica de la realidad económica española y un apunte de la economía internacional, mediante un amplio desarrollo y en ocasiones una valoración de los hechos económicos más relevantes del año. Así, manteniendo la estructura habitual de anteriores Memorias, el presente capítulo analiza, en primer lugar, el ámbito mundial, cuyo estudio adquiere cada vez más importancia dado el creciente contexto de internacionalización económica para, seguidamente, ocuparse de los resultados de la economía española, tanto desde el punto de vista de la oferta —mediante el análisis de la evolución experimentada por los diferentes sectores productivos y prestando especial atención, como suele ser habitual, a los resultados de las distintas Comunidades Autónomas— como de la demanda, tanto interna como externa. Seguidamente, se aborda la descripción y análisis del comportamiento de los precios y de las principales variables monetarias, así como de los resultados y principales hechos acontecidos en el ámbito del sector público. Finalmente, se termina de conformar la panorámica de la economía española en 2000 con el relato de lo acontecido en la Unión Europea.

La evolución positiva del comercio y de la actividad económica mundial superó las expectativas iniciales. Un año más, la economía estadounidense fue la protagonista al crecer a una tasa media interanual del 5,0 por 100, con tasas superiores al 6,0 por 100 en los primeros compases del año. La Unión Europea creció a un ritmo algo inferior pero considerable si se compara con el año anterior. No obstante, desde la segunda mitad del año la coyuntura internacional se fue deteriorando, al hilo precisamente de la desaceleración experimentada por la economía estadounidense. Hasta entonces, las estimaciones sobre el crecimiento económico se revisaban al alza: la economía estadounidense parecía inmersa en un proceso de constantes aumentos de productividad generados por la llamada «nueva economía», la economía europea daba muestras de

sólida recuperación, los países del Sudeste asiático parecían haber superado definitivamente las consecuencias de las pasadas perturbaciones financieras, y Japón consolidaba su tímida recuperación. A partir del tercer trimestre, en cambio, se produjo una caída significativa de las expectativas de crecimiento del producto mundial. El encarecimiento de los precios del petróleo provocó repuntes inflacionistas y afectó directamente a las economías dependientes de las importaciones energéticas, a la vez que se ponían de manifiesto los desequilibrios fundamentales de la economía estadounidense, como la importante sobrevaloración de los activos financieros, en especial los relacionados con la «nueva economía», los elevados niveles de endeudamiento de las empresas y las familias, y su fuerte dependencia del ahorro exterior reflejado en el abultado déficit por cuenta corriente. Los interrogantes que se plantean al cierre de esta Memoria giran en torno al impacto que la deteriorada situación de la economía estadounidense tendrá sobre el resto de las áreas y en especial de la europea.

De hecho, tal y como se analiza en el apartado tercero de este capítulo, las previsiones de desaceleración de la economía estadounidense junto con las subidas de los precios del crudo comenzaron a hacer mella en las perspectivas económicas españolas desde el segundo trimestre del año. El principal motor de crecimiento siguió siendo la demanda interna, pero su aportación al mismo se suavizó de manera gradual durante el ejercicio. Las políticas económicas de demanda presentaron un carácter relativamente restrictivo, conjugando el tensionamiento de la política monetaria decidida por el Banco Central Europeo (BCE), con la consolidación fiscal fundamentada en el respeto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las autoridades económicas españolas sólo mostraron su beligerancia con la introducción, en el mes de junio, de un conjunto de medidas estructurales con el objetivo de estimular la actividad desde la perspectiva de la oferta, en el medio plazo.

Desde el punto de vista sectorial, el sector energético, líder en términos de crecimiento, al verse favorecido por los acontecimientos vividos en los mercados internacionales de crudo, restó protagonismo al sector de la construcción que, a pesar de haber registrado una elevada tasa de crecimiento para el conjunto del ejercicio, quedó muy por debajo de la lograda en 1999. Asimismo, tanto el sector industrial como las ramas agrarias experimentaron

avances en su producción, lo que resulta especialmente significativo en el último caso si tenemos en cuenta que en el ejercicio precedente se había producido un notable descenso de la actividad. Como viene siendo habitual en los últimos años, el sector industrial y el energético, fueron, además, los principales sectores afectados por la mayor parte de las novedades regulatorias.

Desde una perspectiva regional, la especialización productiva de algunas Comunidades Autónomas en la rama del subsector energético así como en determinadas producciones agrícolas fue determinante a la hora de alcanzar ritmos de crecimiento por encima de la media. Además, el ejercicio 2000 fue el primero del nuevo periodo de programación para las actuaciones a favor del desarrollo regional cofinanciadas por la Unión Europea. Durante el año, se aprobó el nuevo Marco Comunitario de Apoyo para las regiones objetivo n.º 1 de España y se presentó el Plan para las zonas en reconversión económica y social. Por otra parte, se iniciaron debates en múltiples foros, incluida en la propia Comisión Europea, sobre el futuro de la política regional comunitaria en el contexto de una Unión Europea ampliada, con la idea subyacente de que la necesaria concentración de los esfuerzos en los futuros nuevos territorios debería acompañarse de la continuidad de determinadas intervenciones comunitarias a favor de las regiones más atrasadas de los actuales Quince.

En lo que atañe a la demanda interna, aunque continuó siendo el principal motor de la actividad, su aportación a la misma fue suavizándose de manera gradual a lo largo del ejercicio, hecho que fue compensado por la evolución del sector exterior que resultó más expansiva de lo esperado en un principio.

El menor ritmo de crecimiento del consumo final de los hogares fue el determinante fundamental de la moderación en el crecimiento de la demanda interna. A su vez, la desaceleración del crecimiento de la renta disponible, como resultado del impacto inflacionista de la subida de los precios del crudo, del aumento de los tipos de interés, del efecto riqueza negativo derivado de los pobres resultados bursátiles y de la moderación del crecimiento del empleo a lo largo del año, fue la causa principal de la moderación del consumo de las familias. Sólo el consumo público cobró un considerable dinamismo a partir del segundo trimestre, invirtiendo la tendencia seguida en los últimos ejercicios.

El conjunto de componentes de la demanda de inversión compartió la tendencia a la desaceleración registrada por el consumo; aun así, la formación bruta de capital continuó siendo la variable más dinámica de la demanda interna. La mayor amortiguación se registró en el crecimiento de la inversión en bienes de equipo, haciéndose eco del menor empuje del consumo privado, mientras que la inversión en construcción mantuvo un ritmo significativo de crecimiento.

La moderación de la demanda interna se tradujo, asimismo, en un menor crecimiento de las importaciones que, unido al dinamismo mostrado por las exportaciones como resultado del auge del comercio mundial, propició que el saldo exterior en términos reales fuera más favorable del esperado. En términos monetarios, sin embargo, el balance es diferente. La apreciación del dólar respecto al euro y el encarecimiento del crudo, materia prima cuyo valor viene, además, expresado en la divisa norteamericana, fueron los principales factores explicativos del deterioro del saldo comercial. Esta circunstancia provocó que la mejoría en términos reales del sector exterior no tuviera un impacto positivo en términos nominales sobre la balanza de pagos.

El fuerte crecimiento de la economía española durante el ejercicio estuvo acompañado de un crecimiento medio anual del Índice de Precios de Consumo del 3,4 por 100; el nivel más elevado de los últimos cinco años. Los principales factores que explicaron este repunte inflacionista fueron fundamentalmente las subidas en los precios del crudo, la depreciación del euro frente al dólar y, desde mediados de año, la crisis provocada por la Encefalopatía Espongiforme Bovina. De este modo, las rúbricas más inflacionistas fueron las de Transporte y Turismo y, a partir del segundo semestre también la de los Alimentos no elaborados debido a la crisis del vacuno. A pesar del carácter volátil o errático de dichos factores inflacionistas, a lo largo del ejercicio se observó una mayor filtración de esta influencia exógena hacia la parte más estructural de los niveles de precios, medida por la tasa de inflación subyacente.

En consecuencia, la aplicación por parte del Banco Central Europeo de una política monetaria restrictiva resultó bastante apropiada para la economía española. Guiada por la evolución de las variables agregadas para el conjunto de la Eurozona, la autoridad monetaria comunitaria elevó los tipos de intervención en 2,25 pun-

tos desde noviembre de 1999 hasta finales de 2000, momento en el que el tipo de interés de las operaciones de financiación del BCE llegó a 4,75 por 100, su nivel más alto desde el inicio de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.

A pesar de esta restricción monetaria, se amplió el diferencial de inflación de España respecto a la zona euro. De hecho, el *shock* petrolero afectó más al nivel de precios en España que en otros Estados miembros, lo que muestra la elevada dependencia del petróleo de la economía española. Además, la deflación atribuida a la liberalización de las telecomunicaciones, otra de las tendencias compartidas con el resto de los países de la Eurozona, fue inferior en España que en el resto de sus socios.

Este entorno de mayor inflación y restricción monetaria agravó el impacto que la caída de las principales bolsas estadounidenses tuvo sobre las europeas. La Bolsa de Madrid cerró el año con un retroceso de su índice general y los fondos de inversión sufrieron a lo largo del año importantes pérdidas patrimoniales.

Por su parte, las cuentas de las Administraciones Públicas se saldaron en el año 2000 con un déficit del 0,3 por 100 del PIB, menor del previsto inicialmente por el Gobierno, y ocho décimas inferior al del ejercicio 1999; una reducción derivada tanto del aumento de los ingresos fiscales, como de la contención de los gastos corrientes. Este resultado estuvo apoyado por una coyuntura favorable de la actividad económica y el empleo, que propició un importante aumento de los ingresos públicos, en particular, y a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, de los procedentes de la imposición directa, y por la ventajosa evolución de las condiciones de financiación de la deuda que permitió una importante reducción de los pagos por intereses.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2001, por primera vez desde hace casi tres décadas, prevén la consecución del equilibrio presupuestario. Así, se estima que el Estado presentará un déficit del 0,3 por 100 que será compensado por un superávit de la Seguridad Social de la misma magnitud. La consolidación presupuestaria podrá lograrse gracias, por un lado, a un importante incremento de la recaudación por impuestos directos y cotizaciones sociales, impulsado por un contexto favorable de creación de empleo, y por otro, a la moderación del aumento de las transferencias

corrientes, una partida que representa casi el 70 por 100 de las operaciones no financieras de las Administraciones Públicas, así como a la reducción de los gastos de personal.

El cumplimiento de estas previsiones, que responden a los objetivos fijados en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2000-2004, dependerá, en última instancia, del comportamiento de los principales parámetros macroeconómicos sobre los que se sustentan, en particular, de la intensidad del crecimiento económico y de la evolución de los tipos de interés y el nivel de precios. Las proyecciones presupuestarias incluidas en el Plan de Estabilidad contemplan la obtención de superávit presupuestarios a partir de 2002 y la reducción paulatina del peso del sector público en la economía medido tanto en términos de volumen deuda, como de ingresos y gastos públicos sobre el Producto Interior Bruto. Para asegurar en el futuro la disciplina presupuestaria, el Gobierno impulsó en 2000 un Proyecto de Ley General de Estabilidad presupuestaria que afectará a todas las Administraciones Públicas y a las empresas dependientes de las mismas, y cuyo principal objetivo es garantizar el equilibrio presupuestario a través del establecimiento de un mecanismo de limitación del gasto público en función de los ingresos previstos. El Gobierno pretende que la Ley entre en vigor en 2002 tras ser consensuada con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un proceso que está resultando bastante complejo debido al rechazo que ha suscitado la propuesta en bastantes Comunidades.

Entre las novedades tributarias de 2000 destacan las reformas fiscales de estímulo a la inversión y el ahorro introducidas por Real Decreto-Ley 3/2000 de Medidas fiscales urgentes. En esta norma se establece un conjunto de incentivos fiscales para favorecer la internacionalización de las Pymes, así como la inversión y la formación en el campo de las nuevas tecnologías por parte de estas empresas. Asimismo, se suaviza la fiscalidad tanto del ahorro colocado en Planes de Pensiones, Mutualidades de Previsión Social y seguros de vida, como de las ganancias patrimoniales y de las rentas procedentes de fondos de inversión.

En el ámbito de la Unión Europea (UE), la primera referencia obligada es la Cumbre de Lisboa, celebrada en marzo de 2000, que convirtió el objetivo de pleno empleo en el eje del conjunto de las políticas comunitarias.

En esta cumbre se puso de manifiesto la necesidad de que Europa, para hacer frente con éxito a la globalización, se constituya en un espacio más competitivo que al mismo tiempo contribuya a fomentar la cohesión social. Este planteamiento exige, en concreto, el desarrollo de la sociedad del conocimiento, la modernización de los sistemas de protección social y el impulso de medidas de creación de empleo. Además, en Lisboa los Quince se plantearon el objetivo estratégico de adecuar las políticas macroeconómicas para lograr en el ejercicio 2010 el pleno empleo, admitiendo una tasa de desempleo exclusivamente friccional del 3 o el 4 por 100, y el aumento de la tasa de actividad hasta el 70 por 100. Para ello se fijaron como objetivos intermedios para el año 2006 el aumento de la tasa de actividad hasta el 65 por 100 y la reducción de la tasa de desempleo hasta el 6 por 100.

La principal referencia en el ámbito institucional es el Tratado de Niza, que debe servir para definir el marco en el que se producirá la ampliación de la Unión Europea hacia la Europa del Este.

Paralelamente, se analiza con detalle la evolución de las principales variables macroeconómicas de la Unión Europea y las distintas previsiones llevadas a cabo, así como la política monetaria restrictiva decidida por el BCE y la depreciación del euro frente las principales divisas. Otras cuestiones estudiadas en este apartado son el acuerdo alcanzado en materia fiscal en relación al ahorro y el avance en la adopción de medidas destinadas a facilitar a la entrada en vigor del euro, cada vez más próxima.

En cuanto a las políticas sociales y de empleo europeas, se presta especial atención a la aprobación de las cuartas líneas directrices para las políticas de empleo de los diferentes Estados miembros decididas en el Consejo Europeo de Niza. Asimismo, se destaca la aprobación de la Agenda Social Europea, que sustituirá al programa de Acción Social 1998-2000, que trata de fomentar el pleno empleo y la calidad de las relaciones laborales y de la política social a través de la participación de todos los actores implicados y del diálogo social. Igualmente, se comenta el debate que a lo largo del ejercicio se produjo respecto a la propuesta de Directiva sobre información y consulta de trabajadores y la proclamación de Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2. UN CONTEXTO INTERNACIONAL FAVORABLE

El panorama económico internacional en 2000 experimentó el mayor aumento del producto y del comercio mundial en muchos años. El crecimiento de la economía mundial del 4,8 por 100 y de las transacciones comerciales internacionales del 12,4 por 100 ofrecen un balance global muy positivo de un año que vino, no obstante, marcado por un fuerte aumento de los precios del petróleo, que impidió unos resultados aún más favorables. La brusca desaceleración de la economía estadounidense a finales de año, la persistente fragilidad de la japonesa y los problemas surgidos en determinados países emergentes redujeron las expectativas de crecimiento para 2001.

2.1. Comercio mundial: mejor de lo esperado

El comercio mundial en volumen creció mucho más de lo esperado, el mencionado 12,4 por 100, la tasa más alta registrada en los últimos diez años y muy por encima también de la de 1999, que alcanzó el 5,3 por 100 (cuadro I-1). Este fuerte crecimiento de las transacciones comerciales en el mundo en 2000 vino apoyado por la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB mundial, que alcanzó casi el 5,0 por 100, y en especial, como se desarrolla en el apartado

Cuadro I-1
COMERCIO Y PRODUCCIÓN MUNDIAL, 1992-2001
(Tasas reales de variación interanual)

Conceptos	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001 (p)
Producción mundial	2,7	2,3	3,7	3,6	4,0	4,2	2,8	3,5	4,8	3,2
Países avanzados*	1,9	1,4	3,4	2,7	2,9	3,5	2,7	3,4	4,1	1,9
Países en desarrollo	6,7	6,3	6,7	6,1	6,5	5,8	3,5	3,8	5,8	5,0
Comercio mundial	4,7	3,7	9,0	9,1	6,5	10,1	4,2	5,3	12,4	6,7
Importación										
Países avanzados	4,8	1,4	9,6	9,2	6,2	9,3	5,7	7,9	11,4	6,7
Países en desarrollo	11,1	11,2	7,4	10,2	8,1	10,6	-0,6	1,6	16,9	8,8
Exportación										
Países avanzados	5,2	3,1	8,8	8,9	6,0	10,6	3,8	5,0	11,4	6,2
Países en desarrollo	10,7	9,4	11,8	7,4	9,2	12,0	5,3	4,1	15,7	7,1

(p) Previsión.

***** Desde abril de 1997, el FMI incorporó también dentro de los países avanzados a Corea del Sur, Hong Kong, Israel, Singapur y Taiwán, que previamente se clasificaban entre los países en desarrollo.

Fuente: FMI, *Perspectivas de la Economía Mundial,* mayo de 2001.

correspondiente a la economía internacional, por el dinamismo que mostró todavía en el año 2000 la economía estadounidense, por los buenos resultados en términos de crecimiento de la Unión Europea y por la recuperación de los países del Sudeste asiático.

Reducción del superávit de la zona euro

El crecimiento del comercio exterior de Estados Unidos, que representa el 15,0 por 100 del total mundial, sólo superado por la Unión Europea en conjunto que ronda el 21,0 por 100, propició el mencionado dinamismo del comercio mundial, al crecer sus exportaciones un 9,2 por 100, frente al 2,9 por 100 del año anterior, y sus importaciones —que partían ya de un nivel muy elevado— un 13,7 por 100, tres puntos más que en 1999. La Unión Europea, por su parte, registró crecimientos también elevados, aunque algo más moderados, del 11,3 por 100 en las exportaciones y del 10,5 por 100 en las importaciones. Esta favorable evolución de la balanza comercial de la Unión Europea en términos reales se convierte en negativa en términos de valor, como consecuencia del impacto del encarecimiento de la factura energética en sus intercambios comerciales con el resto del mundo. Así, en 2000, se produjo un aumento del reducido déficit comercial de la Unión Europea, atribuible en su mayoría al incremento en valor de la importación energética, y un sustancial deterioro del superávit de la zona euro.

En el ámbito del sistema multilateral de comercio, tras el fracaso de la tercera cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), celebrada en Seattle a finales de 1999, en su intento de poner en marcha una nueva ronda de negociaciones[1], en el año 2000 las distintas posturas de los 140 países miembros de la OMC no permitieron llegar a un acuerdo sobre el inicio de una nueva ronda de negociaciones de carácter multilateral.

Disputas comerciales Unión Europea-Estados Unidos

A ello no fueron ajenos los conflictos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, que siguieron en primer plano un año más. En esta ocasión, cabe destacar entre dichas disputas comerciales bilaterales las referentes al régimen de importación de plátanos de la Unión Europea, a las restricciones de la Unión Europea a la importación de carne tratada con hormonas de crecimiento no autorizadas por sus posibles efectos sobre la salud humana, a la preten-

[1] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999,* págs. 14 y 15.

sión de Estados Unidos de establecer sanciones rotatorias a productos europeos —en el sentido de que, una vez aplicadas las sanciones a una serie de productos, la lista de productos sancionados cambie de forma periódica— y al tratamiento fiscal a empresas filiales estadounidenses creadas en paraísos fiscales de soberanía americana y que constituye, en opinión de la Unión Europea, una subvención prohibida a la exportación. Estas disputas comerciales, que adquirieron especial protagonismo en 2000, no agotan todas las diferencias pendientes de solución entre la Unión Europea y Estados Unidos. Así, puede volver a plantearse en cualquier momento el litigio relacionado con la aplicación extraterritorial de la Ley estadounidense conocida como Helms-Burton a las empresas extranjeras que comercian o invierten en Cuba con activos expropiados.

Otros conflictos euroestadounidenses que permanecen abiertos son la demanda interpuesta por la Unión Europea ante la OMC para que se constituya un panel de arbitraje en relación a las obligaciones discriminatorias y contrarias a las reglas internacionales de propiedad intelectual, que establece la sección 211 de la Ley financiera estadounidense en el caso concreto del litigio sobre una marca de ron cubano de propiedad francesa; el enfrentamiento por las subvenciones concedidas a las dos mayores compañías aeronáuticas del mundo, una europea y otra estadounidense; las reclamaciones de Estados Unidos ante la normativa europea sobre limitación de la emisión de ruido de los aviones; y el contencioso por los requisitos de la Unión Europea para autorizar la comercialización de productos que contengan organismos modificados genéticamente (transgénicos), por su posible repercusión negativa en la salud humana y en el medio ambiente.

Las dificultades de solución de estas diferencias comerciales, que no impiden que el volumen de intercambios comerciales entre ambas regiones sea extraordinariamente elevado, han llevado en el seno de la Unión Europea a que se replantee la legitimidad de la OMC ante los Estados concernidos, en los ámbitos de medio ambiente, seguridad alimentaria y libre competencia. Ello no es óbice para que se considere, a pesar de las críticas que en los últimos tiempos recibe la OMC[2], que este organismo facilita el buen funcionamiento del comercio internacional y que sus normas son in-

[2] Veáse CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999,* pág. 16.

dispensables y favorables tanto para los países desarrollados como en desarrollo.

En el año 2000 se planteó, y se solucionó en 2001 atendiendo a los acuerdos de la OMC, el conflicto suscitado por los países más pobres para poder tener acceso a las medicinas a precios razonables y, en concreto, el pleito relativo a los precios de los medicamentos para el tratamiento del sida entre el Gobierno de Sudáfrica y las empresas farmacéuticas. También a comienzos de 2001, la Unión Europea acordó la eliminación de los aranceles sobre las exportaciones de todos los productos, con excepción de las armas, procedentes de los 48 países más pobres del mundo, aunque el acuerdo no entrará plenamente en vigor hasta el año 2009.

¿Nueva ronda en el año 2001?

Precisamente, se considera que entre los temas principales que deberían ser objeto de tratamiento en una futura ronda de negociaciones destacaría el relativo a las cuestiones de desarrollo. Los esfuerzos realizados durante 2000 para intentar celebrar una nueva ronda de negociaciones de carácter multilateral en 2001 no se han concretado por ahora, aunque a comienzos de 2001 el Consejo General de la OMC acordó celebrar la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC en Doha, Qatar, del 9 al 13 de noviembre de 2001.

2.2. Buenos resultados de la economía internacional, aunque con signos de debilitamiento

Los resultados de la economía mundial en el año 2000 fueron los mejores en más de una década. En prácticamente todas las regiones las cifras de crecimiento fueron más altas de lo previsto, a pesar del contexto de fuertes subidas de los precios del petróleo, lo que, como ya se ha adelantado, permitió alcanzar un crecimiento del 4,8 por 100 en el producto mundial (cuadro I-2). No obstante, el optimismo imperante hasta bien avanzado el año respecto a la superación definitiva de las perturbaciones financieras en los mercados emergentes, al impulso estructural de la economía estadounidense basado en la «nueva economía», a las señales de sólida recuperación de Europa y a la aparente, aunque débil, recuperación de Japón, dio paso a un clima de incertidumbre, cuando no de pesimismo, sobre la evolución futura de la economía mundial, tras co-

CUADRO I-2

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS INTERNACIONALES, 1992-2001

(Tasas de variación interanual)

Indicadores	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001 (p)
Crecimiento PIB										
Mundo	2,7	2,3	3,7	3,6	4,0	4,2	2,8	3,5	4,8	3,2
Países avanzados*	1,9	1,4	3,4	2,7	2,9	3,5	2,7	3,4	4,1	1,9
Estados Unidos	2,7	2,7	4,0	2,7	3,6	4,4	4,4	4,2	5,0	1,5
Japón	1,0	0,5	1,0	1,6	3,3	1,9	–1,1	0,8	1,7	0,6
Canadá	0,9	2,3	4,7	2,8	1,5	4,4	3,3	4,5	4,7	2,3
Unión Europea	1,1	–0,4	2,8	2,4	1,6	2,6	2,9	2,6	3,4	2,4
Alemania	2,2	–1,1	2,3	1,7	0,8	1,4	2,1	1,6	3,0	1,9
Francia	1,2	–0,9	1,8	1,9	1,0	1,9	3,3	3,2	3,2	2,6
Italia	0,6	–0,9	2,2	2,9	1,1	2,0	1,8	1,6	2,9	2,0
Reino Unido	0,1	2,3	4,4	2,8	2,6	3,5	2,6	2,3	3,0	2,6
España	0,7	–0,1	2,4	2,8	2,4	3,9	4,3	4,0	4,1	2,9
Zona Euro	1,3	–0,8	2,3	2,3	1,5	2,4	2,9	2,6	3,4	2,4
Países en desarrollo	6,7	6,3	6,7	6,1	6,5	5,8	3,5	3,8	5,8	5,0
África	0,2	0,2	2,4	2,9	5,7	2,9	3,3	2,3	3,0	4,2
Asia	9,5	9,4	9,6	9,0	8,2	6,6	4,0	6,1	6,9	5,9
Iberoamérica	3,3	4,1	5,0	1,7	3,6	5,3	2,3	0,2	4,1	3,7
Europa del Este sin Rusia	n.d.	0,3	3,5	5,5	4,0	2,5	2,1	1,8	3,8	n.d.
Rusia	–14,5	–10,4	–11,6	–4,2	–3,4	0,9	–4,9	3,2	7,5	n.d.
Inflación (IPC)										
Países avanzados*	3,5	3,1	2,6	2,6	2,4	2,1	1,5	1,4	2,3	2,1
Estados Unidos	3,0	3,0	2,6	2,8	2,9	2,3	1,5	2,2	3,4	2,6
Japón	1,7	1,2	0,7	–0,1	0,1	1,7	0,6	–0,3	–0,6	–0,7
Canadá	1,5	1,8	0,2	1,9	1,6	1,6	1,0	1,7	2,7	3,0
Unión Europea	4,5	3,8	3,0	2,9	2,5	1,8	1,5	1,4	2,3	2,3
Alemania	5,1	4,5	2,7	1,7	1,2	1,5	0,6	0,7	2,1	2,0
Francia	2,4	2,1	1,7	1,8	2,1	1,3	0,7	0,6	1,8	1,5
Italia	5,3	4,6	4,1	5,2	4,0	1,9	2,0	1,7	2,6	2,2
Reino Unido	4,7	3,0	2,4	2,8	3,0	2,8	2,7	2,3	2,1	2,2
España	5,9	4,6	4,7	4,7	3,5	2,0	1,8	2,2	3,4	2,9
Zona Euro	4,4	4,0	3,2	3,0	2,5	1,7	1,3	1,2	2,4	2,3
Países en desarrollo	38,5	43,2	55,3	23,2	15,4	9,9	10,4	6,7	6,1	5,7
África	32,5	39,0	54,8	35,1	30,1	14,4	9,1	11,5	13,5	9,6
Asia	7,6	14,7	24,1	17,1	8,3	2,8	–0,8	–1,4	0,4	1,0
Iberoamérica	151,0	152,1	200,3	36,0	21,2	12,9	9,8	8,8	8,1	6,3
Europa del Este sin Rusia	277,0	79,9	45,6	24,7	23,3	41,8	17,1	10,9	12,8	n.d.
Rusia	1.353,0	874,7	307,4	197,4	47,6	14,7	27,7	85,7	20,8	n.d.
Paro (tasa)										
Países avanzados*	7,3	7,5	7,4	7,1	7,1	6,9	6,8	6,4	5,9	5,9
Estados Unidos	7,5	7,2	7,0	6,7	6,8	6,6	6,3	6,1	5,7	5,9
Japón	2,2	6,9	6,1	5,6	5,4	5,0	4,5	4,2	4,0	4,4
Canadá	11,3	11,3	10,4	9,4	9,6	9,1	8,3	7,6	6,8	7,2
Unión Europea	9,8	10,6	11,1	10,7	10,8	10,6	9,8	9,1	8,2	7,8
Alemania	7,7	7,6	8,2	7,9	8,6	9,5	9,0	8,3	7,8	7,6
Francia	10,3	11,6	12,3	11,7	12,4	12,5	11,6	11,3	9,7	8,8
Italia	10,7	10,1	11,1	11,6	11,6	11,7	11,8	11,4	10,6	9,9
Reino Unido	9,7	10,4	9,7	8,7	8,2	7,1	6,3	6,0	5,6	5,3
España	18,4	22,7	24,2	22,9	22,2	20,8	18,8	15,9	14,1	12,7
Zona Euro	10,0	10,7	11,5	11,2	11,5	11,4	10,7	9,9	9,0	8,4

(p) Previsión.

Nota: Las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) no siempre coinciden con las oficiales de cada país.

* Desde abril de 1997, el FMI incorporó también dentro de los países avanzados a Corea del Sur, Hong Kong, Israel, Singapur y Taiwán, que previamente se clasificaban entre los países en desarrollo.

Fuente: FMI, *Perspectivas de la Economía Mundial,* mayo de 2001.

nocerse el deterioro de los indicadores de la economía estadounidense en la segunda mitad del año. Dada la importancia de la economía de Estados Unidos en el conjunto de la demanda global en los últimos años y la creciente integración de la economía mundial, existen serios riesgos de que los desequilibrios, tanto reales como financieros, y especialmente el elevado déficit comercial, que se produzcan en aquélla, se transmitan con mucha mayor rapidez de una a otra región.

Al final, fuerte desaceleración en Estados Unidos

La economía de Estados Unidos creció un 5,0 por 100 en 2000, pero su evolución fue desigual a lo largo del año. Durante la primera mitad del año el crecimiento de la actividad económica se aceleró, llegando a alcanzar tasas superiores al 6,0 por 100 debido al importante aumento de la demanda interna, lo que propició, junto con la subida de los precios del petróleo, que la Reserva Federal articulara una política de subida de tipos de interés para amortiguar las tensiones inflacionistas que comenzaban a aparecer, y que se endureció en la segunda mitad del año, alimentando el temor a un menor crecimiento de las ventas y de los beneficios empresariales, lo que se tradujo en una caída de las cotizaciones bursátiles, especialmente de las empresas de alta tecnología. El deterioro consiguiente de la riqueza financiera de los consumidores se trasladó rápidamente al consumo, que dio muestras de un claro debilitamiento. La reducción de la inversión en equipo y *software* muestra también la crisis de confianza que se produjo en las empresas. Al finalizar el año, la amenaza de recesión y de cuantiosas pérdidas de puestos de trabajo, tanto en la nueva como en la vieja economía, situó la confianza de los consumidores en el nivel más bajo de los últimos cuatro años. Lo que pretendía ser un *aterrizaje suave* de la economía estadounidense, tras diez años de expansión continuada, se convirtió en una brusca desaceleración de la actividad en la segunda mitad del año, que terminó en el cuarto trimestre con una tasa de crecimiento interanual de tan sólo el 1,0 por 100.

Este enfriamiento pronunciado de la economía estadounidense genera bastante incertidumbre respecto al futuro, porque parece avalar la tesis de que la fase de expansión económica de los últimos años no estaba sólo fundamentada en elementos estructurales, como el aumento de la productividad resultante de la inversión en nuevas tecnologías, sino que también se sustentaba en elementos coyunturales que han ido generando importantes desequilibrios en

la economía norteamericana. De este modo, la importante sobrevaloración de los activos, sobre todo los conectados a la nueva economía, el exceso de inversión en sectores de nuevas tecnologías, los elevados niveles de endeudamiento de las empresas y de los hogares, y la fuerte dependencia del ahorro exterior que se refleja en el abultado déficit por cuenta corriente, son factores que elevan el riesgo de que se produzca una desaceleración más larga y pronunciada, que puede agravarse si se agudiza la pérdida de confianza y la aversión al riesgo de los estadounidenses. Ante este panorama, los principales organismos económicos internacionales confían en que la articulación de una decidida política expansiva basada en los instrumentos macroeconómicos tradicionales (reducción de los tipos de interés y de los tipos impositivos) estimule el consumo y propicie una rápida recuperación económica. Así, la estimación de un crecimiento interanual del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre de 2001 mayor de lo esperado, del 2,0 por 100, apunta a una recuperación de la economía, aunque no elimina las numerosas incertidumbres que pesan sobre su evolución a lo largo de 2001.

Tanto en la Unión Europea como en la zona euro el crecimiento de 2000 alcanzó el 3,4 por 100, la cifra más elevada de los últimos diez años. La evolución a lo largo del ejercicio muestra un máximo en el segundo trimestre, cuando ambas zonas crecieron a una tasa interanual del 3,7 por 100, y una desaceleración desde entonces. En el tercer trimestre, el crecimiento del PIB se moderó hasta el 3,2 por 100, al combinarse una escasa aportación positiva de la demanda externa con una desaceleración del consumo privado como consecuencia del alza de los tipos de interés y de los precios del petróleo. En el último tramo del año, el crecimiento interanual se redujo hasta el 2,9 por 100 en la Unión Europea y el 3,0 en la zona euro, previéndose para 2001 cifras similares de crecimiento, dada la recuperación de la confianza de los consumidores que se produjo ante la subida del euro y la estabilización de los precios energéticos, así como ante el fuerte crecimiento de la creación de empleo y la reducción de la tasa de paro, que apenas superó el 8,0 por 100 en el año 2000. Por lo que respecta a la inflación, la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se aceleró considerablemente a lo largo del año, hasta alcanzar un máximo en la zona euro en noviembre del 2,9 por 100, como consecuencia fundamentalmente del encarecimiento del petróleo y de la depreciación del euro, lo que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a

practicar subidas en el tipo de interés de intervención hasta situarlo en el 4,75 por 100, posteriormente rebajado al 4,50 por 100 en mayo de 2001. Las grandes economías de la zona euro siguieron, en general, una evolución similar a la descrita para el área en su conjunto, aunque los factores de crecimiento no siempre fueron los mismos. Así, mientras que en Alemania el crecimiento del 3,0 por 100 estuvo impulsado por el avance de las exportaciones y la inversión en equipo, en Francia, el crecimiento del 3,2 por 100 fue alentado por el mayor impulso del consumo privado, reflejo de la excelente evolución del empleo y el buen clima de confianza.

Interrogantes sobre el impacto en la Unión Europea

Uno de los interrogantes que plantea la deteriorada situación de la economía estadounidense es el impacto que ello pueda tener en la Unión Económica y Monetaria (UEM). Las vías de contagio posibles son de dos tipos: real y financiera. La dependencia de la UEM respecto a Estados Unidos por la vía comercial es limitada, ya que se trata de un área económica relativamente cerrada, donde el 50,0 por 100 de los intercambios comerciales tienen lugar en el interior de la misma, y las exportaciones a Estados Unidos apenas representan un 2,3 por 100 del PIB, por lo que es previsible que una caída de las mismas tenga una repercusión escasa en el PIB comunitario, aunque pueda tener un efecto indirecto a través de terceros países. Por el lado financiero, los dos canales de interconexión son los tipos de interés y los mercados de renta variable. Aunque la correlación entre los movimientos de los tipos de interés en Europa y Estados Unidos ha aumentado en los últimos años, las contundentes bajadas de tipos en Estados Unidos es posible que no conduzcan a reducciones paralelas en la UEM, ya que, por un lado, sus condiciones monetarias de partida son más relajadas, y por otro, su efectividad potencial es menor, porque Europa no se enfrenta, como ocurre en Estados Unidos, a una crisis de demanda, sino que tiene más bien problemas de oferta. En cuanto a las bolsas, a pesar de su vinculación, hay algunos indicadores que pueden limitar el contagio sobre la economía real: la influencia de la caída de las cotizaciones bursátiles sobre el consumo y la demanda es mucho menos acusada en Europa porque el nivel de capitalización bursátil sobre el PIB es inferior; las acciones no son un componente tan importante de los activos financieros de las familias, y en Europa está mucho menos extendida la compra de acciones a crédito. En todo caso, aunque se prevé que la economía europea crecerá más que la de Estados Unidos en 2001, es difícil que sus tasas de crecimiento aumenten tanto como

para compensar la desaceleración estadounidense y mantener el nivel de demanda mundial.

Continuó el estancamiento en Japón

La situación de la economía de Japón, por su parte, no resulta en absoluto alentadora, dada la persistente debilidad del consumo privado y los problemas del sector bancario por el descenso bursátil y el aumento de las quiebras empresariales. En la primera mitad de 2000 la economía cobró cierto vigor, apoyada en la aceleración de las exportaciones y en la recuperación de la inversión, estimulada a su vez por la mejora de los beneficios y por la mayor demanda del sector de nuevas tecnologías. Ambas variables impulsaron el crecimiento de la producción industrial hasta el 5,5 por 100 interanual en la primera mitad del año. No obstante, tal mejora no logró trasladarse al consumo privado, que se vio negativamente afectado por una tasa de paro del 4,7 por 100, cifra históricamente alta para la economía japonesa. En el transcurso de la segunda mitad de 2000 el panorama fue oscureciéndose. La desaceleración de la demanda mundial redujo las exportaciones y ralentizó el ritmo de crecimiento de la actividad industrial, que se centra fundamentalmente en el sector de tecnologías de la información. Por su parte, el declive de los precios de los activos inmobiliarios y bursátiles afectó a las decisiones de gasto de los agentes económicos. A pesar del programa de estímulo fiscal que se puso en marcha en la segunda mitad de 2000 y de la depreciación del yen, la incertidumbre que pesa sobre la recuperación de la economía japonesa es elevada, habida cuenta del escaso margen de maniobra con que cuentan las políticas de demanda: en el ámbito monetario el tipo de interés de referencia es tan sólo del 0,25 por 100, y en el fiscal, el déficit y la deuda pública representan el 6,0 y el 112,3 por 100, respectivamente.

Los países de la zona asiática más afectados por la crisis monetaria y financiera de 1997 (Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Malaisia y Tailandia) consolidaron a lo largo de 2000 la recuperación económica iniciada a finales de 1998. Las elevadas tasas de crecimiento han ido acompañadas de un importante proceso de reestructuración bancaria y empresarial y de una reducción de las tasas de desempleo. Este buen comportamiento se explica en parte por la favorable coyuntura económica internacional, que provocó un aumento de las exportaciones. Sin embargo, el crecimiento de estas economías emergentes corre el riesgo de ralentizarse, debido

tanto a la incertidumbre política de algunos países como a la desaceleración de las economías de Estados Unidos y Japón, lo que previsiblemente conducirá a una reducción de la demanda de sus productos de alta tecnología, en los que se basa gran parte de la actividad comercial de la zona. Estos efectos podrían contrarrestarse en parte por el recorte de tipos de interés aplicados por los bancos centrales, así como por el fortalecimiento de los vínculos comerciales con otros países asiáticos, como India y China, que están menos expuestos al contexto económico internacional y presentan un crecimiento de la actividad económica bastante fuerte.

Argentina, en recesión

Iberoamérica registró un crecimiento en 2000 del 4,1 por 100, apoyado en la fortaleza de la demanda estadounidense, la repercusión de la elevación de los precios del petróleo en los países productores y la recuperación de la demanda interna que se encontraba en niveles muy bajos en 1999. Este crecimiento, no obstante, sólo produjo una leve mejora del déficit por cuenta corriente de la zona, cuyo nivel de endeudamiento externo sigue siendo el más elevado de todos los grupos de países en vías de desarrollo. Los resultados económicos fueron desiguales dentro del área. Así, destacan por su mayor crecimiento México y Chile, y en menor medida Brasil, tras su estancamiento de los dos años anteriores, mientras que la expansión fue bastante modesta en la región andina, que estuvo condicionada por la incertidumbre política. La economía argentina, por su parte, se contrajo por segundo año consecutivo, reflejando la atonía de la demanda doméstica, la debilidad de la producción industrial, los efectos negativos sobre las exportaciones de la fortaleza del dólar y, en general, la escasa confianza de empresas, consumidores e inversores en su recuperación. Un panorama que tratará de superarse a través de medidas de estímulo fiscal a la inversión y de contracción presupuestaria.

Es previsible que en 2001 se produzca una ralentización del crecimiento en esta área como consecuencia de la desaceleración de la economía estadounidense, que tendrá mayor impacto en los países que mantienen importantes vínculos comerciales con Estados Unidos, como México, la región andina y América Central. Además, aunque en principio las reducciones de los tipos de interés en Estados Unidos supondrán una mejora de las condiciones de financiación externa de la zona, un debilitamiento prolongado de la economía estadounidense puede generar turbulencias financieras y

una mayor aversión al riesgo que frenen la inversión extranjera directa, principal fuente de financiación del déficit por cuenta corriente de estos países.

A la espera de entrar en la Unión Europea

Las economías de Europa Central y del Este experimentaron notables tasas de crecimiento en 2000, aunque en muchos países persisten altas tasas de inflación e importantes déficit externos por cuenta corriente, lo cual es reflejo de una gran fortaleza de la demanda interna y del encarecimiento del petróleo. Los déficit por cuenta corriente se financiaron en gran medida a través de inversión extranjera directa, animada, a su vez, por la perspectiva de incorporación a la Unión Europea de muchos de estos países.

Países olvidados

A pesar del fuerte incremento de la actividad económica mundial en 2000, la tasa de crecimiento en el continente africano fue sólo de un 3,0 por 100, muy por debajo de lo que necesita para hacer frente a los problemas de creciente pobreza en muchos de sus países. Los desalentadores resultados obtenidos en esta zona, particularmente en el África subsahariana, tienen que ver con la creciente inestabilidad política, el deterioro de la relación real de intercambio y el encarecimiento de los precios del petróleo. En estas condiciones de fragilidad cualquier crisis de alcance mundial tendría consecuencias especialmente nocivas para los países africanos, de ahí que los programas de ayuda al desarrollo, de condonación de la deuda externa o las recientes iniciativas europeas y estadounidenses de abrir sus mercados a las economías más pobres, cobren especial relevancia para evitar que las fuerzas de integración global amplíen aún más la brecha que separa los países ricos de los pobres.

3. ELEVADO CRECIMIENTO CON TENDENCIA A LA DESACELERACIÓN

El fuerte crecimiento de la economía española durante el ejercicio 2000, por encima del 4,0 por 100, favoreció tanto la creación de empleo, permitiendo disminuir la tasa de desempleo hasta el 14,1 por 100 de la población activa, como la reducción del déficit público, que cerró el ejercicio en 0,3 por 100 del PIB.

Por el lado de la demanda, este elevado crecimiento se alcanzó a pesar de la desaceleración de la demanda interna, ya que estuvo

compensada, en cierta medida, por la menor aportación negativa de la demanda externa al crecimiento. Por el lado de la oferta, la energía y la construcción fueron los sectores líderes en términos de crecimiento durante el año 2000. De hecho, la especialización productiva de algunas regiones en la rama del subsector energético fue determinante a la hora de alcanzar ritmos de crecimiento por encima de la media. Destacó, asimismo, la aportación positiva del sector primario al crecimiento del PIB.

Aparecieron, además, a lo largo del año ciertas tensiones inflacionistas y se deterioró notablemente el saldo de la balanza por cuenta corriente, fundamentalmente como resultado de las subidas del precio del crudo y de la debilidad del euro.

3.1. Se superaron las previsiones

La economía española manifestó durante 2000 un crecimiento intenso del Producto Interior Bruto con un ritmo medio de 4,1 por 100, una décima por encima del registrado en 1999, de modo que por cuarto año consecutivo se registró un crecimiento cercano al 4 por 100 (cuadro I-3).

El diferencial de crecimiento respecto a la Unión Europea resultó favorable para España por sexto año consecutivo (gráfico I-1). En esta ocasión, la economía española creció ocho décimas por encima del crecimiento anual medio comunitario. No obstante, este diferencial fue notablemente inferior al alcanzado en el ejercicio anterior (1,5 puntos porcentuales), y de consolidarse esta tendencia, podría ralentizar el proceso de convergencia real con la Unión Europea.

Desde una perspectiva trimestral, se observa una amortiguación en el ritmo de crecimiento desde el segundo trimestre de 2000, que se fue acentuando en los últimos meses del año, tanto para el conjunto de la Unión Europea como para España. En concreto, la economía española pasó de crecer a un ritmo de 4,4 por 100 en el primer trimestre a un 3,7 en el último.

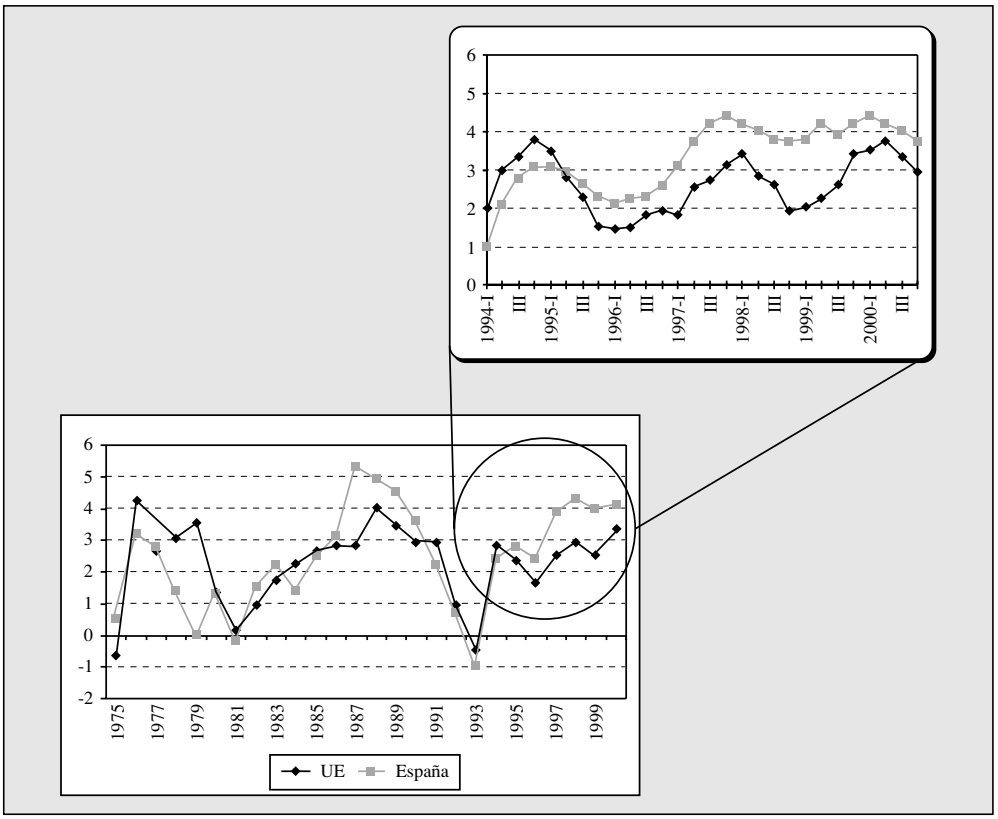
A pesar de la desaceleración de los últimos meses, las cifras registradas para el conjunto del ejercicio superaron las previsiones, que situaban el crecimiento de la producción española en 2000 alrededor

de 3,7 por 100. No obstante, el mayor avance de la actividad respecto a las previsiones podría considerarse ficticio en cierta medida, puesto que dichas previsiones, que estimaban[3] o bien el mantenimiento del ritmo de crecimiento o una ligera mejoría del mismo, fundamentaron sus cálculos en el dato ofrecido por la Contabilidad Nacional Trimestral en el cuarto trimestre de 1999 que situaba provisionalmente el crecimiento del PIB de 1999 en un 3,7 por 100. Por consiguiente, una vez revisado el crecimiento medio de 1999, que pasó de 3,7 a 4,0 por 100, se puede afirmar que las tendencias esperadas en las previsiones de los diferentes organismos no se equivocaron.

GRÁFICO I-1

CICLO ECONÓMICO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA, 1975-2000

(Tasas de variación interanual)



Fuentes: INE, *Contabilidad Nacional Trimestral de España* y Eurostat.

[3] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999,* pág. 34

Desaceleración de la demanda interna

Aunque la demanda interna siguió siendo el principal motor de crecimiento, su aportación al mismo se suavizó gradualmente a lo largo del año, hecho que fue compensado por una moderación en la detracción de la demanda externa, por lo que, en cierto modo, se podría afirmar que el crecimiento del PIB habría sido más equilibrado que en 1999. El menor crecimiento de la demanda de consumo final de los hogares, que aumentó a un ritmo medio anual de 4,0 por 100, siete décimas por debajo del avance mostrado en 1999 (cuadros I-3, I-4), determinó la amortiguación en el crecimiento de la demanda interna. El perfil trimestral de crecimiento

CUADRO I-3
CUADRO MACROECONÓMICO, 1997-2000
(Tasas de variación interanual)

Conceptos	1997	1998	1999	2000(e)
PIB y agregados				
Producto interior bruto	3,9	4,3	4,0	4,1
Consumo privado nacional	3,1	4,5	4,7	4,0
Consumo público	2,9	3,7	2,9	2,6
Formación bruta de capital fijo	5,0	9,7	8,9	5,9
— Bienes de equipo	10,3	13,4	8,1	5,0
— Construcción	2,7	8,1	9,0	6,4
Demanda interna	3,4	5,6	5,5	4,1
Exportación de bienes y servicios	15,3	8,3	6,6	10,8
Importación de bienes y servicios	13,3	13,4	11,9	10,4
Pro memoria				
PIB a p. constantes (1) (miles de millones de ptas.)	77.556,4	80.904,8	84.158,4	87.580,8
PIB a p. corrientes (miles de millones de ptas.)	82.059,6	87.545,6	93.693,2	100.872,8
Precios y costes				
Deflactor del PIB	2,2	2,3	2,9	3,5
Precios de consumo (diciembre)	2,0	1,4	2,9	4,0
Costes laborales unitarios nominales totales	1,4	2,2	2,3	3,2
Mercado de trabajo (2)				
Variación del empleo	3,0	3,4	4,6	4,7
Tasa de desempleo	20,8	18,8	15,9	14,1
Sector exterior				
Saldo comercial en % del PIB	–2,5	–3,4	–4,8	–5,9
Saldo por cuenta corriente en % del PIB	0,5	–0,2	–2,1	–3,2
Necesidad de financiación AAPP, % PIB				
Administraciones públicas totales	–3,2	–2,6	–1,2	–0,3
Administraciones públicas centrales	–2,7	–2,1	–1,1	–0,6

(e) Estimaciones.
(1) Año base 1995.
(2) Datos de la *Encuesta de Población Activa.*
Fuentes: INE y Ministerio de Economía y Hacienda.

CUADRO I-4
AGREGADOS MACROECONÓMICOS, 2000
(Tasas de variación interanual)

Consumo privado nacional	–	⇧ ⇧	4,0%	
Consumo público	–	⇧	2,6%	
Formación bruta de capital fijo	–	⇧ ⇧	5,9%	PIB 4,1%
Exportaciones de bienes y servicios	+	⇧ ⇧	10,8%	
Importaciones de bienes y servicios	–	⇧ ⇧	10,4%	

Notas: Con (⇧ ⇩) se indica crecimiento o decrecimiento.
Con (+ –) se indica incremento o disminución de la tasa de variación respecto a la del año anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, *Contabilidad Nacional Trimestral de España*.

del consumo de los hogares fue un fiel reflejo de la moderación en el crecimiento de la renta disponible, explicada por la conjunción de circunstancias como la subida de los precios de los carburantes, el encarecimiento del endeudamiento por la elevación de los tipos de interés, el efecto riqueza negativo provocado por los descensos en las cotizaciones bursátiles o la moderación del crecimiento del empleo a lo largo del año; incluso la propia duración de la fase de expansión podría explicar el menor ritmo consumidor de bienes duraderos puesto que ya podría haber sido lo suficientemente larga como para haber mejorado el equipamiento de los hogares.

La formación bruta de capital fijo, que alcanzó una tasa de crecimiento de 5,9 por 100 para el conjunto del ejercicio (cuadro I-3; cuadro I-4), tres puntos porcentuales por debajo del ritmo de avance de 1999, no compensó la ralentización del resto de los agregados de la demanda interna. El determinante principal de esta desaceleración fue el menor ritmo inversor registrado en los bienes de equipo, que se vio más afectado por la debilidad del consumo, el encarecimiento de la financiación ajena y los mayores costes de los carburantes que la inversión en construcción o en el resto de bienes. Respecto a la inversión en construcción, la inversión en infraestructuras pasó a ser el motor de su crecimiento, tomando el relevo a la construcción en edificación residencial, que comenzó a mostrar su agotamiento ante la desaceleración de la renta disponible de las familias.

El sector exterior restó menos

La aportación negativa del sector exterior al crecimiento, durante el ejercicio 2000, fue de una décima, registrando una recuperación de 1,4 puntos respecto a 1999. Esta aportación anual menos negativa, que llegó a ser positiva en el segundo semestre del año, se debió a la combinación del fuerte crecimiento de las exportaciones, favorecido por el dinamismo del comercio mundial, y de la ralentización de las importaciones, en sintonía con el comportamiento ya descrito de la demanda interna (cuadro I-4).

Desde el punto de vista de la oferta, se observó un cambio de liderazgo, en términos de crecimiento, a favor del sector energético que, favorecido por los acontecimientos vividos a lo largo de 2000 en los mercados de petróleo, creció a un ritmo medio de 10,6 por 100. El sector de la construcción, protagonista del crecimiento en 1999, exhibió durante el ejercicio 2000 una clara moderación en su ritmo de avance, que de media se situó en el 6,3 por 100 (un nivel 2,4 puntos inferior al crecimiento de 1999). El sector industrial y las ramas primarias mostraron, igualmente, avances en su producción, destacando la expansión registrada por estas últimas, cuyo crecimiento medio anual se situó en 1,5 por 100, frente al descenso experimentado en el ejercicio anterior. El avance en la producción primaria respondió a las buenas cosechas de cereales, cítricos, viñedo y olivar, que llegaron a compensar la desaceleración de la producción ganadera, afectada, sobre todo en los últimos meses, por la caída en la producción de vacuno.

Tasa de paro: 14,1 por 100

El crecimiento sostenido de la actividad, de acuerdo con las cifras de la Contabilidad Nacional Trimestral, permitió registrar una creación neta de 480 mil puestos de trabajo, medida en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, tres mil más que en el periodo anterior. La tasa de creación de empleo, según esta misma fuente, se situó en 3,3 por 100, ocho décimas por debajo del crecimiento del PIB, lo que revelaría un aumento de la productividad aparente del trabajo para el conjunto del ejercicio. El análisis por sectores revela que durante el año 2000 la construcción fue, de nuevo, aunque en esta ocasión a un ritmo más moderado, el sector de mayor crecimiento del empleo, 7,5 por 100, en contraste con la reducción del empleo agrícola, de 2,4 por 100.

La Encuesta de Población Activa (EPA), por su parte, estimó un crecimiento del empleo del 4,7 por 100, una décima por encima del

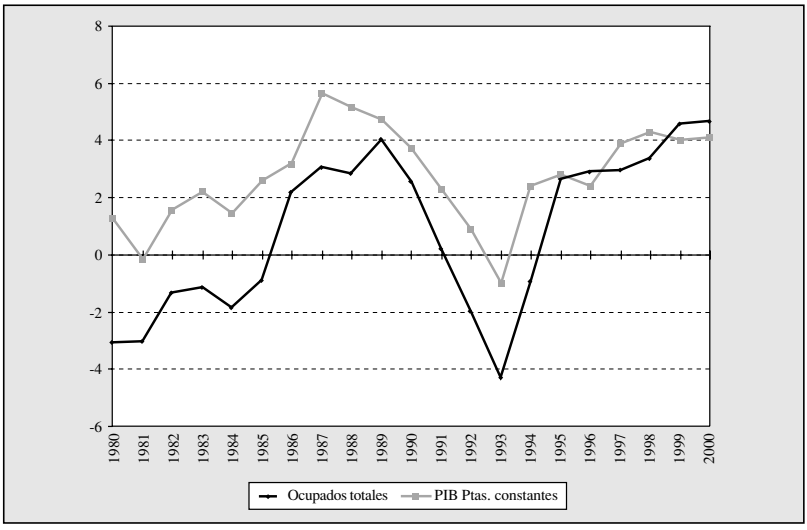
valor registrado en 1999, de modo que el número de empleos netos creados fue de 656 mil. Ambos valores difieren de los recogidos por la Contabilidad Nacional Trimestral, debido a razones metodológicas, tal y como se expone en el capítulo II. Los cambios introducidos en la EPA para adecuarla a las modificaciones censales acontecidas hicieron aflorar aproximadamente 80 mil activos por trimestre, de los cuales cerca de 77 mil fueron ocupados. El favorable comportamiento del mercado de trabajo permitió situar la tasa de paro promedio para el ejercicio en 14,1 por 100, casi dos puntos por debajo de la tasa de paro de 1999.

Este crecimiento del empleo recogido por la EPA se traduciría en un descenso, por segundo año consecutivo, de la productividad aparente del factor trabajo del 0,6 por 100 (gráfico I-2). Sin embargo, no hay que olvidar las cautelas que entraña cualquier interpretación de la evolución de la productividad, y más en concreto, respecto a la utilización de las cifras de empleo de la EPA para su aproximación[4]. En este sentido, resultaría más apropiado, a la hora

GRÁFICO I-2

CICLO DE LA ACTIVIDAD Y DEL EMPLEO, 1980-2000

(Tasas de variación interanual)



Nota: En los ocupados totales no se distingue si lo son a tiempo completo o parcial.
Fuentes: INE, *Contabilidad Nacional Trimestral de España* y *Encuesta de Población Activa*.

[4] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999,* pág. 212.

de medir *grosso modo* la eficiencia del sistema productivo, recurrir a las cifras sobre empleo ofrecidas por la Contabilidad Nacional, en particular a los puestos de trabajo equivalente a tiempo completo. Considerando la tasa de crecimiento de los ocupados medidos por puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, se observa que la productividad aparente del factor trabajo se situó en 2000 en 0,8 por 100 (cuadro I-5).

En cualquier caso, se observa que la evolución de la productividad aparente del trabajo en España en el ejercicio 2000, aunque superior a la del ejercicio anterior, siguió siendo baja en comparación con la de las economías más avanzadas. Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha intentado dar una explicación a este bajo crecimiento[5]. Interesado por los efectos que este descenso en la productividad pudiera tener sobre la competitividad exterior de la economía española[6], el FMI identificó una serie de factores cuya conjunción, en opinión de este organismo, podría explicar la baja productividad aparente del trabajo. Su exposición, a continuación, sirve para manifestar las diferentes interpretaciones

CUADRO I-5

ACTIVIDAD, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD POR SECTORES, 1998-2000

(Tasas de variación interanual)

Sectores	1998			1999			2000		
	PIB real	Empleo	Productividad (1)	PIB real	Empleo	Productividad (1)	PIB real	Empleo	Productividad (1)
Agricultura	1,5	0,9	0,6	–3,1	–3,5	0,4	1,5	–2,4	3,9
Industria (2)	4,8	4,8	0,0	3,0	3,4	–0,4	5,1	2,9	2,2
Construcción	7,3	6,9	0,4	8,7	10,4	–1,7	6,3	7,5	–1,2
Servicios	3,5	3,4	0,1	4,0	3,5	0,5	3,6	3,3	0,3
Total	**4,3**	**3,8**	**0,5**	**4,0**	**3,6**	**0,4**	**4,1**	**3,3**	**0,8**

(1) Tasa de variación del PIB real–Tasa de variación del empleo, este último medido por puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

(2) Incluye energía.

Fuente: INE, *Contabilidad Nacional Trimestral de España.*

[5] FMI, *Spain: The 2000 Article IV Consultation-Staff Report*, noviembre 2000.

[6] Según el FMI, la caída de la productividad aparente del trabajo en 1999 y 2000, que se extrae de la utilización de la EPA, supone que a pesar de la moderación salarial, los costes laborales unitarios se elevaron afectando negativamente a la competitividad española en el marco de la zona euro.

que se puede dar a este controvertido fenómeno. Sin ánimo de ofrecer una lista exhaustiva de los determinantes de la productividad, el FMI destaca, entre otros aspectos, la creación de empleo concentrada en los últimos años en sectores de baja productividad, como son la construcción o el turismo; la menor cualificación de los ocupados incorporados en los últimos ejercicios; la posible disminución de la ratio capital-trabajo, considerada en cualquier caso temporal, derivada de la fuerte creación de empleo en los últimos ejercicios o los posibles defectos metodológicos que se presentan al analizar la productividad.

Medidas de reforma y liberalización

Finalmente, en lo relativo a las medidas de política económica establecidas durante 2000, destacaron el tensionamiento de la política monetaria por parte del BCE, que respondió a la necesidad de aplacar los repuntes inflacionistas registrados en la zona euro, y la consolidación fiscal en línea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; ambas medidas amortiguaron el ritmo de crecimiento de la demanda interna. Asimismo, las autoridades españolas decidieron introducir una nueva batería de medidas que pudieran, en el medio plazo, estimular la actividad desde la perspectiva de la oferta. De este modo, el Gobierno aprobó el 23 de junio, mediante cinco Reales Decretos-Ley[7], un amplio plan que tenía como objetivo declarado la consolidación del crecimiento y la creación de empleo (cuadro I-6). Aunque oficialmente las reformas no expresaron su pretensión directa de influir sobre los precios, lo que resultaba coherente con la postura oficial sobre la exogeneidad de los factores explicativos de la inflación de 2000, es indudable que las medidas previstas para «dotar a la economía española de mercados más flexibles y competitivos» en determinados sectores, buscaban tener efectos favorables en términos de reducción de los mismos en el medio plazo.

[7] RDL 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueban Medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa; RDL 4/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes; RDL 5/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los medicamentos; RDL 6/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios; RDL 7/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones.

CUADRO I-6

MEDIDAS DE REFORMA Y LIBERALIZACIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2000

Medidas fiscales de apoyo al ahorro
Para facilitar la adaptación de las Pymes a las exigencias procedentes de un «entorno globalizado y cambiante», el Real Decreto-Ley 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueban Medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, trata de reforzar la internacionalización de las empresas españolas modificando aspectos relacionados con la doble imposición y con el tratamiento de las plusvalías; igualmente, se plantea la necesidad de incentivar el ahorro ampliando las deducciones por planes de pensiones y mejorando el tratamiento de las ganancias patrimoniales; se amplía la tipología de las Pymes beneficiarias de las ventajas fiscales del Impuesto de Sociedades; finalmente trata de promover las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación mejorando su tratamiento fiscal. Un análisis pormenorizado de este conjunto de medidas se presenta en el epígrafe dedicado a las novedades tributarias.
Liberalización en el sector inmobiliario y transportes
Con el objetivo de repercutir favorablemente en el coste de la vivienda, las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes tratan de introducir una mayor flexibilidad en el mercado del suelo. Concretamente, desaparece la discrecionalidad que la Ley del Suelo otorgaba a los municipios en la clasificación del suelo como no urbanizable y se permite promover la transformación del suelo urbanizable a la iniciativa privada; además se elimina la exclusividad atribuida a los agentes de la propiedad inmobiliaria en las operaciones de intermediación inmobiliaria. En lo relativo al transporte, concretamente al de viajeros por carretera, se reduce el plazo de las concesiones exclusivas. Además, se facilita la instalación de nuevos puntos de venta de combustible en los recintos portuarios.
Medidas de contención del gasto farmacéutico y de racionalización del uso de medicamentos
El Real Decreto-Ley 5/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los medicamentos modifica la regulación de los márgenes comerciales tanto en distribución mayorista como a través de las oficinas de farmacia y permite, además, la aplicación de descuentos.
Intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios
En este ámbito, el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, afecta, por un lado, a los mercados energéticos, de modo que se trata de fomentar la transparencia y la competencia en el mercado de los hidrocarburos líquidos, de mejorar la gestión técnica del sector del gas natural, además de acelerar los calendarios de liberalización de este último sector y del eléctrico. Esta misma disposición incide, por otro lado, en aspectos concretos de la situación de la competencia en diferentes actividades económicas y en la propia regulación normativa en dicha materia. Las medidas versan, entre otros aspectos, sobre la liberalización de los descuentos en los precios de los libros de texto, las rebajas en los aranceles de notarios y registradores y la ampliación de los horarios comerciales. En lo relativo a la política de defensa de la competencia se establece la suspensión de la ejecución de las operaciones de concentración hasta su autorización explícita y se reducen los plazos para tomar este tipo de decisiones.
Promoción de la competencia en las telecomunicaciones y liberalización de la ITV
Las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones, afectan a la competencia en el mercado de las llamadas locales y al acceso a Internet. Para intensificar la competencia en las llamadas locales, se exige a los operadores dominantes de redes telefónicas públicas que faciliten el acceso desagregado y el compartido al bucle de abonado. Asimismo, se obliga a los operadores dominantes del servicio telefónico fijo a incorporar una tarifa plana para acceder a los proveedores del servicio de Internet, aunque su establecimiento se limita al horario reducido. Curiosamente, dentro de este mismo Real Decreto-Ley 7/2000 se incluyeron un conjunto de medidas para fomentar la liberalización de la Inspección Técnica de Vehículos.

Fuente: Elaboración propia.

Las medidas adoptadas tratarían de dotar de una mayor flexibilidad a la oferta a través de actuaciones en aquellos sectores clave que determinan el precio de una parte de los *inputs* de la producción española, como el sector eléctrico, los hidrocarburos o las telecomunicaciones. Asimismo, se recogieron otras medidas que afectan al marco en el que se desenvuelve la actividad económica española, como la defensa de la competencia, la sanidad, el suelo urbanizable, las actividades profesionales, el comercio interior o la fiscalidad del ahorro. Este conjunto de intervenciones responden al compromiso adquirido por parte del conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea en el Consejo Europeo de Lisboa, que identificaba a este tipo de reformas estructurales, junto a la adaptación de la economía a la sociedad del conocimiento, como las claves para asegurar un crecimiento equilibrado y sostenido en el medio plazo.

Continúa la desaceleración en 2001

Respecto a las previsiones para el ejercicio 2001, se espera una moderación del ritmo de crecimiento de la economía española, al alcanzar 3,2 por 100[8] (cuadro I-7). Esta ralentización responderá al menor empuje de la demanda interna, inferior incluso al del ejercicio 2000, pero, sobre todo, a una desaceleración de la economía norteamericana bastante superior a la esperada inicialmente.

El menor dinamismo en la creación de empleo y el agotamiento de los efectos de la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) provocarán la moderación del consumo de las familias que, en principio, no sería compensada por el consumo público[9], dada la consolidación presupuestaria prevista. Respecto a la formación bruta de capital, todas las previsiones es-

[8] Las previsiones sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas publicadas a finales de 2000 revelaban un mayor optimismo que las publicadas posteriormente en la primavera de 2001. En cuanto al crecimiento del PIB, las rebajas alcanzaron tres décimas (seis en el caso de la OCDE, que pasó de estimar un crecimiento de la economía española de 3,5 por 100 a 2,9 por 100).

[9] Esto sería así en principio. No obstante, la presentación en abril por parte del Ministerio de Economía del *Escenario macroeconómico* modificó algunas de las previsiones publicadas en diciembre en la *Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2000-2004,* entre otras, la previsión sobre el crecimiento del consumo privado descendió en siete décimas y la del crecimiento del consumo público aumentó en ocho décimas. Al respecto, en diciembre se preveía un crecimiento del consumo público del 1,2 por 100, y tras la revisión, en abril de 2001, el consumo público presentaba un crecimiento previsto del 2,0 por 100.

CUADRO I-7
PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA, 2001
(Tasas de variación interanual)

Conceptos	Ministerio de Economía	Comisión Europea		OCDE	
	España	España	UE-15	España	UE-15
PIB	3,2	3,2	2,8	2,9	2,6
Consumo privado	2,7	2,7	2,7	2,9	2,6
Consumo público	2,0	2,5	2,1	2,3	1,6 [b]
Formación bruta de capital	5,3	4,2	4,1	4,1	3,5
Exportaciones de bienes y servicios	8,1	9,2	8,3	8,2	8,9 [b]
Importaciones de bienes y servicios	7,9	8,4	8,8	8,0	8,1 [b]
Deflactor del consumo privado	2,8	3,2	2,1	3,5	2,2
Deflactor del PIB	3,4	3,4	1,9	3,2	2,2
Variación del empleo	2,1	2,2	1,2	3,5[b]	1,3
Tasa de desempleo	12,7	12,8	7,7	13,2	7,7
Necesidad de financiación de las AAPP (% del PIB)	0,0[c]	0,1[a]	–0,2	0,0	–0,2

Fuentes: OCDE, *Economic Outlook n.º 69*, abril de 2001. Comisión Europea, *Previsiones de primavera,* 2001. Ministerio de Economía, *Escenario macroeconómico*, abril 2001.

([a]) Incluye los ingresos por las licencias de telefonía UMTS de 2000, sin las cuales ascendería a –0,4 por 100 del PIB.

([b]) OCDE, *Economic Outlook,* diciembre de 2000. La publicación de abril no presenta previsiones para estas variables.

([c]) Ministerio de Economía, *Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2000-2004*, diciembre 2000.

tán de acuerdo en que continuará siendo la variable más dinámica de la demanda interna. La moderación del consumo junto al menor dinamismo de las exportaciones podrían generar unas expectativas empresariales menos optimistas que actuasen en detrimento de la decisión de invertir. Sin embargo, la posible relajación de la política monetaria del BCE, con el subsiguiente descenso de los tipos de interés, la elevada rentabilidad empresarial del último ejercicio o la inversión empresarial progresiva en nuevas tecnologías podrían mantener el ritmo de crecimiento de la inversión.

Este menor empuje de la demanda interna ofrecería una posibilidad de confirmar la tendencia iniciada desde mediados de 2000 por el sector exterior, cuando su aportación al crecimiento llegó a ser positiva. En este sentido, se podría prever una ralentización en el crecimiento de las importaciones; sin embargo, en lo que respecta a las exportaciones, el contexto internacional ofrece una vi-

sión menos optimista. La evolución de las ventas españolas en el exterior dependerá tanto del sostenimiento de la actividad del resto de los Estados miembros de la Unión Europea, principales socios comerciales de la economía española, como del grado de desaceleración de la economía norteamericana y su posible impacto en las economías del área latinoamericana.

En todo caso, cualquier previsión sobre el comportamiento del sector exterior estará sujeta a la trayectoria que siga la cotización de la moneda única y los precios del petróleo. De hecho, tal y como se comentará más adelante, los resultados del sector exterior durante el ejercicio 2000 estuvieron claramente marcados por la evolución de estas dos variables.

Precios del petróleo: impacto asimétrico

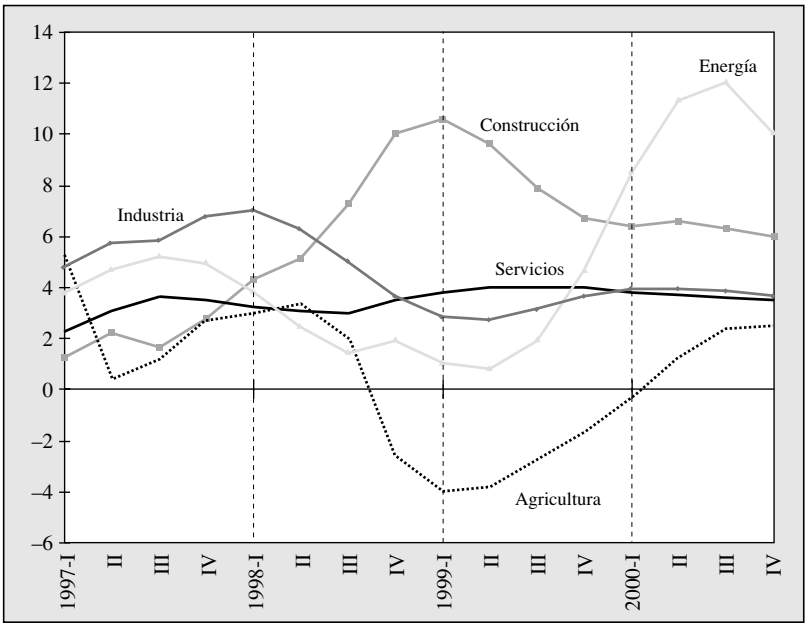
Resultó igualmente relevante el impacto asimétrico que esta subida de precios del petróleo tuvo por países. Las economías con mayor dependencia del petróleo, como la española, sufrieron notables subidas de sus precios de consumo, circunstancia que podría afectar, en el medio plazo, a la competitividad exterior de la economía española, en la medida en que esta mayor inflación se filtrase hacia la parte estructural del índice de precios. De hecho, las previsiones sobre inflación muestran una gran incertidumbre. Cabe expresar al respecto que, además de la posible internalización de parte de los mayores costes que produjeron el encarecimiento de los carburantes y la debilidad del euro, la trayectoria de la inflación subyacente en el periodo 2001 estaría, asimismo, determinada por el grado de moderación que presente la demanda interna, así como por la repercusión que pudiera tener la crisis de los mercados ganaderos.

La posible ralentización de las exportaciones, junto a las posibles tensiones inflacionistas que pudieran ampliar el diferencial de inflación con la Unión Europea, ponen nuevamente de manifiesto la necesidad de realizar mayores esfuerzos para mejorar la posición competitiva de la economía española. El establecimiento de las condiciones necesarias para lograr un crecimiento más saneado, sin restricciones del sector exterior, exige una profundización en las reformas estructurales. La batería de reformas introducidas en junio de 2000 no llegaron a afectar al núcleo duro de la inflación, que parece permanecer, además, inmune a las reformas estructurales introducidas en los ejercicios anteriores.

3.2. INDUSTRIA Y ENERGÍA, PROTAGONISTAS DEL CRECIMIENTO

Durante el ejercicio 2000, todos los sectores productivos presentaron tasas de crecimiento positivas (gráfico I-3; gráfico I-4; cuadro I-8) destacando la evolución seguida por el sector industrial y, sobre todo por el sector energético. La construcción, por su parte, aunque mantuvo ritmos elevados de crecimiento, continuó en la senda descendente que venía siguiendo desde el primer trimestre de 1999. En el tercer trimestre, no obstante, comenzaron a aparecer síntomas de una ralentización de la actividad en todos los sectores excepto en el primario, fundamentalmente como consecuencia de la desaceleración del consumo privado y de la inversión en bienes de equipo, que afectó tanto a la producción de manufacturas como a los servicios. Respecto a la organización de los distintos mercados sectoriales, destacó la profundización de los procesos de desregulación o reregulación propiciada por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (cuadro I-6).

GRÁFICO I-3
COMPONENTES SECTORIALES DEL PIB, 1997-2000
(Tasas de variación interanual)

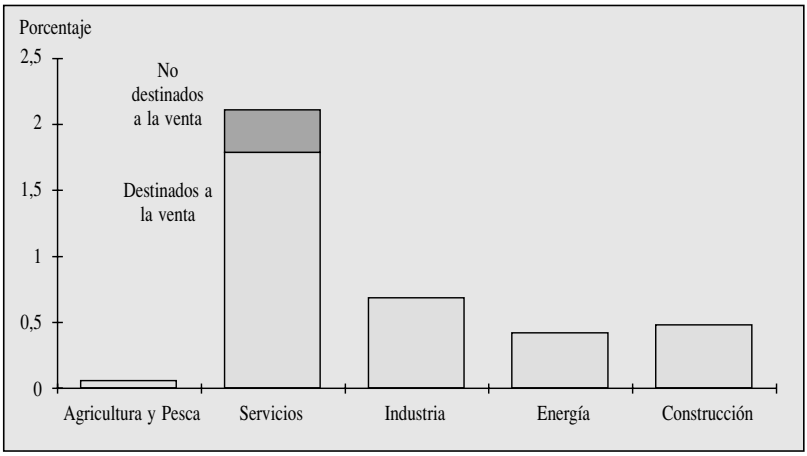


Fuente: INE, *Contabilidad Nacional Trimestral de España.*

GRÁFICO I-4

RESULTADOS SECTORIALES, 2000

(Aportación porcentual al crecimiento del PIB)



Fuente: INE, *Contabilidad Nacional Trimestral de España.*

CUADRO I-8

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTORES, 1998-2000

(Tasas de variación interanual de los componentes del PIB en pesetas constantes)

Años	Trimestres	Agricultura y Pesca	Industria	Energía	Construcción	Servicios
1998	I Trim.	5,2	6,7	3,8	4,5	3,2
	II Trim.	3,6	5,9	3,3	6,2	3,1
	III Trim.	2,0	4,8	2,7	8,2	3,0
	IV Trim.	–2,6	3,7	2,0	10,0	3,5
	Media	**1,5**	**5,3**	**2,9**	**7,3**	**3,5**
1999	I Trim.	–4,0	2,9	1,1	10,6	3,8
	II Trim.	–3,8	2,8	0,9	9,6	4,0
	III Trim.	–2,7	3,2	2,0	7,9	4,0
	IV Trim.	–1,6	3,7	4,7	6,7	4,0
	Media	**–3,1**	**3,2**	**2,2**	**8,7**	**4,0**
2000	I Trim.	–0,3	4,0	8,6	6,4	3,8
	II Trim.	1,3	4,0	11,4	6,6	3,7
	III Trim.	2,4	3,9	12,1	6,3	3,6
	IV Trim.	2,5	3,7	10,1	6,0	3,5
	Media	**1,5**	**3,9**	**10,6**	**6,3**	**3,6**

Fuente: INE, *Contabilidad Nacional Trimestral de España.*

3.2.1. **Aportación positiva del sector primario**

En su conjunto, la actividad del sector primario mejoró a lo largo del ejercicio 2000. El componente primario de la actividad cerró el ejercicio con una tasa de crecimiento del 1,5 por 100, en términos reales, frente al descenso registrado durante el año anterior del 3,1 por 100. El avance de su producción permitió que la aportación de las ramas primarias al crecimiento del PIB fuera de una décima. No obstante, como se expone a continuación, el resultado agregado del sector primario para el conjunto del ejercicio, conjugó el comportamiento contrapuesto de sus dos subramas principales, agricultura y ganadería, puesto que las buenas cosechas de la primera contrastaron con la desaceleración en el ritmo de producción de la segunda.

Este crecimiento positivo de la producción del sector primario no tuvo efectos positivos en el balance del mercado de trabajo; de hecho, tal y como se expone en el capítulo II, en el ejercicio 2000 el sector continuó su paulatina pérdida de empleo. Según la EPA, el número de ocupados se situó por debajo del millón, lo que en términos porcentuales supuso un retroceso del 2,8 por 100.

La agricultura y la ganadería en España

La evolución del sector agrario durante el año 2000 estuvo marcada principalmente por el impacto que tuvo el incremento del precio de los carburantes sobre los costes del sector, así como por la crisis que en la producción ganadera originó la Encefalopatía Espongiforme Bovina, comúnmente denominada enfermedad de «las vacas locas», agravada, además, a finales de año por diferentes brotes de fiebre aftosa en algunos países europeos. Asimismo, la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas junto a la propuesta de reforma de la OCM del arroz fueron algunos de los principales acontecimientos del ejercicio.

La producción final agraria ascendió a 4,43 billones de pesetas, lo que supuso un aumento del 3,2 por 100 respecto del año anterior. En la agricultura destacaron las buenas cosechas en cereales y viñedo, con crecimientos del 46,0 por 100 y 11,0 por 100, respectivamente. Respecto a la producción ganadera, la de porcino creció un 22,0 por 100 y la avicultura un 37,0 por 100; ambas en claro contraste con la caída registrada por el vacuno, 2,0 por 100, debi-

da a los efectos de la «crisis de las vacas locas». Probablemente, estos efectos serán más evidentes a medida que avance el ejercicio 2001, puesto que en España los primeros casos aparecieron en noviembre de 2000.

Por su parte, los precios manifestaron un comportamiento dispar. Cayeron en el caso del vacuno, del olivar y del viñedo y subieron en el sector porcino y la avicultura. La subida media fue de 1,6 por 100. El precio de los consumos internos del sector agrario registró un incremento del 5,2 por 100, pasando de 1,93 a 1,99 billones de pesetas, frente a la caída del 2,2 por 100 del ejercicio anterior. Igualmente destacó la subida media del precio de los lubricantes y de la energía, 23,8 por 100, en concreto de los precios del gasóleo.

La conjunción del aumento de la producción y del comportamiento de los precios se tradujo, de acuerdo con las cifras ofrecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en una subida de la renta agraria del 4,2 por 100 en el año 2000. Por otra parte, la balanza agroalimentaria en 2000 presentó un saldo positivo de 348,8 millones de pesetas, lo que supuso una mejora respecto al año anterior, en que el saldo fue de 119,9 millones de pesetas.

Ante las tensiones generadas en el sector por el alto precio de los carburantes y por la crisis del vacuno, el Gobierno introdujo una serie de medidas de urgencia para tratar de amortiguar el impacto sobre los productores. De hecho, se estimó que la «crisis de las vacas locas» había provocado, en los primeros cinco meses del año, unas pérdidas de unos 60.000 millones de pesetas, que estuvieron directamente relacionadas con el descenso experimentado por el consumo de carne de vacuno, del 25,0 por 100. El MAPA estableció un Plan de Ayudas para los ganaderos de vacuno afectados por la «crisis de las vacas locas», que contemplaba tanto subvenciones directas, por un montante de unos 12.000 millones de pesetas, como créditos blandos, por unos 50.000 millones de pesetas.

Respecto a la subida del precio de los carburantes utilizados por el sector agrario, que pasó de 64 pesetas a principios de año a las 86 pesetas al final del año, lo que originó unas pérdidas estimadas en más de 100.000 millones de pesetas para dicho sector, se esta-

bleció un Acuerdo entre el Gobierno y las principales organizaciones agrarias consistente en la aplicación de medidas de compensación fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) junto a la apertura de una línea de crédito por valor de 35.000 millones de pesetas.

En cuanto a las modificaciones en la normativa comunitaria referentes a determinadas producciones reguladas por Organizaciones Comunes de Mercado destacaron, entre otras, las siguientes:

— En el Consejo de Ministros de Agricultura de 20 de noviembre se aprobó la nueva OCM para frutas y hortalizas, que supone la consolidación del 75 por 100 del gasto en el sector e introduce modificaciones sustanciales en el régimen de productos transformados.

— En el subsector vitivinícola destacó la creación en el año 2000 de dos interprofesionales[10], la aprobación de un Reglamento de la OCM sobre potencial productivo por el que se establecían las ayudas para proyectos de reestructuración del viñedo español y de otro Reglamento de mecanismos de mercado que afectaba a un volumen de 12,5 millones de hectolitros para destilación del vino producido en la Unión Europea, de los cuales, 7,5 millones de hectolitros corresponderán a España.

— Para las oleaginosas, se redujeron las ayudas directas, pasando de 94,24 euros en la campaña 1999/2000 a 81,74 euros en la campaña 2000/2001[11]. Se reordenó la OCM de las leguminosas a través de la separación entre las de consumo humano y las de consumo animal.

— La OCM del arroz estuvo en fase de reforma durante el ejercicio, quedando pendiente la aprobación de una propuesta de

[10] Las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias son entes de naturaleza jurídica privada, constituidos por organizaciones representativas de la producción, transformación y comercialización que están reguladas en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre.

[11] Los montantes de las ayudas directas en este subsector están referidos a toneladas de rendimiento cerealista histórico regional.

Reglamento relativa a la aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias.

La pesca en España

El balance global para el año 2000 del sector pesquero no puede calificarse de positivo, ya que se vio afectado, principalmente, por la repercusión que tuvieron sobre algunas modalidades de pesca la elevación de los precios del combustible y la paralización de la flota que operaba en Marruecos.

El Acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos finalizó el 30 de noviembre de 1999 y las discusiones para su renovación fueron infructuosas, desembocando en una ruptura cuyo impacto será notablemente negativo para el sector. De hecho, España fue el Estado miembro más afectado por el fracaso de las negociaciones, puesto que de los 433 barcos comunitarios que faenaban en Marruecos, 404 eran españoles. Asimismo, se estimó que del número de pescadores afectados, unos 2.800 en la Unión Europea, alrededor de 2.500 eran españoles; además, los 12.000 puestos de trabajo indirectamente relacionados con el sector también se verán perjudicados.

La oferta de Bruselas en sus negociaciones con Marruecos fue reducir el número de barcos comunitarios que faenaran en los caladeros marroquíes a 177 y pagar 65 millones de euros anuales[12]. En la reunión de Ministros de Pesca de la Unión Europea de 25 de abril de 2001 se acordó terminar definitivamente las negociaciones por la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

Para absorber el impacto sobre el sector, los Quince abogaron por preparar un programa de reconversión que tenga en cuenta los aspectos sociales y económicos de las regiones afectadas y aporte alternativas posibles a la flota concernida. Dicho programa debería estar adoptado antes de que expirasen las ayudas al amarre, en junio de 2001. El programa diseñado por España supondrá un coste de 540 millones de euros (cerca de 90.000 millones de pesetas).

[12] Las conversaciones se extendieron a los primeros meses de 2001 y se rompieron el 26 de marzo, cuando la última propuesta de Marruecos fue dejar en 170 los barcos comunitarios que faenaran en sus caladeros, además de percibir 90 millones de euros anuales en lugar de los 120 del acuerdo anterior.

Respecto a otros caladeros, en diciembre se aprobaron los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas para el año 2001. Para la mayoría de las especies se recortaron considerablemente los TAC respecto del año 2000. Se aprobó una reducción media del 40 por 100 en las capturas del bacalao en el Mar del Norte, del 41 por 100 en las capturas de merluza en el Mar del Norte y del 55 por 100 en el Golfo de Vizcaya. Los TAC de otras especies que afectan a España, como rape, gallo y cigala, también se redujeron, aunque en proporciones menos acusadas que los correspondientes al bacalao y merluza.

Por lo que se refiere a la política pesquera española, destacó como novedad legislativa la Ley de Pesca[13], que entró en vigor en marzo de 2001, y que regula la pesca marítima, al establecer, entre otros aspectos, el ámbito de aplicación, las medidas de conservación y protección de los recursos, el régimen de gestión de la pesca no profesional, las bases de comercialización y transformación de los productos pesqueros, la investigación pesquera y oceanográfica y el régimen de control para la protección de los recursos pesqueros[14].

Otra novedad legislativa del año 2000 fue la publicación del Reglamento de Base sobre la Organización Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura[15] (Reglamento CE núm. 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999), cuyas disposiciones serían aplicables a partir del 1 de enero de 2001, excepto en lo que se refiere a las normas relativas a la información a los consumidores, las cuales serán aplicables a partir del 1 de enero de 2002 con el fin de permitir la adaptación de la industria.

[13] Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca marítima.

[14] Además, la Ley recoge una serie disposiciones adicionales referentes, entre otras cuestiones, a los órganos de coordinación y consulta en materia pesquera, a la transmisión de datos de los registros de buques, al contingente de importaciones de productos pesqueros y a la tenencia ilegal de especies capturadas mediante pesca marítima de recreo.

[15] Esta nueva OCM del sector de los productos de la pesca y la acuicultura comprende, entre otras, normas comunes sobre la competencia y sobre la comercialización y la obligación para los Estados miembros de redactar y publicar una lista de sus productos comerciales pesqueros antes del 1 de enero de 2002.

Finalmente, en materia de comercio exterior, las importaciones e introducciones[16] de pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos en el año 2000 alcanzaron la cifra de 574.591 millones de pesetas (el 2,9 por 100 del total de importaciones e introducciones). Las exportaciones y expediciones[17] supusieron 234.958 millones de pesetas (el 1,1 por 100 del total de exportaciones y expediciones). La tasa de cobertura empeoró 8,4 puntos respecto al año anterior, al pasar del 49,3 al 40,9 por 100.

La acuicultura en España

La producción española en el sector de la acuicultura durante el año 2000 se estima en unas 335.000 toneladas. Esta cifra refleja la estabilidad de la producción, centrada en el cultivo del mejillón, que con 270.000 toneladas domina la estadística de la producción. Un análisis más detallado permite pronosticar avances en la producción de dorada con 8.500 toneladas, la lubina con 2.500 y el rodaballo con 3.500 toneladas. La producción de trucha permanece estable, en torno a las 33.500 toneladas.

El Libro Blanco de la Acuicultura, cuyo borrador fue finalizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1999, y que debería convertirse en un instrumento al servicio del sector para promover su desarrollo y dar lugar a un Plan estratégico, permanecía sin ser publicado al cierre de esta Memoria.

Se desbloquearon, además, algunos proyectos de acuicultura marina, aunque sus efectos no se notarán hasta dentro de tres años aproximadamente.

3.2.2. **Elevado crecimiento del sector industrial**

El Valor Añadido Bruto (VAB) de la actividad industrial, exceptuando la construcción y la energía, registró una variación media anual del 3,9 por 100, siete décimas por encima del crecimiento medio del ejercicio anterior. El sector industrial explicó 0,7 puntos de la tasa de crecimiento del PIB, frente a 0,4 puntos en 1999. No

[16] En materia de comercio exterior se denominan «introducciones» a las compras realizadas al resto de Estados miembros de la Unión Europea.

[17] En materia de comercio exterior se denominan «expediciones» a las ventas realizadas al resto de Estados miembros de la Unión Europea.

obstante, el perfil trimestral presentado por esta actividad reveló una suave moderación en su crecimiento, de modo que la tasa de crecimiento interanual entre el primer y el cuarto trimestre (4,0 y 3,7 por 100 respectivamente) decreció tres décimas.

El crecimiento medio anual del Índice de Producción Industrial (IPI), principal indicador de la actividad industrial, alcanzó, una vez descontados los efectos de calendario[18], el 4,4 por 100, casi dos puntos por encima de su crecimiento medio en 1999.

Frente al ejercicio anterior, la evolución del IPI por trimestres reveló una clara ralentización de su crecimiento. El análisis desagregado por componentes de la producción industrial por destino económico de los bienes permite afirmar que esta desaceleración fue debida al descenso experimentado, en el cuarto trimestre, por la producción de bienes de consumo, tanto manufacturados como alimenticios, que confirmó el menor empuje de la demanda de consumo. Los bienes intermedios sufrieron igualmente las consecuencias de una menor demanda, de modo que aunque el crecimiento medio para el conjunto del ejercicio fue de 5,5 por 100, se pasó de un crecimiento interanual de 11,1 por 100 en el primer trimestre a un 1,1 en el cuarto. La lectura positiva de esta tendencia es que esta atonía en la demanda de bienes intermedios fue común a la demanda de importaciones de productos de esta índole, lo que permitió suavizar la aportación negativa de la demanda externa al crecimiento.

La moderación en el crecimiento del IPI, impuesto por la trayectoria seguida por los bienes de consumo e intermedios, fue amortiguada, sobre todo a finales de año, por el incremento de la producción de bienes de equipo, que registró un crecimiento medio anual de 6,7 por 100. Las buenas perspectivas económicas que se preveían para la zona euro, así como la repercusión positiva que sobre los costes industriales tuvo el descenso iniciado en el último mes del año 2000 por los precios del petróleo, favorecieron las ex-

[18] El hecho de descontar los efectos del calendario da lugar al llamado IPI *filtrado* que se obtiene tras realizar la corrección del IPI general de los efectos del calendario laboral con el fin de eliminar la influencia del número de días laborales y de las festividades en las diferentes Comunidades Autónomas, lo que facilita las comparaciones entre los mismos meses de años diferentes.

portaciones, de modo que la tasa interanual de crecimiento de producción de bienes de equipo alcanzó un 11,0 por 100 en diciembre.

Por ramas de actividad, los mayores avances fueron protagonizados por la fabricación de material electrónico (excepto ordenadores) y por la producción y primera transformación de metales, con crecimientos medios para el conjunto del ejercicio de 18,8 y 15,9 por 100, respectivamente. Por el contrario, los mayores descensos fueron registrados por la fabricación de instrumentos de precisión, óptica y similares y la construcción de máquinas de oficina y ordenadores, con retrocesos de sus índices de producción de 14,1 y 9,1 por 100, respectivamente.

Mayor liberalización del sector eléctrico

El comportamiento del sector eléctrico durante el ejercicio 2000 se caracterizó tanto por los nuevos avances regulatorios a favor de la liberalización del sector, Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, como por las convulsiones provenientes de los diferentes intentos de fusión y absorción de algunas empresas eléctricas[19].

El ejercicio 2000 fue el tercer año de funcionamiento del Mercado Eléctrico, previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y que inició su andadura en 1998. El mercado mayorista de electricidad, en el que concurren los oferentes y demandantes de energía eléctrica, se organiza en varias fases denominadas: mercado diario, mercado intradiario y procesos de operación técnica del sistema. El mercado diario supone aproximadamente el 85,5 por 100 del volumen total, por lo que los demás mercados se consideran de ajuste.

En el mercado diario, la contratación de energía ascendió a 171.556 GWh, lo que supuso un crecimiento del 5,4 por 100 respecto a 1999, en clara coherencia con el mantenimiento de la actividad general. El precio medio ponderado del mercado diario en el periodo enero-diciembre ascendió a 5,297 pesetas el kilovatio hora, un 19,1 por 100 más que respecto al mismo periodo de 1999.

[19] Hidrocantábrico y Unión Fenosa; Endesa e Iberdrola.

De este modo, el precio medio en el mercado de producción durante el ejercicio 2000 llegó a alcanzar 7,68 pesetas por kilovatio hora en octubre, frente a las 4,88 pesetas por kilovatio hora de diciembre.

La composición de la generación en el ejercicio 2000 fue la siguiente: la tecnología intensiva en fuel-gas generó el 30,0 por 100 de la energía diaria, sólo por detrás de la intensiva en carbón (38,0 por 100). Lejos, por debajo, quedaron las tecnologías nuclear (13,0 por 100) o la hidráulica (13,0 por 100). El 6,0 por 100 restante se cubrió con importaciones (4,0 por 100) o autoproducción (2,0 por 100).

A las medidas que, hasta el ejercicio 2000, se habían tomado para liberalizar el sector y fomentar con ello el abaratamiento de esta energía, se unió una batería de nuevas medidas liberalizadoras que parten del adelantamiento del calendario de liberalización plena del sector eléctrico, que será efectiva a partir del 1 de enero del año 2003. Entre estas medidas se encuentra una posible reducción máxima de las tarifas domésticas en un 9 por 100 durante los tres años previos a la liberalización total. Se establecieron, además, límites al incremento de nueva capacidad de los dos productores mayoritarios y se permitió a los comercializadores contratar bilateralmente con productores externos y con generadores del régimen especial.

Uno de los efectos más visibles de este proceso liberalizador fue el aumento del número de consumidores cualificados desde enero de 1999, crecimiento que se confirmó durante el ejercicio 2000. De este modo, los comercializadores y clientes cualificados representaron, de media para el ejercicio 2000, el 28,3 por 100 del mercado diario. En general, las compras realizadas por la demanda liberalizada crecieron, entre principios de 1999 y finales de 2000, un 659,9 por 100.

Encarecimiento espectacular del crudo

De nuevo, continuando la tendencia iniciada en 1999, los hidrocarburos, tanto el gas natural como, sobre todo, los derivados del petróleo, tuvieron que hacer frente a la escalada en los precios internacionales del crudo. La debilidad de la moneda única frente al dólar, que se llegó a depreciar frente a la divisa norteamericana un 11,2 por 100, junto al encarecimiento del precio del barril tipo *brent*, que alcanzó un valor medio para el conjunto de 2000 de 28,4 dólares el barril, frente a los 17,8 dólares que costó de media durante 1999, constituyeron los principales factores explicativos de este *shock* de oferta.

En España la gasolina 95 sin plomo pasó de costar, sin impuestos, 38,6 pesetas el litro de media en 1999 a 55,7 pesetas de media para el ejercicio 2000; igualmente, el gasóleo de automoción pasó de 37,0 pesetas el litro en 1999 a 55,7 pesetas en 2000. Además, la consideración de los impuestos que recaen sobre estos hidrocarburos llevaría a una de las principales polémicas suscitadas durante el ejercicio 2000, el agravamiento de las subidas de precios por el efecto de los impuestos. El precio con impuestos de la gasolina 95 sin plomo pasó de 116,5 pesetas el litro de media para 1999 a 136,3 pesetas en 2000, es decir, subió una media de 19,8 pesetas frente a la subida de 17,1 pesetas antes de impuestos. Lo mismo sucede con los precios del gasóleo de automoción[20]. Los debates al respecto se reavivaron por la decisión de algunos Estados miembros de la Unión de rebajar la carga fiscal sobre los carburantes como medio para hacer frente a la crisis energética. En este sentido, la Comisión Europea presentará una propuesta para acabar con las grandes diferencias existentes entre los impuestos que gravan los hidrocarburos en los distintos países de la Unión Europea[21].

Resulta paradójico que desde la liberalización del sector energético decretada por el Gobierno[22] en octubre de 1998, los precios de los carburantes siguieran una marcada senda ascendente. Aunque en gran parte fueron los factores exógenos descritos los que provocaron tensiones en los mercados de las gasolinas, en los momentos de mayor tensión la opinión pública llegó a cuestionar el propio proceso liberalizador[23].

Desde el punto de vista normativo, las principales novedades procedieron, al igual que para el sector eléctrico, de la aprobación del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, que en lo relativo a la liberalización de los mercados ener-

[20] El precio con impuestos del gasóleo de automoción pasó de 95,0 pesetas/litro a 116,7 pesetas/litro, lo que representó una subida de 21,7 pesetas, frente a la subida de 18,7 pesetas/litro de los precios sin impuestos.

[21] Un análisis pormenorizado de las diferencias existentes en la fiscalidad de los hidrocarburos entre los Estados miembros se presenta en el apartado dedicado a la Unión Europea, dentro de este mismo capítulo.

[22] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral*, *1998,* pág. 56.

[23] Tal y como se expuso en CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral*, *1999,* la actividad de comercialización de gasolinas se concentra en tres marcas, circunstancia que, por otro lado, caracteriza a esta actividad en la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea; sin embargo, sólo en Italia,

géticos contemplaba una serie de medidas para solventar aquellos aspectos que dificultan o retrasan la competencia efectiva.

Con el objetivo de mejorar la transparencia y la competencia en el mercado de hidrocarburos líquidos, se establecen en dicho Real Decreto-Ley las condiciones para la apertura del accionariado de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH); se fomenta el establecimiento de gasolineras en los grandes establecimientos comerciales, limitándose, a su vez, temporalmente, el aumento de los puntos de venta de las empresas dominantes en la distribución de este producto; y finalmente, se obliga a las estaciones de servicio a comunicar los precios establecidos a la Comisión Nacional de la Energía.

Los cambios introducidos en el sector del gas natural trataron de mejorar la gestión técnica del sistema gasista y de acelerar el calendario de liberalización. Se declara a Enagás gestor técnico del sistema de gas natural, dotándole de un carácter asimilable al de organismo regulador, de modo que vele por la seguridad del suministro, y, en consecuencia, se establecen límites a la participación en el accionariado de esta empresa. Asimismo, se asigna a Enagás el 75 por 100 del gas que procede de Argelia, destinándose el 25 por 100 a consumidores cualificados. Por último, se adelanta el calendario de liberalización, que será plena, es decir, todos los consumidores pasan a ser considerados cualificados, en el ejercicio 2003, en lugar de en 2008.

Una producción de más de tres millones de automóviles

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), el ejercicio 2000 puede ser calificado de excelente en lo relativo a la producción de vehículos. Por primera vez se superaron los tres millones de vehículos producidos, aunque España siguió ocupando el tercer puesto en la clasificación europea de productores, por detrás de Francia y Alemania.

El 82,5 por 100 de la producción se vendió en el exterior. De hecho, el volumen de las exportaciones también alcanzó un nivel récord, por encima de los dos millones y medio de unidades, de los cuales cerca de dos millones correspondieron a ventas de turismos

Portugal y España la compañía (o marca) principal concentra una importante cuota de mercado, por lo que la estrategia en la fijación de precios responde a la del seguimiento del líder. Este comportamiento en la determinación de precios llevó a originar dudas sobre la conveniencia de haber suprimido los precios máximos en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

al exterior. Según las cifras de Aduanas[24], las exportaciones de automóviles y motocicletas, denominadas en pesetas, aumentaron un 21,1 por 100, frente a un aumento de las importaciones de esta misma rúbrica del 6,5 por 100.

Las ventas domésticas de automóviles se redujeron por primera vez en los últimos cinco años, afectadas por la subida de los tipos de interés, el encarecimiento de los carburantes, descrito anteriormente, y la desaceleración de la demanda de consumo[25]. Las matriculaciones de turismo descendieron un 1,8 por 100 respecto a las matriculaciones de 1999; esta tendencia fue más marcada en lo relativo a la matriculación de vehículos todo terreno, que descendió un 6,2 por 100. Cabe subrayar, no obstante, que los mayores descensos se produjeron en el último trimestre de 2000, concretamente en diciembre, mes que estuvo afectado por las huelgas de transportistas y por el anuncio oficial de medidas fiscales para incentivar la compra de vehículos, que entrarían en vigor el 1 de enero de 2001, hecho que podría haber retrasado las compras. A pesar de los descensos, el número de matriculaciones fue muy elevado, y se produjeron a un ritmo de 115.100 unidades al mes[26], lo que convierte al año 2000 en el segundo mejor desde una perspectiva histórica.

3.2.3. **Decae la edificación residencial y se recuperan las obras públicas**

El VAB de la construcción creció un 6,3 por 100, frente al 8,7 por 100 del ejercicio 1999, confirmando la amortiguación que se viene produciendo en las tasas de crecimiento de esta rama de actividad desde el primer trimestre de 1999. La desaceleración trimestral del crecimiento de la actividad constructora fue más suave durante el ejercicio 2000 que en 1999, pasando de una tasa de crecimiento de 6,4 por 100 en el primer trimestre a 6,0 por 100 en el último. El menor ritmo de crecimiento del sector de la construcción redundó en una menor aportación al PIB (0,5 puntos) que la de 1999 (0,6 puntos).

Diferencias en los subsectores

Durante el ejercicio 2000 los tres subsectores de la actividad constructora —edificación residencial, no residencial y obra públi-

[24] Véase apartado 4.2. «Sector exterior».

[25] Véase apartado 4.1.1 sobre el consumo privado.

[26] En 1999, la media mensual de matriculaciones ascendió a 117.200 unidades y en 1998 a 99.400.

ca— mostraron tasas positivas de crecimiento, aunque con marcadas diferencias en su magnitud. Según la Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción, las dos primeras subramas crecieron en el ejercicio 2000 por encima del 8 por 100 (8,5 y 8,8, respectivamente), con lo que la rama de edificación en su conjunto aumentó un 8,6 por 100, 7,5 puntos porcentuales por encima del crecimiento registrado por la obra civil (1,1 por 100).

Desde una perspectiva trimestral, se observa que a lo largo de 2000 la edificación residencial manifestó una sustancial desaceleración en sus tasas de crecimiento. El endurecimiento de las condiciones crediticias y el menor ritmo en la creación de empleo, junto a los posibles efectos que la mayor inflación pudiera haber tenido sobre la renta real de los hogares, habrían explicado esta amortiguación en el crecimiento de la edificación residencial, que pasó de aumentar a un ritmo de 12,4 por 100 en el primer trimestre de 2000 a un 4,7 por 100 en el último. Aun así, de acuerdo con estimaciones de la asociación de empresas constructoras de ámbito nacional (SEOPAN), se volvió a alcanzar un récord histórico en el número de viviendas iniciadas, superando las 530.000; esto es, un 5 por 100 por encima de las iniciadas en 1999[27].

Respecto a la obra civil, la tasa de crecimiento para el conjunto del año (1,1 por 100) registró una aceleración trimestral, pasando de valores negativos en el primer trimestre a un crecimiento del 6,0 por 100 en el último. El volumen alcanzado por la licitación pública para el conjunto del ejercicio, con un valor de tres mil quinientos millones a finales de 2000, un 24,1 por 100 por encima del valor registrado en 1999, confirmó el dinamismo de las obras públicas[28]. En concreto, la rúbrica de mayor crecimiento fue la de edificación de terminales (613,2 por 100), que dentro de las inversiones en equipamiento social, se centra en la mejora de las infraestructuras de transporte, en especial las ferroviarias. Aunque las licitaciones de carreteras y puertos minoraron su cuantía, todavía representaron un 22,0 por 100 del volumen licitado.

Por Comunidades Autónomas, según las cifras recogidas por SEOPAN, el crecimiento del sector fue positivo en todas y cada

[27] En el epígrafe 2.3 del capítulo III se presenta una visión pormenorizada de la evolución del mercado de la vivienda en el ejercicio 2000.

[28] Según SEOPAN, en el año 2000 la licitación pública expresada en términos reales superó por primera vez la de 1990, ejercicio en el que se alcanzó el máximo histórico.

una de ellas, detectándose crecimientos por encima de la media en Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja.

La elevada actividad constructora promovió avances en otras variables como el Índice de Producción Industrial de Materiales de Construcción de 4,9 por 100, la producción de cemento (6,5 por 100) y el consumo aparente de cemento[29] (11,7 por 100). Las tasas de crecimiento de estas variables fueron inferiores, al igual que sucediera en 1999, respecto a las del año anterior, por lo que se podría hablar de un agotamiento del ciclo alcista de la construcción. Otro indicador relevante para observar la evolución del ciclo de este sector, el índice de costes de la construcción, experimentó, de acuerdo con las cifras ofrecidas por la Confederación Nacional de la Construcción, un aumento del 4,9 por 100, frente al crecimiento del 6,3 por 100 en 1999; este alza se derivó de la subida de los costes energéticos a lo largo del ejercicio, puesto que otros materiales de construcción, concretamente los cerámicos, redujeron sus costes.

Futuro marcado por el Plan de Infraestructuras

La tendencia descrita para la actividad constructora en el ejercicio 2000 confirmaría la ralentización en su crecimiento, con lo que se podría considerar que en 1998 alcanzó su máximo de este ciclo. La evolución en el medio plazo dependerá del desarrollo del Plan de Inversiones en Infraestructuras para el periodo 2000-2007, del resultado de la aprobación de la Ley 3/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas[30], de la elaboración y aprobación de la Ley Marco de gestión y financiación de infraestructuras[31], del desarrollo de las iniciativas comunitarias como la propuesta de Directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y, por supuesto, de la evolución económica general.

3.2.4. **Ligera desaceleración de la actividad terciaria**

El VAB del sector servicios creció en el ejercicio 2000 un 3,6 por 100, frente al 4,0 del año anterior. Esta desaceleración fue gra-

[29] Ventas totales más importaciones menos exportaciones.

[30] Esta Ley fue objeto de Dictamen del CES (Dictamen 5/1998, de 27 de mayo, sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas).

[31] El proyecto de Ley contemplaba una batería de incentivos fiscales y financieros para fomentar la participación del sector privado en la inversión de los pro-

dual a lo largo del ejercicio, reduciéndose la tasa de crecimiento interanual una décima por trimestre. Esta evolución resultó de la conjugación de un menor crecimiento de los servicios de mercado, que crecieron un 4,0 por 100, junto a los servicios de no mercado, que registraron un avance de 2,5 por 100.

Todo ello redundó en una reducción de la contribución del sector terciario al crecimiento del PIB en dos décimas respecto a 1999, a pesar de lo cual continuó siendo el principal contribuyente al crecimiento de la producción española con 2,1 puntos, de los cuales 1,8 puntos fueron aportados por los servicios orientados al mercado y 0,3 puntos por los servicios no destinados a la venta, por lo que el avance en el sector servicios se imputa principalmente a su componente mercantil.

Mayor liberalización en la telefonía fija…

Entre las medidas liberalizadoras aprobadas en junio se incluyó el Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones, que estableció el objetivo de tratar de profundizar en el grado de competencia existente en el mercado español de telecomunicaciones.

En el marco de la telefonía fija, las medidas se concentraron en el segmento local, cuyo desarrollo se considera necesario a la hora de promover la Sociedad del Conocimiento en la economía española.

En este sentido, se estableció la fecha límite de enero de 2001[32] para abrir a la competencia el acceso al bucle local, incluyendo el acceso compartido al bucle local de los operadores dominantes de las redes telefónicas. El objetivo de esta medida es permitir incrementar la competencia en los servicios que se prestan sobre este tramo de la red telefónica.

---

yectos de obras públicas recogidos en el Plan de Infraestructuras 2000-2007, entre otros, la libertad de amortización de los activos vinculados a la concesión de la Infraestructura e incentivos fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles o, incluso, en el Impuesto sobre Sociedades.

[32] Esta apertura del bucle local responde al cumplimiento necesario del Reglamento (CE) 2887/2000, de 18 de diciembre, sobre el acceso al bucle local. La transposición de éste a la normativa española se hizo a través del RD 3456/2000, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red pública.

Antes del 15 de noviembre de 2000, el operador dominante en telefonía fija debería, además, garantizar la selección del operador en las llamadas locales sin necesidad de marcar prefijo.

Respecto a las tarifas aplicadas, con la finalidad de fomentar la utilización de Internet, se estableció, en el Real Decreto-Ley 7/2000, la obligación para el operador dominante de ofrecer una tarifa plana para el acceso a Internet, que en horario reducido ascendió a 16,5 euros al mes. Además, se obligó al operador dominante a ofrecer tarifas mensuales para bonos en horario reducido, que para las llamadas locales ascendieron a 4,2 euros al mes por 600 minutos o a 8,4 euros al mes para las 24 horas del día. Finalmente, respecto al marco tarifario, se aprobó un nuevo marco regulatorio en el que se establecieron los precios máximos, en función de un modelo de límites de máximos de precios anuales, tanto para los servicios prestados por el operador dominante en telefonía fija como para las líneas susceptibles de arrendamiento.

… y también en telefonía móvil

Respecto a la telefonía móvil, en julio de 2000, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) declaró dominante en el mercado de servicios de interconexión también al segundo operador de telefonía móvil. Los dos operadores dominantes, tanto en telefonía móvil como en interconexión, deberían, entre otras obligaciones especificadas por la CMT, ofrecer acceso indirecto para las llamadas internacionales a partir del 1 de diciembre de 2000.

Asimismo, se concedieron por concurso cuatro licencias de UMTS[33] a Movistar, Airtel, Amena y Xfera[34], obligados a dar cobertura en ciudades de más de 250 mil habitantes[35] antes del 1 de

[33] Universal Mobile Telecommunications Systems.

[34] Orden del Ministerio de Fomento, de 10 de marzo de 2000, según la cual se otorgan cuatro licencias individuales de tipo B2 para comunicaciones UMTS-IMT2000 (International Mobile Telecommunications 2000) a: Telefónica Móviles de España S.A., Airtel Móviles, S.A., Retevisión Móvil, S.A. y el consorcio Xfera Móviles S.A.

[35] En el epígrafe 2.7 del capítulo III se ofrece una descripción del proceso de adjudicación así como de la polémica suscitada por la tasa impuesta para el uso del espectro radioeléctrico, sobre la que el CES emitió su opinión en el Dictamen 5/2000, sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

agosto de 2001 (retrasado, a principios de 2001, hasta junio de 2002). Además, fundamentándose en las conclusiones del informe sobre la competencia en la telefonía móvil[36], se analizaron otras propuestas regulatorias, como la de otorgar dos licencias más en GSM[37] y dar entrada a operadores de acceso indirecto y sin acceso a espacio radioeléctrico; a principios de 2001 se avanzó en el desarrollo de esta última propuesta.

Por otra parte, el 8 de octubre de 2000 entró en vigor la obligación de «portabilidad numérica»[38]. De esta manera, la normativa española se adelantó a las exigencias comunitarias, que habían dado de plazo hasta diciembre de 2000.

Principales efectos de la liberalización de las telecomunicaciones

Finalmente, respecto a los resultados concretos[39] de estos avances en la liberalización de las telecomunicaciones, que son descritos con detalle en el epígrafe 2.6 del capítulo III, dedicado a la Sociedad de la Información, se puede afirmar que esta liberalización promovió una reducción notable de las tarifas telefónicas entre 1996 y 2000, destacando la reducción de las tarifas para las llamadas locales. Además se destaca la penetración de los móviles en España, que llegó a superar los 24 millones de usuarios en diciembre de 2000, en torno al 60 por 100 de la población.

Asimismo, se observó la influencia positiva en términos de usuario de Internet que tuvo la introducción de la tarifa plana y los bonos; en febrero de 2001 se alcanzó la cifra de 6,9 millones usuarios de Internet, frente a algo más de tres millones y medio de usuarios en febrero de 2000. Las consecuencias sobre el comercio electrónico español de esta mayor accesibilidad de la población a Internet se manifestaron en un volumen de negocios de 34.000 millones de pesetas para el conjunto del ejercicio 2000.

---

[36] Ministerio de Ciencia y Tecnología. *Comisión de Mercado y Telecomunicaciones*, enero 2001.

[37] Global System for Mobile Communications.

[38] La «portabilidad numérica» permite cambiar de operador manteniendo el mismo número de teléfono.

[39] Elaborado a partir de Ministerio de Ciencia y Tecnología, *Informe sobre la liberalización de las Telecomunicaciones para el desarrollo de la Sociedad de la Información,* 15 de diciembre de 2000.

Mejoras en la calidad del turismo

A pesar de la moderación en el crecimiento del sector turístico, que registró un avance del 3,2 por 100 en 2000, frente al 7,8 por 100 de 1999, se contabilizó un nivel récord en entrada de turistas, que alcanzó los 48,3 millones de visitantes.

En el ejercicio 2000 se lograron, además, mejoras en determinados aspectos que se han intentado promover desde finales de la década de los ochenta, cuando descendió la calidad del producto turístico español y se deterioró la imagen de los destinos españoles, y que fundamentalmente tratan de desvincular el turismo español del término acuñado como «sol y playa».

Se observó durante el ejercicio una mayor desestacionalización de las visitas de turistas a favor de los meses de junio y septiembre, con crecimientos de 7,7 y 10,5 por 100, y en detrimento de julio y agosto, que observaron descensos en las visitas de turistas respecto a los registros de 1999 (–3,9 y –4,3 por 100, respectivamente).

Asimismo, surgió interés por zonas diferentes de Baleares y Canarias (que, no obstante, continuaron repartiéndose el 43 por 100 del total de visitas turísticas), entre las que destaca Madrid, con un crecimiento del 24,3 por 100[40].

Los ingresos por turismo aumentaron un 5,0 por 100 en términos reales[41] (un 10,4 por 100 en términos monetarios), 1,8 puntos por encima del crecimiento del número de turistas, con lo que se podría afirmar que aumentó el ingreso por turista, en línea con la tendencia de los últimos tres años.

Finalmente, en lo relativo al turismo interior, adquiere importancia el denominado «turismo rural», que para su desarrollo futuro requerirá promover las tecnologías de la información en el mundo rural, tal y como se expresa, más adelante, en el capítulo III.

[40] Véase epígrafe 4.2 de este capítulo.

[41] Resultado de descontar del incremento de los ingresos por turismo el aumento de los precios experimentado por la rúbrica de hostelería y turismo del IPC (4,9).

3.3. Elevado crecimiento de todas las regiones españolas

Tomando como referencia las estimaciones de Hispalink[42], que sitúan el crecimiento medio de la economía española para el ejercicio 2000 en 4,0 por 100, nueve regiones españolas crecieron por encima de la media nacional.

Frente a otros ejercicios, en 2000, las regiones que más crecieron lo hicieron con independencia del eje en el que están integradas. De este modo, Galicia lideró el crecimiento regional con una tasa de crecimiento del VAB de 4,5 por 100, seguida por las dos Castillas y la Comunidad Valenciana, que avanzaron a una tasa del 4,3 por 100 (gráfico I-5). Todas las Comunidades Autónomas crecieron por encima de un valor mínimo nada despreciable del 3,2 por 100 registrado por el País Vasco. Por debajo del crecimiento medio quedaron igualmente Asturias, 3,4 por 100, y La Rioja, 3,7 por 100, entre otras.

Especialización productiva y Comunidades Autónomas

En línea con la trayectoria del VAB nacional, el sector industrial y la construcción fueron los motores fundamentales del crecimiento en todas y cada una de las Comunidades Autónomas. De hecho, el diferente peso de los sectores en cada región explica la disparidad mostrada por las cifras de crecimiento. A grandes rasgos se observa cómo las regiones de Galicia, Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha se beneficiaron de su especialización productiva en la rama del subsector energético, que, como se comentó anteriormente, fue la de mayor crecimiento durante el ejercicio 2000. Asimismo, el sector primario marcó grandes diferencias en el crecimiento autonómico puesto que favoreció al de las dos Castillas, Murcia y Extremadura, pero en cambio actuó en detrimento del crecimiento del País Vasco y Baleares.

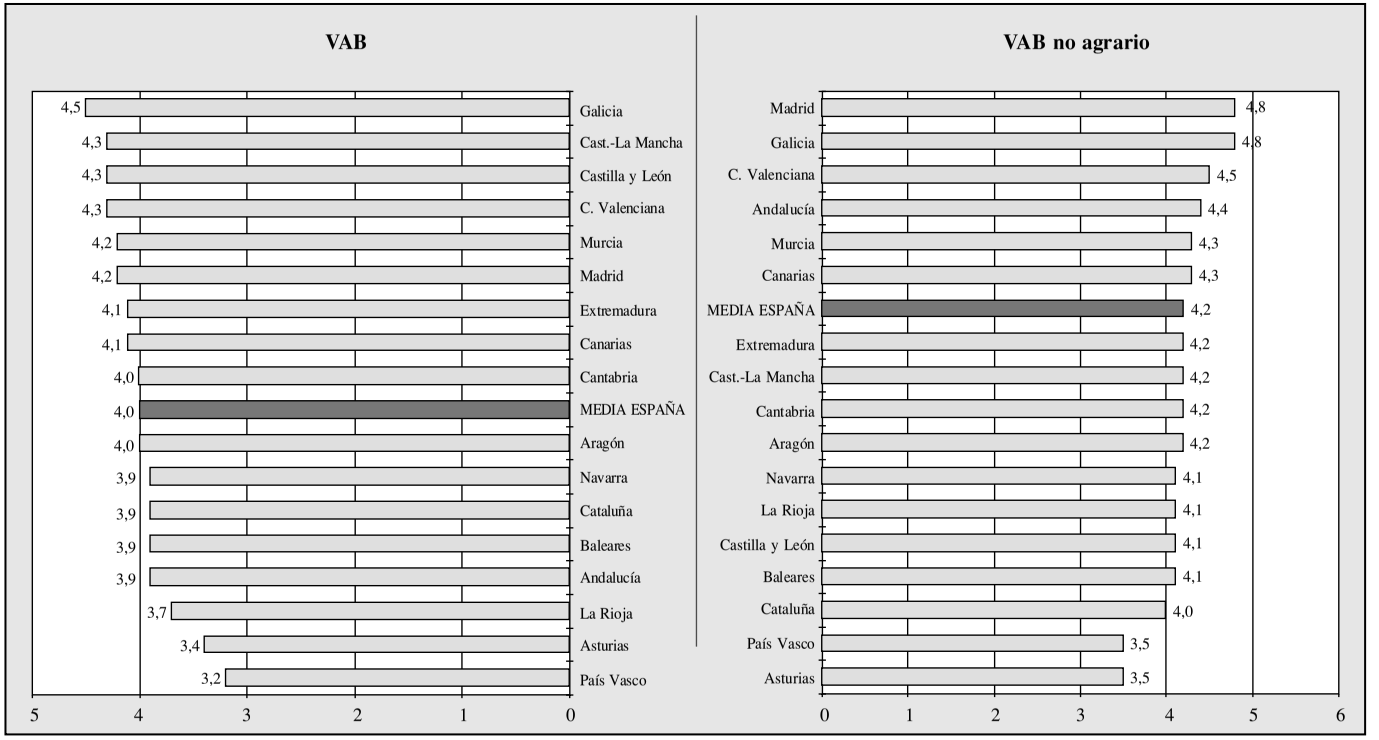
Descontando la aportación del sector primario al crecimiento de las diferentes regiones, dada su característica volatilidad (gráfico I-5), la evolución del VAB no agrario identifica a Galicia y Madrid como las Comunidades Autónomas de mayor crecimiento durante el ejercicio (4,8 por 100), seguidas de la Comunidad Valenciana (4,5). En el otro extremo se encuentran Asturias y el País Vasco, con un crecimiento del 3,5 por 100, frente al 4,2 por 100 de crecimiento del VAB no agrario para el conjunto de la economía.

[42] El proyecto Hispalink, cuyas estimaciones se elaboran a partir de la información de la Contabilidad Regional de España, utiliza las mismas predicciones iniciales para el conjunto de la economía española y coordina las predicciones regionales a través de un modelo de congruencia.

GRÁFICO I-5

CRECIMIENTO DEL VAB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

(Tasas de crecimiento)



Fuente: Hispalink, *Situación actual y perspectivas de las regiones de España,* num. 11, enero 2001.

Por último, cabe abordar brevemente, ya que es objeto de un análisis detallado en el capítulo II, los grandes rasgos de la evolución del empleo por Comunidades Autónomas, que ofrecerán las claves para conocer la productividad aparente del factor trabajo por Comunidad Autónoma.

Algunas regiones, como Cantabria, Extremadura o Navarra, mostraron un mejor aprovechamiento de los notables ritmos de crecimiento a la hora de crear empleo, de modo que la tasa de crecimiento de la ocupación en estas regiones alcanzó 6,7, 6,5 y 6,3 por 100 respectivamente (cuadro I-9). Los peores resultados en térmi-

CUADRO I-9
ACTIVIDAD, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000
(Tasas medias de variación interanual)

Comunidades Autónomas	VAB	Empleo*	Productividad
Andalucía	3,9	3,9	0,0
Aragón	4,0	2,9	1,1
Asturias	3,4	2,1	1,3
Baleares	3,9	3,9	0,0
Canarias	4,1	3,6	0,5
Cantabria	4,0	6,7	–2,7
Castilla-La Mancha	4,3	2,0	2,3
Castilla y León	4,3	1,1	3,2
Cataluña	3,9	2,8	1,1
C. Valenciana	4,3	6,0	–1,7
Extremadura	4,1	6,5	–2,4
Galicia	4,5	3,8	0,8
Madrid	4,2	3,8	0,4
Murcia	4,2	3,5	0,7
Navarra	3,9	6,3	–2,4
País Vasco	3,2	0,8	2,4
La Rioja	3,7	0,4	3,3
Total	**4,0**	**3,5**	**0,5**

* Las cifras de empleo estuvieron afectadas por la actualización del seccionado realizada en el primer trimestre de 2000. La serie utilizada es la que descuenta el efecto de este cambio, ofrecida por el INE.

Fuentes: INE, *Encuesta de Población Activa* e Hispalink, *Situación actual y perspectivas de las regiones de España*, num. 11, enero 2001.

nos de creación de empleo fueron los ofrecidos por La Rioja, País Vasco y Castilla y León, que con 0,4, 0,8 y 1,1 por 100 quedaron muy por debajo del ritmo medio de creación de empleo para el conjunto de la economía.

3.3.1. **Actuaciones estructurales comunitarias a favor de las regiones españolas**

Nuevo Marco Comunitario de Apoyo para España

En octubre de 2000, la Comisión Europea aprobó el Marco Comunitario de Apoyo (MCA) para las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones Objetivo n.º 1[43] de España. El MCA, que ha respetado las líneas generales del Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, dictaminado por el CES[44] un año antes, define las estrategias y prioridades de las acciones estructurales a desarrollar en estas regiones; establece objetivos específicos, así como el grado de participación de los diferentes fondos (FEDER, FSE o FEOGA-Orientación) y de los demás recursos financieros. Para lograr los objetivos finales propuestos, el MCA asigna alrededor de cuarenta mil millones de euros de fondos estrictamente europeos que, junto a la cofinanciación de las autoridades españolas, supondrá la movilización de cerca de ochenta y cuatro mil millones de euros a favor del desarrollo de estas regiones.

El MCA presenta la novedad, frente al Plan de Desarrollo Regional, de ofrecer un breve balance del periodo de programación anterior (1994-1999). Tal y como ya había expresado el CES en su anterior Memoria[45], el MCA confirma en dicho ba-

[43] En el Reg. (CE) 1260/1999, de 21 de junio de 1999, se dispone que serán regiones del Objetivo n.º 1 las correspondientes al nivel II de la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas (NUTS 2) cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita, medido en estándar de poder adquisitivo y calculado a partir de los datos comunitarios de los tres últimos años, sea inferior al 75 por 100 de la media comunitaria. En España son regiones Objetivo n.º 1 para el periodo 2000-2006 las siguientes: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura, Murcia y Ceuta y Melilla. Cantabria, que deja de ser región Objetivo n.º 1 en el nuevo periodo, se beneficiará de ayudas transitorias.

[44] Dictamen del CES 14/1999, de 13 de octubre, sobre el *Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 para las regiones españolas incluidas en el objetivo n.º 1 de los Fondos Estructurales Europeos*.

[45] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999,* págs. 60 y ss.

lance la existencia de un estancamiento en el proceso de convergencia en renta per cápita de las regiones Objetivo n.º 1 con el resto de las regiones españolas. No obstante, en la medida en que las intervenciones aseguran, en general, una mejor dotación de factores estructurales serían de esperar avances en el proceso de convergencia en términos de renta per cápita en el largo plazo.

En consecuencia, resultaría relevante analizar la convergencia de estas regiones en lo relativo a la dotación de factores estructurales que actúan sobre la competitividad. El MCA, en el apartado dedicado al análisis de la convergencia en los factores de competitividad regional, afirma que, en general, los indicadores socioeconómicos revelan que durante el periodo 1994-1999 existió una clara aproximación en la dotación de los factores claves para el desarrollo. De hecho, las regiones Objetivo n.º 1 manifestaron una mayor convergencia en los ámbitos relativos a la mejora de la articulación del territorio, la adecuación del entorno empresarial y la situación medioambiental. Además de estos avances, el MCA destaca igualmente el proceso de convergencia en la estructura sectorial en el que están inmersas un considerable número de regiones Objetivo n.º 1.

Otros ámbitos, aún habiendo presentado una evolución positiva, no se desarrollaron lo suficiente como para garantizar la convergencia de las regiones Objetivo n.º 1. En concreto, de acuerdo con el MCA, estas regiones permanecen rezagadas en aspectos relacionados con la innovación y el desarrollo tecnológico, el grado de internacionalización de las actividades y las empresas, la igualdad de oportunidades entre géneros en el mercado de trabajo y la intermodalidad en el sistema de transporte.

Objetivo n.º 2: fomento de la reconversión

Respecto a las intervenciones comunitarias a favor de zonas distintas a las regiones Objetivo n.º 1, durante el ejercicio 2000 el CES acogió favorablemente[46] el *Plan 2000-2006 para las zonas españolas incluidas en el Objetivo n.º 2 de los Fondos Estructurales Europeos*. El Plan tiene como finalidad respaldar la reconversión económica y social de las zonas españolas con deficiencias estruc-

[46] Dictamen del CES 3/2000, de 21 de junio, sobre el *Plan 2000-2006 para las zonas españolas incluidas en el Objetivo n.º 2 de los Fondos Estructurales Europeos.*

turales de alguno de los cuatro tipos siguientes: industriales, rurales, urbanas o dependientes de la pesca.

El nuevo Objetivo n.º 2[47] integra, respecto al periodo de programación 1994-1999, el antiguo Objetivo n.º 2, dedicado a la reconversión de las regiones y zonas industriales en declive y el 5b, orientado al desarrollo de las zonas rurales vulnerables. La Comisión estableció por Decisión de 14 de marzo de 2000 la lista de zonas españolas correspondientes al Objetivo n.º 2, las cuales pertenecen a las Comunidades Autónomas de Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, y afecta a un 22,2 por 100 de la población española, frente al 24,6 por 100 del periodo 1994-1999; las zonas excluidas en el nuevo periodo percibirán una ayuda transitoria decreciente hasta el año 2005. Concretamente, el nuevo Plan afecta al 83,2 por 100 de la población de Aragón, al 37,1 por 100 en Baleares, al 65,2 por 100 en Cataluña, al 24,6 por 100 en Madrid, al 52,7 por 100 en Navarra, al 96,0 por 100 en el País Vasco y al 52,2 por 100 en La Rioja.

La estrategia presentada plantea los siguientes seis objetivos intermedios o ejes prioritarios de actuación: 1) mejora de la competitividad, desarrollo y diversificación del tejido productivo y creación de empleo; 2) mejora del medio ambiente, del entorno natural y de los recursos hídricos; 3) impulso de la Sociedad del Conocimiento, es decir, I+D, innovación y sociedad de la información; 4) desarrollo de las redes de comunicaciones y energía; 5) impulso al desarrollo local y urbano, y 6) asistencia técnica. Para desarrollar estos ejes de actuación, el Plan establece un esfuerzo financiero global de 5.606,1 millones de euros, de los cuales un 47,2 corresponde a la financiación comunitaria (FEDER y FSE).

3.3.2. **Las regiones españolas en el marco de una Unión Europea ampliada**

Como se acaba de comentar, el ejercicio 2000 supuso el inicio de un nuevo periodo de programación de las acciones estructurales comunitarias, eje fundamental de la política regional de la Unión

[47] Artículo 4 del Reg. (CE) 1260/1999, de 21 de junio, relativo a las Disposiciones Generales sobre los Fondos Estructurales.

Europea. Este hecho otorga un interés mayor a la publicación tanto del *Sexto Informe Periódico sobre la Situación y Evolución de las Regiones de la Unión Europea* como del *Segundo Informe sobre la Cohesión Económica y Social*. Ambos documentos de la Comisión Europea presentan una recapitulación sobre los avances conseguidos en el desarrollo regional.

Balance europeo de la convergencia regional

El *Sexto Informe* confirma los avances que se han producido en la convergencia regional durante la última década en el ámbito comunitario. El PIB per cápita de las diez regiones más pobres pasó de representar el 41,0 por 100 de la media de la Unión Europea al 50,0 por 100 y ello a pesar de que durante dicha década se produjo la adhesión de nuevos países miembros que elevaron la media comunitaria. Sin embargo, desde la perspectiva española, pocas regiones avanzaron en su posición relativa; de hecho, tras diez años de actuaciones estructurales, todavía Extremadura aparece entre las 10 regiones más pobres de la Unión, aunque su PIB per cápita pasó del 44,0 por 100 de la media comunitaria en 1986 al 55,0 por 100 en 1997.

Menores avances se produjeron en la reducción de la tasa de paro. En el momento de cierre del *Sexto Informe*, las estadísticas revelaban, incluso, un deterioro de la convergencia en este ámbito. En 1987, nueve de las diez regiones con más desempleo en Europa eran españolas, y de media presentaban una tasa de paro del 23,9 por 100. Aunque diez años más tarde, en 1997, sólo Andalucía, Extremadura y Ceuta y Melilla se encontraban dentro de este grupo, su situación se había deteriorado; de hecho la tasa de paro media de las diez regiones con más desempleo ascendió a 28,1 por 100. En 1999, de acuerdo con las cifras recogidas en el *Segundo Informe sobre la Cohesión Económica y Social*, tampoco varió la posición relativa de estos tres territorios españoles, con lo que seguirían perteneciendo al grupo de las diez regiones con mayores niveles de paro, aunque sus tasas de paro descendieron respecto a los valores de 1987.

La ampliación afectará a la cohesión

El *Segundo Informe sobre la Cohesión,* además de ofrecer el balance obligatorio[48] de la política de cohesión desarrollada a través de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, plantea por primera vez, de manera formal, los posibles cambios que la política de cohesión experimentará tras la ampliación de la Unión Europea.

[48] Tratado de la Unión Europea artículo 130 B.

El Informe considera que el proceso de adhesión puede originar una serie de impactos tanto sobre los países candidatos como sobre los actuales Estados miembros. Sin lugar a dudas, la adhesión de los países de Europa del Este ampliará las diferencias existentes en el seno de la Unión Europea tanto en aspectos sociales como económicos, y estas diferencias serán aún más relevantes en el ámbito interterritorial.

En la Unión Europea actual, la relación entre la región más rica y la más pobre es de 5,8, mientras que será superior a 10 en una Unión ampliada a 27 miembros. Cerca de la tercera parte de la población vivirá en países denominados «de cohesión» (PIB por habitante inferior al 90 por 100 de la media comunitaria, en 2000, Grecia, España y Portugal), frente a la sexta parte de la Unión de los Quince. La renta media per cápita del 10,0 por 100 más pobre de la población representará solamente el 31,0 por 100 de la media comunitaria, frente al 61,0 por 100 de la Europa de los Quince en 2000.

La estrechez del presupuesto comunitario y las reticencias que parecen mostrar algunos Estados miembros a su incremento dificultará el reparto de los fondos con fines estructurales en una Unión Europea ampliada. Con los criterios vigentes de la política de desarrollo regional comunitaria, y considerando además la media del PIB per cápita de los Quince, la práctica totalidad de las regiones[49] de los países que esperan la adhesión serían elegibles para beneficiarse de los Fondos Estructurales en virtud del *Objetivo n.º 1*. Pero, además, la adhesión de los nuevos países reducirá el PIB per cápita medio comunitario, circunstancia que situaría algunas de las regiones españolas, consideradas hasta ahora de *Objetivo n.º 1,* fuera del margen de elegibilidad.

Potencialidades de los países candidatos

Resulta coherente que, con el ánimo de fomentar la cohesión social en la Comunidad Europea, las regiones menos adelantadas de una Unión Europea de posiblemente veintisiete Estados miembros se beneficien de las acciones estructurales comunitarias, en aras de asegurar una dotación de infraestructuras básicas y/o de

[49] De acuerdo con las cifras ofrecidas por el *Segundo Informe sobre la Cohesión,* solamente dos regiones, *Praha* en la República Checa y *Bratislavský Kraj* en Eslovaquia presentan PIB per cápita por encima del 75 por 100 del PIB per cápita medio de la UE-15.

fomentar la adaptación de sus economías a una economía de mercado moderna. No obstante, las regiones de los países candidatos presentan una serie de potencialidades de desarrollo que las sitúa en un mejor punto de partida frente a las regiones españolas. Esta circunstancia pondría de manifiesto la necesidad de asegurar que la concentración del esfuerzo en los futuros nuevos territorios se acompañe de una continuidad en determinadas intervenciones comunitarias a favor de las regiones más atrasadas de los Quince.

Sin tener en cuenta la ventaja derivada de la mayor cercanía geográfica al eje principal de desarrollo de la Unión Europea, concretamente a Alemania, existen, además, determinados aspectos relacionados con el desarrollo del capital humano en los que las regiones de los países candidatos presentan una clara ventaja frente a las regiones españolas. Las cifras ofrecidas por el *Segundo Informe sobre la Cohesión* permiten identificar dos ámbitos en los que la situación de las regiones españolas es inferior a la situación de las regiones de los países de adhesión: el empleo femenino y los logros educativos de la población en edad de trabajar[50].

Las tasas de desempleo femenino en Ceuta y Melilla (38,0), Andalucía (37,5) y Extremadura (37,3) son las mayores tanto en la actual Unión Europea, superando incluso las tasas de paro femenino de los Departamentos de Ultramar franceses (36,3) o la de Sicilia (36,2), como en una Unión Europea ampliada. Además, los futuros socios comunitarios presentan, en general, tasas de empleo femenino que superan el 50 por 100 frente al 37,6 por 100 de España.

Más llamativo resulta la peor situación relativa de España en lo referente al nivel medio de educación de la población en edad de trabajar. La situación de las regiones españolas es bastante preocupante, ya que sólo supera en logros educativos a algunas regiones de Portugal. Por término medio, los países candidatos presentan en este ámbito una situación no sólo mejor que la española, sino también que la de la media comunitaria.

[50] Concretamente, el *Segundo Informe* expone los logros educativos de la población con edades comprendidas entre los 25 y los 59 años.

4. TRAYECTORIAS DIVERGENTES DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA

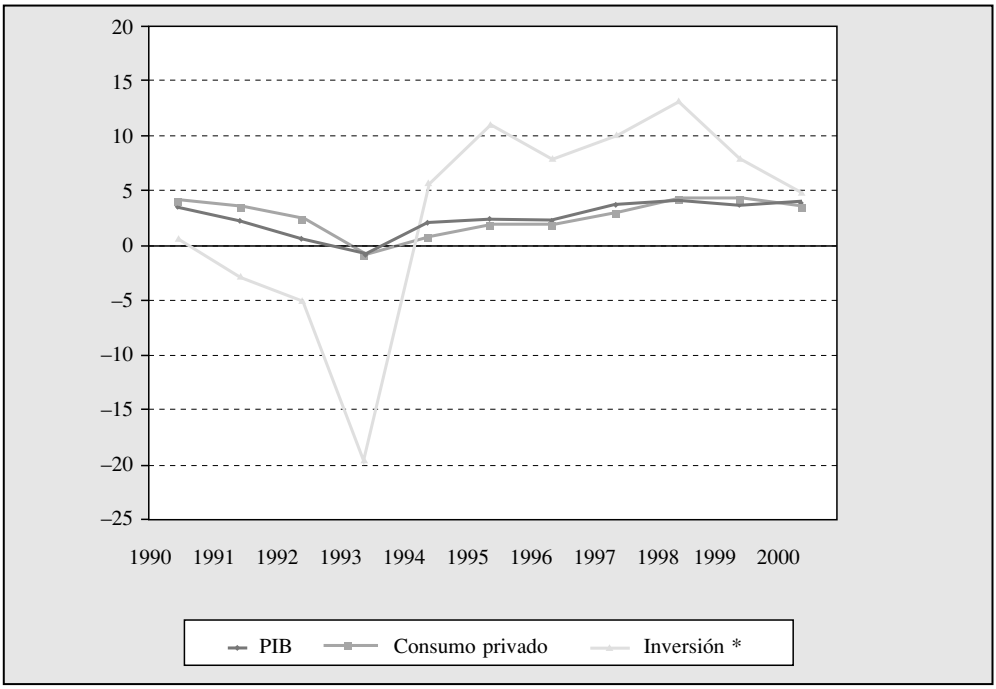
El crecimiento del PIB desde la perspectiva de la demanda se debió al dinamismo de la interna, dado que la externa tuvo una contribución prácticamente nula. Sin embargo, el sector exterior experimentó una evolución más expansiva de lo que cabía esperar, mientras que la demanda interna alcanzó un crecimiento menor de lo previsto. La evolución a lo largo del año registró trayectorias divergentes de ambos agregados. La demanda interna fue perdiendo impulso, afectando dicha desaceleración tanto al consumo como a la inversión, lo que se tradujo en un menor crecimiento de las importaciones que, junto con la continuidad del fuerte ritmo de crecimiento de las exportaciones, como consecuencia principalmente del mencionado auge del comercio mundial, provocó una notable mejoría del saldo exterior en términos reales, aunque no en términos nominales.

4.1. La demanda interna pierde impulso

Según la Contabilidad Nacional Trimestral, la demanda interna, que contribuyó al crecimiento del Producto Interior Bruto con 4,2 puntos porcentuales —una aportación ciertamente menor a los 5,5 puntos de 1999—, mantuvo una tendencia constante a la desaceleración a lo largo del año 2000. El aumento interanual de su aportación al PIB, en tendencia cíclica, comenzó siendo del 5,1 por 100 en el primer trimestre, para reducirse al 4,5, al 3,8 y al 3,3 por 100 en los trimestres sucesivos.

Este perfil de progresiva ralentización es común tanto al consumo, que creció seis décimas menos que el año anterior, un 3,7 por 100, como a la inversión, que aumenta un 5,9 por 100, frente a un crecimiento del 8,9 por 100 en 1999. Todos los componentes, tanto de la demanda de inversión como de consumo, comparten esta tendencia a la desaceleración. El componente del gasto interior que destacó por su mayor crecimiento interanual fue la inversión en construcción, que aumentó el 6,4 por 100. Por el contrario, los capítulos de gasto menos dinámicos fueron el consumo de las Administraciones Públicas, que creció un 2,6 por 100, y el consumo de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) que tan sólo se incrementó un 0,7 por 100.

GRÁFICO I-6
CONSUMO, INVERSIÓN Y PIB, 1990-2000
(Tasas de variación interanual)



* Formación bruta de capital fijo en bienes de equipo.
Fuente: INE, *Contabilidad Nacional Trimestral*.

4.1.1. **El consumo privado frenó su ritmo de crecimiento**

En términos de Contabilidad Nacional Trimestral, el consumo final de los hogares creció el año 2000 un 4,0 por 100, siete décimas menos que en 1999. Por su parte, la demanda de consumo de las ISFLSH creció tan sólo un 0,7 por 100, lo que supone 3,2 puntos menos que el año anterior. En su conjunto, el consumo privado, que representa el 58,5 por 100 de la demanda interna, creció un 4,0 por 100 y frenó notablemente su crecimiento respecto al año 1999, casi un punto porcentual.

Menor renta disponible

Parece pues, que, a lo largo del año fueron moderando su influencia los factores que en años pasados alentaron el consumo. La causa principal de moderación del consumo de las familias en 2000

fue la desaceleración del crecimiento de la renta disponible. En 1999 la reducción de la presión fiscal directa y la evolución decreciente de los tipos de interés tuvieron efectos muy positivos en la renta disponible de los hogares. En 2000, en cambio, la renta de las familias se vio afectada negativamente por un menor crecimiento de la renta salarial real y un saldo de las rentas de la propiedad progresivamente desfavorable debido al aumento de los pagos por intereses de los préstamos hipotecarios y los créditos al consumo. Además de la menor expansión de la renta disponible, se produjo una disminución del efecto riqueza sobre el consumo como consecuencia de la volatilidad de los valores mobiliarios.

A pesar de todo ello y de la moderación experimentada en el crecimiento del empleo, el año 2000 estuvo marcado por la incertidumbre en relación con las expectativas y el comportamiento de los consumidores, y los indicadores del consumo mostraron un comportamiento desigual.

Según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, el gasto total de los hogares ascendió a 20,3 billones de pesetas constantes, lo que supone un incremento anual del 6,1 por 100, más de tres puntos superior al de 1999. El gasto medio por hogar moderó su crecimiento en 2000, pero presenta en el conjunto del año una tasa de crecimiento del 3,7 por 100, más de tres puntos superior a la de 1999.

Por su parte, el Indicador de Disponibilidades Interiores de Manufacturas de Consumo, que se calcula en función de una ponderación del Índice de Producción Industrial y del comercio exterior en términos reales, sufrió retrocesos significativos en el último trimestre del año, y se mantuvo estancado en los niveles de crecimiento de 1999. La pérdida de pulso del consumo familiar se reflejó especialmente en las compras de automóviles, probablemente por la saturación de la demanda de este tipo de bienes. Así, las matriculaciones de turismos y de vehículos todo terreno amortiguaron a lo largo del año su ritmo de crecimiento, para alcanzar en el último trimestre tasas negativas del 14,7 y el 6,2 por 100, respectivamente. En el conjunto de 2000, la matriculación de turismos presenta una variación ligeramente negativa respecto a 1999, año en que se produjo un aumento del 18 por 100 y un máximo histórico en la cifra absoluta de matriculaciones. El saldo del año fue más negativo

para la matriculación de todo terrenos, que retrocedió el 6,2 por 100, frente a un aumento del 30, 9 por 100 en 1999.

Por otro lado, los índices cualitativos que elabora la Comisión Europea reflejaron una cierta cautela de los consumidores respecto al futuro, cuando no pesimismo, especialmente en los últimos meses del año. El Indicador de Confianza del Consumidor[51] aumentó durante el primer trimestre, pero se redujo paulatinamente desde entonces y muy notablemente en los últimos tres meses, especialmente en relación con las expectativas de realizar compras de consumo duradero. Sin embargo, el dato medio del indicador refleja un valor positivo de siete puntos, sólo un punto menos que en 1999. Algo parecido ocurrió, con el Indicador de Confianza del Comercio Minorista, que en media anual mantuvo la misma puntuación que el año anterior (+3).

Nueva reducción de la tasa de ahorro de las familias

Las dudas en relación con la evolución del consumo privado pueden explicarse, en parte, por la tendencia, que parece confirmarse, a la reducción de la tasa de ahorro de las familias. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2000 el consumo de los hogares creció en términos corrientes un 7,8 por 100, ocho décimas más que la renta bruta disponible. Esto llevó a que la tasa de ahorro —el porcentaje de la renta bruta disponible que no se destina al consumo—, se redujera dos décimas, pasando del 12,1 por 100 en 1999 al 11,9 por 100 en 2000. La explicación de este fenómeno puede tener que ver con la percepción de determinados cambios estructurales por parte de los consumidores. Es posible que las familias confíen en que la austeridad presupuestaria del sector público conduzca a reducciones futuras de la presión fiscal, que la Unión Monetaria Europea tienda a estabilizar los tipos de interés en niveles bajos y que el mantenimiento de la fortaleza económica, en general, favorezca la reducción del nivel de paro y el aumento del empleo. En ese caso, las expectativas de contar con aumentos crecientes de la renta disponible en el futuro explicarían la menor necesidad de ahorro presente de los hogares.

El consumo público cobra cierto impulso

En contraste con el consumo privado, el consumo final de las Administraciones Públicas cobró un notable dinamismo a partir del

[51] El indicador de confianza del consumidor resume las opiniones sobre la situación económica del hogar, la situación económica general del país y la conveniencia de realizar compras importantes.

segundo trimestre de 2000, invirtiéndose la tendencia cíclica a la desaceleración. Según la Contabilidad Nacional Trimestral comenzó creciendo un 2,4 por 100 en el primer trimestre y aumentó su ritmo de crecimiento a lo largo del año para presentar una tasa de crecimiento del 2,9 por 100 en el último trimestre. En el conjunto del año, sin embargo, el aumento del consumo de las Administraciones Públicas fue del 2,6 por 100 en términos constantes, tres décimas menos que el periodo anterior. En términos corrientes, de acuerdo con los datos de ejecución del Presupuesto del Estado, crecieron las transferencias corrientes un 12,1 por 100, y se redujeron todos los demás elementos del agregado, en particular, la remuneración de asalariados, las compras de bienes y servicios y el pago de intereses.

4.1.2. **La inversión se desaceleró**

La inversión continuó siendo el componente de la demanda interna de mayor empuje, aunque a lo largo de 2000 registró incrementos más moderados que en 1999, y la formación bruta de capital fijo terminó el año con una tasa de aumento en tendencia cíclica de tan sólo el 4,4 por 100, frente al 7,7 por 100 del último trimestre de 1999. La variación interanual fue del 5,9 por 100, tres puntos inferior al crecimiento experimentado en el periodo anterior, lo que indica una pérdida considerable del impulso inversor característico de los últimos años. Este menor dinamismo de la inversión fue igualmente intenso en relación con los bienes de equipo y la construcción. Ambas magnitudes registraron tasas de crecimiento tres puntos menores que las del año anterior, al crecer un 5,0 y un 6,4 por 100, respectivamente.

Perfil fuertemente desacelerado de la inversión en bienes de equipo

No obstante, resulta especialmente llamativa la evolución decreciente de la inversión en bienes de equipo, que comenzó creciendo un 8,6 por 100 para terminar el último trimestre con un aumento de tan sólo el 1,4 por 100. Este perfil desacelarado se reflejó asimismo en la evolución del Índice de Clima Industrial, que registró valores positivos, pero muy moderados y decrecientes en los últimos meses del año, para terminar con un valor nulo en diciembre. En particular, el nivel de la cartera de pedidos de bienes de equipo registró valores negativos todos los trimestres. Por su parte, el Indicador de Disponibilidades Interiores de Bienes de Equipo, que se obtiene a partir del Índice de Producción Industrial y del saldo del comercio

exterior, presentó una tasa de crecimiento anual del 2,6 por 100, sensiblemente inferior al 14,0 por 100 de 1999. La contracción del indicador fue especialmente drástica en el último trimestre, en el que alcanzó una tasa negativa del 8,5 por 100.

El perfil de pérdida de dinamismo de la demanda interna no afectó, sin embargo, a la rentabilidad de las empresas, que continuó siendo elevada, según la Central de Balances del Banco de España. En concreto, en el conjunto del año 2000 el Valor Añadido Bruto de las empresas creció un 8,6 por 100 nominal. Esta tasa, no obstante, presenta un cierto sesgo al alza debido a que incluye las cuentas de las empresas dedicadas al refino de petróleo, que incorporaron en sus precios de venta las importantes subidas de los precios del crudo. A lo largo del año se produjo un incremento del 5,2 por 100 en los gastos de personal (debido al efecto combinado de un mayor empleo y un aumento de los costes nominales), y los gastos financieros crecieron un 27,0 por 100 como consecuencia tanto del aumento del recurso a la financiación externa como del mayor coste de la misma por la subida de los tipos de interés. A pesar de este aumento de costes, la actividad productiva creció de tal modo que la ratio de apalancamiento financiero, que mide la diferencia entre la rentabilidad esperada de la inversión y el tipo de interés de los recursos tomados en préstamo, volvió a crecer en el cuarto trimestre respecto al periodo precedente (3,8 por 100 frente al 3,2 por 100 de 1999), lo que refleja la ventajosa situación en que se encuentran las empresas españolas para desarrollar sus proyectos de inversión.

La inversión en construcción mantuvo un constante ritmo de avance

La inversión en construcción presentó una pauta de crecimiento relativamente estable a lo largo del año y cerró el ejercicio con una tasa de aumento del 6,4 por 100. El Indicador de Clima en la Construcción, que es la media aritmética entre el nivel de cartera de pedidos y la tendencia del empleo, registró un valor positivo de 20 puntos en 2000, lo que refleja la evolución positiva del sector, a pesar de que el índice muestra un perfil relativamente bajo en el último semestre del año.

Según la Encuesta de Coyuntura de la Industria de la Construcción, el valor real de la actividad constructora experimentó un crecimiento 6,9 por 100. La inversión en obra civil (construcción de infraestructuras: carreteras, ferocarril o regadíos) pasó a ser el

principal dinamizador de la actividad, en detrimento de la edificación de viviendas que, a pesar del aumento de los tipos hipotecarios y del precio de la vivienda, así como de la menor confianza de los hogares, continuó registrando tasas elevadas de crecimiento.

La evolución del Indicador del Consumo Aparente del Cemento muestra la fortaleza de sector de la construcción, pues, salvo en abril y diciembre, creció todos los meses por encima del 10 por 100 y registró en el conjunto del año un aumento del 11,1 por 100. Los indicadores anticipados, en cambio, presentaron una evolución menos alentadora. Por una parte, los visados de dirección de obras experimentaron una considerable expansión en el primer semestre del año, pero a partir del tercer trimestre registraron subidas mucho menos notables. Por otra parte, la licitación oficial, que comenzó el año con tasas positivas de crecimiento, presentó en el segundo trimestre un descenso de casi un 24,0 por 100, aunque esta tendencia a la desaceleración se fue amortiguando a lo largo del año de tal modo que a partir de octubre volvieron a registrarse incrementos en el indicador.

4.2. Sector exterior: aportación más favorable de lo esperado

Buenos resultados en términos reales

El fuerte desequilibrio que experimentó el sector exterior en términos reales en 1999, reflejado en su negativa aportación en 1,5 puntos al crecimiento del PIB, se ha corregido de manera muy considerable en el año 2000. Una aportación negativa al crecimiento agregado de tan sólo una décima de punto, con un incremento del PIB en términos reales del 4,1 por 100 (cuadro I-10), es un resultado mucho más favorable del que se esperaba cuando en el cuadro macroeconómico del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2000 las previsiones apuntaban hacia un crecimiento de la economía con una menor aportación negativa de la demanda externa, pero cifrada todavía en 0,9 puntos.

Malos resultados en términos nominales

Sin embargo, el rasgo más característico del comportamiento del sector exterior de la economía española en el año 2000 es la gran diferencia de los resultados según se haga una valoración en términos nominales o reales. Los precios de los productos energéticos importados y la apreciación del dólar, la divisa en que se

compran, respecto al euro, tuvieron una influencia decisiva en el deterioro nominal del saldo comercial. Un precio del petróleo por encima de los 27 dólares por barril desde febrero hasta comienzos de diciembre, y que llegó a rozar los 35 dólares en octubre, explica más de tres cuartas partes del aumento del déficit comercial en 2000.

Necesidad de financiación exterior del 2,3 por 100 del PIB

Así, la considerable mejoría en términos reales que experimentó el sector exterior en 2000 no tuvo un reflejo similar en términos nominales sobre la balanza de pagos. Todo lo contrario, la balanza de operaciones corrientes cerró el año con un saldo negativo muy superior al del año anterior, del 3,2 por 100 del PIB frente al 2,1 por 100, mientras que el superávit de la cuenta de capital se redujo en un 19,8 por 100 y supuso el 0,9 por 100 del PIB. Así, el saldo acumulado de las balanzas por cuenta corriente y de capital, que refleja la capacidad o necesidad de financiación frente al exterior, experimentó un fuerte deterioro que se tradujo en un déficit, o necesidad de financiación de la economía española, del 2,3 por 100 del PIB, muy superior al que ya se había registrado en 1999, del 0,9 por 100 del PIB, y que había sido el primero tras cinco años de

CUADRO I-10

APORTACIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y DEL SECTOR EXTERIOR AL CRECIMIENTO DEL PIB, 1987-2000

(Tasa de variación interanual del PIB y aportación de la demanda interna y del sector exterior a su crecimiento en puntos porcentuales)

Años	Demanda interna	Sector exterior	Producto Interior Bruto
1987	8,1	–2,5	5,6
1988	7,2	–2,0	5,2
1989	8,2	–3,4	4,7
1990	5,1	–1,3	3,7
1991	3,0	–0,8	2,3
1992	1,0	–0,4	0,7
1993	–4,4	3,2	–1,2
1994	1,3	0,9	2,2
1995	3,3	–0,6	2,7
1996	1,8	0,5	2,3
1997	3,2	0,6	3,8
1998	5,6	–1,3	4,3
1999	5,5	–1,5	4,0
2000	4,2	–0,1	4,1

Fuente: INE, *Contabilidad Nacional Trimestral de España.*

superávit. Estos resultados podrían significar la reapertura del debate sobre la tradicional restricción externa de la economía española, que se acaba produciendo cuando durante varios años seguidos la inversión supera al ahorro interno, pero, como ya se ha señalado, el deterioro exterior en 2000 se debió en su mayoría a un *shock* externo puntual por el incremento del déficit energético, en un contexto de elevada dependencia energética exterior de la economía española, y no a un exceso de demanda interna. Un hecho que debería llevar a una reflexión en profundidad sobre el necesario ahorro energético.

El deterioro que experimentó el saldo de la balanza por cuenta corriente y de capital tuvo su principal explicación en el fuerte incremento del déficit de la balanza comercial de mercancías, que se incrementó en un 30,3 por 100 respecto al año anterior, aunque con una tendencia a la moderación a lo largo del año (cuadro I-11). Al igual que en 1999, el superávit de las transferencias corrientes también se redujo, en esta ocasión en un 44,5 por 100, mientras que el fuerte déficit de rentas prácticamente se mantuvo igual. La nueva mejoría del superávit de la balanza de servicios, atribuible en exclusiva al saldo positivo del turismo, no pudo compensar los peores resultados de los demás componentes del saldo por cuenta corriente.

Según las primeras estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral, el saldo exterior de bienes y servicios a precios corrientes fue negativo por segundo año consecutivo. La exportación de bienes y servicios aumentó un 17,8 por 100 frente al 7,0 por 100 del año anterior, mientras que las importaciones crecieron un 21,1 por 100 y un 12,4 por 100, en los mismos periodos. Este fuerte crecimiento de ambas variables mostró a lo largo del año un máximo cíclico de las exportaciones en el tercer trimestre y de las importaciones en el segundo. A precios constantes, las exportaciones crecieron más que las importaciones, un 10,8 por 100 frente al 6,6 por 100 del año anterior, mientras que las importaciones lo hicieron a unas tasas del 10,4 por 100 y del 11,9 por 100 en los mismos periodos. La evolución trimestral mostró una desaceleración de las importaciones desde comienzos de 2000, al hilo de la desaceleración de la demanda interna, e igualmente un menor crecimiento de las exportaciones desde los meses centrales del año.

CUADRO I-11
BALANZAS POR CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL, 1999-2000
(Millones de euros)

Conceptos	1999			2000[1]			% Var. Saldo 2000-1999
	Ingresos	Pagos	Saldo	Ingresos	Pagos	Saldo	
Cuenta corriente	178.634,0	190.677,0	–12.042,0	210.107,0	229.346,0	–19.239,0	59,8
Balanza comercial	104.244,0	131.791,0	–27.547,0	124.731,0	160.633,0	–35.902,0	30,3
Servicios	50.190,9	28.600,2	21.590,7	57.091,4	33.109,7	23.981,7	11,1
Turismo	30.481,7	5.181,5	25.300,3	33.655,3	5.962,4	27.692,9	9,5
Otros	19.709,2	23.418,7	–3.709,6	23.436,0	27.147,3	–3.711,3	0,0
Rentas	11.674,7	20.639,5	–8.964,8	15.811,9	24.726,8	–8.914,9	–0,6
Transferencias	12.524,4	9.645,8	2.878,6	12.472,3	10.875,8	1.596,5	–44,5
Cuenta de capital	7.584,0	956,0	6.628,0	6.236,6	922,1	5.314,5	–19,8

(1) Datos de avance para el mes de diciembre de 2000. Para el resto, los datos incorporan revisiones a las cifras provisionales publicadas en meses anteriores.

Fuente: Banco de España.

Fuerte ampliación del déficit comercial

Como ya se ha indicado, la fuerte ampliación del déficit comercial tuvo su origen principal en el mayor aumento de los precios de importación que de los de exportación. Así, los precios de las importaciones crecieron un 12,9 por 100, como consecuencia casi exclusivamente del aumento del precio de las energéticas, que, en pesetas, lo hicieron en un 87,9 por 100. Por su parte, los precios de las exportaciones aumentaron un 6,1 por 100, y si se excluyen las energéticas, lo hicieron un punto y medio menos.

Ligera ganancia en competitividad-precio fuera de la Unión Europea

No obstante, en el año 2000 la competitividad-precio de las exportaciones españolas frente a los países de la OCDE no comunitarios mejoró ligeramente, un 1,0 por 100. Esta mejora se debió a la ganancia de competitividad vía depreciación del tipo de cambio, frente a las principales divisas del área no euro, superior a la pérdida de competitividad vía precios relativos. Aunque ya se recoge más ampliamente en el epígrafe cinco de este mismo capítulo, cabe señalar aquí que la depreciación del tipo de cambio del euro tuvo lugar durante los tres primeros trimestre del año, puesto que en el cuarto fue recuperando posiciones frente a divisas como el dólar estadounidense y el

canadiense, la libra esterlina, el yen japonés y el franco suizo, como consecuencia principalmente de la desaceleración experimentada por la economía estadounidense. En cuanto al empeoramiento en los precios relativos, la ampliación del diferencial de inflación respecto a los principales socios comerciales impidió una mejoría mayor de la competitividad-precio de las exportaciones españolas. Frente a la Unión Monetaria Europea, dado que los tipos de cambio son irrevocablemente fijos, el empeoramiento de la competitividad-precio de las exportaciones españolas fue del 1,4 por 100, achacable en su totalidad al deterioro del diferencial de inflación. Sin embargo, frente a los demás Estados miembros de la Unión Europea, dicha competitividad empeoró en menor medida, un 0,9 por 100, como consecuencia de la ganancia de competitividad vía tipo de cambio, por la depreciación del euro frente a la libra esterlina.

Sobre la posible evolución del sector exterior español en el año 2001, las previsiones macroeconómicas recogidas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2001 y en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2000-2004 cifran la aportación del sector exterior al crecimiento en 0,4 puntos negativos, cuando, según las estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral relativas al cuarto trimestre de 2000, desde el tercero las aportaciones fueron ya positivas en varias décimas. Así, cabe esperar una continuación de la mejoría del saldo exterior en términos reales que compense la esperada continuación del deterioro del crecimiento de la demanda interna, que, también en los dos últimos trimestres de 2000, creció por debajo del 3,9 por 100 previsto inicialmente de media para el año 2001. Para ello será necesario que la desaceleración del aumento de las exportaciones por el esperado menor ritmo de crecimiento del comercio mundial como consecuencia de la crisis de la economía de Estados Unidos pueda verse compensada por un incremento de las exportaciones, tanto por la vía de la continuación del cada vez mayor esfuerzo de internacionalización de las empresas españolas, que ha permitido que en el año 2000 el grado de apertura de la economía española, medida por el porcentaje de la suma de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios sobre el PIB, alcance el 62,2 por 100, como por la vía de la necesaria mejoría de la competitividad en precios anteriormente mencionada.

4.2.1. **Balanza de mercancías: deterioro por la factura energética**

El déficit comercial, en términos nominales de Aduanas, creció considerablemente, un 32,2 por 100 (cuadro I-12), aunque bastante menos de lo que lo hizo en 1999, un 52,5 por 100, observándose a lo largo del año una tendencia a la reducción del mismo al hilo de la mayor desaceleración de las importaciones por la gradual desaceleración de la demanda interna.

Nueva caída de la tasa de cobertura

Las exportaciones registraron un fuerte crecimiento nominal del 19,1 por 100, el más elevado desde 1994 y tras dos años en que la tasa de crecimiento no alcanzó el 7,0 por 100. Por su parte, las importaciones crecieron más, un 22,3 por 100, debido, como ya se ha indicado, al fuerte incremento de su valor, cifra desconocida desde 1987, tras el primer año de adhesión española a las Comunidades Europeas. Como consecuencia, la tasa de cobertura volvió a caer por tercer año consecutivo, en esta ocasión hasta el 74,1 por 100, once puntos menos que en 1997, cuando alcanzó la mayor tasa de cobertura comercial en la historia reciente de la economía española. En términos reales, las exportaciones de mercancías crecieron un 12,2 por 100, casi el doble que en 1999, y al mismo ritmo en que lo hizo el comercio mundial, mientras que las importaciones crecieron un 8,3 por 100, tras tres años de tasas superiores al 10,0 por 100.

CUADRO I-12
BALANZA COMERCIAL, 1994-2000
(En porcentaje y en miles de millones de pesetas)

Conceptos	Miles de millones ptas.	Porcentajes de variación anual						
	2000	94/93	95/94	96/95	97/96	98/97	99/98	00/99
Exportaciones	20.482,0	25,7	17,2	13,2	18,1	6,7	5,6	19,1
Importaciones	27.643,1	21,5	16,3	7,8	16,4	10,4	14,0	22,3
Saldo	–7.161,1	7,7	13,1	–13,5	7,8	31,5	52,5	32,2
Tasa de cobertura*	74,1	—	—	—	—	—	—	—

* Porcentaje de exportaciones sobre importaciones.

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

La estructura del comercio exterior por grandes grupos sectoriales presenta la característica de mantener un elevado dinamismo de las exportaciones industriales, que, tras la considerable disminución del ritmo de crecimiento de 1999, aumentaron a una tasa interanual del 18,6 por 100, frente a un crecimiento considerablemente menor del sector agroalimentario, del 10,3 por 100.

Fuerte impulso de las exportaciones de semimanufacturas

En esta ocasión, el sector de las semimanufacturas fue el que registró el mayor crecimiento nominal, un 22,1 por 100, en especial las de hierro y acero. El sector del automóvil y el de bienes de equipo, cuyo peso sobre el total de las exportaciones es similar al de las semimanufacturas, en torno al 22,0 por 100, crecieron, respectivamente, un 18,9 por 100 y un 17,0 por 100, destacando en el primero de ellos las ventas de automóviles y motos, y en el segundo el equipo de oficina y telecomunicación. Por su parte, el sector de bienes de consumo duradero, cuyo peso en el total de la exportación es de tan sólo el 3,5 por 100, creció un 12,9 por 100, muy lejos del 43,6 por 100 alcanzado en 1999, mientras que las manufacturas de consumo, que representan cada vez una proporción menor del total de las exportaciones, el 10,2 por100, crecieron un 13,2 por 100.

¿Cambio estructural en la exportación española?

El mencionado mayor peso que está adquiriendo el sector industrial frente al primario en la composición de las exportaciones españolas es un signo del cambio estructural que parece estarse produciendo y que se caracteriza primordialmente por un trasvase de recursos desde los sectores exportadores tradicionales, como los bienes de consumo no duradero, el automóvil y su industria auxiliar, hacia nuevos sectores industriales con demanda más dinámica, como el sector químico y la gran mayoría de los sectores de bienes de equipo, que tienden a ser más intensivos en trabajo cualificado y a disponer de una estrategia de diferenciación de productos. Otro factor estructural que puede haber influido en la evolución de la exportación es el fuerte crecimiento de la inversión española en el exterior, lo que no deja de ser otra manifestación de la internacionalización de las empresas.

Las exportaciones fuera de la Unión Europea crecieron más

De la distribución geográfica de las exportaciones en 2000 (cuadro I-13), destaca en primer lugar que las dirigidas fuera de la Unión Europea crecieron más que las que tuvieron por destino la Unión Europea, el principal destino geográfico de las ventas españolas. La razón se halla en el mencionado deterioro del diferencial de

inflación respecto a los demás Estados miembros de la Unión Europea, junto con la depreciación del euro frente al dólar y el fuerte crecimiento que experimentaron las economías estadounidense y asiáticas. Así, las exportaciones a los países no comunitarios crecieron el 26,3 por 100, destacando entre ellas las destinadas a Estados Unidos, un 32,1 por 100 de aumento, y al Sudeste asiático, un 29,5 por 100, como consecuencia de la recuperación registrada en estos países tras la crisis por la que atravesaron de 1997 a 1999. Igualmente, dentro de la exportación extracomunitaria, destaca el incremento de las ventas a China en un 25,9 por 100, aunque siguen suponiendo un reducido peso sobre el total de las exportaciones, un 0,4 por 100. Finalmente, de las exportaciones a Iberoamérica resaltan, dentro del elevado crecimiento medio global del 18,0 por 100, las disparidades entre el crecimiento de las dirigidas a México, un 31,7 por 100, y el estancamiento de las que tuvieron por destino Argentina, un 0,3 por 100 y Brasil, –4,8 por 100. Por su parte, la exportación a la Unión

CUADRO I-13

COMERCIO DE MERCANCIAS DE ESPAÑA CON LA UNIÓN EUROPEA, 1985-2000

(Millones de pesetas)

Años	Importaciones		Exportaciones		Tasa de cobertura	
	Valor	% sobre total	Valor	% sobre total	UE	*Pro memoria* Mundo
1985	1.985.524,5	39,1	2.219.489,4	54,1	111,8	80,8
1986	2.606.513,8	52,7	2.375.409,9	62,4	91,1	76,9
1987	3.481.994,5	57,7	2.768.426,4	66,0	79,5	69,6
1988	4.239.797,0	60,2	3.171.913,6	67,7	74,8	66,6
1989	5.074.274,7	60,4	3.533.506,6	68,8	69,6	61,2
1990	5.602.213,4	62,8	4.028.600,9	71,4	71,9	63,3
1991	6.091.630,5	63,0	4.548.740,0	73,1	74,7	64,4
1992	6.485.726,0	63,6	4.845.862,9	73,4	74,7	64,7
1993	6.307.975,0	62,3	5.348.112,3	69,0	84,8	76,5
1994	7.915.372,0	64,1	6.917.202,6	70,6	87,4	79,3
1995	9.362.529,2	65,4	8.264.560,3	72,3	88,3	79,8
1996	10.226.873,6	66,3	9.238.147,8	71,4	90,3	83,8
1997	11.736.019,0	65,3	10.681.252,0	70,0	91,0	85,0
1998	13.289.830,0	67,0	11.660.857,0	71,6	87,7	82,1
1999	15.294.900,0	67,7	12.431.900,0	72,3	81,3	76,1
2000	17.453.813,0	63,1	14.465.984,0	70,6	82,9	74,1

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Europea creció un 16,4 por 100, en menor medida a la zona euro, un 15,6 por 100, que a la integrada por los países no euro, un 16,8 por 100. Destacaron especialmente los crecimientos de las ventas a Finlandia, un 27,7 por 100, e Irlanda, un 25,6 por 100. Y por lo que respecta a los Estados miembros de mayor peso en las exportaciones españolas, Francia y Alemania, las ventas al primero de ellos volvieron a crecer más, un 18,4 por 100 frente a un 11,5 por 100.

Cataluña y Madrid aumentan su cuota de exportación

Por lo que respecta a la exportación de las distintas Comunidades Autónomas[52] (cuadro I-14), las tasas de crecimiento reflejaron grandes diferencias entre sí, aunque no tanto como las producidas en 1999. Así, el mayor incremento se registró en Galicia, un 41,6 por 100, y el menor en Baleares, un 3,9 por 100. Las exportaciones de esta última región, que sólo suponen el 0,7 por 100 del total, fueron, sin embargo, las que más crecieron en 1999. Como se expresaba y justificaba en la Memoria del CES correspondiente a 1999, en términos absolutos, las Comunidades Autónomas que más exportan siguen siendo, de mayor a menor, Cataluña, Valencia, Madrid, País Vasco y Andalucía, que concentran algo más de dos tercios del total, manteniéndose la tendencia de los últimos años en el sentido de que Cataluña y Madrid aumentan su cuota de participación en el total, mientras que las otras tres Comunidades Autónomas pierden peso al crecer por debajo de la media. Cabe volver a destacar como especialmente significativa la fuerte pérdida de peso de la exportación valenciana, ya que mientras en 1986 suponía el 18,9 por 100 de la exportación española, en 2000 su participación descendió hasta el 12,5 por 100, seis décimas menos que en 1999.

Asia desbanca a Iberoamérica en recepción de créditos FAD

En cuanto a los principales resultados en 2000 de la actividad del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) (cuadro I-15), que es un instrumento de la política de fomento financiero a la exportación, que tiene como fin último contribuir al progreso económico y social de los países en desarrollo, los Presupuestos Generales del Estado para 2000 establecieron la posibilidad de aprobar operaciones por un importe de hasta 80.000 millones de pesetas. El número de operaciones aprobadas fue de 55, por un valor 53.324,5 millones de pesetas, lo que supone un 66,7 por 100 del importe máximo presupuestado

[52] Según el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, el criterio aplicado para la desagregación por Comunidades Autónomas y Provincias es el de provincia de origen. Es decir, se considera la provincia donde la operación ha tenido su origen, no la provincia donde tiene lugar el despacho en aduana de la mercancía o donde se presenta la declaración estadística de las operaciones intracomunitarias.

CUADRO I-14
COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000
(Millones de pesetas)

Comunidades Autónomas	Exportaciones			Importaciones			Saldo
	Valor	% sobre total	2000/99 %	Valor	% sobre total	2000/99 %	
Andalucía	1.639.923	8,0	18,1	1.987.805	7,2	46,3	–347.882
Aragón	832.289	4,1	4,6	835.354	3,0	5,9	–3.065
Asturias	278.058	1,4	28,0	323.347	1,2	27,5	–45.289
Baleares	147.010	0,7	3,9	291.435	1,1	16,7	–144.425
Canarias	145.141	0,7	36,1	624.147	2,3	20,3	–479.006
Cantabria	239.438	1,2	30,6	236.827	0,9	1,6	2.611
Castilla-La Mancha	306.741	1,5	16,1	540.649	2,0	19,7	–233.908
Castilla y León	1.364.234	6,7	10,9	1.389.986	5,0	7,4	–25.752
Cataluña	5.495.792	26,8	20,2	7.875.192	28,5	20,9	–2.379.400
C. Valenciana	2.530.629	12,4	12,5	2.054.565	7,4	18,7	476.064
Extremadura	113.393	0,6	9,2	60.361	0,2	6,0	53.032
Galicia	1.371.676	6,7	41,6	1.468.942	5,3	36,7	–97.266
Madrid	2.282.964	11,1	22,6	6.709.044	24,3	18,5	–4.426.080
Murcia	523.461	2,6	17,7	675.973	2,4	98,2	–152.512
Navarra	848.291	4,1	26,3	637.762	2,3	22,0	210.529
País Vasco	1.908.065	9,3	17,6	1.686.391	6,1	37,3	221.674
Rioja, La	133.550	0,7	4,1	109.461	0,4	19,0	24.089
Total	**20.160.655**	**100,0**	**19,1**	**27.507.241**	**100,0**	**22,3**	**–7.346.586**

Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior, con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

frente al 97,0 por 100 utilizado en 1999. Este descenso en la utilización de los fondos FAD presupuestados se debió a dificultades surgidas en el mes de diciembre en la tramitación de varias aportaciones a Instituciones Financieras Multilaterales (IFIS). De hecho, el límite presupuestado para 2001, inicialmente fijado también en 80.000 millones de pesetas, se ha visto incrementado en 25.000 millones de pesetas, en virtud del Real Decreto Ley 1/2001, para hacer frente a dichos compromisos asumidos en el año 2000.

Por áreas geográficas cabe destacar el gran impulso dado a la realización de proyectos de desarrollo en Asia por empresas españolas. Como consecuencia, Asia resultó ser la primera zona geográfica receptora de fondos FAD, con el 29,9 por 100 del total, desbancando a Iberoamérica, que ocupaba tradicionalmente dicho lugar y que se situó en segundo lugar, con una participación del 22,1 por 100. En tercer lugar se situó Europa (Turquía en su mayoría), con un 11,1 por 100, seguida de África subsahariana, 10,5 por 100, y los países mediterráneos y Oriente Medio, 5,7 por 100 del total.

CUADRO I-15
CRÉDITOS FAD AUTORIZADOS EN 2000

(Por sectores)

Sector	Importe FAD (millones ptas.)	% sobre el total
IFIS*	10.538,001	19,8%
Sanidad	8.818,845	16,5%
Eléctrico	8.620,095	16,2%
Bienes de equipo	7.216,517	13,5%
Transporte	4.215,713	7,9%
Educación	3.720,637	7,0%
Servicios	3.181,858	6,0%
Líneas de crédito	2.583,900	4,8%
Medio ambiente	2.478,757	4,6%
Telecomunicaciones	1.017,290	1,9%
Varios	636,637	1,2%
Infraestructura	296,320	0,6%
Total	**53.324,480**	**100,0%**

(Por países)

Países	Importe FAD (millones ptas.)	% sobre el total
IFIS*	10.538,001	19,8%
Indonesia	7.217,588	13,5%
Turquía	5.049,028	9,5%
Nicaragua	4.689,583	8,8%
China	4.244,208	8,0%
Mozambique	2.969,929	5,6%
Honduras	2.902,610	5,4%
Yemen	2.292,217	4,3%
Kenia	1.758,856	3,3%
Vietnam	1.709,843	3,2%
Rep. Dominicana	1.665,184	3,1%
Malasia	1.556,343	2,9%
Bolivia	1.550,213	2,9%
Bangladesh	1.240,941	2,3%
El Salvador	954,769	1,8%
Uzbekistan	883,225	1,7%
Senegal	868,750	1,6%
Palestina	627,824	1,2%
Línea Evaluación Proyectos	500,000	0,9%
Túnez	105,368	0,2%
Total	**53.324,480**	**100,0%**

* IFIS: Instituciones financieras multilaterales.
Fuente: Ministerio de Economía.

Gran aumento de las importaciones energéticas

Por lo que respecta a las importaciones de mercancías, cabe señalar, como es lógico, el fuerte incremento de las energéticas en valor, un 119,5 por 100. El sector de bienes de equipo, el de mayor peso en la importación, un 26,3 por 100 del total, creció un 16,0 por 100, por debajo de lo que lo hicieron los bienes de consumo y las semimanufacturas. Por su parte, el sector del automóvil ha remitido el gran dinamismo importador alcanzado en los dos años anteriores. En 1999, este sector, que es tradicionalmente generador de superávit dentro de la balanza comercial, registró un déficit, pero en 2000 volvió a la tendencia habitual. Así, mientras el subsector de automóviles y motos creció a tasas superiores al 30,0 por 100 en 1998 y 1999, en el pasado año creció un 6,5 por 100.

De la distribución geográfica de las importaciones llama la atención la brusca caída de 4,6 puntos porcentuales de su grado de concentración en la Unión Europea. La causa no es otra que el fuerte aumento de la factura energética, que provocó un incremento de algo más del doble respecto al año anterior del valor de las importaciones de los países de la OPEP.

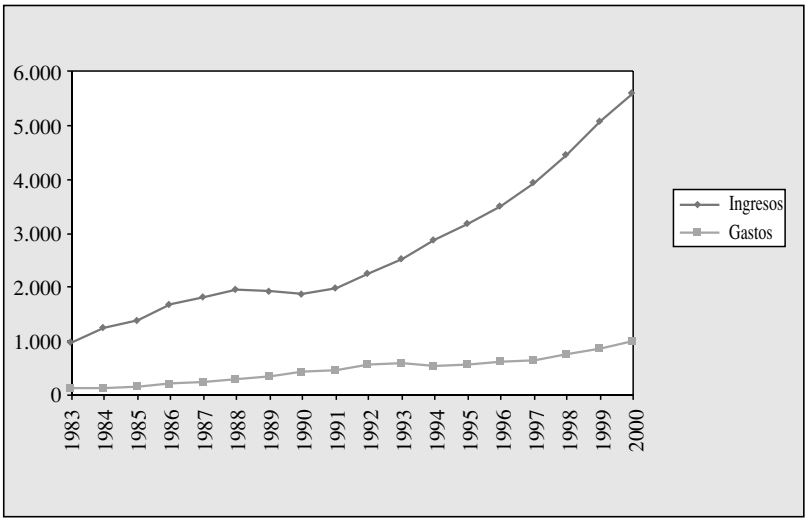
4.2.2. **Moderada mejora del turismo**

El superávit de la balanza de servicios en 2000 aumentó un 11,1 por 100 en relación con el año 1999. Este positivo resultado se debió exclusivamente a la evolución del turismo, dado que el resto de los servicios incrementó su déficit.

Los ingresos por turismo crecieron un 10,4 por 100 y los pagos un 15,1 por 100, lo que supuso un saldo positivo de la rúbrica de turismo y viajes de 5.962,4 millones de euros, un 9,5 por 100 más que el año anterior (gráfico I-7). No obstante, por segundo año consecutivo, el saldo por turismo no pudo cubrir el déficit comercial al compensar tan sólo el 77,1 por 100 del mismo.

Los elevados ingresos por turismo moderaron su ritmo de avance respecto a los últimos años, que fueron especialmente favorables. Igualmente, el incremento del número de visitantes fue menor, del 3,0 por 100, frente al incremento del 7,9 por 100 del año 1999. De ellos, el 65,0 por 100 fueron turistas, al haber pernoctado al menos una noche, y el 35,0 por 100 restante excursionistas.

GRÁFICO I-7
AUGE DEL TURISMO, 1983-2000
(En miles de millones de pesetas)



Fuente: Banco de España, *Boletín Estadístico*.

Por lo que respecta a los países de procedencia, entre el Reino Unido y Alemania supusieron ya algo más de la mitad de los turistas que visitaron España, seguidos de Francia con el 11,9 por 100 y Holanda e Italia con el 4,5 por 100 cada uno de ellos. Cabe destacar, al comparar estos resultados con años anteriores, que Alemania interrumpió su senda de crecimiento de los últimos años y registró un descenso del 1,4 por 100 en el número de turistas, mientras que, por el lado contrario y con un peso menor sobre el total, se incrementaron en gran medida los turistas procedentes de Portugal, un 17,9 por 100, y Estados Unidos, un 11,6 por 100.

La desaceleración del crecimiento del número de turistas supuso que España como destino turístico perdiese en 2000, según la Organización Mundial de Turismo, la segunda plaza en favor de Estados Unidos en la clasificación mundial de países receptores de turistas. Las causas que se podrían apuntar como explicación, teniendo en cuenta además la considerable mejora económica registrada en 2000 en los países europeos que tienen a España por principal destino de sus viajes, van desde la desaparición de la

inestabilidad política y social en destinos competidores de España en el Mediterráneo, a la capacidad de convocatoria de determinados eventos como la celebración de los Juegos Olímpicos en Australia y la Expo 2000 de Alemania o la pérdida de competitividad por el incremento de los precios de los servicios turísticos españoles.

Mayor desestacionalización

No obstante, el esfuerzo del sector por mejorar la calidad de los servicios y alcanzar un elevado grado de diferenciación y diversidad del producto turístico permitió que se siguiese incrementando un reparto más homogéneo de la demanda turística entre los distintos meses del año, contribuyendo con ello a alcanzar un mayor grado de desestacionalización. Así, en los meses de julio y agosto se redujo el número de turistas en un 3,9 por 100 y 4,3 por 100, respectivamente; mientras que en los demás meses, salvo en mayo, se alcanzaron cifras récord de entradas de turistas. Dicha desestacionalización se comprueba también al observar la evolución de los destinos turísticos: los destinos preferentes, Baleares y Canarias, que representan el 43,0 por 100 del total, apenas crecieron unas décimas, mientras que destacó el fuerte aumento de la Comunidad de Madrid del 24,3 por 100 y en menor medida otros destinos con una importancia relativa menor como las dos Castillas y Extremadura.

4.2.3. **Rentas, transferencias y balanza de capital**

El saldo negativo de la balanza de rentas fue prácticamente igual que el del año anterior. En términos de PIB, el déficit supuso el 1,5 por 100, mejorando ligeramente el progresivo deterioro que experimentó a lo largo de los últimos diez años. Tanto los ingresos como los pagos registraron ritmos de crecimiento elevados, del 35,4 por 100 y del 19,8 por 100, respectivamente. Los ingresos correspondientes al sector financiero registraron una recuperación tras el retroceso experimentado en 1999, a la vez que otros sectores residentes mantuvieron un fuerte avance. Respecto a los pagos, todos los sectores registraron crecimientos: las Administraciones Públicas y el sector crediticio como consecuencia de la subida de los tipos de interés y de sus mayores pasivos frente a no residentes, y el sector no crediticio, por el aumento de los dividendos, derivados de las mayores inversiones extranjeras y por los intereses de los préstamos concedidos a los operadores residentes.

El superávit por transferencias corrientes se redujo en un 44,5 por 100, como consecuencia de una ligera reducción de los ingresos y de un incremento del 12,8 por 100 de los pagos. Mientras que los ingresos de carácter público disminuyeron, sobre todo las transferencias procedentes del Fondo Social Europeo, los de carácter privado —como las remesas de emigrantes y en menor medida las recibidas por los agricultores en concepto de FEOGA-Garantía—, aumentaron. Por su parte, todos los componentes de los pagos, tanto públicos como privados, aumentaron.

Menores ingresos del FEOGA-Orientación y del FEDER

La cuenta de capital registró un superávit inferior en un 19,8 por 100 al del año anterior. Los ingresos del sector privado aumentaron considerablemente, pero los de las Administraciones Públicas, los de mayor peso, experimentaron una disminución debido a las menores transferencias procedentes de los Fondos Estructurales de la Unión Europea. Cabe señalar, no obstante, que estas transferencias financian acciones plurianuales, lo que provoca que en algunos ejercicios se concentre un mayor volumen de pagos, dependiendo, entre otros factores, del calendario de ejecución de las obras y de la situación de tesorería de la Unión Europea.

4.2.4. Inversiones españolas en el exterior y extranjeras en España

En la cuenta financiera (cuadro I-16), las inversiones directas registraron un flujo neto de salida, ya que las de España en el exterior fueron un 46,7 por 100 superiores a las registradas por las del exterior en España. Las inversiones de cartera registraron también un flujo neto acumulado de salida, pero mucho menor. En el año 2000 las reservas exteriores disminuyeron en 3.301,5 millones de euros, cifrándose su valor al finalizar el año en 38.233,9 millones de euros.

La intensidad de los flujos de inversión directa en el exterior es un fenómeno que se ha consolidado a lo largo de los últimos tres años. Así, la economía española ha pasado en dichos años de ser un país tradicionalmente importador neto de capital a largo plazo a convertirse en uno de los primeros exportadores netos del mundo.

CUADRO I-16
BALANZA FINANCIERA, 1999-2000
(Millones de euros)

Conceptos	1999			2000 (1)		
	Pasivos	Activos	Saldo	Pasivos	Activos	Saldo
Cuenta financiera (2)	—	—	11.046,0	—	—	18.695,3
Inversiones directas	—	—	—	—	—	—
De España en el exterior	—	33.240,5	–33.240,0	—	56.878,4	–56.878,0
Del exterior en España (3)	8.781,2	—	8781,2	38.768,2	—	38.768,2
Inversiones de cartera	—	—	—	—	—	—
De España en el exterior	—	44.039,8	–44.040,0	—	63.858,4	–63.858,0
Del exterior en España (4)	43.402,6	—	43.402,6	59.737,5	—	59.737,5
Otras Inversiones (5)	—	—	—	—	—	—
De España en el exterior	—	23.676,9	–23.677,0	—	16.119,2	–16.119,0
Del exterior en España	38.716,8	—	38.716,8	52.135,5	—	52.135,5
Derivados financieros (6)	—	—	132,4	—	—	1.608,6
Reservas	—	—	20.970,0	—	—	3.301,5
Errores y omisiones	—	—	–5.631,2	—	—	–4.771,1

(1) Datos de avance para el mes de diciembre de 2000. Para el resto, los datos incorporan revisiones a las cifras provisionales publicadas en meses anteriores.
(2) Todos los datos de la Cuenta Financiera son netos. Un signo +(-) de las reservas indica su disminución (aumento).
(3) No recoge las inversiones directas en acciones cotizadas; incluye las inversiones de cartera en acciones no cotizadas.
(4) Incluye las inversiones directas en acciones cotizadas; no recoge las inversiones de cartera en acciones no cotizadas.
(5) Incluye, principalmente, préstamos, repos y depósitos.
(6) Variación de pasivos menos variación de activos. Un signo +(-) es un ingreso (pago) neto por este concepto.

Fuente: Banco de España.

Cabe esperar que este fuerte aumento de la inversión directa en el exterior se traduzca a medio plazo en mayores exportaciones inducidas, pero por ahora no se está demostrando la existencia de una relación complementaria entre ambas formas de internacionalización. Aunque podría darse el caso de que la inversión sustituya parcial o totalmente a la exportación, la razón de que no se observe hasta el momento un aumento de las exportaciones a las regiones que más han acaparado las inversiones directas españolas puede hallarse en que las han realizado pocas empresas del sector servicios, del sector energético y del sector de las telecomunicaciones con una menor capacidad de arrastre que los manufactureros y pro-

cedentes algunas del sector público, con un alto grado de posición dominante en el mercado nacional y dirigidas a países inmersos en procesos de privatización. Sin embargo, gran parte de los flujos de inversión que se han puesto en marcha recientemente no han madurado lo suficiente, por lo que, dado que la inversión extranjera produce efectos sobre la filial exportadora sólo a largo plazo, cabe esperar que las fuertes inversiones españolas en el exterior se traduzcan finalmente en un arrastre de la exportación.

Aunque los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía se confeccionan con distinta metodología que los del Banco de España, las tendencias de su evolución a lo largo del año 2000 son las mismas. Así, se constata igualmente, con los datos disponibles hasta septiembre de 2000, un fuerte crecimiento de los dos flujos de inversiones directas. Las inversiones españolas en el exterior fueron un 56,8 por 100 superiores a las inversiones extranjeras en España, aunque, dado que estas últimas partían de un nivel más moderado en 1999, su tasa de crecimiento fue considerablemente superior, del 115,1 por 100, frente al 21,3 por 100 de crecimiento de las inversiones españolas en el exterior.

5. INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA

La inflación registrada en 2000 fue la más elevada de los últimos cinco años. Las tensiones registradas en los mercados internacionales de petróleo junto a la pérdida de valor del euro, que se situó por debajo de la paridad con el dólar, fueron los principales factores explicativos de un nivel de inflación que alcanzó en diciembre el 4,0 por 100 en tasa interanual. Aunque las rúbricas más inflacionistas fueron las de Transporte y Turismo, desde mediados de año los Alimentos no elaborados registraron, igualmente, fuertes subidas por el impacto de la crisis del vacuno.

El establecimiento de una política monetaria restrictiva durante el ejercicio por parte del Banco Central Europeo, que elevó los tipos de intervención en 2,25 puntos desde noviembre de 1999 hasta finales de 2000, habría permitido sofocar parte de las tensiones inflacionistas españolas. No obstante, la ampliación en el diferencial de inflación con la zona euro justificaría, igualmente, la introducción en junio de nuevas medidas liberalizadoras y de reforma.

Este entorno de mayor inflación y restricción monetaria agravó el impacto que la caída de las cotizaciones bursátiles estadounidenses tuvo sobre las bolsas europeas; en concreto, la Bolsa de Madrid terminó el ejercicio con rendimientos negativos.

5.1. El IPC duplicó las previsiones oficiales

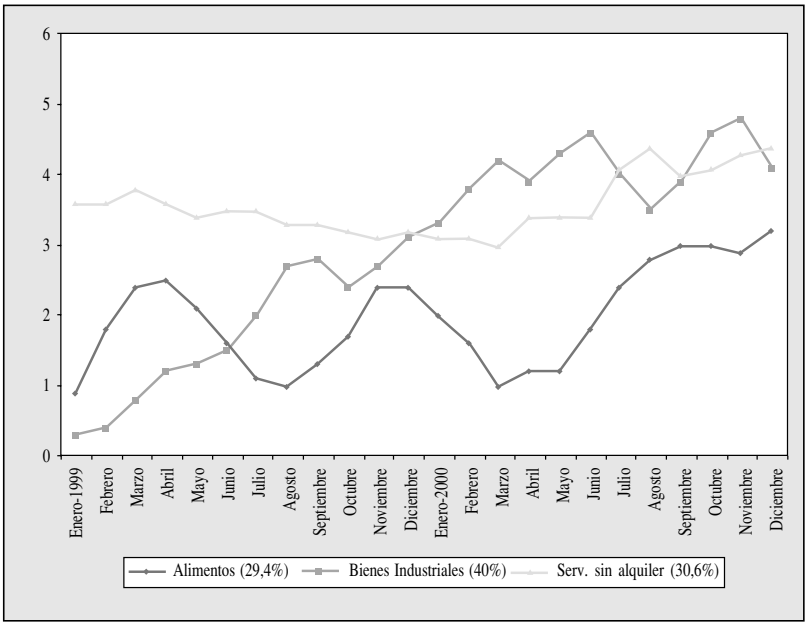
Las tensiones inflacionistas observadas durante 1999, en particular en sus últimos meses, estuvieron presentes a lo largo del año 2000. El Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó su nivel más alto desde 1996 con un crecimiento medio anual del 3,4 por 100, 0,9 puntos porcentuales por encima del crecimiento medio de la inflación del ejercicio anterior. Este deterioro resulta más evidente al examinar la tasa de crecimiento de la inflación interanual de diciembre, que para el ejercicio 2000 ascendió a un 4,0 por 100, superior en 1,1 puntos del nivel alcanzado en 1999.

Petróleo y euro inciden en la inflación

Aunque los precios crecieron de forma continuada durante todo el ejercicio, el Gobierno no llegó a revisar su objetivo de inflación, 2,0 por 100, justificando esa inacción por la alta volatilidad de los factores inflacionistas implicados, aunque finalmente la tasa de inflación interanual llegase a duplicar la previsión oficial. En efecto, las tensiones vividas en los mercados internacionales del crudo y el deterioro persistente del euro a lo largo del año, ambos fenómenos exógenos caracterizados por su considerable volatilidad, constituyeron los principales factores explicativos de los niveles de inflación. Sin embargo, las elevadas tasas de crecimiento de los precios de los servicios y de las manufacturas industriales no energéticas permitieron recordar que aún existen circunstancias endógenas igualmente inflacionarias.

La inflación media interanual del sector industrial fue de 4,1 por 100, tres décimas por encima de la tasa interanual media de inflación de los servicios, que ascendió a 3,8 por 100 (gráfico I-8). Este nivel de inflación en los bienes industriales no se conocía desde finales de 1993 y superó en 2,3 puntos porcentuales a la tasa de inflación media interanual de 1999; no obstante, si se considera sólo el crecimiento de los precios industriales no energéticos, la situación mejora, puesto que la inflación media (2,1 por 100) sólo superó la de 1999 en 0,6 puntos porcentuales.

GRÁFICO I-8
IPC POR SECTORES, 1999-2000
(Tasas de variación interanual)



Fuente: INE, *Boletín Mensual de Estadística*.

Durante el año 2000 se originó una situación anormal en la evolución tradicional del IPC de los sectores productivos; el diferencial existente entre los precios de los servicios y los precios industriales no sólo alcanzó valores mínimos a lo largo del año, sino que además se llegó a invertir. De nuevo, al igual que en 1999, la reducción de brecha de inflación entre el sector industrial y el de servicios fue el resultado de una convergencia al alza de sus tasas de inflación, cuando habría sido deseable que esta reducción hubiera procedido de una caída en la inflación de los servicios.

Las diferentes trayectorias seguidas tradicionalmente por la inflación de cada uno de estos dos sectores, en concreto la atribuida al sector servicios, ha hecho que se hable de la existencia de inflación dual[53] en la economía española. Sin embargo, los avances tec-

[53] La inflación dual explica parte de las tensiones inflacionistas por la menor competencia existente en el sector servicios. Los precios en el sector industrial vie-

nológicos y los procesos de desregulación obligan a matizar esta circunstancia, puesto que se ha reducido el número de subsectores en los que todavía existe una cierta independencia en la fijación de precios. Por consiguiente, en la actualidad, no es posible atribuir incuestionablemente al sector servicios la característica de sector cerrado a la competencia exterior.

Impacto inflacionista de la crisis del vacuno

Por grupos de gasto, la tasa de inflación interanual, tanto de los componentes de alimentación como de no alimentación, experimentaron notables ascensos, siendo este último el de mayor intensidad (cuadro I-17). El avance de la tasa de inflación interanual de los productos de alimentación fue de sólo 8 décimas, pasando de una tasa interanual de 2,4 por 100 en 1999 a 3,2 por 100 a finales de 2000. No obstante, la mayor parte de la inflación registrada por los alimentos se atribuye a los no elaborados, que alcanzaron una tasa interanual de inflación del 6,5 por 100, 4,5 puntos por encima del valor de 1999. El repunte de los precios de los alimentos no elaborados desde mediados de 2000 estuvo originado por el efecto de la denominada «crisis de las vacas locas», que provocó un encarecimiento de los productos sustitutivos de la carne de vaca. De hecho, el análisis de las principales rúbricas del IPC permite observar que las mayores subidas de las tasas interanuales fueron protagonizadas por la «Carne de ave» (23,6), la «Carne de cerdo» (15,4) o el «Pescado fresco y congelado» (5,3) (cuadro I-18). Esta no fue la primera vez que el problema de las «vacas locas» afectó a la variación del IPC[54]; en 1996, los primeros casos de EEB[55] en el Reino Unido provocaron la misma desconfianza en los consumidores españoles; aquella situación afectó sólo en el corto plazo al índice de precios, frente al problema de 2000 que se podría convertir en un nuevo *shock* de oferta[56] para las economías europeas, una vez superadas las subidas en el precio del petróleo.

---

nen determinados por los mercados internacionales, mientras que algunos servicios presentan la especificidad de beneficiarse de situaciones de monopolio y oligopolio para fijar los precios.

[54] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1996,* pág. 86.

[55] Encefalopatía Espongiforme Bovina.

[56] Se considera *shock* de oferta a cualquier cambio exógeno que provoque un desplazamiento de la curva de oferta agregada. De este modo, un *shock* de oferta adverso, que puede ser desde una decisión unilateral de la OPEP de recorte en la producción de crudo hasta una mala cosecha, un terremoto o incluso un conflicto armado, reduciría la oferta agregada para un nivel dado de precios.

CUADRO I-17
COMPONENTES DEL IPC, 2000

Componentes	Ponderación (%)	Incremento (%) (1)	Respecto al Índice General 4,0% (⇧⇩)	Respecto al año anterior (+ –)
Alimentación	**29,4**	**3,2**	⇩	+
No elaborados	11,9	6,5	⇧	+
Elaborados	17,5	1,1	⇩	–
No alimentación	**70,6**	**4,2**	⇧	+
Vestido y calzado	11,5	2,3	⇩	+
Vivienda	10,3	4,6	⇧	+
Menaje	6,7	3,0	⇩	+
Medicina	3,1	3,1	⇩	+
Transporte	16,5	5,6	⇧	+
Cultura	7,3	3,0	⇩	+
Otros	15,3	5,2	⇧	+

Notas: Con signo (⇧⇩) se indica mayor o menor incremento respecto del índice general. Con signo (+ –) se indica aumento o disminución en 2000 respecto a la variación del índice de cada componente experimentada en 1999.

(1) Tasas de variación interanual a diciembre.

Fuente: INE, *Boletín Mensual de Estadística.*

La desinflación mostrada por los alimentos elaborados, que pasaron de una tasa de inflación interanual de 2,6 por 100 en 1999 a 1,1 por 100 en 2000, no fue suficiente para compensar el impacto de la crisis del vacuno sobre los precios de los alimentos. Entre las rúbricas de menor inflación (cuadro I-18), llegando en algunos casos a registrar deflación, destacó el descenso registrado por los precios de los «Aceites y grasas» (–16,3), frente al ejercicio anterior

CUADRO I-18
PRINCIPALES RÚBRICAS DEL IPC, 2000
(Porcentajes de variación interanual)

Las que más subieron	Las que más bajaron
1. Carne de ave (23,6)	1. Aceites y grasas (–16,3)
2. Patata y sus preparados (21,3)	2. Carne de ovino (–3,8)
3. Carne de cerdo (15,4)	3. Correo y comunicaciones (–3,0)
4. Huevos (10,5)	4. Café, cacao, infusiones y sucedáneos (–1,4)
5. Hortalizas frescas (6,9)	5. Frutas frescas (–0,1)

Fuente: INE, *Boletín Mensual de Estadística.*

cuando había estado entre las rúbricas del IPC que más subieron; esta trayectoria responde a las buenas cosechas que en este sector se produjeron en el año 2000.

La parte del IPC de productos de no alimentación superó en dos décimas al nivel mostrado por el índice general, aunque la cadencia fue diferente respecto a los alimentos, puesto que en el tercer trimestre presentaron una clara desaceleración de su ritmo inflacionista (cuadro I-17). Entre los componentes del IPC diferentes de la alimentación destacaron las tensiones inflacionistas que por segundo año consecutivo afectaron a los Transportes, 5,6 por 100 de inflación interanual de diciembre, que recogieron obviamente la evolución al alza que a lo largo del año experimentaron los carburantes. Asimismo, destacó la partida residual «Otros», con un avance interanual del nivel de precios de 5,2 por 100, resultado que se debe fundamentalmente al comportamiento de la rúbrica de «Turismo y hostelería». Finalmente, el tercer grupo de gasto que superó el crecimiento del índice general fue la «Vivienda»[57], que registró una inflación del 4,6 por 100, 1,7 puntos porcentuales por encima del valor de 1999.

Transporte y Turismo, los más inflacionistas

El análisis concreto de las rúbricas de no alimentación revela que «Transporte personal» y «Turismo y hostelería», explicaron por si solas el 41,5 por 100 de la inflación interanual de 2000. El «Transporte personal», con una tasa interanual de inflación del 6,5 y una repercusión sobre el IPC general de un 23,1 por 100, estuvo claramente afectado por la subida de los precios de los carburantes y por la fortaleza del dólar, moneda en que vienen expresados los primeros. Por su parte, el «Turismo y la hostelería», que con una tasa de inflación del 5,9 explicó el 18,4 por 100 de la variación del índice general, puso de manifiesto los efectos de la debilidad del euro sobre los precios de los paquetes turísticos, los cuales fueron además sometidos a revisiones constantes. Como contraste, también dentro del sector servicios, se encuentra la rúbrica de «Correo y comunicaciones», protagonista de uno de los mayores descensos del IPC en 2000 de acuerdo con la tendencia iniciada en 1999, lo

[57] Cabe aclarar, al considerar las fuertes subidas de precios experimentadas por la vivienda nueva a lo largo de 2000, descritas en el capítulo III, que el componente del IPC de «Vivienda» sólo recoge la variación en el precio de la vivienda de alquiler.

cual responde al mayor grado de competencia que existe en el sector de las telecomunicaciones.

Convergencia al alza de los niveles de inflación

En todas y cada una de las Comunidades Autónomas se siguió la tendencia alcista del índice general (cuadro I-19). Un conjunto de siete Comunidades Autónomas superaron la tasa de inflación general interanual de diciembre del 4,0 por 100, destacando los aumentos de las comunidades agrícolas de Murcia (4,8) y La Rioja (4,5) al igual que el de Asturias (4,3). Por su parte, las regiones con menores niveles de inflación fueron Canarias (3,5), Cantabria (3,5), Extremadura (3,6), Aragón (3,7), Ceuta y Melilla (3,7) y Galicia (3,7). Respecto al ejercicio anterior se redujo la dispersión de los niveles de inflación entre Comunidades Autónomas, pasando de 1,8 puntos en 1999 a 1,3 en 2000, hecho que revela que a lo largo de 2000 se produjo una convergencia al alza de los niveles de inflación de las diferentes Comunidades Autónomas. Esta circunstancia llevó a que regiones con bajos niveles de inflación desde una perspectiva nacional protagonizaran las mayores subidas en sus tasas de variación interanual de precios, siendo este el caso de Extremadura, que registró un avance en el ritmo de inflación de 1,8 puntos porcentuales, pasando de 1,8 a 3,6 por 100, o el de Ceuta y Melilla con un crecimiento de 1,5 puntos; en ambos territorios se superó holgadamente el avance de 1,1 puntos porcentuales registrado por el índice general.

Al igual que sucediera en 1999, fueron un conjunto de factores erráticos o volátiles, como la elevación del precio de los carburantes o la debilidad del euro, los que explicaron la mayor parte de la desviación de la tasa de crecimiento del índice de precios respecto al objetivo oficial. Sin embargo, durante el ejercicio 2000 se produjo una mayor filtración de esta influencia exógena hacia la parte más estructural de los niveles de precios, medida por la

CUADRO I-19
IPC POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000
(Porcentajes de variación interanual)

Las más inflacionistas	Las menos inflacionistas
1. Murcia (4,8)	1. Canarias, Cantabria (3,5)
2. La Rioja (4,5)	2. Extremadura (3,6)
3. Asturias (4,3)	3. Aragón, Ceuta y Melilla, Galicia (3,7)

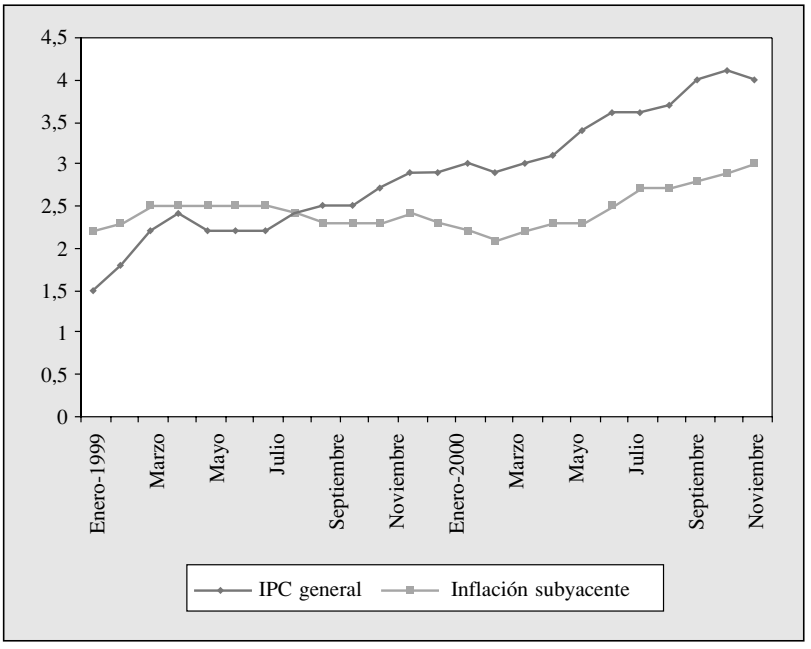
Fuente: INE, *Boletín Mensual de Estadística.*

denominada tasa de inflación subyacente, esto es, a través del IPC excluidos los precios de los alimentos sin elaborar y los precios de los productos energéticos. En términos de variación interanual, la tasa de inflación subyacente experimentó a lo largo del año un ascenso prolongado hasta el 3,0 por 100 en diciembre, lo que llevó a superar en 0,6 puntos porcentuales el nivel alcanzado un año antes (gráfico I-9); y aunque el valor medio alcanzado por la tasa de inflación subyacente durante el año creciera sólo 0,1 puntos respecto al año anterior, el nivel alcanzado fue el mayor desde 1996.

Elevado impacto del petróleo sobre los precios industriales

Obviamente, ese mismo factor energético explicó el comportamiento del Índice de Precios Industriales (IPRI), que mide la evolución de los precios industriales en la primera etapa de su comercialización y por ende sirve de indicador adelantado de los futuros niveles del IPC. El IPRI registró un avance de 5,0 por 100, confirmando el cambio de tendencia al alza ya mostrado en 1999. La escalada del IPRI fue constante y gradual hasta el segundo tri-

GRÁFICO I-9
IPC E INFLACIÓN SUBYACENTE, 1999-2000
(Tasas de variación interanual)

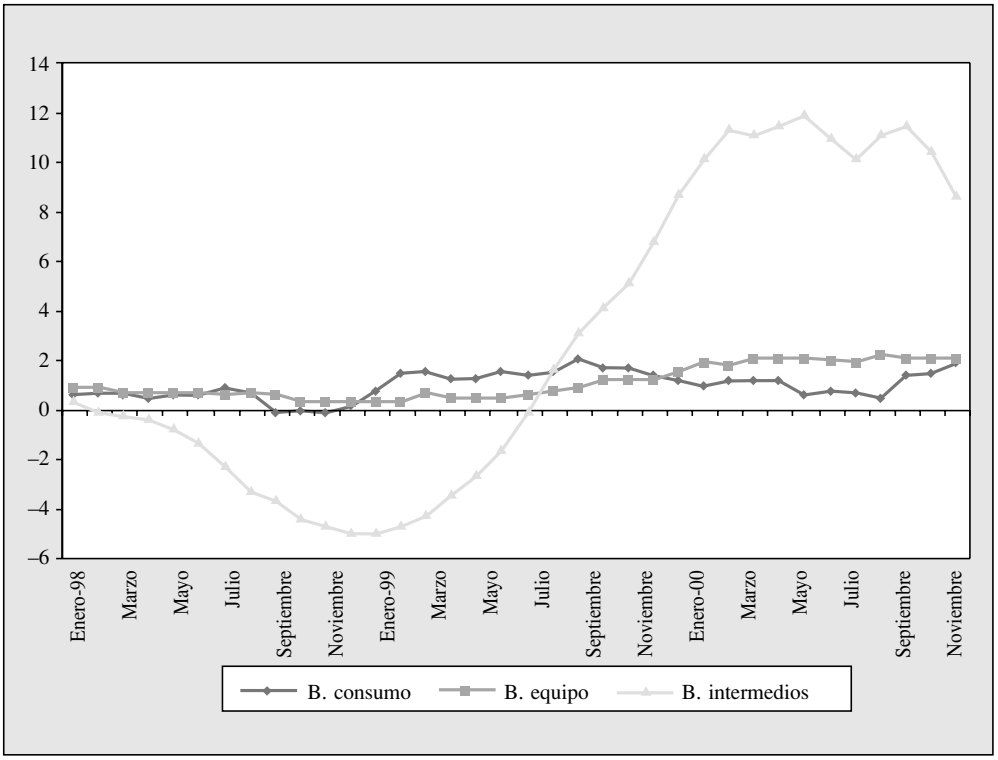


Fuente: INE, *Boletín Mensual de Estadística.*

mestre de 2000, momento a partir del cual inició un descenso no exento de altibajos. Sin lugar a dudas la bajada de los precios del petróleo de finales de ejercicio fomentó las expectativas de mejoras en la evolución del IPRI.

Al considerar el destino económico de los bienes (gráfico I-10) se observa que el avance del IPRI fue originado por la evolución de los precios de los bienes intermedios y en concreto dentro de éstos por los energéticos. De hecho, la actividad de refino de petróleo registró un crecimiento de su índice de precios de 40,2 por 100, aunque en noviembre el índice energético pre-

GRÁFICO I-10
COMPONENTES DEL ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES, 1998-2000
(Tasas de variación interanual)



Fuente: INE, *Boletín Mensual de Estadística.*

sentó el primer descenso del ejercicio, lo que podría indicar el cambio de tendencia. No obstante, cabe subrayar que la desaceleración del IPRI seguirá dependiendo de un factor exógeno como el precio del petróleo. Finalmente, aunque su repercusión en el IPRI no sea muy alta, es destacable, por ser una de las primeras consecuencias de la denominada «crisis de las vacas locas», el aumento que en el último trimestre experimentaron, dentro de los bienes de consumo, los precios de la rúbrica Alimentación, Bebidas y Tabaco, alcanzando en diciembre un crecimiento interanual del 1,9 por 100, rompiendo así la senda bajista iniciada en septiembre de 1999. Otro de los sectores afectados por dicha crisis fue la Industria del cuero, que alcanzó una tasa de crecimiento interanual de sus precios del 11,0 por 100, cuando en enero era sólo del 0,9 por 100.

Se amplía el diferencial de inflación con la Eurozona

Una tasa interanual de inflación medida a través del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) del 4,0 por 100 (cuadro I-20) supuso la ampliación del diferencial español de inflación respecto a la Eurozona de 1,4 puntos porcentuales, frente al 1,1 registrado en 1999, que, además, ya resultaba suficientemente preocupante. Esta brecha se agrava al considerar la inflación del conjunto de la Unión Europea, ya que dos Estados miembros no pertenecientes a la UEM, Suecia y Reino Unido, fueron los menos inflacionistas del conjunto de la Unión, de modo que el diferencial de precios con la media de la inflación de la Unión Europea (2,3 por 100) se amplía hasta 1,7 puntos porcentuales, 0,6 puntos porcentuales por encima del diferencial registrado en 1999 (1,1 puntos).

La ampliación del diferencial de inflación resultó en una pérdida de competitividad para la economía española en el ámbito comunitario. A pesar de que la subida de los precios de los carburantes fuera considerada, hasta cierto punto, como un *shock* de oferta simétrico para el conjunto de los países de la Unión Europea, a la luz de los valores alcanzados por el IPCA español se podría afirmar que se dio un mayor grado de filtración de este *shock* inflacionista en España respecto a la filtración media de la Unión Europea. Una primera aproximación a esta conclusión podría resultar del análisis del IPCA registrado por el grupo de Transporte. Así el IPCA español del grupo de Transporte alcanzó un 6,4 por 100, sólo por detrás de Luxemburgo (8,1 por 100),

CUADRO I-20

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO POR GRUPOS, 2000

(Tasas de variación interanual de diciembre)

Países	Alimentos y bebidas no alcohólicas	Bebidas alcohólicas y tabaco	Vestido y calzado	Vivienda	Menaje	Medicina	Transporte	Comunicaciones	Ocio y cultura	Enseñanza	Hoteles, cafés y restaur.	Otros	Tasa de variación anual por países
Alemania	1,2	0,7	0,3	5,9	0,1	0,9	3,7	–4,0	0,9	1,4	1,1	2,2	2,3
Austria	1,7	1,3	–1,3	4,8	0,5	4,1	4,7	–3,5	–0,9	5,0	2,1	2,0	1,8
Bélgica	2,2	1,6	0,6	7,8	1,6	0,3	4,6	–8,1	1,5	N/D	3,2	2,8	3,0
España	**3,5**	**3,8**	**2,2**	**4,6**	**3,0**	**2,1**	**6,4**	**–2,9**	**5,0**	**5,3**	**4,6**	**3,3**	**4,0**
Finlandia	2,7	2,6	–0,5	4,1	1,3	3,9	2,7	2,9	2,8	4,5	3,0	3,5	2,9
Francia*	3,1	2,8	0,3	2,6	1,2	0,7	2,8	–7,2	–0,2	2,1	1,8	1,8	1,7
Holanda*	3,0	3,4	–0,5	6,6	2,8	2,9	4,1	–4,7	–1,8	2,8	3,7	2,7	2,9
Irlanda	4,7	2,4	–4,0	10,5	3,6	5,6	5,9	–9,8	3,9	9,0	5,5	5,6	4,6
Italia	2,8	0,2	2,5	6,4	2,2	2,9	3,3	–2,4	1,2	3,4	3,4	1,6	2,8
Luxemburgo	3,4	3,4	1,1	9,1	1,8	12,4	8,1	–8,3	2,1	0,0	3,2	0,3	4,3
Portugal	4,9	1,1	1,7	4,7	2,5	2,7	5,3	–4,5	2,9	5,0	3,4	5,1	3,8
Dinamarca	2,2	3,2	–2,6	4,6	1,9	3,3	2,1	–7,2	2,5	4,3	3,2	2,8	2,3
Grecia	2,1	5,7	3,5	9,2	2,5	2,6	5,4	–9,4	1,2	3,8	4,7	2,9	3,7
Reino Unido	1,2	5,0	–7,9	0,9	–2,3	2,7	1,7	–5,0	0,6	6,6	4,0	1,6	0,9
Suecia	0,8	1,8	0,1	2,1	0,8	4,4	1,7	–7,7	1,5	4,1	2,4	2,4	1,3
U. Monetaria*	**2,5**	**1,5**	**1,1**	**5,3**	**1,4**	**1,6**	**3,8**	**–4,6**	**0,8**	**3,1**	**2,7**	**2,2**	**2,6**
Unión Europea*	**2,3**	**2,4**	**–0,2**	**4,8**	**0,8**	**1,8**	**3,4**	**–4,9**	**0,8**	**3,9**	**3,1**	**2,1**	**2,3**

* Datos provisionales.

Fuente: Eurostat.

mientras que otros Estados miembros, como Reino Unido o Suecia, sólo registraron subidas del 1,7 por 100, siendo la media de la Eurozona 3,8 por 100. Por otra parte, desde mediados de año el IPCA de la rúbrica de Alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó un notable ascenso llegando a alcanzar en España un 3,5 por 100, 1 punto porcentual por encima de la media de la Eurozona. Finalmente, llaman la atención los menores efectos beneficiosos sobre los registros de inflación que parece estar teniendo la liberalización de las telecomunicaciones en España frente a los que se están produciendo en la mayoría de los Estados miembros; de este modo, España apuntó una deflación del grupo de Comunicaciones de –2,9 por 100, mientras que como media en la Eurozona ésta fue de –4,6 por 100.

En definitiva, el año 2000 no hizo más que continuar la trayectoria al alza trazada desde los primeros meses de 1999, con aumentos sostenidos de la tasa de inflación interanual. En noviembre la tasa de crecimiento interanual del IPC alcanzó el 4,1 por 100, nivel considerado por algunos como un posible máximo en el corto o medio plazo. De hecho, a finales de año la revalorización del euro frente al dólar, que respondió a la posible desaceleración de la actividad norteamericana, junto a los descensos de los precios de los hidrocarburos, podrían haber originado un nuevo periodo desinflacionista.

2001, nuevo IPC

El ejercicio 2000 fue el último año de aplicación del IPC base 1992. A partir de 2001 será de aplicación el denominado *nuevo IPC* (cuadro I-21) que supondrá una mayor adecuación del índice a los cambios que se han venido produciendo desde 1992 en los gustos, calidades, disponibilidad de productos y capacidad de compra de los consumidores. De este modo, el INE trata de otorgar una mayor flexibilidad y representatividad a la cesta de la compra de bienes y servicios de los consumidores españoles utilizada para estimar el IPC, favoreciendo asimismo la armonización de los índices de precios de consumo del conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. La aplicación de las nuevas ponderaciones de los grupos de gasto habría incrementado la inflación media de 2000 en dos décimas, pasando de 3,4 por 100 a 3,6 por 100.

CUADRO I-21
PRINCIPALES CAMBIOS DEL NUEVO IPC

Primera fase (a partir de enero de 2001)
— Se distinguen doce grupos de gasto frente a los ocho del IPC-92. De modo que el grupo Alimentación se escinde en dos: Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bebidas alcohólicas y tabaco; del grupo Transportes se extrae Comunicaciones, que pasa a ser un grupo independiente; igualmente se extraen Enseñanza y Hoteles, cafés y restaurantes de los grupos Cultura y Otros en los que estaban integrados, respectivamente.
— Se modifican las ponderaciones de dichos grupos de gasto.
Segunda fase (a partir de enero de 2002)
— Se actualizarán cada dos años como máximo tanto las ponderaciones de los distintos componentes del IPC como los productos que forman parte de la cesta de consumo.
— Se realizarán cambios de base cada cinco años, frente a cada ocho o nueve años bajo el IPC anterior. El primer cambio de base tendrá lugar en 2002, aprovechando la publicación trimestral que desde el tercer trimestre de 1997 se hace de la Encuesta de Presupuestos Familiares, la cual permite conocer la evolución del gasto de las familias.
— Se corregirán los precios de los productos para asumir los cambios que éstos observen en su calidad.
— El IPC acogerá los precios rebajados, con la consecuencia inevitable de imprimir un carácter más estacional en las series de algunos meses (enero y agosto).

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, *Cambio de sistema del Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2001. Avance de las características más importantes*. Enero 2001.

A finales de año, las previsiones de inflación para el ejercicio siguiente, una vez descontado el cambio metodológico introducido por el INE, mostraron una gran incertidumbre. Cabe expresar al respecto la preocupación de que todavía quedase por internalizar parte de los mayores costes que produjeron el encarecimiento de los carburantes y la debilidad del euro, lo que podría presionar al alza la tasa de inflación subyacente. Igualmente, las trayectoria de la inflación subyacente en el periodo 2001 estaría determinada por el grado de moderación que presente la demanda interna, así como por la repercusión que pudiera tener la denominada «crisis de las vacas locas».

Finalmente, cabe subrayar que de nuevo, a lo largo de 2000, se reabrió el debate sobre el redondeo en euros que algunos precios requerirán tras la sustitución definitiva de la peseta a principios de 2002. Esta preocupación surgió por el hecho de que las disposi-

ciones comunitarias respecto al redondeo no son vinculantes para las operaciones de comercio, de modo que el impacto del redondeo sobre la inflación del ejercicio 2002 dependerá de la decisión que se tome para dichas operaciones. Algunas estimaciones[58] han cifrado el impacto en un aumento de la inflación de cuatro décimas en el caso de que el redondeo sea «al entero al alza».

5.2. Política monetaria del Banco Central Europeo

Durante 2000, el BCE estableció una clara estrategia restrictiva de lucha contra la inflación; de este modo se confirmó el cambio de tendencia que se había observado a finales de 1999. Ante el temor de que las presiones inflacionistas derivadas del encarecimiento del petróleo pudieran dificultar el logro del objetivo de inflación, las autoridades monetarias comunitarias realizaron subidas escalonadas de los tipos de interés. El ascenso de los tipos de intervención, iniciado en noviembre de 1999, registró un crecimiento medio de 0,25 puntos cada mes y medio, lo que supuso un ascenso de 2,25 puntos hasta finales de 2000 (gráfico I-11).

Aunque consciente de los peligros inflacionistas que se derivaban del encarecimiento del petróleo y de la caída del euro, a través de aumentos de los precios de las importaciones y de consumo en la Eurozona, el BCE fundamentó su decisión de endurecer las condiciones monetarias en las favorables expectativas que a lo largo del año rodearon al crecimiento de los Estados miembros de la UEM.

Una estrategia monetaria basada en dos pilares

La estrategia de política monetaria del BCE es diferente de las estrategias de política monetaria tradicionales, aunque mantiene la definición de un objetivo monetario intermedio y de un objetivo directo de inflación. De este modo, la estrategia del BCE se asienta en dos pilares. El primero de ellos es una referencia concreta y cuantitativa del crecimiento de la cantidad de dinero, medida por el agregado monetario amplio M3, considerado, en consecuencia, primer pilar de la estrategia monetaria única. La definición del crecimiento óptimo de M3 se fundamenta en la definición cuantitativa de la estabilidad de precios, que se identifica con un incremento anual del IPCA del 2 por 100.

[58] Véase FEDEA, *Efectos sobre la inflación del redondeo en el paso a euros,* diciembre 2000.

GRÁFICO I-11

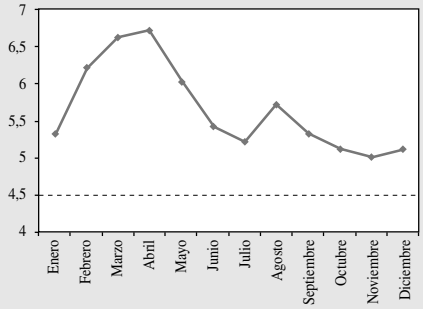
POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO, 2000

Cronología (tipos de interés)

3 de febrero	3,25 %
16 de marzo	3,50 %
27 de abril	3,75 %
8 de junio	4,25 %
31 de agosto	4,50 %
5 de octubre	4,75 %

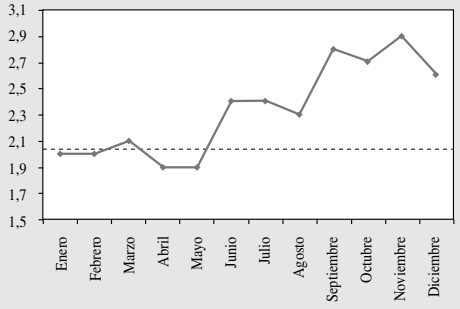
1.er Pilar

Tasa de crecimiento de M3



Objetivo: estabilidad de precios

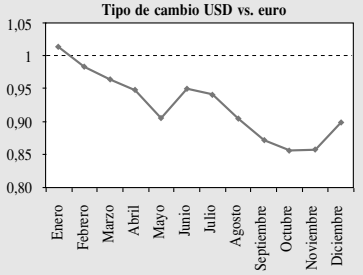
IPC armonizado UEM



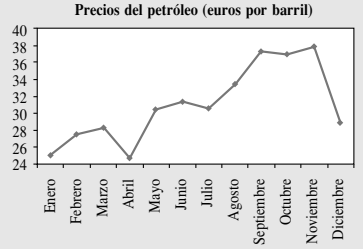
* Valor de referencia = 2%

2.º Pilar*

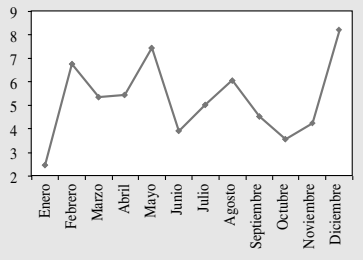
Tipo de cambio USD vs. euro



Precios del petróleo (euros por barril)



Índice de Producción Industrial



* Nota:

– Se han elegido tres magnitudes del amplio conjunto de indicadores económicos y financieros del 2.º Pilar que sirven de base para evaluar los riesgos de subida de precios.

– Las líneas discontinuas marcan el valor de referencia explícito o implícito.

Fuente: Elaboración propia a partir del *Boletín mensual BCE*.

El objetivo de crecimiento de M3 es susceptible de modificaciones anuales, puesto que las previsiones de crecimiento y la evolución de la velocidad de circulación del dinero pueden modificarse; no obstante, el valor 4,5 por 100, establecido en otoño de 1998, se mantuvo en 2000 y sería el aplicable para el ejercicio siguiente[59].

Las desviaciones de M3 respecto a su valor de referencia no provocan por sí solas reacciones en la estrategia monetaria, ya que podrían ser circunstanciales, con lo cual el BCE antes de actuar se fijará en el comportamiento del segundo pilar. La definición del segundo pilar es menos concreta que la anterior y recoge la evolución de un conjunto de variables significativas, como pueden ser el crédito, los tipos de interés a largo plazo, los precios de las materias primas, los precios de importación, los salarios, el déficit público, la producción industrial o el tipo de cambio del euro, entre otros.

Las subidas graduales del tipo de interés de las operaciones de financiación del BCE durante 2000 (gráfico I-11) respondieron al comportamiento de estos dos pilares, que sostienen la estrategia monetaria única[60]. Durante los primeros meses del año, las sucesivas aceleraciones del agregado monetario M3 justificaron las primeras restricciones monetarias. La tasa de crecimiento interanual de M3 pasó de 5,3 en enero de 2000 a 5,7 en agosto; durante ese mismo periodo el BCE elevó el tipo de interés de las operaciones principales 1,5 puntos porcentuales hasta situarlo, el 31 de agosto, en 4,5 por 100. En la segunda mitad del ejercicio se observó una desaceleración en el crecimiento del agregado monetario M3; no obstante la tasa de crecimiento mostrada por M3 siguió estando muy por encima del valor de referencia fijado por el BCE, 4,5 por 100, por lo que a pesar de que otras variables, como el crédito concedido a las Administraciones Públicas o al sector privado, hicieran prever menores tensiones inflacionistas, el BCE expresó que mantendría una postura prudente.

[59] El Consejo de Gobierno del BCE decidió el 14 de diciembre de 2000 mantener el valor de referencia existente para el crecimiento de M3, por lo que se mantendrá en el 4,5 por 100 al menos hasta su próxima revisión en diciembre de 2001.

[60] El 10 de mayo de 2001, el Banco Central Europeo redujo el tipo correspondiente a las operaciones principales de financiación del Eurosistema en 0,25 puntos porcentuales. El presidente del BCE explicó que la subida respondía al acercamiento de M3 a su valor de referencia y a la desaparición, en cierta medida, de los riesgos inflacionistas, dada la moderación registrada por el crecimiento del PIB de la zona euro.

De igual modo, las autoridades monetarias comunitarias utilizaron el comportamiento de alguna de las variables del segundo pilar para explicar el establecimiento de una política monetaria restrictiva. Las tensiones inflacionistas derivadas del *shock* de oferta provocado por la subida de los precios del crudo, agravadas por la depreciación continuada a lo largo del ejercicio del euro frente al dólar, divisa predominante en el mercado de esta materia prima, fueron a lo largo del ejercicio motivo de preocupación del BCE.

Efectos inflacionistas de la depreciación del euro

El BCE señaló los efectos inflacionistas de la depreciación del euro como una de las variables que le habían conducido a elevar los tipos de interés después del periodo estival. Se reavivó así el debate existente sobre si el BCE debía o no intervenir en los mercados de divisas a favor de la moneda única, puesto que a lo largo del año resultó evidente que las subidas de tipos no habían conseguido en ningún momento afectar al cambio del euro. No obstante, las declaraciones oficiales subrayaron que las decisiones de política monetaria sólo respondían a la necesidad de lograr la estabilidad de precios.

Dentro de este segundo pilar, las elevadas tasas de crecimiento registradas por la actividad económica de la zona euro, medida por producción industrial, fueron otras de las razones esgrimidas por el BCE para elevar los tipos de interés durante el ejercicio 2000. El comportamiento de la demanda interna, que respondió a la todavía elevada confianza de los consumidores, al descenso del desempleo en el conjunto de los Estados miembros y a la elevada confianza empresarial, junto a la recuperación de la demanda externa, mantuvieron las favorables expectativas respecto a una posible expansión de la actividad económica de la Eurozona durante 2000 y 2001.

Desviación del IPC armonizado de su valor de referencia

Finalmente, respecto al objetivo directo de mantener la estabilidad de precios, el BCE siguió de cerca la evolución de la inflación medida por el IPCA[61]. Este índice sufrió a lo largo de 2000 las consecuencias de la trayectoria seguida por los precios del pe-

[61] El IPCA es el estimado por Eurostat para todos los Estados miembros, excluyendo los componentes de más difícil comparación entre países e incluyendo los precios de bienes y servicios recientemente significativos en el gasto de las familias. En el caso español quedan excluidos los servicios médicos, los medicamentos subvencionados y la enseñanza reglada.

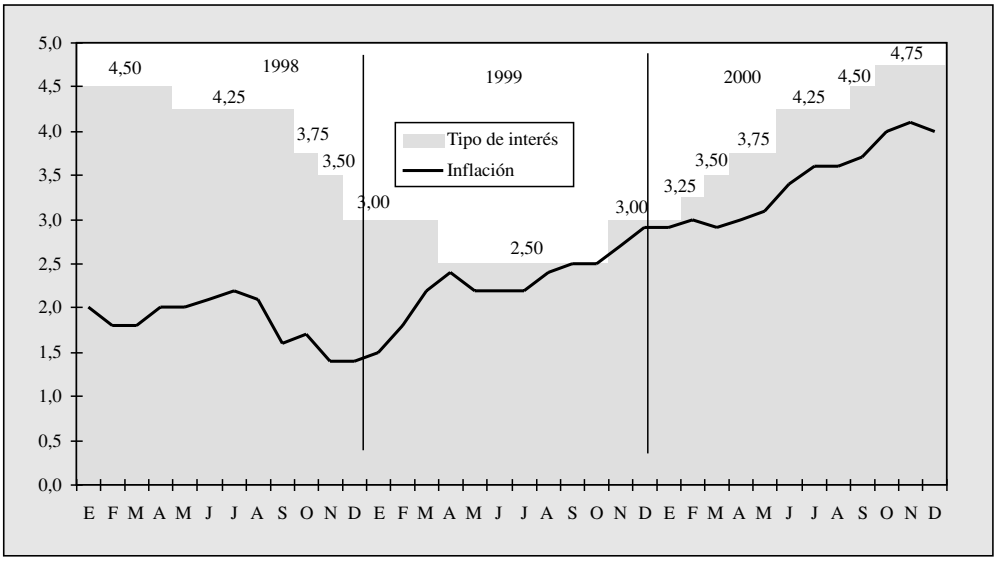
tróleo, cuyo encarecimiento resultó reforzado por la depreciación continuada del euro a lo largo del año. Este último factor elevó igualmente los precios de las importaciones tanto de los productos intermedios como de consumo.

Desde mayo el IPCA para el conjunto de la Eurozona se mantuvo por encima del objetivo de inflación del BCE utilizado para definir la estabilidad de precios (2,0 por 100), llegando en noviembre a alcanzar un 2,9 por 100. No obstante, a finales de año, el descenso de los precios del petróleo y la incipiente recuperación del euro permitieron registrar una inflación de 2,6 por 100, cifra que, pese a estar todavía 0,6 puntos porcentuales por encima del objetivo de inflación, al menos indicaría un cambio en la tendencia.

Por grupos (cuadro I-20), los mayores niveles de inflación fueron los registrados por la Vivienda (5,3 por 100), el Transporte (3,8) y la Enseñanza (3,1). Además destacó el comportamiento del precio de los Alimentos que inició el año 2000 con deflación (–0,1) para finalizarlo con una tasa de inflación de 2,6 por 100. Del conjunto de países de la zona euro solamente Irlanda (4,6 por 100) y Luxemburgo (4,3 por 100) superaron la inflación registrada por la economía española, cuyo IPC armonizado alcanzó un 4,0 por 100; en el otro extremo, el Reino Unido (0,9 por 100), Suecia (1,3 por 100) y Francia (1,7 por 100) fueron los países del conjunto de la Unión Europea con menor inflación.

El establecimiento de una política monetaria restrictiva durante el ejercicio 2000 fue, en general, acogido con satisfacción en España (gráfico I-12). Las tensiones inflacionistas sufridas a lo largo del año incluso podrían haber requerido una restricción aún mayor que hubiera reducido, o al menos mantenido, el diferencial de inflación de España respecto a la Unión Europea. El aumento de la brecha inflacionista se tradujo en una notable pérdida de competitividad respecto a nuestros socios comunitarios que, en el caso de una recuperación de la cotización de la moneda única antes de la corrección de este diferencial de inflación, podría extenderse a los intercambios con países no pertenecientes a la Eurozona.

GRÁFICO I-12
IPC DE ESPAÑA Y TIPOS DE INTERÉS



Fuente: Ministerio de Economía. *Síntesis de Indicadores Económicos*.

Conscientes del escaso margen de maniobra del que se dispone en el marco de la UEM las autoridades españolas, al igual que sucediera en 1999, introdujeron a finales del mes de junio una serie de medidas liberalizadoras y de reforma (cuadro I-6). Oficialmente las reformas no revelaron una pretensión directa de influir sobre los precios, lo que resultaba coherente con la postura oficial sobre la exogeneidad de los factores explicativos de la inflación de 2000; no obstante, era de esperar que el conjunto de medidas previstas para «dotar a la economía española de mercados más flexibles y competitivos» tuviera efectos favorables sobre la evolución a medio plazo de los precios.

5.3. MERCADOS FINANCIEROS

Tal y como se ha expuesto al analizar la política monetaria única, el tipo de interés de intervención[62] o de las operaciones princi-

[62] Antes de la UEM el tipo de intervención de la política monetaria en España era el tipo marginal de la subasta decenal del Banco de España.

pales de financiación del BCE registró una subida de 1,75 puntos porcentuales a lo largo del ejercicio, es decir que pasó de 3,0 por 100 a 4,75 por 100. La consolidación del cambio hacia una política monetaria más restrictiva para el conjunto de la zona euro tuvo igualmente consecuencias en el comportamiento de los mercados monetarios españoles. De este modo, los tipos de interés reales[63] a tres meses, que son los más relevantes en cuanto a la decisión de gasto de los agentes económicos, ascendieron a 0,98 por 100. Aunque el avance fue escaso respecto al registrado en 1999, sólo 0,34 puntos porcentuales (cuadro I-22), el simple cambio en la tendencia de la política monetaria hacia una mayor restricción ralentizó el ritmo de endeudamiento de las economías domésticas.

Respecto al mercado interbancario español, que responde a las necesidades de liquidez de las entidades financieras, destacó el avance del 28,2 por 100 mostrado por el volumen de contratación a pesar del crecimiento del tipo de interés medio real a corto plazo. Este crecimiento del volumen de contratación, concentrado en los últimos meses de 2000, podría haber respondido al nuevo sistema de subastas a tipo de interés variable[64], que desde mediados de año habrían favorecido la obtención de más fondos por parte de las entidades españolas en el mercado de depósitos interbancarios.

Por otra parte, respecto a los rendimientos ofrecidos por las Obligaciones del Estado a diez años en términos nominales disminuyeron, pasando de 5,37 por 100 en diciembre de 1999 a 5,20 por 100 en diciembre de 2000. Esta caída en la rentabilidad de estos títulos de deuda pública a largo plazo se hace más patente al analizar los rendimientos medios reales, es decir, descontando la inflación, observándose que se pasó de 2,4 por 100 a 2,1 por 100 (cuadro I-22). El descenso en la rentabilidad de la deuda pública a diez años fue común a otros Estados miembros de la Eurozona; en concreto, tanto Francia como Alemania experimen-

[63] Tipo de interés del mercado interbancario (euribor) a tres meses deflactado por el IPC medio anual.

[64] Inicialmente el BCE decidió instaurar un sistema de subasta a tipo fijo para la gestión de la liquidez; sin embargo, las entidades de crédito, realizaron peticiones muy por encima de sus necesidades (y en consecuencia, de las necesidades del Eurosistema) para asegurarse una cuota de adjudicación de liquidez. Esta irregularidad en el sistema, agravada en los periodos inmediatamente anteriores a las subidas de tipos, provocó el cambio a las subastas a tipo variable.

CUADRO I-22

TIPOS DE INTERÉS REALES DE ESPAÑA, ALEMANIA Y FRANCIA, 1992-2000

Años	Tipo a corto plazo (1)			Tipo a largo plazo (2)		
	Alemania	Francia	España	Alemania	Francia	España
1992	4,4	7,7	7,4	2,9	6,2	6,7
1993	2,7	6,2	7,1	2,0	4,7	5,5
1994	2,6	4,0	3,3	4,2	5,5	4,6
1995	2,5	4,6	4,7	5,0	5,7	6,2
1996	1,7	1,8	4,0	4,7	4,3	5,2
1997	1,6	2,1	3,4	3,9	4,4	4,4
1998	2,5	2,7	2,4	3,6	3,9	3,0
1999	2,3	2,3	0,6	3,9	4,0	2,4
2000	2,4	2,6	1,0	3,4	3,7	2,1

(1) Medias anuales de los tipos del interbancario a 3 meses, deflactados por el IPC medio anual.
(2) Medias anuales de los tipos de interés de la deuda a 10 años, deflactados por el IPC medio anual.
Fuentes: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España y del Ministerio de Economía.

taron caídas en los intereses reales medios ofrecidos por este tipo de títulos, en gran parte resultado del peor comportamiento de la inflación también en estas economías.

Finalmente, en lo relativo al comportamiento de los mercados de renta fija privada durante 2000, frente a lo acontecido en 1999, los inversores fueron más selectivos a la hora de colocar sus fondos, primando los valores de buena calificación crediticia con alto grado de liquidez. En este contexto, las emisiones netas de obligaciones de las sociedades no financieras se redujeron en un 1,8 por 100 en el ejercicio 2000, alcanzando un valor de 1,2 billones de pesetas.

Escasos rendimientos bursátiles

Esta mayor aversión al riesgo mostrada por los inversores en los mercados de renta fija privada durante 2000 alcanzó su máxima expresión en los mercados de renta variable. En línea con las principales plazas financieras internacionales, el mercado de renta variable español ofreció en 2000 unos pobres rendimientos a los inversores. Desde mediados de año, la alta volatilidad mostrada por los mercados bursátiles respondió al temor de que finalmente el aterrizaje de la economía norteamericana no fuese tan suave como se había anunciado. Esta incertidumbre, que afectó a las cotizaciones en el índice Dow Jones, contagió, a su vez, a las principales bolsas europeas, que, por su parte, ya se encontraban lastradas por las presiones inflacionistas provenientes de evolución del tipo del cam-

bio del euro y la escalada del precio del petróleo, hechos a los que el BCE había respondido con elevaciones del tipo de interés hasta el 4,75 por 100 a finales de año, como se ha comentado anteriormente.

El índice general de la Bolsa de Madrid cerró el ejercicio con un retroceso de 12,7 por 100, situándose en 880,7; este índice no había vuelto a registrar rendimientos negativos desde 1995. Este pobre resultado caracterizó igualmente al resto de las bolsas españolas, de modo que Barcelona cayó un 6,2 por 100, Bilbao un 17,4 por 100 y Valencia un 11,6 por 100. A pesar de que el deterioro fue generalizado, el análisis de los índices sectoriales de la Bolsa de Madrid revela que dos sectores lograron cerrar el año con revalorizaciones: por un lado, los valores bancarios, con un aumento interanual de su cotización del 9,4 por 100, que respondió a las ampliaciones de capital de algunas entidades y a unas cifras de beneficios que superaron con creces las expectativas; y por otro, el índice de Alimentación, Bebida y Tabaco, que mostró una revalorización[65] del 9,3 por 100, en claro contraste con el retroceso de 26,2 por 100 registrado en 1999. El resto de sectores mostraron descensos en sus cotizaciones, aunque destacaron los rendimientos negativos registrados por las Comunicaciones que, tras haber sido el sector estrella durante 1998 (+48 por 100) y 1999 (+86,6 por 100), en 2000 su cotización descendió un 27,1 por 100.

La evolución de las cotizaciones de los sectores y los resultados del índice general, más concretamente del IBEX 35, que retrocedió un 21,7, respondieron, en gran parte, a la volatilidad sufrida por los valores del grupo Telefónica[66], y pusieron de manifiesto que, frente a otros índices europeos, en el mercado español ningún valor jugó el papel de «valor refugio» o defensivo. El sector eléctrico, que durante otros periodos de volatilidad se prestó a desempeñar dicho papel, durante 2000 estuvo afectado por la incertidumbre acerca del resultado de la fusión entre Endesa e Iberdrola.

[65] El comportamiento del sector Alimentación, Bebidas y Tabaco respondió a la favorable trayectoria seguida por Altadis (anteriormente Tabacalera), que con un avance del 17,53 por 100 empujó las cotizaciones de este sector, puesto que sus valores son los de mayor peso dentro del mismo.

[66] Los valores del grupo Telefónica mantienen un peso de cerca del 28,9 por 100 en el IBEX 35.

En definitiva, una gran parte de los retrocesos experimentados por la Bolsa de Madrid respondió a la evolución seguida por los sectores de Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, cuyas cotizaciones siguen generalmente las trayectorias marcadas por los mercados internacionales. De este modo, aunque se esperaba que durante el ejercicio 2000 despegase con éxito el «Nuevo Mercado», que se había creado respondiendo a las necesidades de financiación de las empresas de alta tecnología o de alto potencial de crecimiento[67], pronto su tendencia se vio afectada por el deterioro experimentado por el NASDAQ[68], en cierto modo su homólogo estadounidense[69]

Caídas en el patrimonio de los fondos de inversión

Los escasos rendimientos bursátiles provocaron graves consecuencias en el comportamiento de los fondos de inversión, que sufrieron a lo largo de 2000 un descenso en su patrimonio de un 11,3 por 100, obteniendo una rentabilidad media negativa del 2,6 por 100. Sólo los rendimientos de un 15,0 por 100 de los fondos comercializados superaron la inflación interanual del 4,0 por 100. Los pobres resultados tuvieron como consecuencia, además, la salida de numerosos inversores que prefirieron los depósitos a plazo. Los fondos que más capital perdieron fueron los Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM) de renta fija, que perdieron 1,88 billones de pesetas, seguidos de la renta fija mixta y los garantizados de acciones; no obstante, destacó el aumento de la inversión en fondos en renta variable internacional.

A pesar de los escasos rendimientos, durante el ejercicio 2000, la Bolsa de Madrid fue testigo de registros históricos. La contratación superó en un 82 por 100 la de 1999, alcanzando los 60,6 billones de pesetas, esto es, 20 veces más de lo negociado en 1990.

[67] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999,* pág. 114.

[68] El descenso del NASDAQ respondió a la corrección que hizo el mercado de la fiebre compradora que se había venido produciendo hasta el primer trimestre de 2000. La inversión en los valores de algunas compañías relacionadas con las nuevas tecnologías y la informática se frenó desde la decisión judicial contra Microsoft a finales de marzo. Desde entonces el desplome de algunos valores puso de manifiesto una de las características de este tipo de «nuevos mercados» como es el alto margen de fluctuación diaria permitido.

[69] No obstante, del conjunto de compañías que forman el Nuevo Mercado, algunas como Zeltia, Abengoa o Indra, experimentaron revalorizaciones frente a Terra y Sogecable, cuyas caídas marcaron la tendencia del sector.

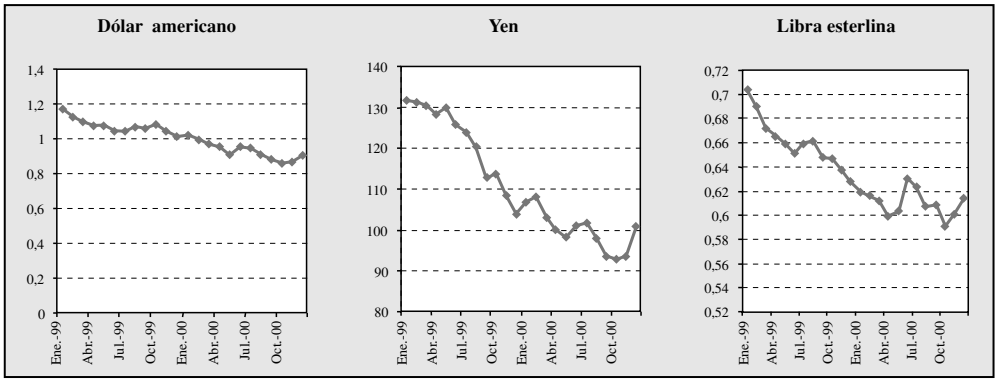
Este hecho resulta paradójico en un ejercicio de tan escasa rentabilidad bursátil; sin embargo, respondió tanto a la mayor afinidad del ahorro privado, de las familias y de las empresas no financieras por el mercado de renta variable, como a la adaptación tecnológica demostrada por la Bolsa, que agilizó las operaciones. Asimismo, la Bolsa de Madrid alcanzó un récord histórico al acoger a 1.005 empresas en su seno frente a las 727 de 1999 o las 484 de 1998.

5.4. La debilidad continuada del euro

Desde el inicio de la tercera fase de la UEM, la cotización del euro en los mercados internacionales se depreció de forma continuada frente a las principales monedas. Aunque en 1999 la magnitud de la depreciación fue mayor que en el ejercicio 2000 (13,7 por 100 de depreciación frente al 11,2 por 100), la caída del euro durante este último año resultó más llamativa, ya que se situó por debajo de la paridad con el dólar. En efecto, el tipo de cambio con la divisa norteamericana pasó de 1,014 dólares por euro en enero de 2000 a 0,897 a finales de año (gráfico I-13).

Tomando como referencia los valores de enero, los mercados llegaron a registrar una depreciación de la moneda única frente al dólar del 27,6 por 100 a finales de septiembre, con lo que el euro llegó

Gráfico I-13
COTIZACIÓN DEL EURO FRENTE AL DÓLAR, AL YEN Y A LA LIBRA ESTERLINA



Fuente: Ministerio de Economía.

a cotizar a 0,844 dólares. Aunque todavía por encima del registro mínimo del ecu frente al dólar de 1985, 0,7 dólares por ecu, la depreciación de septiembre fue lo suficientemente importante como para justificar una intervención en los mercados de divisas a favor del euro. En consecuencia, el 14 de septiembre el BCE realizó una primera intervención unilateral en los mercados cambiarios, con escasa repercusión; ocho días después, en la víspera de la reunión del G7 en Praga, el BCE, la Reserva Federal y el Banco de Japón intervinieron en los mercados de divisas en su primera operación concertada a favor del euro. Después de esta intervención concertada se produjeron otras unilaterales por parte de la autoridad monetaria europea que tuvieron, igualmente, escasos resultados[70].

Razones coyunturales detrás de un euro débil

El euro sólo experimentó una relativa recuperación, a finales de ejercicio, cuando se sucedieron las noticias respecto a la posible desaceleración de la economía norteamericana. Por lo tanto, se podría llegar a considerar que las dificultades que atravesó la moneda única durante 1999 y 2000 respondieron más a la bonanza económica de los Estados Unidos que a problemas económicos estructurales de la Eurozona. En consecuencia, al analizar los fundamentos económicos, se podría afirmar que el tipo de cambio del euro respecto al dólar estuvo infravalorado durante 2000, de modo que la conjunción en el corto plazo de una serie de circunstancias[71] habría provocado el desajuste descrito.

En primer lugar, la depreciación del euro mantuvo una correlación elevada respecto al diferencial de crecimiento de la zona euro frente al de la economía norteamericana, favorable en todo momento a esta última, puesto que presentaba una posición cíclica más adelantada que la europea. Además, las previsiones de crecimiento resultaron, a lo largo de 2000, más favorables para la economía estadounidense, puesto que, a los argumentos que en general se esgrimen respecto a la mayor flexibilidad de sus mercados de bienes y de trabajo, se une el mayor desarrollo de este país en las denominadas «nuevas tecnologías».

En segundo lugar, la brecha existente entre las tasas de crecimiento afectó igualmente a las expectativas sobre la evolución de

[70] Véase capítulo I, epígrafe 7.2.2.

[71] Fondo Monetario Internacional, *World Economic Outlook,* septiembre, 2000.

los tipos de interés. En un contexto de alta movilidad de capitales esta situación provocaría una huida desde posiciones mantenidas en euros hacia valores denominados en dólares, circunstancia corroborada por los flujos de capital, en particular de inversión directa extranjera, que desde la zona euro se desplazaron hacia los Estados Unidos durante el ejercicio 2000.

Asimismo, desde el inicio de la tercera fase de la UEM la participación extranjera en las emisiones de bonos en euros creció de manera notable. Según el Banco Internacional de Pagos de Basilea, las emisiones brutas de bonos denominadas en euro alcanzaron cerca del 38 por 100 del total de los mercados internacionales de bonos, a poca distancia del 43,0 por 100 de las emisiones en dólares. Normalmente los emisores no residentes cambian el importe de las emisiones denominadas en euros en otras monedas, principalmente en dólares, lo que presionaría sobre el tipo de cambio del euro.

Necesidad de reforzar el euro como moneda de reserva

Además de estas razones coyunturales se observa que la todavía escasa utilización del euro como moneda de reserva internacional explicaría, igualmente, parte de la evolución seguida por la moneda única a lo largo de 2000. En este ámbito, el dólar continúa siendo la moneda preferida a la hora de definir las reservas de moneda extranjera; esta circunstancia resulta obvia si se considera que la mayor parte de las transacciones comerciales internacionales se denominan en la divisa norteamericana y que, además, la mayor parte del endeudamiento de las economías emergentes está definida en dólares. Pero a estas circunstancias, que explican la preponderancia del dólar como moneda de reserva internacional, se suma el hecho de que el nacimiento del euro ha supuesto que algunos de los países de la Eurozona deshicieran las posiciones mantenidas en monedas de otros Estados miembros de la UEM, ya que desde el 1 de enero de 1999 equivaldrían a mantener reservas en su propia moneda, el euro, lo que no tendría lógica alguna.

Por último, la cotización de la moneda única sufrió, igualmente, a lo largo de 2000, la incertidumbre sobre las decisiones del BCE, agravada por la inexistencia de una estrategia de comunicación adecuada por parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Algunas declaraciones públicas sobre la bondad de un euro débil,

los mensajes contradictorios lanzados respecto al tipo de interés más adecuado a la situación económica de la Unión Europea[72], e incluso las reservas mostradas por el BCE a la entrada del dracma en el euro el 1 de enero de 2001, pese a haber sido decidido en el Consejo de Feira de junio de 2000, probablemente favorecieron la caída de la moneda única.

6. SECTOR PÚBLICO: HACIA EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Las Administraciones Públicas cerraron el año 2000 con un déficit del 0,3 por 100 del PIB, inferior al inicialmente previsto que era del 0,8 por 100, e inferior igualmente al 1,2 por 100 registrado en 1999 (cuadro I-23). El ritmo de consolidación presupuestaria de las cuentas públicas en 2000 obedeció, por un lado,

CUADRO I-23
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 1999-2000
(En miles de millones y tasa de variación)

Conceptos	1999		2000		00/99
	m.m.	% PIB	m.m.	% PIB	% Var.
Administración Central	**–1.032,5**	**–1,1**	**–561,1**	**–0,6**	**–45,7**
Estado	–1.105,0	–1,2	–626,1	–0,6	–43,3
Organismos de la Administración Central	72,5	0,1	65,0	0,1	–10,3
Administraciones Seguridad Social	**–188,3**	**–0,2**	**–282,3**	**–0,3**	**49,9**
Administraciones Territoriales	**–195,8**	**–0,2**	**–326,3**	**–0,3**	**66,6**
Comunidades Autónomas	7,5	0,0	44,0	0,0	486,7
Corporaciones Locales	129,6	0,1	499,5	0,5	285,4
Administraciones Públicas	**–1.091,2**	**–1,2**	**–343,9**	**–0,3**	**–68,5**
PIB *utilizado*	93.693,4		100.872,7		

Fuente: IGAE.

[72] Países como España o Irlanda, con niveles de inflación por encima de la media comunitaria, consideraron que las subidas de los tipos oficiales del BCE eran insuficientes para controlar las presiones inflacionistas; por el contrario, en otros Estados miembros, como Alemania, se consideró que las subidas de tipos eran prematuras.

al aumento de los ingresos públicos en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad económica y en menor medida del empleo y, por otro lado, y en mayor medida, al recorte del gasto público. En el Presupuesto para 2001 se prevé por primera vez desde hace casi tres décadas un saldo nulo de las cuentas públicas, y para asegurar en el futuro la disciplina presupuestaria que evite el déficit y reducir la deuda de las Administraciones Públicas, el Gobierno impulsó en 2000 un Proyecto de Ley General de Estabilidad presupuestaria.

6.1. La liquidación del Presupuesto del Estado para 2000

Las cifras de ejecución del Presupuesto no financiero del Estado de 2000 registraron un déficit en términos de contabilidad de caja, es decir, teniendo en cuenta los ingresos y los pagos efectivamente realizados a lo largo del año, de 404,5 miles de millones, lo que implica una reducción del 61,7 por 100 respecto a 1999 (cuadro I-24). El déficit de caja supuso 0,3 puntos en términos de PIB. Conviene recordar que la información disponible en términos de caja se refiere únicamente al Estado, por lo que estas magnitudes no dejan de ser una aproximación parcial al conjunto de las Administraciones Públicas, sobre todo teniendo en cuenta que se han producido y siguen produciéndose importantes transferencias de competencias a los gobiernos subcentrales.

Austeridad en el gasto

Los ingresos no financieros aumentaron un 7,5 por 100, mientras que los gastos sólo crecieron el 3,8 por 100. Esto indica que la importante reducción del déficit se debió a la conjunción de una coyuntura económica favorable al aumento de los ingresos públicos, sobre todo de los impuestos directos, de una orientación restrictiva del gasto público, y de una evolución muy favorable de los pagos de intereses de la deuda.

Si del total de pagos realizados en el ejercicio se deducen los gastos financieros correspondientes a la financiación del déficit, se obtiene el saldo primario de caja, que en 2000 ascendió a 2.543,0 miles de millones, superior en un 19,9 por 100 al superávit primario registrado en 1999.

CUADRO I-24
DÉFICIT (–) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO, 1999-2000
(En miles de millones y tasa de variación)

Conceptos	1999	2000	% Var.
Ingresos no financieros	**18.364,0**	**19.748,9**	**7,5**
Impuestos	15.776,6	17.085,0	8,3
Otros ingresos	2.581,1	2.353,4	–8,8
Ingresos sin clasificar	6,3	–19,6	–411,1
Pagos no financieros	**19.421,3**	**20.153,4**	**3,8**
Operaciones corrientes	17.401,8	18.165,0	4,4
Operaciones de capital	2.019,5	1.988,5	–1,5
Pagos sin clasificar	—	–0,1	—
Déficit (–) de caja no financiero	**–1.057,3**	**–404,5**	**–61,7**
Pagos por intereses	**3.178,0**	**2.947,5**	**–7,3**
Saldo primario	**2.120,7**	**2.543,0**	**19,9**

Fuente: IGAE.

La *regla de oro*[73] del presupuesto clásico continúa cumpliéndose, ya que el déficit de caja sólo representó un 20,3 por 100 de los gastos por operaciones de capital, que ascendieron a 1.988,5 miles de millones. El ahorro por operaciones corrientes, 1.277 mil millones, más los ingresos de capital, 306,9 mil millones, permitieron financiar el 79,7 por 100 restante de los gastos de inversión.

6.1.1. **Ingresos no financieros**

En 2000 los ingresos no financieros del Estado ascendieron a 19.748,9 miles de millones, de los que el 86,5 por 100 correspondieron a la recaudación de impuestos (cuadro I-25). Los ingresos procedentes de la imposición directa aumentaron un 9,3 por 100, por encima de las previsiones, y superaron ligeramente a los obtenidos por los impuestos indirectos, que crecieron un 7,3 por 100, menos de lo esperado.

Los impuestos directos superaron ligeramente a los indirectos

Los impuestos directos generaron unos ingresos de 8.552,8 miles de millones, de los cuales 5.344,2 correspondieron al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que creció un 4,6

[73] Se verifica la *regla de oro* del Presupuesto cuando el déficit público es inferior a la inversión.

CUADRO I-25
INGRESOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO, 1999-2000
(En miles de millones y tasa de variación)

Conceptos	1999	2000	% Var.
Impuestos directos	**7.826,3**	**8.552,8**	**9,3**
Renta de personas físicas	5.109,3	5.344,2	4,6
Renta de sociedades	2.435,3	2.863,0	17,6
Plusvalías enajenación empresas públicas	69,4	10,0	–85,6
Renta de no residentes	120,3	182,8	52,0
Cuota de derechos pasivos	114,3	108,1	–5,4
Otros impuestos directos	47,1	54,7	16,1
Impuestos indirectos	**7.950,3**	**8.532,2**	**7,3**
Impuesto sobre el Valor Añadido	5.113,8	5.557,1	8,7
Importaciones	1.326,3	1.696,4	27,9
Operaciones interiores	3.787,5	3.860,7	1,9
Impuestos especiales	2.566,5	2.671,6	4,1
Tráfico exterior	144,1	161,2	11,9
Impuesto sobre primas de seguro	114,5	131,3	14,7
Otros impuestos indirectos	11,4	11,0	–3,5
Tasas y otros ingresos	**446,1**	**330,2**	**–26,0**
Diferencia valores de reembolso y emisión	139,2	24,3	–82,5
Transferencias corrientes	**718,2**	**992,8**	**38,2**
Ingresos patrimoniales	**1.113,9**	**1.021,2**	**–8,3**
Procedentes del Banco de España	1.017,9	838,1	–17,7
Enajenación activos de empresas públicas	34,0	13,7	–59,8
Enajenación de inversiones reales	**14,9**	**12,8**	**–14,1**
Transferencias de capital	**288,0**	**326,5**	**13,4**
Otros ingresos sin clasificar	**6,3**	**–19,6**	**–411,1**
Total ingresos no financieros	**18.364,0**	**19.748,9**	**7,5**

Fuente: IGAE.

por 100, superando la previsión presupuestaria en 195,1 miles de millones. Esta evolución favorable del IRPF se debió al buen comportamiento de los pagos a cuenta derivados de las retenciones sobre rendimientos del trabajo, reflejo de la buena coyuntura del mercado de trabajo durante 2000, de las ganancias de los fondos de inversión y de los arrendamientos urbanos, incrementos éstos que fueron compensados en parte por el descenso de las retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliario y por la disminución de las liquidaciones anuales con resultado positivo.

El Impuesto sobre Sociedades es una de las figuras tributarias que experimentó un mayor crecimiento, el 17,6 por 100, lo que pone de relieve el importante incremento de los beneficios empresariales que

tuvo lugar en 2000. La recaudación por este impuesto asciende a 2.863,0 miles de millones, cifra que superó ampliamente la previsión presupuestaria, a pesar de la importante disminución que sufrieron los ingresos derivados de privatizaciones. La recaudación del resto de los impuestos directos —el Impuesto sobre la Renta de no Residentes[74], el Impuesto sobre el Patrimonio[75], y las cotizaciones sociales procedentes del régimen especial de clases pasivas aplicable a los funcionarios públicos—, que ascendió a 345,6 miles de millones, resulta poco significativa en el conjunto de la imposición directa.

La recaudación de los impuestos indirectos alcanzó en 2000 la cifra de 8.532,2 miles de millones, lo que supuso un crecimiento del 7,3 por 100 respecto al año anterior. Los ingresos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el tributo con mayor peso dentro de esta categoría, crecieron un 8,7 por 100. El comportamiento de esta magnitud defraudó en buena medida las expectativas que auguraban un crecimiento de la recaudación similar al de 1999, que fue del 17 por 100. La pérdida de impulso de la demanda interna que caracterizó el segundo semestre del año, dio lugar a un pronunciado descenso de la recaudación por IVA sobre operaciones interiores en la segunda mitad del ejercicio, que en el conjunto del año aumentó tan sólo un 1,9 por 100. Este dato resulta un tanto sorprendente teniendo en cuenta que la demanda interna aumentó un 8,7 por 100 en términos corrientes en el conjunto del año. El IVA que recae sobre las importaciones, en cambio, creció un 27,9 por 100, incremento notable que en parte se explica por el aumento de precios derivado del encarecimiento del petróleo.

Los impuestos especiales, por su parte, generaron unos ingresos de 2.671,6 miles de millones, es decir, aumentaron un 4,1 por 100 respecto a 1999. Este crecimiento fue más moderado que el que tuvo lugar en 1999 debido, en parte, a la congelación de las tarifas impositivas que se produjo en 2000 y, en parte, a que la figura tributaria con mayor poder recaudatorio de este epígrafe, el Impuesto sobre Hidrocarburos, acusó el suave proceso de desaceleración del

[74] Impuesto creado por la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, que afecta a los no residentes que hasta entonces tributaban, tanto por IRPF como por el Impuesto de Sociedades, en la modalidad denominada «obligación real de contribuir».

[75] Debido a que es uno de los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas, el Estado sólo recauda los ingresos procedentes de las Comunidad Autónoma de Madrid y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

consumo de gasolinas y gasóleos, y registró un incremento de ingresos de tan sólo el 1,5 por 100.

En cuanto a la recaudación no impositiva, los ingresos provenientes de tasas, precios públicos y otros ingresos se han reducido un 26 por 100 debido al acusado descenso de las primas positivas de emisión de deuda pública. También se han contraído los ingresos derivados de enajenaciones de inversiones reales y los patrimoniales, en este caso, debido al menor beneficio ingresado por el Banco de España y a la reducción de los dividendos obtenidos en operaciones de privatización de empresas públicas. Por el contrario, las transferencias que recibió el Estado en 2000 aumentaron, tanto las corrientes como las de capital. En el primer caso ascendieron a 992,8 miles de millones, un 38,2 por 100 más que en 1999, debido fundamentalmente a la devolución de 315,8 miles de millones realizada por la Seguridad Social. Las transferencias de capital recibidas por el Estado, por su parte, que procedieron mayoritariamente de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, ascendieron a 326,5 miles de millones, un 13,4 por 100 más que en el ejercicio anterior.

6.1.2. **Gastos no financieros**

Los pagos totales no financieros del Estado alcanzaron en 2000 la cifra de 20.153,4 miles de millones, lo que refleja un crecimiento del 3,8 por 100 respecto al año anterior (cuadro I-26). El gasto por operaciones corrientes, que representó el 90,1 por 100 de los pagos totales, experimentó un crecimiento moderado del 4,4 por 100, que se explica porque el importante aumento de las transferencias corrientes, la principal partida de gasto, fue compensado en parte por la contracción del consumo público y, sobre todo, de los gastos financieros. En este sentido, descontados los pagos de intereses, los gastos corrientes crecieron un 7,0 por 100, por lo que el efecto beneficioso del abaratamiento de la deuda resulta ser un factor decisivo en la contención del gasto, una fuente de ahorro coyuntural que podría diluirse en el futuro.

Reducción de todos los gastos corrientes

En cuanto a las distintas partidas de gasto corriente, el gasto de personal sufrió una reducción del 9,2 por 100, fundamentalmente debido al traspaso de competencias en materia de educación a de-

CUADRO I-26
PAGOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO, 1999-2000
(En miles de millones y tasa de variación)

Conceptos	1999	2000	% Var.
Operaciones corrientes	**17.401,8**	**18.165,0**	**4,4**
Gastos de personal	2.978,6	2.705,7	–9,2
Gastos en bienes y servicios	436,1	394,6	–9,5
Gastos financieros	3.178,0	2.947,5	–7,3
Transferencias corrientes	10.809,1	12.117,2	12,1
Operaciones de capital	**2.019,5**	**1.988,5**	**–1,5**
Inversiones reales	956,6	1.003,8	4,9
Transferencias de capital	1.062,9	984,7	–7,4
Otros pagos sin clasificar	**—**	**–0,1**	**—**
Total pagos no financieros	**19.421,3**	**20.153,4**	**3,8**

Fuente: IGAE.

terminadas Comunidades Autónomas. El gasto realizado en la compra de bienes y servicios se redujo asimismo un 9,5 por 100 respecto a 1999, siendo Defensa e Interior los Departamentos Ministeriales que más gastaron por este concepto. Las cantidades abonadas por intereses y demás costes derivados del endeudamiento alcanzaron la cifra de 2.947,5 miles de millones, un 7,3 por 100 menos que el ejercicio anterior, debido a los ahorros que sigue reportando el canje de la deuda realizado desde la pasada legislatura, así como los menores gastos derivados de las diferencias de cambio.

El capítulo de transferencias corrientes creció un 12,1 por 100. Esta importante expansión se explica, en primer lugar, porque en 2000 se produce un significativo avance en la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Así, el sistema sanitario pasa a financiarse totalmente por el Estado, lo mismo que las prestaciones sociales no contributivas y los servicios sociales, todo lo cual se tradujo en una transferencia a la Seguridad Social de 4.863,8 miles de millones, un 21,1 por 100 más que en 1999. En segundo lugar, se produjo un notable crecimiento de las transferencias a las Comunidades Autónomas para financiar el traspaso de competencias educativas, que aumentaron un 30,8 por 100. Crecieron por debajo de la media de este capítulo las transferencias a las Corporaciones Locales, un 7,6 por 100, y a las familias e instituciones sin fines de lucro, un 1,4 por 100. Por último, se redujeron considerablemente las transferencias a organismos autónomos

(un 20,4 por 100 atribuible a los menores pagos efectuados al INEM) y a empresas privadas.

Finalmente, los pagos efectuados por el Estado por operaciones de capital alcanzaron la cantidad de 1.988,5 miles de millones, cuantía inferior en un 1,5 por 100 a la registrada en el ejercicio precedente. Este comportamiento agregado fue el resultado, por un lado, del aumento del 4,9 por 100 del gasto en inversiones reales, que ascendieron a 1.003,8 mil millones, el 26,2 por 100 de carácter militar. Por otro lado, las transferencias de capital se contrajeron un 7,4 por 100 en buena medida como consecuencia de la reducción de las cantidades aportadas al Fondo de Compensación Interterritorial.

6.1.3. **Endeudamiento y financiación**

Menor necesidad de endeudamiento

El Estado saldó el ejercicio 2000 con una necesidad de endeudamiento de 1.549,8 miles de millones, reduciéndose un 35,4 por 100 respecto a 1999 (cuadro-I-27). Esta mejora se debió en su mayor parte a los buenos resultados de las operaciones no financieras ya comentados. El segundo componente de la necesidad de endeudamiento, los activos financieros netos, aumentó en 1.145,3 miles de millones, un aumento inferior al registrado en 1999 en un 14,6 por 100.

La cartera de valores del Estado registró un incremento del 13,1 por 100 respecto al año anterior. Las principales compras de acciones correspondieron a las denominadas Sociedades de Aguas y en la constitución de las Sociedades Estatales para la Consolidación y Modernización de Regadíos. Por su parte, el volumen de préstamos concedidos, que se destinó en gran parte a proyectos aeronáuticos y navales, se redujo un 71 por 100 respecto al registrado en 1999, principalmente por la supresión de los préstamos concedidos a la Seguridad Social que se produjo en el ejercicio, dado el grado de saneamiento financiero del sistema. Asimismo, se redujo el montante de operaciones patrimoniales un 8,4 por 100, y el de las operaciones de depósito y anticipos concedidos por el Estado, incluidas en la rúbrica de otros activos, presentaron una minoración de 109,8 miles de millones.

CUADRO I-27

NECESIDAD (–) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO DEL ESTADO, 1999-2000

(En miles de millones y tasa de variación)

Conceptos	1999	2000	% Var.
Déficit (–) de caja no financiero	**–1.057,3**	**–404,5**	**–61,7**
Variación de activos financieros	**1.341,0**	**1.145,3**	**–14,6**
Acciones y participaciones	77,8	88,0	13,1
Préstamos	185,2	52,2	–71,8
A CESCE	–44,5	–45,9	3,1
A la Seguridad Social	80,8	—	—
Otros préstamos	148,9	98,1	–34,1
Aportaciones patrimoniales	183,6	168,2	–8,4
Variación cuenta corriente en el Banco de España	761,0	946,7	24,4
Otros activos	133,4	–109,8	–
Necesidad (–) de endeudamiento	**–2.398,3**	**–1.549,8**	**–35,4**
Necesidad de endeudamiento sin los movimientos de la cuenta del Tesoro del Banco de España	–1.637,3	–603,1	–63,2

Fuente: IGAE.

Por último, el saldo de la cuenta corriente en el Banco de España se vio incrementado en 946,7 miles de millones, un 24,4 por 100 más que en 1999. Si no tuviéramos en cuenta esta operación, la necesidad de endeudamiento del Estado en el ejercicio 2000 quedaría reducida a 603,1 miles de millones, un saldo que supone una reducción del 63,2 por 100 respecto al periodo anterior.

El endeudamiento del Estado se financió básicamente a través de la emisión de deuda pública, cuyo saldo vivo aumentó en 2.945,2 miles de millones, un 9,7 por 100 menos que en 1999 (cuadro I-28). Asimismo, se recibieron préstamos en moneda nacional por valor de 153,3 miles de millones. Por lo que se refiere a las Letras del Tesoro, se amortizaron valores a corto plazo por un importe de 1.397,8 miles de millones, y siguió manteniéndose inalterado el saldo vivo de los títulos a medio plazo. Los préstamos recibidos por el Banco de España sufrieron una reducción igual que la del año 1999, de 83 mil millones, correspondientes a créditos recibidos con anterioridad a la prohibición comunitaria establecida en 1994 de recurrir a la financiación de los bancos centrales.

CUADRO I-28
FINANCIACIÓN NETA RECIBIDA POR EL ESTADO, 1999-2000
(En miles de millones y tasa de variación)

Conceptos	1999	2000	% Var
Letras del Tesoro a corto plazo	–44,1	–1.397,8	—
Deudas a medio y largo plazo	2.354,5	2.868,1	21,8
Obligaciones y bonos	2.354,5	2.868,1	21,8
Letras del Tesoro	—	—	—
Créditos del Banco de España	–83,0	–83,0	—
Otros créditos en pesetas	–30,3	153,3	—
Créditos y deuda en moneda extranjera	–59,0	–62,5	5,9
Otros pasivos netos	260,2	71,7	–72,4
Variación neta de pasivos financieros	**2.398,3**	**1.549,8**	**–35,4**
Variación de la c/c del Tesoro del Banco de España	761,0	946,7	24,4
Variación neta de pasivos financieros menos las posiciones activas de tesorería en el Banco de España	1.637,3	603,1	–63,2

Fuente: IGAE.

6.2. PRESUPUESTO PARA 2001: EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

La principal novedad de los Presupuestos Generales del Estado de 2001[76] es la consecución del equilibrio presupuestario por primera vez desde hace casi tres décadas. Este logro, sin embargo, ha sido objeto de un vivo debate ante la divergencia de opiniones que ha generado su estricto cumplimiento. Frente a la firme postura mostrada por el Gobierno a favor del popularmente denominado «déficit cero», se han manifestado numerosas voces que han cuestionado la oportunidad de la medida y la idoneidad del momento.

Objetivo: sin déficit público

Elaborados en el marco de la política de ajuste y de disciplina del gasto iniciada en 1996 reflejan los esfuerzos adicionales realizados, en una coyuntura económica expansiva, con el objetivo de lograr el equilibrio global de las cuentas públicas, en consonancia con los preceptos marcados en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2000-2004.

En términos de Contabilidad Nacional, el déficit del Estado en el año 2001 será del 0,3 por 100, cifra que, no obstante, será compensada por el superávit registrado, en la misma cuantía, en el presupuesto de la Seguridad Social, en un entorno de equilibro

[76] Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.

presupuestario global de las Administraciones Territoriales. Esta coyuntura favorable permite adelantar en un año el objetivo de déficit cero establecido inicialmente en el Programa de Estabilidad y Crecimiento (para mayor detalle véase el epígrafe 6.4). Sin embargo, a pesar del equilibrio, el Presupuesto de 2001 apenas incide en la reducción del componente estructural del déficit público y, en este sentido, conviene hacer hincapié en el hecho de que la reducción del déficit registrado entre 1999 y 2000 se debió principalmente a la mejoría del componente cíclico resultante del elevado crecimiento económico del momento.

Por otra parte, desde la perspectiva del componente primario[77], se observa en el año 2001 el cierre de la brecha entre el crecimiento nominal del PIB y los tipos de interés de la deuda pública[78] —originados respectivamente por la ralentización del crecimiento y por la presión alcista de los tipos de interés—, que aconseja la elevación del superávit primario con el propósito de mantener la trayectoria de reducción de la deuda pública de acuerdo con los objetivos fijados en la Actualización del Programa de Estabilidad[79].

Conviene destacar, finalmente, que las previsiones contenidas en los Presupuestos de 2001 dependerán, en última instancia, del comportamiento de los principales parámetros macroeconómicos sobre cuya hipotética evolución han sido construidos. A este respecto, cabe señalar como posibles factores de incertidumbre la futura evolución de los precios del petróleo y sus consiguientes efectos inflacionistas, y el coste adicional que representaría la financiación de la deuda pública en un contexto de tipos de interés más elevados.

6.2.1. **Principales líneas de los Presupuestos Generales del Estado para 2001**

El presupuesto consolidado de ingresos no financieros para 2001, con un incremento respecto al año anterior del 9,0 por 100

[77] El componente primario descuenta la carga de intereses de la deuda.

[78] Se ha estimado para 2001 una variación nominal del PIB del 5,9 por 100, dato idéntico al interés nominal de la deuda esperado.

[79] Nótese, sin embargo, que el artículo 48.1 de la Ley de Presupuestos incluye la posibilidad de elevar la deuda pública en el año 2001 en un volumen próximo al billón de pesetas.

(véase cuadro I-29), asciende a 34,5 billones de pesetas, cifra que rebasa ligeramente el total previsto para la vertiente del gasto y supone una participación en términos porcentuales sobre el PIB del 32,6 por 100, nueve décimas por encima del dato de 2000. Sin embargo, el dinamismo del crecimiento económico atenúa el impacto de la mayor recaudación, que no se traduce en crecimientos de la presión fiscal[80].

Esta expansión de los ingresos obedece a la evolución positiva de las principales partidas y, así, ingresos tributarios y cotizaciones sociales aumentan respectivamente un 9,6 y un 8,1 por 100, al tiempo que los ingresos no tributarios también experimentan un crecimiento destacado, del 9,2 por 100.

Cabe mencionar que en el año 2001, si bien los ingresos generados por los impuestos indirectos superarán la aportación de los gravámenes directos, el aumento de la recaudación esperada de los impuestos directos, 12,5 por 100, excederá a la de los indirectos, 6,5 por 100. Dentro del capítulo de impuestos directos, la recaudación por el IRPF crecerá un 10,2 por 100 sobre lo pre-

CUADRO I-29

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS DEL ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ORGANISMOS, 2000-2001

(En miles de millones y tasa de variación)

Conceptos	Presupuesto inicial 2000	Presupuesto inicial 2001	% Var.
Impuestos directos y cotizaciones sociales	19.734,8	21.710,1	10,0
Impuestos indirectos	8.557,9	9.117,2	6,5
Tasas y otros ingresos	680,9	800,5	17,6
Transferencias corrientes	1.291,3	1.416,2	9,7
Ingresos patrimoniales	985,5	1.025,7	4,1
Operaciones corrientes	**31.250,5**	**34.069,6**	**9,0**
Enajenación inversiones reales	63,5	56,5	–11,2
Transferencias de capital	381,3	416,4	9,2
Operaciones de capital	**444,9**	**472,9**	**6,3**
Total operaciones no financieras	**31.695,5**	**34.542,5**	**9,0**

Fuente: Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

[80] En el año 2001 la presión fiscal normativa, definida como la carga que introducen los tributos en la actividad económica, no variará, a pesar de que la presión fiscal cíclica, es decir, medida por el volumen de recaudación, si aumentará.

supuestado para 2000, a consecuencia de la positiva evolución del empleo. Además, la no deflactación de la tarifa del impuesto constituye un ingreso adicional, que se estima pudiera alcanzar los 100 mil millones de pesetas. Es notoria la mejoría experimentada, derivada de la coyuntura económica favorable, en la recaudación del Impuesto sobre Sociedades (17,9 por 100), dato que hace que esta fuente recaude el 25,0 por 100 de los ingresos en concepto de tributos directos. El alza de los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales (8,1 por 100) viene motivada por el mayor número de cotizantes resultante del buen comportamiento del mercado laboral.

Un año más, el dinamismo del IVA, que con un crecimiento del 6,5 por 100 superará los seis billones de pesetas, determina el crecimiento de los impuestos indirectos y se configura, de nuevo, como el tributo con mayor capacidad recaudatoria, si bien conviene matizar que se detecta una ligera desaceleración frente a su comportamiento en los dos años anteriores. Por otra parte, la recaudación por impuestos especiales aumentará un 5,6 por 100 su contribución al presupuesto, mientras que el capítulo de Tasas y otros Ingresos se eleva en un 21,3 por 100 a consecuencia del incremento de la tasa por reserva del espacio radioeléctrico. Finalmente, la escasa perspectiva de nuevas privatizaciones es la causa del modesto crecimiento del capítulo Ingresos Patrimoniales (5,9 por 100).

Con un peso porcentual del 32,6 por 100 sobre el PIB, el presupuesto consolidado de gastos en operaciones no financieras para 2001 asciende a 34,5 billones de pesetas, volumen que registra un crecimiento del 5,5 por 100 respecto al año anterior. De esta cuantía corresponde al Presupuesto del Estado el 42,9 por 100, distribuyéndose el monto restante entre la Seguridad Social y demás Organismos Autónomos y Públicos, que reciben, respectivamente, el 43,5 y el 13,6 por 100 de los fondos.

La moderación del gasto en operaciones corrientes permite destinar mayores recursos a operaciones de capital, que crecen un 9,2 por 100, con objeto de potenciar aquellos componentes del gasto que tienen una mayor incidencia en el crecimiento y la competitividad de la economía, principalmente inversión en capital físico, humano y tecnológico.

Reducción de los gastos de personal por traspaso de competencias a las CCAA

Destaca la reducción de los gastos de personal en un 0,6 por 100 (véase cuadro I-30), resultante del traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, especialmente en materia de enseñanza no universitaria. No obstante, las cifras homogeneizas detectan un crecimiento positivo derivado del incremento salarial y del aumento del colectivo de clases pasivas. Dentro del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, el incremento de los gastos destinados a los nuevos Órganos Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y material y suministros de Defensa (que suman casi el 40 por 100 del total del gasto de la partida) es el responsable del crecimiento de la dotación presupuestaria registrada (6,5 por 100).

Transferencias Corrientes es una partida que mantendrá su naturaleza expansiva y, con un crecimiento del 6,8 por 100, supondrá cerca del 67 por 100 del gasto corriente. Bajo el concepto de transferencias a empresas públicas, que con carácter global crecen un 4,8 por 100, destacan las recibidas por RENFE, que aglutina el 40 por 100 del total, y la subvención por valor de 11.000 millones de pesetas que percibirá el organismo RTVE.

Finalmente, las operaciones de capital aumentan en conjunto un 9,2 por 100 respecto a 2000 y, dentro de ellas, las transferencias de

CUADRO I-30

PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS DEL ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ORGANISMOS, 2000-2001

(En miles de millones y tasa de variación)

Conceptos	Presupuesto inicial 2000	Presupuesto inicial 2001	% Var.
Gastos de personal	4.239,2	4.215,4	-0,6
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.217,5	1.296,1	6,5
Gastos financieros	2.822,1	2.853,9	1,1
Transferencias corrientes	22.124,7	23.626,3	6,8
Operaciones corrientes	**30.403,7**	**31.991,8**	**5,2**
Inversiones reales	1.373,0	1.518,5	10,6
Transferencias de capital	932,4	999,5	7,2
Operaciones de capital	**2.305,5**	**2.517,9**	**9,2**
Total operaciones no financieras	**32.709,2**	**34.509,7**	**5,5**
Activos financieros	951,7	1.299,8	36,6
Pasivos financieros	2.642,4	3.587,7	35,8
Total operaciones financieras	**3.595,2**	**4.887,4**	**36,0**
Total presupuesto	**36.303,4**	**39.397,2**	**8,5**

Fuente: Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

capital crecen el 7,2 por 100 y las inversiones reales el 10,6 por 100, lo que pone de manifiesto la importancia que los Presupuestos Generales de 2001 otorgan a la inversión en infraestructuras, investigación y tecnología, tal y como se detalla en el siguiente apartado.

6.2.2. **Principales políticas de gasto para 2001**

En cuanto a la clasificación por políticas, las de gasto (véase cuadro I-31), comenzando por su primer capítulo, Administración General, es una partida que destaca por el incremento que experimenta, el 6,4 por 100, que se explica principalmente por el carácter expansivo de los renglones de Justicia (9,5 por 100) —con el propósito de modernizar y agilizar la administración de justicia mediante la implantación de nuevas tecnologías y la creación de nuevos juzgados y plazas de magistrados, entre otras medidas— y Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias (8,4), reforzada por el mayor peso otorgado a la lucha antiterrorista y a la política de inmigración.

Las partidas sociales absorbieron el mayor gasto

En segundo lugar, es manifiesto cómo las partidas de carácter más social absorben, un año más, el grueso del gasto (55,1 por 100) y registran un crecimiento en términos homogéneos del 7,3 por 100. Pensiones experimenta un crecimiento del 5,5 por 100 que obedece a la revalorización del 2 por 100 que se deriva del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, al incremento del número de pensionistas del 1,1 por 100 y al crecimiento que se desprende de otros efectos, entre ellos el de sustitución, estimado en el 1,5 por 100. Por otra parte, la elevación en un 7,3 por 100 del gasto en medicamentos fue la causa principal del alza experimentada en el renglón de Sanidad (6,2 por 100).

La reducción del gasto en sectores económicos, cuya tasa de crecimiento desciende desde el 5,6 por 100 del año 2000 hasta el 4,5 de 2001, responde a la pérdida experimentada en los siguientes renglones: competitividad del sector industrial, promoción y fomento de la eficiencia energética, ahorro y desarrollo de energías alternativas, tecnologías energéticas y reconversión y ajuste estructural. Por otra parte, Comercio, Turismo y Pymes aumenta el 3,1 por 100 de su dotación presupuestaria.

CUADRO I-31

POLÍTICAS DE GASTO (CAPÍTULOS I A VIII), 2000-2001

(En miles de millones de pesetas, peso porcentual en el PIB y tasas de variación)

Conceptos	2000	%PIB	2001	%PIB	% Var.
Justicia	157,6	0,5	172,7	0,5	9,5
Defensa	929,8	2,8	976,3	2,7	5,0
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	740,2	2,2	802,8	2,2	8,4
Política Exterior	140,6	0,4	151,1	0,4	7,4
Administración Tributaria	160,9	0,5	162,6	0,5	1,1
Administración general	**2.129,5**	**6,3**	**2.265,4**	**6,3**	**6,4**
Protección y Promoción Social	**16.300,3**	**48,4**	**17.006,7**	**47,5**	**4,3**
Protección y Promoción Social homogeneizada (*)	16.025,6	47,6	17.006,7	47,5	6,1
Pensiones	9.302,5	27,6	9.815,8	27,4	5,5
Otras Prestaciones Sociales	1.120,7	3,3	1.267,5	3,5	13,1
Fomento del Empleo	805,8	2,4	826,7	2,3	2,6
Sanidad	4.454,3	13,2	4.731,6	13,2	6,2
Educación	507,3	1,5	255,0	0,7	–49,7
Educación homogeneizada (*)	232,6	1,7	255,0	0,7	9,6
Vivienda	109,5	0,3	110,0	0,3	0,5
Desempleo e Incapacidad Temporal	**1.868,2**	**5,6**	**1.965,9**	**5,5**	**5,2**
Desempleo	1.339,9	4,0	1.374,0	3,8	2,5
Incapacidad Temporal	528,3	1,6	591,9	1,7	12,0
Servicios Generales de la Seguridad Social	**384,3**	**1,1**	**648,4**	1,8	**68,7**
Gasto social	**18.553**	**55,1**	**19.621,0**	**54,8**	**5,8**
Gasto social homogeneizado (*)	**18.278,2**	**54,3**	**19.621,0**	**54,8**	**7,3**
Sectores Económicos	**1.872,9**	**5,6**	**1.957,1**	**5,5**	**4,5**
Agricultura	1.188,1	3,5	1.278,0	**3,6**	7,6
Industria y Energía	271,0	0,8	232,8	0,7	-14,1
Subvenciones corrientes al Transporte	239,1	0,7	266,2	0,7	11,3
Comercio, Turismo y Pymes	174,6	0,5	180,1	0,5	3,1
Actuaciones inversoras	**1.720,8**	**5,1**	**1.898,2**	**5,3**	**10,3**
Infraestructuras	1.207,3	3,6	1.312,3	3,7	8,7
Investigación	513,5	1,5	585,9	1,6	14,1
Actividad productiva e inversora	**3.593,8**	**10,7**	**3.855,3**	**10,8**	**7,3**
Financiación a las Administraciones Territoriales	4.630,9	13,8	5.161,9	14,4	11,5
Financiación a las Administraciones Territoriales (*)	4.905,4	14,6	5.161,9	14,4	5,2
Participación Unión Europea	1.133,2	3,4	1.233,6	3,4	8,9
Transferencias a otras AAPP	**5.764,1**	**17,1**	**6.395,6**	**17,9**	**11,0**
Deuda pública	**2.805,0**	**8,3**	**2.835,0**	**7,9**	**1,1**
Otras políticas	**815,6**	**2,4**	**837,2**	**2,3**	**2,6**
Total políticas de gasto	**33.660,9**	**100**	**35.809,5**	**100,0**	**6,4**

* Cifra homogeneizada con traspasos de educación (536.309 millones de pesetas).

Fuente: Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Los mayores esfuerzos que exige el proceso de convergencia real de la economía española tienen su reflejo en la expansión de la dotación del capítulo de Actuaciones Inversoras, que crece un 10,3 por 100. Dentro de éste, la inversión en infraestructuras contará con un 8,7 más de recursos, que suman un total de 1,3 billones de pesetas, que se canalizarán principalmente al desarrollo del tren de alta velocidad (AVE), autovías y autopistas, puertos y aeropuertos, recursos hidráulicos y medio ambiente. Por otra parte, destaca el capítulo de Investigación, I+D+I (actividades de investigación, desarrollo e innovación), que dispondrá de más de 586 mil millones de pesetas, un 14,1 por 100 más, con el propósito de mitigar el déficit tecnológico de la economía española que, frente al 2,0 por 100 de la media europea, destina a estos fines el 0,5 por 100 del PIB.

La aportación prevista a los entes y empresas públicas contará con un 44,3 por 100 más de recursos, y en este ámbito merece mención especial el aumento de los fondos otorgados al desarrollo de los corredores de velocidad, circunstancia que ha motivado un incremento del 50,0 por 100 en la dotación presupuestaria del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

6.3. Novedades tributarias

De entre las diferentes novedades tributarias del año 2000 cabe destacar el Real Decreto-Ley 3/2000, de 23 de junio, de Medidas fiscales urgentes, del que provienen una serie de iniciativas fiscales de apoyo a las empresas y fomento del ahorro y de la inversión.

Las medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) amplían el ámbito de su régimen especial en el Impuesto sobre Sociedades hasta una cifra de negocios de 499,1 millones frente al anterior límite de 250 millones. Por otra parte, se incentivan con una deducción en la cuota del 10 por 100 aquellas actuaciones que tengan por objeto el desarrollo del comercio electrónico y el fomento de las inversiones en innovaciones tecnológicas y telecomunicaciones.

Con carácter general para todas las empresas se establecen dos nuevas medidas de apoyo a la inversión: se amplía el concepto de

gastos de formación profesional, incluyendo a aquellos destinados a la formación del personal en el uso de las nuevas tecnologías; y se dilatan los límites de la deducción por actividades investigadoras en los campos científico y tecnológico.

Otro bloque de medidas está orientado al fomento de la internacionalización de las empresas españolas, y procede a modificar el régimen para evitar la doble imposición internacional por actividades empresariales desarrolladas en el extranjero a través de filiales o establecimientos de carácter permanente, modificación que se acompaña de un conjunto de exigencias para evitar la deslocalización artificial de las actividades empresariales[81]. Además, otro cambio del Impuesto sobre Sociedades permite diferir el pago del tributo en determinados casos en que se realicen inversiones en el extranjero mediante la toma de participaciones en el capital de sociedades no residentes.

El ahorro y la inversión también son objeto del Real Decreto-Ley y las novedades que éste incorpora afectan al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio (cuadro I-32). Comenzando por el primero, se elevan los límites máximos de reducción de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y mutualidades de previsión social. En el caso general aumentan del 20 al 25 por 100 de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, y de 1,1 a 1,2 millones de pesetas la aportación anual máxima. Se incrementan, asimismo, los límites aplicables a mayores de 52 años y a minusválidos, cuya reducción de la base imponible ascenderá hasta el 40 por 100[82]. Adicionalmente, se permite que el contribuyente pueda deducir, a efectos del IRPF y con el límite máximo de 300.000 pesetas anuales, las aportaciones realizadas por el cónyuge, siempre que éste no trabaje fuera del hogar u obtenga rendimientos del trabajo y de actividades económicas inferiores a 1.200.000 pesetas. Las presta-

[81] El porcentaje de participación directa o indirecta en el capital o en los fondos propios de la entidad no residente debe ser de al menos un 5 por 100. Asimismo, los beneficios obtenidos deben quedar gravados por un impuesto análogo al tributo español, y aquellos que se repartan deben proceder de la realización de actividades económicas en el extranjero. Obviamente, la exención no será aplicable en casos de internacionalización de filiales residentes en paraísos fiscales.

[82] El límite máximo de la aportación de los mayores de 52 años queda modificado del siguiente modo: se incrementará en 100.000 pesetas adicionales por cada año de edad que exceda los 52 hasta un máximo de 2.500.000 para partícipes de 65 años o más.

CUADRO I-32

MEDIDAS FISCALES DE ESTÍMULO AL AHORRO EN EL IRPF, 2000

- Elevación de los límites máximos de reducción de la base imponible del IRPF por aportaciones a planes de pensiones y mutualidades de previsión social del 20 al 25 por 100 de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, y de 1.100.000 hasta 1.200.000 pesetas en el límite máximo de aportación. Incremento de los límites aplicables a mayores de 52 años y a minusválidos (40 por 100). Deducciones a efectos del Impuesto sobre la Renta del contribuyente de un máximo de 300.000 pesetas para las aportaciones realizadas por el cónyuge que no trabaje fuera del hogar o cuyos rendimientos del trabajo y actividades económicas sean inferiores a 1.200.000 pesetas.
- Mejora en la fiscalidad de los seguros de vida a medio y largo plazo que incrementan los porcentajes de reducción aplicables a los rendimientos derivados de seguros obtenidos en forma de capital en un 5 por 100.
- Reducción del tipo aplicable a las ganancias patrimoniales desde del 20 al 18 por 100.
- Reducción de la retención aplicable a los fondos de inversión hasta el 18 por 100.
- Reducción de dos años a uno del plazo para la tributación a tipo fijo de las ganancias patrimoniales.

ciones derivadas de seguros de vida mejoran su tributación con el aumento de los coeficientes reductores aplicables para la determinación del rendimiento neto correspondiente. Aquellos derivados de primas satisfechas con más de cinco años de antigüedad y ocho o menos años se eleva del 60 al 65 por 100. Para aquellas primas satisfechas con más de ocho años de antelación el porcentaje asciende desde el 70 por 100 hasta el 75 por 100.

Mejora del tratamiento fiscal de las ganancias patrimoniales

El tratamiento fiscal de las ganancias patrimoniales queda modificado tras la reducción del tipo aplicable a las mismas desde el 20 hasta el 18 por 100, la reducción de la retención aplicable a los fondos de inversión hasta el mismo tipo de gravamen de las ganancias patrimoniales y la disminución del plazo para la tributación de estas ganancias a tipo fijo desde dos años a uno.

Por último, el Real Decreto-Ley establece la exención del Impuesto sobre el Patrimonio de la vivienda habitual del contribuyente cuyo valor fiscal no exceda de 25 millones de pesetas, y regula el régimen en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades del préstamo de valores[83].

[83] En los términos que reglamentariamente se determinen no darán lugar a alteraciones de patrimonio, en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades corres-

Con relación a las modificaciones introducidas por la Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001[84], cabe destacar por su importancia la modificación del artículo 73 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones[85]. De este modo, y a consecuencia de los mayores beneficios obtenidos por los licenciatarios que actualmente explotan el espectro radioeléctrico y por las expectativas de beneficios que obtendrán los nuevos licenciatarios de telefonía de tercera generación, se eleva la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, cuyo importe viene referido al valor del citado dominio público o a la utilidad que los beneficiarios del mismo obtengan por su utilización, y queda fijado en 160 mil millones de pesetas anuales. Se ha estimado que con esta medida el Gobierno podrá recaudar en los próximos 20 años —periodo de las concesiones de telefonía móvil— 3,2 billones de pesetas, cantidad similar a la que en aquellos momentos se estimaba que podría haberse obtenido en el caso de haber optado por el sistema de subasta en la concesión de las licencias.

En último lugar, como novedad del año 2000, cabe señalar los dos borradores de la Ley de Comercio electrónico elaborados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que, de acuerdo con la normativa vigente en el seno de la Unión Europea, pretenden regular dicho comercio. Sobre este sector, se han desarrollado diversos trabajos con el objetivo de resolver cuestiones que atañen a la identificación del sujeto pasivo, al control de la transacción, a la jurisdicción fiscal competente, a la distinción del IVA que grava la entrega de bienes y la prestación de servicios y a la lucha contra las nuevas posibilidades de evasión fiscal que ofrece esta modalidad comercial, entre otros aspectos.

---

pondiente al prestamista las operaciones de préstamo de valores que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 36.7 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de valores, y en su normativa de desarrollo.

[84] Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

[85] Para más detalles véase el Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social aprobado en el Pleno del Consejo Económico y Social en su sesión ordinaria del día 4 de octubre de 2000.

6.4. La política presupuestaria en el marco del Programa de Estabilidad y Crecimiento

La pérdida de soberanía monetaria y cambiaria exigida por el proyecto de Unión Europea y Monetaria (UEM), en ausencia de un Presupuesto Comunitario lo suficientemente amplio para hacer frente a eventuales perturbaciones económicas exógenas, otorga a la política presupuestaria de los Estados miembros un papel relevante como instrumento corrector de los posibles desequilibrios. Desde esta perspectiva nace en 1997 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una iniciativa comunitaria que persigue la garantía de la disciplina fiscal y la supervisión de las políticas fiscales nacionales con el propósito de prevenir desviaciones de los objetivos presupuestarios[86]. Por otra parte, el Pacto establece la obligación de los Estados miembros que accedan a la *zona euro* a presentar anualmente un Programa de Estabilidad que determine los objetivos presupuestarios y los instrumentos previstos para su cumplimiento.

¿Superávit en el año 2002?

En sus capítulos presupuestario y fiscal, la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2000-2004[87] contempla como objetivo fundamental la plena consolidación presupuestaria, que tendrá su reflejo en la obtención del primer superávit en el año 2002 y en la reducción del volumen de deuda pública, que a partir de 2001 descenderá, en términos porcentuales sobre el PIB, por debajo del 60 por 100 (véase cuadro I-33).

Las proyecciones presupuestarias que incluye el Programa prevén un incremento neto anual de los ingresos públicos del 5,8 por 100 para el periodo 2001-2004, por lo que el ajuste fiscal recaerá una vez más sobre la vertiente del gasto, cuyo capítulo de gastos corrientes perderá un punto porcentual sobre el PIB y, dentro de estos, las prestaciones sociales caerán nueve décimas sobre el dato

[86] El contenido fundamental del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya aprobación fue objeto de un prolongado e intenso debate, se puede concretar en los siguientes puntos: si bien el objetivo a medio y largo plazo es el equilibrio presupuestario, en ningún modo el déficit público podrá superar el 3 por 100 del PIB, salvo en circunstancias excepcionales; en caso de incumplimiento, existe la obligación de constituir un depósito, no remunerado, con un límite máximo del 0,5 por 100 del PIB, que se convertirá de forma instantánea en sanción si en el plazo de dos años el país infractor no ha corregido su desequilibrio.

[87] Aprobada en el Consejo de Ministros celebrado el 19 de enero de 2001.

CUADRO I-33

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD, 2000-2004

(Contabilidad Nacional, SEC-95, porcentaje sobre el PIB)

Conceptos	2000	2001	2002	2003	2004
Total ingresos	**40,4**	**40,6**	**40,6**	**40,4**	**40,3**
Total gastos	**40,7**	**40,6**	**40,4**	**40,1**	**40,0**
Gastos corrientes	35,4	35,1	34,8	34,1	34,2
Carga financiera	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
Gastos de capital	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7
Formación bruta de capital fijo	3,4	3,6	3,7	3,7	3,8
Capacidad (+) necesidad (–) financiación AAPP	**–0,3**	**0,0**	**0,2**	**0,3**	**0,3**
Déficit AAPP centrales	–0,2	0,0	0,2	0,3	0,3
Estado y sus Organismos Autónomos	–0,7	–0,3	–0,1	0,0	0,0
Administraciones Seguridad Social	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Déficit AAPP territoriales	–0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Deuda bruta	**61,1**	**58,9**	**56,6**	**52,8**	**49,6**
Superávit primario	3,0	3,3	3,4	3,5	3,5
Ahorro bruto	3,8	4,3	4,6	4,8	5,0

Fuentes: IGAE, INE y Ministerio de Economía.

del Programa de Actualización presentado el pasado año[88] (véanse cuadros I-33 y I-34). Esta tendencia se verá reforzada por la Ley General de Estabilidad presupuestaria, cuyo contenido se detalla más adelante. Bajo estas proyecciones la presión fiscal disminuirá desde el 40,6 por 100 del PIB en 2001 hasta el 40,3 en 2004.

En lo que atañe al pago por intereses, la evolución ascendente de los mismos en los dos últimos años determinó el carácter expansivo de esta partida, si bien el paso a una situación superavitaria y la ampliación de la vida media de la deuda pública son factores que moderarán su crecimiento. Por otra parte, el todavía significativo potencial de convergencia real de la economía española respecto a la media de los países de la UEM demanda la continuidad de la inversión pública, de tal modo que la dotación destinada a la formación bruta de capital fijo de las administraciones públicas crecerá a una tasa superior al 8 por 100 de media anual en el periodo 2001-2004 (véase cuadro I-34).

[88] Para mayor detalle véase el epígrafe 6 del capítulo I de la *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de 1999* del Consejo Económico y Social.

CUADRO I-34

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS. PROGRAMA DE ESTABILIDAD, 2000-2004

(Contabilidad Nacional, SEC-95, tasas anuales de variación)

Conceptos	2000	2001	2002	2003	2004
Total ingresos	**7,9**	**6,4**	**6,1**	**5,1**	**5,5**
Total gastos	**6,0**	**5,5**	**5,6**	**4,9**	**5,4**
Gastos corrientes	5,6	5,0	5,3	4,6	5,1
Gastos de capital	8,3	8,6	7,9	6,8	7,5
Formación bruta de capital fijo	9,3	10,0	9,0	7,5	8,5

Fuentes: IGAE y Ministerio de Economía.

Reducción del déficit estructural

Estas directrices presupuestarias permitirán el crecimiento en un punto porcentual del ahorro público sobre del PIB, la reducción del déficit corregido del ciclo o estructural y el incremento del superávit primario.

La ralentización del crecimiento, la elevación de los tipos de interés y el repunte inflacionista experimentados por la economía en el año 2000 plantean una cierta incertidumbre sobre el riguroso cumplimiento de los objetivos señalados. Es por ello que, al igual que en años anteriores, la presente Actualización del Programa de Estabilidad incluye un análisis de sensibilidad (cuadro I-35) que considera dos escenarios macroeconómicos alternativos: primero, un marco de crecimiento moderado, originado por la ralentización de todos los componentes de la demanda interna en un contexto in-

CUADRO I-35

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, 2000-2004

(Contabilidad Nacional, SEC-95, Porcentaje del PIB)

Conceptos	2000	2001	2002	2003	2004
Escenario de crecimiento central					
Capacidad (+) o necesidad (–) financiación AAPP	–0,3	0,0	0,2	0,3	0,3
Deuda bruta	61,1	58,9	56,6	52,8	49,6
Escenario de crecimiento moderado					
Capacidad (+) o necesidad (–) financiación AAPP	–0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Deuda bruta	61,1	59,2	57,4	54,3	51,8
Escenario de tipos de interés elevados					
Capacidad (+) o necesidad (–) financiación AAPP	–0,3	0,0	0,1	0,1	0,1
Deuda pública	61,1	58,9	56,6	53,0	49,9

Fuentes: IGAE, INE y Ministerio de Economía.

ternacional menos boyante, que reduciría las previsiones de crecimiento del escenario central o de referencia desde el 3,2 previsto hasta el 2,8 por 100 como media del periodo 2002-2004; segundo, un aumento de los tipos de interés un punto por encima de la media prevista para 2001-2004. En ambos supuestos, no obstante, sería posible mantener los objetivos establecidos por el programa de Actualización en términos de equilibrio presupuestario y volumen de deuda pública.

6.4.1. **Las Leyes de Estabilidad presupuestaria**

La consecución del equilibrio presupuestario ha suscitado la necesidad de adoptar nuevas medidas encaminadas a garantizar su futuro sostenimiento. Fruto de esta percepción surge la Ley General de Estabilidad presupuestaria con el objetivo de garantizar dicha sostenibilidad, estableciendo la situación de equilibrio en las cuentas públicas como la norma de actuación financiera del sector público. Por recomendación del Consejo de Estado, los artículos del Anteproyecto que afectan a las Comunidades Autónomas se tramitan como un proyecto de ley orgánico autónomo (Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad presupuestaria) y el resto como un proyecto de ley ordinario (Proyecto de Ley General de Estabilidad presupuestaria), por lo que estrictamente se debería hablar de Proyectos de Ley, en plural, y no de Proyecto de Ley.

Asunción de responsabilidades por todas las Administraciones

El ámbito de aplicación de la Ley afectará a la Administración General del Estado, a la Seguridad Social, a las Administraciones Territoriales y a las empresas dependientes de dichas administraciones, siendo el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el órgano encargado de la coordinación de la política presupuestaria global. Está previsto que la Ley entre en vigor en enero del año 2002, una vez que sea consensuada en el CPFF con las Comunidades Autónomas, proceso que está resultando de gran complejidad debido al rechazo generalizado que ha provocado la medida en algunas Comunidades[89] que no ven necesaria una ley para garantizar el equilibrio presupuestario, ni la oportunidad de la exi-

[89] Dichas Comunidades son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco.

gencia de tal compromiso en vísperas de la reforma del sistema de financiación autonómica ya anunciada por el Gobierno.

La Ley, inspirada en las experiencias sueca y norteamericana, establece el principio de equilibrio presupuestario como precepto fundamental, y en el caso de aquellos ejercicios que se saldaran con déficit, las Administraciones correspondientes están obligadas a justificar las causas del mismo y a elaborar un plan a medio plazo para la corrección del desequilibrio. Así, la Ley supone un mecanismo para la limitación del crecimiento del gasto en función de los ingresos previstos, que refuerza los compromisos adquiridos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Obviamente, podría darse el caso de que en alguna de las Administraciones se produjese el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en las Leyes de Estabilidad presupuestaria o de los acuerdos que en su ejecución fuesen adoptados por el Ministerio de Hacienda o por el CPFF. Si esta circunstancia pudiera afectar a las obligaciones asumidas por España frente a la Unión Europea, derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Estado está capacitado para exigir a la Administración correspondiente la asunción de la parte de las responsabilidades que le sea imputable conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine[90].

El principio de estabilidad presupuestaria se completa con tres principios más: plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Comenzando por el primero de ellos, la elaboración presupuestaria se iniciará en el primer cuatrimestre de cada ejercicio de acuerdo con el objetivo marcado por el Gobierno para los tres ejercicios posteriores, y se fijará un límite máximo anual del gasto en consonancia con lo establecido. La proyección de objetivos se revisará cada año, al igual que en el caso del Programa de Estabilidad y Crecimiento. Además, en el Presupuesto del Estado se dotará un Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria (2 por 100 del gasto anual) para cubrir eventualidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, medida que aspira a reducir el recurso a las modificaciones de crédito. En el caso opuesto, es decir, si se registrara un superávit del Estado, el remanente se destinará a reducir la deuda, mientras que en el sistema de la Seguridad Social

[90] Artículo 11 de la Ley General de Estabilidad presupuestaria.

CUADRO I-36
ALGUNOS INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000
(Miles de millones de pesetas)

Comunidades Autónomas	Presupuesto total	Saldo no financiero	Previsión de endeudamiento
Andalucía	2.735,2	–22,3	–22,4
Aragón	349,2	–13,5	–13,4
Asturias	198,5	–10,3	–11,0
Baleares	147,6	–0,5	–1,5
Canarias	630,9	–2,5	–2,8
Cantabria	145,4	–5,7	–1,1
Castila-La Mancha	436,0	–2,9	–3,2
Castilla y León	750,5	–5,2	–4,9
Cataluña	2.109,4	–0,7	–20,5
Comunidad Valenciana	1.217,3	–7,5	–7,5
Extremadura	288,8	–0,6	–2,0
Galicia	1.039,9	–8,6	–9,9
La Rioja	70,0	–6,4	–6,3
Madrid	1.078,4	–12,6	7,0
Murcia	260,6	–1,2	–1,2
Navarra	357,6	–3,0	–2,8
País Vasco	866,4	23,3	15,1

Fuente: Consultores de las Administraciones Públicas.

se aplicará de forma prioritaria al Fondo de Reserva de las pensiones. El principio de transparencia obliga a que la información que permite verificar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria sea suficiente y accesible. Finalmente, en relación con el tercer principio, eficiencia en la asignación de recursos, destaca la importancia de compatibilizar los aspectos macroeconómicos de la estabilidad presupuestaria con aquellos de carácter más microeconómicos relativos a la gestión pública.

7. UNIÓN EUROPEA

La Cumbre de Lisboa, celebrada en marzo de 2000, que ha marcado el objetivo de pleno empleo como eje del conjunto de las políticas comunitarias, el Tratado de Niza, que debe servir para definir el marco institucional en el que se producirá la ampliación de la Unión Europea hacia la Europa del este, así como el acuerdo alcanzado en materia fiscal en relación a la fiscalidad del ahorro,

constituyen los principales hechos en materia comunitaria. El año 2000 ha permitido seguir avanzando en la adopción de medidas destinadas a facilitar la entrada en vigor definitiva del euro, cada vez más próxima, así como una mayor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros tanto en el terreno macro-económico como en el del empleo, consolidando nuevos instrumentos, como el diálogo macroeconómico con los agentes sociales a escala comunitaria. Ciertos episodios como el rebrote de la «crisis de las vacas locas» o de la fiebre aftosa han tenido su repercusión.

En cuanto a la evolución de la economía europea durante este año, el ejercicio 2000 ha marcado un pico en el crecimiento económico de los Estados de la Unión Europea, debido a la relativa ralentización que, no exenta de otras complicaciones como cierta persistencia de la inflación, ha tenido lugar durante los últimos meses del año y los primeros de 2001.

7.1. Panorama general

Las instituciones comunitarias, Comisión Europea y Parlamento Europeo esencialmente, dedicaron buena parte de su actividad durante el año 2000 a promover una reforma de los Tratados que permitiera profundizar en las principales políticas comunes, avanzar en la democratización de la Unión Europea y adaptarse a los retos de la ampliación. Por ello en febrero de 2000 comenzó una nueva Conferencia Intergubernamental[91], tal y como se había acordado en el Consejo Europeo de Colonia de 1999. Durante el primer semestre de la Presidencia portuguesa se abrieron importantes debates con resultados como los de la Cumbre de Lisboa[92], mientras que en la Presidencia francesa de la segunda mitad del año los acuerdos políticos alcanzados fueron más limitados, a pesar de que en el Consejo Europeo de Niza celebrado en el mes de diciembre se aprobó el nuevo Tratado de Niza. El nuevo texto no logró satisfacer todas las esperanzas depositadas en el mismo, afectando por tanto negativamente la imagen de todas las institu-

[91] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999,* págs. 168 y ss.

[92] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999,* págs. 161 y ss.

ciones de la Unión, con la probable excepción de la del Consejo, beneficiada por la elevación del tono de intergubernamentalidad, debido esencialmente a la distancia con la que la opinión pública comunitaria ha contemplado el proceso de construcción europeo.

Debilidad del euro, «vacas locas» y reforma fiscal

Con todo, además del nuevo Tratado de Niza, sin duda relevante, los progresos alcanzados durante el año 2000 en materia fiscal han sido también importantes. Igualmente, dos episodios de mucha repercusión, y que han supuesto hasta la fecha los principales obstáculos para el equipo de comisarios que llegó a Bruselas en 1999, acapararon la atención de los medios de comunicación y concentraron la preocupación de los ciudadanos. Por un lado, el virulento rebrote de la «crisis de las vacas locas» en combinación con otros problemas agrarios, como la fiebre aftosa, ya en el año 2001, han puesto en cuestión incluso la viabilidad financiera de la política comunitaria en materia agraria. Por otro lado, la extrema debilidad de la moneda única, el euro, frente al dólar, a pesar de sus efectos tanto positivos como de signo contrario sobre diferentes indicadores económicos, ha contribuido también a difundir la sensación de que se podía estar estancando la actividad comunitaria e incluso el proceso de fondo de construcción europea.

Nuevo Tratado de Niza

En cualquier caso, la Unión Europea, que ahora cuenta con el Tratado de Niza como código fundamental, sigue estando abierta a importantes retos e innovaciones. Algunos de estos desafíos son inmediatos, como la puesta en circulación del euro en enero de 2002, o a medio plazo, la ampliación de la Unión Europea hasta a doce nuevos miembros en un horizonte de cinco años. Además se han abierto nuevos debates, como el relativo a la posibilidad de redactar una Constitución para la Unión Europea que decida definitivamente el reparto de poderes entre sus instituciones, los Estados miembros e incluso las regiones, para una amplia gama de políticas.

Presidencia sueca de 2001

Durante el año 2001, Suecia ha asumido la presidencia de la Unión Europea, tras el turno correspondiente al país galo. Entre sus principales objetivos destacan la integración en un mismo esquema de las políticas económicas, sociales y de empleo de los Quince, la defensa del medio ambiente, así como la adecuación de los sistemas de pensiones y de protección sanitaria al desarrollo demográfico de Europa.

Otra de las prioridades de la Presidencia sueca de la Unión Europea es la preparación de la ampliación de la Unión Europea a los países del Este de Europa bajo el principio de diferenciación de los países candidatos.

Por otra parte, respecto a la UEM, a la cual no pertenece, Suecia considera que la moneda única es un claro signo de estabilidad y de integración económica, y que el éxito del euro es de interés vital para todos los Estados miembros de la Unión Europea. A este respecto, y al no formar parte del *Eurogrupo* (reunión de los ministros de Economía y Finanzas del área Euro), éste estará presidido durante todo el año por Bélgica[93].

En la Cumbre de Estocolmo, celebraba en el mes de marzo de 2001, los Quince han logrado objetivos importantes, como acelerar la integración de los mercados financieros o la liberalización postal, pero los intereses nacionales han impedido avances significativos en temas como la apertura del mercado del gas y la electricidad, la gestión unificada del espacio aéreo o la patente única europea. Estas cuestiones han hecho pasar desapercibidos otros acuerdos de compromiso, como el lanzamiento de un sistema legislativo de vía rápida para integrar los mercados financieros o la decisión de que para 2003 las ayudas públicas que otorgan los Estados empiecen a disminuir en relación al PIB.

Cumbre de Estocolmo

En Estocolmo también se ha producido un llamamiento a conciliar la vida laboral y familiar (privada) y se ha alcanzado el acuerdo de establecer para el año 2005 unos objetivos intermedios para las tasas de empleo en toda la Unión del 67 por 100 en general y del 57 por 100 para las mujeres, para alcanzar en diez años el 70 por 100 general y el 60 por 100 para las mujeres. También se fija el objetivo de aumentar la tasa de empleo de hombres y mujeres de entre 55 y 64 años hasta el 50 por 100 para 2010. Por último, se ha asumido el compromiso de celebrar un debate exhaustivo sobre asilo e inmigración en diciembre en la Cumbre de Laeken durante el segundo semestre de 2001.

[93] Véase capítulo I, epígrafe 7.2.2.

7.2. Unión Económica y Monetaria

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea creció un 3,4 por 100 en el año 2000, crecimiento que probablemente no se pueda alcanzar en el año 2001. El Informe de Primavera de la Comisión Europea reduce las previsiones de crecimiento para la zona euro desde el 3,2 por 100 al 2,8 por 100 y para el conjunto de la Unión Europea desde el 3,1 por 100 también hasta el 2,8 por 100 (cuadro I-37) como consecuencia del parón de la actividad en los Estados Unidos y de la crisis financiera e incluso política que vivían Japón y algunas economías emergentes como la Argentina.

¿Menos crecimiento en 2001?

En este contexto la principal incertidumbre que se cierne sobre la economía europea radica en los efectos que puede provocar sobre la misma el descenso del ritmo de crecimiento de la economía americana, así como el carácter y el tono que debe adoptar en este marco la política monetaria instrumentada por el Banco Central

Cuadro I-37
PREVISIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA. INFORME DE PRIMAVERA (ABRIL 2001)

Países	Previsión de crecimiento				Tasa de inflación			Crecimiento del empleo			Déficit público		
	2000	2001 anterior*	2001 actual	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Alemania	3,0	2,8	2,2	2,6	2,1	2,0	1,5	1,5	0,7	0,9	1,5	0,5	0,7
Austria	3,2	2,9	2,5	2,6	2,0	1,6	1,4	0,9	0,5	0,4	–1,1	–0,7	0,0
Bélgica	3,9	3,3	3,0	3,1	2,7	1,9	1,7	1,7	1,3	1,2	0,0	0,6	0,7
España	**4,1**	**3,5**	**3,2**	**3,3**	**3,5**	**3,2**	**2,3**	**3,3**	**2,2**	**2,2**	**–0,3**	**0,1**	**0,2**
Finlandia	5,7	4,3	4,0	3,6	3,0	2,4	2,0	1,5	1,5	1,1	6,7	5,3	5,2
Francia	3,2	3,1	2,9	2,8	1,8	1,3	1,6	2,0	1,7	1,5	–1,3	–0,6	–0,8
Grecia	4,1	4,5	4,4	4,8	2,9	2,6	2,3	1,2	1,4	1,6	–0,9	0,0	0,6
Holanda	3,9	4,0	3,4	3,1	2,3	4,3	2,9	2,5	2,0	1,8	2,0	0,8	1,4
Irlanda	10,7	8,2	7,5	7,1	5,3	4,0	3,6	4,7	2,9	2,4	4,5	3,9	3,6
Italia	2,9	2,8	2,5	2,7	2,6	2,2	1,9	1,5	1,3	1,1	–0,3	–1,3	–1,0
Luxemburgo	8,5	6,5	5,6	5,5	3,8	2,2	1,8	5,5	3,9	3,6	5,3	4,0	3,0
Portugal	3,3	2,7	2,6	2,6	2,8	3,5	2,3	1,7	0,9	0,7	–1,4	–1,5	–1,5
Zona Euro	**3,4**	**3,2**	**2,8**	**2,9**	**2,3**	**2,2**	**1,8**	**1,9**	**1,3**	**1,3**	**0,4**	**–0,7**	**–0,4**
Dinamarca	2,9	2,3	2,1	2,4	2,7	2,1	2,1	0,8	0,5	0,5	2,5	3,2	2,9
Reino Unido	3,0	3,0	2,7	3,0	0,8	1,4	1,7	1,0	0,5	0,7	4,3	1,0	0,9
Suecia	3,6	3,7	2,7	3,0	1,3	1,5	1,5	2,2	1,5	0,8	4,0	3,9	3,4
UE-15	**3,4**	**3,1**	**2,8**	**2,9**	**2,1**	**2,1**	**1,8**	**1,7**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**–0,2**	**0,0**

* Informe Otoño 2000.
Fuente: Informe Primavera 2001. Comisión Europea.

Europeo (BCE) en la zona euro. Al cierre de esta Memoria, el 10 de mayo de 2001, el BCE redujo un cuarto de punto su tipo de intervención desde el 4,75 por 100 hasta el 4,5 por 100.

7.2.1. **El ciclo económico alcanza su máximo**

Fuerte crecimiento en el año 2000

El PIB de la Unión creció un 3,4 por 100 en el año 2000, mientras que la tasa de inflación agregada fue de un 2,1 por 100, el déficit público del conjunto de Estados de la Unión Europea de un 1,2 por 100 y la tasa de creación de empleo de un 1,7 por 100. El desempleo medio fue del 8,3 por 100, casi un punto menos que el registrado el año anterior.

Durante el año 2000 un buen número de países de la Unión Europea creció a tasas muy elevadas, algunas excepcionales, como Irlanda (10,7 por 100 de crecimiento del PIB) o Finlandia (5,7 por 100), junto a un grupo de países como España, Holanda, Bélgica y Suecia creciendo en torno al 4 por 100 y el resto en torno al 3 por 100 (el menor crecimiento fue el danés con un 2,9 por 100).

Tal y como ya se recogía en la anterior edición de esta Memoria[94], la recuperación de la actividad económica era patente en el conjunto de la Unión Europea desde el verano de 1999. Así, la economía de la Unión Europea aumentó claramente su ritmo de crecimiento durante el segundo semestre de 1999 manteniendo esta tendencia al alza durante buena parte del año 2000, hasta que comenzó a desacelerarse en los últimos meses de ese año. Durante buena parte del año 2000 las previsiones de crecimiento del BCE para ese año y para 2001, en el área euro, eran superiores al 3 por 100 del PIB.

En sus Previsiones de Primavera presentadas en abril de 2001 (cuadro I-37), la Comisión Europea ha reducido sus expectativas de crecimiento tanto para la Unión Europea como para los Estados Unidos. La Comisión ha reducido sus previsiones desde el 3,1 por 100 al 2,8 por 100 en la Unión Europea, y del 3,2 por 100 al 2,8 por

[94] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999,* págs. 142 y ss.

100 en la zona euro. Según la Comisión los efectos de la crisis americana serán en cierta medida compensados por la fortaleza de la demanda interna europea.

Previsiones a la baja

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es mucho más pesimista respecto a Europa que la Comisión para 2001. Las previsiones aparecidas en el mes de abril de 2001 rebajan su crecimiento al 2,4 por 100, casi un punto frente a lo que pensaba en otoño, y un 2,9 por 100 para España frente al 3,5 anterior. Para Estados Unidos su previsión aún es peor (baja del 3,2 al 1,5 por 100), similar a la de la Comisión, que la reduce también desde el 3,3 por 100 al 1,6 por 100. La ralentización americana es la causa de muchos de los males de Europa y del resto del mundo. Según ambos organismos, este empeoramiento económico no será duradero, sino que se corregirá a medida que avance el ejercicio para mejorar en 2002. Las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apuntan también en esta dirección.

La Comisión estima que la evolución del déficit público en los grandes países no va a ser positiva en 2001, debido a los recortes aprobados en algunas fuentes tributarias, a la extinción de la contabilización de los ingresos por las licencias de telefonía UMTS, y a la intervención de los estabilizadores automáticos. Para Alemania la previsión sube del 1,5 por 100 al 1,7 por 100, lo que podría convertir a este país en el primer incumplidor del Pacto de Estabilidad. Las cifras tampoco son buenas en Francia, que pasaría del equilibrio a un déficit del 0,6 por 100, y en Italia, donde subiría del 1,1 por 100 al 1,3 por 100. Debido a esta tendencia, el déficit total de la zona euro se elevaría desde el 0,5 hasta el 0,7 por 100.

Estabilidad macroeconómica general

Las previsiones de inflación se mantienen, 2,2 por 100 para la zona euro y 2,1 por 100 en los Quince, con menor incidencia del crecimiento de los precios causado por la debilidad del euro y los precios del petróleo y algo más por causas internas, y también las de paro, 8,5 por 100 y 7,7 por 100 respectivamente, si bien empeoran moderadamente las de creación de empleo, que pasa del 1,5 por 100 al 1,3 por 100 y del 1,7 por 100 al 1,2 por 100 para ambos grupos de países.

El crecimiento en España será algo más suave pero más equilibrado, como en el resto de economías mediterráneas incluida

Francia, que crecen por encima de la media. Alemania es la principal excepción, encajando los efectos del parón internacional.

El BCE elevó los tipos

En este contexto de expectativas al alza, en los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto y octubre del año 2000, el BCE elevó los tipos de interés un cuarto de punto cada vez, salvo en el mes de junio, en que la subida fue de medio punto, llegando hasta el 4,75 por 100[95] a finales de año, ante una doble evidencia: por un lado, la constatación del vigor del crecimiento, apoyado tanto en el favorable entorno internacional vigente durante la primera mitad de año como en la robustez de la demanda interna, antes de constatarse los efectos de la subida del precio del crudo, el debilitamiento de la posición externa comunitaria y la crisis en las bolsas muy concentrada en los valores tecnológicos; y por otro, como reacción a la evolución del crédito al sector privado y al crecimiento del agregado monetario M3, así como la tendencia de los precios, que persistían en su tendencia hacia el desequilibrio. De esta manera el BCE elevó los tipos de interés 175 puntos básicos en tan sólo siete meses, los mismos puntos básicos que la Reserva Federal Norteamericana *(Fed)* durante su periodo de endurecimiento monetario que terminó con el recorte de enero de 2001, pero en mucho menos tiempo (18 meses en los Estados Unidos desde la subida de junio de 1999), lo que constituye por tanto una política monetaria comparativamente más restrictiva. El Banco de Inglaterra ha seguido a la *Fed* en sus recortes.

Al cierre de esta Memoria, en mayo de 2001, el BCE se enfrentaba a múltiples presiones que insistían en la necesidad de reducir los tipos de interés con el fin de afrontar con mayores garantías las repercusiones de la cada vez más evidente ralentización de la economía norteamericana. Con todo, la persistencia de tensiones inflacionistas en la Unión Europea, en particular en algunos Estados como España, dificultaba esta decisión. Finalmente, el 10 de mayo de 2001, el BCE redujo un cuarto de punto su tipo de intervención, desde el 4,75 por 100 hasta el 4,5 por 100.

[95] El tipo de intervención mínimo fue del 2,5 por 100 durante buena parte de 1999.

Recomendaciones de política económica

En cuanto a las recomendaciones de política económica realizadas por la Comisión a los distintos Estados miembros, y adoptadas por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN), destacan los mensajes enviados al grupo de países de la cohesión debido al modo excesivamente procíclico que han seguido para acometer rebajas fiscales, sin llegar a asegurarse completamente de que las rebajas de ingresos sean compensadas con recortes adicionales del gasto público.

En febrero de 2001, el ECOFIN, atendiendo la propuesta de la Comisión, adoptó una decisión sin precedentes al solicitar a Irlanda una rectificación de su presupuesto, recomendándole la puesta en marcha de medidas presupuestarias compensatorias durante el ejercicio fiscal 2001. Ello se debe al temor de que la economía irlandesa sufriera un proceso de recalentamiento a pesar de la robustez de sus principales indicadores económicos, con la excepción del crecimiento de los precios: superávit presupuestario del 4,7 por 100 del PIB en el año 2000, crecimiento del PIB de un 10,7 por 100 en ese mismo año e inflación del 5,6 por 100. Esta decisión tiene gran trascendencia política, porque por primera vez se cuestiona desde una instancia comunitaria la autonomía de la política presupuestaria de un Estado miembro, en aplicación, según estima la Comisión, de lo dispuesto por el Tratado de la Unión Europea. La decisión, muy contestada en Irlanda y en diferentes ámbitos, es polémica, puesto que se produce a pesar de que este país cumple los requisitos fiscales establecidos en el marco de la Unión Económica y Monetaria y del Pacto de Estabilidad, marcando los límites de la coordinación de las políticas económicas comunitarias, que abarcarían ya parcelas tradicionales de soberanía muy arraigadas en los Estados.

Recomendaciones de política fiscal para España

Para España, la Comisión estima que la política fiscal debería estar preparada para contrarrestar con un mayor rigor eventuales presiones adicionales de recalentamiento, considerando que ante las persistentes presiones inflacionistas las autoridades españolas deberían aplicar una política fiscal más rigurosa. También recomienda que se adopten medidas encaminadas a garantizar la viabilidad futura del sistema de pensiones.

7.2.2. **La debilidad del euro en los mercados de divisas**

Fortaleza del dólar

La debilidad del euro durante el año 2000 puede interpretarse como el resultado del sostenido diferencial de crecimiento de la economía norteamericana mantenido con una estabilidad de precios, combinado a su vez con elevaciones del tipo de interés estadounidense, el de los llamados *fondos federales*, en niveles superiores a los europeos, hasta el máximo del 6,5 por 100 alcanzado en marzo de 2000. Estos hechos, junto a la capacidad demostrada por la economía norteamericana a la hora de generar intensas ganancias de productividad controlando el crecimiento de los precios, y frente a las dudas sobre la duración del ciclo expansivo en Europa, han mantenido un flujo constante de salidas de capitales de Europa hacia los Estados Unidos. Este panorama cambió, no obstante, a finales del año 2000[96], tal y como se ha comentado en el epígrafe 2 de este capítulo.

Si bien es cierto que las economías europeas tardaron más que la americana en despegar claramente, es evidente también que en la evolución del euro pudo tener cierta influencia la menor confianza en el proceso de integración europea generada por los problemas de definición de reformas en su estructura política, así como por la lentitud con la que se han ido adoptando decisiones en este campo. Con todo, la depreciación del euro ha contribuido a la recuperación de la economía europea por la vía del crecimiento de las exportaciones durante el año 2000. Por el contrario, esa misma debilidad del euro en un momento de recuperación del consumo privado y de la inversión, como ha sucedido durante la primera mitad del año 2000, ha alimentado también las tensiones inflacionistas del área euro, en combinación con el efecto de la denominación en dólares de materias primas y energía.

Efectos del alza del petróleo

La elevación de los precios del crudo, por encima de los 36 dólares por barril, por primera vez en los últimos 20 años, en septiembre de 2000, influyó también en la evolución del euro frente al dólar norteamericano por varias vías. Por un lado, debido al impacto que, vía drenaje de renta, y como *shock de oferta*, generó en el área euro, y por otro, como consecuencia de la política moneta-

[96] En enero de 2001 la Reserva Federal de los Estados Unidos invirtió por primera vez desde 1998 el signo de su política monetaria.

ria más restrictiva que se adoptó para controlar las tensiones inflacionistas derivadas del propio aumento del precio de petróleo, y que serán el resultado del grado de dependencia energética de cada país afectado. Este *shock de oferta,* por tanto, presenta un doble carácter asimétrico en el seno de la propia Unión Europea, pues depende de los diferentes niveles de dependencia del petróleo de los Estados miembros y a su participación o no en la moneda única. La Comisión Europea, consciente de este problema[97], tiene previsto proponer una modificación del régimen fiscal de los hidrocarburos e incluso se ha planteado estudiar la posibilidad de gestionar en común en el conjunto de la Unión Europea las reservas energéticas estratégicas.

Medidas de apoyo al euro

El ECOFIN se esforzó durante todo el año 2000 en mostrar su confianza en la moneda única con el objeto de propiciar su recuperación frente al dólar en los mercados de divisas. Así sucedió tras el ECOFIN con el que se puso fin a la presidencia portuguesa del primer semestre, subrayando que el nivel de cotización de la divisa no reflejaba entonces los fuertes fundamentos económicos del área euro; igualmente ocurrió, en el mes de septiembre, cuando el ECOFIN reunido en Versalles exigió a los países de la OPEP que cumplieran su compromiso de mantener el precio del barril de petróleo por debajo de los 28 dólares, y así ha sido también durante toda la presidencia francesa del segundo semestre de 2000 y en el tiempo transcurrido del 2001 bajo dirección sueca. Sin embargo, la Unión Europea, desde una perspectiva política, no fue capaz de realizar gestiones frente a la OPEP al mismo nivel que las realizadas por los Estados Unidos, que mantuvo reuniones bilaterales con el cártel de exportadores de petróleo sin que Europa participase en estos encuentros o en otros similares.

El BCE intervino también en los mercados de divisas con el fin de asegurar unos niveles de cotización satisfactorios del euro frente al dólar. Estas intervenciones tuvieron un éxito relativo cuando fueron concertadas con otras autoridades monetarias (como la Reserva Federal de los Estados Unidos), como la ejecutada el 22 de diciembre de 2000, si bien poco antes, en noviembre, el BCE lo intentó en solitario sin lograr efecto alguno. En cualquier caso estas intervenciones puntuales del BCE no persiguen modificar la ten-

[97] Véase capítulo I, epígrafe 7.2.4.

dencia a medio plazo del euro, sino desincentivar los ataques especulativos que se realizan a muy corto plazo. Al margen de los efectos económicos de la debilidad del euro, el BCE señaló con preocupación los efectos que la pérdida de credibilidad del euro ha podido producir en algunos países como Alemania.

Grecia accede al euro

El Consejo Europeo de Feira de junio de 2000 dio el visto bueno a la participación de Grecia en la moneda única, haciendo suya la recomendación adoptada por el ECOFIN pocos días antes, al cumplir los cinco criterios de convergencia necesarios, con lo que eleva a doce el número de miembros de la UEM. En este Consejo, seis meses antes de la adopción de la divisa europea por Grecia, se fijó el tipo de cambio entre el euro y el dracma en 340,750 dracmas por euro. Grecia forma parte de la UEM desde el 1 de enero de 2001.

Nuevo «no danés» al euro

En el referéndum celebrado el 28 de septiembre de 2000 los ciudadanos daneses rechazaron la adhesión de su país al euro en una decisión que rememora su histórico «no» al Tratado de Maastricht en la consulta celebrada en 1992. Un 53,1 por 100 de los participantes en la votación, que contó con una altísima participación, de casi un 90 por 100 de los electores con derecho a voto, mostraba así sus temores a que la moneda única pudiera implicar futuros recortes en las prestaciones sociales. A pesar de que la economía danesa sólo representa el 2,7 por 100 del PIB de la Unión Europea, esta negativa puede generar efectos psicológicos importantes en Suecia, que podría aplazar el momento de su anunciada consulta y que no se espera tenga lugar antes del año 2004.

Se crea el Eurogrupo

La Presidencia francesa del segundo semestre de 2000 ha fortalecido la figura del Euro-12 (con la participación de Grecia), conformado por las reuniones mensuales de los ministros de economía y fianzas del área euro (o de la *Eurozona*, término más utilizado habitualmente), que se realizan antes que las del ECOFIN. El Euro-12 pasará a llamarse *Eurogrupo,* tendrá un portavoz propio, se reunirá independientemente del ECOFIN, y su presidencia ganará protagonismo con comparecencias ante el Parlamento Europeo. Estos cambios persiguen reforzar la autoridad económica europea que respalda al euro. De esta manera, por ejemplo, mejorará su apoyo en momentos de fragilidad cambiaria como los vividos en el año 2000. En febrero de 2001, la Comisión insistió en la necesidad de avanzar en el refuerzo de la coordinación de las políticas en la zona

euro mediante la ampliación de los contenidos de esta coordinación, la mejora de la eficacia de los instrumentos de coordinación y el aumento de la transparencia.

Nuevos instrumentos de política monetaria

Los problemas del euro no han impedido continuar con los preparativos para su cada vez más próxima puesta en circulación. Así, el BCE ha continuado afinando los todavía nuevos instrumentos de política monetaria con los que cuenta, instaurando desde el mes de junio de 2000 las subastas a tipo variable en las que las entidades no sólo pujan por volumen, sino también por tipo de interés. De este modo se han conseguido evitar los elevados volúmenes solicitados que se producían antes, cuando, con tipos fijos, las cantidades adjudicadas se concedían tras un proceso de prorrateo. Esta decisión modifica el precio medio del dinero, de modo que éste ya no es el tipo de referencia, sino un nuevo tipo resultado de la propia subasta. En la primera subasta celebrada en el mes de junio, por ejemplo, con una referencia del 4,25 por 100, el tipo medio fue del 4,32 por 100 y el marginal el 4,29. Este sistema, mucho más eficiente, hace que el BCE pierda parte de su poder a la hora de determinar el nivel de tipos con el que inyecta liquidez al sistema.

El euro se consolida en los mercados y en las empresas…

El euro, a pesar de sus problemas frente al dólar, se ha consolidado en poco tiempo como la segunda divisa en algunos usos concretos, como las emisiones brutas de bonos según el Banco de Pagos Internacionales (un 38,0 por 100 de las emisiones brutas), a muy poca distancia de la divisa norteamericana (un 43,0 por 100), generando un mercado mayor que el resultante de la suma de los existentes en cada uno de los países que forman parte de la UEM. Asimismo, los pagos internacionales en euros han crecido considerablemente, debido a dos razones fundamentales: el elevado número de fusiones y adquisiciones que se están realizando en Europa y que cada vez más se denominan en euros, y la aceleración del proceso de conversión al euro de muchas empresas europeas y multinacionales, en especial en sus pagos internacionales[98]. También, el 67,0 por 100 del comercio electrónico realizado en Internet se hace en euros.

En este ámbito, en abril de 2001, el BCE y los bancos centrales nacionales firmaron un Protocolo de Cooperación, por el

[98] Comisión Europea. *Informe de utilización del euro*. Bruselas, 2000.

que se establecen mecanismos específicos de cooperación e intercambio de información en la tercera fase de la UEM para garantizar la seguridad en el ámbito de los sistemas de grandes pagos.

…Aunque los ciudadanos desconfían

El BCE puso también en marcha durante el año 2000 varias campañas nuevas para familiarizar a los ciudadanos europeos de los once países del área euro con los billetes y monedas que se pondrán en circulación a partir del 1 de enero de 2002. Frente a la paulatina adaptación de empresas y Administraciones Públicas al euro, como se apuntaba antes, los ciudadanos siguen desconfiando de la sustitución de las monedas nacionales por el euro, en especial en términos prácticos, por lo que constituyen el principal colectivo y potencial foco de problemas ante la puesta en circulación del euro. La última de ellas, la Campaña de Información Euro 2002, que se desarrolla durante el año 2001, cuenta con la colaboración de todos los agentes económicos involucrados en el cambio tanto a nivel de la Eurozona como a escala comunitaria, así como del BCE y los bancos centrales nacionales, y ha venido acompañada de la publicación de un documento de orientación para la introducción del euro[99].

Más medidas para la transición al euro

La Comisión Europea presentó en octubre de 2000 una nueva Recomendación[100], en la que proponen una serie de medidas para acelerar los preparativos de la transición al euro. Las medidas recomendadas pueden englobarse en cinco categorías:

- Informar a todos los agentes económicos que vayan a utilizar al euro, especialmente a las Pymes y a los grupos de personas vulnerables;
- ayudar a los ciudadanos a familiarizarse con el euro;
- estimular a los ciudadanos y a los agentes económicos a experimentar con el euro y a realizar durante 2001 todas aquellas operaciones que sean posibles en la nueva moneda;

[99] Orientación del BCE de 10 de enero de 2001 por la que se adoptan determinadas disposiciones sobre el cambio de moneda en el año 2002. Banco Central Europeo. Francfort, 2001.

[100] DOCE, 24 de octubre de 2000.

- reducir las operaciones que requieran una conversión en euros;

- facilitar la transición durante el periodo de doble circulación (1 de enero a 28 de febrero de 2002).

La nueva normativa, que aparece resumida en el cuadro I-38, afecta especialmente a los siguientes agentes económicos: Estados miembros, Administraciones Públicas, entidades de crédito, empresarios y el sector de comercio minorista.

La Federación Bancaria de la Unión Europea ha estimado que los gastos generados por la introducción de la moneda única que soportarán las entidades bancarias será de unos 12.000 millones de euros en cada uno de los Estados del área euro, derivados no sólo de aspectos administrativos sino también del transporte y almacenaje de las nuevas monedas y billetes, y también de las que se retirarán de la circulación. En otro tipo de gastos, como los previstos sólo para España, por ejemplo, en el sector de los empresarios de máquinas expendedoras, se estiman unos costes de adaptación de 3.000 millones de pesetas.

Adaptación al euro en España

En España, según las encuestas periódicas realizadas por las cámaras de comercio, la adaptación al euro progresa a un ritmo razonable, al tiempo que cada vez es más clara la percepción de que

CUADRO I-38
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN PARA EL AÑO 2001

Los empresarios ante el euro
• Las nóminas se pagarán en euros, indicando únicamente el importe final en la moneda nacional.
• Los contratos de duración indeterminada concluidos en el 2001 deberán establecerse en euros.
• Los contratos de duración determinada concluidos en 2001, cuyo vencimiento sea posterior al 1 de enero deberán establecerse también en euros.
• Las negociaciones salariales entre los interlocutores sociales deberán realizarse en euros.
Las Administraciones Públicas ante el euro
• Las nóminas se pagarán en euros, indicando únicamente el importe final en la moneda nacional.
• En el tercer trimestre de 2001 las facturas de agua, gas, electricidad, etc, se expresarán en euros, indicando únicamente el importe final en la moneda nacional.
• Velar por la aprobación de medidas para facilitar el paso al euro a las personas con dificultades de acceso a la información, especialmente a aquellas que no realicen operaciones bancarias.

Fuente: Comisión Europea y elaboración propia.

el euro aportará ventajas en los negocios incluso a las empresas de dimensión más reducida. Sin embargo, existe la preocupación de que un porcentaje pequeño pero considerable de empresas deje para el último momento los preparativos de adaptación, como ya hicieron ante el efecto 2000, en particular las de menor dimensión, lo que podría reportar consecuencias negativas para ellas y para sus socios comerciales. En marzo de 2001, según el Registro Mercantil Central, el 99,0 por 100 de las empresas españolas no habían denominado su capital en euros todavía.

El II Plan de Transición al Euro

En España, el 1 de septiembre de 2000 el Consejo de Ministros aprobó el II Plan de Transición al Euro, el cual es una continuación del Plan Nacional para la Transición al Euro de la Sociedad Española[101], y que debe servir de guía en el tramo final del proceso que comenzó en enero de 1999 y que terminará con la desaparición definitiva de la peseta.

Los objetivos fundamentales del II Plan son los siguientes:

- Garantizar la elaboración y posterior distribución de 7.800 millones de monedas y de 1.924 millones de billetes de euros;
- establecer unas pautas para poder realizar la retirada de billetes y monedas en pesetas de forma eficiente y rápida;
- asegurar una rápida y eficaz puesta en circulación de euros desde comienzos del año 2002, de manera que a partir del 15 de enero exista suficiente efectivo en circulación para realizar las transacciones monetarias en euros;
- intensificar las campañas de información sobre la introducción del euro y su sustitución para favorecer la programación de las actividades que tienen que desarrollar los agentes económicos para hacer frente a este evento.

Monedas y billetes de euros

El Plan gira en torno a dos ejes principales, por una parte, la puesta en circulación durante la primera quincena del mes de enero de 2002 de una masa crítica de billetes y monedas para poder

[101] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1998,* págs. 148 y ss.

realizar las operaciones cotidianas. Y por otra parte, la retirada de billetes y monedas en pesetas. Para poder realizarlo, se articulan tres etapas, una de predistribución (hasta el 31 de diciembre); una de doble circulación (1 de enero a 28 de febrero de 2002); y finalmente, una de canje (hasta el 30 de junio de 2002 en cualquier entidad, a partir del 30 de junio únicamente en el Banco de España).

Igual que en el resto de los países del área euro, el Gobierno español ha desarrollado durante el año 2000, y lo sigue haciendo durante 2001, campañas de comunicación acerca de la adopción definitiva de la nueva moneda. Asimismo, la Comisión Europea ha alertado de los riesgos sobre la inflación que puede provocar una aplicación incorrecta de las normas de redondeo en la conversión de pesetas en euros[102].

7.2.3. **Armonización fiscal en la Unión Europea. Una perspectiva del debate**

Desde una perspectiva teórica, una unión económica plena debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales: un espacio económico, una moneda única y una política fiscal común. Sin embargo, a pesar de los notables avances registrados, se observa en la Unión Económica y Monetaria un cierto desequilibrio en la medida en que el tercer pilar, la política fiscal común, se encuentra menos desarrollada. Ello obedece al silencio de los Tratados constitutivos, y de sus posteriores revisiones, sobre la unificación fiscal. En efecto, la fiscalidad comunitaria es contemplada en los Tratados fundamentalmente desde la óptica de la consecución del mercado único[103].

Fiscalidad: reducto de soberanía

La fiscalidad, tradicionalmente considerada como una manifestación de la soberanía de los países que en la Unión Europea aspiran a mantener sus singularidades, es un aspecto que no ha sido debatido suficientemente en el seno de la Unión Europea. El propio derecho comunitario concibe la armonización fiscal como una acción instrumental y dinámica, y no impone, por lo tanto, un sistema tributario común a todos los Estados miembros.

[102] Según lo previsto por la Ley de Introducción del euro. Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1998,* págs. 148 y ss.

[103] Artículo 100.A 2 del Tratado de la Unión Europea.

En la Unión Europea se otorgó, desde un principio, una mayor prioridad a la armonización fiscal indirecta sobre la directa, tal y como queda reflejado en el artículo 93 TCE (antiguo artículo 99), que constituye la base de las Directivas armonizadoras para impuestos indirectos. La ausencia de referencias explícitas a la armonización de los impuestos directos no impidió que se emprendieran estudios para adoptar algunas medidas que evitasen la distorsión introducida por este tipo de impuestos que, al repercutir sobre los factores de producción, inciden, asimismo, en la libre competencia y en la libre circulación de la Unión Europea. Sin embargo, los avances en esta área se están materializando más a través de la coordinación de acciones de política fiscal que por la vía de aprobación de Directivas específicas, con el propósito de allanar el camino hacia la consecución del mercado único.

Los modestos avances registrados en el ámbito de la coordinación fiscal y las reticencias demostradas por los Estados miembros frente a la armonización generan un interesante debate sobre las ventajas que presentan, una frente a otra, la armonización y la competencia fiscal.

Competencia fiscal en la Unión Europea

Los efectos económicos de la competencia fiscal han sido analizados tradicionalmente desde la teoría del federalismo fiscal, y juzgados en términos negativos por lo general. Así, la competencia fiscal conduce a una reducción de ingresos tributarios y, por tanto, de gastos públicos necesarios. En segundo término, supone por lo general un desplazamiento de la carga de los impuestos hacia los factores menos móviles geográficamente, como los inmuebles y, en particular, el trabajo poco cualificado, lo que resulta en una redistribución regresiva de los pagos impositivos. Un tercer efecto negativo es la distorsión que la competencia fiscal puede introducir en la asignación de factores móviles y producciones entre regiones o países: la competencia fiscal puede hacer que la producción no se localice allí donde los costes sean más bajos, distorsionando el patrón de comercio, y que el capital se desplace geográficamente de manera ineficiente. A todo lo cual habría de sumarse el aumento del riesgo de inestabilidad política —o de empeoramiento del clima de cooperación— entre aquellos países que, formando parte de una unidad política o una fórmula de integración supranacional, utilizan de modo frecuente o sistemático la competencia fiscal como una política de empobrecimiento del vecino (*beggar-the-neighbour*).

Armonizar para evitar la competencia fiscal

Para prevenir estos potenciales efectos, una posibilidad es armonizar aquellos impuestos más sensibles a la competencia fiscal, esto es, acordar políticamente reglas sobre tipos de gravamen, definición de bases imponibles y otros aspectos determinantes de la aplicación efectiva de los impuestos, es decir, retenciones, reglas de repatriación, asistencia mutua e intercambio de información, etc. Aunque en principio la armonización podría suavizar o eliminar los peores efectos de la competencia fiscal, en la práctica puede ser inviable por dos razones. En primer lugar, por la existencia de países o áreas no afectados por los acuerdos de armonización como, por ejemplo, los paraísos fiscales, y por falta de consenso entre los potenciales firmantes acerca del alcance deseable y el contenido preciso de la armonización. En segundo lugar, una armonización muy extensa chocaría con el principio de subsidiariedad, al imponer sobre algunos países o regiones modelos tributarios ajenos a su tradición e idiosincrasia.

De este modo, es cada vez más frecuente la distinción entre competencia fiscal perniciosa y competencia fiscal aceptable o beneficiosa, distinción que se recoge incluso en los textos aprobados por el Consejo y la Comisión de la Unión Europea y el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. Detrás de este razonamiento subyace la intuición de que no puede ser del todo cierto que la competencia deba tener sólo efectos negativos cuando se aplica a materias fiscales. En efecto, la competencia entre gobiernos podría contribuir a importar formas eficientes de imposición, a incentivar la reforma tributaria interna y a promover una mayor eficiencia de la administración tributaria. Además, la competencia fiscal podría llegar a favorecer una mayor eficiencia en el gasto, en la medida en que puede inducir a una disminución del gasto socialmente improductivo.

Estos efectos positivos de la competencia fiscal deben diferenciarse de otros más perniciosos, como son la creación de oportunidades de evasión y elusión, regímenes fiscales especiales, prácticas administrativas discriminatorias y poco transparentes, incentivos disponibles sólo para no residentes, incluso cuando no existe actividad económica real, y medidas similares, en definitiva, fenómenos de desfiscalización.

CUADRO I-39
TIPOS* IMPOSITIVOS IMPLÍCITOS EN LA UNIÓN EUROPEA, 1980-1996
(En porcentaje)

Conceptos	1980	1985	1992	1996
Consumo				
MEDIA	13,5	13,6	13,8	14,4
C. Variación	0,2	0,2	0,1	0,2
Rango	13,0	10,7	7,9	8,9
Máximo	19,7	21,4	19,8	21,2
Mínimo	6,7	10,7	12,4	12,3
ESPAÑA	**6,7**	**10,7**	**12,4**	**12,3**
Trabajo				
MEDIA	34,7	38,3	40,5	43,2
C. Variación	0,2	0,2	0,2	0,2
Rango	33,1	31,3	28,7	30,3
Máximo	50,9	52,7	53,3	57,6
Mínimo	17,8	21,4	24,6	27,3
ESPAÑA	**34,9**	**37,6**	**39,3**	**42,6**
Otros factores**				
MEDIA	42,1	41,5	37,3	35,6
C. Variación	0,3	0,4	0,3	0,3
Rango	43,4	47,1	34,3	40,1
Máximo	62,4	62,5	44,1	49,8
Mínimo	17,0	15,4	9,8	9,7
ESPAÑA	**17,0**	**20,2**	**30,1**	**24,0**

* Son tipos medios efectivos.
** Incluye fundamentalmente impuestos sobre el capital, así como sobre factores como la energía.
Fuente: Eurostat (1998).

7.2.4. **Reforma fiscal**

Fiscalidad del ahorro: acuerdo posible

En la Cumbre de Feira del 19 de junio de 2000 se acordó el calendario que va seguir la Unión Europea para desarrollar el proceso de armonización fiscal del ahorro (cuadro I-40), desbloqueando lo que se ha venido conociendo como *paquete fiscal*, y encomendando al ECOFIN cerrar un acuerdo sobre el contenido esencial de la Directiva relativa al ahorro. Así, según ese esquema, en las reuniones que mantuvo el ECOFIN en el segundo semestre de 2000, junto con los ministros de Justicia e Interior, se cerraron acuerdos específicos sobre la fiscalidad del ahorro, tal y como se manifestó en la Cumbre Europea celebrada en Portugal en junio, que se aplicarán a los no residentes en el país donde depositen sus ahorros. En esta ocasión, se asentaron las bases del texto de la futura

Directiva sobre la armonización fiscal en este campo. No obstante, el texto definitivo no fue aprobado por el ECOFIN hasta noviembre, culminando así la primera fase del calendario acordado en Lisboa.

La Directiva, que pretende fijar las bases del futuro sistema de intercambio de información entre todos los países miembros de la Unión Europea abordará, entre otros aspectos, la definición del ámbito de aplicación de la misma, el reparto de los ingresos fiscales, el procedimiento para solicitar información, a petición del Estado de residencia del contribuyente, al Estado dónde se practique la retención a cuenta y la eliminación de la doble imposición.

De esta forma se pretende erradicar el problema de evasión de capitales de unos países a otros, tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella. Para ello se implantarán «unos dispositivos eficaces» para luchar contra el «blanqueo» de dinero, obligando a los Estados miembros a facilitar toda la información posible y datos necesarios, sin tener en cuenta el secreto bancario o fiscal hasta

CUADRO I-40

CALENDARIO PARA LA ARMONIZACIÓN FISCAL DEL AHORRO ACORDADO EN LA CUMBRE DE LISBOA DEL 19 DE JUNIO DE 2000

Primera fase (20-6-00/31-12-00)
• Elaboración del texto de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro. • Ecofin de 17 de octubre: presentación del texto de la Directiva. • Ecofin de 27 de noviembre: aprobación del texto de la Directiva y se pasa a la segunda fase.
Segunda fase (1-1-01/31-12-02)
• Se aprueba la Directiva por unanimidad. • Terceros países afectados (Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Suiza, y Estados Unidos) adoptan medidas de intercambio de información similares a las de la Unión Europea, así como los territorios dependientes o asociados, con el fin de mantener la competitividad en los mercados financieros europeos y evitar la fuga de capitales.
Tercera fase (después de 7 años)
• A partir de 2009 todos los Estados de la Unión Europea aplicarán el intercambio de información una vez que concluya el periodo transitorio con las condiciones que se prevengan durante el mismo, como el mantenimiento de la retención a cuenta en origen en Austria, Bélgica y Luxemburgo hasta entonces.

Fuente: Comisión Europea.

ahora existente. De no cumplirse éste, la Unión Europea podría restringir la libre circulación de capitales con estos países o territorios.

Nuevas modificaciones del IVA

El Consejo adoptó en octubre de 2000 una Directiva[104] relativa a la determinación del deudor del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con el fin de simplificar su aplicación en el comercio. La Directiva prevé la supresión de la obligación para los operadores de designar un representante fiscal en los Estados miembros en los que no estén establecidos.

Régimen fiscal común para las fusiones

La legislación de la Unión Europea sobre fusiones no está muy desarrollada y aborda el tema sólo superficialmente, por lo que son cada vez más numerosas las empresas que demandan una legislación que dé cobertura a esta realidad. En este campo, se han adoptado algunas Directivas europeas que regulan el registro de sociedades, las exigencias mínimas de capital inversor, el régimen fiscal de las fusiones y las escisiones, mientras que todavía la normativa de los distintos países no autoriza las fusiones transfronterizas ni las transferencias internacionales de sociedades.

No obstante, existe una insuficiencia de regulación en materia societaria; por estas razones durante el año 2000 la Unión Europea anunció el desarrollo de varias Directivas que regularán la creación de *holdings,* la fusión de dos empresas europeas de países distintos, la constitución de una filial común y la transformación de una sociedad anónima nacional en una internacional, si bien el desarrollo de esta normativa europea será lento.

Equiparación de la fiscalidad sobre el petróleo

El precio del petróleo alcanzó al final del año 2000[105] unos niveles máximos desde la Guerra del Golfo (agosto de 1990). En el precio que paga el consumidor no sólo debe tenerse en cuenta la evolución del mercado del crudo, que es sin duda la razón más fuerte de esta subida, sino que hay que considerar un componente más como es la fiscalidad sobre los productos petroleros. En este sentido, se puede indicar que en el precio final (precio al consumidor) existen dos tipos de impuestos: por una parte, los impuestos especiales, que

[104] Directiva 2000/65/CE del Consejo, de 17 de octubre de 2000, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que respecta a la determinación del deudor del IVA.

[105] Véase capítulo I, epígrafe 7.2.2.

son derechos específicos (fijos), y por otra parte, el IVA, que es un derecho *ad valorem* (proporcional al precio de venta del producto).

La parte de la fiscalidad en los precios de los productos petrolíferos varía fuertemente de un país a otro de la Unión Europea. Así, los impuestos especiales sobre el gasóleo de automoción varían entre 40,76 pesetas por litro en Portugal y 129,28 pesetas por litro en el Reino Unido, según la Comisión Europea (cuadro I-41). Tomando en consideración también los impuestos sobre otro tipo de combustibles derivados del petróleo, se deduce que la carga fiscal total media de los carburantes representa del 50 por 100 al 60 por 100 del precio final en los países con menor presión fiscal (España, Grecia, Luxemburgo y Portugal), mientras que llega al 75 por 100 en el Reino Unido.

Por esta razón, la Comisión Europea tiene presentada desde 1997 una propuesta para acabar con las grandes diferencias existentes entre los impuestos que gravan los hidrocarburos en los distintos países de la Unión Europea, con el fin de conseguir la difícil armonización de los impuestos especiales.

CUADRO I-41

IMPUESTOS ESPECIALES Y TIPOS DE IVA APLICADOS A LOS CARBURANTES POR LITRO EN LA UNIÓN EUROPEA, 2000

Países	Impuestos Especiales		IVA**
	Gasolina* (Ptas./l)	Gasóleo* (Ptas./l)	
Bélgica	84,36	48,25	21
Dinamarca	86,19	57,24	25
Alemania	93,51	62,89	16
Grecia	48,42	40,93	18
España	**61,73**	**44,76**	**16**
Francia	98,00	65,06	19,6
Irlanda	62,89	54,91	21
Italia	86,52	63,39	20
Luxemburgo	61,90	41,93	15
Holanda	99,17	58,40	17,5
Austria	68,88	48,06	20
Portugal	48,09	40,76	17
Finlandia	93,01	50,58	22
Suecia	88,02	57,40	25
Reino Unido	129,28	129,28	17,5
Mínimo UE	**47,75**	**40,76**	**15**

* Cantidades que deben sumarse al precio del litro de carburante.

** Tipo del IVA combustibles.

Fuente: Comisión Europea, diciembre 2000.

El Gobierno español se viene oponiendo a esta propuesta comunitaria, vetando en el seno de la Unión Europea los intentos de armonizar los impuestos de los carburantes, ya que su aprobación necesita la unanimidad de todos los países. De esta manera, ha evitado que se apruebe una medida que supondría en el caso español incrementar los impuestos en más de 13 pesetas, si se toma como referencia la distancia de precios medios que separa a España de la media comunitaria.

Los problemas que genera la imposición de una ecotasa uniforme en la Unión Europea se derivan no sólo del hecho de que los niveles de dependencia energética del petróleo son distintos entre países, sino también de que existen diferentes niveles de desarrollo entre unos y otros. De esta forma, al no modularse los límites de emisiones de acuerdo con el nivel de desarrollo económico, su estricto cumplimiento frenaría la convergencia en renta y penalizaría a los países que hasta el momento hubieran contaminado menos.

La Comisión Europea, convencida de la necesidad de armonizar los precios para evitar que las diferencias en la fiscalidad sobre los combustibles se utilicen como ayudas de Estado, pero conocedora de casos como el español[106], y para evitar un impacto fiscal muy fuerte, ha previsto un plazo de entre cuatro y siete años para que los gobiernos nacionales apliquen los aumentos de impuestos para aproximarlos a la media del resto de los países miembros del área euro.

Otras armonizaciones: contabilidad financiera

El Consejo Europeo de Feira de junio de 2000 atendió la demanda de la Comisión a favor de armonizar las diferentes normativas contables vigentes en los Estados miembros que fragmentan los mercados de capitales, afectando su nivel de actividad y liquidez, y que dificultan el comercio transfronterizo de valores. Las medidas, que se enmarcan en el objetivo de crear un mercado integrado de servicios financieros para lo cual existe un Plan de Acción desde 1999[107], persiguen la armonización de las normas contables de todas las empresas que coticen en bolsa.

[106] España será uno de los países más perjudicados, ya que, por ejemplo, el tributo que grava el gasóleo únicamente está 4 pesetas por litro por encima del mínimo fijado en la normativa legislativa, muy por debajo de Alemania o Italia cuyos importes están 22,1 y 22,6 pesetas por encima, respectivamente.

[107] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999,* pág. 146.

7.2.5. **Más apoyo para las empresas europeas**

La Comisión Europea presentó en el último trimestre de 2000 el Programa Plurianual a favor de la Empresa (en particular pequeñas y medias empresas —Pymes—) y el Espíritu Empresarial 2001-2005 (cuadro I-42). Este Plan subraya la importancia que presenta la empresa y el espíritu empresarial para la consecución de los objetivos comunitarios, así como las dificultades que afrontan empresas y empresarios, en la línea de lo apuntado en distintas comunicaciones, decisiones e informes anteriores de la Comisión. En este sentido, la Comisión estima necesario adoptar medidas a nivel comunitario con el fin de ayudar a las Pymes a superar los problemas específicos que afrontan, pues éstas desempeñan un papel fundamental en cuanto a la competitividad, investigación, innovación, cualificación y empleo. La acción comunitaria en esta materia se ha estructurado hasta ahora en una serie de programas, especialmente el Tercer Programa Plurianual a favor de la Pymes de la Unión Europea que finalizó el 31 de diciembre de 2000.

CUADRO I-42
PROGRAMA PLURIANUAL A FAVOR DE LA EMPRESA Y EL ESPÍRITU EMPRESARIAL

Los principales objetivos de este programa son:
- Fomentar el crecimiento y la competitividad de la empresas en una economía internacionalizada y basada en el conocimiento;
- Simplificar y mejorar el marco administrativo y reglamentario de las empresas, en particular para favorecer la investigación, la innovación y la creación de empresas;
- Mejorar el entorno financiero de las empresas, en concreto el de las Pymes;
- Facilitar el acceso de las empresas a los servicios de apoyo, a los programas y a las redes comunitarias, y mejorar su coordinación.

En lo que se refiere a la mejora del entorno financiero de las empresas y de las Pymes en particular, el programa favorecerá especialmente medidas que mejoren este marco. Dichas medidas son:
- Plan de ayuda inicial del Mecanismo Europeo para las Tecnologías (MET), gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), de apoyo a la creación y financiación de las Pymes que estén comenzando;
- Mecanismo de garantía para las Pymes, que proporcionará contragarantías, o si procede, garantías comunes a los sistemas de garantías vigentes en los Estados miembros;
- Acción financiación de siembra dirigida a estimular la oferta de capital para crear empresas nuevas, innovadoras, con potencial de crecimiento y creadoras de empleo, mediante el apoyo del fondo de capital de siembra.

7.3. Política europea de empleo y política social

7.3.1. **Empleo**

Directrices para las políticas de empleo de los Estados

Las cuartas líneas directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros en 2001 fueron aprobadas por el Consejo Europeo de Niza a propuesta de la Comisión Europea tal y como prevé el artículo 128.2 del Tratado de la Unión. Estas directrices se sustentan sobre los cuatro pilares fundamentales de los años anteriores, a partir de lo acordado en la Cumbre Extraordinaria de Empleo de Luxemburgo[108] de 1997: aumento de la capacidad de inserción profesional, fomento del espíritu de empresa, adaptabilidad a los cambios e igualdad de oportunidades; introduciendo los cambios lógicos derivados de la evolución de las políticas aplicadas, del progreso en el proceso de reformas y de los nuevos objetivos adoptados, como por ejemplo los de la Cumbre de Lisboa[109]. En Lisboa se acordó realizar durante el año 2002 una evaluación completa y minuciosa de la política de empleo de la Unión Europea. El objetivo es alcanzar en el año 2010 una tasa de empleo del 70 por 100 de la población activa (frente al 62,2 por 100 de 1999) y de un mínimo del 60 por 100 para las mujeres. La Comisión desea que se potencie el empleo de calidad, al tiempo que se analiza la evolución del empleo de los jóvenes y su relación con el sistema educativo y los niveles de formación de manera más detallada. Finalmente, la Comisión Europea estima que los agentes sociales deben desarrollar un rol más activo en la puesta en práctica de las principales medidas de la estrategia por el empleo, al tiempo que asumen un papel clave en aspectos como

[108] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1997,* págs. 180 y ss.

[109] Véase CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1999*, págs. 161 y ss. Consejo Europeo extraordinario en el que para hacer frente con éxito a la globalización, los Quince se plantearon el objetivo estratégico de adecuar las políticas macroeconómicas para lograr el pleno empleo en el año 2010, conseguir que en esa fecha Europa sea un espacio más competitivo que los Estados Unidos potenciando el desarrollo de la nueva economía y del capital humano, basados ambos en el conocimiento y, en tercer lugar, modernizar los sistemas de protección social y promover mecanismos de creación de empleo, combinando la cohesión social y la competitividad. Para ello se fijó como objetivo que la Unión Europea alcance el pleno empleo en el año 2010, consiguiendo antes, en el 2006, que el desempleo se reduzca hasta el 6 por 100 pero elevando la tasa media de actividad hasta el 70 por 100 de la población en edad de trabajar en 2010, frente al 61 por 100 vigente en el año 2000. Ello implica pasar por un 65 por 100 de actividad en 2006. El desempleo final sería exclusivamente friccional de un 3-4 por 100.

la lucha contra las situaciones de discriminación en el mercado de trabajo y la articulación de esta política con la de integración social y lucha contra la exclusión.

Recomendaciones para España

Las principales recomendaciones formuladas por la Comisión Europea para España en su Informe conjunto con el Consejo apuntan a la búsqueda de una adecuada combinación de flexibilidad y seguridad que permita reducir la temporalidad, a la mejora de los niveles de formación y educación de los trabajadores españoles, y a la reducción de las diferencias regionales. Así, con el fin de ser contempladas en el Plan de Empleo para el año 2001, subrayan la necesidad de adoptar medidas activas destinadas a combatir y prevenir el desempleo juvenil y el de larga duración. También, en España, es necesario adaptar el sistema de formación profesional, el de cualificaciones profesionales y el de formación continua con el fin de contribuir a la instauración de una economía competitiva basada en el conocimiento, así como facilitar la reinserción profesional. España también debe incrementar sus esfuerzos en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, reformar ciertos aspectos fiscales y prestaciones sociales y hacer un mayor esfuerzo de cara a la modernización de la organización del trabajo.

Tal y como se detalla en el capítulo II de esta Memoria, el Gobierno español aprobó en abril de 2001 el Plan de Empleo de España para ese año, con un presupuesto de 858.256 millones de pesetas (5.100 millones de euros).

Ampliación y empleo

La Comisión Europea publicó en el mes de mayo de 2000 un Informe en el que analiza el posible impacto de la ampliación de la Unión Europea hacia el Este en materia de empleo. Así, según este estudio, este proceso no generará efectos importantes en el mercado laboral de la Unión Europea en materia de ocupación, salarios y distribución de los ingresos. La Comisión considera que tras la adhesión de los países de Europa oriental se producirá una entrada de unos 350.000 trabajadores anuales con origen en los mismos hacia el resto de Estados miembros, cantidad que irá reduciéndose año tras año a medida que vayan equilibrando sus niveles de renta y actividad económica, hasta alcanzar un mínimo de 150.000 diez años después. Es probable que estas cantidades sean absorbibles ante las futuras necesidades de empleo que se registran en el resto de países. Con todo, el impacto no será el mismo en todas las regiones, concentrándose bue-

na parte de estos trabajadores en las regiones fronterizas de países como Alemania y Austria, y en aquellos sectores más sensibles a los productos producidos en Europa central y oriental.

Aunque en términos globales el impacto sea, según la Comisión, escaso, para el caso concreto de España, tal y como se expuso en el epígrafe 3.3 de este mismo capítulo, la adhesión supondrá un notable reto en tanto en cuanto las regiones de los países candidatos presentan una formación mayor de la población en edad de trabajar.

Integración de las políticas de empleo y de inclusión social

La integración de la política de empleo y la de inclusión social abarcan aspectos como la erradicación de las situaciones de penuria y precariedad en algunos sectores, profesiones y regiones, acabar con los déficit de cualificaciones, reducir la pobreza y evitar la creación de una bolsa de pobreza y la marginación, reducir el analfabetismo, potenciar la educación y la mejora de los recursos humanos, proteger a los trabajadores de más edad, al tiempo que se prolonga la vida laboral. En este sentido, durante el año 2000, el Consejo estableció dos Directivas[110] con el objetivo de erradicar las discriminaciones que tienen su origen en el sexo, raza, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

7.3.2. **La nueva Agenda Social**

Se aprueba la Agenda Social Europea

En el segundo semestre del año 2000, bajo Presidencia francesa, el Consejo Europeo que puso fin a la misma, reunido en Niza en el mes de diciembre, aprobó la Agenda Social Europea dentro de un conjunto de medidas que conllevan un nuevo impulso para la Europa económica y social. La Agenda Social sustituye al programa de Acción Social 1998-2000 y está basada en las nociones de pleno empleo, dinamismo económico y mayor cohesión y justi-

[110] Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.

cia sociales. La Agenda Social forma parte del enfoque integrado europeo destinado a conseguir la renovación económica y social esbozada en Lisboa. Su objetivo es lograr una interacción positiva y dinámica entre las medidas económicas, de empleo y sociales y un acuerdo político que movilice a todos los agentes clave para trabajar conjuntamente en la consecución del nuevo objetivo estratégico. La Agenda Social Europea define las prioridades de actuación concretas para los próximos cinco años en torno a seis orientaciones estratégicas en todos los ámbitos de la política social:

1. Promover un mayor número y una mejor calidad de los puestos de trabajo. Optimizar el potencial de pleno empleo de Europa, lo cual exige crear más y mejores puestos de trabajo, prever y gestionar el cambio y adaptarse al nuevo entorno de trabajo, aprovechar el potencial de la economía basada en el conocimiento y promover la movilidad;

2. anticiparse a los cambios del entorno;

3. luchar contra todas las formas de exclusión y de discriminación para favorecer la integración social. Promover la inclusión social;

4. modernizar la protección social;

5. fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer y los derechos fundamentales. Luchar contra la discriminación;

6. reforzar la dimensión social de la ampliación y de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Iniciativas dedicadas a la preparación de la ampliación y a promover la cooperación internacional haciendo que el diálogo social contribuya a responder a los diferentes retos.

La Agenda debe contribuir, mediante un método de coordinación abierta, a conseguir el objetivo estratégico definido en Lisboa, fomentando el pleno empleo, la calidad de las relaciones laborales y de la política social, mediante la participación de todos los actores y a través del método abierto de coordinación mediante la legislación adecuada, el diálogo social, la aplicación de los Fondos Estructurales, en particular el Fondo Social Europeo (FSE), pro-

puestas de programas e investigación y otras medidas. Estas medidas deben realizarse sin perder la referencia del proceso de ampliación, al tiempo que se impulsa la cooperación internacional. La Confederación Europea de Sindicatos apoyó la adopción de la Agenda Social y de las medidas previstas para los cinco años en los términos en los que fueron aprobadas.

Además de la aprobación de la Agenda Social, Niza ha significado el establecimiento formal de una estrategia europea de lucha contra la exclusión social y todas las formas de discriminación. En este sentido, el Consejo aprobó los objetivos de la lucha contra la pobreza y la exclusión social e invitó a los Estados miembros a enmarcar sus prioridades en dichos objetivos, debiendo presentar en el mes de junio de 2001 un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, por un periodo de dos años, que defina, además, indicadores y procedimientos de verificación de los progresos realizados.

Estrategia europea de lucha contra la exclusión social

Conviene subrayar que estas iniciativas responden al reconocimiento por parte de los Estados miembros y por la Comisión de que la exclusión social es uno de los principales desafíos planteados a las economías y sociedades europeas. De hecho, la Comisión considera inaceptables las actuales tasas de pobreza en la Unión Europea.

Para la Comisión, la exclusión se caracteriza por:

- Baja renta y vulnerabilidad. Según Eurostat, alrededor del 18,5 de la población de la Unión Europea viven con menos del 60 por 100 de la renta media nacional (65 millones de personas);

- Multidimensionalidad. Comprende la igualdad de acceso al mercado de trabajo, a la educación, a la salud, al sistema judicial, a los derechos, así como a la adopción de decisiones y a la participación;

- Estructuralidad. Las tendencias que remodelan actualmente nuestras sociedades pueden, además de entrañar efectos positivos, incrementar el riesgo de exclusión social.

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social para el periodo 2001-2003, realizado conforme al método de coordinación

abierta, debe ser presentado ante el Consejo en junio de 2001 por el Gobierno español[111]. El esquema del Plan es el siguiente: objetivos, prevención de los riesgos de exclusión, actuación a favor de los más vulnerables y movilización de todos los agentes.

Se crea el Comité de Protección Social

El Consejo Europeo de Lisboa creó el Comité de Protección Social[112], formalizado en el artículo 144 del Tratado de Niza, constituyéndose formalmente en diciembre de 2000. Sus primeros objetivos son realizar un seguimiento de las políticas de los Estados miembros y de la Comunidad en materia de protección social, facilitar el intercambio de información, experiencia y buenas prácticas entre ellos y la Comisión, y preparar un informe anual sobre esta cuestión que deberá ser presentado al Consejo.

En otro ámbito de lo social, la Comisión presentó en octubre de 2000 una Comunicación sobre el futuro de la protección social, con el fin de estudiar la viabilidad a corto y largo plazo de los sistemas de pensiones, en particular la viabilidad a largo plazo, comprometiéndose a presentar un informe final sobre el futuro de la protección social en junio de 2001.

Envejecimiento de la población y protección social

La Comisión Europea ha alertado que de no efectuarse las reformas oportunas, el envejecimiento de la población puede comprometer en un futuro el crecimiento de las economías europeas. Por este motivo el ECOFIN, reunido en noviembre de 2000, demandó adoptar con urgencia reformas en los sistemas actuales de pensiones de los países miembros, alertando sobre la necesidad de aprovechar el actual crecimiento económico.

Tal y como ha subrayado la presidencia sueca en su documento de prioridades para el primer semestre del 2001[113], para hacer frente a la actual tendencia demográfica que combina bajas tasas de natalidad con un aumento continuo de los mayores de 65 años, se pueden adoptar medidas de carácter amplio que, entre otras cosas, incluyan una revisión del sistema de pensiones y un sistema de

[111] Véase capítulo III.

[112] DOCE L 172/26. 12.7.2000.

[113] Prioridades de la presidencia sueca para el primer semestre de 2001. Consejo Europeo. Bruselas, 2001.

cuidados médicos y atención de los ancianos, mejores condiciones para familias con hijos y medidas para el aumento de la participación de la fuerza laboral. La presidencia sueca de este primer semestre de 2001 tiene la intención de tomar la iniciativa, fomentando un debate sobre estas cuestiones con el objeto de lograr un acuerdo político que contemple un programa de medidas necesarias.

Más años en activo

El ECOFIN a su vez estima que la solución más factible pasa por reformar los actuales sistemas de pensiones para lograr que favorezcan la creación de empleo y, en particular, inciten a los trabajadores de edad a permanecer en activo. Las principales medidas que recomienda la Comisión para lograr este objetivo son incrementar el número de años de cotización requeridos para obtener el derecho a la pensión completa, e incentivar el desarrollo de regímenes privados de fondos de pensiones, entre otras. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben asegurar que los pensionistas sigan teniendo ingresos adecuados, sin poner en peligro la estabilidad de las finanzas públicas, sin comprometer los incentivos al empleo, ni recortar otros gastos públicos esenciales.

Futura Directiva sobre instituciones de jubilación profesional

A este respecto, la Comisión Europea presentó en el mes de octubre de 2000 una propuesta de Directiva relativa a las instituciones de jubilación profesional (fondos de pensiones y de jubilación). Esta normativa busca crear un marco cautelar destinado a garantizar un alto nivel de protección para los derechos de los futuros jubilados y, por otra parte, pretende establecer un marco regulador en el que los fondos de pensiones tengan libertad para diseñar sus estrategias de inversión, sin imposición de restricciones cuantitativas.

Para conseguir lo anterior la nueva norma comunitaria persigue tres objetivos:

1. Protección de los derechos de los beneficiarios de las pensiones estableciendo normas cautelares y de capitalización rigurosas.

2. Garantía de que los organismos de previsión para la jubilación tengan la suficiente libertad para practicar una política eficaz de inversiones que se beneficie plenamente de las ventajas derivadas del euro y del mercado interior.

3. Eliminación de todas las barreras existentes en la gestión transfronteriza.

Carta de Derechos Fundamentales

Los Estados miembros asumieron en el Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 que en el año 2004 se decidiría el encaje jurídico que se concede a la Carta de Derechos Fundamentales, limitándose en la ciudad francesa a proclamar su contenido, como los valores esenciales del ciudadano europeo. La Confederación Europea de Sindicatos y el Centro Europeo de Empresas de Participación Pública y de Empresas de Interés General apoyaron su inclusión en el Tratado como protocolo.

Sociedad Anónima Europea

El Consejo Europeo de Niza cerró un acuerdo histórico respecto al expediente del Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (*SAe*). Así, el Estatuto de la *SAe* otorgará a las empresas que operen en varios Estados miembros la posibilidad de constituirse como sociedades de derecho comunitario y de comportarse como operadores únicos en la totalidad de la Unión Europea, aplicando un conjunto de reglas y un sistema de gestión de las empresas y de sus cuentas únicas, y evitando, por tanto, tener que comportarse conforme a la legislación de cada Estado en los que operan como filiales.

La propuesta de Directiva sobre la Sociedad Anónima Europea, presentada por primera vez hace tres décadas y bloqueada en los últimos tiempos por varios países, entre ellos España, crucial para una mayoría de Estados miembros para completar el mercado único, se ha abierto camino gracias a que la Comisión Europea asumió finalmente que en relación a su aspecto más conflictivo, como es el derecho a la negociación libre entre estas nuevas sociedades y sus trabajadores, el texto final debía velar por el respeto de las culturas de relaciones industriales vigentes en los Estados miembros. El Gobierno español se ha venido oponiendo a que un porcentaje de trabajadores menor al 25 por 100 de la plantilla pueda imponer a la mayoría su participación en un proceso de fusión entre empresas de varios Estados miembros. Por ello se acordó abrir la posibilidad de que cada Estado miembro, y en particular España, a la hora de transponer el contenido de la Directiva, pudiera optar en cuanto a la aplicación de su contenido en ese aspecto. Así, en el texto de la futura Directiva contemplará esta posibilidad, al tiempo que la

forma por la cual se registrará una *SAe* en un Estado miembro que haya optado por no aplicar ese aspecto de la misma en el caso de que se produzca una fusión.

Futura Directiva sobre información y consulta

Otro *dossier* delicado que ha suscitado largos y profundos debates en el seno del Consejo de Asuntos Sociales y Empleo durante el año 2000, y que se ha reabierto en 2001 a raíz del anuncio de cierre de centros de trabajo de algunas empresas transnacionales, es el relativo a la propuesta de Directiva sobre información y consulta de trabajadores a nivel nacional. En este sentido, la Comisión desea fijar un marco y una concepción general para asegurar esa práctica en las empresas situadas en la Unión Europea. Según la propuesta de la Comisión, los Estados miembros decidirían el alcance de la misma, optando por el número de trabajadores que determinará su aplicación, en una horquilla de 20 a 50, al tiempo que insiste en la importancia de la negociación colectiva y el reconocimiento de la labor desarrollada por los agentes sociales, sin descartar la posibilidad de que éstos puedan por otras vías, como el acuerdo, definir libremente otras modalidades de información y consulta en los términos establecidos por los Estados.

Futuro diálogo sobre ETT y fusiones

Por otra parte, en mayo de este año los agentes sociales europeos que forman parte del diálogo social a nivel europeo, la Confederación de Industrias y Empleadores de Europa (UNICE) y la Confederación Europea de Sindicatos, acordaron comenzar a negociar un acuerdo marco que regule el trabajo temporal en la Unión Europea, con el fin de intentar alcanzar un nuevo acuerdo que complemente al del trabajo a tiempo parcial y el del trabajo de duración determinada.

La Confederación Europea de Sindicatos han mostrado su interés en mejorar el mecanismo actual de consulta de los trabajadores en los casos de fusión. La legislación actual no prevé la consulta formal con los trabajadores mientras que la Comisión se limita a analizar los efectos de las mismas en materia de concentración y posibles creaciones de posiciones de situación dominante, que es lo que determina su aprobación, y no sus efectos en materia de empleo. En este sentido, la Confederación Europea de Sindicatos entiende que las disposiciones del Tratado de Amsterdam establecen la obligación de considerar la política de empleo en todas las políticas europeas y por ello la de competencia no debería ser una ex-

cepción. Es más, incluso la Directiva sobre Comités de Empresa Europeos debería contemplar este tipo de situaciones. En el seno de la Comisión, se está discutiendo si las demandas de autorización para los casos de fusión y adquisición de empresas podrían incluir una referencia respecto a la obligación de respetar los procedimientos de información y consulta, aunque la autonomía de la política de competencia debe ser plena.

Diálogo macroeconómico

El diálogo macroeconómico, foro que acoge a la Comisión Europea y a los agentes sociales europeos, ha consolidado su actividad durante el año 2000, analizando y realizando propuestas en campos como el del análisis de la situación económica, las estrategias de política necesarias para poner en marcha programas como la Estrategia de Lisboa, y los indicadores necesarios para evaluar sus avances, las grandes orientaciones de política económica y la política europea de empleo.

Igualdad entre mujeres y hombres

La Comisión Europea adoptó en el mes de junio de 2000 el nuevo programa marco que contiene la estrategia europea en materia de igualdad entre mujeres y hombres para el periodo 2000-2005. La estrategia presenta cinco líneas de actuación: igualdad en la vida económica, igualdad en la participación y representación, igualdad en la vida social, igualdad en la vida civil y modificación de roles y estereotipos. Estas líneas se sustentan en dos pilares fundamentales. El primero, el *mainstreaming*, pasa por que todas las acciones y servicios de la Comisión integren acciones concretas para las mujeres en todas las políticas, actividades y programas, incluyendo la política exterior y la de desarrollo. El segundo, el específico, se orientará a la lucha contra todas las formas de discriminación que tengan lugar en el trabajo. Poco tiempo después, en Nueva York, se celebró en la sede las Naciones Unidas la conferencia de seguimiento de la Conferencia de Pekín, en la que la Comisión Europea expuso los avances conseguidos, al tiempo que contribuyó decisivamente a que las propuestas alcanzadas tuvieran un tono claramente igualitario.

Durante la Presidencia francesa del segundo semestre se celebró una Conferencia ministerial en la que participaron gobiernos, la Comisión, agentes sociales y organizaciones de mujeres, con el objeto de definir las vías por las cuales la igualdad entre ambos sexos puede convertirse en una política de hecho en la nueva Agenda

Social. Así, se analizaron los principales obstáculos que persisten en ámbitos como la toma de decisiones, la articulación de la vida profesional y familiar y la integración de la igualdad en todas las políticas de la Unión Europea.

7.4. La Conferencia Intergubernamental y sus consecuencias: el Tratado de Niza. Reforma de las instituciones y ampliación

El nuevo Tratado de Niza

En el Consejo Europeo de Niza los Quince Estados miembros de la Unión Europea acordaron adoptar un nuevo Tratado, el de Niza, en el que se acordaron avances en aspectos como el de las llamadas cooperaciones reforzadas, la ampliación en el campo de las decisiones por mayoría cualificada, la política de defensa, y la reforma institucional, constituyendo éste el verdadero objetivo del nuevo Tratado y, también su principal carencia, puesto que no resulta fácil concluir que con los cambios introducidos vaya a ser posible ampliar, primero, y gobernar, después, una Unión de treinta miembros.

La Cumbre de Niza, a pesar de sus limitaciones, decidió que los países candidatos de Europa del Este que se vayan adhiriendo a la Unión Europea puedan participar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, lo cual constituye un considerable avance. Sin embargo, es bastante improbable que el proceso de ampliación culmine en el plazo previsto y abarque a todos los candidatos, por lo que es previsible que éstos se vayan incorporando a la Unión a medida que, de manera prácticamente individual, vayan ratificando las condiciones exigidas para el acceso. En este sentido, las cuestiones que siguen abiertas plantean la adhesión de algunos futuros miembros situados en la primera línea de las negociaciones de adhesión (como Polonia), como una misión cuando menos ardua, debido a cuestiones como la reforma de la política agraria o el ritmo de implantación de la libertad de movimientos de los trabajadores.

Nuevo reparto de votos

El Tratado de Niza reforzó el poder político de Alemania en el ámbito de las principales instituciones de la Unión Europea (cuadro I-43), debido a que de alguna manera era necesario alcanzar un nuevo equilibrio que tuviera en cuenta el factor población.

CUADRO I-43

REPARTO DE VOTOS DECIDIDO EN LA CUMBRE DE NIZA
TRATADO DE NIZA

Países	Escaños Parlamento		Votos en el Consejo		Población	
	Actual	Nuevo reparto	Actual	Nuevo reparto	Miles	%
Alemania	99	99	10	29	82.038	17,0
Reino Unido	87	72	10	29	59.247	12,3
Francia	87	72	10	29	58.966	12,2
Italia	87	72	10	29	57.612	12,0
España	**64**	**50**	**8**	**27**	**39.394**	**8,2**
Polonia*	—	50	—	27	38.667	8,0
Rumania*	—	33	—	14	22.489	4,7
Holanda	31	25	5	13	15.760	3,3
Grecia	25	22	5	12	10.533	2,2
Rep. Checa*	—	20	—	12	10.290	2,1
Bélgica	25	22	5	12	10.213	2,1
Hungría*	—	20	—	12	10.092	2,1
Portugal	25	22	5	12	9.980	2,1
Suecia	22	18	4	10	8.854	1,8
Bulgaria*	—	17	—	10	8.230	1,7
Austria	21	17	4	10	8.082	1,7
Eslovaquia*	—	13	—	7	5.393	1,1
Dinamarca	16	13	3	7	5.313	1,1
Finlandia	16	13	3	7	5.160	1,1
Irlanda	15	12	3	7	3.744	0,8
Lituania*	—	12	—	7	3.701	0,8
Letonia*	—	8	—	4	2.439	0,5
Eslovenia*	—	7	—	4	1.978	0,4
Estonia*	—	6	—	4	1.446	0,3
Chipre*	—	6	—	4	752	0,1
Luxemburgo	6	6	2	4	429	0,1
Malta*	—	5	—	3	379	0,1
Total	**626**	**732**	**87**	**345**	**481.181**	**100,0**

* Países candidatos.
Fuente: Consejo Europeo de Niza, *Conclusiones de la Presidencia*.

Según el acuerdo cerrado, en el ámbito del Consejo, Alemania, sumando sus votos junto a los de dos de los otros tres países «grandes», Francia, Reino Unido e Italia, y a pesar de las reticencias mostradas por muchos de los Estados miembros de menor dimensión como Bélgica o Portugal (cuadro I-44), podrá bloquear la adopción de decisiones cuando entre en vigor el nuevo Tratado de Niza, el 1 de enero de 2005, gracias al nuevo mecanismo de bloqueo por población. A partir del año 2005 para bloquear una decisión en el

Consejo serán necesarios 91 votos, la mitad más uno de los Estados, o más del 38 por 100 de la población. Así, si bien Alemania mantiene los mismo votos en el Consejo que Francia e incluso que Italia y el Reino Unido (29), sólo aquélla podrá bloquear cualquier decisión con el apoyo de dos países, por el mecanismo de población. El nuevo reparto puede generar problemas si en el año 2005, cuando entre en vigor, todavía no se hubiera producido la adhesión de los nuevos miembros, porque modificaría el equilibrio actual entre los Quince.

El caso de España

En el caso de España, según el nuevo reparto, que amplía el número de votos de 87 a 345, ha visto mejorado su peso en el Consejo, al pasar de los 8 votos con que cuenta en el sistema actual hasta 27, más de tres veces, mientras que los países grandes han pasado de 10 a 29 (2,9 veces más), y la media de aumento para todos en conjunto ha sido de 2,3. Este incremento compensa la pérdida de un comisario y las dificultades que encarará a la hora de intentar articular un bloqueo mediante el mecanismo de población.

CUADRO I-44

BLOQUEO DE LOS PAÍSES GRANDES POR POBLACIÓN TRATADO DE NIZA

(Población mínima para bloquear 38%)

Mínimo 3 países	%
Alemania, Reino Unido y Francia	41,61
Alemania, Reino Unido e Italia	41,33
Alemania, Francia e Italia	41,27
Alemania, Reino Unido y España	37,54
Alemania, Francia y España	37,48
Alemania, Italia y España	37,20
Reino Unido, Francia e Italia	36,53
Reino Unido, Francia y España	32,74
Reino Unido, Italia y España	32,46
Francia, Italia y España	32,40

(1) Minoría de bloqueo (votos) actual 26 (29,89 por 100), mínimo 3 Estados (12,38 por 100) de la población. A partir de 2005, 91 votos, la mitad más uno de los Estados, o más del 38 por 100 de la población.

(2) Mayoría cualificada (votos) actual 62 (71,26 por 100), mínimo 8 Estados (58,16 por 100) de la población. A partir de 2005, 255 votos (73,91 por 100).

Fuente: Consejo Europeo de Niza, *Conclusiones de la Presidencia*.

Hacia una Europa de varias velocidades

Como compensación al nuevo reparto aritmético de votos entre los Estados miembros y su reequilibrio ante la futura ampliación, Niza ha abierto el camino para las cooperaciones reforzadas en campos como el de las relaciones exteriores o la seguridad común, avalando un modelo que conducirá a una Unión Europea de 27 Estados, pero con varias velocidades. Así, frente a la posibilidad de que algunos Estados impongan vetos, se abren nuevas puertas a la profundización europea. Las cooperaciones reforzadas son políticas en las que no participan todos los Estados miembros de la Unión Europea, consolidadas con precedentes como la moneda única o el espacio Schengen, y que ya aparecían en el Tratado de Amsterdam de 1997. Una vez que el nuevo Tratado entre en vigor, tras ser ratificado como en otras ocasiones por los Estados miembros, bastará con que ocho países acuerden avanzar en un área determinada para poder desarrollar una política concreta, sin que ningún otro Estado pueda vetar la iniciativa. En este sentido, la propuesta presentada conjuntamente por Alemania e Italia en el Consejo Europeo de Biarritz que acometía esta cuestión[114] allanó el camino al acuerdo alcanzado. Estos cambios, que afectan a las cooperaciones reforzadas, sirven para compensar la persistencia de vías de bloqueo y de materias no sujetas al mecanismo de mayoría cualificada, de modo que a pesar de permitir la coexistencia de dobles velocidades, al mismo tiempo, permiten avanzar en la toma de decisiones sobre la construcción europea.

Moderada potenciación de la mayoría cualificada

Otros acuerdos relevantes son los que afectan a las materias que pasarán a decidirse por mayoría cualificada. Se trata de 29 materias de las 50 propuestas, como los fondos de cohesión (art. 159), aunque no afectarán a la negociación del próximo paquete financiero ni a la reforma de los reglamentos de los Fondos Estructurales (art. 161), de manera que en este ámbito su fecha de entrada en vigor será 2007. Además, las materias del artículo 133 del Tratado pasan también a mayoría cualificada: política comercial en el campo de los servicios, inversiones y propiedad intelectual, así como las de los artículos 111 y 123 relativos al euro, las del artículo 137 sobre la lucha contra la exclusión y modernización de los sistemas de protección social, entre otras[115]. Este conjunto de materias es menor que el definido en el

[114] Proposición de Alemania y de Italia sobre las disposiciones que deben incluirse en el Tratado de Niza a propósito de la cooperación reforzada. Consejo Europeo. Bruselas, 2000.

[115] *Conclusiones de la Presidencia*. Consejo Europeo de Niza, 7, 8 y 9 de diciembre de 2000. Consejo Europeo. Bruselas, 2000.

Consejo Europeo informal celebrado en Biarritz en el mes de octubre con el fin de preparar Niza. Entonces, las políticas susceptibles de endosar el conjunto de la mayoría cualificada comprendían, además de las anteriores, ciertos aspectos de política fiscal[116]. Por estas razones la cultura del veto no ha desaparecido tras Niza, a pesar de la ampliación de materias que se decidirán por mayoría cualificada, permaneciendo las más sensibles desde una perspectiva de soberanía nacional en la parcela de la unanimidad.

A partir del 1 de enero de 2005 los países grandes perderán su segundo comisario, mientras que los nuevos miembros, hasta esa fecha y en tanto se vayan incorporando a la Unión, tendrán uno. Sin embargo, en cuanto el número de comisarios sea de 27 se decidirá por unanimidad cuál será la cifra definitiva, inferior a 20, y se establecerá un turno entre Estados miembros e incluso dos tipos de comisarios con categoría desigual. Esta decisión, todavía sin concretar, se justifica en el hecho de que una Comisión de 27 miembros, tal y como refleja el nuevo Tratado, no resulta un instrumento operativo en la medida en la que debe serlo el ejecutivo comunitario. En cualquier caso, todavía se debe decidir cómo. El papel del Presidente de la Comisión se verá reforzado, podrá repartir carteras y cambiar a los comisarios de ámbito e incluso cesarlos. El Presidente de la Comisión será elegido por mayoría, y no por unanimidad como sucedía hasta ahora. Además, el Parlamento Europeo aumenta su número de escaños desde los 626 actuales hasta 732, aunque sólo Alemania mantiene la cantidad actual de eurodiputados.

Nueva Conferencia Intergubernamental:2004

Otro aspecto contemplado por la reforma adoptada en Niza afecta al futuro reparto de competencias y poderes entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros, incluso sus regiones, conforme al principio de subsidiariedad. La nueva distribución, que no afectará al paquete financiero del periodo 2007-2012, modifica claramente y por primera vez el equilibrio fundacional clásico entre Alemania y Francia a favor del primero. Este nuevo acuerdo de reforma deberá estar concluido en el año 2004, para lo que se convocará una nueva Conferencia Intergubernamental. Entonces también deberá decidirse el efecto jurídico que presentará la Carta de Derechos Fundamentales y su posible inclusión en el Tratado.

[116] *Conclusiones de la Presidencia*. Consejo Europeo Informal de Biarritz, 13 y 14 de octubre de 2000. Consejo Europeo. Bruselas, 2000.

Los agentes sociales europeos y Niza

Los agentes sociales de escala comunitaria se pronunciaron sobre los resultados de la Cumbre de Niza en diferentes sentidos. Así, la Confederación Europea de Sindicatos estimó que la reforma, si bien avanzaba en la dirección adecuada, no reforzaba las instituciones todo lo que hubiera sido deseable, en particular en cuanto a la reducción del número de comisarios y a la extensión del procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo a todos los campos en los que el Consejo decide por mayoría cualificada, ni tampoco extendía la regla de votación por mayoría cualificada a todos los ámbitos esperados. En cuanto a lo conocido como la Europa de la Transparencia, esto es, la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales en los Tratados, si bien valoraron positivamente su proclamación en la Cumbre, al no incluirse en el Tratado no consideraron cumplidas sus expectativas previas, como tampoco se hacía en materia de determinación de calendarios precisos para la adhesión de los países candidatos.

La UNICE, desde su perspectiva, lamentó también el relativo alcance de la ampliación de ámbitos sujetos al voto por mayoría cualificada, al tiempo que reclamaba una mayor claridad en la Carta de Derechos Fundamentales en cuestiones como los derechos sociales y económicos. En particular, UNICE desea que la mayoría cualificada afecte a cuestiones como la inversión directa en el extranjero, la adopción de medidas de apoyo a la competitividad de las empresas, la adaptación de los sistemas de Seguridad Social nacionales a la libre circulación de los trabajadores y profesionales, y la simplificación de medidas fiscales ya existentes, si bien estima que cualquier movimiento hacia una mayor armonización fiscal y el resto de cuestiones de Seguridad Social deben seguir adoptándose por unanimidad.

7.5. Otras políticas

7.5.1. **Políticas estructurales y de cohesión**

La Comisión Europea adoptó en enero de 2001 el *Segundo Informe sobre la cohesión económica y social*[117], que no se limita sólo a ofrecer un balance de la política de cohesión, sino que pre-

[117] Véase epígrafe 3.3 del capítulo I.

senta asimismo las primeras orientaciones y opciones para el futuro de ésta en la perspectiva de una Unión ampliada, que constituye un verdadero reto para la política de cohesión.

La ampliación reducirá la cohesión

En la Unión Europea actual, la relación entre la región más rica y la más pobre es de 5,8, mientras que será superior a 10 en una Unión ampliada a 27 miembros. Cerca de la tercera parte de la población vivirá en países denominados «de cohesión» (PIB por habitante inferior al 90 por 100 de la media comunitaria, es decir, hoy en día Grecia, España y Portugal), frente a la sexta parte actual de la Unión de los Quince. La renta media per cápita del 10 por 100 más pobre de la población alcanzará solamente el 31 por 100 de la media comunitaria, frente al 61 por 100 actual de la Europa de los 15.

7.5.2. **Agricultura, pesca, medio ambiente y consumo**

Ejercicio marcado por las crisis

La combinación de crisis acumuladas en el sector agrario durante el año 2000 y los meses transcurridos de 2001, aunque sean de hondo calado en el tiempo, han llevado no sólo a numerosos observadores, sino incluso a las autoridades nacionales y comunitarias en materia agraria, a cuestionar el modelo de producción intensiva vigente en Europa. Así, la agricultura extensiva, la orgánica, la recuperación de métodos de alimentación animal tradicionales, y otras vías de producción agraria y ganadera más respetuosas con el medio ambiente han recuperado apoyo de cara a dar contenido a las futuras reformas de la Política Agraria Comunitaria. Ésta puede ser una vía efectiva para contribuir a recuperar la confianza de los consumidores europeos, en la línea de lo realizado ya en algunos Estados miembros como Suecia, pero todavía muy lejos de la realidad de grandes productores como Francia. En este sentido, la multifuncionalidad y la diversidad marcaron la agenda agraria de la presidencia portuguesa durante el primer semestre de 2000, apoyando un giro desde la concentración de las ayudas sobre la producción directa hacia medidas más amplias de desarrollo rural. Las negociaciones agrarias en el marco de la Organización Mundial del Comercio han condicionado también esta tendencia. Otras medidas destinadas a reforzar la seguridad alimentaria y el bienestar animal han sido promovidas durante este último año, marcado por el rebrote de la «crisis de las vacas locas» y la fiebre aftosa.

Desde el mes de diciembre de 2000 la Comisión y el Consejo han ido adoptando medidas excepcionales para combatir el nuevo brote de la epidemia bovina de las «vacas locas», acordando medidas y aprobando nuevas partidas presupuestarias destinadas a financiarlas, y formulando propuestas relacionadas con los test que se han instaurado obligatoriamente, con los sacrificios de reses, así como con las normas relativas a las harinas animales.

Pesca

Durante el año 2000 se aprobaron los límites de capturas y las cuotas para 2001 que reflejan una reducción considerable del esfuerzo de pesca para algunas especies como el bacalao y la merluza (hasta un 50 por 100), con el objeto de intentar contribuir a una recuperación de los caladeros. También se aprobó un nuevo Reglamento[118] que regula la Organización Común de Mercado de la pesca. Entre los diferentes acuerdos en fase de negociación con terceros países, el frustrado acuerdo con Marruecos —de especial repercusión sobre la flota española— ha protagonizado buena parte de las reuniones de 2000 y comienzos de 2001. Así, en grandes líneas, la problemática de algunos caladeros, al tiempo que se articulan las medidas necesarias para su recuperación, en combinación con las dificultades en la negociación bilateral con algunos países en cuyas aguas territoriales han venido faenando tradicionalmente los pesqueros europeos, constituyen los principales problemas de este sector en la Unión Europea.

Directrices sobre medio ambiente

La Comisión Europea aprobó en febrero de 2001 las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente[119] que sustituyen a las que se adoptaron en 1994. Éstas asumen los principios y la orientación de los acuerdos alcanzados en esta materia, así como la política seguida desde esa fecha, con el fin de determinar qué ayudas y bajo qué condiciones pueden resultar necesarias para garantizar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, sin producir efectos desproporcionados en el crecimiento ni en la competencia.

El instrumento financiero de la Unión Europea para la protección del medio ambiente, el LIFE III[120], contará con un presupues-

[118] Reg. CE n.º 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre.

[119] DOCE C 37/3. 3.2.2001.

[120] Reglamento (CE) n.º 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE). DOCE L 192, 28 de julio de 2000.

to de 640 millones de euros para el periodo 2000-2004 según lo acordado, más de lo previsto por el Consejo, gracias a la intervención de Parlamento Europeo. En este ámbito, la Unión Europea firmó durante la presidencia portuguesa del año 2000 el Convenio Internacional sobre Bioseguridad, marco regulador del comercio internacional de organismos modificados genéticamente, y participó en la IV Conferencia sobre cambio climático promovida por las Naciones Unidas, celebrada en la Haya en noviembre de 2000, para preparar la entrada en vigor del protocolo de Kyoto prevista para el año 2002 (en la primavera del año 2001, al cierre de esta Memoria, los Estados Unidos han manifestado su intención de no cumplir lo acordado a este respecto por la anterior administración norteamericana). Las Directivas sobre la incineración de residuos, ruido y gestión del medio urbano siguen en preparación.

Consumo

Por iniciativa de la Comisión Europea se ha creado el Comité de Consumidores de la Unión Europea[121] con el fin de defender sus intereses a escala comunitaria. Está compuesto por un miembro por cada uno de los Estados miembros en representación de las diferentes organizaciones nacionales de consumidores y un miembro por cada organización de consumidores de escala comunitaria. Está previsto que se reúna al menos cuatro veces al año y que redacte dictámenes a petición de la Comisión.

[121] DOCE - L 111/30. 9.5.2000.

Capítulo II

MERCADO DE TRABAJO, RELACIONES LABORALES Y POLÍTICAS DE EMPLEO

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número medio de ocupados en España fue, en el año 2000, casi 14,5 millones de personas, y el de parados se situó algo por debajo de los 2,4 millones. La tasa media de paro, en un año de aumento considerable de la población activa (el mayor desde 1996), se situó en 2000 en un 14,1 por 100, casi dos puntos por debajo que la de 1999.

Hay que recordar que en 2000 se produjo una nueva modificación de la EPA, en esta ocasión para actualizar sus unidades de muestreo de acuerdo con los datos del Padrón continuo para 1998, más recientes que los que hasta entonces nutrían el diseño muestral de la encuesta (los del Censo de Población de 1991).

A diferencia de la reforma de la EPA que se llevó a cabo en 1999 (a la que la Memoria de dicho año dedicó un apartado especial), la actualización de 2000 permite, por su naturaleza, obtener resultados separados para la muestra antigua y la nueva, de forma que es calculable el efecto estadístico sobre las cifras de empleo y paro: la actualización ha supuesto un afloramiento de 86.000 personas activas, 77.500 de ellas ocupadas y 8.500 paradas. Sin descontar este efecto, el empleo en el año habría crecido un 4,8 por 100 (o, lo que es lo mismo, habrían trabaja-

do 656.000 personas más) y el paro se habría reducido un 9 por 100 (de manera que habría 235.000 parados menos); la población activa, por lo tanto, habría aumentado en 421.000 personas, un 2,6 por 100. Una vez descontado dicho efecto, el crecimiento medio del empleo en el año 2000 se cifra en 579.000 personas (un 4,2 por 100), y el descenso del paro en 244.000 (un 9 por 100); la población activa creció, así, en 335.000 personas (un 2 por 100).

Los resultados del empleo en el año 2000 pueden calificarse de buenos. Quedan por debajo de los de 1999, cuando el aumento fue de casi 613.000 personas, pero no sólo éstos venían afectados por el cambio en la EPA, sino que, precisamente por ese cambio, una parte del término de comparación es ficticia. Dejando aparte el dato de ese año, en ninguno anterior, al menos desde finales de los setenta, se había obtenido uno comparable: sólo en 1987 se logró un crecimiento del empleo superior al medio millón de personas; en 2000, éste se acerca a las 600.000.

A pesar de la bondad de esos resultados, es preciso señalar que el perfil trimestral del ritmo de aumento en la ocupación parece descendente, en consonancia además con el que muestran los datos de afiliación a la Seguridad Social. Esa circunstancia, y el comportamiento del PIB que se deriva de los resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral llevan a pensar que la creación de empleo fue perdiendo, como el propio crecimiento económico, algo de dinamismo a lo largo del ejercicio.

La evolución del mercado de trabajo español en el año 2000 muestra, que el empleo femenino siguió presentando (como en todos los años anteriores desde el final de la crisis) un mayor dinamismo: el número de mujeres con empleo en 2000 superó en casi 324.000 personas al del año anterior, lo que supone un crecimiento del 6,4 por 100, y el de varones aumentó en 255.000 (un 2,9 por 100). Pero como también continuó un mayor aumento de la población activa femenina, de nuevo se logró una menor reducción del paro entre las mujeres. El número de activas creció en 202.000 personas y el de activos en 133.000, con lo que el volumen de paro bajó en 122.000 mujeres y en un número muy simi-

lar de varones, lo que arroja descensos del 8 y el 11 por 100, respectivamente.

Estas cifras suponen una mayor reducción de la tasa de paro de las mujeres en el año 2000 (2,5 puntos menos que en 1999) y, con ello, una menor distancia de ésta con la de los varones. Pero la primera todavía se situó en un 20,5 por 100, mientras que la segunda fue del 9,8 por 100, es decir, menos de la mitad. Y casi el 59 por 100 de los desempleados en el año fueron mujeres, porcentaje que no ha dejado de crecer desde que, en los años 80, comenzaron a incorporarse de forma masiva al mercado de trabajo.

El mayor aumento del empleo en el año 2000 se dio entre los jóvenes de 20 a 24 años, aunque el dato más sobresaliente en la evolución del mercado de trabajo por edades fue el aumento, relativamente bajo, del número de ocupados en el conjunto central, es decir, en el grupo entre 25 y 54 años. Ello se debió a un resultado francamente pobre entre los varones, cuyo volumen de empleo creció —en términos homogéneos— en 126.000 personas, apenas un 1,9 por 100. El número de ocupadas de estas edades, por el contrario, aumentó en 253.000 personas (un 6,7 por 100). Así, dos terceras partes del total de empleos creados en este grupo correspondió a las mujeres; la tasa de empleo femenina entre 25 y 54 años se situó, por primera vez, por encima del 50 por 100.

La construcción volvió a ser en 2000 el sector más dinámico en creación de empleo aunque con un ritmo descendente a lo largo del año. También el sector servicios vio reducirse a lo largo del año el ritmo de creación de empleo, aunque de forma mucho menos acusada que en la construcción. La industria, en cambio, elevó su ritmo de creación de empleo a lo largo del año mientras el sector primario, por su parte, continuó su paulatina pérdida de empleo.

El aumento del empleo asalariado fue, como en todos los años anteriores tras la salida de la crisis, el origen del mayor número de ocupados en la economía española en 2000.

El conjunto de las ocupaciones por cuenta propia prosiguió su pauta descendente, con una reducción en su volumen de empleo

cercana a 30.000 personas (una vez descontado el efecto de la actualización de la EPA).

El número de personas que trabajaron en la categoría de «empresarios sin asalariados y trabajadores independientes» (en su mayor parte compuesta por lo que habitualmente se conoce como trabajadores autónomos) parece haber vuelto en 2000, por el contrario, a una senda que podría calificarse de estabilidad.

La proporción de asalariados con contrato temporal se situó, en promedio, en un 32 por 100. Este resultado supone, una vez corregido el efecto de la actualización de la EPA, un descenso de 0,6 puntos en la tasa de temporalidad, el mejor desde que comenzaron a desarrollarse, a raíz del AIEE de 1997, políticas de fomento del empleo estable.

No se dispone de datos corregidos sobre el aumento del empleo indefinido y temporal en el sector público y en el privado, pero los datos brutos de 2000 apuntan hacia la misma circunstancia que ya se observó en la anterior edición de esta Memoria: el mayor dinamismo del empleo indefinido en el sector privado y, por el contrario, el mayor ritmo de aumento del empleo asalariado de carácter temporal en el sector público.

Las mayores reducciones de la tasa de temporalidad en el año se produjeron en los jóvenes entre 20 y 24 años y entre 25 y 29 años. No obstante, los niveles siguen siendo muy elevados, y persiste una clara relación entre la temporalidad y la edad, no sólo en las edades iniciales de acceso al mercado de trabajo, donde supera el 80 por 100, sino en otras más altas. El grupo entre 30 y 39 años marca una clara frontera, pues su tasa de temporalidad es todavía, en 2000, casi un 30 por 100 y apenas ha mejorado desde 1997, mientras que la del siguiente (entre 40 y 49 años) se sitúa ya por debajo del 20 por 100, y nunca ha superado esa cifra.

En 2000 aumentó de nuevo el número de ocupados a tiempo parcial pero este mayor número de ocupados a tiempo parcial se produjo entre las mujeres, pese a lo cual, como este caso el crecimiento del empleo a tiempo completo fue algo mayor, la tasa

de parcialidad femenina permaneció prácticamente igual. Mientras, se redujo el ya exiguo peso del empleo a tiempo parcial en la población ocupada masculina. Lo que está claro es que el peso del tiempo parcial continúa estancado, a pesar de que, al menos en el caso de los asalariados, se ha tratado de impulsarlo en los últimos años.

Como en años anteriores, se analizan los flujos de entrada y salida en el mercado de trabajo. Las entradas, a través del análisis de la evolución de la contratación registrada en el INEM, que es una de las perspectivas desde las que aproximarse al volumen de entradas en la actividad laboral.

En el año 2000 se registraron en el INEM 13.600.000 contratos. A pesar de que tal cifra supone un nuevo aumento respecto al total de los registrados en 1999, muestra a la vez un cierto freno en el ritmo de crecimiento que desde hace años se venía registrando. Un año más la contratación de duración determinada se canaliza a través de las dos modalidades de mayor peso en el conjunto de la contratación: el contrato eventual y el de obra o servicio determinados aunque en el año 2000 fue menor que en años anteriores el aumento de las contrataciones bajo ambas modalidades.

La causa de este menor número de contrataciones pudiera ser la mayor duración media de los celebrados como contratos eventuales, motivada por las reformas de su regulación en 1997 y 1998, lo que no significa que se haya reducido al mismo tiempo el peso de esta modalidad en el total de la contratación, porque el menor número de contratos registrados podría ser compatible con un mayor o igual número de personas contratadas eventualmente.

Descontadas de la contratación de duración determinada las cifras correspondientes a las dos modalidades analizadas, las demás contrataciones no indefinidas suman, en conjunto, un peso poco significativo en el total de contratos del año.

La contratación a tiempo parcial durante el año 2000 registra 100.000 contratos más que en 1999: en total, 2.512.104 contratos, de los cuales se celebraron con carácter indefinido el 9,5 por 100

y el resto bajo las diferentes modalidades de la contratación de duración determinada.

Lo más destacable del año respecto a la contratación a tiempo parcial es el ligero descenso de los contratos de duraciones más cortas (hasta un mes), pero sobre todo el considerable mayor peso de los indefinidos y de duración indeterminada ya que entre ambos recogen el crecimiento total de contratos del año.

Por lo que se refiere a la contratación indefinida —a cuyo fomento han tendido las reformas e incentivos aprobados en los últimos cuatro años— a lo largo del año volvió a crecer y lo hizo de forma significativa la modalidad de contrato indefinido ordinario. También creció, aunque menos, el contrato de fomento de la contratación indefinida creado por la Ley 63/1997, lo que se debe a su inferior ámbito subjetivo de aplicación limitado a determinados colectivos.

El análisis de las salidas de la ocupación a través de las vías institucionales de extinción del contrato de trabajo por decisión de la empresa, se topan, un año más, con las deficiencias en la información que ofrece la estadística judicial, lo que impide realizar un análisis más detallado de aspectos esenciales sobre las distintas formas de finalización de la relación laboral.

De las tres vías objeto de estudio, se mantiene la importancia de las extinciones contractuales resueltas ante los servicios administrativos de mediación, arbitraje y conciliación, por encima de los despidos tramitados en la jurisdicción social y de los expedientes de regulación de empleo, que no obstante registraron ligeros incrementos.

La evolución de las indemnizaciones medias abonadas, tanto en conciliación como en vía judicial, apenas experimentaron variaciones respecto al año anterior. El seguimiento que ya se ha hecho en otras ocasiones sobre la jurisprudencia social del despido objetivo, tampoco ofrece cambios significativos en el tratamiento de las causas de extinción del contrato por esta vía.

El estudio de las políticas de empleo, al que se dedica el segundo bloque de este capítulo II, analiza, en primer lugar, la Política

Europea de Empleo, tal y como se viene haciendo en años anteriores. El año 2000 ha sido el tercero de puesta en práctica de la estrategia común para el empleo definida en el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997.

De la misma manera, y continuando con el estudio iniciado en 1998, en el epígrafe 3.2 de este capítulo se estudia el Plan Nacional de Acción para el Empleo del año 2000 y las perspectivas para el año 2001, teniendo en cuenta que el Plan de Empleo de 2000 supone la adaptación de las Directrices europeas al mercado de trabajo español por tercer año consecutivo, e incluye el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en 1999, así como las nuevas políticas y las valoraciones de la contribución realizada por los interlocutores sociales a la consecución de sus objetivos y directrices.

Para poder realizar un análisis global de las políticas de empleo, se ha considerado necesario seguir con el análisis, iniciado el año anterior, de las diferentes medidas de fomento del empleo existentes en las Comunidades Autónomas, para valorar en su conjunto las actuaciones llevadas a cabo en España desde el inicio del Proceso de Luxemburgo, lo que no ha sido tarea fácil ante la existencia de diversos Pactos de Empleo, suscritos en diferentes fechas y con vigencias dispares en cada Comunidad. Además, en ciertos casos se han encontrado dificultades para obtener información, en particular, sobre la evaluación de los resultados de las medidas adoptadas. Aunque hay Comunidades Autonómas que ya han iniciado el estudio de la repercusión de sus acciones a favor del empleo, otras sólo tienen análisis escuetos de datos. En todo caso, la dispersión de las medidas que se evalúan por parte de las Comunidades que sí han realizado estudios y de los periodos de aplicación a que se refieren, impiden llegar a conclusiones de impacto global de estas políticas en el conjunto del territorio nacional. Por ello, se han elaborado unas tablas en las que se recogen los diferentes Planes de Empleo vigentes en las Comunidades Autónomas, así como las normas por las que se aprueban las subvenciones y ayudas al fomento del empleo en cada Comunidad, junto a un resumen de los datos de los balances de resultados existentes en alguno de los casos que pueden dar una idea aproximada de las actuaciones realizadas.

La formación ocupa un año más un espacio relevante dentro de las políticas de empleo que se abordan en el capítulo. Además de describir el III Acuerdo Nacional de Formación Continua, firmado en diciembre de 2000, se recogen los resultados alcanzados en la gestión de la formación por parte de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) a lo largo del periodo cubierto por el II Acuerdo. También se ofrecen resultados de los programas de formación con desempleados y formación-empleo (Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo), así como de la formación profesional ocupacional de desempleados impartida a través del INEM y de las Comunidades Autónomas que tienen transferida la gestión, con especial atención, en este caso, a la inserción de los alumnos.

Como novedad del apartado de políticas activas y pasivas este año se ha dedicado atención (epígrafe 3.3.2) a las políticas de empleo relacionadas con algunas actividades del sector servicios en las que se vislumbran nuevas oportunidades de empleo, como las que se pueden generar en el ámbito local, el mundo rural, la economía social o el llamado tercer sector.

Se cierra el apartado con el análisis habitual en años anteriores de la protección al desempleo, donde lo más destacable es que se confirma la tónica, que se viene observando desde el año 1994, de descenso del total de perceptores de prestaciones de desempleo que afecta en este caso exclusivamente al subsidio de desempleo (un 8 por 100, en relación a 1999). Por el contrario, el nivel contributivo registró un ligero aumento, y, así mismo, creció ligeramente el número de beneficiarios del subsidio previsto para los trabajadores eventuales agrarios. Las tasas de cobertura aprecian un leve incremento, tanto la tasa bruta como la tasa neta, aumentando la primera un 1,6 por 100 y la segunda un 1,2 por 100, respecto a las registradas en 1999. La estructura de la población perceptora, en relación al nivel contributivo, muestra que un 55,4 por 100 de los perceptores fueron varones, frente al 44,6 de mujeres, lo que implica que los primeros se situaron 10,8 puntos por encima de las segundas, pese a que el paro femenino fue 20 puntos más alto que el paro masculino; en relación al nivel asistencial, se aprecia un mayor número de beneficiarios varones que de mujeres, aunque en este caso la diferencia se redujo a un 7,6 por 100; en cuan-

to al subsidio para los trabajadores eventuales agrarios, por el contrario, el porcentaje de mujeres superó en 12,6 puntos al de hombres.

Especial objeto de análisis este año ha sido el Programa de Renta Activa de Inserción que, creado el año 2000, se dirige a la atención de trabajadores desempleados mayores de 45 años en situación de necesidad, y combina políticas activas y pasivas de empleo.

Dos apreciaciones deben efectuarse sobre este programa: por un lado, que se ha registrado una distribución territorial absolutamente desigual, y por otro, como ya indicó este Consejo en su Dictamen 5/2000, de 4 de octubre, sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que, inscribiéndose esta renta en la acción protectora por desempleo, es necesaria una profunda reflexión sobre su sentido y alcance.

Un dato relevante del año en cuanto a la protección por desempleo fue que el gasto en prestaciones supuso en el año 2000 cerca de 1,38 billones de pesetas, un 3,3 por 100 más que en el año anterior. Este aumento, el primero desde 1994, se produjo a pesar de la considerable reducción del paro registrado entre 1999 y 2000, y sin que la tasa de cobertura experimentara variaciones sustanciales en el mismo periodo.

La razón de este comportamiento, que obligó a ampliar el crédito inicial presupuestado para este capítulo, fue el mayor gasto en prestaciones contributivas y en el subsidio especial para trabajadores eventuales agrarios porque ambos excedieron con creces el menor gasto en el nivel asistencial y la escasa aplicación —respecto del presupuesto inicial— de la renta activa de inserción. Esta última se dotó inicialmente con 50.000 millones de pesetas, cantidad que luego se rebajó a 3.000 millones.

Un año más dentro del apartado 4 del capítulo se realiza el balance de la negociación colectiva del año que, en esta ocasión, ha de situarse inevitablemente en el contexto de la renovación de los Acuerdos Interconfederales del año 1997, en

particular el Acuerdo de Estabilidad en el Empleo (AIEE) y el de Negociación Colectiva (AINC). Ambos Acuerdos, aunque no son los únicos del diálogo social, son los que tienen mayor incidencia en la negociación colectiva, cuya más reciente evolución no puede entenderse sin tener en cuenta el marco normativo y obligacional que crearon y su posible influencia en las negociaciones colectivas subsiguientes en los distintos niveles. Además, su renovación, al cumplirse en abril de 2001 el término de su vigencia, ha condicionado, desde finales del año anterior, el proceso de negociación en la cúspide entre las organizaciones sindicales y empresariales sobre otras materias diversas con repercusión en el empleo y en las relaciones laborales y, por ello, indirectamente también en la negociación de nivel inferior.

A pesar de la positiva valoración que, en términos generales, efectuaron en un momento dado sus firmantes sobre la consecución de algunos de los objetivos del AIEE, principalmente su contribución a la creación de empleo para los colectivos que se consideraban prioritarios y al cambio de tendencia de la tasa de temporalidad, no fue posible alcanzar el consenso necesario en aspectos esenciales para que se fraguara un nuevo acuerdo. La aprobación por el Gobierno del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo (*BOE* 3 de marzo), luego tramitado como Proyecto de Ley, justifica la descripción de sus principales novedades.

El otro gran Acuerdo de 1997, el Acuerdo sobre Negociación Colectiva (AINC), también vigente hasta finales de abril de 2001, ha emplazado a las organizaciones sindicales y empresariales a una nueva negociación que podría abocar a cambios en la normativa actual sobre negociación colectiva. El tercer gran Acuerdo Interconfederal de 1997, de gran relevancia para la negociación colectiva, es el Acuerdo Interconfederal sobre Cobertura de Vacíos (AICV), vigente hasta el 1 de enero de 2003.

Como viene siendo habitual en ediciones anteriores de la Memoria, este apartado se dedica a analizar los principales datos, contenido y estructura de la negociación colectiva del año. En este sentido, se presentan, en primer lugar, los criterios básicos u orientaciones para la negociación colectiva propuestos

por CCOO y UGT, por un lado, y CEOE y CEPYME, por otro. Los primeros hacen especial hincapié en la estabilidad en el empleo, la reducción del tiempo de trabajo, la mejora de las condiciones laborales y la implicación de los trabajadores en todos los procesos de negociación. Las organizaciones empresariales presentan como objetivos prioritarios, entre otros, los siguientes: incrementar la vigencia de los convenios, mantener un marco flexible de contratación temporal, distribución irregular de la jornada, modernización de los sistemas de clasificación profesional y la promoción de cláusulas de descuelgue en materia salarial.

Como en ediciones anteriores, se analizan los ámbitos de aplicación temporal, territorial y funcional de los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 y con efectos en dicho año, a partir de las estadísticas oficiales (del MTAS y del INE). Sobre la evolución de la negociación colectiva cabe destacar, por un lado, que cada vez son más los convenios con vigencias superiores al año, y de otro lado, que siguen predominando los convenios sectoriales de ámbito nacional y de ámbito provincial, mientras que los convenios de empresa y de grupo de empresas afectan, en 2000, únicamente al 11,4 por 100 del total de trabajadores afectados por convenios. Ello sin perjuicio de que parece que va en aumento tanto la cantidad como la riqueza de contenidos de los acuerdos y pactos de empresa. Al abordar la articulación u organización del sistema de negociación colectiva, cuya mejora y racionalización era el principal objetivo del AINC de 1997, se concluye que se ha avanzado poco hacia el modelo ideal propuesto en el AINC.

El incremento salarial medio pactado en 2000 fue 2,97 por 100; y los mayores incrementos se pactaron en agricultura y construcción, en los convenios de sector, frente a los de empresa, y en los convenios firmados en 2000 frente a los renovados en dicho año. En el año 2000 se han producido desviaciones del IPC previsto (2 por 100) respecto del IPC real en media anual (3,4 por 100); es por ello que ha alcanzado gran protagonismo la aplicación de las cláusulas de revisión de los salarios, cuyos incrementos se ligan tradicionalmente al IPC. Con respecto al tiempo de trabajo se observa una reducción de casi dos horas respecto de la jornada media pactada el año anterior.

En esta edición se mantiene el análisis habitual de los contenidos de la negociación colectiva, pero se presenta como novedad, respecto de ediciones anteriores, la elaboración de una muestra de unos 130 convenios colectivos que han sido seleccionados con la finalidad de profundizar en los contenidos convencionales tratados habitualmente: salario, jornada, empleo, contratación laboral y clasificación profesional.

El estudio del contenido de los convenios objeto de la muestra utilizada corrobora la presencia, cada vez mayor, de cláusulas relativas al empleo, siendo las más frecuentes las dedicadas a la conversión de contratos temporales e indefinidos, de la mano de los incentivos previstos en la Ley 63/1997 y de la figura del contrato de fomento de la contratación indefinida que ahora renueva el RDL 5/2001. También se observa que crece el grado de recepción por la negociación colectiva de las facultades atribuidas por la legislación a la autonomía colectiva, en aspectos concretos de cada una de las modalidades contractuales. Se aprecia que, si bien no se han agotado todas las facultades otorgadas a la negociación, aumenta la atención que prestan los convenios de sector estatales a la regulación de aspectos tales como: la contratación a tiempo parcial, la determinación de las tareas o trabajos susceptibles de ser cubiertas con contratos por obra o servicio determinado, la duración y periodo de referencia del contrato eventual y determinados aspectos de los contratos formativos. Por último, el análisis de contenidos de la negociación colectiva a partir de esta misma muestra de convenios, atiende a los sistemas de clasificación profesional pactados, donde se aprecia todavía la escasa presencia de los grupos profesionales y el predominio del sistema mixto grupos/categorías.

El apartado cinco del capítulo se dedica a la siniestralidad laboral que ha seguido identificándose como uno de los principales problemas en el mercado de trabajo español. Y, en efecto, en el año 2000 han seguido aumentando los accidentes de trabajo, tanto en volumen como en incidencia por mil trabajadores, si bien se han podido observar ciertos indicios de mejoría dentro de la gravedad de la situación: una desaceleración de ese crecimiento, por una parte, y una evolución positiva de la gravedad de los accidentes registrados, por otra.

En paralelo a esa evolución creciente de la siniestralidad en el trabajo, se aprecia la cada vez mayor resonancia social de esta cuestión. Si el marco normativo de la prevención de riesgos en el trabajo de-

rivado de la obligada transposición de Directivas comunitarias se encuentra prácticamente completo en nuestro país y durante el año 2000 no ha habido incorporaciones relevantes, no cabe afirmar lo mismo en el ámbito de la política de prevención de riesgos laborales, donde todavía existe un amplio margen de intervención. En el año 2000, la puesta en práctica de la estrategia global en el marco de dicha política se ha caracterizado por la continuidad en el desarrollo de las acciones marcadas por el Plan de Acción contra la siniestralidad aprobado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en octubre de 1998. Igualmente, cabe destacar el arranque definitivo de la Fundación para la prevención de riesgos laborales, que ha comenzado a funcionar con su primera convocatoria de asignación de ayudas destinada a financiar acciones de información, de asistencia técnica, de formación y de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

El apartado concluye dando cuenta de cómo la necesidad de la búsqueda de soluciones que ofrezcan resultados a más corto plazo ha llevado a introducir durante este año una orientación nueva de la política de prevención de riesgos laborales, más selectiva en cuanto a su ámbito de aplicación y más cercana a la realidad productiva de cada territorio en cuanto a su ejecución por las Comunidades Autónomas. Ello ha redundado en la adopción de iniciativas interesantes en el ámbito autonómico, orientadas a obtener resultados concretos y cuantificables de reducción de las tasas de siniestralidad.

El apartado final de este capítulo se dedica a la conflictividad habida en el año 2000, a través del análisis de huelgas, cierres patronales, conflictos colectivos y asuntos judiciales.

El número de huelgas registradas experimentó un descenso pero no su incidencia, dado que el volumen de participantes y jornadas no trabajadas registraron un notable incremento en relación a 1999. La industria y los servicios fueron los sectores más afectados, destacando construcción, comercio al por menor, Administración Pública y transporte terrestre como las ramas de actividad con una mayor incidencia, en términos de jornadas no trabajadas. El mayor porcentaje de huelgas se ocasionó por motivos estrictamente laborales, concluyendo la mayoría dentro del periodo de referencia fijado en la convocatoria, debiéndose señalar que un 50 por 100 de las mismas finalizaron por acuerdo de las partes.

Los conflictos colectivos se analizan a través de sus diversos cauces de solución: Servicios administrativos de mediación, arbitraje y conciliación, Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), y los órganos autonómicos de solución extrajudicial de conflictos nacidos de la autonomía colectiva. El dato más destacable del año es el nuevo descenso del número de conflictos resueltos en los servicios públicos de conciliación, mientras continúa el lento, pero constante, aumento de la intervención de los procedimientos de solución autónoma de conflictos.

Como en ediciones anteriores, también se refleja, de forma sucinta, las cifras relativas a los asuntos judiciales resueltos en el año 2000, pudiendo apreciarse un aumento de los conflictos colectivos e individuales, salvo en el caso de los relativos a Seguridad Social, que disminuyeron ligeramente.

Finaliza el apartado y el capítulo, con una breve exposición de las principales novedades incluidas en el texto del ASEC II, tras haberse renovado durante el año el ASEC I. En ella se da cuenta de los aspectos más relevantes del nuevo Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos, que no ha supuesto una reforma en su totalidad del anterior Acuerdo, sino su perfeccionamiento técnico en aspectos concretos, fruto de la experiencia aplicativa acumulada. En este sentido, la inclusión de las controversias colectivas originadas en el seno de las Comisiones Paritarias de los convenios; la modificación de los requisitos para la tramitación de conflictos por bloqueo en la negociación, así como la apuesta por dotar al mediador de una posición más activa en la solución del conflicto, han sido las principales novedades de este ASEC II.

2. PANORAMA GENERAL DEL EMPLEO

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número medio de ocupados en España fue, en el año 2000, casi 14,5 millones de personas, y el de parados se situó algo por debajo de los 2,4 millones. La tasa media de paro, en un año de aumento considerable de la población activa (el mayor desde 1996), se situó en 2000 en un 14,1 por 100, casi dos puntos por debajo que la de 1999.

Hay que recordar que en 2000 se produjo una nueva modificación de la EPA, en esta ocasión para actualizar sus unidades de muestreo de acuerdo con los datos del Padrón continuo para 1998, más recientes que los que hasta entonces nutrían el diseño muestral de la encuesta (los del Censo de Población de 1991). Esta modificación ha de hacerse periódicamente, para garantizar la adecuación del muestreo a la población, que es una condición necesaria para obtener resultados que reflejen con fiabilidad el empleo y el paro existentes. Hasta ahora el proceso tenía una periodicidad aproximadamente decenal, en consonancia con la de los censos de población. En adelante, sin embargo, se pretende realizarlo cada dos años, a partir del Padrón continuo. De esta forma, aunque se produzcan sucesivas alteraciones en la comparabilidad temporal de los resultados, éstas serán de orden menor (y no como hasta ahora, que provocaban una ruptura severa de las series), y a cambio se habrá garantizado una mayor representatividad de los datos de la EPA. Desaparecerá, de hecho, un problema tradicional común a este tipo de investigaciones estadísticas, conocido como *desactualización del marco*[1], que estribaba en el progresivo alejamiento de la realidad de los datos de la población a partir de los cuales se efectuaba el diseño de la muestra, y en concreto a la falta de representación equiprobable en ésta de nuevos barrios, que conllevaba dejar fuera de la investigación a población relativamente más joven y con más frecuencia empleada, de manera que se tendía a subestimar el número de ocupados y a sobreestimar el de inactivos.

La reforma de la EPA afloró 86.000 activos

A diferencia de la reforma de la EPA que se llevó a cabo en 1999, la actualización de 2000 permite, por su naturaleza, obtener resultados separados para la muestra antigua y la nueva, de forma que es calculable el efecto estadístico sobre las cifras de empleo y paro: la actualización ha supuesto un afloramiento de 86.000 personas activas, 77.500 de ellas ocupadas y 8.500 paradas. Sin descontar este efecto, el empleo en el año habría crecido un 4,8 por 100 (o, lo que es lo mismo, habrían trabajado 656.000 personas más) y el paro se habría reducido un 9 por 100 (de manera que habría 235.000 parados menos); la población ac-

[1] Este problema de la EPA se describió, junto con todos aquellos que entonces parecieron más relevantes, en la Memoria del CES correspondiente a 1994.

tiva, por lo tanto, habría aumentado en 421.000 personas, un 2,6 por 100. Una vez descontado dicho efecto, el crecimiento medio del empleo en el año 2000 se cifra en 579.000 personas (un 4,2 por 100), y el descenso del paro en 244.000 (un 9 por 100); la población activa creció, así, en 335.000 personas (un 2 por 100).

Pese a su escasa importancia cuantitativa al contemplar los resultados agregados, la información proporcionada por el INE habla de una distribución poco uniforme de ese efecto en, al menos, tres de los grandes aspectos que tradicionalmente se tratan en esta Memoria: el sexo, la edad y el territorio.

La afloración de parados sólo afecta a las mujeres

Así, la afloración de ocupados se distribuye más o menos por mitades entre varones y mujeres, pero la de parados afecta sólo a éstas. Igualmente, la distribución por edades del efecto de la actualización es bien distinta: reduce en torno a 13.000 personas (un 1 por 100) la población ocupada entre 20 y 24 años, y aumenta en 95.000 la del grupo de 25 a 54 años de edad (también un 1 por 100, pero con signo contrario), de manera que si no se tiene en cuenta este efecto, el empleo en ambos grupos de ocupados habría crecido en el último año a un ritmo muy parecido, cuando realmente hubo una considerable diferencia.

Por otra parte, sólo 0,6 puntos del porcentaje de aumento de empleo en el año se deben al cambio en la estadística, pero el rango de variación territorial de ese efecto es tan amplio que en algunas Comunidades Autónomas supone hasta 2 puntos, en otras apenas representa alguna décima, y en algunas otras rebaja, bien que ligeramente, los porcentajes de crecimiento anual de la ocupación. Además, aunque en términos agregados se da una pequeña afloración de paro que corresponde casi totalmente a Madrid, hay ligeras variaciones (al alza y a la baja) en la estimación de los volúmenes de población desempleada en casi todas las Comunidades Autónomas que, en el caso de las pequeñas, modifican de forma importante los porcentajes indicativos del comportamiento del paro, al extremo de invertir su signo: en La Rioja, los datos brutos indican un aumento medio anual del 1,5 por 100 en el número de parados entre 1999 y 2000, pero cuando se descuenta el efecto de la actualización, el resultado es un descenso medio anual cercano al 1 por 100.

Vistas estas diferencias, se ha optado por descontar el efecto de la actualización muestral de la EPA —siempre que se disponía de información— en el trazado del panorama general del empleo que se abordará en los siguientes epígrafes, aunque a cambio sea, en ocasiones, más general que el que se ofreció en anteriores ediciones. En todos los casos se indicará qué datos se están manejando.

2.1. Evolución y perspectivas de la ocupación, la actividad y el paro

Casi 600.000 ocupados más

Los resultados del empleo en el año 2000 que antes se adelantaron pueden calificarse de buenos. Quedan por debajo de los de 1999, cuando el aumento fue de casi 613.000 personas, pero no sólo éstos venían afectados por el cambio en la EPA, sino que, precisamente por ese cambio, una parte del término de comparación es ficticia. Dejando aparte el dato de ese año, en ninguno anterior, al menos desde finales de los setenta, se había obtenido uno comparable: sólo en 1987 se logró un crecimiento del empleo superior al medio millón de personas; en 2000, éste se acerca a las 600.000. Si se calcula, como se hizo en la anterior edición de esta Memoria para atenuar el efecto sobre las cifras de la ruptura de la serie en 1999, la creación media anual de empleo en el quinquenio 1995-1999, el dato de 2000 resulta claramente superior (cuadro II-1).

Cuadro II-1
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR GRANDES ETAPAS ECONÓMICAS, 1977-2000
(Miles de personas)

Años	N.º ocupados al final del periodo	Variación total en el periodo	Variación media anual en el periodo
1977-1981	11.219,4	–1.102,1	–275,5
1982-1983	11.029,2	–189,6	–94,8
1984-1985	10.621,4	–408,4	–204,2
1986-1990	12.578,8	1.957,3	391,5
1991	12.609,4	30,7	30,7
1992-1994	11.730,1	–879,3	–293,1
1995-1999	13.817,5	2.087,3	417,5
2000	14.473,7	578,8*	578,8*

* Descontado el efecto de la actualización.
Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

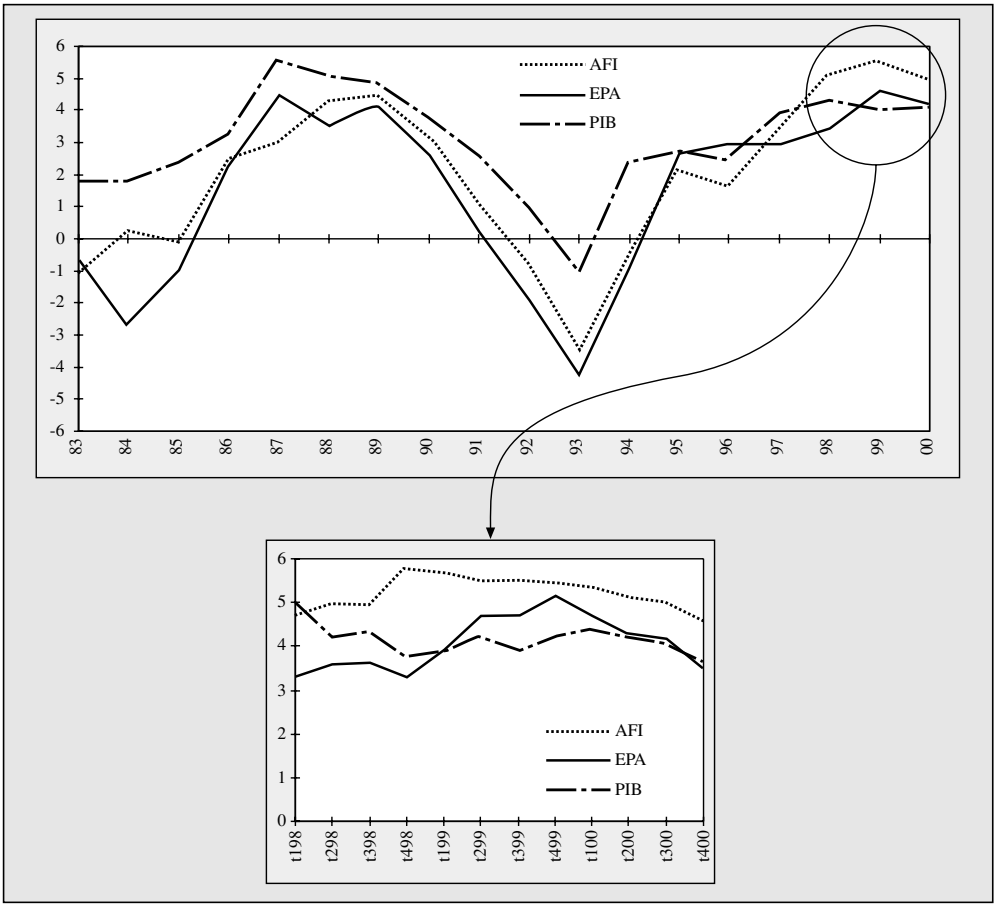
La creación de empleo perdió gas a lo largo del año

A pesar de la bondad de esos resultados, es preciso señalar que el perfil trimestral del ritmo de aumento en la ocupación parece descendente, en consonancia además con el que muestran los datos de afiliación a la Seguridad Social. Esa circunstancia, y el comportamiento del PIB que se deriva de los resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) llevan a pensar que la creación de empleo fue perdiendo, como el propio crecimiento económico, algo de dinamismo a lo largo del ejercicio (gráfico II-1).

GRÁFICO II-1

CRECIMIENTO DEL PIB, EL EMPLEO EN LA EPA Y LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, 1983-2000. TENDENCIA TRIMESTRAL 1998-2000

(Porcentajes de variación sobre el año anterior, medias anuales, y porcentajes de variación sobre igual periodo del año anterior, trimestres)



Fuentes: Empleo EPA: INE, *Encuesta de Población Activa;* Crecimiento PIB: INE, *Contabilidad Nacional Trimestral de España;* Afiliación a la Seguridad Social: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

En el primer trimestre de 2000, el volumen de empleo en la EPA fue, descontado el efecto de la actualización, un 4,7 por 100 mayor que el que se recogió en el mismo trimestre de 1999; en el cuarto, un 3,5 por 100. A su vez, la afiliación a la Seguridad Social creció, en términos interanuales, un 5,4 por 100 en el primer trimestre de 2000, y un 4,6 por 100 en el último. Los datos de la CNTR arrojaron, por su parte, aumentos interanuales del PIB ligeramente menores en cada trimestre respecto del anterior: el año se inició con un crecimiento del 4,4 por 100 y se cerró con uno del 3,7 por 100. En todo caso, no sólo habrá que esperar a los próximos trimestres para ver si esta tendencia se consolida, sino que no parece, por el momento, anunciar un retroceso preocupante, ya que el cierre del ejercicio en estas tres variables es aún alto.

El paro, en cambio, aceleró su reducción

En contraste con esa trayectoria, el desempleo en la EPA se mantuvo, a pesar de la ya señalada alza en el crecimiento de la población activa, en tasas muy altas de reducción en todo el ejercicio, y el último trimestre marcó el mayor porcentaje de descenso en términos interanuales, un 10,5 por 100. Pero esta evolución exhibe un distanciamiento progresivo con la del paro registrado en el INEM, cuyo descenso fue perdiendo intensidad a lo largo de 2000 (gráfico II-2).

En el primer trimestre, el paro registrado fue un 7,2 por 100 menor que el que se había recogido en el mismo periodo de 1999; en el último, esa reducción se situó en un 3,8 por 100, determinando un promedio anual inferior al 6 por 100. Y así, el paro registrado, que desde 1994 había venido reduciéndose más deprisa que el estimado por la EPA, continuó en 2000 la tendencia inversa, que ya se observó en la anterior edición de esta Memoria.

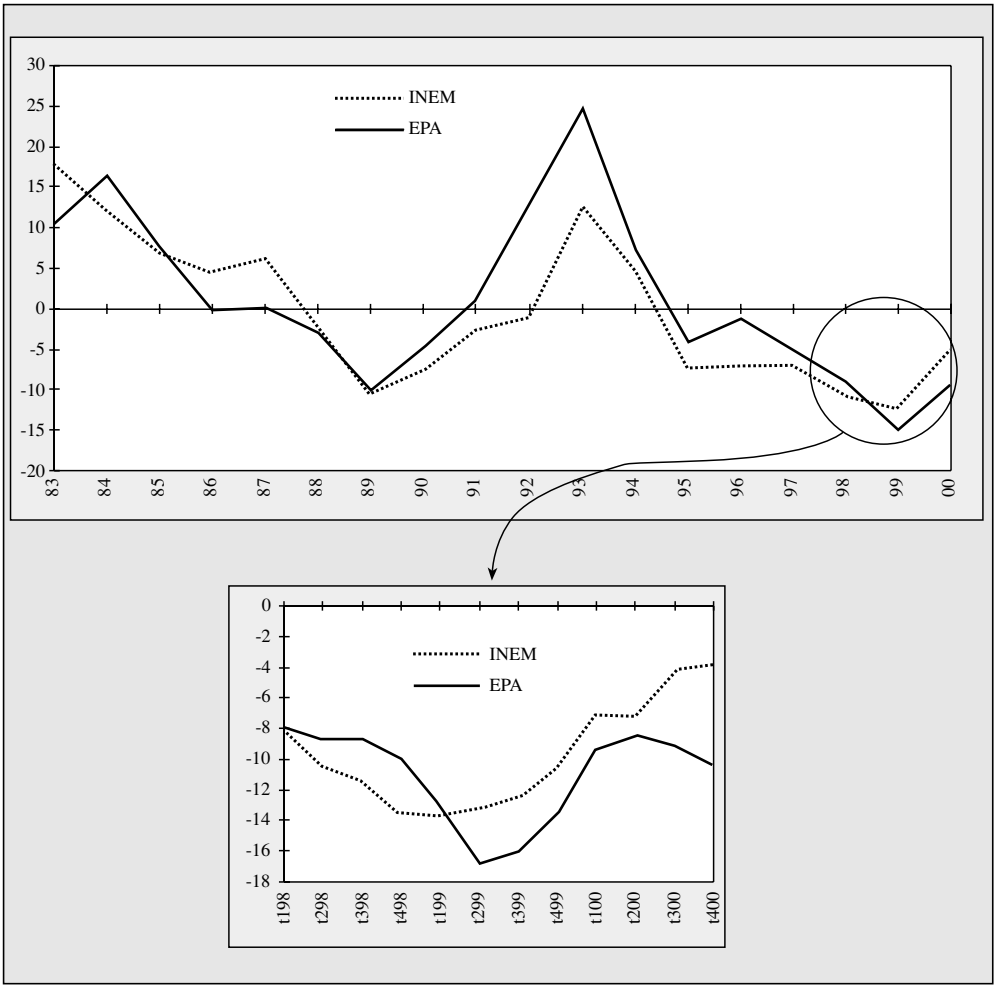
Las colocaciones crecieron menos

El origen de ese cambio de tendencia parece seguir apuntando a una progresiva menor diferencia entre el aumento en las colocaciones (comunicadas y gestionadas) por el INEM y el crecimiento de las demandas de empleo que éste recoge, y no —como ya se advirtió en la Memoria de 1999— a un más rápido aumento de estas últimas como consecuencia del mejor momento económico. A finales de 2000, unas y otras crecieron muy poco, y la distancia entre los porcentajes interanuales de variación entre ambas se redujo a apenas tres décimas (gráfi-

GRÁFICO II-2

DESCENSO DEL PARO EN LA EPA Y REGISTRADO EN EL INEM, 1983-2000. TENDENCIA TRIMESTRAL 1998-2000

(Porcentajes de variación sobre el año anterior, medias anuales, y porcentajes de variación sobre igual periodo del año anterior, trimestres)



Fuentes: INE, *Encuesta de Población Activa;* MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales.*

co II-3). Sea cual sea la causa de esta situación, resulta preocupante, máxime cuando, al observar la evolución de las colocaciones según sean gestionadas por el INEM, o comunicadas a este organismo, se aprecia que es el ritmo de aumento de es-

tas últimas (mayoritarias en el total) el que parece haberse ralentizado: en los primeros meses del año 2000, los porcentajes de variación interanual en el número de las colocaciones comunicadas fueron superiores al 20 por 100; en los últimos, apenas sí llegaron al 6 por 100.

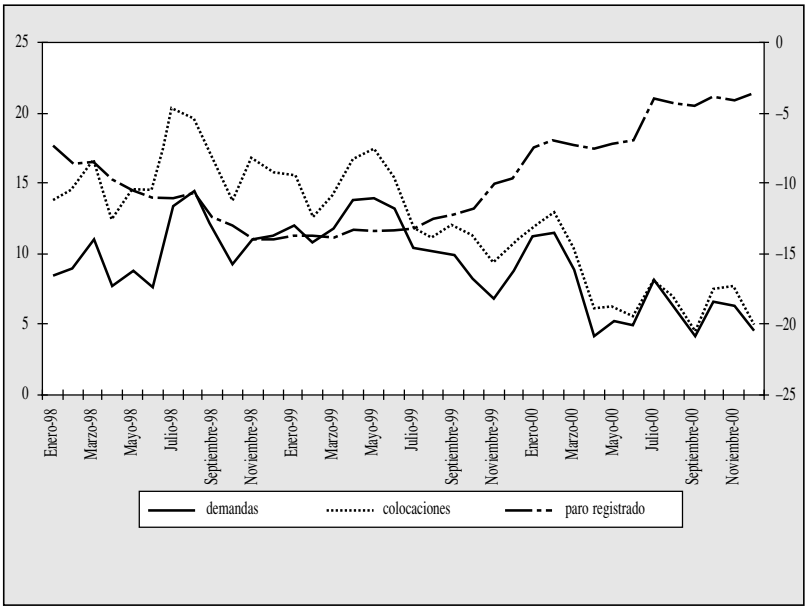
Previsiones europeas algo menos optimistas

De hecho, las Previsiones de primavera de la Comisión Europea (difundidas a finales de abril de 2001) fueron, como ya lo habían sido las trazadas en octubre de 2000, algo menos optimistas sobre el empleo en casi todos los países de la Unión. Por lo que hace a España, redujeron —aunque sólo ligeramente— las previsiones iniciales sobre crecimiento del empleo y descenso de la tasa de paro en 2001: en el mes de marzo de 2000 se previó un aumento del 2,5 por 100 en el número de ocupados entre 2000 y 2001, y una tasa

GRÁFICO II-3

PARO REGISTRADO, DEMANDAS DE EMPLEO Y COLOCACIONES, 1998-2000

(Porcentajes de variación interanual, meses. Paro registrado, escala derecha; demandas y colocaciones, escala izquierda)



Fuente: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

de paro del 12,1 por 100; en octubre de ese mismo año, el primero se cifró en un 2,4 por 100, y la segunda en un 12,9 por 100; en abril de 2001, el pronóstico sobre el crecimiento del empleo se redujo al 2,2 por 100, y el relativo a la tasa de paro se fijó en un 12,8 por 100.

Pese a que todas estas circunstancias parecen señalar que se abre un periodo de menor creación de empleo y, con ello, de menor descenso del paro, es preciso insistir en la amplia distancia que aún media entre ellas y las que llevarían a trazar un panorama negativo para el futuro inmediato del mercado de trabajo español. Las cifras de la Comisión que se acaban de mencionar, por ejemplo, reflejan de todas formas una buena situación. En 2000, de acuerdo con ellas (cuadro II-2), el porcentaje de parados sobre el total de la población activa española se habría situado en un 14,1 por 100, de manera que habría continuado, y a buen ritmo, el acercamiento a la Unión Europea en este aspecto.

CUADRO II-2

ESTIMACIONES Y PREVISIONES SOBRE EL EMPLEO Y EL PARO EN LA UNIÓN EUROPEA, 1999-2001

(Aumento anual del empleo en porcentaje. Parados sobre la población activa en porcentaje)

Países	Crecimiento del empleo			Tasa de paro		
	1999	Estimación 2000	Previsión 2001	1999	Estimación 2000	Previsión 2001
UE 15	**1,6**	**1,7**	**1,2**	**9,2**	**8,3**	**7,7**
UE 11 (Eurozona)	**1,8**	**1,9**	**1,3**	**9,9**	**8,9**	**8,5**
Bélgica	1,3	1,7	1,3	8,8	7,0	6,5
Dinamarca	0,9	0,8	0,5	5,2	4,7	4,6
Alemania	1,1	1,5	0,7	8,6	8,1	7,8
Grecia	–0,7	1,2	1,4	11,7	11,0	10,5
España	**3,5**	**3,3**	**2,2**	**15,9**	**14,1**	**12,8**
Francia	1,8	2,0	1,7	11,2	9,5	8,5
Irlanda	6,1	4,7	2,9	5,6	4,2	3,8
Italia	1,2	1,5	1,3	11,3	10,5	9,8
Luxemburgo	5,0	5,5	3,9	2,3	2,2	2,0
Holanda	2,8	2,5	2,0	3,3	2,8	2,6
Austria	1,4	0,9	0,5	4,0	3,7	3,4
Portugal	1,8	1,7	0,9	4,5	4,2	4,6
Finlandia	2,1	1,5	1,5	10,2	9,8	9,1
Suecia	2,3	2,2	1,5	7,2	5,9	5,2
Reino Unido	1,1	1,0	0,5	6,1	5,6	5,3

Fuente: Previsiones de Primavera de la Comisión Europea para 2000-2002 (en *European Economy. Supplement A. Economic trends.* N.º 3/4 - marzo/abril 2001).

2.1.1. **Evolución por sexo y edad**

Dinamismo del empleo femenino

Entrando ya en la caracterización personal de esta evolución del mercado de trabajo español en el año 2000 cabe subrayar, en primer lugar, que el empleo femenino siguió presentando (como en todos los años anteriores desde el final de la crisis) un mayor dinamismo: el número de mujeres con empleo en 2000 superó en casi 324.000 personas al del año anterior, lo que supone un crecimiento del 6,4 por 100, y el de varones aumentó en 255.000 (un 2,9 por 100). Pero como también continuó un mayor aumento de la población activa femenina, de nuevo se logró una menor reducción del paro entre las mujeres. El número de activas creció en 202.000 personas y el de activos en 133.000, con lo que el volumen de paro bajó en 122.000 mujeres y en un número muy similar de varones (gráfico II-4), lo que arroja descensos del 8 y el 11 por 100, respectivamente.

Estas cifras suponen una mayor reducción de la tasa de paro de las mujeres en el año 2000 (2,5 puntos menos que en 1999) y, con ello, una menor distancia de ésta con la de los varones. Pero la primera todavía se situó en un 20,5 por 100, mientras que la segunda fue del 9,8 por 100, es decir, menos de la mitad. Y casi el 59 por 100 de los desempleados en el año fueron mujeres, porcentaje que no ha dejado de crecer desde que, en los años ochenta, comenzaron a incorporarse de forma masiva al mercado de trabajo.

Con datos corregidos del efecto de la actualización, el mayor aumento del empleo en el año 2000 se dio entre los jóvenes de 20 a 24 años, así como en el grupo de más edad (55 y más años); el aumento medio anual fue, en el primer caso, un 5,7 por 100, y en el segundo, un 7,1 por 100. El grupo donde, por el contrario, se recogió un menor aumento de la ocupación fue el de los más jóvenes, entre 16 y 19 años (2,4 por 100).

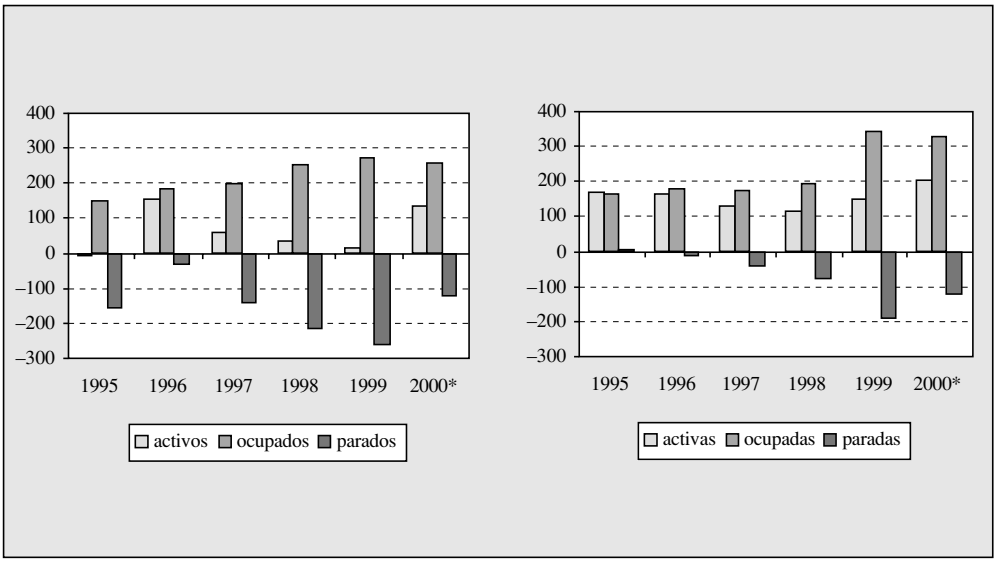
Efectos demográficos en la ocupación de los jóvenes

Pero este comportamiento, es decir, que el crecimiento del empleo sea más bajo entre los más jóvenes, no sería sino reflejo de dos circunstancias bien conocidas: el mayor número medio de años dedicados a la formación inicial, que retrasa la entrada al

GRÁFICO II-4

CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD, LA OCUPACIÓN Y EL PARO, POR SEXO, 1995-2000

(Variaciones medias anuales en miles de personas)



* Descontado el efecto de la actualización muestral.

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

mercado de trabajo; y el progresivo menor crecimiento demográfico, que también afecta ya a grupos de más edad. El total de población entre 16 y 19 años fue en 2000, de acuerdo con los datos de la EPA, casi un 7 por 100 menor que en el año anterior, lo que permitió un aumento en su tasa de empleo de 1,5 puntos porcentuales (cuadro II-3). En el grupo entre 20 y 24 años también se redujo la población, un 1,3 por 100, lo que condicionó, asimismo, un mayor aumento de la tasa de empleo (2,8 puntos). De igual forma, el crecimiento de la ocupación en el primer grupo, aun siendo menor, bastó para reducir su tasa de paro más que en el segundo (3,6 frente a 3,2 puntos).

El empleo de varones entre 25 y 54 años creció sólo un 2 por 100

Ahora bien, el dato más sobresaliente del año 2000 en la evolución del mercado de trabajo por edades fue el aumento, relativamente bajo, del número de ocupados en el conjunto central, es decir, en el grupo entre 25 y 54 años. Ello se debió a un resultado francamente pobre entre los varones, cuyo volumen de empleo

CUADRO II-3
TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 2000
(Medias anuales, porcentajes. Variaciones respecto del año anterior en puntos porcentuales)

Sexo/edad	Actividad (% población)		Empleo (% población)		Paro (% activos)	
	2000	Var. 99/00*	2000	Var. 99/00*	2000	Var. 99/00*
Ambos sexos	**51,3**	**0,8**	**44,1**	**1,6**	**14,1**	**–1,8**
16-19	25,9	0,9	17,0	1,5	34,3	–3,5
20-24	60,8	1,1	46,3	2,8	23,8	–3,3
25-54	77,3	0,2	67,7	1,3	12,4	–1,5
55+	16,2	0,8	14,7	0,8	9,1	–0,3
Varones	**63,8**	**0,4**	**57,6**	**1,2**	**9,7**	**–1,4**
16-19	30,1	1,9	21,6	2,4	28,2	–3,7
20-24	64,6	1,7	52,9	2,9	18,1	–2,5
25-54	92,6	–0,5	85,2	0,6	8,0	–1,2
55+	25,6	1,1	23,4	1,1	8,3	–0,5
Mujeres	**39,8**	**1,1**	**31,6**	**1,9**	**20,5**	**–2,5**
16-19	21,5	–0,1	12,2	0,5	43,4	–2,6
20-24	56,9	1,1	39,5	3,3	30,6	–4,5
25-54	62,4	1,5	50,7	2,6	18,7	–2,2
55+	8,6	0,5	7,7	0,4	11,0	0,3

* Descontado el efecto de la actualización muestral.

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa*.

creció —en términos homogéneos— en 126.000 personas, apenas un 1,9 por 100. El número de ocupadas de estas edades, por el contrario, aumentó en 253.000 personas (un 6,7 por 100). Así, dos terceras partes del total de empleos creados en este grupo correspondió a las mujeres; la tasa de empleo femenina entre 25 y 54 años se situó, por primera vez, por encima del 50 por 100.

2.1.2. **Perspectiva sectorial**

Protagonismo de la construcción

La construcción volvió a ser en 2000 el sector más dinámico en creación de empleo (cuadro II-4 y gráfico II-5). En promedio, el número de ocupados en este sector fue un 8,7 por 100 mayor que

el de 1999, lo que supone cerca de 127.000 personas más, descontado el efecto de la actualización de la EPA. El crecimiento del empleo en 1999 se había cifrado en un 12 por 100, esto es, en ese año habían trabajado en el sector casi 157.000 personas más que en 1998. Así pues, como hay que insistir en que los datos de 1999 venían afectados por el cambio en la EPA, parece que en 2000 habría continuado el auge del empleo en este sector que ya se advirtió el año pasado. No obstante, la evolución a lo largo de los sucesivos trimestres arroja bastantes dudas acerca de la continuidad de este proceso: si en el primer trimestre del año 2000 el porcentaje de aumento interanual del empleo en la construcción todavía se situó cerca del 12 por 100, en el último trimestre no llegó al 6 por 100.

El empleo en los servicios aumentó un 4,5 por 100

También el sector servicios vio reducirse a lo largo del año 2000 el ritmo de creación de empleo, aunque de forma mucho menos acusada que en la construcción. En promedio anual, el número de personas ocupadas en los servicios fue en 2000 ligeramente superior a nueve millones. Esta cifra supone, corrigiendo el efecto de la actualización muestral de la EPA, un aumento cercano a 390.000 personas con respecto al volumen de empleo del sector en 1999 o, lo que es lo mismo, un aumento del 4,5 por 100. Pero mientras que en el primer trimestre de 2000 el aumento interanual fue del 5,2 por 100, y se mantuvo en el 4,7 por 100 en los dos siguientes trimestres, al final del año ese aumento fue del 3,6 por 100.

CUADRO II-4

CRECIMIENTO DEL EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 1998-2000

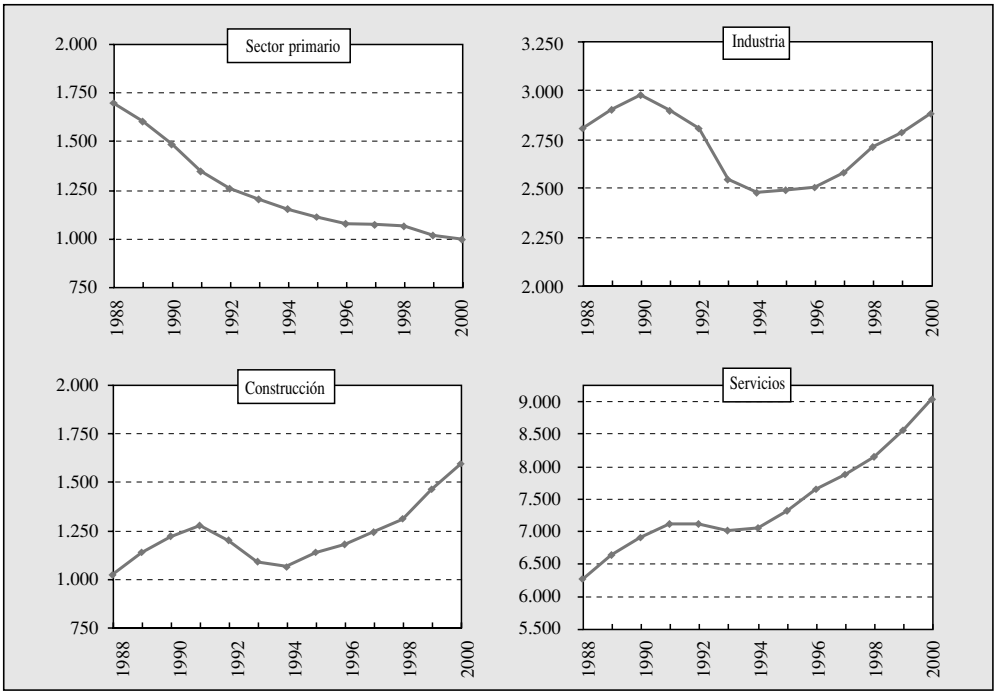
(Miles de personas y porcentajes, medias anuales)

Año	Variación anual	Agricultura y Pesca	Industria	Construcción	Servicios
1998	Miles	–6,8	127,7	64,4	255,1
	Porcentaje	*–0,6*	*4,9*	*5,2*	*3,2*
1999	Miles	–45,8	76,0	156,6	425,7
	Porcentaje	*–4,3*	*2,8*	*12,0*	*5,2*
2000*	Miles	–28,5	93,7	126,6	386,9
	Porcentaje	*–2,8*	*3,4*	*8,7*	*4,5*

* Descontado el efecto de la actualización muestral.

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

GRÁFICO II-5
EMPLEO EN ESPAÑA POR SECTORES, 1988-2000
(Miles de personas, medias anuales)



Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

Mejor comportamiento del sector industrial

La industria, en cambio, elevó su ritmo de creación de empleo a lo largo del año, desde el 2,7 por 100 del primer trimestre hasta el 4,1 por 100 del último. Así, aunque en media anual el aumento del número de ocupados en el sector industrial no llegó a 94.000 personas (siempre descontando el efecto estadístico), en el cuarto trimestre de 2000 esa mayor ocupación fue de casi 115.000 ocupados más que en el mismo periodo del año anterior. De todas formas, aún trabajan en este sector casi cien mil personas menos que en 1990, justo antes del inicio de la crisis que le afectó —adelantándose a la general— en los primeros años de esa década, y que llevó su volumen de empleo a cotas históricamente bajas.

Prosiguió el declive del sector primario

El sector primario, por su parte, continuó en 2000 su paulatina pérdida de empleo. En media anual y con datos comparables de la EPA, el número de personas ocupadas en este sector se situó, por

primera vez, por debajo del millón, lo que supone un descenso de casi 30.000 efectivos respecto de 1999 y, en términos porcentuales, un retroceso del 2,8 por 100.

2.1.3. **El empleo asalariado, motor del crecimiento de la ocupación**

El aumento del empleo asalariado fue, como en todos los años anteriores tras la salida de la crisis, el origen del mayor número de ocupados en la economía española en 2000. Descontando el efecto de la actualización de la EPA, ese aumento se situó ligeramente por encima de las 610.000 personas, lo que supone una variación media anual del 5,6 por 100 (cuadro II-5). Como ya se dijo a propósito de la cifra global de empleo, dejando aparte el resultado de 1999 este dato es el mejor de todos los recogidos desde que, en 1995, se inició la actual etapa expansiva de la economía.

Dinamismo del sector privado

No se dispone de resultados para 2000 plenamente comparables con los del año anterior acerca de las dos grandes categorías institucionales (esto es, sector público y sector privado) que conforman el empleo asalariado en la EPA. Pero no parece muy aventurado afirmar que en este año habría continuado la tendencia que se ha venido observando en toda esta etapa, es decir, en una creación de

CUADRO II-5

OCUPADOS POR SITUACIÓN PROFESIONAL, 1999-2000

(Miles de personas y porcentajes de variación sobre el año anterior, medias anuales)

Situación profesional	1999	Variación 98/99		2000	Variación 99/2000*	
		Miles	%		Miles	%
Ocupados por cuenta propia	2.962,2	–64,0	–2,1	2.949,9	–26,7	–0,9
Empleadores	744,1	51,8	7,5	749,6	–0,8	–0,1
Autónomos	1.794,2	–82,0	–4,4	1.801,8	–3,7	–0,2
Miembros de cooperativas	90,4	7,9	9,6	86,9	–2,1	–2,4
Ayudas familiares	333,5	–41,8	–11,1	311,7	–20,1	–6,0
Asalariados	10.836,7	680,1	6,7	11.508,9	610,1	5,6
Sector público	2.254,9	29,8	1,3	2.339,8	nd	nd
Sector privado	8.581,8	650,3	8,2	9.169,2	nd	nd
Otros	18,7	–3,4	–15,5	14,9	–4,6	–24,8
Total ocupados	**13.817,5**	**612,6**	**4,6**	**14.473,7**	**578,8**	**4,2**

* Descontado el efecto de la actualización.

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

empleo asentada en el fuerte aumento de los trabajadores por cuenta ajena en el sector privado. Los datos de la EPA sin corregir arrojan unos porcentajes de aumento medio anual del 6,8 por 100 para los asalariados en este sector, y del 3,8 por 100 para los que trabajaban en el sector público; esos porcentajes fueron, en 1999, un 8,2 y un 1,3 por 100, respectivamente.

El conjunto de las ocupaciones por cuenta propia prosiguió en 2000 su pauta descendente, con una reducción en su volumen de empleo cercana a 30.000 personas (una vez descontado el efecto de la actualización de la EPA). Llama la atención, no obstante, una pequeña pérdida de efectivos, en promedio anual, para la categoría de empleadores, pues desde 1994 ésta había venido creciendo a buen ritmo. En 2000, el número de empleadores que arroja el promedio de los cuatro trimestres de la EPA fue un 0,1 por 100 menor que el que se obtuvo el año anterior, cuando en el quinquenio 1995-1999 nunca había aumentado por debajo del 4 por 100.

Estabilidad en el empleo autónomo

El número de personas que trabajaron en la categoría de «empresarios sin asalariados y trabajadores independientes» (en su mayor parte compuesta por lo que habitualmente se conoce como trabajadores autónomos) parece haber vuelto en 2000, por el contrario, a una senda que podría de calificarse de estabilidad, con un descenso en este año de apenas un 0,2 por 100 en el número medio de personas que recogió la EPA en los cuatro trimestres del año dentro de esta categoría, lejos así del 4,4 por 100 de bajada que se había recogido como media en el año anterior. En el último trimestre de 2000, además, aumentó el número de ocupados en ella.

De todas formas, muchas de estas variaciones en las cifras de empleo por cuenta propia dentro de estas dos categorías de las que se está hablando no son sino resultado de trasvases entre una y otra en el ámbito de las empresas más pequeñas, de manera que no reflejan ninguna tendencia estructural firme. Ésta sí se advierte, en cambio, en el progresivo mayor peso de los asalariados, tanto a costa de las ocupaciones que, aun siendo calificadas en la EPA como por cuenta propia, tienen un carácter más dependiente (sobre todo las ayudas familiares) como por la paulatina pérdida de empleo autónomo que genera el abandono de la actividad agraria.

Perspectivas para una mayor asalarización

Otra cosa es hasta dónde se mantendrá esta tendencia, clásicamente denominada asalarización, y que hasta hace poco tiempo parecía indefectiblemente asociada a un mayor desarrollo económico. No sólo los vectores de cambio que, desde la organización del trabajo, configuran el futuro del empleo en toda Europa apuntan a un mayor peso de los trabajadores autónomos, sino que en el caso español el auge de la asalarización tiene su origen en dos hechos claros, y limitados en el tiempo: lo que podría denominarse «normalización» del empleo femenino, y el ajuste estructural del tamaño del sector agrario, mucho mayor en España.

Sobre el primero basta señalar que en 1983 las asalariadas eran un 55 por 100 de todas las mujeres que trabajaban, de manera que el resto (un 45 por 100) trabajaba por cuenta propia, y una buena parte de ellas como ayudas familiares; en 2000, el porcentaje de asalariadas sobre el total de ocupadas fue casi un 83 por 100, más de cinco puntos superior al que se dio entre los varones.

Sobre el segundo, cabe recordar que, conforme a los resultados de los que se dispone para el conjunto de la Unión Europea (es decir los, datos de Eurostat en la EFT para 1999), todavía hay distancia entre la estructura sectorial del empleo español y el europeo: el peso en España del empleo en el sector primario es todavía del 7,4 por 100, casi cuatro puntos mayor que en la Unión.

2.1.4. **Nuevo descenso de la temporalidad**

La proporción de asalariados con contrato temporal en 2000 se situó, en promedio, en un 32 por 100. Este resultado supone, una vez corregido el efecto de la actualización de la EPA, un descenso de 0,6 puntos en la tasa de temporalidad, el mejor desde que comenzaron a desarrollarse, a raíz del AIEE de 1997, políticas de fomento del empleo estable (gráfico II-6).

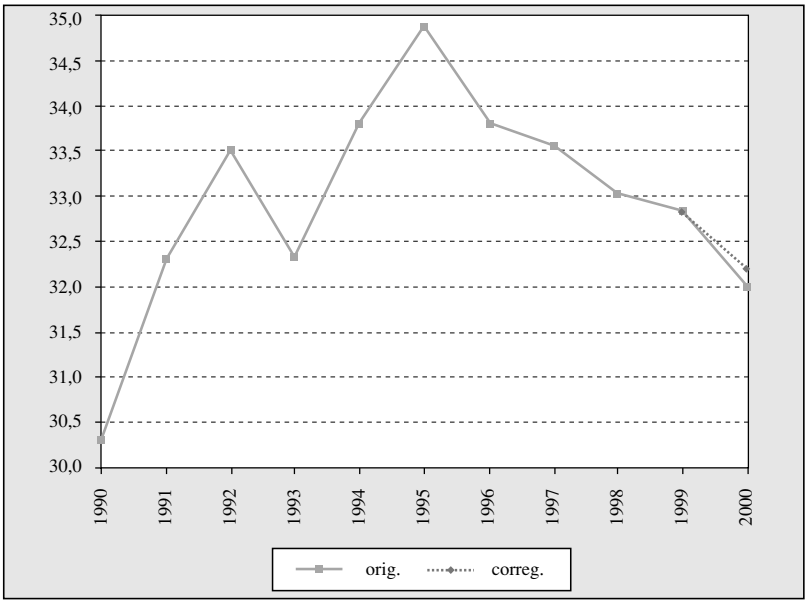
8 de cada 10 nuevos asalariados tuvieron contrato indefinido

Es interesante subrayar que esta mayor reducción de la temporalidad en 2000 se produjo porque el menor ritmo de crecimiento del empleo asalariado afectó mucho más al de carácter temporal que al indefinido (gráfico II-7). Gracias a este comportamiento, casi 8 de cada 10 personas en el mayor número de asalariados del año tenían un contrato indefinido: en el primer caso, el aumento medio

GRÁFICO II-6

TASAS DE TEMPORALIDAD, 1990-2000

(Porcentaje de asalariados temporales sobre el total de asalariados, medias anuales)



Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa*.

anual fue, descontado el efecto de la actualización muestral de la encuesta, de 130.000 personas, lo que supone un crecimiento del 3,7 por 100, cuando en 1999 había crecido un 6 por 100; en el caso de los indefinidos el incremento fue, también descontado el efecto estadístico, de 480.000 personas, un 6,6 por 100, no muy alejado del que se había obtenido en 1999[2].

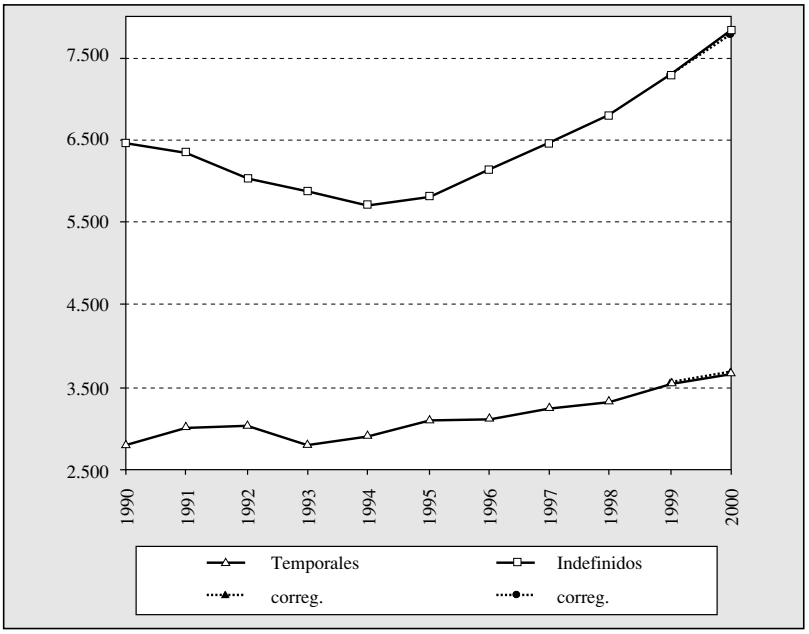
En todo caso, parece claro que las medidas hasta ahora adoptadas para fomentar la contratación indefinida han tenido muy buenos resultados en este sentido, pero también que no son sufi-

[2] Resulta curioso advertir que sin descontar la actualización muestral de la EPA el aumento de los temporales en 2000 es muy parecido, pero menor (3,5 por 100 o, lo que es lo mismo, 124.000 personas) al que se obtiene corrigiendo el efecto de esa actualización, mientras que el de los indefinidos es perceptiblemente más alto (casi 549.000 personas más, es decir, un 7 por 100). Esto significa que la nueva muestra de la EPA «encontró» 68.500 asalariados con contrato indefinido y redujo ligeramente (apenas en 6.300 personas) el volumen del empleo temporal.

GRÁFICO II-7

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO, 1990-2000

(Miles de personas en cada caso, medias anuales)



Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa*.

cientes si se quiere reducir de manera sustancial la tasa de temporalidad.

El empleo temporal creció más en el sector público

No se dispone de datos corregidos sobre el aumento del empleo indefinido y temporal en el sector público y en el privado, pero los datos brutos de 2000 apuntan hacia la misma circunstancia que ya se observó en la anterior edición de esta Memoria: el mayor dinamismo del empleo indefinido en el sector privado (donde creció un 9 por 100, mientras que el temporal creció un 3 por 100), y, por el contrario, el mayor ritmo de aumento del empleo asalariado de carácter temporal en el sector público (en este sector, el empleo indefinido creció un 3 por 100, y el temporal un 6,5 por 100). Siempre con datos brutos, la tasa de temporalidad media anual del sector privado fue en 2000 un 35 por 100, 1,3 puntos menor que la de 1999; mientras, la del sector público creció algo más de medio punto porcentual en el año, y se situó en un 20,1 por 100. Ello da idea de cómo el comportamiento de este último sector está frenando una mayor reducción de la temporalidad en España.

Mayor crecimiento del esperable en el volumen de empleo en las CCAA

El aumento del empleo en el sector público (bien que con datos brutos de la EPA) en 2000 se originó, principalmente, en las Comunidades Autónomas donde, en promedio, trabajaron 91.000 asalariados más que en 1999, así como en el ámbito de la Seguridad Social, que creció en cerca de 26.000 personas. A cambio, el número de asalariados en la Administración Central se redujo, conforme a la misma fuente, en algo más de 55.000 personas. Parece pues que el proceso de transferencias de competencias (al que cabría añadir la progresiva reducción de efectivos en dicha Administración, conforme al Programa de Estabilidad) se traduce en un aumento del empleo en las Comunidades Autónomas mucho mayor del que cabría esperar del simple traspaso de servicios y funciones que implica la transferencia de competencias. Y parece, además, que una porción importante de este empleo es de carácter temporal.

La temporalidad se redujo más entre los jóvenes

Aunque tampoco se dispone de datos corregidos del efecto de la actualización muestral de la EPA, es interesante señalar que, en consonancia con los mayores incentivos previstos, las mayores reducciones de la tasa de temporalidad en 2000 se produjeron en los jóvenes entre 20 y 24 años (donde disminuyó 2,5 puntos) y entre 25 y 29 años (donde fue 2,8 puntos más baja que la de 1999). En ellos, además, viene observándose la misma tendencia desde 1997 (gráfico II-8): entre ese año y 2000, la tasa del primero se ha reducido 7,3 puntos, y la del segundo casi 5 puntos.

No obstante, los niveles siguen siendo muy elevados, y persiste una clara relación entre la temporalidad y la edad, no sólo en las edades iniciales de acceso al mercado de trabajo, donde supera el 80 por 100, sino en otras más altas. El grupo entre 30 y 39 años marca una clara frontera, pues su tasa de temporalidad es todavía, en 2000, casi un 30 por 100 y apenas ha mejorado desde 1997, mientras que la del siguiente (entre 40 y 49 años) se sitúa ya por debajo del 20 por 100, y nunca ha superado esa cifra.

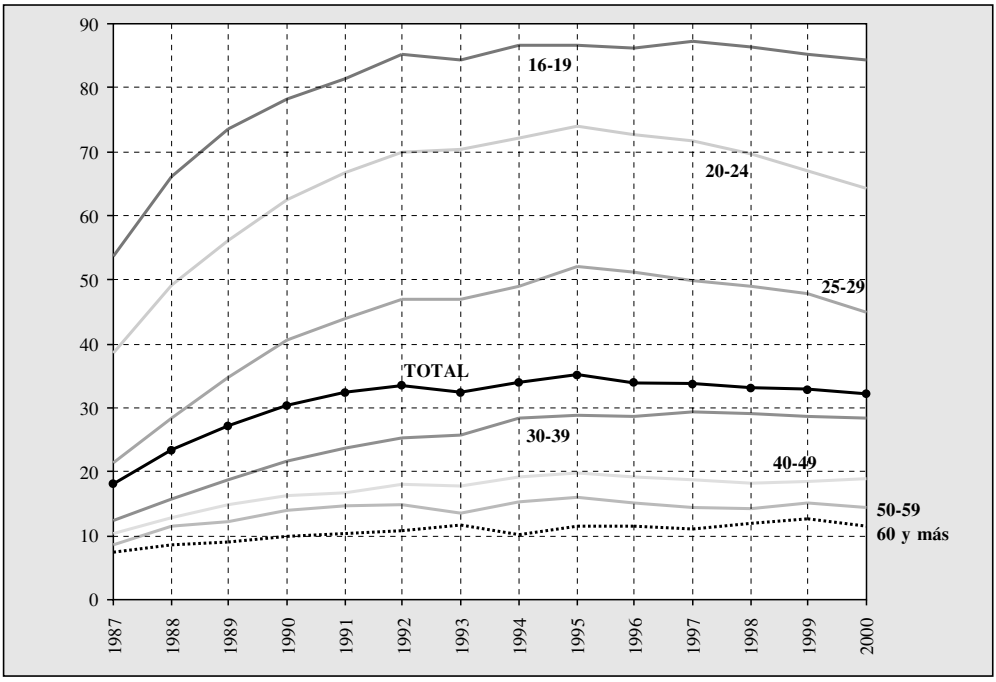
La temporalidad juvenil sigue siendo mucho más alta en España

De lo elevado de estas tasas de temporalidad, y de lo semejante que es su alcance entre los jóvenes de ambos sexos da idea su comparación, en el último año disponible, con las que se obtenían para el conjunto de la Unión Europea (gráfico II-9). En 1999, de acuerdo con los datos de Eurostat, la tasa de temporalidad de los jóvenes entre 15 y 24 años era, en España, un 70 por

GRÁFICO II-8

TASAS DE TEMPORALIDAD POR GRUPOS DE EDAD, 1987-2000

(Porcentaje de temporales sobre el total de asalariados en cada grupo de edad, medias anuales)



Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

100, y ligeramente superior para los varones; en la Unión Europea, esa tasa era algo menos del 40 por 100 para los varones, y un 38 por 100 para las mujeres. Así, a pesar de que en los últimos años las tasas de temporalidad de los más jóvenes han descendido en España y han aumentado en la Unión Europea, la distancia es todavía nada menos que de 30 puntos.

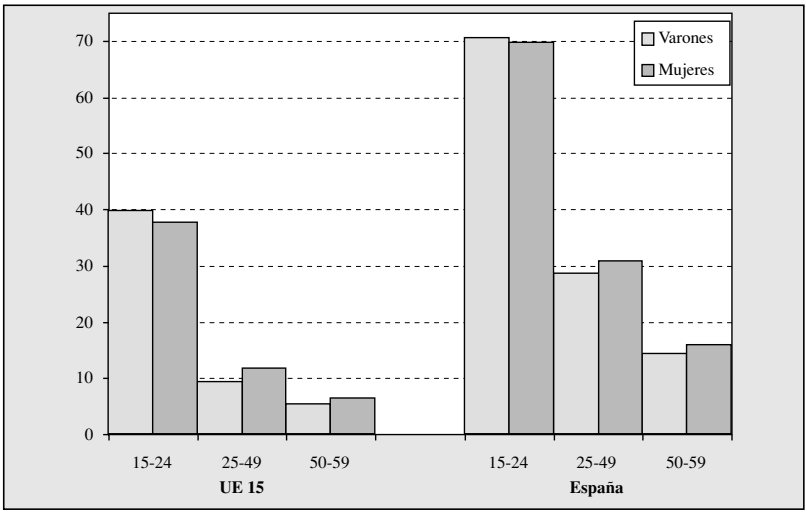
Ligero retroceso de las ETT

Parece oportuno, por último, completar la descripción de la temporalidad en 2000 con un aspecto que se incorporó por primera vez en 1999, el de los asalariados temporales contratados a través de una empresa de trabajo temporal. Tampoco se dispone de datos corregidos, pero a tenor de los datos originales de la EPA el número medio anual de éstos se habría reducido, en casi 14.000 personas, entre 1999 y 2000 (cuadro II-6).

GRÁFICO II-9

TASAS DE TEMPORALIDAD POR SEXO Y EDAD EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA, 1999

(Porcentaje de temporales sobre el total de asalariados en cada sexo y grupo de edad)



Fuente: Eurostat, *Labour Force Survey. Results 1999*.

CUADRO II-6

ASALARIADOS CONTRATADOS POR UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, POR SEXO Y EDAD, 1999-2000

(Miles de personas, medias anuales)

Sexo/grupo de edad	1999	2000	Var. 99/00
Varones	46,1	36,2	–9,9
Mujeres	35,1	31,2	–4,0
Total	81,3	67,4	–13,9
Grupos de edad (años)			
De 16 a 19	7,1	5,1	–2,0
De 20 a 24	27,8	22,1	–5,8
De 25 a 29	19,0	18,9	–0,1
De 30 a 39	15,8	12,9	–3,0
De 40 a 49	7,7	5,0	–2,7
De 50 y más	3,8	3,5	–0,3

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa*.

El descenso habría sido algo mayor en el caso de los varones, y habría afectado menos a los grupos intermedios de edad, donde precisamente —como se dijo en la Memoria de 1999— había más mujeres que varones. De esta forma, es nuevamente perceptible en 2000 una circunstancia que ya se señaló entonces, y es que las ETT contratarían a mujeres con más frecuencia que los empleadores en general: casi la mitad (un 46 por 100) del número medio de contratados a través de una ETT fueron mujeres, mientras que en el caso de los asalariados ese porcentaje se situó ligeramente por debajo del 39 por 100, y en el de los temporales algo por encima del 41 por 100.

Ese descenso, además, supone una pequeña reducción del peso de las ETT en el conjunto de la contratación temporal. En 2000, sólo un 1,8 por 100 de los asalariados con este tipo de contrato correspondió, en media anual, a los cedidos por tales empresas (cuadro II-7). No obstante, en varias ramas de actividad (de acuerdo con los datos de la EPA acerca de los asalariados contratados por ETT según la actividad económica de la empresa usuaria) la importancia de éstas en el total del empleo temporal fue considerablemente mayor, entre el 4 y el 5 por 100.

Distribución por actividades del empleo en las ETT

Cabe destacar, por otra parte, que la estructura del empleo por actividades económicas es, en el caso de las ETT, bastante distinta de la que presenta el conjunto de los asalariados temporales y, más en concreto, el fuerte peso de la industria manufacturera en el conjunto de actividades de las empresas usuarias: esos mismos datos indican que algo más de un 41 por 100 de los asalariados contratados a través de una ETT trabajaron en esta rama, cuando en el total del empleo asalariado temporal ese porcentaje no llegaba al 18 por 100.

Otras dos ramas: transporte, almacenamiento y comunicaciones, y actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales, tenían también claramente mayor peso en el caso de las ETT que en el de los asalariados temporales en general. En cambio, la construcción aportó sólo cerca de un 7 por 100 de los contratados a través de ETT, mientras que el peso de este sector en el conjunto del empleo temporal era un 20 por 100; la agricultura, igualmente, no representaba sino el 0,6 por 100 del empleo temporal a través de las ETT, cuando en el total del empleo temporal el peso de esta rama era un 6 por 100.

CUADRO II-7

ASALARIADOS TEMPORALES, TOTAL Y CONTRATADOS POR UNA ETT, POR RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA USUARIA, 2000

(Miles de personas y porcentaje de los asalariados en las ETT sobre el total de temporales en cada rama, medias anuales)

	Ramas de actividad (CNAE 93)	Total	ETT	% ETT sobre total
A	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	222,5	0,4	0,2
B	Pesca y acuicultura	10,0	0,1	0,5
C	Industrias extractivas	13,4	0,2	1,7
D	Industria manufacturera	654,8	28,0	4,3
E	Producción y distribución de electricidad, gas y agua	11,2	0,5	4,5
F	Construcción	745,9	4,4	0,6
G	Comercio, reparaciones	486,6	8,6	1,8
H	Hostelería	259,9	2,4	0,9
I	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	171,0	7,3	4,3
J	Intermediación financiera	41,4	2,2	5,3
K	Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales	242,0	8,0	3,3
L	Administracón Pública. Defensa. Seguridad Social obligatoria	158,2	1,0	0,6
M	Educación	168,1	0,9	0,5
N	Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales	199,5	1,0	0,5
O	Otras actividades de servicios sociales y prestados a la comunidad; servicios personales	142,6	1,8	1,2
P	Hogares que emplean personal doméstico	152,0	0,7	0,4
Q	Organismos extraterritoriales	—	—	—
Total		**3.679,0**	**67,4**	**1,8**

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

2.1.5. **El tiempo parcial en 2000**

En 2000 aumentó de nuevo el número de ocupados a tiempo parcial. En promedio, trabajaron con esta jornada algo más de 53.000 personas más que el año anterior. Este aumento fue, en términos relativos, algo mayor que el de los ocupados a tiempo completo (4,8 y 4,1 por 100, respectivamente, descontado el efecto de la actualización de la EPA) pero no lo bastante como para elevar —más allá de unas centésimas— el porcentaje de ocupados a tiempo parcial sobre el total del empleo, porcentaje que en adelante será citado como *tasa de parcialidad.*

El aumento del tiempo parcial fue femenino

Todo ese mayor número de ocupados a tiempo parcial en 2000 se produjo entre las mujeres (cuadro II-8), cifrándose el aumento medio del año (una vez descontada la actualización) en un 6,2 por 100. Pero como en este caso el crecimiento del empleo a tiempo completo fue algo mayor (un 6,5 por 100 en los mismos términos), la tasa de parcialidad femenina permaneció prácticamente igual. Mientras, se redujo el ya exiguo peso del empleo a tiempo parcial en la población ocupada masculina.

No se dispone de datos acerca de la evolución, una vez descontado el efecto de la actualización de la EPA, de los asalariados a tiempo parcial y a tiempo completo entre 1999 y 2000. Los datos originales apuntarían a un comportamiento de la población asalariada por tipo de jornada muy parecido al que se acaba de señalar para el total de los ocupados. El número de asalariados a tiempo parcial habría crecido en torno a 47.000 entre 1999 y 2000, lo que supone un buen ritmo de aumento (un 5,3 por 100), pero como el de asalariados a tiempo completo habría crecido más aún (un 6,3 por 100, esto es, unas 625.000 personas), la tasa de parcialidad del empleo por cuenta ajena habría sufrido un ligero retroceso, en torno a una décima, y se situaría, en media anual para 2000, en un 8,1 por 100. Entre los varones, el tiempo parcial de carácter asalariado habría crecido apenas un 1,5 por 100, y el tiempo completo un 4,8 por 100, de forma que también entre la población asalariada masculina habría retrocedido el peso del tiempo parcial. Y entre las mujeres, pese a que este tipo de empleo habría aumentado un 6,3 por 100, como el aumento de las asalariadas a tiempo completo sería claramente mayor (nada menos que un 9,1 por 100), la tasa de parcialidad media del año 2000 habría sido casi medio punto menor que la de 1999.

El peso del tiempo parcial continúa estancado

Aunque estos movimientos son muy pequeños, lo que está claro es que el peso del tiempo parcial continúa estancado, a pesar de que, al menos en el caso de los asalariados, se ha tratado de impulsarlo en los últimos años. La tasa de parcialidad de éstos lleva desde 1997 en un 8 por 100 para ambos sexos, en un 17 por 100 para las mujeres, y en algo más de un 2,5 por 100 para los varones (gráfico II-10). Y ello porque el tiempo parcial sólo ha crecido entre las mujeres, y porque el tiempo completo también ha crecido mucho, tanto entre la población asalariada masculina como entre la femenina.

CUADRO II-8

OCUPADOS Y ASALARIADOS POR TIPO DE JORNADA Y SEXO, 1999-2000

(Miles de personas, medias anuales, y variación sobre el año anterior en miles y en porcentajes)

Años	Ocupados				Asalariados			
	Jornada completa		Jornada parcial		Jornada completa		Jornada parcial	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
1999	8.535,4	4.167,4	255,5	859,2	6.545,8	4.111,5	179,4	710,5
Var. 98/99 miles	*277,1*	*274,4*	*5,5*	*69,6*	*309,7*	*301,7*	*6,0*	*76,1*
Var. 98/99 %	*3,4*	*7,0*	*2,2*	*8,8*	*5,0*	*9,7*	*3,4*	*12,0*
2000	8.832,1	4.478,2	254,6	908,9	6.861,2	3.710,6	182,0	755,1
Var. 99/00 miles	*254,9**	*270,4**	*0,1**	*53,4**	*315,4*	*309,7*	*2,6*	*44,6*
Var. 99/00 %	*3,0**	*6,5**	*0,0**	*6,2**	*4,8*	*9,1*	*1,5*	*6,3*

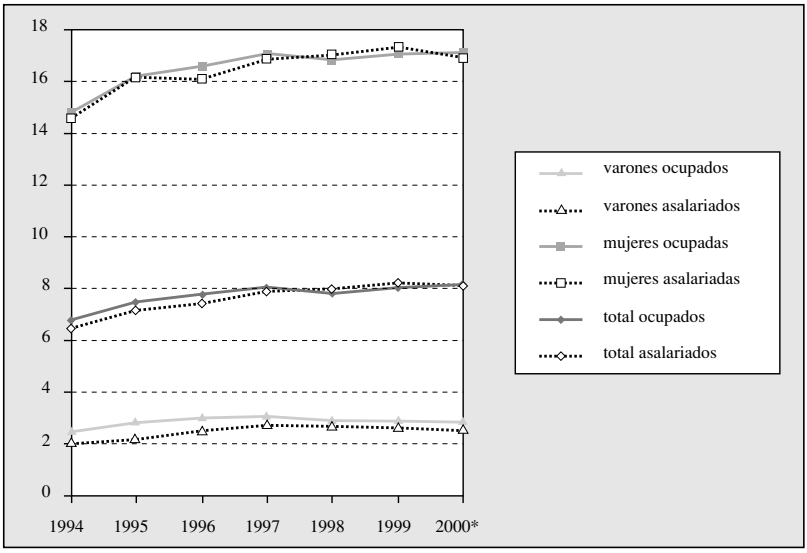
* Descontado el efecto de la actualización.

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

GRÁFICO II-10

TASAS DE PARCIALIDAD POR SEXO Y SITUACIÓN PROFESIONAL, 1994-2000

(Porcentaje de los que trabajan a tiempo parcial sobre el total en cada sexo y situación profesional, medias anuales)



* Descontado el efecto de la actualización en los datos de ocupados.

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

CUADRO II-9
TASAS DE TEMPORALIDAD DE LOS ASALARIADOS POR TIPO DE JORNADA, 1995-2000
(Porcentaje de temporales sobre el total de asalariados en cada tipo de jornada, cuartos trimestres)

Sexo y tipo de jornada	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Varones						
A tiempo completo	31,8	31,3	31,2	30,6	30,2	29,4
A tiempo parcial	75,0	71,0	69,7	68,9	70,9	69,4
Mujeres						
A tiempo completo	33,6	32,1	31,6	30,7	30,9	30,3
A tiempo parcial	57,6	56,5	50,2	49,9	54,0	51,3
Total						
A tiempo completo	32,4	31,6	31,4	30,7	30,4	29,7
A tiempo parcial	61,3	59,6	54,3	54,0	57,3	54,9

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

Descenso de la temporalidad en los asalariados a tiempo parcial

Finalmente, cabe destacar, aun cuando se trata de datos de la EPA sin corregir, que en el año 2000 se produjo un nuevo descenso de la temporalidad entre los asalariados a tiempo parcial (cuadro II-9), sobre todo por la reducción de la correspondiente a las mujeres. No obstante, las tasas de temporalidad en esta jornada siguen siendo altísimas: 51,3 por 100 entre las mujeres, y nada menos que 69,4 por 100 entre los varones.

2.1.6. **Perspectiva territorial**

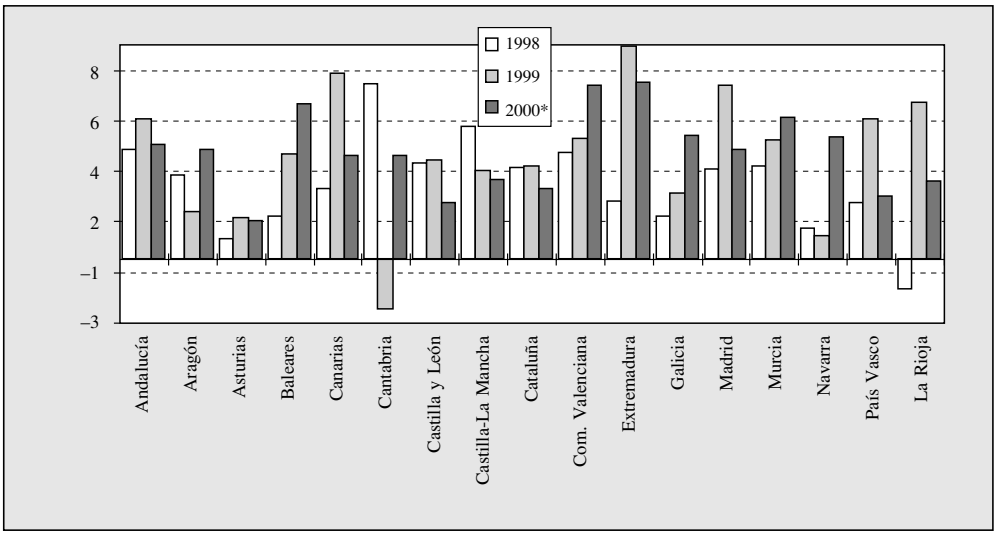
Extremadura, Valencia y Baleares lograron los mayores aumentos del empleo

Atendiendo a los datos corregidos de la EPA, el aumento del empleo en 2000 fue especialmente alto en tres Comunidades Autónomas, en las que superó el 6 por 100: Extremadura, Comunidad Valenciana y Baleares (gráfico II-11). Es destacable el resultado de la segunda, pues el menor tamaño poblacional de las otras dos hace que los porcentajes de variación anual (de aumento en este caso, pero lo mismo ocurre cuando se producen pérdidas de ocupación) habitualmente sean más altos. En la Comunidad Valenciana se crearon casi 100.000 empleos, lo que supone un aumento cercano al 7 por 100.

GRÁFICO II-11

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1998-2000

(Porcentajes de variación sobre el año anterior, medias anuales)



* Descontado el efecto de la actualización.

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa*.

Baleares tiene la tasa de empleo más alta de España

De todas formas, el resultado de Baleares puede calificarse sin ambages de excelente, porque el aumento del número de ocupados, cercano a 20.000 personas (un 6,2 por 100), volvió a elevar con fuerza su tasa de empleo, es decir, el porcentaje de éstos sobre el total de la población en edad de trabajar. Dicha tasa, que ya era la más alta de España en los últimos años (cuadro II-10), creció con mucha fuerza, situándose, como media del año 2000, en un 52,5 por 100, más de 8 puntos por encima de la que se obtiene para el total nacional, y a 4 puntos de distancia de las tres únicas Comunidades Autónomas que se acercan a ese resultado: Cataluña, Navarra y Madrid.

Asturias, Castilla y León y el País Vasco obtuvieron los menores aumentos del empleo

En otras ocho Comunidades Autónomas el mayor número de ocupados se situó por encima del 4 por 100, mientras que en las seis restantes fue considerablemente más bajo, sobre todo en Asturias (1,5 por 100), Castilla y León (2,3 por 100) y el País Vasco (2,5 por 100). La escasa creación de empleo en el Principado, sin embargo, fue suficiente para aumentar su tasa de empleo (de todas

CUADRO II-10

TASAS DE EMPLEO Y PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1999-2000

(Porcentaje de ocupados sobre el total de población mayor de 16 años y de parados sobre el total de activos, medias anuales. Variación sobre el año anterior en puntos porcentuales)

Comunidades Autónomas	Tasa de empleo			Tasa de paro		
	1999	2000	Variación 1999/2000 (corregida)	1999	2000	Variación 1999/2000 (corregida)
Andalucía	35,9	37,4	1,3	26,8	24,5	–2,2
Aragón	44,2	46,2	2,0	9,0	7,2	–1,8
Asturias	34,9	36,2	0,6	17,9	17,0	–1,1
Baleares	49,7	52,5	2,7	7,9	6,3	–2,1
Canarias	45,0	46,7	1,3	14,5	13,5	–1,2
Cantabria	37,8	39,6	1,4	15,6	13,7	–1,6
Castilla y León	39,9	40,7	0,9	15,2	13,9	–1,6
Castilla-La Mancha	40,3	42,1	1,0	15,0	12,6	–2,3
Cataluña	47,0	48,5	1,2	10,6	8,8	–1,8
Comunidad Valenciana	44,1	47,1	2,8	13,9	11,6	–2,2
Extremadura	36,0	38,2	2,3	24,9	23,6	–1,4
Galicia	40,6	42,4	1,9	16,2	14,8	–1,3
Madrid	46,1	48,3	1,8	13,1	11,6	–1,7
Murcia	43,8	46,3	2,0	13,9	12,8	–1,0
Navarra	46,1	48,5	2,0	8,2	5,9	–2,1
País Vasco	43,9	45,7	1,1	14,1	12,2	–1,7
La Rioja	43,1	44,6	1,3	8,3	8,1	–0,3
Ceuta y Melilla	39,1	41,1	2,0	24,7	24,1	–0,6
Total España	**42,3**	**44,1**	**1,6**	**15,9**	**14,1**	**–1,8**
Media CCAA	*42,1*	*44,0*	*1,7*	*15,0*	*13,5*	*–1,5*

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

formas la más baja de España), porque la población en edad de trabajar de esta región no sólo no creció en 2000, sino que fue ligeramente menor (un 0,2 por 100) que la de 1999.

Navarra y Baleares, las mejores en desempleo

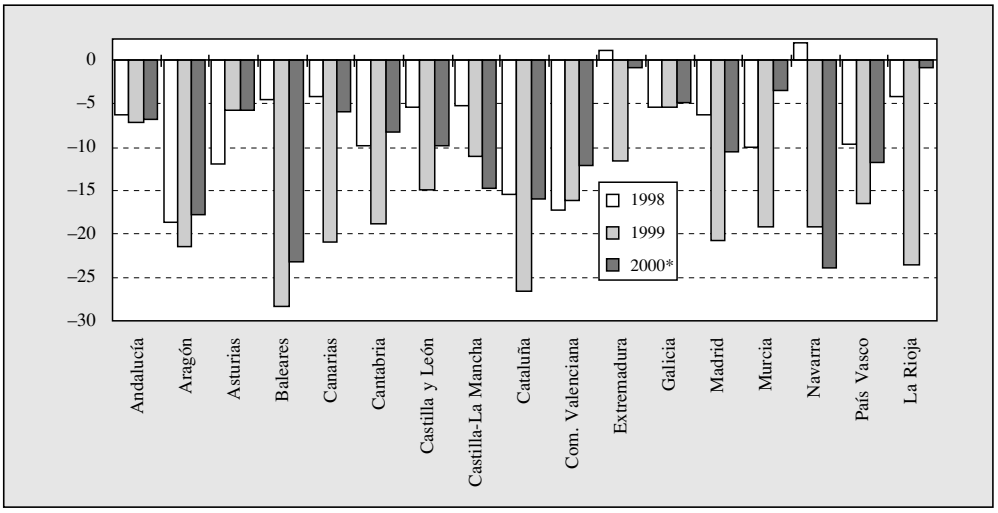
Por lo que hace al desempleo, las mayores reducciones, en proporción, se dieron en Navarra y Baleares; en ambos casos el número medio de parados en 2000 fue, según la EPA, más de un 23 por 100 inferior[3] al que se recogió en el año anterior (gráfico II-12). Con ello se redujeron de modo muy apreciable las tasas de

[3] Sin restar mérito a este comportamiento, ha de advertirse que, sobre todo en el caso de Navarra, la combinación de una tasa de paro muy pequeña con un tamaño poblacional también pequeño hace que los descensos en el desempleo arro-

GRÁFICO II-12

EVOLUCIÓN DEL PARO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1998-2000

(Porcentajes de variación sobre el año anterior, medias anuales)



* Descontado el efecto de la actualización.

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa*.

paro de estas dos Comunidades, que ya eran las menores de España. La tasa media de 2000 fue, en Baleares, del 6,3 por 100, y en Navarra del 5,9 por 100.

Aragón y Cataluña lograron descensos del paro también muy altos, superiores al 15 por 100, y en otras cinco Comunidades Autónomas se recogieron porcentajes del 10 por 100 o más. En el otro extremo, la reducción del desempleo en cuatro de ellas no llegó al 5 por 100, y en dos de estas últimas (Extremadura y La Rioja) no llegó al 1 por 100.

Buenos resultados en Cataluña

En las tres grandes áreas por población, destaca el resultado obtenido por Cataluña como promedio en el año 2000. La EPA arroja, descontando el efecto de su actualización, casi 50.000 personas paradas menos (es decir, un 16 por 100) en esta Comunidad

jen porcentajes muy fuertes: el número de parados en Cantabria, que tiene un tamaño poblacional similar al de Navarra, se redujo en 2.600 personas, y en esta última en 4.400, es decir, algo menos del doble; pero el porcentaje de reducción del paro en Cantabria, que tiene una tasa de paro más alta, fue del 8 por 100, y en Navarra del 24 por 100, es decir, el triple.

Autónoma que en el año anterior; la tasa de paro fue, en 2000, inferior al 9 por 100. En Madrid, la reducción del número de desempleados se cifró en 31.000 personas (algo menos de un 11 por 100), y la tasa de paro fue, en la media del año, un 11,3 por 100. En Andalucía, el volumen de paro de 2000 fue inferior en casi 52.000 personas al de 1999, lo que supone un descenso cercano al 7 por 100[4]; la tasa de paro, que sigue siendo —junto con la correspondiente a Extremadura— la más alta de España, a considerable distancia de las demás, se situó, en promedio, en un 24,5 por 100.

Diferencias territoriales en el paro por sexo

Resulta interesante observar, en esta perspectiva territorial, las diferentes distancias entre las tasas de paro de las mujeres y las de los varones en las Comunidades Autónomas. Al final del año 2000, la tasa de paro femenina era, en España, algo más del doble que la masculina, pero en Baleares, Andalucía y Galicia, esa proporción era apreciablemente más baja, mientras que en otras dos Comunidades, Navarra y Aragón, era mucho mayor: la tasa de paro de las mujeres resultaba en estas dos últimas Comunidades más de tres veces mayor que la de los varones (gráfico II-13).

Así, si se atiende al paro masculino, Andalucía era, con un 17,3 por 100, la Comunidad con mayor tasa de desempleo en 2000, y Navarra la que exhibía la tasa más baja (3 por 100). Si se atiende al femenino, la mayor tasa se encontraba en Extremadura (35 por 100), y la menor en Baleares (9,7 por 100).

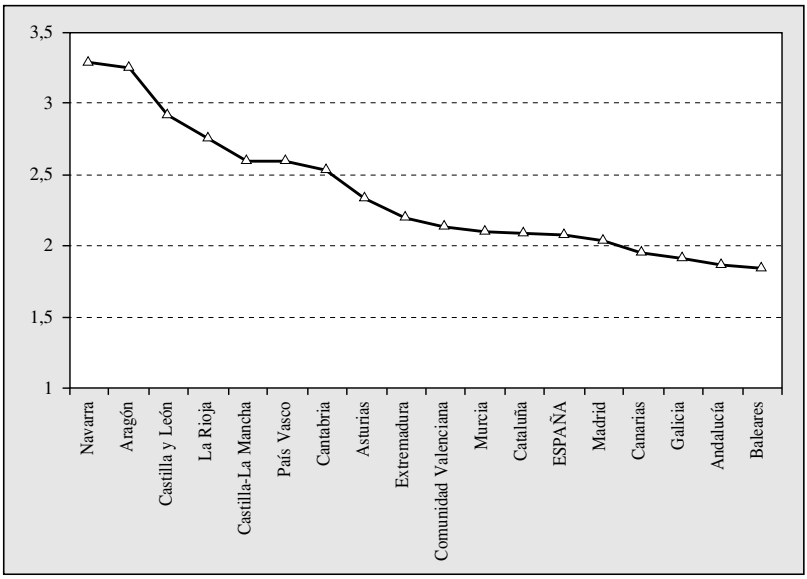
Las distancias entre sexos se han ampliado, además, entre 1997 y 2000, en todas las Comunidades Autónomas (como ya venía sucediendo desde el final de la crisis), con la notable excepción de Baleares. En el último año, trece de ellas tenían tasas de paro masculinas por debajo del 10 por 100, pero sólo dos tenían tasas de paro femeninas por debajo de ese valor (y sólo cinco estaban por debajo del 15 por 100).

[4] Igual que se indicó en la nota anterior, pero al revés, puede observarse ahora con respecto a Andalucía, porque como su tasa de paro es muy alta, descensos considerables en el número de personas desempleadas se reflejan en porcentajes más pequeños: Cataluña tenía en 1999 un volumen de población activa similar, pero como su número de parados era menos de la mitad, el descenso del paro en el año 2000 en cada una de estas Comunidades Autónomas se tradujo en porcentajes inversos, es decir, más del doble en Cataluña que en Andalucía.

GRÁFICO II-13

DIFERENCIAS EN EL PARO POR SEXOS, COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

(Cociente entre la tasa de paro femenina y la masculina en cada Comunidad Autónoma, cuarto trimestre)



Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa*.

2.2. FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA

Como en años anteriores, se analiza a continuación las entradas en el mercado de trabajo a través de la evolución de la contratación registrada en el INEM, que es una de las perspectivas desde las que se pueden aproximar datos acerca del volumen de entradas en la actividad laboral. También, como ya es habitual, se incluyen en este epígrafe los datos sobre salidas del empleo que institucionalmente se conceptúan como despidos y que, por supuesto, no son sino una parte del total de las salidas de la ocupación, por lo general referidas al empleo de duración más estable o indefinido. Al margen quedan otras vías de extinción de la relación laboral, entre las de mayor volumen las de la contratación temporal o de duración determinada, y otras, como las asociadas al cumplimiento del ciclo vital de las personas (la jubilación entre ellas), o las derivadas de distintas contingencias (por ejemplo la incapacidad laboral).

2.2.1. **Panorama de la contratación**

En el año 2000 se registraron en el INEM 13.600.000 contratos. A pesar de que tal cifra supone un nuevo aumento respecto al total de los registrados en 1999, muestra a la vez un cierto freno en el ritmo de crecimiento que desde hace años se venía registrando (cuadro II-11).

Menor progresión del registro de nuevos contratos

Mientras que en los dos años subsiguientes a la firma del Acuerdo Interconfederal de Estabilidad en el Empleo (AIEE) —1998 y 1999— los aumentos en el número total de contratos registrados alcanzaron más de un millón y medio cada año, en el año 2000 dicho incremento fue menor, al haberse reducido a la mitad (775.000 contratos) el total de los celebrados. Esta posible menor progresión en el registro de nuevos contratos no puede llevar a desconocer lo elevado de la cifra total de contratos realizados, cuyas características, en cuanto a modalidades, duraciones y perfiles de los trabajadores y de los sectores y actividades, entre otras, nos proporcionan información

CUADRO II-1
CONTRATOS REGISTRADOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, 1997-2000
(Totales anuales)

Contratos registrados	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**
Indefinido ordinario	162.423	178.033	220.789	313.869
Obra o servicio	2.766.097	3.177.197	3.878.145	4.133.772
Eventual circunstancias producción	3.466.336	4.113.998	4.547.402	4.830.731
Interinidad	533.321	586.706	709.332	715.132
Indefinido Ley 63/1997	126.308	325.295	379.691	421.726
Temporal minusválidos	1.665	3.281	4.504	5.573
Tiempo parcial	1.983.029	2.367.093	2.412.823	2.512.104
Sust. jubilación 64 años	2.783	2.921	2.888	2.754
Prácticas	81.056	94.926	94.672	92.279
Aprendizaje	73.593	—	—	—
Formación Ley 63/1997	82.558	147.415	154.000	119.091
Minusválidos	5.725	6.546	9.848	11.062
Minusválidos en CEE	10.033	13.380	16.231	17.837
Otros contratos	307.500	332.808	394.673	432.165
Total contratos nuevos	9.807.514	11.349.599	12.824.998	13.609.293
Conversiones en indefinidos	286.051	313.680	410.329	219.626
Adscripciones en colaboración social	8.691	8.108	7.204	7.294
Total contratos registrados	10.093.565	11.663.279	13.235.327	13.836.213

Fuente: INEM, *Estadística de Contratos Registrados.*

sobre el carácter y otras condiciones del empleo creado en el año, entre otras, su mayor o menor estabilidad. Ahora bien, existen ciertas limitaciones a la hora de interpretar la información proporcionada por el registro de contratos del INEM, lo que lleva a advertir, como se ha hecho en años anteriores que, aunque muestre características relevantes de los trabajadores contratados, como las edades o el sexo, no refleja personas sino contratos y, como una misma persona puede suscribir con una misma empresa varios contratos de distinta duración, no se pueden extraer conclusiones tajantes sobre si el mayor o menor peso de determinada modalidad de contratación significa también una mayor utilización o frecuencia de uso de la misma.

Contratados eventuales y de obra suman dos tercios del total

Con esta salvedad, se puede afirmar que un año más la contratación de duración determinada se canaliza a través de las dos modalidades de mayor peso en el conjunto de la contratación: el contrato eventual y el de obra o servicio determinados. Entre ambas modalidades representan aproximadamente las dos terceras partes del total de contratos registrados (65 por 100) y recogen el 69 por 100 del aumento de las contrataciones nuevas realizadas en el año, manteniéndose la proporción de contratos de cada modalidad sobre el total de contratos que se daba en 1999: un 30,4 por 100 son de obra y un 35,5 por 100 eventuales.

No obstante, como ya sucedió en 1999, también en el año 2000 fue menor que en años anteriores el aumento de las contrataciones bajo ambas modalidades, pues los setecientos mil contratos más de obra que se realizaron en 1999 respecto al año anterior, pasan a ser doscientos cincuenta mil más en el año 2000; y lo mismo ocurre con los eventuales que, de un aumento del orden de cuatrocientos treinta mil contratos más en 1999, pasan también a sólo doscientos ochenta mil más en 2000, lo que, entre otras cosas, significa que a la reducción del número total de contratos en el año ha contribuido en gran medida el que se realizaran menos contratos de obra y eventuales.

Ahora bien, como la causa de este menor número de contrataciones pudiera ser la mayor duración media de los celebrados como contratos eventuales, motivada por las reformas de su regulación en 1997 y 1998[5], no puede interpretarse que se haya reducido al

[5] Como se recordará, el AIEE incluyó el compromiso de los firmantes de especificar y delimitar los supuestos de utilización de los contratos temporales cau-

mismo tiempo el peso de esta modalidad en el total de la contratación, porque el menor número de contratos registrados podría ser compatible con un mayor o igual número de personas contratadas eventualmente.

En este sentido, podría considerarse que el hecho de que se hayan aproximado las cifras de nuevas contrataciones realizadas bajo la modalidad eventual y de obra podría corroborar la mayor duración media de los contratos eventuales y el posible trasvase de éstos a los de obra, como ya se observó en la Memoria de 1999 había sucedido en dicho año, sirviendo de posible explicación la reducción legal del número de prórrogas en los contratos eventuales desde principios de aquel año[6].

De la misma manera, cabría pensar que el hecho de que la evolución positiva del sector de la construcción durante los primeros trimestres del año, con fuerte presencia de contratos de obra y el «trasvase» producido en 1999 desde el eventual al de obra, no aparezca aparentemente reflejado en los datos de 2000, al reducirse el número de nuevos contratos de esta modalidad suscritos en el año, tendría también la misma explicación: la mayor duración de los contratos celebrados por obra o servicio, que afectaría a una parte de los más de setecientos mil nuevos contratos de esta modalidad celebrados en 1999 y que, a pesar de ser contratos de duración determinada a efectos de la normativa laboral, tienen normalmente

---

sales, en especial los contratos de obra o servicio determinado y los eventuales por circunstancias de la producción, posibilitando así una mayor estabilidad y una menor rotación en el conjunto del sistema de contratación. La reforma del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, realizada por la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, amplió por ello la capacidad de intervención del convenio colectivo en ambos tipos de contratación: identificar trabajos con sustantividad propia para definir el objeto en los de obra y posibilitar la modificación de la duración de los contratos eventuales, determinar las actividades en que pudieran realizarse y fijar criterios en relación con el volumen total de contratación. El AIEE estableció el compromiso de hacer un seguimiento de ambas modalidades.

[6] A finales de 1998 se aprobó el RD 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrollaba el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en la redacción dada al mismo por la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, antes en el RDL 8/1997, de 16 de mayo, cuyo origen fue el AIEE. En virtud de la primera disposición de las citadas, la posibilidad de prorrogar por acuerdo de las partes el contrato eventual en el caso de que se concierte por un plazo inferior a la duración máxima legal o convencionalmente establecida se limita a una única prórroga.

una duración «indeterminada», pues su término es la finalización de una obra o servicio y no una fecha cierta. De ahí que, también en este caso, el descenso del número de nuevos contratos registrados sería compatible con el mantenimiento de un importante peso de la contratación existente porque una mayor duración media de los contratos de obra posibilitaría que una cifra similar o incluso menor de contratos de este tipo pueda representar un mayor número de personas contratadas bajo la modalidad.

En todo caso, puede concluirse que la significativa reducción del número de nuevos contratos de obra y servicio realizados en el año 2000 y también de nuevos eventuales, con el resultado de que se haya alcanzado una cifra similar de contratos nuevos en ambas modalidades, lo que no sucedía en años anteriores, podría indicar una cierta «estabilización de la contratación temporal» o si se prefiere una «contratación de duración determinada —eventual y de obra— más duradera o estable».

Descontadas de la contratación de duración determinada las cifras correspondientes a las dos modalidades analizadas, las demás contrataciones no indefinidas suman, en conjunto, un peso poco significativo en el total de contratos del año, pues no alcanzan el 10 por 100, siendo los de interinidad los de mayor peso con 715.000 contratos celebrados, dándose la circunstancia de que dicha modalidad no ha dejado de aumentar en los últimos años. Entre 1997 y 2000, el contrato de interinidad ha crecido un 34 por 100, lo que puede explicarse probablemente por la conjunción de varios factores, entre ellos, la flexibilización de su regulación[7], en particular, por su utilización en los procesos selectivos dentro de la empresa

[7] La primera ampliación de los supuestos del contrato de interinidad se debe al RD 2546/1994, de 29 de diciembre, que desarrolló el artículo 15 ET. El RD 2720/1998, de 18 de diciembre, que ha sustituido y derogado al anterior, mantiene los mismos supuestos de utilización. El RDL 11/1998, de 4 de septiembre, estableció bonificaciones de cuotas de Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los periodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento, y luego la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para Promover la conciliación de la vida familiar y laboral, amplió a los periodos de riesgo por embarazo. La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, extendió los beneficios a los trabajadores de las sociedades cooperativas y la Ley 39/1999 lo amplió a las sociedades laborales, así como a las trabajadoras contratadas para sustituir a trabajadores/as autónomas en los mismos supuestos.

y dentro del ámbito del empleo público de carácter laboral. Además, los contratos de interinidad celebrados para la sustitución de trabajadores/as en situaciones de baja por razones de maternidad, adopción o riesgo por embarazo, también pueden haber contribuido algo a dicha evolución ascendente, pues su número ha aumentado a partir de que se establecieran incentivos como la exención de las cotizaciones del contratado durante la sustitución de las citadas situaciones de baja a través del denominado «coste cero». Sin embargo, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, desde que la medida entró en vigor, en septiembre de 1998, hasta el 31 de enero de 2001, se contabilizan 78.693 contratos y durante el año 2000 fueron 37.241 los contratos de sustitución por maternidad, los cuales representaron el 20 por 100 del total de las bajas registradas por dicha causa, es decir, las empresas sólo sustituyeron una de cada cinco situaciones de baja[8]. Por lo que habría que pensar que además de estos supuestos bonificados en la cotización otras situaciones de suspensión del contrato están siendo crecientemente atendidas mediante contratos de interinidad[9].

Las modalidades formativas —prácticas y aprendizaje— registran evoluciones distintas pues, mientras a partir de 1997 se ha mantenido la cifra anual de contrataciones en prácticas, el contrato de formación establecido en 1997, después de un importante aumento entre 1998 y 1999, en el año 2000 ha descendido un 22 por 100. Si bien, se ha justificado la menor cifra de contratos de formación respecto a los de aprendizaje, a los que sustituyeron a partir del AIEE, por la reducción de potenciales beneficiarios, al modificarse legalmente el límite superior de edad (de 25 a 20 años), el nuevo descenso de los contratos formativos sólo se explicaría en la reducción de los posibles destinatarios desempleados de edad y niveles de formación susceptibles de contratación en formación por

[8] La disposición adicional segunda del RDL 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, establece la bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales de la Seguridad Social de las trabajadoras/es o socios/as sustituidas durante los periodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento, mediante contratos de interinidad bonificados celebrados con los desempleados/as a que se refiere el RDL 11/1998.

[9] Al analizar las medidas de fomento del empleo adoptadas en el marco de Planes de empleo de las Comunidades Autónomas, se observa que en algún caso se están fomentando mediante diversos incentivos otras causas de suspensión, como las excedencias por cuidado de hijos y familiares.

la mejora de sus tasas de desempleo, además de por otros posibles factores relacionados con la propia configuración del contrato y su gestión.

100.000 contratos más a tiempo parcial en 2000

La contratación a tiempo parcial durante el año 2000 registra 100.000 contratos más que en 1999: en total, 2.512.104 contratos, de los cuales se celebraron con carácter indefinido el 9,5 por 100 y el resto bajo las diferentes modalidades de la contratación de duración determinada. La estructura que en tiempo parcial presentan las distintas modalidades muestra una distribución algo distinta que la de la contratación a tiempo completo, por la mayor proporción de contratos eventuales a tiempo parcial que de obra o servicio (37,5 por 100 de contratos de obra a tiempo parcial, frente a 36,5 por 100 a tiempo completo; y 47,7 por 100 eventuales a tiempo parcial, frente a 42,7 por 100 a tiempo completo).

Lo más destacable del año respecto a la contratación a tiempo parcial es el ligero descenso de los contratos de duraciones más cortas (hasta un mes), pero sobre todo el considerable mayor peso de los indefinidos y de duración indeterminada ya que entre ambos recogen el crecimiento total de contratos del año. Las restantes duraciones medias, según las distintas modalidades, mantienen el peso que tenían en 1999 sin apenas variaciones. En este sentido, habría que considerar que el menor ritmo de crecimiento de la contratación a tiempo parcial que se manifiesta a partir de 1999, respecto al que venía experimentándose en años anteriores (de 1997 a 1998, se realizaron casi cuatrocientos mil contratos más, mientras entre 1998 y 1999 se registraron sólo cuarenta y cinco mil contratos nuevos) tiene que ver con el cambio de su régimen jurídico y del modelo de contratación a tiempo parcial que proyectaba la nueva regulación introducida en virtud del Acuerdo sobre el Tiempo Parcial de noviembre de 1998[10]. El poco tiempo transcurrido bajo la nueva regulación no permite extraer conclusiones definitivas sobre en qué medida la reducción de la cifra de contratos guarda relación con dicha reforma, teniéndose que analizar con mayor detalle las características de los nuevos contratos, cuya incipiente mayor

[10] El Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT y CCOO dio lugar al RDL 15/1998, de 27 de noviembre, y al mismo se opusieron las organizaciones empresariales por entender que introducía rigidez y dificultades de aplicación en la contratación a tiempo parcial.

duración media sólo sería un indicio de un posible cambio de modelo de contratación sin confirmar. Además, los incentivos establecidos para la contratación a tiempo parcial estable a partir de esas mismas fechas también han de ser considerados a la hora de valorar la mayor presencia de contratos de duraciones menos cortas e indefinidos a tiempo parcial.

Según se observó en la Memoria de 1999, la contratación a través de empresas de trabajo temporal (ETT) mediante los contratos de puesta a disposición celebrados entre dichas empresas y las usuarias, experimentó en dicho año un crecimiento notablemente más bajo que el que desde su legalización se había venido produciendo cada año. Así, de un aumento del número de contratos de puesta a disposición del 36 por 100 de 1997 a 1998, se pasó a un índice de crecimiento de un 9 por 100 en 1999. Una posible explicación de este cambio de la anterior evolución de la contratación a través de ETT apuntaba a la reforma de aspectos importantes de su anterior régimen jurídico[11]. Los datos del año 2000 referidos tanto al número total de contratos de puesta a disposición, prácticamente el mismo que en 1999, confirmaría la estabilidad de las contrataciones a través de ETT. La distribución por modalidades de contratos de trabajo de duración determinada, coincidentes con las del artículo 15 ET, apenas cambia en el año, pues se observa, coincidiendo con la evolución del resto de la contratación, una cierta estabilidad en el crecimiento de los contratos eventuales y un mayor dinamismo en los de obra, que después de haber aumentado un 40 por 100 de 1998 a 1999, crecen de nuevo en el año 2000, aunque bastante menos (un 6,6 por 100), pero algo más todavía que los eventuales, que sólo crecen un 2,4 por 100. Un dato en el que se produce una variación importante en el año es el del número de

[11] Mediante la Ley 29/1999, de 16 de julio, se reformó la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. Entre otros cambios, destacan los referidos a la equiparación de las retribuciones de los trabajadores con las percibidas por los de las empresas usuarias, así como la reconducción de la causalidad de la contratación al régimen jurídico de la contratación temporal directa, impidiendo que fraguase un régimen propio distinto del general, a través de ciertas interpretaciones anteriores, corregidas por la jurisprudencia, que tendían a separar de éste la contratación a través de ETT. También mediante la aprobación del RD 216/1999, de 5 de febrero, se establecieron las disposiciones específicas mínimas de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contratados por las ETT, así como las actividades y trabajos en los que, en razón de su especial peligrosidad, no podrán celebrarse contratos de puesta a disposición.

empresas de trabajo temporal registradas, que ha descendido considerablemente al pasar de 411 que había en 1999 a 370, por debajo del número de las que estaban registradas en 1996. Otro dato de interés del año sería el leve incremento de la ratio de contratos de puesta a disposición/trabajadores cedidos[12], que ha pasado a 1,47 contratos de puesta a disposición por trabajador cedido al mes, desde 1,37 en 1997, 1,42 en 1998 y 1,41 en 1999 (cuadro II-12).

Volvió a crecer la contratación indefinida ordinaria

La contratación indefinida a lo largo del año volvió a crecer y lo hizo de forma significativa la modalidad de contrato indefinido ordinario. También creció, aunque menos, el contrato de fomento de la contratación indefinida creado por la Ley 63/1997. El primero creció casi un 30 por 100, mientras el segundo (con un coste inferior de extinción por causas objetivas), lo hizo un 10 por 100,

CUADRO II-12
CONTRATOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN POR MODALIDAD, 1996-2000
(Totales anuales)

Modalidades	1996	1997	1998	1999	2000*
Obra o servicio	298.415	430.398	581.678	815.004	869.360
Eventual	443.571	765.721	1.084.386	1.046.668	1.021.492
Interinidad reserva puesto	60.695	100.858	118.819	109.174	81.573
Interinidad proceso de selección	6.458	12.044	18.664	22.375	20.319
Total	809.139	1.309.021	1.803.547	1.993.221	1.992.744
Pro memoria:					
Número de ETT	*399*	*428*	*435*	*411*	*370*
Cesiones de trabajadores	*622.709*	*951.641*	*1.265.056*	*1.412.330*	*1.353.794*

*Datos provisionales.
Fuente: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales.*

[12] La información del *Boletín de Estadísticas Laborales,* del MTAS, referida a los contratos de puesta a disposición y a las cesiones de trabajadores a las empresas usuarias, procede de las relaciones de contratos de puesta a disposición que remiten mensualmente las ETT a la autoridad laboral. La información sobre cesiones de trabajadores recoge, para periodos mensuales, el número de trabajadores puestos a disposición de las empresas usuarias en el mes de referencia y, para periodos superiores a un mes, un acumulado de los correspondientes datos mensuales, contabilizándose tantas veces a un mismo trabajador como meses en los que haya sido cedido. Por ello, las cesiones de trabajadores no indican el total de contratos de trabajo ni el número total de trabajadores cedidos, pues un mismo trabajador puede ser cedido en sucesivas ocasiones para cubrir necesidades de un mismo o varios contratos de puesta a disposición celebrados entre empresa usuaria y ETT.

Para conocer el número de contratos de trabajo hay que consultar la estadística de los registrados por ETT en el INEM.

respecto al año anterior. Los contratos indefinidos a tiempo parcial que, entre 1998 y 1999 aumentaron un 34 por 100, también continuaron aumentando en el año 2000, si bien con un incremento menor (20 por 100). Casi una cuarta parte del total de los contratos indefinidos registrados (24 por 100), fueron a tiempo parcial.

Nuevo freno a las conversiones

El freno a las conversiones de contratos temporales hace que a pesar del buen comportamiento de la contratación indefinida al final del año no haya variado el total de contratos. De nuevo, como se observa sucede desde 1999, la reducción de potenciales destinatarios de conversiones sería la causa de este cambio en la anterior evolución, al agotarse las posibilidades de acogerse a la conversión por parte de nuevos contratados temporales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 63/1997 (disposición adicional primera) conforme a la cual, sólo podrían ser contratados quienes estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, o durante el transcurso del año siguiente, salvo que la negociación colectiva diera cobertura a nuevas conversiones (cuadro II-13).

La evolución de la contratación indefinida —ordinaria y de fomento del empleo indefinido— a partir del desarrollo legislativo del AIEE, muestra a mitad del periodo una cierta divergencia entre estas dos formas de contratación estable. A pesar de que el número de contratos de fomento de la contratación indefinida ha estado desde 1997 por encima del de contratos ordinarios y de que todavía en el año 2000 sigue siendo más elevada la cifra de contratos de fomento acogidos a los incentivos de la Ley 64/1997, desde 1999 el ritmo de crecimiento de estos últimos ha sido mayor (cuadro II-14). Una explicación se podría encontrar en la reducción de la bolsa de potenciales destinatarios de conversiones de contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo estable a lo largo del año, además del mayor ámbito subjetivo de aplicación de los incentivos a la contratación indefinida ordinaria, establecidos en los programas de fomento del empleo estable de 1999 y 2000[13].

[13] La disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y el artículo 28 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, contienen los programas de fomento del empleo para los años 1999 y 2000 respectivamente.

CUADRO II-13

CONTRATOS INDEFINIDOS: FOMENTO Y CONVERSIONES, 1999-2000

(Número total registrado y distribuciones por edad y sexo)

CONTRATOS REGISTRADOS

1999	Ambos sexos			Varones			Mujeres		
Edades (años)	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones
<30	7.514.521	283.572	219.737	4.327.780	171.850	125.295	3.186.741	111.722	94.442
30-45	4.207.438	10.843	157.634	2.497.743	6.236	100.762	1.709.695	4.607	56.872
>45	1.513.368	85.276	32.958	971.734	65.527	20.897	541.634	19.749	12.061
Total edades	13.235.327	379.691	410.329	7.797.257	243.613	246.954	5.438.070	136.078	163.375
2000	**Ambos sexos**			**Varones**			**Mujeres**		
Edades (años)	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones
<30	7.822.512	324.332	121.273	4.431.669	189.866	69.072	3.390.843	134.466	52.201
30-45	4.420.968	9.472	88.123	2.564.501	4.426	55.765	1.856.467	5.046	32.358
>45	1.585.439	87.922	10.230	987.788	65.446	6.443	597.651	22.476	3.787
Total edades	13.828.919	421.726	219.626	7.983.958	259.738	131.280	5.844.961	161.988	88.346

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

1999	Ambos sexos			Varones			Mujeres		
Edades (años)	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones
<30	56,8	74,7	53,6	55,5	70,5	50,7	58,6	82,1	57,8
30-45	31,8	2,9	38,4	32,0	2,6	40,8	31,4	3,4	34,8
>45	11,4	22,5	8,0	12,5	26,9	8,5	10,0	14,5	7,4
Total edades	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2000	**Ambos sexos**			**Varones**			**Mujeres**		
Edades (años)	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones
<30	56,6	76,9	55,2	55,5	73,1	52,6	58,0	83,0	59,1
30-45	31,9	2,3	40,1	32,1	1,7	42,5	31,8	3,1	36,6
>45	11,5	20,8	4,7	12,4	25,2	4,9	10,2	13,9	4,3
Total edades	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

1999	Ambos sexos			Varones			Mujeres		
Edades (años)	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones
<30	100,0	100,0	100,0	57,6	60,6	57,0	42,4	39,4	43,0
30-45	100,0	100,0	100,0	59,4	57,5	63,9	40,6	42,5	36,1
>45	100,0	100,0	100,0	64,2	76,8	63,4	35,8	23,2	36,6
Total edades	100,0	100,0	100,0	58,9	64,2	60,2	41,1	35,8	39,8
2000	**Ambos sexos**			**Varones**			**Mujeres**		
Edades (años)	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones	Total contratos	Ley 63/1997	Conversiones
<30	100,0	100,0	100,0	56,6	58,5	56,9	43,3	41,5	43,0
30-45	100,0	100,0	100,0	58,0	46,7	63,2	42,0	53,3	36,7
>45	100,0	100,0	100,0	62,3	74,4	62,9	37,7	25,6	37,0
Total edades	100,0	100,0	100,0	57,7	61,6	59,8	42,3	38,4	40,2

Fuente: INEM, *Estadística de Contratos Registrados.*

CUADRO II-14

CONTRATOS DE DURACIÓN INDEFINIDA POR MODALIDAD*, 1997-2000

(Totales anuales registrados)

Modalidad	1997	1998	1999	2000	Variación 97/98		Variación 98/99		Variación 99/00	
					Número	%	Número	%	Número	%
Indefinido ordinario	162.423	178.033	220.789	313.869	15.610	*9,6*	42.756	*19,4*	93.080	*42,2*
Indefinido L 63/1997	126.308	325.295	379.691	421.726	198.987	*157,5*	54.396	*14,3*	42.035	*11,0*
Tiempo parcial	123.178	147.410	197.607	237.741	24.232	*19,7*	50.197	*25,4*	40.134	*20,3*
Minusválidos	5.725	6.546	9.848	11.062	821	*14,3*	3.302	*33,5*	1.214	*12,3*
Total indefinidos nuevos	421.430	657.284	807.935	984.398	235.854	*56,0*	150.651	*18,6*	176.463	*21,8*
Conversiones	286.051	313.680	410.329	219.626	27.629	*9,7*	96.649	*23,6*	–190.703	*–46,4*
Total indefinidos	707.481	970.964	1.218.264	1.204.024	263.483	*37,2*	247.300	*20,3*	–14.240	*–1,2*

*Susceptible de celebrarse por tiempo indefinido.

Fuente: INEM, *Estadística de Contratos Registrados.*

La distribución por sexo de las distintas modalidades analizadas reproduce de alguna manera la estructura de la ocupación de hombres y mujeres. En torno al 60 por 100 de la contratación indefinida es masculina, peso que se mantiene tanto en las conversiones de temporales a indefinidos como en los contratos de fomento del empleo estable, mientras en los indefinidos ordinarios es incluso un poco mayor la proporción de varones (65 por 100). La presencia femenina es mayoritaria en la contratación interina (el 69 por 100 de los contratos se suscriben con mujeres) y también lo es la contratación a tiempo parcial, con el 63 por 100 de los contratos del año suscritos por mujeres (el 59 por 100 en el caso de contratos a tiempo parcial indefinidos). En el caso de los contratos formativos, se da la circunstancia de que casi se iguala la proporción de hombres y mujeres entre los contratados en prácticas, pero reproduciéndose en los contratos de formación la misma distribución por sexo del resto de la contratación de duración determinada e indefinida, con las excepciones vistas de los contratos a tiempo parcial y de interinidad, en los que es mayoritaria la presencia de las mujeres.

CUADRO II-15

CONTRATOS REGISTRADOS, POR DURACIÓN, 1997-2000

(Totales anuales registrados en el INEM por modalidad y porcentajes de cada duración sobre el total)

1997	Total	Duración determinada, en meses				Indeterminados	Indefinidos
		<=1	>1/<=3	>3/<=6	>6/>30		
Indefinido ordinario	162.423	—	—	—	—	—	100,0
Obra o servicio	2.766.097	5,8	2,1	1,9	1,2	89,0	—
Eventual circ. Prod.	3.466.336	64,0	21,1	13,6	1,3	0,0	—
Interinidad	533.321	30,1	8,9	2,4	0,6	58,0	—
Indefinido RDL 8/97	126.308	—	—	—	—	—	100,0
Tiempo parcial	1.983.029	30,9	18,6	15,7	3,3	25,3	6,2
Resto modalidades	*770.000*	*6,3*	*1,2*	*48,7*	*13,6*	*29,0*	*1,2*
Total contratos nuevos	9.807.514	32,6	12,4	12,5	2,6	35,6	4,3
Total contratos	10.093.565	31,7	12,0	12,1	2,6	34,6	7,0

1998	Total	Duración determinada, en meses				Indeterminados	Indefinidos
		<=1	>1/<=3	>3/<=6	>6/>30		
Indefinido ordinario	178.033	—	—	—	—	—	100,0
Obra o servicio	3.177.197	5,7	2,1	2,0	1,4	88,8	—
Eventual circ. Prod.	4.113.998	62,6	22,0	14,0	0,4	0,0	—
Interinidad	586.706	31,6	8,3	2,4	0,6	57,1	—
Indefinido RDL 8/97	325.925	—	—	—	—	—	100,0
Tiempo parcial	2.367.093	33,0	19,4	12,6	2,7	26,1	6,2
Resto modalidades	*601.277*	*9,2*	*1,9*	*37,2*	*10,5*	*40,1*	*1,1*
Total contratos nuevos	11.349.599	33,3	13,2	10,4	1,9	35,4	5,8
Total contratos	11.663.279	32,4	12,8	10,1	2,0	34,4	8,3

1999	Total	Duración determinada, en meses				Indeterminados	Indefinidos
		<=1	>1/<=3	>3/<=6	>6/>30		
Indefinido ordinario	220.789	—	—	—	—	—	100,0
Obra o servicio	3.878.145	5,4	2,3	2,1	1,3	88,8	—
Eventual circ. Prod.	4.547.402	56,4	25,0	16,8	1,9	0,0	—
Interinidad	709.332	31,2	8,2	3,0	0,6	56,9	—
Indefinido RDL 8/97	379.691	—	—	—	—	—	100,0
Tiempo parcial	2.412.823	25,9	20,9	13,6	3,0	28,4	8,2
Resto modalidades	*676.816*	*10,8*	*2,4*	*34,6*	*11,3*	*39,6*	*1,5*
Total contratos nuevos	12.824.998	28,8	14,1	11,2	2,3	37,4	6,3
Total contratos	13.235.327	27,9	13,6	10,8	2,1	36,3	9,2

2000	Total	Duración determinada, en meses				Indeterminados	Indefinidos
		<=1	>1/<=3	>3/<=6	>6/>30		
Indefinido ordinario	313.869	—	—	—	—	—	100
Obra o servicio	4.133.772	5,23	2,30	2,38	1,41	88,68	—
Eventual circ. Prod.	4.830.731	53,46	25,77	18,60	2,16	—	—
Interinidad	715.132	29,76	8,66	3,43	0,77	57,38	—
Indefinido L 63/97	421.726	—	—	—	—	—	100
Tiempo parcial	2.512.104	22,19	21,4	13,64	3,24	30,06	9,46
Resto modalidades	*681.959*	*12,48*	*2,11*	*32,54*	*11,17*	*39,43*	*2,27*
Total contratos nuevos	13.609.293	26,85	14,36	11,65	2,39	37,47	7,27
Total contratos	13.828.919	26,43	14,13	11,47	2,36	36,88	8,74

Fuente: INEM, *Estadística de Contratos Registrados.*

2.2.2. **Fin de la vigencia del AIEE**

El año 2000 es el último completo de vigencia del Acuerdo Interconfederal sobre Estabilidad en el Empleo (AIEE) de 1997. Con el objeto de concluir un nuevo Acuerdo, durante el último trimestre del año las organizaciones sindicales y empresariales trataron de negociar la sustitución del AIEE antes de que finalizara el periodo de vigencia pactada de cuatro años y con ello la cobertura legal hasta el 17 de mayo de 2001 para la celebración de contratos acogidos a la normativa aprobada en 1997.

En el tramo inicial y, aún a mitad del periodo de su vigencia, las valoraciones de ambas partes sobre los efectos del AIEE alcanzaron un cierto grado de coincidencia, en particular respecto a su positiva influencia en el fomento de la contratación indefinida, conforme resultaba del análisis de la evolución de los contratos celebrados. De ello se daba cuenta en la Memoria del año 1999. Sin embargo, al final del periodo, ha faltado un balance conjunto del AIEE, probablemente por la proximidad de las negociaciones para nuevos acuerdos que han obligado a los agentes sociales a una toma de postura clara en las diversas materias sometidas a negociación, en un contexto económico, social y político distinto del que existía en abril de 1997 cuando se firmó el AIEE.

Balance del AIEE

Recordando lo que han sido los consensos en torno a los efectos favorables del Acuerdo de 1997, en lo que a la evolución del empleo y la contratación estable se refiere, a lo largo de su periodo de vigencia, habría que resaltar de manera resumida los siguientes:

— Crecimiento significativo del empleo en general y en particular del empleo indefinido a través de la conversión de contratos temporales en indefinidos, de la suscripción de contratos indefinidos ordinarios y de la nueva figura de fomento del empleo estable de colectivos específicos: jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años, parados de larga duración y minusválidos.

— Relativo descenso de la tasa de temporalidad anterior al AIEE desde que, en el segundo trimestre de 1997, se introdujeron las nuevas modalidades de contratación indefinidas antes citadas. Además, la reducción general de la tasa de tem-

poralidad podría haber sido mayor si no se considerara el sector público en el que la temporalidad del periodo aumentó, por diversas razones. También podría haber sido mayor el descenso de la tasa de temporalidad durante la vigencia del AIEE si no hubiera coincidido con un fuerte crecimiento del empleo en la construcción, donde el peso del empleo temporal ha podido neutralizar, en parte, un crecimiento igualmente importante del empleo indefinido.

— El crecimiento del empleo indefinido y el relativo descenso de la tasa de temporalidad no han sido suficientes para atajar el problema de la temporalidad excesiva que hace que la tasa en España siga siendo muy superior a la media europea.

— La conclusión admitida por ambas partes es que el crecimiento del empleo indefinido no ha producido una reducción significativa del empleo temporal, si bien el sector privado se ha comportado mejor que el sector público.

— A pesar de que en ambos casos el AIEE ha coadyuvado a cierta mejoría en relación con la estabilidad de la contratación de mujeres y hombres, persiste una notable segmentación de género y edad en el mercado de trabajo, una de cuyas manifestaciones son las mayores tasas de temporalidad de mujeres y jóvenes.

— Escasa implantación y normalización de la contratación a tiempo parcial, con tasas de empleo inferiores a la media europea y una fuerte segmentación de género en el colectivo de trabajadores contratados bajo esta modalidad.

— Se mantienen dificultades para reducir las personas afectadas por la rotación de los contratos temporales.

Más allá de las anteriores conclusiones que resumen a grandes rasgos las coincidencias básicas de los firmantes del AIEE, la interpretación que hacen las organizaciones empresariales y los sindicatos difiere en aspectos sustanciales, cara a un posible balance conjunto al final del periodo. Por ello durante la negociación no fue posible un diagnóstico conjunto sobre las causas de la temporalidad, los niveles deseables y posibles de estabilidad de la contratación y cómo alcanzarlos, qué nuevas medidas se precisan para

generar más empleo, qué fórmulas de contratación favorecen la estabilidad y los derechos laborales de los trabajadores y las necesarias dosis de flexibilidad para adaptar la prestación laboral a las demandas económicas y productivas de las empresas en el contexto de competitividad en el que desarrollan su actividad.

En un contexto económico, social y político distinto al que se daba en 1997 las diferencias entre las partes han impedido que el diálogo social concluyera con un acuerdo que hubiera sido deseable pero que no se pudo alcanzar a la vista de las posiciones mantenidas en aspectos relevantes de la negociación.

Las pretensiones de los sindicatos mayoritarios, tal como fueron resumidas por éstos en documentos elaborados y dados a conocer en el transcurso de las negociaciones para la renovación del AIEE, se orientaban a «resolver el problema de la precariedad en el empleo, medida desde la temporalidad del mismo»[14], y así, según sus propias palabras, se orientaban a «actuar sobre la regulación de la contratación temporal», manteniendo que «debe haber una clara distinción entre la contratación indefinida y aquella que sólo debe existir si responde a causas objetivas que de forma excepcional la justifiquen».

Propuestas sindicales

A partir de estas premisas, las propuestas concretas de reforma legal que los sindicatos hicieron referidas a la contratación temporal fueron, de manera resumida, las siguientes:

- Reforzar la causalidad de la contratación temporal y a tal fin mejorar desde la ley algunos aspectos como la exigencia de forma escrita para todos los contratos.

- Reforzar la causa en el contrato de obra para actividades objetivas e intrínsecamente temporales aunque de duración incierta, de manera que sólo se utilice para cubrir actividades ocasionales, accidentales y no relevantes en el ciclo productivo normal de la empresa. Aunque se admite que sea la negociación colectiva quien determine las actividades, se pretende que sea la norma legal la que precise que la causa y duración de estos contratos no puede vincularse a un contrato mercantil.

[14] *Diálogo Social entre CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. Cuadro comparativo de propuestas sindicales y empresariales,* 22 de febrero de 2001, Documento conjunto CCOO-UGT.

- Se pide que el contrato eventual se desvincule en su literalidad del concepto de estacionalidad para que no se confunda con el fijo discontinuo y se utilice en lugar de éste.

- El contrato interino debiera dar lugar a un contrato indefinido si no hay reincorporación del trabajador sustituido, siempre que éste fuera indefinido.

- Establecer limitaciones temporales en los contratos de duración determinada, tales como declarar la fijeza del trabajador contratado en la misma empresa o grupo de empresas por dos o más contratos (obra o eventual) durante más de 20 meses en un periodo de 24 meses; o cuando se realicen contratos para cubrir un puesto de trabajo que en los 24 meses anteriores ya hubiera estado cubierto durante 14 o más meses por dos o más contratos de cualquier modalidad (obra o eventual) o a través de una Empresa de Trabajo Temporal y con el mismo o diferente trabajador; así como declarar fijo-discontinuo al contratado estacional durante dos campañas sucesivas.

- Para disuadir de la contratación temporal proponen incrementar el coste de la cotización empresarial en los contratos de obra y eventuales y a la vez reducirla en los indefinidos.

- Incluir de forma expresa en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores el principio de no discriminación de los contratados temporales, así como el derecho de información sobre los puestos vacantes y el derecho de los contratados a ocuparlos.

- En relación con las contratas y subcontratas se propone una nueva definición de responsabilidades solidarias para el conjunto de empresas, revisar requisitos de solvencia, mecanismos de subrogación, mejorar los derechos sindicales de información, etc.

Con respecto a la contratación indefinida, las propuestas que hacían eran:

- Mantener la vigencia del contrato indefinido de fomento del empleo durante un nuevo periodo de cuatro años.

- Ampliar los colectivos de personas desempleadas susceptibles de ser contratadas con esta modalidad, de manera que dicho contrato se podría realizar con jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, mayores de 45 años, desempleados con seis meses de antigüedad como demandantes de empleo, discapacitados y quienes tuvieran un contrato temporal en la misma empresa.

- Incentivar la contratación indefinida con una reducción selectiva de la cotización empresarial, no sólo para las nuevas contrataciones, sino también para aquellas empresas que mantienen plantillas estables.

- Revisar el actual sistema de bonificaciones para hacerlo más eficaz con los colectivos de personas desempleadas que tienen mayores dificultades para encontrar empleo.

- Potenciar la conversión de contratos temporales en indefinidos a través de diferentes medidas económicas y de agilización y perfeccionamiento de los mecanismos de conversión y asimismo mantener las limitaciones que para suscribir el contrato de fomento de la contratación indefinida se establecieron en el momento de su inicial configuración legal (apartado 5 de la disposición adicional primera de la Ley 63/1997).

Propuestas de las organizaciones empresariales

Por su parte, las organizaciones empresariales abordan el problema de la temporalidad desde la consideración de que la mejor forma de corregir los abusos en la utilización de contratos temporales no es la penalización de esta forma de contratación, que en muchos sectores es la única apropiada a las necesidades productivas en el caso español, con diferencias respecto a otras economías, sino que debe actuarse estimulando la contratación de carácter indefinido. A tal fin la batería de propuestas que para renovar el AIEE propusieron las organizaciones empresariales en su último documento puede resumirse en las siguientes:

- Reducir la duración máxima de los contratos eventuales a doce meses e introducir una cláusula expresa de prohibición de la discriminación entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los fijos que desempeñen la misma función, así

como facilitar información sobre vacantes de puestos permanentes disponibles en la empresa[15].

- También proponían establecer límites al encadenamiento de contratos temporales abusivos o en fraude de ley.

- Con relación a la contratación indefinida la propuesta de las organizaciones CEOE y CEPYME vinculaba las medidas de fomento del empleo estable con la generalización de un coste menor de despido, extendiendo a todos los nuevos contratos indefinidos la indemnización (33 días de salario por año y máximo de 24 mensualidades) prevista en el AIEE para determinados colectivos, al considerar que con ello se fomentaría la suscripción de contratos de duración indefinida. La propuesta, referida sólo a las nuevas contrataciones, respetaba la establecida para los contratos anteriores en vigor.

- Alternativamente, proponer la ampliación de colectivos a los que se les pudiera contratar mediante la fórmula de contrato de fomento de empleo estable de forma que incluyera a personas de 16 a 33 años, mayores de 45 años, desempleados de más de seis meses, mujeres y discapacitados.

- Proponían, asimismo, restaurar la posibilidad de realizar conversiones de contratos de duración determinada en contratos indefinidos (contratos de fomento de la contratación indefinida), mediante acuerdo entre el empresario y el trabajador sin que la negociación colectiva tenga que prever tal posibilidad.

En relación con el despido, las organizaciones empresariales también proponían que desde la fecha del despido el trabajador percibiera la prestación o subsidio por desempleo sin que procediera abono de los salarios de tramitación del artículo 56.1 ET.

Mención aparte debe hacerse de la contratación a tiempo parcial, materia en la que el desencuentro entre las partes no ha dejado de existir desde que en 1998 se aprobara la reforma de su anterior regulación legal, como consecuencia del Acuerdo suscrito entre el Gobierno y los sindicatos, con la oposición de CEOE y CEPYME.

[15] Las propuestas patronales y las sindicales en este punto reflejan la interpretación de algunos de los contenidos de la Directiva CEE del Consejo 1999/70, de 28 de junio, sobre el trabajo de duración determinada, aunque hay matices distintos en cada una de las propuestas.

La postura sindical con relación a la regulación legal nacida del Acuerdo ha sido la de defender su validez, estimando que el reducido porcentaje de contratación a tiempo parcial que frente a otros países se registra en España no es consecuencia de su regulación, sino del mayor peso de la temporalidad. No obstante, mostraron su disposición a negociar aspectos de la regulación contenida en el Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre, aunque con condiciones, como que se respetase la delimitación clara entre tiempo parcial y tiempo completo, definido como volumen máximo (en porcentaje) de jornada de tiempo parcial respecto a la jornada a tiempo completo; la seguridad del trabajador ante el volumen de jornada y la distribución que tendrá que realizar así como mantener la protección social del tiempo parcial. También demandaban una regulación específica para el contrato fijo discontinuo que impidiese que se pueda utilizar la modalidad de tiempo parcial temporal (o el contrato eventual) para atender trabajos que son estacionales y, a su juicio, deberían ser considerados fijos discontinuos.

Como se recordará, la postura de las organizaciones empresariales en relación con la regulación del trabajo a tiempo parcial después de la reforma de 1998 ha venido siendo contraria a la misma por la rigidez que en su opinión imponía a las posibilidades de utilización por el empresario de la modalidad, debido al desarrollo pormenorizado y complejo de la disponibilidad horaria mediante el mecanismo del pacto de horas complementarias. También a la limitación que imponía el porcentaje fijo del 77 por 100 de la jornada ordinaria y la excesiva concreción de su distribución que se exigía al suscribir el contrato. De ahí que sus propuestas hayan estado dirigidas, desde que se firmó el Acuerdo bipartito sobre Tiempo Parcial, a facilitar a las empresas mayores márgenes de decisión sobre la duración y distribución de la jornada a tiempo parcial, para lo que consideraban que la reforma debía suprimir el límite máximo del 77 por 100 de la jornada ordinaria y volver a la norma anterior a 1998, entendiendo celebrado el contrato a tiempo parcial cuando el número de horas al día, semana, mes o año fuera simplemente inferior a la jornada establecida en convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal; permitiendo a su vez una distribución flexible a través de la fijación de un volumen total anual de horas con la posibilidad de realizar un número suplementario de hasta un 20 por 100 sobre la totalidad de la jornada pactada y

posibilitar la realización de horas extraordinarias. Además, pedían la no obligatoriedad del modelo oficial de contrato como elemento esencial para su validez y, asimismo, separar el contrato fijo discontinuo del contrato a tiempo parcial, remitiendo su regulación a la negociación colectiva.

La reforma del mercado de trabajo aprobada por el Gobierno

La falta de acuerdo en aspectos sustanciales para renegociar las materias que sobre contratación contemplaba el AIEE, concluye con la aprobación por el Gobierno del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo[16], que, tras su convalidación por el Parlamento, es tramitado como Proyecto de Ley.

El Real Decreto-Ley mantiene el contrato para el fomento de la contratación indefinida, para el que prevé una indemnización por despido objetivo improcedente de 33 días, extendiéndolo a los siguientes colectivos de trabajadores desempleados: jóvenes de 16 a 30 años, mujeres en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino, mayores de 45 años, parados inscritos, al menos, durante seis meses como demandantes de empleo, y minusválidos. Asimismo, incluye a los trabajadores que vean convertido su contrato temporal en indefinido.

La ampliación del ámbito subjetivo de la modalidad de fomento de la contratación indefinida deja fuera de la nueva fórmula de contratación con menor coste de extinción a los trabajadores varones de 31 a 44 años y a las mujeres de esa misma edad cuando se vayan a emplear en ocupaciones no incluidas en la lista establecida en la OM de 16 de septiembre de 1998, siempre que en ambos casos no lleven inscritos seis meses como demandantes de empleo o no tengan un contrato temporal (tabla II-1).

Otra reforma del contrato a tiempo parcial

La norma establece un nuevo Programa de Fomento de Empleo para el año 2001, que sustituye al que había sido prorrogado en la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. El nuevo programa, aplicable desde el día 4 de marzo, fija nuevos incentivos para la contratación indefinida de: mujeres desempleadas entre 16 y 45 años; mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino; des-

[16] Publicado en el *BOE* de 3 de marzo de 2001.

empleados inscritos ininterrumpidamente en la Oficina de empleo durante seis o más meses; desempleados mayores de 45 años y hasta los 55; desempleados mayores de 55 años y hasta los 65; perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo a los que reste un año o más de percepción en el momento de la contratación; perceptores del subsidio por desempleo a favor de los trabajadores incluidos en el REASS; desempleados perceptores de la «renta activa de inserción»; mujeres inscritas durante un periodo de 12 meses o más en la Oficina de empleo que sean contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha de alumbramiento; trabajadores desempleados en situación de exclusión social. De igual forma, se incentiva la transformación de contratos temporales en indefinidos (tabla II-2).

La regulación del contrato a tiempo parcial es objeto de una importante reforma, de la que cabe destacar la supresión del límite máximo del 77 por 100 de la jornada laboral, que vuelve a ser establecido en un número de horas inferior al día, semana, mes o año inferior a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, o en su caso a la del convenio o la máxima legal. Se suprime la exigencia de concreción mensual, semanal y diaria, incluidos los días de trabajo, manteniendo el cómputo de duración sobre el total de las horas contratadas al día, a la semana, al mes o al año, independientemente de su distribución. Se simplifica el régimen de las horas complementarias. Se mantiene el límite de ampliación hasta el 15 por 100 anterior pero, por convenio, puede incrementarse hasta el 60 por 100, con el tope en todo caso de la duración máxima de la jornada ordinaria y con la prohibición de horas extraordinarias. La modalidad de contrato de los trabajadores fijos discontinuos se desvincula de la contratación a tiempo parcial, salvo cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa, es decir trabajos discontinuos pero que se repitan en fechas ciertas, en que les será aplicable la regulación del contrato a tiempo parcial indefinido.

La reforma introduce otras novedades en la contratación temporal. Así se reduce de 13,5 a 12 meses la duración máxima del contrato eventual. También se atribuye a la negociación colectiva nuevas funciones, como la de fijar la cuantía de la indemnización a percibir por el trabajador a la finalización del contrato de duración determinada o temporal, por expiración del tiempo convenido o finalización de la obra o servicio (exceptuándose los contratos formativos, los de

interinidad y los de inserción). En defecto de dicha fijación por la negociación colectiva, la norma determina que su cuantía será equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de servicio.

El Real Decreto-Ley ha incorporado una previsión o llamada a la negociación colectiva —a los convenios sectoriales estatales o sectoriales de ámbito inferior— para establecer requisitos adicionales dirigidos a prevenir los abusos en la utilización sucesiva de la contratación temporal. Asimismo, de acuerdo con las previsiones de la Directiva 1999/70/CE, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre trabajo de duración determinada, se reconoce explícitamente el principio de equiparación de derechos entre trabajadores con contratos de duración determinada y temporales y trabajadores con contrato indefinido, si bien salvando el criterio de *pro rata temporis* o de proporcionalidad de acuerdo con su duración o naturaleza. En el mismo sentido, se ha incluido la obligación de la empresa de informar a los trabajadores temporales acerca de la existencia de vacantes en la empresa o centro de trabajo con el fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceso a puestos permanentes que a los demás trabajadores.

Cambios legales en la subcontratación de obras y servicios

Constituye una novedad, la que opera sobre el artículo 42 del ET, cuya redacción originaria se había respetado en anteriores reformas. Los principales cambios de la nueva regulación afectan al ámbito de las responsabilidades de empresas principales y subcontratistas, así como a los derechos de información de los trabajadores y sus representantes en unas y otras. Por lo que a la responsabilidad del empresario principal se refiere, se ha suprimido la anterior referencia al límite de la responsabilidad solidaria de dicho empresario principal «por lo que correspondería si se hubiese tratado de su personal fijo en la misma categoría o puestos de trabajo». Además, se ha cambiado el título del precepto, que ya no es el de «Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata de obras», sino «Subcontratación de obras y servicios», y se han ampliado las demás referencias del artículo con menciones expresas a los contratistas y no sólo a los subcontratistas.

Las obligaciones de información de las empresas principales, contratistas y subcontratistas se amplían, en lo que constituye quizá uno de los aspectos más relevantes de la reforma del artículo 42 ET. Los tres nuevos apartados que se incorporan al precepto esta-

blecen la obligación de los contratistas y subcontratistas de informar a sus trabajadores sobre la identidad de la empresa para la que prestan servicios en cada momento, y también han de informar a los representantes legales de sus trabajadores del objeto de la contrata, su duración, lugar de ejecución, número de trabajadores ocupados y medidas previstas para la coordinación de actividades de cara a la prevención de riesgos laborales. Por su parte, la empresa principal deberá facilitar a los representantes legales de sus trabajadores esa misma información respecto de la empresa contratista o subcontratista. Además, estas últimas deberán informar de la identidad de la principal a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Otras modificaciones en materia de contratos son las que afectan al contrato de formación o a la creación de una nueva modalidad: el contrato de inserción. Respecto al primero, el contrato de formación, se suprime el límite de edad para contratar bajo esta modalidad contractual (trabajadores mayores de 16 años y menores de 21 años), en el caso de los siguientes colectivos: desempleados minusválidos, extranjeros durante los dos primeros años de vigencia de su permiso de trabajo, desempleados que lleven más de tres años sin actividad laboral, desempleados en situación de exclusión social y desempleados que se incorporen a programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo. En cuanto al contrato de inserción, se trata de una nueva modalidad de contratación temporal por la que la Administración Pública contrata a un demandante de empleo, para realizar una obra o servicio de interés general o social, como medio de adquisición de experiencia laboral y mejora de su ocupabilidad.

En orden a la extinción del contrato destaca la inclusión en el artículo 52 ET de un nuevo supuesto de extinción por causas objetivas, por el que los contratos indefinidos, cuyo objeto sea la ejecución de planes y programas públicos sin dotación económica estable, podrán ser extinguidos cuando la consignación presupuestaria sea insuficiente para el mantenimiento del puesto de trabajo.

También en la perspectiva de la extinción de la relación laboral, habría que señalar que el Real Decreto-Ley deroga la disposición adicional décima del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, en la que, con relación al límite máximo de edad para trabajar, se preveía la utilización de la jubilación forzosa y retirada de los trabajadores de mayor edad del mercado de trabajo, como instrumento de política de empleo.

TABLA II-1

REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO

(RD-L 5/2001, de 2 de marzo de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad)

CONTRATO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA (Disposición adicional 1.ª RD 5/2001)	
Regulación anterior	**Modificaciones introducidas**
Disposición adicional 1.ª Ley 63/1997 (se deroga expresamente). Se puede utilizar esta modalidad contractual de carácter indefinido durante los 4 años siguientes a la entrada en vigor del RDL 8/1997 de 16 de mayo. Sujetos desempleados susceptibles de contratación: A) 1. jóvenes 18-29 años, ambos inclusive; 2. parados de larga duración que lleven al menos 1 año inscritos como demandantes de empleo; 3. mayores de 45 años; 4. minusválidos. B) trabajadores que en la fecha de celebración del nuevo contrato estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos existentes en la fecha de entrada en vigor del RDL 8/1997 de 16 de mayo o que se suscriba hasta transcurrido un año de la misma. Transcurrido dicho plazo de un año, la conversión de estos contratos en el contrato para el fomento de la contratación indefinida se articulará a través de la negociación colectiva.	No se limita temporalmente, de momento la utilización del Contrato para el fomento de la contratación indefinida. A) 1. jóvenes 16-30, ambos inclusive; 2. parados de larga duración que lleven al menos 6 meses inscritos como demandantes de empleo; 3. se mantiene igual; 4. se mantiene igual; 5. mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino. B) trabajadores que en la fecha de celebración del nuevo contrato de fomento estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2003. Se suprime la posibilidad de que se regule la conversión de contratos temporales en contrato para el fomento del empleo mediante la negociación colectiva.
FORMA / RÉGIMEN JURÍDICO / INDEMNIZACIÓN / EXTINCIÓN OBJETIVA DECLARADA IMPROCEDENTE	
Forma escrita y en modelo oficial. Régimen jurídico del contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley y en los convenios colectivos, salvo la extinción del contrato. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada improcedente, la cuantía de la indemnización será de 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a 1 año, hasta un máximo de 24 mensualidades.	Se mantiene la indemnización de 33 días por año con tope 24 mensualidades.
LÍMITES AL ACCESO / MODALIDAD CONTRACTUAL	
No podrá concertar el contrato la empresa que en los 12 meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinción por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a las extinciones con posterioridad a la entrada en vigor del RDL 8/1997 y para la cobertura de aquellos puestos de la misma categoría o grupo que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo. Esta limitación no será de aplicación en despidos colectivos, cuando la contratación haya sido acordada en periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.	Se mantiene, pero limitando la contratación cuando se hubieran realizado extinciones por causas objetivas declaradas improcedentes en los últimos 6 meses. Se mantiene la referencia a los puestos de la misma categoría o grupo que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo. Se elimina referencia a RDL 8/1997.

TABLA II-1 *(Continuación)*

EVALUACIÓN EFECTOS DEL CONTRATO COMO MEDIDA DE FOMENTO DE EMPLEO	
Regulación anterior	**Modificaciones introducidas**
Evaluación en el plazo de 4 años a fin de proponer en su caso su eventual continuidad. Evaluará Gobierno junto a sindicatos y empresarios.	En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo y del análisis del funcionamiento del mercado de trabajo, el Gobierno evaluará a fin de determinar la necesidad de mantener y/o proponer modificaciones.
CONTRATO A TIEMPO PARCIAL (ART. 12 ET) DEFINICIÓN LEGAL (ART. 12.1)	
Regulación anterior	**Modificaciones introducidas**
Es aquel concertado para la prestación de servicios durante un número de horas al día, semana o mes inferior al 77% de la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo de aplicación o en su defecto jornada máxima ordinaria.	Prestación de servicios durante un número de horas al día, semana, mes o año inferior a la jornada de un «trabajador a tiempo completo comparable», es decir, trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro, con el mismo tipo de contrato y que realice trabajo idéntico o similar. Si no hubiera, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en convenio colectivo de aplicación o la jornada máxima legal. Se elimina la letra b, párrafo 3 del artículo 12 (ET). *El contrato por tiempo indefinido de fijos discontinuos se regula ahora en el artículo 15.8 ET *(vid infra)*. Sólo si los trabajos discontinuos se repiten en fechas ciertas será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido (art. 12 ET).
FORMA (ART. 12.4.A)	
En el contrato deberá figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, la distribución horaria y su concreción mensual semanal y diaria, incluida la determinación de los días en los que el trabajador deberá prestar servicios. En los contratos para trabajos fijos y discontinuos de inicio y duración incierta, dichas menciones serán sustituidas por una indicación sobre la duración estimada de la actividad, así como sobre la forma y orden de llamamiento que establezca el convenio colectivo aplicable, haciendo constar igualmente, de manera orientativa, la jornada laboral estimada y su distribución horaria.	En el contrato deberá figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. Se eliminan referencias al contrato para trabajos fijos y discontinuos de inicio y duración incierta. Desaparece la obligación de que conste la distribución horaria y su concreción mensual, semanal y diaria incluidas la determinación de los días en los que deberá prestar servicios.
HORAS COMPLEMENTARIAS (ART. 12.5)	
Son aquéllas cuya posibilidad de realización ha sido acordada como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato. El empresario sólo podrá exigir su realización cuando así lo hubiera pactado expresamente con el trabajador, en el momento de la celebración del contrato o con posterioridad. Constituirá en todo caso un pacto específico (por escrito) respecto al contrato.	Se eliminan referencias al contrato para trabajos fijos y discontinuos de inicio y duración incierta

TABLA II-1 *(Continuación)*

HORAS COMPLEMENTARIAS (ART. 12.5)	
Regulación anterior	**Modificaciones introducidas**
Sólo se podrán concertar en contratos indefinidos. El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por denuncia del trabajador una vez cumplido el año de su celebración (denuncia con antelación mínima 3 meses).	Se suprime la posibilidad de denuncia por parte del trabajador del pacto de horas complementarias.
El número de horas complementarias no podrá exceder del 15% de las horas ordinarias objeto del contrato. Los convenios colectivos de ámbito sectorial (en su defecto de ámbito inferior) podrán establecer otro porcentaje máximo que en ningún caso podrá exceder del 30% de las horas ordinarias.	Se eleva al 60% el porcentaje.
La distribución y forma de realización de las horas complementarias deberá atenerse a lo establecido en los convenios colectivos sectoriales (o ámbito inferior). En ausencia de regulación en convenio: 1. el total de horas anuales pactadas se distribuirán proporcionalmente en cada uno de los trimestres (si no se presta servicios todo el año, el total de horas se distribuyen en tantas fracciones como periodos completos de 3 meses. 2. si en un trimestre no se hubieran realizado todas las horas correspondientes, hasta un 30% de las mismas podrán ser transferidas por el empresario al trimestre siguiente. El trabajador deberá conocer el día y hora de realización de las horas complementarias, con un preaviso de 7 días.	Se eliminan las reglas establecidas en ausencia de convenio. Ahora, la distribución y forma de realización de las horas complementarias pactadas deberá atenerse a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación y en el pacto de horas complementarias.
La realización de horas complementarias deberá respetar los límites en materia de jornada. Se abonarán como horas ordinarias y se computaran como tales a efectos de bases de cotización de la Seguridad Social para prestaciones.	
Posibilidad de modificación de la jornada ordinaria pactada inicialmente en el contrato mediante la consolidación en la misma de una parta de las horas complementarias realizadas en unos periodos de tiempo determinados, de acuerdo con una serie de reglas relativas a la consolidación.	Se elimina la posibilidad de consolidación, y por tanto las reglas anteriores para dicha consolidación.
CONTRATACIÓN TEMPORAL O DE DURACIÓN DETERMINADA	
Regulación anterior	**Modificaciones introducidas**
CONTRATO EVENTUAL DURACIÓN Y PRÓRROGA ART. 15.1.B ET (ART. 8.2 RD 2720/1998)	
Período máximo de referencia es de 18 meses y la duración del contrato no puede superar 3/4 partes del mismo, es decir, duración máxima hasta 13 meses y medio.	Período máximo de referencia sigue siendo de 18 meses y la duración del contrato no puede superar 3/4 partes del mismo, pero se introduce como límite que la duración del contrato no puede superar como máximo 12 meses.
Los contratos de duración determinada que tengan establecida legal o convencionalmente una duración máxima y que se hubiesen concertado por una duración inferior a la misma, se entenderán prorrogados tácitamente, hasta la correspondiente duración máxima cuando no hubiese mediado denuncia o prórroga expresa antes de su vencimiento y el trabajador continúe prestando servicios.	En el propio artículo 15.1 b se regula la prórroga del contrato eventual: una única prórroga en el caso de contratos concertados por duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, sin que la duración total del contrato (se reitera) pueda exceder dicha duración máxima (12 meses).

TABLA II-1 *(Continuación)*

CONTRATO PARA LA FORMACIÓN (ART. 11.2.A ET)	
Regulación anterior	**Modificaciones introducidas**
Límite máximo de edad (16-21) no será de aplicación cuando se contrata a minusválidos.	Límite máximo de edad (16-21) no será de aplicación cuando se contrata a: desempleados minusválidos, extranjeros durante los dos primeros años de vigencia de permiso de trabajo, desempleados con más de 3 años sin actividad laboral, desempleados en situación de exclusión social y desempleados que se incorporen a escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.
CONTRATO PUESTA A DISPOSICIÓN (ART. 8 C LEY 14/1994)	
No podrán celebrarse: c) cuando en los 12 meses inmediatamente anteriores a la contratación la empresa haya amortizado puestos de trabajo (despido improcedente y arts. 50, 51, 52 c ET) excepto FM o cuando en los 18 meses anteriores a dicha contratación los puestos hubieran estado cubiertos por tiempo superior a 13 meses y medio.	Se sustituye 13 meses y medio por 12 meses, en consonancia con las modificaciones en la duración del contrato eventual.
NUEVO CONTRATO DE INSERCIÓN (ART. 15.1 D ET)	
Cuando se contrate a un demandante de empleo por parte de una Administración Pública al objeto de realizar una obra o servicio de interés general o social, dentro del ámbito de sus competencias, como medio de adquisición de experiencia laboral y mejora de la ocupabilidad del desempleado participante. Los trabajadores que sean parte en estos contratos no podrán repetir su participación hasta transcurridos 3 años de contratos desde la finalización del anterior contrato de esta naturaleza. Los servicios públicos de empleo competentes financiarán, a través de las partidas de gastos que correspondan, los costes laborales de estas contrataciones, tomando como referencia la base mínima del grupo de cotización al que corresponda la categoría profesional desempeñada por el trabajador. La incorporación de desempleados a esta modalidad contractual estará de acuerdo con las prioridades del Estado para cumplir las directrices de la estrategia europea por el empleo.	
NUEVAS GARANTÍAS PARA LOS TRABAJADORES TEMPORALES (ART. 15.5, 6 Y 7 ET)	
Artículo 15.5 ET: establece que en convenio (sectorial estatal, en su defecto sectorial de ámbito inferior) se podrán establecer requisitos adicionales dirigidos a prevenir los abusos en la utilización excesiva de la contratación temporal. Artículo 15.6 ET: equiparación de derechos de trabajadores temporales e indefinidos (sin perjuicio de las particularidades específicas en materia de extinción del contrato y en relación a los contratos formativos). Especial mención a la antigüedad del trabajador que ha de computarse según los mismos criterios para todos los trabajadores con independencia de su modalidad contractual. Artículo 15.7 ET: obligación del empresario de informar sobre puestos vacantes permanentes a fin de garantizar a los temporales (incluidos formativos) las mismas oportunidades de acceso. Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso de los trabajadores temporales a la formación profesional continua, a fin de mejorar su cualificación y favorecer su progresión y movilidad profesionales.	
EXTINCIÓN DEL CONTRATO (ART. 49.1C ET)	
Indemnización por fin de contrato temporal (excepto contratos de interinidad, de inserción y formativos) cuya cuantía será determinada en la negociación colectiva o en la normativa específica que le sea de aplicación. En cuyo defecto será equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 8 días de salario por año de servicio. Esta indemnización no será de aplicación a los contratos celebrados con anterioridad a su entrada en vigor. Disposición transitoria 2.ª RD 5/2001.	

TABLA II-1 *(Continuación)*

OTROS	
Regulación anterior	**Modificaciones introducidas**
SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS O SERVICIOS	
Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de Seguridad Social. Al efecto recabarán por escrito con identificación de la empresa afectada certificación negativa por descubiertos a la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de 30 días improrrogables. Transcurrido dicho plazo quedará exonerado de responsabilidad el empresario solicitante. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social y durante el año siguiente a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el periodo de vigencia de la contrata, con el límite de lo que correspondería si se hubiese tratado de su personal fijo en la misma categoría o puestos de trabajo. No habrá responsabilidad por los actos del contratista cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no contrate su realización con razón de una actividad empresarial.	Se mantiene regulación anterior pero se anuncia reglamento de desarrollo para regular las actuaciones de la TGSS relativas a las certificaciones por descubiertos. Se aclara que la responsabilidad alcanza también a los contratistas. Se elimina la referencia al límite de la responsabilidad solidaria, suprimiendo del texto: «por lo que correspondería si se hubiese tratado de su personal fijo en la misma categoría o puestos de trabajo».
El comité de empresa recibirá información trimestralmente sobre los supuestos de subcontratación.	Nuevo artículo 42.3 ET: los trabajadores del contratista o subcontratista deberán ser informados por escrito por su empresario de la identidad de la empresa principal para la cual estén prestando servicios en cada momento. Dicha información deberá facilitarse antes del inicio de la respectiva prestación de servicios e incluirá el nombre o razón social del empresario principal, su domicilio social y su número de identificación. Asimismo el contratista o subcontratista deberán informar de la identidad de la empresa principal a la TGSS en los términos que reglamentariamente se determinen. Nuevo artículo 42.4 ET: sin perjuicio de lo previsto en 64.1.1 ET, cuando la empresa concluya un contrato de prestación de obras o servicios con una empresa contratista o subcontratista deberá informar a los representantes legales de sus trabajadores sobre los siguientes extremos: a) nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa contratista o subcontratista; b) objeto y duración de la contrata;

TABLA II-1 *(Continuación)*

OTROS	
Regulación anterior	**Modificaciones introducidas**
SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS O SERVICIOS	
	c) lugar de ejecución de la contrata; d) en su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal; e) medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Nuevo artículo 42.5 ET: la empresa contratista o subcontratista deberá informar igualmente a los representantes legales de sus trabajadores, antes del inicio de la ejecución de la contrata sobre los mismos extremos.
NUEVA CAUSA DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS (ART. 52 ET)	
En el caso de los contratos por tiempo indefinido concertados para la ejecución de planes y programas públicos (contratos de inserción) sin dotación económica estable y financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales (será causa de extinción) la insuficiencia de la correspondiente consignación presupuestaria para el mantenimiento del puesto de trabajo de que se trate.	

TABLA II-2

INCENTIVOS 2000 (1 ENERO-31 DICIEMBRE 2000)*
(Contratación indefinida tiempo completo o parcial incluidos fijos discontinuos)
Ley 55/1999, de 29 de diciembre (*BOE* 30-12-1999)

Colectivos	Bonificación (cuota empresarial SS por CC)
Desempleados inscritos durante un período mínimo de 12 meses en la Oficina de Empleo.	50% (1.er año) 45% (2.º año) 60% (1.er año) 55 % (2.º año)
Jóvenes menores de 30 años. Si son mujeres contratadas a tiempo completo.	20% (24 meses) 25% (24 meses)
Mayores de 45 años. Si son mujeres contratadas a tiempo completo.	50% (1.er año) 45% (resto vigencia) 60% (1.er año) 55% (resto vigencia)
Mujeres en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino (OM 16 sept. 98). Mujeres en profesiones u ocupaciones con menor índice desempleo femenino (OM 16 sept. 98) y además inscritas más de 12 meses como demandantes empleo o mayores de 45 años	35% (1.er año) 30% (2.º año) 60% (1.er año) 55% (2.º año)
Perceptores subsidio desempleo agrario (incluidos en colectivos anteriores).	90% (1.er año) 85% (2.º año)
Contratación que realice un trabajador autónomo de: desempleado mayor de 45 años desempleado inscrito 12 meses oficina de empleo desempleado < 30 años y mujeres en una profesión u ocupación con menor índice de empleo femenino (no incluidas en el supuesto de > 45 años).	60% (1.er año) 55% (2.º año) 35% (1.er año) 30% (2.º año)
Transformación cotrato de aprendizaje, prácticas, formación y relevo a tiempo parcial en indefinidos a tiempo completo. Transformación contratos en prácticas, y de relevo celebrados a tiempo parcial en contratos indefinidos a tiempo parcial (incluidos fijos-discontinuos).	20% (24 meses) 20% (24 meses)
Desempleados en situación de exclusión social (contratación indefinida o temporal, a tiempo completo o parcial).	65% (24 meses)

INCENTIVOS 2001 (4 MARZO-31 DICIEMBRE 2001)
(Contratación indefinida tiempo completo o parcial RDL 5/2001, de 2 de marzo
(*BOE* 3-3-2001)

Colectivos	Bonificación (cuota empresarial SS por CC)
Desempleados inscritos 6 meses en oficina de empleo. Si son mujeres contratadas a tiempo completo.	20% (24 meses) 30% (24 meses)
Se eliminan ayudas a jóvenes menores de 30 años. Mujeres desempleadas 16-45 años.	25% (24 meses)
Mayores de 45 y hasta 55 años. Si son mujeres contratadas a tiempo completo.	50% (1.er año) 45% (resto v) 60% (1.er año) 55% (resto v)
Mayores de 55 y hasta 65 años. Si son mujeres contratadas a tiempo completo.	55% (1.er año) 50% (resto v) 65% (1.er año) 60% (resto v)
Se mantiene igual: mujeres en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino (OM 16 sept. 98). Mujeres en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino y además inscritas más de 6 meses como demandantes de empleo y/o > 45 años.	35% (24 meses) 70% (1.er año) 60% (2.º año)
Perceptores prestación/ subsidio desempleo agrario (Sin limitaciones en cuanto a pertenencia o no colectivos anteriores)	90% (1.er año) 85% (2.º año)
Perceptores prestaciones/subsidio desempleo a los que les reste un año o más de percepción en el momento de la contratación. Si son mujeres contratadas a tiempo completo.	50% (1.er año) 45% (2.º año) 60% (1.er año) 55% (2.º año)
Perceptores renta activa de inserción. Si son mujeres contratadas a tiempo completo.	65% (24 meses) 75% (24 meses)
Mujeres desempleadas inscritas en la Oficina de empleo 12 meses o más que sean contratadas en los 24 meses a la fecha de alumbramiento.	100% (12 meses)
Las contrataciones que realice un trabajador autónomo (indefinidas a tiempo completo o parcial) de alguno de los colectivos anteriores. Si se contrata a una mujer.	Incremento 5% bonificaciones anteriores Incremento 10% bonificaciones anteriores
Transformaciones de contratos temporales celebrados con anterioridad a 4-3-2001 en indefinidos, así como los formativos de relevo y sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la forma de su celebración. Transformaciones prácticas y relevo celebrados inicialmente a tiempo parcial en a tiempo completo.	 25% (24 meses)
Se mantiene igual.	

* Prorrogados inicialmente hasta el 17 de mayo de 2001 por la disposición adicional 31 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre (*BOE* 30-12-2000), y luego sustituidos, a partir del 4 de marzo de 2001 por la entrada en vigor del RDL 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas urgentes para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

2.2.3. **Extinciones del contrato y despidos**

El objeto de este apartado es el análisis de los asuntos sometidos al sistema jurídico institucional de control de las decisiones extintivas del contrato de trabajo: Administraciones laborales competentes para la regulación de empleo, Servicios Administrativos de conciliación dependientes de las distintas Administraciones Públicas Autonómicas, y órganos de la jurisdicción social.

Diferencias en los indicadores estadísticos

Con carácter previo, debe señalarse, como ya se indicó en otras ediciones de esta Memoria, que se continúan observando distintas carencias en los indicadores estadísticos sobre despidos, tales como el número de trabajadores afectados en los procedimientos de conciliación y en los asuntos judiciales, la modalidad de despido frente a la que se ejercitan las acciones legalmente previstas, las opciones indemnización/readmisión efectuadas, y un completo tratamiento de los sectores afectados por las extinciones de contratos.

Incremento de un 15 por 100 en los expedientes de regulación de empleo

Con relación a la primera de las vías señaladas, en el año 2000 se registraron 2.384 expedientes autorizados de regulación de empleo para la extinción de contratos[17], lo que refleja un incremento del 15 puntos con relación a los registrados en 1999. Este incremento, no obstante, no desvirtúa la tónica que esta vía viene registrando desde el año 1994, en el que se redujeron un 40 por 100 los expedientes autorizados, pasando a 8.197 frente a los 13.611 de 1993; esta reducción se acentuó a partir del año 1995 y siguientes, en los que la regulación de empleo se ha situado en una media de 2.400 expedientes anuales. Por otra parte, de los expedientes registrados en el año 2000, un 93 por 100 de los casos, esto es 2.220 asuntos, fueron pactados entre la empresa y los representantes de los trabajadores, siendo 164 los expedientes en que este pacto no fue posible.

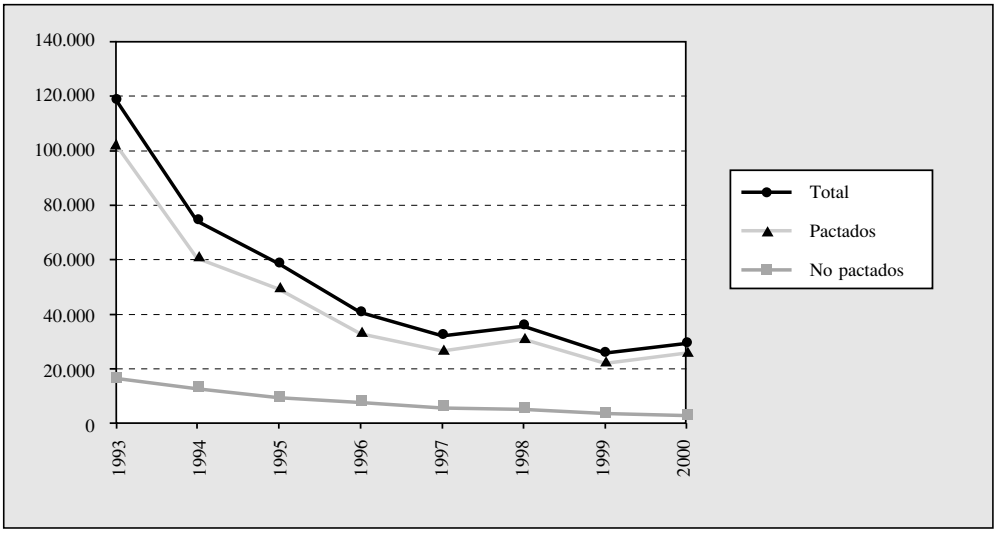
El número de trabajadores afectados por expedientes autorizados en 2000 (gráfico II-14) ascendió a 29.128, lo que representa 3.477 trabajadores más respecto al anterior año. De forma más concreta, la cifra anteriormente señalada comprende a 25.975 trabajadores en expedientes pactados, y 3.153 en no pactados, debiéndose

[17] La regulación de empleo comprende tres tipos distintos de medidas: extinciones del contrato de trabajo, suspensiones temporales del contrato y reducciones de jornada. En cuanto a estas últimas en el año 2000 se han autorizado 1.554 expedientes de suspensión y 60 de reducción, lo que ha afectado a 28.414 y 1.282 trabajadores, respectivamente.

GRÁFICO II-14

TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE EXTINCIÓN EN EXPEDIENTES AUTORIZADOS, 1993-2000

(Totales anuales)



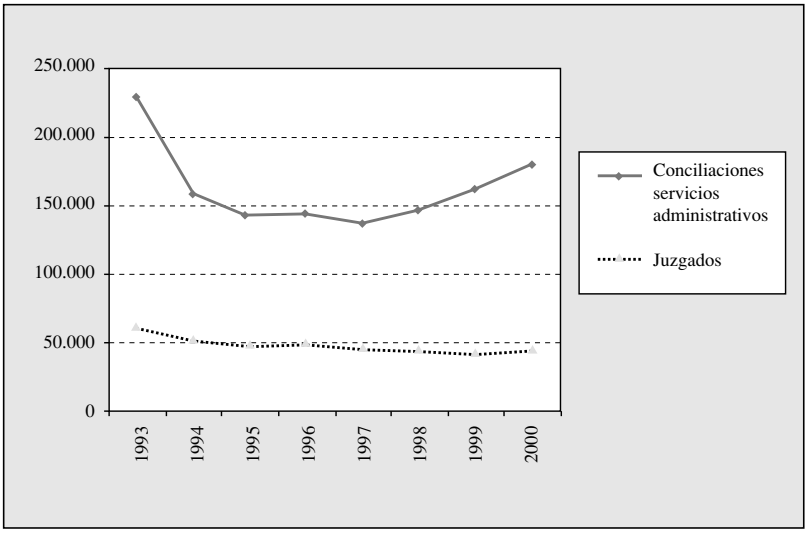
Fuente: MTAS, *Estadística de Regulación de Empleo*.

destacar que el incremento producido en este año se ha referido al primer grupo de trabajadores, puesto que el número de trabajadores afectados en expedientes no pactados se ha reducido en un 15 por 100 con relación a 1999.

Preeminencia de despidos conciliados en los servicios de mediación, arbitraje y conciliación

Tal y como se observa en el gráfico II-15, el mayor número de asuntos por despido se han ventilado vía conciliación en los servicios administrativos de mediación, arbitraje y conciliación. Esta tendencia se mantiene en el año 2000, con la tramitación de 242.698 conciliaciones individuales, frente a las 224.230 registradas en 1999. En todo caso, conviene precisar que el principal aumento del número de despidos tramitados por esta vía se registra en los que han concluido con acuerdo o avenencia, circunstancia que en 2000 se ha dado en un 74 por 100 de los casos, es decir en 180.295 conciliaciones, frente a las 162.079 conciliaciones con avenencia obtenidas en 1999, lo que permite confirmar el crecimiento progresivo de los despidos conciliados en los servicios de mediación, arbitraje y conciliación. En cuanto a las otras posibles formas de concluir el trámite en esta vía, se han terminado 26.089 conciliaciones sin

GRÁFICO II-15
ASUNTOS POR DESPIDO: CONCILIACIONES Y JUZGADOS DE LO SOCIAL, 1993-2000
(Totales anuales en cada vía)



Fuente: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

avenencia, 27.072 conciliaciones intentadas sin efecto y 9.242 conciliaciones terminadas por otras causas, cifras todas estas similares a las producidas en anteriores ejercicios.

La cantidad media abonada por cada conciliación concluida con avenencia, lo que significa un acuerdo indemnizatorio, asciende en este periodo a un importe medio de 2.167.000 pesetas, cifra algo inferior a la media de 1999, situada en 2.210.000 pesetas, y que continúa el ligero descenso que se viene produciendo en los últimos tres años.

En cuanto a los sectores afectados, se reproduce la tónica de la última década, donde se observa que el mayor número de expedientes tramitados afecta al sector servicios, seguido de la industria, la construcción y, finalmente, del sector agrario. En este sentido, baste señalar que un 61 por 100 de las conciliaciones, esto es 147.707 asuntos, se produjeron en el sector servicios.

Ligero incremento de los despidos tramitados en los Juzgados de lo Social

Los asuntos por despido resueltos ante los Juzgados de lo Social presentan un leve aumento de un 4,2 por 100, de forma que frente a los 43.372 despidos tramitados en 1999, en 2000 se tramitaron 45.233 despidos por la jurisdicción social.

En cuanto a las resoluciones obtenidas, 15.776 asuntos, esto es un 35 por 100 de los procedimientos, han concluido con sentencia favorable total o parcialmente al trabajador, seguido de 11.622 asuntos, representativos de un 26 por 100 de los procedimientos, que concluyeron por conciliación ante el Magistrado, 6.260 asuntos, esto es un 14 por 100, que finalizó con sentencia desfavorable al trabajador, y 8.350 asuntos, un 18 por 100, en que el actor desistió de la acción emprendida.

Las indemnizaciones abonadas por despido en la vía judicial[18] experimentan en este ejercicio un ligero incremento en relación al año 1999. De este modo, en el año 2000, la media indemnizatoria por despido se situaba en un importe de 1.148.000 pesetas para los asuntos resueltos por sentencia, frente a 1.165.000 pesetas de media en 1999. Con respecto a los despidos resueltos en conciliación ante el Magistrado, la cantidad media abonada ascendió en el año 2000 a 1.005.000 pesetas, cuando en 1999 se situaba en 995.000 pesetas.

La extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

La reforma del despido objetivo llevada a cabo por la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, trajo consigo una nueva redacción del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores respecto a las causas organizativas, tecnológicas y de producción, mediante su vinculación a la superación de las dificultades que impidiesen el buen funcionamiento de la empresa por su posición competitiva o por exigencias de la demanda a través de una mejor organización de los recursos.

[18] A este respecto, conviene tener en cuenta las observaciones apuntadas en la Memoria del CES de 1999, debiendo tomarse con cautela las medias indemnizatorias ante la insuficiente información que se puede obtener de las estadísticas laborales.

Sin apenas cambios en la jurisprudencia social sobre el despido objetivo

La evolución posterior de la jurisprudencia social en la resolución de procedimientos por despido objetivo demuestra, no obstante, que, salvo determinadas precisiones, permanece la doctrina unificada del Tribunal Supremo anterior a la reforma legislativa de 1997, plasmada en las SSTS de 24 de abril y 14 de junio de 1996. En su virtud, se mantienen los requisitos de contribución de la rescisión del contrato a la mejoría de la empresa, con relación a las causas económicas, y funcionalidad o instrumentalidad (criterio de razonabilidad) entre la extinción o extinciones de contratos de trabajo y la superación de la situación desfavorable, respecto a las causas técnicas, organizativas o de producción.

Respecto a las causas económicas, los Tribunales han aclarado dos aspectos de cierta relevancia: por un lado, al afirmar que las exigencias causales son las mismas en los despidos colectivos, plurales o individuales (SSTS de 25 de noviembre y 14 de diciembre de 1999, —Ar. 8745 y 9814, respectivamente—); y por otro, que las pérdidas económicas han de afectar a la empresa en su conjunto o globalidad, de forma que no se permite su disgregación en secciones o centros separados (STS de 14 de mayo de 1998 —Ar. 4650—).

Los cambios jurisprudenciales más recientes se presentan fundamentalmente en las causas técnicas, organizativas o de producción. Por un lado, se aprecia la exigencia de una conexión directa y estricta entre la extinción del contrato y la superación de las dificultades que impidan, en el momento de la amortización del puesto de trabajo, una mayor eficiencia de la empresa (SSTS de 30 de septiembre de 1998 —Ar. 7586— y de 6 de abril de 2000 —Ar. 3285—; y STSJ de Navarra de 22 de enero de 1999), de esta forma se declara improcedente el despido objetivo en el que no se prueba la relación entre la medida extintiva y la amenaza de viabilidad futura de la empresa. Por otro lado, una importante novedad reside en la admisión de la práctica de la descentralización productiva, subcontratación o externalización de servicios (STS de 4 de octubre de 2000 —Ar. 8291—), como causa que justifica la amortización de puestos de trabajo, con base en la adecuada organización de los recursos.

En otro orden de cosas, la jurisprudencia social viene clarificando otros aspectos relevantes, relacionados con el procedimiento de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas.

En este sentido, los tribunales han entendido que el despido objetivo es el único medio legalmente viable para extinguir los contratos de trabajo cuando se produce el cierre de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea inferior a cinco (SSTS de 8 de marzo y 25 de noviembre de 1999 —Ar. 2117 y 8745, respectivamente—).

En cuanto a la selección de los trabajadores afectados se entiende que corresponde, como principio general, a la empresa, a reserva de lo que se disponga en la negociación colectiva, y sin perjuicio de su revisión judicial (STS de 19 enero de 1998 —Ar. 996—).

Asimismo, han matizado que la prioridad de permanencia en la empresa de los representantes de los trabajadores constituye una preferencia y no un derecho absoluto (STSJ de Extremadura de 3 de febrero de 2000).

Por último, en cuanto al contenido del escrito de comunicación del despido y la puesta a disposición de la indemnización, se exige, por una parte, que de su tenor literal se permita el examen y la valoración adecuada de la causa de la extinción del contrato (STSJ de Cantabria de 20 de mayo de 1999) y, por otra, se entiende que existen situaciones que pueden imposibilitar la puesta a disposición del trabajador de la indemnización legal en el momento de la comunicación, en cuyo caso se exigiría una justificación suficiente para su no abono en dicho momento (STS de 17 de julio de 1998 —Ar. 7949—).

3. POLÍTICAS DE EMPLEO

3.1. Marco europeo

Las directrices de empleo para el año 2000[19] son la tercera versión anual desde que la Cumbre extraordinaria sobre el empleo, celebrada en Luxemburgo en noviembre de 1997, llevara a la práctica las nuevas disposiciones del Título sobre el empleo del Tratado de Amsterdam. Desde 1999, la Comisión está oficialmente obligada a

[19] Las Directrices para el año 2000 se aprobaron mediante Decisión del Consejo de 13 de marzo de 2000 (DO L 72, de 21 de marzo de 2000), conforme a las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de los días 10 y 11 de diciembre de 1999.

presentar una propuesta de directrices para el empleo, y los Estados miembros tienen que tenerlas en cuenta al formular sus políticas de empleo, debiendo informar sobre su aplicación. Para el año 2000 se ha seguido manteniendo la estructura de los cuatro pilares, consistentes en 1) mejorar la capacidad de inserción profesional, 2) desarrollar el espíritu de empresa, 3) fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas y 4) reforzar la política de igualdad de oportunidades. La Comisión Europea no propuso para el año 2000 nuevas directrices, sino una serie de modificaciones y aclaraciones en relación con las directrices de 1999, de acuerdo con las observaciones realizadas por los Estados miembros e interlocutores sociales[20].

Nuevas prioridades en las directrices de empleo para el año 2000

Lo que sí se ha hecho ha sido incorporar nuevas prioridades destinadas a fomentar la acción local para el empleo, reconociendo explícitamente el papel de las autoridades locales y regionales y el de los servicios de empleo locales en la creación de empleo, ayudando a potenciar la capacidad de inserción profesional y mejorando el acceso a los servicios de empleo y a la sociedad de la información. La Estrategia Europea de Empleo sigue apoyándose en los esfuerzos nacionales, pero sin desconocer que cada vez es más necesario favorecer la emersión de las oportunidades que a nivel local existen para fomentar el empleo. De ahí que las directrices para el año 2000 reforzaran las que reconocen explícitamente el papel que desempeñan los agentes locales en el fomento del empleo (directriz 12), cuyo potencial, a juicio de la Comisión[21], no se ha plasmado todavía en una realidad tangible.

Se ha seguido manifestando en la directriz 4 la necesidad de revisar y, en su caso, reestructurar los sistemas de prestaciones y de fiscalidad, a fin de desarrollar políticas de prolongación de la vida activa con vistas a mantener a los trabajadores de edad dentro de la mano de obra. La mayoría de los Estados miembros han empezado a aplicar, o tienen previsto introducir en breve plazo, medidas para conseguir que las personas de más edad permanezcan más

[20] Propuesta de directrices para las políticas de empleo en los Estados miembros en el año 2000, COM (99) 441, de 8 de septiembre de 1999.

[21] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre la Actuación local a favor del empleo [COM (2000) 196 final, de 7 de abril de 2000)].

tiempo activas. Una parte de estas medidas pretende incidir sobre la demanda de estos trabajadores y se encamina a subvencionar su contratación[22].

Necesidad de avanzar en el acceso a las nuevas tecnologías

El acceso a los conocimientos de la sociedad de la información es otra de las prioridades de la política de empleo. En las directrices para el año 2000 se añade una recomendación específica sobre la necesidad de desarrollar los conocimientos informáticos, de equipar a las escuelas con material informático y de facilitar el acceso de los estudiantes a Internet antes del año 2002, a fin de facilitar la transición de la escuela a la vida laboral (directriz 8). Este nuevo planteamiento coincide con el adoptado en la Comunicación de la Comisión sobre las oportunidades de empleo en la Sociedad de la Información[23], y que fue reiterado por las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa (días 23 y 24 de marzo de 2000), que instó a conectar todas las escuelas de la Unión a Internet antes de 2001, mencionándose objetivos relativos a las nuevas cualificaciones en materia de tecnologías de información y conocimiento[24]. Por ello, los Planes Nacionales de Acción para el año 2000 muestran en todos los pilares y directrices que los Estados miembros son cada vez más conscientes de la necesidad de dotar, no sólo a los jóvenes, sino también a su mano de obra existente y potencial, de competencias básicas y nuevas aptitudes, en tecnologías de información y conocimiento, tanto en la escuela como en el mundo del trabajo, constituyendo un objetivo de primer orden en todos los Estados miembros.

Un año más las directrices para el empleo han seguido haciendo hincapié en la relación entre el espíritu de empresa y la crea-

[22] La línea iniciada en el año 2000 respecto a los trabajadores de más edad se ha confirmado en el año 2001. Además, para este año la directriz sobre los trabajadores de más edad (futura directriz 3) ya no se circunscribe al aspecto de bonificación fiscal, sino que se ha ampliado a un conjunto más amplio de políticas en apoyo de una prolongación de la vida activa. La Agenda Social Europea para los años 2001-2005, aprobada en el Consejo Europeo de Niza (días 7-9 de diciembre de 2000), propone prolongar la vida laboral a través de jubilaciones graduales para aquellos que deseen permanecer en el mercado laboral.

[23] *Oportunidades de Empleo en la Sociedad de Información. Explotar el potencial de revolución de la información*, COM (98) 590.

[24] Este objetivo de mejorar la educación y la formación permanente, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, también se ha manifestado en el Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000, en relación con la Agenda Social Europea.

ción de puestos de trabajo. Los principales éxitos alcanzados por este pilar de las directrices de empleo (Pilar 2) son, según la Comisión Europea[25], el acuerdo cada vez mayor de los Estados miembros sobre la necesidad de simplificar los trámites administrativos que deben soportar las empresas, la importancia concedida al fomento del acceso a la financiación, la enseñanza de aptitudes inherentes al espíritu de empresa, su fomento entre las mujeres mediante programas específicos, y la importancia de crear un entorno favorable al desarrollo de empleo en el sector servicios. Entre las deficiencias más notables, señalar, por ejemplo, que se ha aprovechado poco el potencial de empleo en nuevos sectores y que los impuestos se han reducido en general lentamente y de forma desigual entre los Estados miembros.

Se ha aprovechado poco el potencial de empleo en nuevos sectores

En las directrices de 1999 aparecía la idea de aprovechar las nuevas posibilidades para la creación de empleo, que se introdujo en la directriz 13, en virtud de la cual se instaba a los Estados miembros a desarrollar un marco de condiciones para aprovechar plenamente el potencial del empleo que ofrecía el sector de los servicios y, en particular, el sector de la sociedad de la información y el de las nuevas tecnologías medioambientales. Esta directriz, de nuevo, se reproduce en el año 2000, incidiéndose en la necesidad de aprovechar las nuevas oportunidades de creación de puestos de trabajo en estos sectores, puesto que, según la Comisión, ninguno de los Estados miembros había cumplido adecuadamente en 1999[26]. Sin embargo, en el año 2000 tampoco lo han hecho, a juicio de la Comisión. Ésta ha considerado que los Planes Nacionales de Acción de 2000 han seguido sin prestar mucha atención al aprovechamiento del empleo potencial en el sector medioambiental, y los Estados que lo han hecho, entre los que se incluye España, sólo dedican unas pocas líneas al tema. Por último, las acciones realizadas en el marco de esta misma directriz 13 para examinar posibilidades de creación de empleo de la economía social son decepcionantes, pues se ha respondido insuficientemente, salvo en algunos países, como España, Portugal o Bélgica.

[25] Informe Conjunto sobre el Empleo de 2000, Comisión Europea, Bruselas, a 6 de septiembre de 2000, COM (2000) 551 final.

[26] Recomendación de la Comisión relativa a Recomendaciones del Consejo sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros [COM (99) 445, 8-9-99)].

En cuanto a la necesidad de adaptar el régimen fiscal para hacerlo más favorable al empleo, desaparece en el año 2000 la antigua directriz 15, que señalaba que cada Estado miembro estudiaría, sin obligación, la conveniencia de reducir el porcentaje del IVA en los servicios de gran intensidad de mano de obra en los que no incide la competencia transfronteriza.

El Pilar 3 sobre adaptabilidad insta a los Gobiernos e interlocutores sociales a realizar acciones concretas a fin de modernizar la organización de trabajo y apoyar la adaptabilidad de las empresas, incluida la formación y educación permanente, así como a favorecer la inversión en recursos humanos y fomentar formas más flexibles de trabajo. En el año 2000, teniendo en cuenta la voluntad de los interlocutores sociales de participar en un proceso conjunto de modernización de la organización de trabajo, se adapta el contenido de la anterior directriz 16, que ha pasado a ser la directriz 15, presentándose nuevos aspectos para ser abordados, como la formación y la reconversión, la introducción de las nuevas tecnologías o las nuevas formas de trabajo.

La igualdad de oportunidades (Pilar 4), tras las novedades incluidas en las directrices de 1999, pasa a tener un enfoque horizontal que significa que ha de impregnar el conjunto de las políticas de empleo[27], por lo que desde entonces constituye un nuevo y fundamental elemento de las Directrices para el Empleo[28]. En el año 2000 se han mantenido los mismos objetivos y directrices, si bien se ha realizado una aclaración a la directriz 22, explicando de manera más precisa el objetivo que recomienda facilitar la reincorporación al mercado de trabajo después de una ausencia (directriz 21 para el año 2000). Se trata de poner de manifiesto que estas personas pueden experimentar dificultades a la hora de acceder a actividades de formación, por el hecho de que sus cualificaciones han podido quedar obsoletas.

[27] Se trata de la aplicación más exhaustiva en el marco de las directrices para el empleo del enfoque de transversalidad que se adoptó por la Comisión en 1996 [Comunicación de la Comisión de 21 de febrero de 1996, «Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de políticas y acciones comunitarias», COM (96) 67 final].

[28] En las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se singulariza como ámbito de especial atención en la reforma del mercado de trabajo *(Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Helsinki, 10 y 11 de diciembre de 1999).*

Se refuerza la igualdad de oportunidades

Puede afirmarse, además, que en el año 2000 se ha reforzado la política comunitaria de igualdad de oportunidades al haberse aprobado un nuevo programa de acción comunitario para el periodo 2001-2005[29]. En esta línea, el Consejo Europeo de Estocolmo de los días 23 y 24 de marzo de 2001 acordaba establecer para enero de 2005 unos objetivos intermedios para la tasa de empleo femenina en toda la Unión del 57 por 100 para las mujeres, de los que España se encuentra lejos, ya que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2000, la tasa de actividad femenina de las españolas es del 39,92 por 100.

En relación con esta misma cuestión, puede decirse que, en comparación con 1998 y 1999, los Estados miembros han tenido más adecuadamente en cuenta la integración de la igualdad entre hombres y mujeres en sus Planes de Empleo de 2000, al disponer de más estadísticas e indicadores que permiten el seguimiento de la igualdad de oportunidades, y algunos Estados miembros han adoptado métodos específicos para evaluar la incidencia de las nuevas iniciativas en función del sexo, aunque, tal y como señala la Comisión Europea, todavía hay lagunas y posibilidades de mejoras. Así, por ejemplo, algunos Planes no son demasiado precisos sobre la importancia y la parte del presupuesto relacionado con la política de empleo que se dedica a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la integración de esta dimensión en las demás políticas. Con respecto al objetivo de garantizar el acceso de las mujeres a las medidas activas de mercado de trabajo, proporcionalmente a su tasa de desempleo, no todos los Estados miembros facilitan cifras que permitan realizar este tipo de evaluación.

En conjunto, la ausencia más acusada de la integración de la igualdad entre hombres y mujeres en los tres primeros pilares afecta a las directrices 4 (revisar y reestructurar los regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad) y 14 (reducir la presión fiscal sobre el trabajo y los costes no salariales, en particular el trabajo poco cualificado y poco retribuido), aunque hay ya algunas inicia-

[29] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones «Hacia una Estrategia Marco Comunitaria sobre Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005)», y Propuesta de Decisión del Consejo sobre el programa relativo a la estrategia marco comunitaria sobre igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) [COM (2000) 335 final, Bruselas, 7 de junio de 2000].

tivas por parte de algunos Estados miembros que, por ejemplo, están adaptando sus regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad para favorecer un mejor acceso a los servicios de cuidado de los niños.

Necesidad de equilibrar los cuatro pilares

En el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2000 se señala que la aplicación de los cuatro pilares sigue siendo desigual, enmarcándose la mayoría de los progresos conseguidos en el pilar relativo a la empleabilidad, por lo que la aplicación equilibrada de los cuatro pilares requiere el compromiso pleno de los Gobiernos con una política general y coordinada a favor del crecimiento y el empleo. La percepción del proceso de Luxemburgo por la población en general sigue siendo limitada, por lo que una acción concreta de los Gobiernos y una participación más directa de las autoridades regionales y locales, apoyadas, en su caso, mediante iniciativas acordadas con la Comisión, contribuiría a sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos sobre problemas del empleo.

El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 invitó a la Comisión y a los Estados miembros a realizar un examen, a medio camino de la estrategia de empleo que el Consejo de Luxemburgo puso en marcha, para dar un nuevo ímpetu a este proceso enriqueciendo las directrices con objetivos más concretos. Allí se concluyó que era necesario abordar cuatro ámbitos esenciales: mejorar la empleabilidad y reducir las deficiencias de cualificaciones, dar mayor importancia a la formación continua, aumentar el empleo en los servicios, y fomentar todos los aspectos de la igualdad de oportunidades. Se reconoció el papel fundamental y general de la sociedad del aprendizaje para conseguir el objetivo del pleno empleo mediante el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento, dándose nuevo énfasis a las directrices para el empleo de 2000 de desarrollo de las iniciativas de formación permanente, en relación con la directriz 6, que hace hincapié en la necesidad de incrementar las posibilidades del aprendizaje a lo largo de toda la vida, cuestión sobre la que la actividad política de los Estados miembros sigue siendo bastante modesta[30]. A partir de la Cumbre de Lisboa los Estados miembros deben atender a la voluntad política reforzada

[30] Fuente: Recomendación relativa a las Recomendaciones del Consejo sobre la Aplicación de las Políticas de Empleo de los Estados Miembros, presentada por la Comisión, Bruselas, 6 de septiembre de 2000, COM (2000) 549 final.

por conseguir el pleno empleo, mediante esfuerzos constantes para fomentar el conocimiento, la innovación y la cohesión social, haciendo que el fomento del aprendizaje permanente, la inclusión social y la igualdad de las personas con respecto al acceso del mercado de trabajo sea una de las metas principales de la política europea. Las nuevas prioridades acordadas en la Cumbre de Lisboa van a impregnar las directrices para el año 2001[31].

3.2. Plan Nacional de Empleo y Pactos y Medidas de Empleo en las Comunidades Autónomas

3.2.1. **Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España 2000**

El Plan de Acción para el Empleo del año 2000, aprobado por el Consejo de Ministros el día 28 de abril de 2000, es la puesta en práctica de la Estrategia Europea de Empleo por tercer año consecutivo. El Plan aprobado en el año 2000 incluye el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en 1999, así como las nuevas políticas y las valoraciones de la contribución realizada por los interlocutores sociales a la consecución de sus objetivos y directrices.

3.2.1.1. *Pilar 1: mejora de la capacidad de inserción profesional*

En el año 2000 se han hecho esfuerzos para aumentar el número de medidas individualizadas de acción, dirigidas a los desem-

[31] Decisión del Consejo de 19 de enero de 2001 relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2001 (2001/63/CE). La reforma económica y la cohesión social como parte de la sociedad basada en el conocimiento, prosiguiendo los esfuerzos para crear las condiciones para el pleno empleo, son los objetivos que subyacen en las directrices para el año 2001. Además, se subraya la importancia del papel de los interlocutores sociales en la aplicación y supervisión de las directrices que dependen de ellos, así como la necesidad de formación permanente, que tiene una importancia fundamental en los pilares de empleabilidad y adaptabilidad. Para el año 2001 las directrices para la formación permanente dentro del pilar de empleabilidad (directrices 4 a 6) han sido agrupadas para una mejor articulación del enfoque integrado de aprendizaje permanente, mientras que los cometidos respectivos de los interlocutores sociales y los Estados miembros se han precisado dentro del pilar de adaptabilidad (directrices 14 a 16).

pleados que más dificultades encuentran en el mercado de trabajo. Aunque el número de acciones de inserción se ha mantenido prácticamente idéntico, el coste de las acciones[32] ha aumentado en un 21,7 por 100 respecto al coste de las acciones del año 1999[33].

El número total de acciones de inserción realizadas en el año ha sido 1.427.550 acciones, lo que supone un 93 por 100 de las acciones comprometidas inicialmente. Del total de las acciones, el 71,6 por 100 son preventivas (es decir, realizadas antes de llevar 6 o 12 meses de inscripción como desempleados, según sean menores o mayores de 25 años, respectivamente), y el 28,4 por 100 restante corresponde a acciones efectuadas con parados de larga duración (cuadro II-16). En estas acciones han participado 929.820 personas, de las cuales 241.023 eran desempleados de corta duración menores de 25 años, 444.241 eran desempleados de corta duración pero mayores de 25 años, y 244.556 parados de larga duración. Del total de acciones realizadas, el 57,6 por 100 las han realizado mujeres, a las que inicialmente se les dirigía el 61,1 por 100 de las mismas, frente al 38,9 por 100 destinadas a los hombres.

Además, según la evaluación de las medidas de inserción del año 2000, se observa que el 86 por 100 de las mismas se ha realizado en los programas de formación ocupacional, empleo de interés social y orientación profesional, todos ellos acciones de mejora de la capacidad de ocupación.

Así pues, los principales beneficiarios de las acciones son los menores de 25 años que llevan seis meses desempleados, los mayores de esa edad con un año sin trabajo, los parados de larga duración con cargas familiares y las mujeres.

En el marco del Pilar 1 dirigido a mejorar la capacidad de inserción profesional, en respuesta a la directriz 4, que sugiere que se incentive la incorporación a la vida activa, el PNAE 2000 señala que es necesario dotar a los desempleados perceptores de pres-

[32] Fuente: *Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2001*.

[33] En 1999 el coste de las acciones fue de 315.223 millones de pesetas, aunque el inicialmente previsto fue 351.301 millones de pesetas, y en el año 2000 las acciones de inserción realizadas han tenido un coste de casi 383.787 millones de pesetas, aunque el presupuesto previsto inicialmente fue de 417.866 millones de pesetas.

CUADRO II-16

ACCIONES DE INSERCIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2000

(Según duración del desempleo, edad y género del perceptor)

Acciones	< 25 años menos de 6 meses en paro		> 25 años menos de 12 meses en paro		Parados mayor duración (1)		Total		
Mejora de la capacidad de inserción profesional									
Total nacional	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**	**Total**
Formación de desempleados	58.517	69.306	79.009	132.921	41.452	81.450	178.978	283.677	462.655
Formación-Empleo	29.245	14.803	5.458	6.862	7.249	8.485	41.952	30.150	72.102
Empleo de interés social	16.235	9.383	100.465	87.193	16.868	25.267	133.568	121.843	255.411
Empleo de discapacitados	1.168	580	9.012	5.214	10.354	5.488	20.534	11.282	31.816
Orientación para el empleo y asesoramiento para autoempleo	41.782	67.106	93.434	165.229	42.708	105.937	177.924	338.272	516.196
Fomento del empleo									
Apoyo al autoempleo	1.339	1.037	8.400	7.159	4.680	4.503	14.419	12.699	27.118
Técnicos de desarrollo local	20	38	684	1.068	399	574	1.103	1.680	2.783
Subvenciones a la contratación (2)	3.750	2.553	19.342	11.468	13.477	8.879	36.569	22.900	59.469
Total	**152.056**	**164.806**	**315.804**	**417.114**	**137.187**	**240.583**	**605.047**	**822.503**	**1.427.550**

(1) Incluye a los menores de 25 años y mayores de 25 que superen, respectivamente, el 6.º y 12.º mes de inscripción ininterrumpida como demandantes de empleo.

(2) No incluye los contratos subvencionados, por lo que puede decirse que además de estas acciones, un total de 592.022 desempleados se han incorporado al mercado de trabajo mediante un contrato que recibió financiación pública (bonificaciones o subvenciones; estatales en el primer caso, y estatales y de Comunidades Autónomas en el segundo).

Fuente: Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2001.

taciones de desempleo de acciones de políticas activas para que puedan mejorar sus posibilidades de empleo. En esa línea, se ha diseñado un nuevo programa de Renta Activa de Inserción para el año 2000, dirigido a los trabajadores desempleados de larga duración, en situación de necesidad, mayores de 45 años, que combina medidas activas y pasivas, pues compagina la suscripción de un Compromiso de Actividad, vinculado a un itinerario de inserción con tutoría individualizada e incorporación a programas de empleo-formación, y, de otra parte, una renta, como ayuda económica complementaria[34]. Esta medida responde al objetivo de combatir y prevenir el paro de larga duración y la de sustituir medidas de empleo pasivas por medidas activas, ya que se piensa que, si bien ha de mantenerse una protección adecuada frente al desempleo, la mejor protección es combinar una política exclusiva de garantía de ingresos con una adecuada política de inserción laboral efectiva.

[34] Véase apartado 3.3.3 del capítulo II.

Entre los objetivos del Plan se ha incluido la modernización del Servicio Público de Empleo, en colaboración con los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas, por lo que se ha contemplado el desarrollo progresivo del Proyecto SISPE, cuyo fin es establecer criterios comunes de gestión de la intermediación laboral e integración informática de datos a tiempo real entre los distintos Servicios Públicos competentes.

Necesidad de avanzar en la formación permanente

Respecto a la directriz 6 (aprendizaje a lo largo de toda la vida), España se encuentra, a juicio de la Comisión Europea, entre el grupo de Estados miembros que no han cumplido la directriz suficientemente, en el sentido de que no han fomentado de modo general las iniciativas de formación permanente[35]. Una de las carencias del PNAE 2000 es que no contempla iniciativas para afrontar el abandono prematuro del sistema educativo, según ha observado la Comisión Europea. En cambio, en esta misma directriz, que insta a los Estados miembros e interlocutores sociales a facilitar el acceso a la formación a los trabajadores de más edad, España, junto con Finlandia, Francia, Austria y Alemania, es uno de los pocos Estados miembros que mencionan medidas o iniciativas destinadas a ello.

Destaca el fomento del empleo de trabajadores discapacitados

En relación con la integración de los grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo (directriz 9), la Comisión Europea ha destacado el programa 2000 de promoción del empleo de las personas con discapacidad de España, que tiene por objeto la contratación de 16.000 trabajadores con discapacidad, y el plan de formación y empleo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles cuyo objetivo es formar a 40.000 personas con discapacidad y crear 20.000 puestos de trabajo durante el periodo 1999-2008 (desde el año 2000 la Fundación ONCE dedicará el 70 por 100 de sus recursos a programas de empleo y formación, y la cantidad restante a los programas de eliminación de barreras). El Plan 20.000/40.000 de la Fundación ONCE es un nuevo paso de la organización como primer operador español en el campo de la formación y el empleo de las personas con discapacidad, y, como consecuencia del mismo, en el año 2000 la Fundación ONCE ha conseguido una creación neta de empleo de 5.135 empleos y ha desarrollado 11.778 accio-

[35] Informe Conjunto sobre el Empleo de 2000, Comisión Europea, Bruselas, a 6 de septiembre de 2000, COM (2000) 551 final.

nes formativas. Entre los años 1999 y 2000, el Plan 20.000/40.000 ha tenido una creación neta de empleo de 13.166 empleos, así como 35.151 acciones formativas, lo que supone que en dos años de aplicación del Plan se han alcanzado los niveles de empleo previstos para un periodo de más de seis años, mientras que el número de acciones formativas equivalen a las previstas para más de siete años[36].

Nuevos incentivos contra la exclusión social

También se ha destacado en el PNAE el programa de fomento del empleo para trabajadores que se encuentren en situación de exclusión social, aprobado por primera vez para el año 2000[37], y que se dirige a perceptores de salarios de inserción, jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta procedentes de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción en proceso de rehabilitación[38], reclusos en régimen abierto y ex-reclusos, de forma que las empresas que los contraten pueden tener una reducción en sus cotizaciones del 65 por 100. En el PNAE 2000 se estimaba que este programa iba a beneficiar a 6.000 contratos, pero puede apuntarse que, según datos del Plan Nacional de Acción para el Empleo 2001, en el año 2000 sólo ha permitido la contratación de 1.412 desempleados.

3.2.1.2. *Pilar 2: desarrollar el espíritu de empresa*

Se agilizan los trámites administrativos

La creación de nuevas empresas y el crecimiento de las pequeñas y mediadas empresas (Pymes) son factores esenciales para la creación de empleo y oportunidades de formación para los jóvenes. En esta línea para facilitar las relaciones de las empresas con la

[36] Fuente: *Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2001*.

[37] Forma parte del Programa de fomento del empleo para el año 2000, regulado en el artículo 28 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. Véase la tabla II-1 del capítulo II.

[38] En relación con este colectivo, se aprobaron unas garantías de integración sociolaboral para los delincuentes toxicómanos, de forma que los menores y las personas que hayan concluido un tratamiento de deshabituación reciban una atención prioritaria en las políticas activas de empleo como podrían ser, en su caso, la sustitución del subsidio por acciones específicas de promoción, formación o reconversión profesional (Ley 36/1999, de 28 de octubre, de Concesión del subsidio de desempleo y de garantías de integración sociolaboral para los delincuentes toxicómanos que hayan visto suspendida la ejecución de su pena de conformidad con lo previsto en la legislación penal).

Administración y hacer frente a la necesaria reducción de las cargas administrativas que recaen sobre las empresas (directriz 10), se ha pretendido proseguir en el año 2000 con la simplificación de procedimientos administrativos, ampliando la «ventanilla única», consistente en un programa impulsado por la Administración General del Estado, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, diversas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para establecer centros de atención integral al emprendedor en los que, de forma gratuita, se prestan servicios de orientación, asesoramiento y tramitación a cualquier ciudadano que desee establecerse como empresario, y que ya se ha iniciado en algunas regiones como proyecto piloto[39]. En diciembre de 2000 finalizó el plazo de vigencia del Plan de Agilización y Simplificación Normativa para la Competitividad de la Pyme, habiéndose cumplido los compromisos adquiridos con los distintos organismos implicados en los trámites necesarios para constituir nuevas empresas. También se prevé la implantación de sistemas de calidad e innovación de procesos de gestión y organización. Puede decirse que en diciembre de 2000 el número de Pymes sobre el total de empresas suponía el 99,67 por 100, y el porcentaje de ocupados en las pequeñas y medianas empresas sobre el total de ocupados asalariados el 64,22 por 100[40].

Para fomentar el autoempleo se han previsto distintas medidas, como un Plan de artesanos dirigido a 4.300 personas, que finalizó en noviembre del año 2000, o la continuación del Plan de apoyo a las mujeres empresarias, que ha tenido 800 mujeres beneficiarias.

Se potencia el empleo en las nuevas tecnologías

De la misma forma, en un esfuerzo de aprovechar el potencial de empleo en el sector servicios, se lanzó una iniciativa a finales de 1999, poniéndose en marcha en el año 2000, para la difusión de la sociedad de la información, denominada INFO XXI[41], con un presupuesto para este año de 137.000 millones de pesetas. En el marco de las principales actuaciones de esta iniciativa, dentro de la línea de creación de empleo, se prevé el desarrollo de un programa de trabajo a distancia, que contemple, entre otras cosas, la po-

[39] Al finalizar el año 2000 operaban ya nueve ventanillas únicas, instaladas en Valladolid, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Burgos, Murcia, Oviedo, Madrid y Getafe.

[40] Fuente: MTAS, *Seguimiento del Plan de acción para el empleo 2000*, enero-febrero 2001.

[41] Véase apartado 2.6.2 del capítulo III de esta Memoria.

tenciación del teletrabajo de discapacitados en el hogar, y también un programa de lucha contra la marginación laboral y prevención de desempleo, cuya acción prioritaria es la alfabetización informática, en paralelo a la directriz 8 sobre dotación de equipos informáticos en todos los centros de enseñanza.

El PNAE prevé continuar impulsando la generación del empleo en el ámbito local y en los nuevos yacimientos, y la instalación de 2.500 empresas de nueva creación en dicho ámbito, así como en la economía social[42], aprovechando el papel de los servicios públicos de empleo (directriz 12). Otra de las medidas previstas es el Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, para apoyar el aumento de la competitividad de las empresas comerciales elevando o manteniendo el empleo existente, a través de ayudas al comercio independiente, el asociacionismo y a la ordenación espacial.

3.2.1.3. *Pilar 3: fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas*

Al igual que se hizo en los Planes de Empleo de 1998 y 1999 para fomentar la capacidad de adaptación de trabajadores y de las empresas, el Plan del año 2000 ha pretendido continuar el proceso de desarrollo de contenidos de la negociación colectiva, especialmente en determinados temas, como creación de empleo por jubilación parcial, desarrollo de modalidades contractuales, cómputo anual del tiempo de trabajo y distribución irregular del mismo, ordenación de salario, planes de formación en las empresas y permisos formativos, o no discriminación y promoción de la igualdad, y se insta a los interlocutores sociales a negociar y poner en práctica, en todos los niveles adecuados, acuerdos particularmente relacionados con la modernización de la organización de trabajo y la adaptabilidad, así como con nuevas fórmulas de contratación. El propio Plan se refiere a la negociación a nivel autonómico, puesto que la mayoría de las Comunidades Autónomas tienen en vigor Planes de Empleo acordados con los interlocutores sociales que contemplan cuestiones relativas a la reordenación del tiempo de trabajo y otras que son materia de la negociación colectiva.

[42] Véase apartado 3.3.2 de este capítulo.

Se quiere favorecer la movilidad geográfica

También, al igual que en 1999, se ha previsto para el año 2000 impulsar medidas dirigidas a migraciones y a fomentar la movilidad geográfica de los trabajadores, para favorecer una mejor conexión entre ofertas y demandas de empleo, facilitando el desplazamiento de los desempleados. En este sentido, el Plan, que alude al informe elaborado por este Consejo sobre movilidad geográfica como aportación al diálogo social[43], contemplaba un presupuesto de 300 millones de pesetas para potenciar la asistencia a las migraciones interiores, con ayudas a los gastos de desplazamiento, acondicionamiento de alojamientos, plazas de guardería y residencias en origen[44].

En el marco de la directriz 17, dirigida a aumentar el nivel de cualificación dentro de la empresa, se apuntaba la necesidad de renegociar el II Acuerdo de Formación Continua, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2000. Su renovación ha tenido lugar con la firma del III Acuerdo de Formación Continua, el día 19 de diciembre de 2000, cuyo contenido se trata en este mismo capítulo.

3.2.1.4. *Pilar 4: reforzar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres*

En mayor medida que en años anteriores, se ha dado prioridad al objetivo de actuar en el ámbito de la igualdad de oportunidades, y conseguir la horizontalidad de la política de igualdad en todo el Plan de Acción. La directriz 18 establece que las acciones de políticas activas se distribuirán entre hombres y mujeres de forma proporcional a su tasa de desempleo, y en el año 2000 el 57,6 por 100 de las acciones de inserción realizadas las han llevado a cabo mujeres, siendo mayor este porcentaje en las acciones de orientación profesional, donde el 65,5 por 100 se dirigieron a mujeres, y en las de formación ocupacional, con un 61,3 por 100 sobre el total.

[43] Informe del CES 1/2000, sobre movilidad geográfica, aprobado en sesión ordinaria de Pleno de 26 de enero de 2000, en el cual pone de manifiesto la escasa comunicación de los Servicios Públicos de Empleo, y juzga imprescindible garantizar la coordinación y el intercambio transparente y fluido de información entre los distintos Servicios Públicos de Empleo y las agencias de colocación, así como el fomento de la confianza de las empresas en estos Servicios Públicos.

[44] Según la EPA del cuarto trimestre del año 2000 muestra que únicamente el 23,2 por 100 de los parados aceptaría un empleo que implicara cambio de residencia, mientras que el 69,4 por 100 lo aceptaría si tuviera que cambiar de ocupación.

Se elevan los incentivos por la contratación de mujeres

El Programa de fomento del empleo 2000 establece que las bonificaciones de los contratos estables realizados con mujeres (tabla II-2) sean de cinco puntos más que los realizados con varones, tal y como se preveía en el PNAE 1999, e incluso de diez puntos más si se trata de paradas de larga duración o desempleadas mayores de 45. En el año 2000 la contratación estable con mujeres ha supuesto el 38,42 por 100 del total (en 1999 fue el 35,85 por 100) y, el 41,10 por 100 de los contratos con menores de 30 años, el 25,44 por 100 con mayores de 45 años, y el 44,02 por 100 en el caso de parados de larga duración[45]. De la misma manera, como ya se venía haciendo desde años anteriores, se bonifica la contratación de mujeres en ocupaciones con menor índice de empleo femenino, pero ahora se prevé dicha bonificación con independencia del tiempo que lleven en desempleo, a diferencia de lo que sucedía hasta 1999, que sólo se concedía esta bonificación a mujeres paradas de larga duración. En este sentido, en el año 2000 se han realizado 2.571 contratos de esta categoría frente a 174 contratos en 1999[46].

También se prevé fomentar el empresariado femenino, para lo cual se establece un presupuesto de 903 millones de pesetas, para dedicarlos a ayudas financieras, asesoramiento y formación, en colaboración con las Cámaras de Comercio y el Instituto General para la Creación y Desarrollo de Empresas, así como para impulsar la formación en nuevas tecnologías. En el marco del programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres, las Cámaras de Comercio españolas han promovido en el año 2000 la constitución de 708 nuevas empresas gestionadas por mujeres, el doble que en 1999, lo que ha supuesto la generación de 1.000 empleos, y además han prestado asesoramiento a 6.765 emprendedoras.

Ayudas al autoempleo femenino

Además, el Instituto de la Mujer desarrolla diferentes actuaciones para facilitar la incorporación de la mujer al mundo laboral y promover su actividad empresarial, y con este fin convoca anualmente las ayudas «Emprender en Femenino», con la cofi-

[45] Fuente: *Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2001*.

[46] Para el año 2001, la contratación de la mujer después del parto tendrá una bonificación del 100 por 100, durante un año, en el caso de contrataciones de desempleadas de larga duración que se realicen en los 24 meses siguientes al alumbramiento RDL 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad).

nanciación del Fondo Social Europeo. En el año 2000 hubo 735 solicitudes presentadas en plazo, de las cuales 704 se enmarcaban en nuevos yacimientos de empleo o en profesiones u ocupaciones con menor índice de representación femenina, y se concedieron finalmente 132 ayudas, con un presupuesto de 99.938.470 ptas.[47], superior a la cifra de 1999, puesto que para dicho año se concedieron 112 ayudas, con un total de 71 millones de pesetas. También se ha previsto la creación de servicios de apoyo a la familia y trabajadores con mayores dependientes, en colaboración con las Corporaciones Locales y a través de ayudas públicas. En esta línea, se señala en el PNAE la necesidad de promover un plan de guarderías y servicios de proximidad para facilitar la incorporación de la mujer al mundo laboral, objetivo que se contempla en la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral, pero este plan no se ha puesto en marcha todavía.

Otra de las medidas que se vienen aplicando para compensar los efectos desfavorables que existen en la contratación de mujeres, es el denominado «coste cero»[48], bonificándose el 100 por 100 de las cotizaciones a la Seguridad Social en los contratos de interinidad que se realicen para la sustitución de trabajadoras/es durante el periodo de baja por maternidad o adopción, suscritos con personas desempleadas, sean hombres o mujeres. Durante 1999, con la entrada en vigor de la Ley 39/1999 de Conciliación de la vida familiar y laboral, se amplió esta medida a los contratos de interinidad para sustitución de trabajadoras en situación de riesgo por embarazo, así como trabajadores autónomos, socios trabajadores o socios de trabajo de las Sociedades Cooperativas en iguales supuestos. A pesar del «coste cero», las empresas españolas sólo han sustituido en el año 2000 el 19,35 por 100 de las 192.449 bajas por maternidad registradas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con 37.241 contratos de sustitución (el 86 por 100 corresponden a mujeres), aunque dicha cifra ha supuesto un incremento del 25,69 por 100 respecto a 1999, en que se registraron 29.627 contratos de este tipo.

[47] Resolución de 29 de diciembre de 2000, del Instituto de la Mujer, por la que se concede la quinta edición de las ayudas al empleo «Emprender en Femenino», para fomentar la inserción por cuenta propia de las mujeres en regiones Objetivo 1 y fuera de Objetivo 1, relacionadas con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer durante el año 2000.

[48] RDL 11/1998, de 4 de septiembre.

Para facilitar la reintegración a la vida activa (directriz 21), se contempla el aumento de la participación en formación de las mujeres que disfrutan de un permiso, además de programas de formación para las familias monoparentales y medidas para suprimir los obstáculos para la reincorporación a la actividad laboral de las madres solteras. En total se presupuestaron 484 millones de pesetas para promover dicha reincorporación.

Recomendaciones europeas a España en materia de empleo

A la vista del Plan Nacional para el Empleo 2000 presentado por España, la Comisión Europea[49] entendió que deben continuarse los esfuerzos para responder a las recomendaciones relativas a las medidas de prevención y activación del empleo, la mejora del sistema de seguimiento estadístico, la integración de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y medidas, la formación permanente, la capacidad de adaptación y los regímenes de prestaciones y fiscalidad. España debería, por tanto, proseguir la modernización de los servicios públicos de empleo, favorecer la igualdad hombre-mujer, mejorar la educación y formación, equilibrar la flexibilidad y seguridad en el trabajo y examinar los regímenes de imposición y de indemnización para aumentar el número de empleos estables.

3.2.2. **Pactos y medidas de las Comunidades Autónomas a favor del empleo**

Actualmente existen en España numerosos Pactos regionales con medidas de fomento del empleo. Por ello, y puesto que casi todas las regiones han elaborado su propio Plan de Empleo, sería interesante, tal y como ha señalado la Comisión Europea[50], que el Plan Nacional completara una descripción de las medidas de la Administración Central con información sobre las medidas adicionales tomadas por las Comunidades Autónomas para aplicar las directrices para el empleo. Desde este Consejo Económico y Social se viene efectuando una recomendación similar, sobre todo a par-

[49] Recomendación relativa a las Recomendaciones del Consejo sobre la Aplicación de las Políticas de Empleo de los Estados Miembros, presentada por la Comisión, Bruselas, 6 de septiembre de 2000, COM (2000) 549 final.

[50] Informe Conjunto sobre el Empleo de 2000, COM (2000) 551 final, Bruselas, 6 de septiembre del año 2000.

tir de que en 1998 comenzaran a producirse nuevos Pactos de ámbito autonómico[51].

En España una parte creciente de las políticas de empleo, financiadas por el Estado, son gestionadas por las Comunidades Autónomas, aunque también hay actuaciones específicas de cada Comunidad, adaptadas a su territorio y financiadas con su presupuesto. En el año 2000 las Comunidades Autónomas destinaron a políticas activas de empleo con cargo a sus presupuestos 146.000 millones de pesetas, mientras que en 1999 destinaron 148.000 millones[52].

No ha sido posible, abordar un análisis global de los diversos Pactos de Empleo suscritos en diferentes fechas y con diversas vigencias, difíciles de sincronizar. Hay Comunidades Autónomas con Planes cuya vigencia se ha iniciado en el año 2000, como por ejemplo Asturias, pero otras que poseen Planes que entraron en vigor en años anteriores o incluso han concluido. Existe además información insuficiente sobre los resultados de las medidas efectuadas por las Comunidades Autónomas, lo que impide llevar a cabo una valoración conjunta de los mismos, todo ello unido a que las medidas de fomento del empleo en las diferentes Comunidades presentan una notable diversidad. Por ello, se ha procedido a realizar una tabla en la cual se recogen los diferentes Planes de Empleo vigentes en las Comunidades Autónomas, así como las normas por las que se aprueban las subvenciones y ayudas al fomento del empleo en cada una de ellas, junto con los balances de resultados existentes en alguno de los casos (tabla II-4).

Análisis de resultados por algunas CCAA

Aunque hay Comunidades que ya han iniciado el estudio de la repercusión de sus acciones a favor del empleo, otras sólo tienen análisis escuetos de datos. La dispersión de las medidas que se evalúan por parte de las Comunidades que sí han realizado estudios y de los periodos de aplicación a que se refieren, impiden llegar a conclusiones globales sobre el impacto de estas políticas en el conjunto del territorio nacional.

Con el objeto de poder realizar una valoración global desde el Consejo sobre las medidas autonómicas de fomento del empleo, se so-

[51] CES, *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España, años 1998 y 1999*.

[52] Fuente: *Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2001*.

licitó a las diferentes Comunidades Autónomas, información sobre los resultados de las acciones que habían practicado a lo largo del año 2000 y su incidencia sobre el empleo. En este sentido, sólo se ha recibido contestación de algunas Comunidades Autónomas que sí han realizado algún tipo de análisis o evaluación de las medidas adoptadas en dicho periodo (tabla II-3). Homogeneizar, pero sobre todo, sistematizar toda la información no es tarea fácil, ya que además no coinciden en todos los casos el tipo de acciones de fomento del empleo y los colectivos destinatarios de las mismas. De acuerdo con la información facilitada por algunas Comunidades Autónomas, se conocen datos de Extremadura sobre los expedientes tramitados por el Servicio Público de Empleo y la situación presupuestaria de su línea de ayudas al finalizar el año 2000, así como información de La Rioja sobre las medidas de fomento del empleo del año 2000. La Comunidad Autónoma de Madrid ha realizado un estudio de las medidas adoptadas en 1999 y 2000, en el marco del Acuerdo Marco para apoyar la Estabilidad y Calidad en el Empleo, pero sólo en lo concerniente a política general de la Función Pública. Castilla y León posee un estudio de resultados del Plan Regional de Empleo 1998-2000, en la parte referida a orientación, intermediación, formación y puestos de trabajo incentivado. Aragón ha desarrollado también un análisis sobre la ejecución de los programas de fomento del empleo del año 2000, señalando las subvenciones y ayudas concedidas para cada colectivo. Andalucía mantiene un sistema de prospección del mercado de trabajo para conocer las tendencias a corto y medio plazo en diferentes sectores, como las telecomunicaciones, y establecer las necesidades formativas para acceder al mercado laboral, así como para conocer la situación de las mujeres y los jóvenes en el mercado de trabajo andaluz y el impacto de los planes de acción para la promoción del empleo de ambos colectivos. En Murcia, la Dirección General de Trabajo, al igual que hizo en 1999, ha llevado a cabo una Memoria del año 2000 que recoge la gestión de los programas de fomento del empleo, fomento de la economía social y del desarrollo local para dicho ejercicio, analizando los objetivos conseguidos en cada programa, el número de expedientes tramitados, los trabajadores beneficiados y las subvenciones concedidas, señalándose el grado de ejecución del presupuesto inicial, así como la gestión de las iniciativas comunitarias de empleo.

Entre las Comunidades Autónomas con una evaluación más completa destaca el caso de Navarra, que ha llevado a cabo un análisis de las acciones realizadas durante el primer semestre del año en cone-

xión con el desarrollo de las medidas y consecución de los objetivos fijados en su Plan de Empleo, y puede decirse que está cumpliendo sus objetivos, puesto que en su Plan de Empleo preveía reducir la tasa de desempleo a fin de que se situara en torno al 5 por 100 al final de la vigencia del Plan (2001), y según la EPA, ha pasado de una tasa de paro del 10,65 por 100 en el cuarto trimestre de 1997 al 5,74 por 100 en el cuarto trimestre del año 2000. De la misma manera, Cantabria ha realizado un balance de la Concertación Regional del año 2000 en materia de empleo, que ha sido valorada positivamente por los agentes sociales al ponerse de manifiesto que las políticas activas de empleo y el fomento de la inversión industrial que se desarrollaron en el marco de la Concertación del año 2000 de Cantabria tuvieron aproximadamente 2.000 beneficiarios, posibilitándose la creación de 4.000 empleos y el mantenimiento de otros 10.000, de modo que atendiendo a la EPA y realizando la comparación con 1999 hasta el tercer trimestre, hubo un aumento de la población ocupada del 7,6 por 100, y una disminución del paro del 11,76 por 100.

TABLA II-3

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

Acciones	Extremadura (expedientes tramitados)	Navarra (sólo primer semestre de 2000)	Cantabria	Castilla y León	La Rioja	Aragón	Murcia
Integración de minusválidos	20 proyectos generadores de empleo (ejecución del 79,58% del presupuesto) 10 inscripciones en el registro de CEE Mantenimiento de costes salariales: 517 (81,30%del presupuesto)	1.097 discapacitados contratados en CEE (411 mujeres) Se ha subvencionado la contratación indefinida de 76 trabajadores discapacitados a tiempo completo (el 11,84% mujeres) y de 14 a tiempo parcial (57,14% mujeres)		Ayudas de empleo: Empleo en CEE: 1.748 puestos (el 53,58% mujeres) Autoempleo de discapacitados: 22 puestos (9 de ellos con mujeres). Integración de discapacitados en empresas: 93 (32 eran mujeres) Empleo con apoyo de discapacitados: 27 (12 mujeres)	Empleo en CEE: 387 (254 eran hombres)	38 Centros Especiales de Empleo (en 1999 había 29), con 1.255 trabajadores (en 1999 eran 1.120).	(Financiación MTAS) Subvenciones a CEE – Para su creación y ampliación: 26 expedientes, 10 centros beneficiados, 172.994.994 de subvención concedida (sobre 255.195.750 solicitados). – Para el mantenimiento de puestos de trabajo: ayudas a costes salariales: 223 expedientes, 272 centros beneficiados. 144.760.106 ptas. de subvención concedida; y ayudas para adaptación de puestos de trabajo, saneamiento financiero y asistencia técnica: 7 expedientes, 2 centros beneficiados. 953.079 ptas. de subvención concedida (sobre 14 millones solicitados) Subvenciones para autónomos minusválidos: 25 expedientes tramitados, 8 trabajadores beneficiados, aproximadamente 15 millones de subvención concedida (sobre 19 solicitados) Inserción laboral del discapacitado psíquico (cofinanciado por el FSE): 10 expedientes, 21.988.864 de subvención concedida, 10 empresas beneficiarias

TABLA II-3 *(Continuación)*

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

Acciones	Extremadura (expedientes tramitados)	Navarra (sólo primer semestre de 2000)	Cantabria	Castilla y León	La Rioja	Aragón	Murcia
Promoción de autoempleo	1.849 expedientes de establecimiento de desempleados como autónomos (ejecución del 99,87% del presupuesto), y 17 expedientes de promoción de autoempleo (6,49% del presupuesto)	Beneficiarios de ayudas: 218 (el 56,88% mujeres). El 55,05% de las ayudas fueron ayudas financieras, el 19,27% ayudas a la inversión, y el 25,68% renta de subsistencia.	325 personas se beneficiaron de la promoción del empleo autónomo	Plan de Empleo Joven: 561 puestos de autoempleo incentivados (sólo el 4,6% mujeres) Plan de Empleo Mayores: 290 puestos de autoempleo (50% mujeres) Autoempleo de discapacitados: 22 Autoempleo en sectores de nuevos yacimientos: 261	248 autoempleos, sólo 96 de ellos eran mujeres	Subvenciones financieras: se solicitaron 545 y se concedieron 352 Renta de subsistencia: se solicitaron 203 y se concedieron 106 Iniciativas de autoempleo: 465 solicitudes y 314 concedidas (el 45,8% para mujeres) Autónomos minusválidos: se concedieron 15 solicitudes (5 mujeres)	Ayudas al establecimiento de actividades independientes (cofinanciado por el FSE): — < 30 años: 378 expedientes tramitados, 144 trabajadores beneficiados. Subvención concedida de 114.700.000 ptas. — De 30 a 45 años: 62 expedientes, 88 trabajadores beneficiados. 44.800.000 ptas. — > 45 años: 62 expedientes, 23 beneficiarios. Subvención concedida por 17.250.000 ptas. — Mujeres: 571 expedientes,245 trabajadores beneficiados. 220.200.000 ptas. de subvención. — Mujeres subrepresentadas: 16 expedientes, 6 beneficiarias, 6 millones concedidos — Nuevos Yacimientos: 75 expedientes, 69 trabajadores beneficiados, 99.083.588 ptas. de subvención. Subvenciones Financieras a Autónomos (financiación MTAS): 62 expedientes, 48 trabajadores beneficiados casi 16 millones. de subvención concedida (sobre aproximadamente 32 solicitados) Rentas de Subsistencia 44 expedientes, 28 beneficiarios 22.021.028 ptas. concedidas (34 millones solicitados)

TABLA II-3 *(Continuación)*

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

Acciones	Extremadura (expedientes tramitados)	Navarra (sólo primer semestre de 2000)	Cantabria	Castilla y León	La Rioja	Aragón	Murcia
Orientación e intermediación		4.891 acciones (el 65,5% con mujeres) 3.645 entrevistas en profundidad		149 centros asociados al Servicio Regional de Empleo (90 en 1998). Orientación a 13.721 personas (16.068 en 1999)			Subvenciones a actividades de orientación (cofinanciado por el FSE): 7 expedientes, 7 entidades beneficiadas, 70 millones de subvención
Fomento de la contratación	3.700 (56,20% del presupuesto)	9.024 contratos indefinidos (frente a 76.603 temporales, que representan el 89,46% del total de contratos registrados): 7.448 a tiempo completo (el 32,75% para mujeres) y 1.576 a tiempo parcial (68,02 % para mujeres)	Se acogieron unos 600 trabajadores a las acciones de fomento de la contratación indefinida, y otros 600 se vieron afectados por la transformación de contratos temporales en indefinidos	Plan de Empleo Joven: 2.270 contrataciones indefinidas incentivadas (el 41,67% mujeres), y 4.523 transformaciones (el 36,5% mujeres) Plan de Empleo Mayores: 959 contrataciones indefinidas incentivadas (el 30,96% mujeres), y 4.858 transformaciones contractuales (el 26,71% mujeres) Otras ayudas: Contratación 1.º trabajador por autónomos: 78. Nuevas contrataciones por sustitución: 161 Nuevas contrataciones por jubilación anticipada: 1 Nuevas contrataciones por reducción de jornada al 50%: 1 Contratación Técnicos de Prevención: 1	*512 contratos, 50% hombres y 50% mujeres*	*Ayudas a la contratación indefinida:* Mayores de 40 años: 6 Mayores de 45: 29 Mujeres: 287 (145 a tiempo parcial) Minusválidos 33%: 2 Parados larga duración (2 años y cargas familiares): 1 Jóvenes 22-30 sin cualificación: 1 1.º trabajador contratado por autónomo: 1 Conversión en indefinidos: 26 (16 eran mujeres menores de 40 años).	Ayudas al empleo por cuenta ajena a: — Jóvenes: 1.334 expedientes tramitados, beneficiándose 425 empresas. 370 millones de crédito inicial. — Mayores de 30 años: 1.316 expedientes, con 337 empresas beneficiadas 290 millones de ptas. de crédito inicial.

TABLA II-3 *(Continuación)*

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

Acciones	Extremadura (expedientes tramitados)	Navarra (sólo primer semestre de 2000)	Cantabria	Castilla y León	La Rioja	Aragón	Murcia
Inserción laboral de colectivos con riesgo de exclusión social		Autorización de 2 nuevos centros de inserción, con 8 colocaciones (7 de ellos hombres) Inmigrantes: acciones de inserción laboral, aprendizaje del idioma y capacitación profesional (323 beneficiarios (el 62,54% mujeres)			5 empleos, sólo 1 con una mujer	Programa de Empresas de Inserción: 49 expedientes	
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP)	2.536 solicitudes de cursos. 660 expedientes de prácticas a empresas. 12 convenios y 19 becas.	Para el año 2000 se han programado 603 cursos. 3.645 alumnos formados (el 62,91% mujeres). Tasa de inserción: 26,90%.	Se impartieron 569 cursos de Formación Profesional, para 8.430 alumnos, por un importe de 1.834 millones de ptas.	Año 2000: 1.797 cursos con 26.723 alumnos, frente a 1.307 cursos con 19.605 alumnos en 1999.			
Acciones de Formación Profesional Ocupacional		Cursos a parados de larga duración: 168 alumnos (el 3,32% sobre los PLD), siendo el 67,86% mujeres, y el 91,67% mayores de 25 años.	De estos cursos, en relación a la FPO realizada dentro del acuerdo de Concertación	Programas de FPO, formación en alternancia y prácticas de titulados: 318 cursos con 6.010 alumnos en el año 2000, frente a 219 cursos con 5.171 alumnos en 1999. Programa de Medidas			

TABLA II-3 *(Continuación)*

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

Acciones	Extremadura (expedientes tramitados)	Navarra (sólo primer semestre de 2000)	Cantabria	Castilla y León	La Rioja	Aragón	Murcia
Acciones de Formación Profesional Ocupacional		Cursos a titulados: 117 alumnos (el 2,36% de los titulados en paro), siendo el 63,38% mujeres, y el 75,21% menores de 25 años. Cursos a personas de difícil inserción: 143 personas formadas (0,81% sobre parados), siendo el 70,63% hombres, y el 85,31% mayores de 25 años. Respecto a acciones para iniciación profesional (con compromiso de empleo): los formados menores de 25 años fueron 46, siendo 42 de ellos mujeres.	Social, fueron 484 los que se impartieron a 7.255 alumnos (1.745 millones de ptas. con cargo al Plan FIP y al programa del FSE). El 60% de los alumnos de formación ocupacional fueron mujeres, y 16 de los cursos de FPO se dirigieron a los discapacitados, con un total de 240 alumnos.	Complementarias a la Formación: 19 acciones, con 150 millones de presupuesto en el año 2000, frente a 12 acciones con aproximadamente 181 millones en 1999.			

TABLA II-3 *(Continuación)*

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

Acciones	Extremadura (expedientes tramitados)	Navarra (sólo primer semestre de 2000)	Cantabria	Castilla y León	La Rioja	Aragón	Murcia
Acciones de Formación Continua	991 solicitudes tramitadas.	7.182 alumnos formados (el 56,39 % eran hombres).					
Iniciativas Locales de Empleo		Se han calificado como tal 2 proyectos. Se han generado 9 puestos de trabajo indefinido (4 hombres y 5 mujeres). Se han contratado o prorrogado el contrato a 12 agentes de empleo y desarrollo local.		Empleo Ordinario en Entidades Locales: 1.290 puestos incentivados. Nuevos Yacimientos de Empleo en Entidades Locales: 65 puestos (50 de ellos con mujeres: 76,9%). Plan de Empleo Agrario: 1.176 puestos (sólo el 2,12 de mujeres). Contrataciones en sectores de exclusión social por Entidades Locales: 179 (27,3% de mujeres).			Ayudas a iniciativas para el desarrollo rural (financiado con fondos propios de la Comunidad): 8 expedientes tramitados, 8 ayuntamientos beneficiados, 289.633-332 ptas. de subvención concedida. Agentes de desarrollo local: 11 expedientes, 4 trabajadores beneficiados, 6.400.000 de subvención concedida (100 por 100 de lo solicitado). Subvenciones para centros y programas de desarrollo local: 13 expedientes, 83.288.312 ptas. de subvención concedida.
Escuelas-Taller	67 expedientes	431 alumnos (el 74,01% hombres; tasa de inserción de 67,7%).					
Casas de Oficio		No hay datos.					
Talleres de Empleo		No hay datos.					

TABLA II-3 *(Continuación)*

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

Acciones	Extremadura (expedientes tramitados)	Navarra (sólo primer semestre de 2000)	Cantabria	Castilla y León	La Rioja	Aragón	Murcia
Promoción de empresas de Economía Social		Beneficiarios de ayudas: 199 (65,83% hombres).		Plan de Empleo Joven: 179 puestos incentivados de integración en empresas de economía social (80 de ellos con mujeres). Plan de Empleo Mayores: 277 puestos incentivados de integración en empresas de economía social (100 de ellos con mujeres).	98 empleos, 60 de ellos con mujeres.	Ayudas por empresas: Asistencia técnica para estudio: 18 solicitudes, 6 concedidas. Asistencia técnica a contratación: ninguna concesión. Subvenciones a intereses de préstamos: 91 solicitudes, 74 concedidas. Ayudas por incorporación: 215 concedidas (de un total de 247). 2 Ayudas a asociaciones y a cooperativas de enseñanza: ninguna. Subvenciones menores de 30 años: solicitadas 31 y concedidas 30.	Empleo para jóvenes y desempleados en Cooperativas y Sociedades Laborales: 303 expedientes tramitados, 784 beneficiarios, 466.182.179 ptas. de subvención concedida (aprox. 642 millones solicitados). Asistencia Técnica: 37 expedientes, 1.826 trabajadores beneficiados, 12.625.000 ptas. de subvención concedida (12 millones solicitados). Subvenciones a préstamos para programas de Reestructuración financiera: 2 expedientes, 25 trabajadores beneficiados, 6.353.000 ptas. de subvención. Ayudas para capitalización de empresas de economía social: 126 expedientes, 293 beneficiados, 136.075.950 ptas. concedidas. Subvenciones para difusión y fomento de la economía social: 31 expedientes, 14 millones de subvención concedida, 14.025 trabajadores beneficiarios. Ayudas para inversiones: 125 expedientes, 652 trabajadores beneficiados, aproximadamente 334 millones de subvención. Cooperativas de Trabajo Asociado: las más numerosas (85% del total), seguidas por las de Vivienda (8%).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Comunidades Autónomas que han facilitado información relativa al año 2000.

Subvenciones a los programas autonómicos

Para poder llevar a cabo algunos de los programas de apoyo a la creación y fomento del empleo, o formación profesional ocupacional, y escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, las Comunidades Autónomas reciben subvenciones que cada año se distribuyen territorialmente entre todas ellas[53], mediante una asignación de fondos que se realiza, sobre todo, en función del número de desempleados que hay en cada una de ellas. Cada Comunidad Autónoma opta por medidas diversas para fomentar el empleo en su ámbito territorial, con acciones dirigidas a diferentes colectivos. Eso sí, todas las Comunidades Autónomas vienen siguiendo las directrices europeas, desde el Consejo Europeo Extraordinario de Luxemburgo, así como las directrices nacionales, en el sentido de apoyar especialmente a aquellos colectivos con más dificultades para encontrar un empleo, como los parados de larga duración, los minusválidos, los mayores de cuarenta y cinco años, los jóvenes y las mujeres, aunque presentan diferencias en el tipo y cuantía de las ayudas que establecen.

Necesidad de adecuar las medidas a la situación específica de cada región

Además, los colectivos a los que las Comunidades Autónomas dirigen sus acciones no siempre son los mismos y tampoco esta diferente priorización de colectivos ha estado siempre relacionada con las características del mercado laboral regional, como en alguna ocasión se ha puesto de manifiesto por este Consejo. En esa línea, algunas Comunidades, como por ejemplo Castilla-La Mancha, han procedido a evaluar sus necesidades laborales y económicas para poder ajustar su oferta educativa a las demandas del mercado de trabajo o, entre otras cosas, definir programas concretos a los colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, ya que además no hay que olvidar que el nivel de desempleo sigue siendo diferente regionalmente, y va desde prácticamente el pleno empleo en algunas Comunidades, como Navarra (5,74 por 100 de paro) o Baleares (7,09 por 100), hasta llegar a tasas de paro que superan con creces la media nacional, situada en el 13,61 por 100, como Andalucía y Extremadura, con un 23,12 por 100 y 23,17 por 100,

[53] La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales acordó el 21 de diciembre de 1999 los criterios objetivos de la distribución territorial, para el ejercicio 2000, de las subvenciones correspondientes a programas de apoyo a la creación y fomento del empleo, ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, formación profesional ocupacional, escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, decidiendo el Consejo de Ministros su formalización el 11 de febrero del año 2000 (Orden de 29 de febrero de 2000).

respectivamente[54]. En esta línea, Baleares y Navarra han sido las Comunidades Autónomas con menor probabilidad de desempleo de España en el año 2000, mientras que por ejemplo Asturias se consolida como una de las Comunidades con peores perspectivas junto al sur de España[55].

Utilización de los nuevos yacimientos de empleo por las CCAA

Algunas Comunidades intentan aprovechar las posibilidades que ofrecen los nuevos yacimientos, como los servicios a la vida diaria o de proximidad, protección del medio ambiente, servicios culturales, o en el marco de la economía social[56]. Sirva de ejemplo Castilla y León, Cantabria, Madrid, Murcia, La Rioja, País Vasco o Asturias. Andalucía tiene, por ejemplo, un programa de Escuelas de Empresas mediante el cual presta asesoramiento, apoyo y formación para la constitución de cooperativas y sociedades laborales, especialmente dirigido a jóvenes y a mujeres, fundamentalmente en el ámbito rural y en la explotación de recursos de carácter local, con un conjunto de infraestructuras productivas y técnicas, ya que durante tres años se les cede el uso de naves en la Escuela para ubicar la empresa. Algunas intentan aprovechar el potencial de empleo existente en el sector de las nuevas tecnologías, como Galicia, que subvenciona la transformación de contratos en prácticas en indefinidos y la contratación indefinida inicial vinculada a proyectos de I+D, de modo que se favorece la inserción laboral de jóvenes titulados y a su vez se potencia la presencia de personal cualificado para el desarrollo tecnológico y técnico. También se intenta fomentar por parte de algunas Comunidades Autónomas el desarrollo de iniciativas locales de empleo, como Andalucía, La Rioja, Extremadura, Madrid o Murcia.

Se fomenta más la modernización de la organización del trabajo

Siguiendo con la tendencia iniciada en años anteriores, son bastantes las Comunidades Autónomas que contemplan en sus Planes de Empleo cuestiones relativas a la reordenación del tiempo de trabajo,

[54] INE, *Encuesta de Población Activa,* Cuarto Trimestre 2000.

[55] Fuente: *Índice Manpower de convergencia laboral de España con la Unión Europea 2000*.

[56] En relación con la economía social, la cual, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en diciembre de 2000 ocupaba a 353.933 personas en cooperativas y sociedades laborales, debe señalarse que Andalucía, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana son las cuatro Comunidades Autónomas que absorben la mayor parte de este empleo, con el 62 por 100 del total, con 219.477 empleos.

abordándose el tiempo de trabajo como elemento de creación de empleo, aunque lo hacen de forma muy diversa. Algunas Comunidades vienen estableciendo medidas de este tipo desde 1998, como Castilla y León, Cataluña, Navarra o Galicia, o incluso desde 1996 o 1997, como el País Vasco y Andalucía, respectivamente. En el año 2000, Extremadura ha previsto también en su Plan de Empleo (2000-2003) una línea de subvenciones para la creación de empleo fijo por el establecimiento de Planes de reducción de la jornada de trabajo semanal a 35 horas y disminución de horas extraordinarias, a través de la negociación colectiva. Comunidades, como es el caso de Cantabria, lo han hecho también a partir del año 2000, con líneas de ayudas específicas a la creación de empleo como consecuencia de la reordenación del tiempo de trabajo y por eliminación o reducción de horas extraordinarias.

Son ya bastantes las Comunidades Autónomas que prevén la reducción de la jornada de trabajo para los empleados públicos, como Extremadura, Andalucía o Navarra, entre otras. En Cataluña existen Acuerdos para aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales en distintas Administraciones y en municipios. En Castilla-La Mancha se ha pactado en enero del año 2000 un acuerdo para la implantación progresiva de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos de esta Comunidad Autónoma, mediante un proceso de implantación que culminará en el año 2002.

Se aprueban iniciativas en contra del desempleo femenino

Siguiendo el objetivo del Plan Nacional de favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la mayoría de las Comunidades han aprobado iniciativas para luchar contra el desempleo femenino, ya que la tasa de paro femenino en España es de 19,76 por 100, frente al 9,47 por 100 de la masculina, y se ve agravada además en algunas Comunidades, por encima del 25 por 100 en Asturias, o incluso del 30 por 100 en Extremadura, Ceuta, Melilla o Andalucía[57]. Madrid aprobó en febrero de 2000 un Plan Especial de Formación y Empleo para mujeres, con ayudas de hasta un millón de pesetas por puesto de trabajo estable destinadas a empresas que contratasen a mujeres y a mayores de 45 años desempleados en la Comunidad, así como con subvenciones para la realización de acciones de formación profesional ocupacional (FPO), cubriendo el 100 por 100 del coste del cur-

[57] INE, *Encuesta de Población Activa,* Cuarto Trimestre 2000.

so dirigido exclusivamente a mujeres y el 85 por 100 en los cursos con participación de hombres y mujeres. También ha aprobado para el ejercicio del año 2000 ayudas a empresas privadas o asociaciones empresariales para la realización de acciones de FPO con compromiso de contratación del 40 por 100 de los alumnos formados, correspondiendo al menos dos tercios de estos contratos a mujeres. Baleares, Cantabria y Castilla y León convocan subvenciones encaminadas a fomentar el ascenso profesional de la mujer, siempre que se mantenga el ascenso un mínimo de tres años, y haya un aumento del salario, o se derive de la transformación a un contrato fijo.

De la misma manera que el PNAE 2000 presta especial atención a los aspectos relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, las Comunidades Autónomas también prevén medidas en esta línea. Así por ejemplo, Murcia, que en sus programas de empleo para el año 2000 introduce uno encaminado a conciliar el trabajo con las obligaciones que puedan surgir de la vida social y familiar de los desempleados/as, promoviendo la generación de empleo surgida de una nueva distribución del tiempo de trabajo, a través de la celebración de contratos a tiempo parcial en sustitución del tiempo de trabajo de aquellos trabajadores que reduzcan voluntariamente su jornada laboral en un 50 por 100. Castilla y León prevé este mismo tipo de subvenciones, aunque con cuantías distintas[58], y fomenta el autoempleo de las mujeres que tienen a su cuidado hijos de 0 a 3 años, como Cantabria, siendo también en este caso diferentes las cuantías, ya que Castilla y León establece una ayuda de 250.000 ptas. cuando la mujer tenga un hijo menor de 3 años a su cargo, o de 350.000 ptas., cuando tenga dos o más hijos a su cargo, de esta misma edad, y en el caso de Cantabria son, respectivamente, 200.000 y 300.000 ptas. El País

[58] Aunque estas Comunidades prevén el mismo tipo de subvención la cuantía no es la misma, porque Murcia establece para el trabajador que pacte la reducción de su jornada una subvención de 40.000 ptas. por cada mes de reducción, con un máximo de 360.000 ptas., y aunque Castilla y León prevé que se le dará 120.000 ptas. por cada 3 meses de reducción, el tope que establece es de 300.000 ptas. De la misma manera, la subvención que corresponde a la empresa también es diferente, puesto que mientras que Castilla y León establece una ayuda equivalente al importe que resulte de aplicar a la base de cotización por contingencias comunes del mes de la contratación del nuevo trabajador, el 25 por 100 multiplicado por los meses de duración del contrato, con el límite de 12 meses, Murcia prevé una subvención de hasta el 25 por 100 pero del salario bruto que corresponda al trabajador que se contrata durante el tiempo de duración del contrato.

Vasco incentiva con un millón de pesetas a los trabajadores que opten por acogerse a la excedencia por cuidado de hijos, siempre que produzca una contratación para sustituirle. En otras Comunidades se fomenta la sustitución de trabajadores en los supuestos de por maternidad, acogimiento y adopción, como Baleares y Andalucía, entre otras, que incentivan a la empresa con el 50 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en la fecha de contratación, si dicha sustitución la realiza una mujer.

Prioridad de la mujer en las medidas autonómicas

Por todo ello, puede decirse que en general todas las Comunidades Autónomas priorizan a las mujeres en sus distintas actuaciones. De esa forma, Castilla-La Mancha ha aprobado para enero de 2001 subvencionar con 700.000 ptas. cada contrato fijo que realicen las empresas de la región con mujeres, siempre que se aumente el empleo neto en relación con el promedio de plantilla mantenida en los seis meses anteriores al contrato. Murcia, en las ayudas al empleo por cuenta ajena, eleva las subvenciones en un 50 por 100 cuando se trate de contrataciones con mujeres desempleadas. Galicia fomenta la formación de mujeres en aquellas profesiones ligadas a sectores y actividades considerados prioritarios en dicha Comunidad.

Las Comunidades Autónomas, según se observa en los Pactos y/o Planes aprobados que se han analizado, también persiguen, en línea con el Plan Nacional de Empleo, la integración laboral de personas con especiales dificultades, como los discapacitados. Murcia, por ejemplo, incorpora en su programa de fomento del empleo para el año 2000 el programa propio de la Administración General del Estado de integración laboral del minusválido, apoyando los centros especiales de empleo y la instalación de estas personas como autónomas. En Madrid la oferta de empleo público para el año 2000 amplió del 3 al 5 por 100 la reserva de plazas ofertadas para que fueran cubiertas por discapacitados.

Se favorece a los colectivos en riesgo de exclusión

También se intenta favorecer por las Comunidades Autónomas la inserción social, a través de la actividad laboral de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Es el caso de La Rioja, Islas Baleares, Cantabria, País Vasco o Extremadura, entre otras, con subvenciones a la contratación de desempleados de estos colectivos, los cuales, en ocasiones, como en el caso de esta última Comunidad, coinciden con los mismos que se citan en el Plan Nacional de Empleo, esto

es, personas con problemas de drogadicción, perceptores de salarios de inserción, ex-reclusos o jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores[59]. Hay Comunidades que incluyen a otros colectivos, como La Rioja, que se refiere a los beneficiarios de diversas Iniciativas Comunitarias (Horizon, Youthstart, Integra), o Baleares, que incluye también a las familias monoparentales y colectivos marginados. Algunas señalan características específicas en estos colectivos, como Madrid, Cantabria o Aragón, que, junto a otras Comunidades, fomentan la contratación de los perceptores del ingreso mínimo de inserción. Navarra ha realizado acciones dirigidas al fomento de la inserción social y laboral de los inmigrantes, capacitación profesional y aprendizaje del idioma y, en el marco del «Plan de Lucha contra la Exclusión Social. Navarra 1998-2005», ha aprobado una nueva ayuda consistente en la subvención por inversiones en capital fijo realizadas en los centros de inserción para la creación o mantenimiento de los puestos de trabajo de personas en situación de exclusión social. Aragón también ha previsto para el año 2001 la elaboración de un Plan Integral de Inmigrantes, con una parte relativa a su integración laboral.

[59] Aunque las Comunidades vienen incluyendo en este colectivo de desempleados desfavorecidos a los jóvenes en riesgo de exclusión social, la edad de éstos varía de unas a otras. Algunas, como Extremadura, establecen la misma edad que el Programa de Fomento del Empleo para el año 2000, que habla de jóvenes de entre 18 y 30 años, pero en cambio otras hablan de 18 a 25 años, como Castilla y León y, algunas incluso no lo especifican, como el País Vasco, que en su programa para la inserción laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión, no cita expresamente a los jóvenes de estas características. Baleares incluye en los colectivos excluidos a los jóvenes emancipados con escasos recursos y con problemáticas asociadas.

TABLA II-4

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Andalucía	• Pacto por el empleo y el desarrollo económico de Andalucía (PEDEA), 1997-1998. Informe de la Junta de Andalucía sobre la ejecución del Pacto (con datos de 1997 y 1998). • Balance final del Pacto, por CCOO de Andalucía, de 16 de febrero de 1999. • Plan Andaluz de Formación Profesional, de 21 de diciembre de 1998, vigente de 1999 a 2006. • Acuerdo Administración-Sindicatos para reducir la jornada laboral a 35 horas, en vigor a partir de mayo de 1998 (se extenderá a toda la Administración autonómica antes del año 2002). • Los programas de empleo del PEDEA se han desarrollado a través del Decreto 119/97 de 29 de julio y la Orden de 30/09/97, por los que se establecen los Programas de Fomento del Empleo de la Junta de Andalucía. La Orden de 30 de septiembre de 1997 desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de empleo estable para la inserción laboral de jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral y para la contratación mediante fórmulas de organización de tiempo de trabajo, establecidas en el Decreto 199/1997. • Decreto 119/2000, de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 199/97, de 29 de julio. • El Decreto 363/2000, de 28 de julio, extiende el plazo de solicitud de las ayudas al em pleo estable de la Orden de 30 de septiembre de 1997 hasta el 31/12/00. • Incentivos a la creación de empleo mediante reducción de jornada laboral a 35 horas y/o la reorganización del tiempo de trabajo (Decreto 11/1999, de 26 de enero, que deroga los incentivos que venían establecidos en esta línea en el Decreto 199/1997, de 29 de julio y Orden de 30/09/97). • Subvenciones a Corporaciones Locales y Entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Garantía Social (Orden de 22/03/00, de la Consejería de Educación y Ciencia). • Subvenciones dirigidas al fomento del empleo de drogodependientes en proceso de incorporación social (Orden de 11/09/00, de la Consejería de Asuntos Sociales). • IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía: Pacto por el empleo y la actividad productiva, de 24 de mayo de 1999. Se ha prorrogado su vigencia. • Seguimiento por la Junta de las distintas medidas de fomento del empleo y de la formación ocupacional efectuadas en 1999.

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Aragón	• Acuerdo para el desarrollo económico y social de Aragón, 1996-1998. • Acuerdo para el Fomento del Empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón para 1999, de 12 de noviembre de 1998 (AFECA). • Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón (AESPA), de 17 de noviembre de 2000 (2001/2003). • Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón (Decreto 51/2000, de 14 de marzo, del Gobierno de Aragón). • Fomento de la Contratación Estable (Decreto 48/2000, de 29 de febrero). • Medidas incentivadoras a la creación de empleo como consecuencia de la reordenación del tiempo de trabajo (Decreto 189/1999, de 28 de septiembre). • Subvenciones por Fomento de Empleo Autónomo para el año 2000 (Orden de 7/02/2000, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo). • Programas objeto de subvención para el año 2000 en materia de Fomento de Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales (Orden de 7/02/2000). • Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas de formación ocupacional y continua, cofinanciados por el Fondo Social Europeo (Resolución de 31/03/00, de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo). • Subvenciones para el desarrollo de programas de Garantía Social, a iniciar durante el año 2000, en las modalidades de Formación-Empleo, Talleres Profesionales y para alumnos con necesidades educativas especiales (Orden de 15/05/00, del Departamento de Educación y Ciencia). • Hay datos sobre la ejecución de los programas de fomento del empleo en el año 2000.
Asturias	• Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, 2000-2003. • Subvenciones para el fomento y mantenimiento de empleo por cuenta ajena, durante el año 2000 (Resolución del 10/03/2000, de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo). • Subvenciones para el fomento de empleo autónomo y fomento de empleo en cooperativas y sociedades laborales (economía social), durante el año 2000 (Resolución del 10/03/00). • Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la adecuación técnica de los puestos de trabajo en el colectivo de personas con discapacidad y bases reguladoras de la concesión de ayudas para el apoyo a Centros Especiales de Empleo (Resolución de 12/06/00).

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Baleares	• Pacto para el Empleo, 1996-1999. • Pacto por la ocupación, la cohesión social y el fomento de la economía productiva en las Islas Baleares, de 12 enero de 2000. • Ayudas económicas para el desarrollo de programas de garantía social para entidades privadas sin fines de lucro y centros educativos privados, y para entidades locales (Orden de 19/10/99, del Consejero de Educación y Cultura). • Subvenciones de los contratos de trabajo a domicilio como forma para facilitar la inserción de trabajadores desocupados y de combatir la economía irregular (Orden del Consejero de Trabajo y Formación, de 30/06/00). • Ayudas públicas para el fomento de la economía social (Orden de 3/06/00). • Ayudas públicas para promocionar el empleo autónomo (Orden 3/06/00). • Ayudas públicas para la integración de minusválidos en centros especiales de empleo y ocupación autónoma (Orden de 3/06/00). • Subvenciones para fomentar el ascenso profesional de la mujer en las Islas Baleares (Orden de 30/06/00). • Subvenciones sobre medidas incentivadoras a la creación de empleo por reducción de horas extraordinarias y por aplicación de la ley de conciliación de la vida familiar y laboral (Orden de 30/06/00). • Programas de formación profesional ocupacional en las Islas Baleares (Decreto 11/2000, de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social, modificado por el Decreto 54/2000, de 31 de marzo). • Ayudas públicas a proyectos dirigidos a la creación de empleo en los nuevos yacimientos de empleo (Orden del Consejero de Trabajo y Formación, de 12/09/00).
Canarias	• Plan Integral de Empleo en Canarias (PIEC), 1994-1999. • Plan de desarrollo industrial de Canarias, 1996-1999. • III Acuerdo de Concertación Social de Canarias 1997-2000: «Pacto Canario por el fomento del empleo estable y la iniciativa empresarial», de 17 de diciembre de 1997, vigente hasta el año 2000. • Subvenciones concertadas a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Garantía Social en la modalidad de Formación y Empleo (Orden de 9/03/2000).

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Cantabria	• Plan de Empleo, 1997-2001. • Pacto de Concertación Social por el Empleo y la Economía en Cantabria, 1998-2000. • Pacto por el Empleo, la Economía y la Cohesión Social en Cantabria, de 25 de noviembre de 1999 (Acuerdo de Concertación Social 2000-2003). • Acuerdos en materia de Empleo, Industria y Cohesión Social para el año 2000, a 25 de noviembre de 1999. • Ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo, Cooperativas y Sociedades Laborales, facilitar la integración laboral de discapacitados y las ayudas previas a la jubilación (Orden de 23/02/2000, de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones). • Ayudas en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo (Orden de 1/03/00). • Ayudas a la formación ocupacional de discapacitados (Orden de 7/03/00). • Ayudas destinadas a fomentar la contratación de jóvenes becarios de cooperación educativa y la contratación en áreas de I+D (Orden de 16/03/00). • Ayudas a la formación profesional, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (Orden de 16/03/00). • Ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo (Orden de 17/03/00). • Ayudas destinadas a promover la conciliación de la vida laboral, la igualdad de oportunidades y la no discriminación (Orden de 9/03/00). • Datos sobre el balance de la Concertación Regional del año 2000 en materia de empleo.

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Castilla-La Mancha	• Acuerdo Regional por el Empleo en Castilla-La Mancha, 1998-1999, y Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo, de 24 de noviembre de 1998. Hay balance de resultados de 1998. • II Acuerdo Regional por el Empleo en Castilla-La Mancha, 2000-2003. • Plan Industrial, 1996-1999. • Plan Social de Empleo en colaboración con las Entidades Locales de Castilla-La Mancha (Orden de 9/12/99, de la Consejería de Industria y Trabajo). • Ayudas para el desarrollo de Módulos de Formación y Empleo en las Entidades Locales de Castilla-La Mancha (Orden de 10/12/99). • Ayudas para la formalización de contratos para la formación por empresas y agrupaciones de empresas (Orden de 13/12/99, del Acuerdo Regional por el Empleo). • Ayudas para el desarrollo de Módulos de Formación y Empleo en empresas, agrupaciones de empresas y entidades sin ánimo de lucro (Orden de 14/12/99, de la Consejería de Industria y Trabajo). • Ayudas al desarrollo de Módulos de Integración Laboral en Entidades sin ánimo de lucro (Orden de 15/12/99). • Ayudas para la creación de empleos en Nuevos Yacimientos de Empleo (Orden de 16/12/99). • Formación Profesional Ocupacional en Castilla-La Mancha y ayudas para el desarrollo de Acciones de Formación (Orden de 16/12/99, de la Consejería de Industria y Trabajo). • Becas para jóvenes desempleados, para la realización de prácticas en empresas y entidades sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha (Orden de 17/12/99, del Acuerdo Regional por el Empleo). • Programa de Pactos Locales de Empleo, del Acuerdo Regional por el Empleo (Orden de 17/12/99). • Ayudas para la formación en el ámbito de la innovación y el desarrollo (Orden de 10/07/00, del Acuerdo Regional por el Empleo).

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Castilla y León	• Nuevo Plan Regional de Empleo de Castilla y León, 1998-2000. Hay balance de resultados de 1998. • Ayudas económicas para el año 2000 contenidas en el Plan de Empleo Estable para Desempleados Mayores de 30 años (Orden de 20/12/99, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo). • Ayudas para el año 2000 dirigidas al apoyo del desarrollo y difusión de la economía social (Orden de 20/12/99). • Subvenciones para el año 2000 en los Programas de Fomento de Empleo del Plan Regional de Empleo de Castilla y León para nuevas contrataciones por organización del tiempo de trabajo (Orden de 20/12/99). • Ayudas económicas para el año 2000 contenidas en el Plan de Empleo Joven (Orden de 20/12/99). • Subvenciones para el año 2000, contenidas en el Plan Regional de Empleo para entidades locales (Orden de 20/12/99). • Programación de acciones formativas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional de la Comunidad de Castilla y León para el año 2000 (Orden de 9/12/99). • Subvenciones de formación para el año 2000 del Plan Regional de Empleo de Castilla y León en los programas de Formación Profesional Ocupacional, Formación en Alternancia, la Formación mediante prácticas en empresas para titulados universitarios, y de desarrollo de Medidas Complementarias de acompañamiento y mejora de la FPO (Orden de 9/12/99). • Subvenciones para el año 2000 en programas de fomento de empleo del Plan Regional de Empleo de Castilla y León relativos al fomento del autoempleo en sectores de nuevos yacimientos y de la contratación del primer trabajador por autónomos y profesionales que carezcan de trabajadores por cuenta ajena (Orden de 20/12/99). • Ayudas económicas para el año 2000 contenidas en el Plan Regional de Empleo para personas con Discapacidad (Orden de 21/12/99). • Subvenciones para fomentar el autoempleo de las mujeres con hijos de 0 a 3 años a su cuidado (Orden de 11/01/00, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social). • Subvenciones a empresas para la transformación de contratos temporales en indefinidos celebrados con mujeres (Orden de 11/01/00). • Subvenciones a Pymes para fomentar el ascenso profesional de la mujer (Orden de 11/01/00). • Subvenciones a entidades colaboradoras en la igualdad de oportunidades para la inserción sociolaboral de la mujer, y a empresas para cursos de formación ocupacional dirigidos a mujeres (Órdenes de 11/01/2000, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social).

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Castilla y León	• Subvenciones, cofinanciadas por el FSE, para la creación de empleo con apoyo destinado a las personas con discapacidad (Orden de 16/05/00, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial). • Subvenciones a Corporaciones Locales, cofinanciadas por el FSE, para la contratación de discapacitados y personas en riesgo o situaciones de exclusión social (Orden de 6/03/00). • Plan Regional Sectorial de Atención a las Personas con Discapacidad (Decreto 266/2000, de 7 de diciembre, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social). • Subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social, a iniciar durante el año 2000, en las modalidades de iniciación profesional, formación-empleo, talleres profesionales y para alumnos con necesidades educativas especiales (Orden de 24/05/00, de la Consejería de Educación y Cultura). • Ayudas a la inversión y a la creación de empleo ligada a la misma, a las que afectan las directrices de la Comisión Europea sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (98/C 74/06) (Decreto 125/2000, de 1 de junio).
Cataluña	• Pacto por la Ocupación en Cataluña, 1998-2000. Datos sobre la situación del Pacto a marzo de 1999 (por CCOO de Cataluña). • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local y de los agentes de empleo y desarrollo local, las acciones de dinamización y el impulso de los proyectos y empresas calificadas de I+E (Orden de 26/11/99). • Incentivos a la creación de empleo mediante la reordenación y reducción del tiempo de trabajo o de las horas extraordinarias (duración máxima de 2 años desde la firma de los contratos suscritos durante la vigencia del Pacto por la Ocupación 1998-2000 (Decreto 248/98, de 22 de septiembre). • Bases reguladoras sobre el fomento de la economía social en Cataluña referentes a los programas de ayuda dirigidos a las sociedades cooperativas y a las sociedades laborales, y se establece la convocatoria correspondiente al año 2000 para la concesión de estas ayudas (Orden de 12/01/00, del Departamento de Trabajo). • Subvenciones para la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para personas con disminución (Orden de 1/03/00, del Departamento de Bienestar Social). • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo (Orden de 9/03/00, del Departamento de Trabajo). • Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social (Orden de 10/03/00, del Departamento de Trabajo). • Convocatoria para el año 2000 para la concesión de subvenciones del programa de talleres de empleo que prevé la Orden de 5/07/1999 (Orden de 26/09/00, del Departamento de Trabajo).

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Comunidad Valenciana	• Acuerdo Valenciano por el empleo y la formación (AVEF), 1996-2000. • Acuerdo sobre medidas de impulso para el desarrollo del AVEF, 1999-2000. • Programa de empleo juvenil, en barrios de acción preferente, para 2000 (Orden de 13/12/99). • Programa de Ayudas de Fomento al Empleo Autónomo para el año 2000 (Orden de 14/12/99). • Medidas de fomento de empleo de la mujer en el ámbito del Plan de Igualdad de Oportunidades para el año 2000 (Orden de 16/12/99). • Plan de Actuaciones para la Mejora del Empleo Rural (PAMER VII) 2000 (Orden de 17/12/99). • Bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de ayudas económicas para desarrollar programas de FPO y talleres de formación e inserción laboral y su convocatoria para 2000 (Orden de 21/12/99, de la Consellería de Empleo). • Plan de Empleo Estable para el año 2000 (Orden de 29/12/99). • Programa de ayudas a la economía social para el año 2000 (Orden de 28/12/99). • Medidas de fomento de empleo destinadas a discapacitados para el año 2000 (Orden de 28/12/99). • Ayudas en el marco de los planes territorializados de fomento del empleo 2000 (Orden 28/12/99). • Programas de garantía social (Orden conjunta de 24/02/00, de las Consellerías de Cultura, Educación y Ciencia y de Empleo). Bases reguladoras y procedimiento para la concesión de subvenciones para desarrollar Programas de Garantía Social y su convocatoria para el curso 2000-01 (Orden conjunta de 1/06/00). • Ayudas del Organismo Público Valenciano de Investigación para realizar acciones especiales de I+D en el 2000 (Orden de 28/02/00, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia). • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo (Orden de 4/05/00, de la Consellería de Empleo). Su convocatoria para entidades colaboradoras sin ánimo de lucro para el año 2000 (Orden de 30/05/00, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo).
Ceuta	• Pacto Territorial por el empleo en Ceuta, 1997-1999. Hay datos de 1998 y 1999.

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Extremadura	• Plan de Empleo e Industria para Extremadura, 1996-1999: su vigencia finalizaba el 31/12/1999. • Plan de Empleo e Industria 2000-2003. • Acuerdo Administración-Sindicatos para la creación de empleo público derivado de la reducción de la jornada laboral y otras medidas complementarias en el ámbito de la Junta de Extremadura y organismos autónomos (firmado en diciembre 1998, en vigor desde el 1 de enero de 1999). • Ayudas económicas del año 2000, para la reinserción sociolaboral de drogodependientes (Orden de 3/03/00, de la Consejería de Sanidad y Consumo, en base al Decreto 13/1997, de 21 de enero). • Ayudas al empleo público en el año 2000 (Decreto 129/2000, de 16 de mayo). • Programas de garantía social en centros públicos de la C.A. de Galicia para el año 2000 (Resolución de 30/06/00, de la DG de Ordenación Educativa y Formación Profesional). • Programa de subvenciones para el establecimiento de desempleados como trabajadores autónomos para el período 2000-2003 (Decreto 216/2000, de 10 de octubre). Con su entrada en vigor no pueden solicitarse subvenciones al amparo del Decreto 111/1996, de 16 de julio, modificado por Decreto 70/1998, de 19 de mayo, por el que se regula el programa de subvenciones para el establecimiento de desempleados como trabajadores autónomos, prorrogado para el año 2000 por el Decreto 22/2000, de 8 de febrero. • Programa de subvenciones para la creación de empleo estable en Sociedades Cooperativas y Laborales para el periodo 2000-2003 (Decreto 215/2000, de 10 de octubre). Con su entrada en vigor no pueden solicitarse subvenciones al amparo del Decreto 112/1996, de 16 de julio, modificado por Decreto 127/1998, de 3 de noviembre, por el que se regula el programa de subvenciones para la creación de empleo estable en Sociedades Cooperativas y Laborales, prorrogado para el año 2000 por el Decreto 23/2000, de 8 de febrero. • Programa de fomento de la contratación indefinida por las Pymes, Empresas de la Economía Social y otras entidades privadas de Extremadura (Decreto 217/2000, de 10 de octubre, desarrollado por la Orden de 27 de diciembre de 2000). • Programa de subvenciones a la formación, asociación y asistencia técnica en el ámbito de la economía social, para el período 2000-2003 (Decreto 236/2000, de 21 de noviembre). • Programa de ayudas, cofinanciadas por el FSE, a la contratación de personal técnico para la promoción de actuaciones de investigación y dinamización del tejido empresarial e industrial en el ámbito local (Decreto 220/00, de 24 de octubre, de la Consejería de Economía, Industria y Comercio). • Balance del Plan de Empleo e Industria 1996-1999, con datos sobre los resultados de los programas incentivadores de empleo. • Datos sobre el primer año de aplicación del Plan de Empleo 2000-2003 (sobre los expedientes tramitados en el año 2000 por el Servicio de Fomento del Empleo y sobre la situación presupuestaria, a 31 de diciembre de 2000, de la línea de ayudas del Servicio y las destinadas a la creación de empleo en sociedades cooperativas y laborales).

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Galicia	• Plan para el crecimiento económico y el empleo en Galicia, 1998-2001. • Balance de Resultados de 1998, sobre las políticas activas de empleo, elaborado por la Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude. • II Plan Integral de Apoyo a la Familia para 1998-2001. • Estímulo a la formación de mujeres en aquellas profesiones ligadas a sectores y actividades considerados prioritarios en Galicia (Orden de 23/12/99, de la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud). • Ayudas y subvenciones para el fomento del empleo, a través de los programas de cooperación con entidades locales, para el ejercicio del año 2000 (Orden de 28/12/99, de la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud). • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actividades de orientación profesional para el empleo y asesoramiento para el autoempleo (Orden de 18/02/00). • Bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones al programa de escuelas taller y casas de oficios (Orden de 4/02/00, por la que se desarrolla el Decreto 344/1999, de 23 de diciembre, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones al programa de escuelas taller y casas de oficios). • Bases reguladoras aplicables a la concesión de ayudas y subvenciones para la creación de empresas y la integración laboral de la mujer como estímulo a mujeres emprendedoras de Galicia (programa Emega) (Resolución de 29/02/00, del Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hombre y de la Mujer). • Acciones en el ámbito de la economía social dirigidas a la promoción y divulgación de cooperativas, sociedades laborales y sus asociaciones (Orden de 9/03/00, de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales). • Programas de fomento de la contratación y de la estabilidad en el empleo para el año 2000 (Orden de 13/03/2000). • Incentivos a la contratación laboral por reordenación del tiempo de trabajo que implique creación de empleo neto en Galicia (Decreto 47/1999, de 18 de febrero). Como desarrollo de dicho Decreto la Orden de 22 de marzo de 1999 establece las bases reguladoras del programa de los incentivos a la creación de empleo por reordenación del tiempo de trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia. La Orden de 13 de marzo de 2000 (Programa de fomento de la contratación para el año 2000) establece las bases reguladoras para el año 2000. • Programas de fomento del empleo en empresas de economía social, para la promoción del empleo autónomo y para la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo (Orden de 4/02/00).

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Madrid	• Acuerdo Marco para apoyar la estabilidad y la calidad en el empleo, firmado en 1997. • Ayudas a la creación de empleo estable (Orden 2/2000, de 3 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo). • Ayudas al empleo en municipios de menos de 10.000 habitantes (Orden 14/2000, de 4 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo). • Subvenciones a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de acciones formativas dirigidas a personas con discapacidad (Orden 6/2000, de 7 de enero, de la Consejería de Servicios Sociales). • Medidas de fomento del empleo de mujeres generado por el desarrollo de proyectos empresariales (Orden 53/2000, de 18 de enero, de la Consejería de Servicios Sociales). • Plan Especial de Formación y Empleo para mujeres, de febrero de 2000. • Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo, para 2000 (Orden 2437/2000, de 31 de marzo). • Subvenciones a entidades sin fines de lucro, durante el año 2000, para acciones dirigidas a la integración laboral de personas con especiales dificultades (Orden 466/2000, de 21 de marzo, de la Consejería de Servicios Sociales). • Ayudas para realizar acciones de Formación Profesional Ocupacional con compromiso de contratación para 2000 (Orden 2142/2000, de 24 de marzo). • Programas de Garantía Social en la Comunidad de Madrid (Orden 1207/2000, de 19 de abril, de la Consejería de Educación). • Convocatoria extraordinaria de concesión de ayudas para la realización de acciones de orientación profesional y de asistencia para el autoempleo, ampliando las necesidades de actuación programadas para el año 2000 (Orden 4339/2000, de 26 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo). • Subvenciones para el desarrollo de programas de Garantía Social, en las modalidades de formación-empleo, talleres profesionales y para alumnos con necesidades educativas especiales que se inicien durante el curso 2000/2001 y otras actuaciones complementarias (Orden 4132/2000, de 8 de agosto, del Consejero de Educación). • Datos de las medidas adoptadas en 1999 y 2000 en el marco de los apartados 3.º, 5.º y 6.º del Acuerdo Marco para apoyar la estabilidad y la calidad en el empleo, que se refieren a lo concerniente a la política general de la Función Pública.
Melilla	• Pacto Territorial por el empleo de la ciudad de Melilla, 1998-1999. Informe sobre su evolución.

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Murcia	• Acuerdo para la promoción de la formación, las relaciones laborales, el empleo y la actividad económica de la región de Murcia, 1996-1999. • Plan Industrial de la Región de Murcia, 1998-2006. • Programa de formación profesional ocupacional de 1999. • Programas de Fomento del Empleo para el año 2000 (Orden de 25/02/00). • Convocatoria de subvenciones a organizaciones de jóvenes empresarios, para el fomento de la iniciativa empresarial (Orden de 29/10/99, de la Consejería de Presidencia). • Programas de Fomento de la Economía Social y del Desarrollo Local para 2000 (Orden de 20/03/00). • Programa de Iniciación a la Empresa de Jóvenes Titulados (Acuerdo de 20/01/2000, del Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por el que se dispone la convocatoria de ayudas dirigidas a las empresas de Murcia, correspondiente al año 2000). • Subvenciones a las asociaciones de mujeres, de apoyo a la iniciativa rural y creación de empleo (Orden de 18/02/00, de la Consejería de Presidencia). • Subvenciones a la iniciativa empresarial de mujeres (Orden de 28/02/00, de la Consejería de Presidencia). • Convocatoria para la participación de Centros Colaboradores y Entidades en materia de formación profesional ocupacional, en la programación correspondiente al año 2000, de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Orden de 17/12/99, de la Consejería de Trabajo y Política Social). • Subvenciones para programas de garantía social, a iniciar durante el 2000, en las modalidades de Iniciación Profesional y para Alumnos con necesidades Educativas Especiales (Orden de 30/05/00, de la Consejería de Educación y Universidades). • Balance de 1999 y 2000 (Memorias de la Dirección General de Trabajo de cada ejercicio).

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
Navarra	• Plan de empleo de Navarra, 1999-2001. • Acuerdo sobre eliminación o reducción de horas extraordinarias, 26 de febrero de 1999. • Acuerdo sobre incentivos a la contratación por reordenación y reducción de tiempo de trabajo, de 26 de febrero de 1999. • Acuerdo entre el Gobierno de Navarra y las organizaciones sindicales UGT y CCOO para la implantación de la jornada laboral de 35 horas en las Administraciones Públicas de Navarra y Organismos dependientes, de 26 de febrero de 1999. • Ley Foral 6/1999, de 16 de marzo, de medidas públicas de apoyo a la implantación de la jornada laboral de 35 horas, y de reducción/reordenación del tiempo de trabajo. • Ley Foral 15/2000, de 29 de diciembre, de aplicación de las medidas públicas de apoyo a la implantación de la jornada laboral de 35 horas contenidas en la Ley 6/1999, a las empresas en cuyo capital participa, directa o indirectamente, la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos. • Decreto Foral 240/1999, de 21 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral 259/1992, de 20 de julio, por el que se establecen diversos programas de ayudas al empleo. • Plan tecnológico de Navarra, 2000-2003. • Plan de Lucha contra la Exclusión Social. Navarra 1998-2005. • Ayudas económicas para el desarrollo de los programas de incorporación socio-laboral destinados a personas en situación de exclusión social (Decreto Foral 100/2000, de 28 de febrero, de modificación del Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril). • Nuevo régimen de ayudas a la Inversión y el Empleo (Decreto Foral 361/2000, de 20 de noviembre). • Datos sobre las acciones realizadas en el primer semestre de 2000.

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
País Vasco	• Acuerdo sobre el Empleo, 1999-2003 (la vigencia es por tiempo indefinido, salvo denuncia por alguna de las partes, que podrá efectuarse a partir del 31 de diciembre de 2003, y deberá ser formulada con una antelación mínima de 6 meses). El Acuerdo sobre el Empleo engloba dentro del mismo, entre otros, *un Acuerdo Interconfederal de supresión de horas extraordinarias*. • Datos de las políticas activas de empleo 1997, 1998 y 1999. • Plan Interinstitucional de Empleo y Formación, 2000-2003. • Acuerdos para la estabilidad en el empleo, de 6 de julio de 1996, sin plazos. • Orden de 6/04/2000, por la que se publica la vigencia durante el año 2000 de las actuaciones subvencionables contenidas en el Decreto 232/96, de 1 de octubre, por el que se articulan las ayudas al reparto del tiempo de trabajo y la contratación indefinida. Los representantes de las Administraciones y los sindicatos vascos han suscrito el 17 de abril de 2000 un Acuerdo regulador de las condiciones laborales de las Administraciones forales y locales vascas (Arcepafe), hasta el año 2001, cuyas disposiciones afectan a unos 23.000 empleados y funcionarios públicos y reflejan, entre otras cosas, la reducción de jornada a 35 horas desde el 1/1/2001, aunque el pacto no abarca a los funcionarios de la Administración autonómica vasca. • Orden de 6/04/2000, por la que se publica la vigencia durante el año 2000 de las actuaciones subvencionables del Decreto 2/98, de 20 de enero, de ayudas a la contratación indefinida. • Orden de 6/04/2000, por la que se publica la vigencia durante el año 2000 de las actuaciones subvencionables contenidas en el Decreto 3/98, de 20 de enero, por el que se regula el programa de ayudas a la inserción laboral. • Orden de 6/04/2000, por la que se publica la vigencia durante el año 2000 de las actuaciones subvencionables contenidas en el Decreto 305/96, de 24 de diciembre, por el que se regulan las ayudas de fomento del autoempleo. • Programa de Formación Profesional Ocupacional (Decreto 83/2000, de 16 de mayo, del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social). • Orden de 1 de junio de 2000, que publica la vigencia para el año 2000 de la actuación subvencional contenida en el Decreto 267/99, de 29 de junio, por el que se regulan las medidas de apoyo al empleo. • Ayudas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo a las PYMES de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Programa PIE-PIPE 2000 (Orden de 30/06/00).

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
País Vasco	• Ayudas para la asistencia técnica, para la formación y para la incorporación de socios/as a empresas de Economía Social, y ayudas para la participación de trabajadores en empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Orden de 12/07/00, del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social). • Ayudas para la creación y consolidación de empresas encuadradas en los Nuevos Yacimientos de Empleo Vasco (Orden de 12/07/00). • Ayudas para el Programa de Prácticas de Formación en Alternancia del curso 1999/2000 (Orden de 31/07/00). • Ayudas a las Junior-Empresa para el año 2000 (Orden de 29/08/00). • Programa AUZOLAN, para la Inserción Laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión (Decreto 182/2000, de 19 de septiembre). • Programa de Empleo-Formación en actividades empresariales dirigido a jóvenes parados/as (Decreto 279/98, de 20 de octubre), convocado para el año 2000 por Orden de 20/09/00, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social. • Programa de Empleo-Formación en el ámbito local dirigido a personas paradas de larga duración (Decreto 50/1996, de 12 de marzo), convocado para el año 2000 por Orden de 20/09/00.

TABLA II-4 *(Continuación)*

ACUERDOS REGIONALES EN MATERIA DE EMPLEO Y BALANCES, 2000

Comunidades Autónomas	Acuerdos
La Rioja	• Pacto por el empleo en La Rioja, 1996. • Plan por el empleo y la reactivación económica de La Rioja, 1996-1999. • Acuerdo para la formación integral en La Rioja, 1997-1999. • Plan Integral de Personas con Discapacidad, 1996. • II Plan Integral de la Mujer, 1996-1999. • Ayudas a la promoción socio-laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social (Orden de 11/11/1998, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ADER). • Ayudas a la contratación estable en proyecto de amplia inserción laboral (Orden de 2/12/1998, de la ADER). • Bases Reguladoras para la concesión de ayudas al Programa de Fomento del Empleo Estable (Resolución del Presidente de la ADER, de 26 de junio de 2000). • Bases Reguladoras de la concesión de Ayudas al Programa de Fomento de la Economía Social (Resolución del Presidente de la ADER, de 26 de junio de 2000). • Bases Reguladoras de la concesión de Ayudas al Programa de Fomento del Autoempleo (Resolución del Presidente de la ADER, de 21 de junio de 2000, modificada por corrección de errores de la Resolución del Presidente de la ADER, de 26 de junio). • Bases Reguladoras de la concesión de Ayudas al Programa de Fomento del Empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y empresas normalizadas (Resolución del Presidente de la ADER, de 26 de junio de 2000). • Ayudas a proyectos de investigación dentro del I Plan Riojano de I+D para el año 2000 (Orden 67/2000, de 26 de junio). • Bases Reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a promover actuaciones de I+D (Resolución de 4/07/00, del Presidente de la ADER). • Programas para la formación y fomento del empleo en La Rioja (Resolución de 16 de noviembre de 2000, convocatoria para el año 2001). • Memoria de la *Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,* año 1999, con datos sobre sus políticas activas de empleo en dicho año.

Fuente: Elaboración propia.

3.3. Políticas activas y pasivas

3.3.1. **El papel de la formación**

La formación juega un papel esencial dentro de las políticas de fomento del empleo, ya que la educación supone mayores oportunidades en el mercado laboral y mejora la capacidad de inserción profesional de los desempleados, de ahí que las acciones de inserción previstas en los Planes Nacionales de Acción para el Empleo de España dediquen atención preferente a los programas de formación de desempleados y programas de formación-empleo.

El Pilar 1 del Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España del año 2000 se dedica íntegramente a mejorar la capacidad de inserción profesional, tal y como viene señalando la política europea de empleo desde el Consejo de Luxemburgo de 1997. Según la evaluación de resultados para la elaboración del Plan Nacional de Acción para el Empleo para el año 2001, el número total de personas que ha recibido algún tipo de formación a lo largo del año 2000 ha sido de 4.876.638 (4.948.740 si se incluye a los programas combinados de formación y empleo).

En el PNAE 2000 se quiere incrementar las posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, en particular en el ámbito de las nuevas tecnologías (directriz 6), ofreciendo formación y otras medidas a jóvenes en situación de desempleo así como a otros colectivos con mayor posibilidad de ser expulsados del mercado de trabajo, como las mujeres, los trabajadores de mayor edad o de baja cualificación. El Plan de Empleo prevé, por ejemplo, la incorporación de un módulo de formación en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en los programas formativos dirigidos a parados. En esta línea, se puso en marcha en el año 2000 un Plan denominado de «Intervención Rápida», con el que se pretende la introducción de un módulo de alfabetización informática en los contenidos de los programas formativos y de Escuelas Taller y Casas de Oficio[60]. Además, a través de la formación ocupacional se han incrementado respecto a 1999, las acciones formativas para mejorar la competencia de trabajadores desempleados en nuevas tecnologías, pasando de 80.963 alumnos formados específicamente en dicha especialidad en 1999 a 121.445 en el año 2000 (el 44,5 por 100 del total de alum-

[60] Fuente: *Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2001.*

nos de todas las especialidades). De la misma manera, a fin de facilitar la transición de la escuela a la vida laboral, se señala la necesidad de mejorar en las escuelas la formación en las nuevas tecnologías, dotando con equipos informáticos a todos los centros de enseñanza antes de finalizar el año 2001, para facilitar el acceso de los estudiantes a Internet, en coherencia con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, y puede afirmarse que, con las medidas puestas en marcha en el año 2000, se ha pasado a que el 80 por 100 de las escuelas de educación primaria y el 94 por 100 de las dedicadas a educación secundaria estén ya conectadas a Internet.

Renovación y balance del II Acuerdo Nacional de Formación Continua

Uno de los objetivos del Plan de Empleo del año 2000 fue desarrollar el sistema de formación continua en las empresas para la actualización y reciclaje de conocimientos de los trabajadores en activo, que les ayudase a avanzar en la carrera profesional. El número de alumnos beneficiarios de formación continua en el año 2000, según los datos provisionales contenidos en el PNAE 2001, ha sido de 2.039.502, cifra inferior a la estimada inicialmente por el PNAE 2000 (2.748.217 alumnos). Debe señalarse que ya se ha renovado el II Acuerdo Nacional de Formación Continua (1997-2000), cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2000, con la firma del III Acuerdo Nacional de Formación Continua, el 19 de diciembre de 2000, que tiene una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2004.

El nuevo modelo se completa, en relación con el sistema vigente hasta el 31 de diciembre de 2000, con una mayor incorporación de la Administración, a través de la constitución de una «Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo», formada por representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales y empresariales, que viene a sustituir a la antigua FORCEM, y se encargará de la gestión de la formación continua, aunque el pago de las ayudas se realizará por el INEM, previa resolución administrativa de su Dirección General. La Fundación recibirá y tramitará las solicitudes de ayudas, las valorará técnicamente, realizará la gestión documental y contable pertinente y remitirá sus propuestas al INEM. La formación continua seguirá manteniendo la unidad de caja de la cuota destinada a ese fin, y seguirá teniendo carácter estatal el control de los fondos.

Las principales modificaciones que introduce el nuevo Acuerdo Tripartito son la consideración específica de planes de formación para la economía social, compromisos presupuestarios específicos para dotar de formación a trabajadores que, ni ellos ni las empre-

sas en que trabajan, tienen la obligación legal de cotizar por la contingencia de formación profesional, como los trabajadores autónomos o los encuadrados en el Régimen Especial Agrario, asignación de la parte de la cuota de formación profesional que se destinará anualmente a formación de desempleados y a la formación de ocupados, de acuerdo con las necesidades de cada grupo y la evolución del mercado de trabajo, y la adecuación de las ayudas a las prioridades de formación de trabajadores marcadas en la Estrategia Europea de Empleo y el Fondo Social Europeo.

Una vez renovados los II Acuerdos Nacionales de Formación Continua, ya se dispone de indicadores sobre los resultados alcanzados en la gestión de la formación por parte de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) a lo largo del periodo cubierto por los II Acuerdos. Para analizar este balance debe recordarse que la demanda de formación continua gestionada hasta el año 2000 por FORCEM se estructura en Planes de Formación, por los que las empresas reciben ayudas económicas para la formación de sus trabajadores, Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, que contribuyen a la detección de necesidades formativas, y Permisos Individuales de formación, dirigidos a favorecer la obtención de una titulación en formación reglada por los trabajadores.

Mayor participación de las empresas en los Planes de Formación

Según datos de FORCEM[61], del total de Permisos Individuales de Formación aprobados para el curso 1999/2000, el 76,9 por 100 se orientaron a la realización de estudios universitarios y de postgrado, que suele ser el grupo que accede mayoritariamente a esta iniciativa de formación, frente al 8,4 por 100 para la Escuela Oficial de Idiomas, el 6,4 por 100 para Formación Profesional o el 0,5 por 100 dirigido a obtener la titulación de BUP. Pero, a pesar de ello, el interés de los trabajadores por los estudios de Formación Profesional ha supuesto un incremento del 16 por 100 respecto al curso 1998/99. En el marco de los Planes de Formación ha habido un incremento, respecto a la convocatoria anterior, del 27,1 por 100 de participación de las empresas en el sistema de formación continua, destacando las microempresas, con un incremento del 37,64 por 100, diez puntos por encima de la media. Según un estudio realizado por la CEOE[62]

[61] Fuente: FORCEM, *Boletín Estadístico,* noviembre-diciembre 2000 y enero-marzo 2001.

[62] CEOE, *La formación en las empresas españolas*, 2001 (con datos del año 2000).

entre empresas de más de diez trabajadores, la mayoría de las empresas (un 87 por 100) ha desarrollado actividades de formación para sus empleados durante el año 2000, cifra muy superior a la del año 1993, cuando este porcentaje era de 27 por 100; además, un 82 por 100 de las empresas cuenta con un Plan de Formación, y el 66 por 100 tiene un presupuesto específico para actividades de formación, porcentaje que sube al 72 por 100 en las empresas de más de 25 empleados, aunque hay que tener en cuenta que las empresas que realizan su formación con subvenciones o mediante los planes agrupados e intersectoriales de FORCEM no tienen presupuesto propio. Según estos datos el 63 por 100 de la formación se realiza en horas de trabajo, siendo superior este porcentaje en los casos de grandes y medianas empresas y muy inferior en las pequeñas. Las áreas en las cuales se han desarrollado más actividades de formación son Informática y Telecomunicaciones, Gestión y Administración, y Seguridad e Higiene en el trabajo, seguidas por Calidad, Idiomas y Comunicación, y Tecnologías propias de cada empresa o sector.

Aumenta la participación de colectivos prioritarios en acciones de FORCEM

En cuanto a los participantes formados, se han incrementado en un 5,2 por 100 respecto al año anterior, destacando el crecimiento de la participación en los Planes de Formación de los colectivos considerados como prioritarios en el Plan de Empleo, con riesgo de expulsión del mercado de trabajo, como son las mujeres (incremento del 12,94 por 100), los mayores de 45 años (5,37 por 100), y los trabajadores no cualificados (18,08 por 100). En relación con los colectivos beneficiarios de la formación continua y su relación con la población activa, habría que destacar que el grupo de edad de entre 25 y 35 años es el que está accediendo a ella por encima de su peso en la población ocupada. Con datos de 1999, representaban el 31 por 100 de la población ocupada y su tasa de participación en formación continua fue del 44 por 100. Los trabajadores mayores de 45 años, aún siendo un colectivo prioritario, pertenecen al grupo con mayor distancia entre la población ocupada que representan y la tasa de participación en este tipo de formación que registran, pues son el 29,7 por 100 de la población ocupada y tienen una tasa de participación en formación continua del 19,1 por 100.

Debe señalarse que durante la vigencia de los II Acuerdos la tasa de participación de las mujeres en formación continua ha experimentado un incremento progresivo: cuatro puntos entre 1997 y

1999, situándose prácticamente en el 40 por 100 en 1999[63], siendo el peso de su participación en estas acciones de formación continua seis puntos superior a la proporción que representan las mujeres en la población ocupada en ese año, situándose en más de ocho puntos en algunas Comunidades Autónomas, como La Rioja, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias, mientras que en otras, como Galicia, Asturias, Navarra y País Vasco, se encuentran con menos de tres puntos de diferencia. Las mujeres siguen participando en la formación continua en menor número que los hombres, dada su menor presencia en el mercado de trabajo, aunque a lo largo de 1999 más de medio millón de mujeres participaron en acciones formativas financiadas por FORCEM, lo que supone un incremento del 3 por 100 respecto a la anterior convocatoria de ayudas. La mayor proporción de participación de mujeres en acciones de formación continua tiene lugar en los sectores relacionados con la sanidad, la enseñanza y los servicios asistenciales y personales, llegando a situarse por encima del 90 por 100 de participación femenina sectores relacionados con la educación infantil y la atención a la tercera edad. El grupo de mujeres que más participa en estas acciones son las comprendidas entre 25 y 35 años, por encima del peso de su grupo en la población ocupada, lo que no sucede con las mujeres mayores de 36 años, aunque a partir de la convocatoria de 1999, este grupo de edad ha comenzado a acceder en la misma proporción que a la ocupación.

Continuación del II Programa Nacional de Formación Profesional

Por lo que se refiere a las actuaciones específicas de Formación Profesional durante el año 2000, se han seguido desarrollando en el marco del II Programa Nacional de Formación Profesional (PNFP), vigente hasta el año 2002. Los objetivos en este ámbito son diversos, destacando la necesidad de avanzar en un sistema flexible que garantice la conexión entre formación y empresa, a la vez que se desarrolla un sistema de formación continua en las empresas que permita el reciclaje de los conocimientos de los trabajadores en activo. Además, también se mantiene la prioridad de los trabajadores con mayor riesgo de expulsión del mercado de trabajo, como trabajadores con baja cualificación, de mayor edad o mujeres. En esta línea, para mejorar la capacidad de inserción profesional, el Plan de Empleo propone reforzar la oferta formativa en el terreno de los nuevos yacimientos de empleo, al igual que el PNFP, que contempla el desarrollo

[63] El año 1999 es el último con datos de participación certificados de acciones de formación continua financiadas por FORCEM.

de actividades que guarden relación con la calidad de vida, el medio ambiente, la seguridad y la salud laboral, los llamados servicios de proximidad, empleos emergentes y nuevos yacimientos de empleo.

Entre otras acciones previstas, se contempla el diseño de ciclos de Formación Profesional a distancia, de acuerdo con las familias profesionales más demandadas en el mercado de trabajo, y el incremento de la oferta de los programas de garantía social y de otros programas formativos dirigidos a los colectivos más vulnerables, como los inmigrantes, los discapacitados, los trabajadores de más edad o las mujeres. A este respecto debe apuntarse que el 70 por 100 de los desempleados inscritos en el INEM a 31 de diciembre de 2000 no tenía prácticamente estudios ni formación profesional cualificada, y sólo el 30 por 100 había cursado estudios de BUP, formación profesional o universitaria. Además, dentro de esa mayoría poco cualificada, el 44,7 por 100 eran hombres y el 55,3 por 100 mujeres. Además, el grupo de personas de más edad (50 o más años) suponían el 19,9 por 100 del total de los parados registrados, y dentro de ellos, los no cualificados son el 87,9 por 100 del total.

Aumenta el número de alumnos de garantía social

Los Programas de Garantía Social, dirigidos a jóvenes entre 16 y 21 años que no han alcanzado los objetivos mínimos de enseñanza obligatoria, ni poseen titulación alguna de Formación Profesional, han visto incrementado su número de alumnos en un 16,2 por 100 más que en el curso anterior, habiéndose pasado de 30.192 alumnos en el curso 1998/99 a 35.075 en el curso 1999/2000, perteneciendo el 64,5 por 100 de estos últimos a centros públicos[64]. Se estima que el número de alumnos del curso 2000/2001 pueda llegar a 42.502[65].

Continúan los programas de formación-empleo

Dentro del objetivo de modernizar los sistemas de aprendizaje, el PNAE 2000 preveía realizar a lo largo del año 552.032 acciones de los programas de formación con desempleados y formación-empleo (Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo), lo que suponía un incremento del 8,6 por 100 respecto a las acciones realizadas en 1999, y dentro de ellas las que más peso tenían eran las de formación de desempleados, con un 87,3 por 100 del total. Finalmente, se han realizado a lo largo del año 2000 un total de

[64] Fuente: MEC, *Estadística de la Enseñanza en España. Datos Avance 1999-2000*.

[65] Fuente: MEC, *Datos y Cifras Curso Escolar 2000-2001*.

534.757 acciones de formación con desempleados y formación-empleo, siendo las primeras el 86,5 por 100 del total[66].

En relación con las Escuelas-Taller y Casas de Oficios, a 31 de diciembre de 2000[67] había funcionado 1.041 centros y 36.711 alumnos-trabajadores, que recibían formación teórico-práctica en alguna de las 799 Escuelas-Taller (el 82,56 por 100 de los alumnos) o en una de las 242 Casas de Oficios (el 17,44 por 100). En las mismas fechas del año anterior este programa tenía 721 centros con 25.346 alumnos[68]. Debe señalarse que sólo el 38,31 por 100 de los alumnos eran mujeres, aunque en su mayoría estaban enmarcadas en familias profesionales ocupadas tradicionalmente por hombres. Respecto al Programa de Talleres de Empleo, puesto en marcha en 1999, a 31 de diciembre de 2000 había 458 talleres funcionando, con 9.967 participantes (el 43,7 por 100 desempleados mayores de 40 años, y el 58,85 por 100 mujeres). En el marco de ese programa, a lo largo del año 1999, se pusieron en marcha 172 talleres con 4.213 participantes[69].

En las Escuelas-Taller, el 70 por 100 de sus alumnos de 1999 ha encontrado trabajo en el año 2000, aunque este porcentaje en el caso de las mujeres es bastante inferior, pues encontraron empleo el 80 por 100 de los participantes varones y sólo el 58 por 100 de las mujeres[70].

Descenso de alumnos de FPO del INEM, incremento en los cursos gestionados por CCAA

Por último hay que referirse a la formación profesional ocupacional de desempleados, impartida a través del INEM y de las Comunidades Autónomas que tienen transferida la gestión. A tal fin, lo primero que habría que señalar es que el número de alumnos formados a través de las acciones del INEM está experimentando una gradual disminución en los últimos años debido al traspaso de sus anteriores competencias de gestión en esta materia a las Comunidades Autónomas[71]. En el año 2000 tan solo 19.361

[66] Fuente: *Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2001*.

[67] INEM, *Perfil de Usuario*, 2000 4.º trimestre. No se incluyen datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña (con la gestión transferida desde 1998) ni se incluye una gran parte de centros, y sus alumnos participantes, iniciados en el año 2000 en la Comunidad Valenciana (con la gestión transferida desde el 1 de enero de 1999).

[68] INEM, *Perfil del Usuario,* 1999 4.º trimestre. No se incluyen datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

[69] Fuente: *Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2000*.

[70] Fuente: *Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2001*.

[71] La gestión de formación profesional ocupacional está transferida en las Comunidades Autónomas de: Cataluña (1991), Valencia (1992), Galicia (1993), Andalucía (1993), Canarias (1994), Navarra (1998), Extremadura (1998), Aragón

alumnos han sido formados por el INEM[72], mientras que en 1998 y 1999 formó a 95.691 y 31.598 alumnos, respectivamente. Ahora bien, teniendo en cuenta todo el territorio nacional, en el año 2000 finalizaron en total 11.765 cursos de formación profesional ocupacional (10.209 fueron gestionados por las Comunidades Autónomas), y se formaron 152.840 alumnos, 133.479 a través de los cursos gestionados en las Comunidades Autónomas. El 58,6 por 100 del total de alumnos formados fueron mujeres, dado que cuentan con mayor participación que los hombres según aumenta en nivel académico. Por familias profesionales, el 80,12 por 100 de los alumnos/as se formó en el sector servicios, seguido lejanamente por la industria (14,62 por 100).

Mejora la inserción de los alumnos de FPO

En relación con el seguimiento de los alumnos formados en 1999 en el territorio gestionado por el INEM, encontraron empleo en el año 2000 aproximadamente el 72 por 100 de los mismos, por lo que cabe decir que ha mejorado frente al año anterior, pues en 1999 fue del 69,1 por 100[73]. Ha sido superior el porcentaje de colocación de los hombres (78,22 por 100) frente al de las mujeres (66,51 por 100), a pesar de que el 55,32 por 100 de los alumnos eran mujeres. El grupo de alumnos mayoritario que recibió formación en el año 1999 fue el comprendido entre los 18 y 24 años, y encontraron trabajo en el año 2000 el 76,81 por 100 de los mismos. Atendiendo al nivel académico, un 30 por 100 de los alumnos que siguieron alguno de los cursos de formación ocupacional poseían el graduado escolar, EGB o bachiller elemental, y consiguieron un empleo el 72,14 por 100. Sólo el 2,5 por 100 de los alumnos no poseían estudios, y se colocaron el 62,87 por 100. Por familias profesionales, las de construcción y sector industrial fueron las que presentaron mejores resultados, si bien el sector servicios fue donde más alumnos se formaron (el 77 por 100 del total). Las ramas de comercio, transportes y comunicaciones, fabricación de equipos mecánicos, mantenimiento y reparación, y edificación y obras públicas obtuvieron todas tasas de inserción superior al 80 por 100, e incluso minería e industria pesada y construcciones mecánicas alcanzaron el 100 y 90 por 100, respectivamente (cuadro II-17).

(1998), Islas Baleares (1998), Castilla-La Mancha (1998), Madrid (1999), Cantabria (1999), La Rioja (1999), Castilla y León (1999), Murcia (1999) y Asturias (2000).

[72] Fuente: INEM, *Estadísticas de Formación Ocupacional*, diciembre 2000.

[73] Véase Memoria CES 1999.

CUADRO II-17

ALUMNOS PARADOS FORMADOS Y COLOCADOS POR FAMILIA PROFESIONAL, GESTIÓN INEM Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

(Número de alumnos anual y porcentaje de los colocados en el año siguiente)

Sector/familia profesional	Inserción 2000					
	Gestión INEM			Gestión CCAA		
	Formados en 1999	Colocados en 2000	Tasa de inserción	Formados en 1999	Colocados en 2000	Tasa de inserción
Sector servicios	**24.335**	**16.809**	**69,07**	**185.761**	**122.502**	**65,94**
Administración y oficinas	7.264	4.721	64,99	55.044	35.498	64,49
Comercio	1.513	1.214	80,23	14.250	10.089	70,80
Docencia e investigación	920	731	79,45	5.434	3.573	65,75
Información y manifestaciones artísticas	148	101	68,24	2.117	1.378	65,09
Sanidad	997	638	63,99	11.936	7.592	63,61
Seguros y finanzas	329	252	76,59	2.318	1.524	65,75
Servicios a la comunidad y personales	918	558	60,78	14.454	9.314	64,44
Servicios a las empresas	9.541	6.452	67,62	61.055	39.777	65,15
Transportes y comunicaciones	1.589	1.330	85,70	7.063	5.579	79,00
Turismo y hostelería	1.116	812	72,75	12.090	8.178	67,64
Industria	**5.529**	**4.484**	**81,09**	**32.642**	**22.664**	**69,43**
Artesanía	113	63	55,75	2.436	1.058	43,43
Automoción	421	326	77,43	3.425	2.693	78,63
Fabricación de equipos mecánicos	825	698	84,60	3.312	2.652	80,10
Industrias alimentarias	317	206	64,98	2.381	1.769	74,30
Industrias gráficas	56	34	60,71	1.767	1.099	62,20
Industria pesada y construcciones metálicas	1.713	1.550	90,48	3.087	2.582	83,64
Industrias químicas	207	163	78,74	1.057	721	68,21
Industria textiles, piel y cuero	57	33	57,89	3.456	1.877	54,31
Industrias de madera y corcho	191	126	65,96	2.352	1.395	59,35
Industrias manufactureras diversas	—	—	—	103	55	53,4
Minería y primeras transformaciones	1	1	100,0	168	145	86,31
Montajes e instalaciones	904	710	78,53	5.063	3.651	72,11
Mantenimiento y reparación	677	542	80,05	3.611	2.640	73,11
Producción, transformación y distribución de energía y agua	47	32	68,08	424	327	77,12
Construcción	**1.374**	**1.116**	**81,22**	**6.357**	**4.633**	**72,88**
Edificación y Obras Públicas	1.374	1.116	81,22	6.357	4.633	72,88
Agrario	**360**	**262**	**72,77**	**4.924**	**2.952**	**59,95**
Agraria	360	262	72,77	4.539	2.728	60,12
Pesca y acuicultura	—	—	—	385	224	58,18
Total	**31.598**	**22.671**	**71,74**	**229.684**	**152.751**	**66,51**

Fuente: Datos de Subdirección General Servicios Técnicos, Unidad Evaluación Oferta del INEM.

En relación con la colocación de los alumnos formados en el ámbito autonómico, ha conseguido un trabajo en el año 2000 el 66,5 por 100 de los mismos, algo por encima de la tasa de inserción de 1999, y los mejores resultados se han producido en Navarra, Islas Baleares y Cataluña, con tasas de inserción del 74,97, 74,43 y 74,09 por 100 respectivamente, mientras que en Galicia y Andalucía no llega al 60 por 100 la proporción de alumnos colocados (cuadro II-18). Las mujeres son mayoría entre los alumnos formados (el 62,4 por 100), pero su porcentaje de colocación es inferior al de los hombres (63,57 por 100 frente a 71,36 por 100). Atendiendo a la edad de los alumnos formados, el 41,6 por 100 estaban comprendidos entre los 18 y 24 años, es decir, 95.636 alumnos, y entre ellos se colocaron en el año 2000 el 72 por 100. Según el nivel académico, al igual que pasa en el territorio del INEM, la mayor proporción de alumnos poseían el graduado escolar, EGB o bachiller elemental (un 35,1 por 100), siendo su tasa de inserción del 68,01 por 100. Por familias profesionales, al igual que ocurre en la formación gestionada por el INEM, los sectores que mejores

CUADRO II-18

ALUMNOS PARADOS FORMADOS Y COLOCADOS, GESTIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1999-2000

Comunidades Autónomas	Inserción 1999			Inserción 2000		
	Formados en 1998	Colocados en 1999	Tasa de inserción	Formados en 1999	Colocados en 2000	Tasa de inserción
Andalucía	18.070	10.977	60,7	36.011	21.424	59,49
Aragón	4.698	3.277	69,8	10.798	7.847	72,67
Islas Baleares	2.291	1.649	72,0	3.121	2.323	74,43
Canarias	1.279	760	59,4	15.741	10.421	66,20
Cantabria	—	—	—	4.702	3.271	69,57
Castilla-La Mancha	841	534	63,5	9.600	6.784	70,67
Castilla y León	—	—	—	15.751	10.052	63,82
Cataluña	25.702	18.746	72,9	17.101	12.670	74,09
Valencia	39.174	26.058	66,5	38.575	25.240	65,43
Extremadura	6.893	4.262	61,8	10.627	7.425	69,87
Galicia	12.503	7.002	56,0	16.203	9.134	56,37
Madrid	—	—	—	38.322	26.866	70,11
Murcia	—	—	—	5.301	3.501	66,04
La Rioja	—	—	—	1.846	1.306	70,75
Navarra	4.795	3.079	64,2	5.985	4.487	74,97
Total	**116.246**	**76.344**	**65,7**	**229.684**	**152.751**	**66,51**

Fuente: Datos facilitados por la Subdirección General de Servicios Técnicos, Unidad de Evaluación de la Oferta del INEM.

resultados obtienen son industria y construcción, aunque sigue siendo el sector servicios el que más alumnos forma en las Comunidades Autónomas (185.761 alumnos, es decir, el 80,8 por 100 del total). Por ramas profesionales, en el año 2000 han obtenido empleo más del 80 por 100 de los alumnos que realizaron cursos de formación profesional gestionados por las Comunidades Autónomas durante 1999 en las ramas de fabricación de equipos mecánicos, industria pesada y construcciones mecánicas, y minería y primeras transformaciones (cuadro II-17).

3.3.2. **Otras políticas de generación de empleo**

Desde el ámbito europeo se viene reclamando la necesidad de potenciar las nuevas actividades y servicios en las que pueden surgir nuevas oportunidades de empleo, como las que se pueden generar en el ámbito local, la economía social, el ámbito rural o a través de la labor que desempeñan las organizaciones no gubernamentales o las fundaciones, entre otras entidades sin ánimo de lucro. Ello resulta especialmente interesante en relación con las posibilidades de ofrecer nuevos empleos a los jóvenes y las mujeres, entre otros colectivos con riesgo de exclusión del mercado de trabajo.

Iniciativas locales de empleo

Cada vez se es más consciente, tanto a escala europea como a escala nacional, de las oportunidades que existen a nivel local para fomentar el empleo, lo que ha incitado a la Unión Europea a apoyar distintos trabajos experimentales basados en el concepto de las «Iniciativas Locales de Desarrollo y Empleo» (ILDE) y a utilizar instrumentos de apoyo al empleo local, especialmente para generar puestos de trabajo para colectivos con mayores dificultades de inserción laboral en uno de los ámbitos declarados Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) por la Comisión Europea[74]. Según la Comisión Europea[75], son las iniciativas locales las más aptas para crear empleos adaptados a estos nuevos yacimientos, porque pueden captar mejor la diversidad propia de cada cultura y cada organización socioeconómica.

[74] «*Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI»,* CE (1993), también denominado «Libro Blanco de Delors».

[75] Comunicación de la Comisión relativa a una estrategia europea de estímulo a las iniciativas locales de desarrollo y empleo, COM (95) 273 final.

Las directrices de las políticas de empleo de 1998 y 1999 ya incluían disposiciones dirigidas a aprovechar todas las fuentes potenciales de empleo, como las posibilidades ofrecidas a nivel local y por las nuevas actividades relacionadas con las necesidades no satisfechas por el mercado o con nuevas formas de organizar los servicios de la vida diaria o de mejora de calidad de vida. La promoción del espíritu emprendedor a escala local resulta un factor clave para configurar los nuevos mercados de proximidad. En este sentido, para favorecer la generación de empleo en el entorno local, se conceden subvenciones y ayudas dirigidas al fomento del desarrollo local y el impulso de proyectos calificados como iniciativas locales de empleo[76], y en el año 2000 se han realizado 1.965 contratos indefinidos apoyados por este programa, con un coste de 1.726 millones de pesetas, y se ha financiado la contratación de 2.154 Agentes de Empleo y Desarrollo Local, con un coste de 7.485 millones de pesetas[77]. Las directrices para el año 2000 refuerzan aún más estas disposiciones (directriz 12), reconociendo explícitamente el papel de las autoridades locales y regionales, así como el de los servicios públicos de empleo en la detección de las oportunidades de empleo locales y en la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo locales. El desarrollo local del empleo constituye también una prioridad horizontal en el nuevo Reglamento del Fondo Social Europeo.

Las entidades locales cuentan con una serie de ventajas a la hora de fomentar el empleo de manera más eficaz, como son su proximidad con todos los agentes económicos de su zona geográfica, su cercanía a las necesidades de los ciudadanos, el poder económico, y su estrecha relación con el sistema educativo e infraestructuras, además de que suelen tener competencia en una amplia serie de ámbitos, como asistencia social, educación, salud, vivienda, medio ambiente, o cultura y actividades de ocio, todos ellos relacionados con los nuevos yacimientos de empleo, por lo que la labor que ejerzan tendrá gran incidencia sobre el empleo local.

[76] Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 15 de julio de 1999, sobre bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I + E.

[77] Fuente: *Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2001*.

Servicios de atención a la tercera edad: nueva fuente de empleos

En esta línea, están surgiendo nuevas oportunidades de empleo relacionadas con los servicios de atención a la tercera edad, especialmente los de carácter asistencial, así como nuevas actividades de ocio, como consecuencia del envejecimiento progresivo de la población y la prolongación de la vida no laboral. El 28 por 100 de los ancianos, fundamentalmente mujeres, declaran necesitar algún tipo de ayuda o cuidados especiales, pero sólo el 1,82 por 100 son actualmente usuarios de los servicios públicos de Ayuda a Domicilio, sin olvidar además que esta proporción crece al ritmo del 5 por 100 anual, por lo que esta actividad que, en la actualidad, según datos del IMSERSO[78], genera aproximadamente 26.000 empleos en España, dará trabajo a más de 50.000 personas en el año 2010 y aproximadamente a 100.000 en el año 2020. En España existe un sólido sistema de apoyo informal, familiar en su mayoría, en el que especialmente las mujeres (el 82,9 por 100 de los casos) realizan las tareas de cuidado, pero esta situación cabe suponer que no será siempre igual, ya que las nuevas tendencias demográficas, el reducido tamaño medio familiar, la proliferación de hogares unipersonales, las parejas sin hijos, y la mayor incorporación de la mujer al mundo laboral, van a suponer cambios en dicho sistema de atención informal. El previsible aumento de la demanda de cuidadores que provengan de la propia familia chocará con la menor disponibilidad de los mismos, por lo que se hace necesaria una verdadera asistencia formal, en domicilio o en comunidad, lo que podría ir acompañado de la creación de empleo local. Debe señalarse que este tipo de actividades se ven desarrolladas en numerosas ocasiones por instituciones sin ánimo de lucro, que desempeñan un importante papel en el desarrollo de Iniciativas Locales de Empleo.

Nuevos empleos en el sector medioambiental

De la misma manera, el medio ambiente se ha convertido en un área relevante de empleo a nivel europeo y está reconocido como fuente de nuevos empleos[79], y desde los Planes Nacionales de Empleo se está empezando a tomar medidas para el fomento del empleo medioambiental, incentivando la actividad de las empresas

[78] IMSERSO (MTAS), *Informe 2000 sobre «Las personas mayores en España»,* en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

[79] *«La UE apuesta por el empleo ecológico»,* Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente, 2000.

relacionadas con diferentes campos de este sector. Los puestos de trabajo relacionados con el medio ambiente abarcan una amplia gama de actividades, destacando el tratamiento de aguas residuales, la eliminación de residuos, el control de la contaminación atmosférica, la rehabilitación de suelos y la protección contra el ruido. Según la Comisión Europea, determinados sectores presentan perspectivas positivas desde el punto de vista de la relación entre empleo y medio ambiente, debiendo disfrutar de medidas políticas de apoyo a nivel europeo, nacional y local: industria manufacturera, transportes, energía, agricultura y nuevas demandas de los consumidores.

Se estima que al finalizar el año 2002 el sector medioambiental podría dar trabajo a más de 220.000 profesionales, lo que supone la creación de 100.000 puestos de trabajo en cuatro años, ya que en 1998 eran 135.000 los empleados en actividades medioambientales[80]. Debe señalarse que la mayor demanda de empleo en el sector se centra en el nivel de titulados universitarios, que suponen un 45 por 100 de las previsiones de nuevos empleos, y la cuarta parte de la oferta de empleo prevista corresponde a formación profesional de grado superior, especialmente medio, que actualmente ocupa el 20 por 100 de los profesionales dedicados al medio ambiente. Un 18 por 100 de los futuros empleos corresponderán a trabajadores sin cualificación previa, lo que supone una disminución importante pues en la actualidad son el 39 por 100 de los profesionales del sector, debido principalmente al elevado número de empleos de esta categoría en las empresas de servicios municipales, limpieza viaria y gestión de residuos urbanos. En lo que respecta a los subsectores que actualmente incluyen mayor número de empresas en España son, por este orden, gestión de agua (31 por 100), gestión de residuos urbanos (15 por 100), gestión de residuos peligrosos (11 por 100), y el resto (33 por 100) se distribuye entre el resto de los subsectores, destacando entre ellos el aumento de peso de los subsectores dedicados al control de la contaminación atmosférica y la implantación de sistemas de gestión en la empresa (prevención y gestión), cada uno de los cuales suponen actual-

[80] Fuente: *«Plan Nacional de Valorización Leonardo Da Vinci (1995-1999). Nuevas Actividades, Nuevos Yacimientos de Empleo, Desarrollo del Espíritu Emprendedor»*, Instituto Nacional de Cualificaciones (Colección Estudios: Serie Programa Leonardo Da Vinci).

mente un 7 por 100 de las empresas. Los cuatro subsectores que más tirarán del empleo en el futuro y crearán más puestos de trabajo serán los de normativa y control de contaminación, gestión de residuos, gestión del agua y consultoría.

Desarrollo rural y empleo

La nueva política de desarrollo rural de la Unión Europea (política agrícola y rural común para Europa-PARCE), incluida en la Agenda 2000, tiene como objetivo fundamental revitalizar el tejido rural, para evitar el declive de la población agraria y transformar áreas rurales en zonas más atractivas para trabajar y vivir en ellas. La facilidad de acceso a los servicios adaptados a las necesidades locales (escuelas, centros sanitarios, transportes, tiendas, etc.), es un pilar esencial que sostiene las comunidades rurales, pero hay que atender a otras demandas sociales para posibilitar el mantenimiento de la población rural y hacer regresar a los jóvenes y a las familias, además de suponer oportunidades de creación de nuevos puestos de trabajo. En esta línea, es esencial la labor que hagan los entes locales, que son los más interesados en proporcionar oportunidades de empleo y servicios de buena calidad que aseguren la permanencia de sus habitantes en la localidad.

El principal instrumento de la política comunitaria en materia de desarrollo rural es la iniciativa LEADER, actualmente en su tercera convocatoria como LEADER+, para el periodo 2000-2006[81], siendo su objetivo promocionar el desarrollo rural en todas las zonas predominantemente rurales de la Unión Europea, apoyando proyectos de desarrollo concebidos y dirigidos por agentes locales del mundo rural. Se introducen unos objetivos prioritarios a escala europea, en los que se deben centrar los planes locales de desarrollo: utilización de las tecnologías de la información en las zonas rurales, mejora de la calidad de vida en el medio rural, introducción de valor añadido en los productos locales y optimización del uso de los recursos naturales y culturales. La iniciativa integra una se-

[81] La asignación presupuestaria de LEADER+ se ha fijado por la Comisión Europea en 2.020 millones de euros en total, un 15 por 100 más que en LEADER II. Según la nueva política de desarrollo rural, y a diferencia de los antecesores LEADER I y II, la iniciativa LEADER+ considera subvencionables todas las zonas rurales, aunque mantiene los rasgos característicos de las primeras iniciativas, como la insistencia en las estrategias integradas que pretenden explotar todo el potencial de la economía local, la participación activa de la población local, y la cooperación y el establecimiento de redes entre las zonas rurales.

rie de medidas, destacando las acciones de innovación rural (línea B), esto es, apoyo técnico al desarrollo rural, formación profesional y ayudas a la contratación, turismo rural, pymes, artesanía y servicios, valorización y comercialización de la producción agraria y conservación y mejora de los recursos patrimoniales y medioambientales. De la misma forma, se concede prioridad a las estrategias basadas en la igualdad de oportunidades para las mujeres y jóvenes de las zonas rurales.

Mejora el empleo en diversas zonas rurales

En España, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales[82], se está produciendo una cierta evolución positiva en materia de empleo en diversas áreas rurales, ligada a la aparición de nuevas actividades productivas, el fomento de los servicios culturales y de ocio, la recuperación del patrimonio artístico, el desarrollo del turismo rural y la cultura autóctona y de las manufacturas industriales o artesanales, junto con el reforzamiento de las propiamente agrícolas, todo ello favorecido, principalmente, por la existencia de ayudas públicas, la formación e información para emprender estas nuevas actividades, generadoras a su vez de nuevas ocupaciones.

Entre las actividades de desarrollo rural que están generando mayor nivel de empleo se sitúa el turismo rural, seguido de las nuevas fábricas, talleres e industrias rurales. A este respecto debe recordarse que desde 1996 existe también en España, además del programa LEADER, el Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales de España (PRODER), dirigido a regiones que no sean beneficiarias de la medida B de la Iniciativa Comunitaria, y sus ayudas a la inversión productiva tienen como objetivo el fomento del turismo rural, de las pequeñas empresas, artesanía y servicios locales, de la valorización *in situ* y comercialización de la producción forestal local, así como la valorización del patrimonio rural. Actualmente hay 101 acciones PRODER en toda España, 27 de ellas en Andalucía, seguido de Castilla y León con 21. Dentro del marco de la iniciativa LEADER, en el periodo 1994-1999 existían 133 Programas de Innovación Rural. Esta Iniciativa ha generado en dicho periodo 7.000 empleos, con una inversión de 60.000 millones de pesetas en total, pero como las ac-

[82] MTAS, Observatorio Ocupacional: *El desarrollo del ámbito rural y su incidencia en la generación de empleo*, 2000.

ciones no productivas crean bastante empleo indirecto difícil de medir, se calcula que se han generado y mantenido entre PRODER y LEADER unos 20.000-30.000 empleos.

Persisten obstáculos para la participación de la mujer en el desarrollo rural

Aunque el desarrollo rural eficaz crea una amplia gama de posibilidades de servicios y actividades de alta calidad, abriendo nuevas perspectivas de empleo a las mujeres y jóvenes, que en otras condiciones, quizás optasen por abandonar las zonas rurales, según ha señalado la Comisión Europea persisten obstáculos que dificultan la plena participación de la mujer en el desarrollo local[83], obstáculos a los que deben hacer frente los programas de desarrollo rural, creándose iniciativas específicas a favor de las mujeres así como localizándose sectores económicos con posibilidades de desarrollo y capacidad de contribuir de forma especial al empleo femenino.

La Comisión destaca que el empleo «oficial» (a menudo puestos en fábricas de la industria de transformación alimentaria o trabajos a domicilio para la industria textil) está sustituyendo a las actividades familiares agrarias no remuneradas, y que en la mayoría de las zonas rurales los puestos de calidad escasean, caracterizándose el empleo de la mujer por tratarse de puestos mal retribuidos y poco considerados, por debajo de sus cualificaciones y capacidades, siendo cada vez más frecuente que sus únicas posibilidades consistan en empleos temporales o a tiempo parcial. En España el trabajo ocasional o temporal remunerado se está convirtiendo en una característica del empleo femenino en zonas rurales, donde un 48,8 por 100 de las mujeres de entre 16 y 69 años tenían trabajo en 1998, frente al 31,7 por 100 de todo el país. Un dato relevante es que las agricultoras son las que tienen jornadas de trabajo más largas, lo cual dificulta la combinación del trabajo y formación con las responsabilidades familiares, y además, a pesar de la contribución de las mujeres rurales al desarrollo de sus zonas y comunidades, se encuentran siempre en minoría en todos los procesos de adopción de decisiones y planificación, especialmente a escala nacional y regional.

[83] *«Participación de las mujeres en el desarrollo local. Un futuro cierto para Europa»*, Comisión Europea, Dirección General de Agricultura, 2000.

Fomento de la economía social

Asimismo, las directrices europeas de la política de empleo hablan de la necesidad de fomentar la economía social para crear nuevos puestos de trabajo, especialmente a nivel local y en nuevas áreas de ocupación, pues se considera en la actualidad una vía de explotación de nuevas fuentes de empleo, en el sector servicios y en otros sectores emergentes, respondiendo a los nuevos yacimientos de empleo, lo cual se viene recogiendo en los sucesivos Planes Nacionales de Acción para el Empleo, en el marco del Pilar II sobre desarrollo del espíritu de empresa. Aunque entre los objetivos de este sector económico no se encuentra en general la creación de puestos de trabajo, lo cierto es que el crecimiento que está experimentando en los últimos años tiene como consecuencia indirecta la creación de nuevos empleos.

De acuerdo con algunas definiciones no pacíficamente aceptadas, la economía social englobaría a las cooperativas, sociedades laborales y otras entidades[84], caracterizadas por la importancia central que tienen en su actividad la atención a las necesidades de las personas, la gestión democrática, la solidaridad y el objetivo de dedicar los beneficios fundamentalmente a favorecer la propia actividad. Ahora bien, no se ha logrado todavía alcanzar el consenso sobre la expresión «Economía Social» a nivel europeo, debido a las diferencias normativas entre los Estados miembros.

La Economía Social es un sector clave para las políticas activas de empleo tendentes al «desarrollo local sostenible», pues está manifestando una relación estrecha con la dimensión comunitaria local, gran capacidad de innovación y de creación de nuevas formas empresariales (como cooperativas y empresas sociales o centros especiales de empleo), capacidad para afrontar nuevas necesidades sociales no resueltas por el sector público, consecuencia de cambios socio-demográficos y laborales, así como capacidad para responder a la inclusión laboral de colectivos vulnerables con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

[84] La VI Conferencia Europea de Economía Social utilizó las siglas CMAF para definir a las entidades que consideraban incluidas en el término de economía social: cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones, basadas en los principios de solidaridad, que prestan especial atención a los colectivos vulnerables.

Fuerte crecimiento de las entidades de Economía Social

En España la contribución de la Economía Social al PIB nacional es del 6 por 100, y en el año 2000 las sociedades laborales y cooperativas han creado empleo 4,2 puntos porcentuales por encima del crecimiento global que se ha dado en España en puestos de trabajo. El crecimiento de la Economía Social ha sido del 9 por 100, medido tan sólo en términos del empleo que han creado las cooperativas y las sociedades laborales durante el tercer trimestre del año 2000 sobre el mismo periodo de 1999, cifra que es significativamente superior al crecimiento de la población ocupada, situada en esas mismas fechas en torno al 3 por 100, y el empleo sobre el 4,8 por 100[85].

La Economía Social está teniendo una evolución positiva, y ha pasado de 25.710 sociedades laborales y cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social en 1996 a un total de 35.269 en 2000, lo que supone un crecimiento del 37,18 por 100 en el periodo 1996-2000. El empleo que a diciembre de 2000 mantenían en España las cooperativas y sociedades laborales supone el 2,42 por 100 del total del empleo nacional, calculado en base a los datos de personas en alta en la Seguridad Social. El número de personas que trabajan en ellas ascendía a diciembre de 2000 a 353.933, lo que supone un incremento respecto a 1996 del 32,4 por 100 (86.599 trabajadores más)[86]. Atendiendo a cada tipo de sociedad, a finales del año 2000 había 23.334 cooperativas, ocupando a 269.063 personas, que implican un incremento en el periodo analizado del 14,4 por 100 y del 25,45, respectivamente. Las sociedades laborales han pasado a ser más del doble, pues han pasado de 5.309 en 1996 a 11.935 en el año 2000, y su crecimiento del empleo ha sido del 60,6 por 100, ocupando a 84.870 trabajadores en el año 2000 frente a 52.857 que había en 1996. El elevado crecimiento de las sociedades laborales en estos últimos años puede deberse, en gran medida, a la entrada en vigor en abril de 1997 de la Ley de Sociedades Laborales, que incorporó la figura de la sociedad limitada laboral, con menores exigencias constitutivas que la sociedad anónima laboral.

[85] Datos facilitados por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES).

[86] Datos del MTAS, Dirección General de Economía Social y Fondo Social Europeo.

Empleo creado por organizaciones sin ánimo de lucro

Otro ámbito donde están apareciendo nuevos empleos procede del sector de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro, que no son un fenómeno nuevo pero que están incrementando mucho su número y actividades, por lo que va en aumento su importancia social. De ahí que desde algunos ámbitos se les llegue a contemplar como un sector con gran potencial de generación de empleo, encaminado a servicios de bienestar social, conocido como «Tercer Sector» (u Organizaciones No Gubernamentales-ONG). Así, según la Comisión Europea[87], el Tercer Sector o Tercer Sistema se caracteriza por la concentración de agentes económicos sin fines lucrativos que son independientes, tanto del sector público como del privado, presentan formas de organización más participativas y prestan un servicio a la colectividad. Este tercer sector constituye actualmente una parte importante de la oferta de actividades y servicios en los nuevos yacimientos de empleo, especialmente en los relacionados con la atención a las personas, la cultura y el ocio. A pesar de ello, es un terreno heterogéneo, sin límites claramente definidos, y habría que determinar con exactitud qué tipo de entidades se incluyen en él para poder conocer su crecimiento real y su incidencia en el empleo.

No obstante, la importancia en España del empleo en las ONG y Fundaciones es aún moderada, ya que el empleo en actividades de carácter asistencial (175.921 trabajadores contratados) supone un 1,3 por 100 del total de las personas ocupadas, porcentaje que se eleva al 2,5 por 100 si se consideran los asalariados del sector servicios[88]. Hay que destacar que el 73,6 por 100 de estos trabajadores tienen entre 25 y 40 años, que el 74,7 por 100 de las personas que ejercen su actividad remunerada en estas organizaciones son mujeres, y el 62,8 por 100 son titulados universitarios. Un rasgo a tener en cuenta es su eficacia a la hora de crear, tanto en los ámbitos tradicionales como en otros más novedosos, puestos de trabajo que atienden a las necesidades cambiantes de la sociedad, al tiempo que aumenta la empleabilidad de ciertos grupos vulnerables

[87] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones «Actuación Local a favor del Empleo-Una dimensión local para la Estrategia Europea de Empleo», COM (2000), 196 final, 7 de abril de 2000.

[88] Fuente: MTAS, Observatorio Ocupacional: *Las ONG´s y las Fundaciones y su contribución al empleo,* 2000 (los datos de este estudio se remiten a diciembre de 1999).

y socialmente excluidos[89], todo ello en conexión con el desarrollo de Iniciativas de Empleo Local[90].

Importante papel del voluntariado

Su papel como generadoras de empleo no debe ocultar el que desempeñan las actividades de voluntariado en las entidades no lucrativas, pues se estima que, trabajando en ellas 485.496 personas, el 63,8 por 100 (309.575 personas) lo hacen como voluntarios. En estos voluntarios se apoyan más las asociaciones (el 82,3 por 100 utiliza voluntarios) que las fundaciones (el 39,9 por 100 sólo trabaja con personal contratado), actuando exclusivamente con voluntarios el 20,4 por 100 de las organizaciones y con personal contratado el 20,7 por 100, siendo mayor el número de trabajadores contratados en las organizaciones que actúan en áreas de asistencia social, salud/asistencia sanitaria, tercera edad, o discapacitados, al contrario que en los campos de la cooperación y desarrollo. Además, las áreas de salud/asistencia sanitaria (66,7 por 100) y de asistencia social (62 por 100) son las que tienen una mayor estabilidad en el empleo, frente al área de empleo y economía social (50,1 por 100).

Ayudas públicas a entidades sin ánimo de lucro

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales convoca anualmente subvenciones para fomentar la labor que hacen estas entidades sin ánimo de lucro, con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Los programas objeto de dichas subvenciones son para cooperación y voluntariado sociales, para atender situaciones de necesidad y/o marginación de personas mayores de 65 años, discapacitados[91], mu-

[89] Un ejemplo de fomento del empleo de colectivos vulnerables por una organización sin ánimo de lucro es la Cruz Roja Española, una de las instituciones con mayor nivel de empleabilidad del tercer sector, y que ha creado el I Plan de Empleo para Colectivos Vulnerables, que ayuda a encontrar, antes del año 2006, un empleo digno a 40.000 personas de estos colectivos, principalmente mujeres y jóvenes en dificultad, inmigrantes o refugiados, pero también discapacitados, reclusos y ex-reclusos, drogodependientes y personas con VIH.

[90] Un ejemplo de Iniciativa Local de Desarrollo y Empleo (ILDE) es el Servicio de Ayuda a Domicilio para hogares de renta baja que la Asociación Tomillo-Villaverde, institución sin ánimo de lucro gestionada por la Fundación Tomillo, fundó en 1992 y que actualmente da empleo a 85 personas de la zona sur de Madrid, la mayoría de ellos jóvenes desempleadas o mujeres con cargas familiares, que prestan servicios de ayuda en dichos hogares en la realización de las tareas domésticas así como en el cuidado personal a enfermos o personas mayores.

[91] En relación con los discapacitados, cabe citar el plan de formación y empleo de la Fundación ONCE, dirigido a la inserción de las personas discapacitadas para el periodo 1999-2008 (véase apartado 3.2.1.1 de este capítulo).

jeres, familia, infancia y juventud, drogodependientes, pueblo gitano, población reclusa y ex-reclusa, refugiados, asilados, migrantes, víctimas del terrorismo, así como actuaciones integrales contra la exclusión social y demás actuaciones de solidaridad social[92].

3.3.3. **La protección social al desempleo**

Disminución en el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo

Conforme a la tónica que se viene observando desde el año 1994, en el año 2000 se apreció de nuevo un descenso en el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo (gráfico II-16), registrando un total de 1.038.800 perceptores de media anual. Del total de perceptores de prestaciones económicas, 446.700 fueron del nivel contributivo y 592.100 del nivel asistencial. En este último nivel se registraron 367.900 beneficiarios del subsidio de desempleo y 224.200 beneficiarios del subsidio correspondiente a los trabajadores eventuales agrarios.

Descenso exclusivamente en el subsidio de desempleo

De los datos referidos, se concluye que en el año 2000 se registraron 13.000 perceptores menos que en el anterior ejercicio. Si bien conviene precisar que este descenso se recogió exclusivamente en el subsidio de desempleo, que vio reducida su protección a 367.900 beneficiarios, lo que significa una disminución de un 8 por 100 en relación a 1999. Por el contrario, el nivel contributivo, a diferencia de lo que ocurría desde 1994, en que se venía apreciando anualmente un descenso del número de perceptores, registró un aumento de 5.900 beneficiarios; asimismo, del subsidio previsto para los trabajadores eventuales agrarios se beneficiaron 13.500 trabajadores desempleados más que en 1999.

Incrementos en las tasas de cobertura

En el año 2000 se aprecia un ligero incremento en la tasas de cobertura de las prestaciones de desempleo[93] (gráfico II-17), tanto en la tasa bruta como en la tasa neta, aumentando la primera un

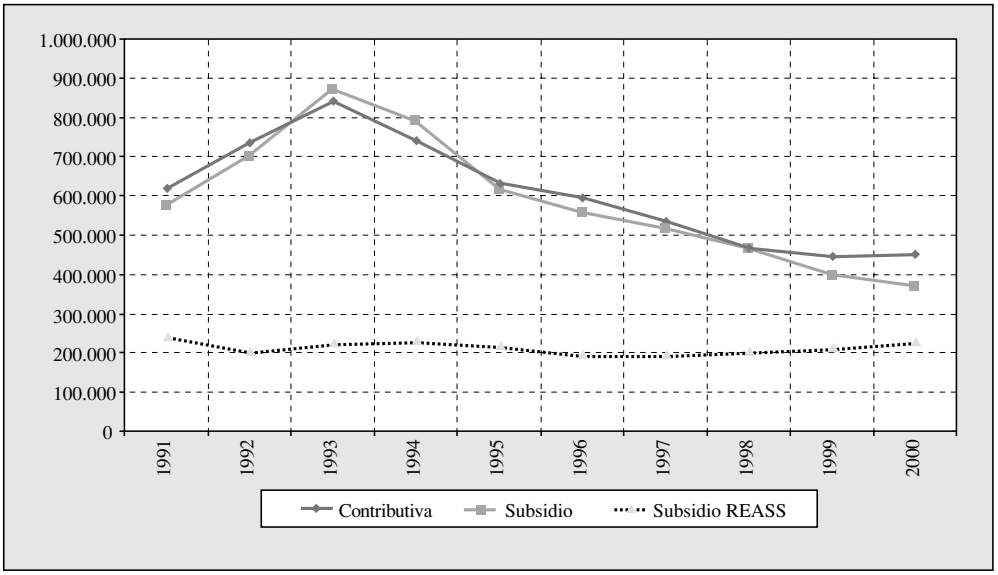
[92] Orden de 10 de febrero de 2000 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Las subvenciones concedidas para el año 2000 han sido publicadas mediante Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Secretaria General de Asuntos Sociales.

[93] El análisis estadístico de las prestaciones de desempleo comprende dos tipos de tasas. Por un lado, la tasa bruta es el cociente entre los beneficiarios de estas prestaciones, excluidos el desempleo parcial y el subsidio especial de los

GRÁFICO II-16

BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, SUBSIDIO Y REASS, 1991-2000

(Número de beneficiarios*, medias anuales)



* Beneficiarios «estadísticos», inclusive los de desempleo parcial en el nivel contributivo.

Fuente: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

1,6 por 100, hasta registrar un porcentaje de un 52,5 por 100, y la segunda un 1,2 por 100, alcanzando un 64,7 por 100 de cobertura. Se confirma así la nueva tendencia ascendente apuntada en el ejercicio 1999, que rompería la que se venía registrando a partir de 1993.

Diferencias territoriales en la protección por desempleo

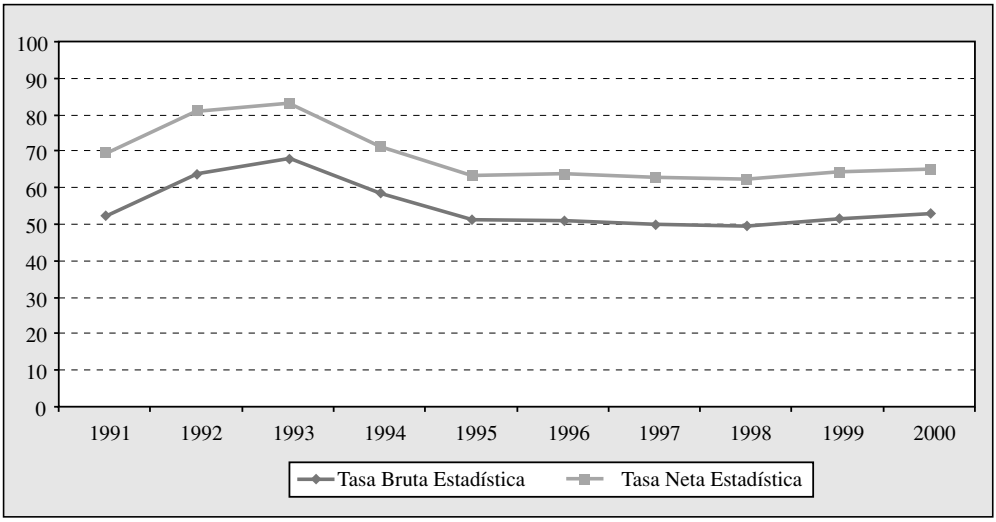
Por Comunidades Autónomas, la tasa bruta de cobertura registra una importante diversidad territorial de la protección por desempleo. Así, se situaron por debajo de la media: Ceuta y Melilla

trabajadores eventuales agrarios, y el total paro registrado en el INEM. Por otro, la tasa neta representa el porcentaje de los beneficiarios de prestaciones, excluidos los de desempleo parcial, los del subsidio de trabajadores eventuales agrarios y agrícolas fijos, en relación al paro registrado en el INEM en Industria, Construcción y Servicios.

GRÁFICO II-17

TASAS DE COBERTURA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO, 1991-2000

(Porcentajes, medias anuales)



Fuente: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

(30 por 100), Castilla y León (39,9 por 100), Asturias (42,2 por 100), Cantabria (44,7 por 100), Andalucía (44,8 por 100), Extremadura (45,6 por 100), Galicia (46,3 por 100), País Vasco (47,1 por 100), Castilla-La Mancha (47,6 por 100), La Rioja (49,4 por 100) y Aragón (50,7 por 100). El resto de Comunidades presentan una cobertura superior a la media nacional, llamando la atención los casos de Comunidad Valenciana y Cataluña, con un 61,9 y un 76,4 por 100, respectivamente, y, especialmente, la situación de Islas Baleares, con una cobertura superior al 100 por 100 (109,4), dado que se incluye como beneficiarios de las prestaciones por desempleo al colectivo de trabajadores fijos discontinuos, entre ellos todos lo que derivan del sector de la hostelería, los cuales, sin embargo, no se computan en el paro registrado.

Aumento de un 2,2 por 100 en la cuantía de las prestaciones contributivas

Desde el punto de vista de la cuantía media bruta reconocida a los beneficiarios de prestaciones de nivel contributivo en el año 2000, se situó en 3.378 pesetas, esto es un 2,2 por 100 de aumento en relación a 1999. La importancia de las circunstancias personales de los perceptores, dada la configuración legal de esta prestación,

así como el moderado aumento salarial y la diferencia de salarios existente entre varones y mujeres, son factores que continúan influyendo en la media desigual que se registra si se atiende al sexo y a la edad, de forma que, por sexo, mientras que los varones percibieron prestaciones diarias por un importe medio de 3.725 pesetas diarias, las mujeres percibieron una media de 2.951 pesetas, esto es un 20,8 por 100 menos, y por edad, el colectivo de beneficiarios de 55 y más años fue el que tuvo una cuantía media superior (3.943 pesetas), frente al colectivo de 16 a 19 años, que con 2.698 pesetas destaca por la circunstancia contraria. Según la causa de acceso a las prestaciones contributivas, se aprecia el mantenimiento de la finalización del contrato, con 236.400 beneficiarios, esto es un 52,9 por 100, en el año 2000, como el motivo más importante, seguido del cese por despido en virtud de acta de conciliación, con un 27 por 100, y, a mayor distancia, por la extinción del contrato de trabajo por expediente de regulación de empleo (8,3 por 100).

En el nivel asistencial se observa igualmente la misma tendencia del año 1999, de forma que la principal causa de acceso al subsidio continúa siendo la de «mayores de 52 años», si bien en el año 2000 se registró un descenso en su número de 5.700 perceptores menos que en 1999. El agotamiento de las prestaciones contributivas, que hasta 1998 era la primera causa de acceso al subsidio, se volvió a situar en una segunda posición, siendo el motivo del subsidio que en el año 2000 percibieron 98.300 beneficiarios, similar número de perceptores (96.900) que registró la causa de contar con periodos cotizados inferiores al mínimo para acceder al cobro de las prestaciones contributivas. En orden a la estructura de la población perceptora (cuadro II-19), el número de beneficiarios de prestaciones de nivel contributivo reflejó que un 55,4 por 100 fueron varones, frente al 44,6 de mujeres, lo que significa que los primeros se situaron 10,8 puntos por encima que las segundas, pese a que el paro registrado femenino (941.600 mujeres) representó 20 puntos más que el paro masculino. En términos de edad, un 74 por 100 de los beneficiarios de estas prestaciones se registró en el subgrupo de 25 a 54 años; llama la atención, por otra parte, que cuando para los varones el siguiente grupo con mayor número de perceptores fue el de 55 y más años, con 58.000 beneficiarios, este grupo en las mujeres apenas registró 16.000 beneficiarias, circunstancia ilustrativa de la menor presencia en la vida laboral activa de las mujeres en este tramo de edad.

CUADRO II-19

BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO, POR SEXO, EDAD Y TIPO DE PRESTACIÓN, 1998-2000

(Miles de personas, promedio anual)

Beneficiarios	Total			Nivel contributivo			Nivel asistencial									*Pro-memoria:* Paro registrado*		
							Total			Subsidio			Subsidio trabajadores eventuales agrarios					
	1998	1999	2000	1998	1999	2000	1998	1999	2000	1998	1999	2000	1998	1999	2000	1998	1999	2000
Varones																		
Total	636,9	567,5	543,2	272,6	250,7	247,5	364,3	316,8	295,7	271,1	222,8	197,8	93,2	94,0	97,9	*818,2*	*682,2*	*615,9*
De 16 a 19 años	4,8	4,8	5,0	1,8	1,7	1,7	3,0	3,1	3,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,7	1,9	*48,8*	*37,4*	*30,2*
De 20 a 24 años	40,7	36,7	36,4	21,4	19,8	20,6	19,3	16,9	15,8	10,0	8,3	7,4	9,3	8,6	8,4	*100,0*	*75,3*	*63,1*
De 25 a 54 años	413,7	352,2	333,5	190,8	170,9	167,2	222,9	181,3	166,3	160,4	119,0	101,5	62,5	62,3	64,8	*540,3*	*446,0*	*402,2*
De 55 años y más	177,6	173,8	168,4	58,6	58,3	58,0	119,0	115,5	110,4	99,2	94,1	87,6	19,8	21,4	22,8	*130,2*	*123,7*	*120,4*
Mujeres																		
Total	493,1	484,4	495,5	189,7	190,1	199,2	303,4	294,3	296,3	195,1	177,6	170,0	108,4	116,7	126,3	*1.071,3*	*969,4*	*941,6*
De 16 a 19 años	4,5	4,6	4,8	1,3	1,2	1,2	3,2	3,4	3,6	1,8	1,8	1,8	1,4	1,6	1,8	*60,5*	*49,1*	*42,4*
De 20 a 24 años	42,8	40,9	40,5	19,7	18,6	18,5	23,1	22,3	21,9	15,2	14,0	13,2	7,9	8,3	8,7	*166,8*	*141,4*	*132,6*
De 25 a 54 años	376,0	364,0	370,1	153,9	154,7	163,0	222,0	209,3	207,1	148,6	131,2	122,7	73,4	78,1	84,4	*784,7*	*718,1*	*700,3*
De 55 años y más	69,8	74,9	80,2	14,8	15,6	16,4	55,1	59,3	63,8	29,4	30,6	32,4	25,7	28,7	31,4	*59,4*	*60,7*	*66,2*

* No incluye los trabajadores eventuales agrarios subsidiados.

Fuente: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales.*

En los beneficiarios del nivel asistencial, se aprecia, de igual forma, un mayor número de beneficiarios varones (197.800) que de mujeres (170.000), aunque en esta prestación la diferencia entre unos y otras se redujo a un 7,6 por 100. Por tramos de edad, con un 61 por 100 destacaron los beneficiarios de 25 a 54 años, seguidos de aquéllos con 55 y más años, que representan un 33 por 100 de los perceptores. En el nivel del subsidio previsto para los trabajadores eventuales agrarios, el porcentaje de mujeres (126.300 beneficiarias) superó en 12,6 puntos al de hombres (97.900 beneficiarios). Desde el punto de vista de la edad, el subgrupo más representativo fue el de 25 a 54 años con un 66,5 por 100, seguido del colectivo de 55 y más años, que contó con 54.100 beneficiarios.

Disminución del periodo medio consumido en las prestaciones contributivas

Finalmente, en relación al periodo medio consumido por los beneficiarios de las prestaciones de desempleo, en el nivel contributivo se mantiene la tendencia registrada el pasado año de disminución del periodo consumido, de forma que los perceptores que consumieron menos de ocho meses representaron las dos terceras partes (66,5 por 100) de los beneficiarios de este nivel; asimismo, se redujo nuevamente el porcentaje de los que consumieron de 20 a 24 meses, que en el año 2000 supusieron tan sólo un 4,7 por 100, esto es casi cuatro puntos menos que en 1998. En cuanto a su distribución por sexo, no se aprecian diferencias significativas, siendo el periodo que cuenta con más perceptores, en ambos sexos, el que se refiere a un consumo de 2 a 4 meses.

En el nivel asistencial el periodo medio consumido fue superior, llegando hasta 15 meses un 62,3 por 100 de los beneficiarios de este nivel. Si bien la distribución por sexo es similar, llama la atención la desigual incidencia en los tramos superiores de consumo, donde frente al 16 por 100 de hombres que consumieron de 24 a 48 meses, este tramo en las mujeres representó un 7 por 100, confirmando menores periodos reconocidos del derecho por la incidencia de determinados requisitos legales como el nivel de renta familiar, por encima de su condición de paradas, en el reconocimiento del derecho a la percepción del subsidio asistencial.

La Renta Activa de Inserción

Desempleados mayores de 45 años en situación de mayor necesidad

Durante el año 2000, la atención prestada a los trabajadores desempleados tuvo como novedad el Programa de inserción laboral de trabajadores denominado Renta Activa de Inserción[94]. Sus destinatarios fueron los parados de larga duración en situación de mayor necesidad, identificando como tal a los desempleados que, a la fecha de la solicitud de incorporación al programa[95], tuvieran cumplidos 45 años y responsabilidades familiares, se encontrasen inscritos, ininterrumpidamente, durante doce o más meses, en la oficina de empleo, y siempre que éstos se adhiriesen al Programa en el plazo reglamentariamente establecido, que finalizó el día 11 de diciembre de 2000.

La admisión y mantenimiento en el Programa supone la percepción de la renta activa de inserción transcurridos tres meses, en los cuales se deben haber puesto en práctica las políticas activas de empleo; su percepción se condiciona a que se mantenga el compromiso de actividad. La cuantía de la renta asciende al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional, que conforme al vigente en el año 2000, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, supone 53.010 pesetas mensuales, a percibir durante un plazo máximo de diez meses. Cabe destacar que esta renta no generaba obligación del Instituto Nacional de Empleo de cotizar a la Seguridad Social por ninguna contingencia.

El Programa, con vigencia para todo el año 2000, contemplaba las siguientes acciones: 1) establecimiento de una tutoría individualizada para el demandante de empleo; 2) diseño de un itinerario de inserción laboral; 3) gestión de ofertas de colocación; 4) incorporación a planes de empleo y/o formación, y 5) percepción de una «renta activa» de inserción.

Desigual incidencia territorial

Su impacto sobre los potenciales destinatarios previstos por el INEM (91.362 desempleados) fue del 29,7 por 100 (cuadro II-20)[96],

[94] Este Programa fue establecido por el RD 236/2000, de 18 de febrero (*BOE* de 10 de marzo).

[95] Orden de 28 de junio de 2000 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (*BOE* de 7 de julio), por la que se modifica los requisitos y se amplia el plazo de solicitud de incorporación al Programa establecido en el RD 236/2000.

[96] Media establecida con el número de solicitantes reales del programa a octubre de 2000, último dato disponible.

con una incidencia desigual por Comunidades Autónomas, pues mientras que en Andalucía, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha o en Extremadura, se superó el 40 por 100, en otras como Baleares, con un 5,23 por 100, Navarra, con un 9,15 por 100, o Cataluña, con un 11,84 por 100, su incidencia fue menor, lo que se relacionaría con las diferencias regionales de actividad, ocupación y desempleo.

Ahora bien, debe precisarse que la media de incorporación al programa durante el año fue bastante más elevada (un 65 por 100), pero debido a los requisitos establecidos en el Real Decreto 236/2000, en torno a una tercera parte de los mismos fueron rechazados, al no figurar inscritos como demandantes de empleo durante doce meses, disponer la unidad familiar de rentas superiores al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional, o carecer de responsabilidades familiares.

CUADRO II-20
IMPACTO DEL PROGRAMA DE RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidad Autónoma	Colectivo potencial	Solicitantes reales	Porcentaje impacto
Andalucía	17.376	8.318	47,87
Aragón	1.891	320	16,92
Asturias	2.952	713	24,15
Baleares	880	46	5,23
Canarias	4.485	1.621	36,14
Cantabria	1.080	487	45,09
Castilla-La Mancha	2.605	1.085	41,65
Castilla y León	4.133	1.380	33,39
Cataluña	15.380	1.821	11,84
C. Valenciana	9.599	2.364	24,63
Extremadura	2.044	821	40,17
Galicia	9.484	4.187	44,15
Madrid	11.878	2.601	21,90
Murcia	1.656	485	29,29
Navarra	929	85	9,15
País Vasco	4.509	670	14,86
La Rioja	350	67	19,14
Ceuta	89	63	70,79
Melilla	42	53	126,20
Total	**91.362**	**27.187**	**29,76**

Fuente: INEM. *Informe sobre el Programa de Renta Activa de Inserción.*

En total se registró una media mensual de 7.800 beneficiarios de la renta activa de inserción[97], aunque tomando como referencia el mes de diciembre de 2000, dado el acceso progresivo de los beneficiarios del programa a la fase de cobro de la renta activa de inserción, el número de perceptores se elevaría a 10.383 desempleados, conforme se recoge en el cuadro II-21.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía destaca por el número de perceptores de esta renta que se registraron en el mes de diciembre de 2000, seguida a mayor distancia por los beneficiarios registrados en Galicia, Madrid o Comunidad Valenciana.

En cuanto al perfil de los beneficiarios de la renta activa de inserción, el mayor número de perceptores son mujeres, con un 53 por 100, frente a un 47 por 100 de hombres; por grupos de edad, en torno a un 45 por 100 son trabajadores desempleados con edad comprendida entre 45 y 49 años, seguidos de un 30 por 100 con edad de 50 a 54 años.

Por sector económico de procedencia se aprecia que un 56 por 100 de los beneficiarios procede del sector servicios, acompañados de un 16 por 100 que procede de la industria, un 9 por 100 de la construcción, un 1 por 100 de la agricultura, y un 18 por 100 que figura como «no clasificable».

De los datos disponibles hasta el mes de octubre de 2000, el número de bajas de beneficiarios de la renta activa de inserción fue de 1.043 beneficiarios en fase de renta, esto es un 11 por 100 de los beneficiarios en alta habían causado baja en el programa. Con relación a la causa de la baja, destaca que, del total referido, 649 bajas (el 62 por 100) se produjeron con ocasión de haber obtenido una colocación por cuenta propia o ajena.

Las acciones programadas han sido gestionadas por el INEM y por los Servicios Públicos de Empleo, en el caso de las Comunidades

[97] Conforme a las fases de desarrollo del programa previsto en el RD 236/2000, las referencias estadísticas de beneficiarios de la renta activa de inserción se recogen en la Información sobre Prestaciones por Desempleo elaborada por la Subdirección General de Estadística a partir del mes de julio de 2000, de forma que la media reflejada se refiere a los seis meses de percepción de la renta en dicho año.

CUADRO II-21

BENEFICIARIOS DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2000, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidad Autónoma	Beneficiarios Renta Activa
Andalucía	3.324
Aragón	113
Asturias	262
Baleares	22
Canarias	652
Cantabria	177
Castilla-La Mancha	372
Castilla y León	542
Cataluña	421
Comunidad Valenciana	791
Extremadura	346
Galicia	1.880
Madrid	945
Murcia	190
Navarra	31
País Vasco	264
La Rioja	18
Ceuta	18
Melilla	15
Total	**10.383**

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. *Información sobre Prestaciones de desempleo.*

Autónomas que han asumido las competencias de gestión de políticas activas de empleo. En este sentido, el Real Decreto 236/2000 establecía la necesaria coordinación entre todos los organismos implicados, a través de la obligación de información mutua, y de que el INEM efectuase el seguimiento y evaluación global a nivel nacional.

Necesidad de una profunda reflexión en torno al sentido y alcance de esta renta

El Consejo, en su Dictamen 5/2000, de 4 de octubre, sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social[98], tuvo ocasión de pronunciarse sobre la renta

[98] La Ley 14/2000, de 29 de diciembre (*BOE* de 30 de diciembre), de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, ha habilitado al Gobierno para que, dentro de la acción protectora por desempleo, estableciera un nuevo programa de renta activa de inserción (art. 26), dirigido a desempleados, con especiales necesidades económicas y dificultades de acceso al empleo, que suscriban compromisos de inserción laboral.

activa de inserción, señalando al respecto que «no puede obviarse el hecho de que se inscribe dentro de la acción protectora por desempleo y, de acuerdo con el régimen financiero y de gestión establecido en el Capítulo V del Título III del TRLGSS, forma parte del sistema de protección al desempleo», por lo que considera necesaria «una reflexión más profunda sobre el sentido y alcance de este tipo de rentas, bien en el ámbito del diálogo social, bien en la reforma pendiente de la Ley Básica de Empleo».

3.3.4. **El gasto en protección por desempleo**

De acuerdo con los datos disponibles, procedentes del avance de liquidación del ejercicio 2000, la protección por desempleo supuso cerca de 1,38 billones de pesetas de gasto, un 3,3 por 100 más que en el año anterior. Este aumento, el primero desde 1994 (gráfico II-18), se produjo a pesar de la considerable reducción del paro registrado entre 1999 y 2000, y sin que la tasa de cobertura, como se señaló antes, experimentara variaciones sustanciales en el mismo periodo. De hecho, el número de beneficiarios —en todos los niveles de cobertura— fue en 2000 un 1,3 por 100 menor que en el año anterior.

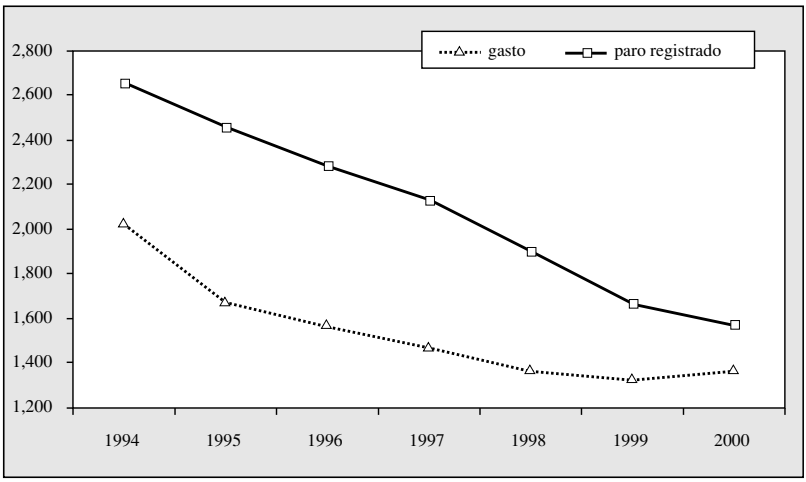
La razón de este comportamiento, que obligó a ampliar el crédito inicial presupuestado para este capítulo, fue el mayor gasto en prestaciones contributivas y en el subsidio especial para trabajadores eventuales agrarios; ambos excedieron con creces el menor gasto en el nivel asistencial, y la escasa aplicación —respecto del presupuesto inicial— de la renta activa de inserción. Esta última se dotó inicialmente con 50.000 millones de pesetas, cantidad que luego se rebajó a 3.000 millones. El gasto en términos de obligaciones reconocidas fue finalmente, de acuerdo con la liquidación provisional del Presupuesto, ligeramente inferior a 1.747 millones, lo que arroja un grado de cumplimiento del 58 por 100.

El aumento del gasto en prestaciones contributivas tuvo su origen en el mayor número de beneficiarios (6.000 más que en 1999) en dicho nivel. Y ello probablemente se produjo porque —a diferencia de lo que hasta ahora había venido ocurriendo— más

GRÁFICO II-18

GASTO EN PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y PARO REGISTRADO, 1994-2000

(Gasto en billones de pesetas corrientes, liquidación. Desempleados en millones, media anual)



Fuentes: Gasto: Ejecución presupuestaria. Subdirección General de Prestaciones del INEM. Paro registrado: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

personas desempleadas accedieron al nivel contributivo en lugar de al asistencial. Al mejorar la situación general del mercado de trabajo, y al aumentar la duración media de los contratos temporales, es probable que haya aumentado el acceso a la prestación contributiva, por haber aumentado los periodos cotizados. Ello explicaría, además, la mayor intensidad en el descenso (33.000 personas menos que en 1999) de beneficiarios en el nivel asistencial.

También aumentó en 2000 (en 13.500 personas) el número de beneficiarios en el subsidio especial para trabajadores eventuales agrarios. Pero el significado para el gasto total en prestaciones por desempleo es bien distinto en este caso y en el del nivel contributivo, pues el gasto medio por beneficiario en el caso de los TEAS es de una cuantía muy similar al que arroja el nivel asistencial, mientras que el gasto medio por beneficario en el nivel contributivo es, incluso sin considerar las cuotas a cargo del INEM, mucho mayor (cuadro II-22).

Ya en estos términos, es observable que el aumento del gasto se originó no sólo porque hubiese más beneficiarios en el subsistema contributivo, sino porque el promedio por beneficiario creció considerablemente en 2000 en ese subsistema: un 4 por 100 (descon-

CUADRO II-22

GASTO* MEDIO TOTAL POR BENEFICIARIO Y GASTO MEDIO EN PRESTACIONES POR BENEFICIARIO, NIVELES CONTRIBUTIVO, ASISTENCIAL Y SUBSIDIO REASS, 1994-2000

(Pesetas corrientes)

Conceptos	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Total gasto (prestaciones y cuotas) en miles de millones de pesetas.	2.029,6	1.680,3	1.574,2	1.474,6	1.373,6	1.322,2	1.374,3
2. Total beneficiarios (contributiva, asistencial y subsidio REASS) en miles.	1.759,4	1.458,5	1.342,1	1.240,8	1.130,1	1.051,9	1.038,7
Gasto medio total por beneficiario en miles de pesetas (=1/2).	*1.153,6*	*1.152,1*	*1.173,0*	*1.188,6*	*1.215,7*	*1.257,0*	*1.323,1*
A. Gasto en prestaciones contributivas en miles de millones de pesetas.	968,8	807,8	767,9	709,8	628,2	616,9	649,9
B. Beneficiarios de prestación contributiva en miles.	739,1	626,6	592,4	530,7	462,2	440,8	446,7
Gasto medio por beneficiario en miles de pesetas (=A/B).	*1.310,8*	*1.289,2*	*1.296,3*	*1.337,4*	*1.359,1*	*1.399,5*	*1.454,8*
C. Gasto en prestaciones asistenciales en miles de millones de pesetas.	472,4	373,9	339,1	319,2	296,9	266,8	253,0
D. Beneficiarios prestación asistencial en miles.	793,1	615,8	557,4	517,4	466,2	400,4	367,8
Gasto medio por beneficiario en miles de pesetas (=C/D).	*595,7*	*607,2*	*608,4*	*616,8*	*636,8*	*666,2*	*687,8*
E. Gasto en subsidio REASS en miles de millones de pesetas.	105,5	121,7	126,1	128,8	138,1	143,7	153,6
F. Beneficiarios subsidio REASS en miles.	227,2	216,2	192,3	192,7	201,6	210,7	224,2
Gasto medio por beneficiario en miles de pesetas (=E/F).	*464,3*	*563,0*	*655,9*	*668,8*	*684,9*	*682,2*	*685,3*

* Ejecución presupuestaria del Programa 321A «Prestaciones a los desempleados». Capítulo 4 «Transferencias corrientes».
Fuentes: Subdirección General de Prestaciones del INEM y MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

tando el pago de cuotas), frente a un 3,2 por 100 en el asistencial y un 0,5 por 100 en el subsidio especial agrario.

Dado que el periodo medio consumido, es decir, el número medio de meses de percepción de la prestación contributiva por desempleo fue en 2000 muy similar (ligeramente inferior para ser más precisos) al que arrojaban los datos de 1999, no cabe sino concluir, como ya se hizo en la anterior edición de esta Memoria, que la mayor cuantía por beneficiario tuvo su origen en el efecto combinado del aumento salarial y la entrada de nuevos perceptores, que en los primeros meses perciben —a igualdad de situación personal— mayor prestación.

En el subsistema asistencial, por otra parte, también el incremento real fue mayor que el presupuestado, lo que probablemente apunta a un mayor número de días de percepción, en promedio, por los beneficiarios. Esta circunstancia, que también se observó en la Memoria de 1999, se apoya, por otra parte, en el mayor peso de los parados subsidiados mayores de 52 años, grupo en el que se va prolongando su tiempo de percepción del subsidio porque cada vez son menos los que pueden acceder a la jubilación a los 60 años. Con datos facilitados por el INEM para el ejercicio 2000, más de 83.000 beneficiarios del subsidio (un 22,6 por 100 del total de perceptores) llevaban recibiéndolo más de 24 meses; de éstos, más de 24.000 llevaban más de 60 meses, entre los que casi 7.000 (más de una cuarta parte) tenía 60 o más años, es decir, no habían pasado a la pensión de jubilación.

4. EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN UN SISTEMA DE RELACIONES LABORALES EN EVOLUCIÓN

Un balance de la negociación colectiva del año 2000 ha de situarse inevitablemente en el contexto de la renovación de los Acuerdos Interconfederales del año 1997, en particular el Acuerdo de Estabilidad en el Empleo (AIEE) y el de Negociación Colectiva (AINC). Ambos Acuerdos, aunque no son los únicos del diálogo social, son los que tienen mayor incidencia en la negociación colectiva, cuya más reciente evolución no puede entenderse sin tener en cuenta el marco normativo y obligacional que crearon y su posible influencia en las negociaciones colectivas subsiguientes

en los distintos niveles. Además, su renovación, al cumplirse en abril de 2001 el término de su vigencia, ha condicionado, desde finales del año anterior, el proceso de negociación en la cúspide entre las organizaciones sindicales y empresariales sobre otras materias diversas con repercusión sobre el empleo y las relaciones laborales y, por ello, indirectamente también sobre la negociación de nivel inferior.

A pesar de la positiva valoración que en términos generales han efectuado los firmantes del AIEE sobre la consecución de algunos de sus objetivos, principalmente su contribución a la creación de empleo para los colectivos que se consideraban prioritarios y al cambio de tendencia de la tasa de temporalidad, ha faltado en el momento de su renegociación el consenso necesario en aspectos esenciales para que se fraguara un nuevo acuerdo. El proceso ha concluido así con la aprobación por el Gobierno del RDL 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo (*BOE* 3 de marzo), luego tramitado como Proyecto de Ley.

El AINC de 1997 emplaza a las organizaciones sindicales y empresariales a una nueva negociación

El otro gran Acuerdo de 1997, el Acuerdo sobre Negociación Colectiva (AINC), también vigente hasta finales de abril de 2001, ha emplazado a las organizaciones sindicales y empresariales a una nueva negociación que podría abocar a cambios en la normativa actual sobre negociación colectiva que, a la vista de los resultados del AINC, sus firmantes podrían estimar necesarios para cumplir con los objetivos que se proponían alcanzar. El alcance de dichos cambios, dada la transcendencia que las regulaciones legales de la negociación colectiva tienen sobre la totalidad del sistema de relaciones laborales, es difícil de prever. La complejidad de las posibles reformas en este ámbito es un factor de peso para alcanzar un nuevo acuerdo.

El tercer gran Acuerdo Interconfederal de 1997, de gran relevancia para la negociación colectiva, el Acuerdo Interconfederal sobre Cobertura de Vacíos (AICV) está vigente hasta el 1 de enero de 2003 y expresamente se declara improrrogable. Su Comisión Paritaria acordó un desarrollo del proceso de extensión pero no se ha aprobado un texto reglamentario que desarrolle dicho procedimiento de extensión, lo que en determinados casos, suscita problemas aplicativos. No obstante el AICV sigue su andadura.

Junto a los anteriores, destaca también en relación con la negociación colectiva el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos (ASEC), cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2000 y que ha sido renovado mediante la firma, el 31 de enero de 2001 de un nuevo Acuerdo (ASEC II). La renovación del ASEC está dirigida a mejorar en calidad y eficacia los servicios de mediación y arbitraje, así como a promover un mayor número de adhesiones al mismo.

En 2000 se ha renovado el ANFC

El otro resultado tangible del diálogo social en el año 2000, de gran importancia también, se ha producido el 19 de mayo de 2000, con la firma del III Acuerdo Nacional de Formación Continua (ANFC), que ha sustituido al II ANFC, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2000. A ambos acuerdos, que ofrecen el balance más positivo del diálogo social a lo largo del año, se hace referencia en otros apartados de esta Memoria.

Por último, habría que hacer mención al diálogo social en la función pública recordando que durante el año 2000 se mantuvieron abiertas al menos tres mesas de negociación con el Ministerio de Administraciones Públicas[99]: mesa sobre retribuciones, en cuyo seno se debatieron los efectos de los Presupuestos de 2001 para los funcionarios públicos; mesa sobre estabilidad en el empleo, y mesa sobre movilidad geográfica, donde se elaboraron propuestas sobre el régimen de traslados de los funcionarios.

4.1. Resumen de la negociación colectiva del año: principales datos, estructura y contenidos

Siguiendo las pautas de Memorias anteriores, en este apartado se presentan en primer lugar las principales orientaciones para la nego-

[99] En el marco de estas negociaciones ha de destacarse la convocatoria de huelga de empleados públicos, el 14 de diciembre de 2000, convocada por las Federaciones correspondientes de UGT, CCOO y CSIF y cuyas reivindicaciones se centraban en los siguientes aspectos: 1) oposición a la subida salarial del 2 por 100 para los empleados públicos en 2001; 2) introducción de cláusulas de revisión salarial para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios; 3) derecho de negociación colectiva en las Administraciones Públicas. (Respecto a esta última cuestión habría que recordar, por su repercusión y la polémica generada, la sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de noviembre de 2000, por la que se anula la congelación salarial para los funcionarios públicos acordada por el Gobierno en 1997 e incluida en los Presupuestos Generales del Estado y que ha sido recurrida por el Gobierno).

ciación colectiva elaboradas por las organizaciones empresariales y sindicales de cara a las negociaciones y revisiones de convenios colectivos del año 2000. En segundo lugar, se analizan los datos principales de la negociación colectiva del año relativos, por un lado, al número de convenios registrados y al número de trabajadores afectados por los convenios, y por otro, a la estructura de la negociación colectiva del año 2000, abordando los ámbitos principales de los convenios (ámbitos funcional y distribución sectorial, temporal y territorial), así como el panorama general en torno a la articulación de los convenios y la evolución en las unidades de negociación. Por último, con mayor grado de análisis se profundiza en los contenidos más importantes de la negociación colectiva: salario, jornada, contratación laboral y empleo, y clasificación profesional.

4.1.1. **Planteamiento y curso de la negociación colectiva**

Objetivos sindicales para el año 2000

Como en años anteriores, las principales organizaciones sindicales, UGT y CCOO, presentaron un documento unitario sobre los criterios básicos u orientaciones para la negociación colectiva del año 2000, en el que proponían como principales objetivos los siguientes:

— Potenciar la creación y aumentar la estabilidad del empleo.

— Reducir el tiempo de trabajo.

— Asegurar incrementos salariales que permitan ganar poder adquisitivo.

— Mejorar las condiciones de trabajo.

— Favorecer la implicación de los trabajadores en todo el proceso de la negociación colectiva.

— Corregir las situaciones discriminatorias que todavía persisten.

En términos más concretos, las organizaciones sindicales consideraban que los esfuerzos para alcanzar los anteriores objetivos debían dirigirse a los siguientes aspectos:

- *Potenciar la creación de empleo y aumentar su estabilidad*: incluir cláusulas de conversión de contratos temporales en indefinidos; fijar limitaciones estrictas a la temporalidad

mediante la regulación de porcentajes máximos de empleo temporal en función del volumen de la plantilla, de indemnizaciones a la finalización de los contratos y la prohibición del encadenamiento de contratos temporales; promover las primeras contrataciones como contrato indefinido y ajustar la utilización de la contratación temporal a una causa cierta y colectivamente regulada; reforzar las garantías establecidas por la Ley en los contratos a tiempo parcial y, de forma preferente, las referidas a horas complementarias, distribución y voluntariedad y evitar todos aquellos aspectos de aparente flexibilidad y que sólo suponen una mayor disponibilidad del trabajador; hacer del contrato de relevo un instrumento válido para el fomento del empleo, para renovar y recualificar las plantillas y ser una alternativa a las prejubilaciones, incluyendo compromisos de conversión en indefinido y una adecuada flexibilización de la distribución de la jornada entre trabajadores relevados y relevistas; establecer, en el contrato fijo discontinuo, garantías de llamamiento y permanencia y reforzar la causalidad para conseguir una mayor estabilidad de las plantillas; en materia de ETT, delimitar las actividades y puestos de trabajo susceptibles de subcontratación a una ETT, excluyendo su utilización en aquellos supuestos considerados de riesgo, asegurar las mismas condiciones de trabajo entre trabajadores de la usuaria y trabajadores en misión e incluir en los convenios colectivos una cláusula que precise las percepciones económicas que la empresa usuaria, en cumplimiento de la nueva redacción del artículo 11 de la Ley de ETT, debe consignar como integrantes de la «retribución total» establecida por el convenio colectivo para el puesto de trabajo a desarrollar por el trabajador puesto a disposición.

- *Reducir el tiempo de trabajo*: intensificar la prioridad de la reducción de la jornada hacia las 35 horas semanales; disminuir considerablemente la realización de horas extraordinarias; ampliar la utilización de permisos a medio y largo plazo, fomentando contrataciones de sustitución para esos periodos; extender a las parejas de hecho los derechos de reducción de jornada o excedencia por motivos familiares y desarrollar el artículo 13 del Acuerdo Nacional de Formación Continua (ANFC) sobre permisos individuales de formación.

- *Asegurar incrementos salariales que permitan ganar poder adquisitivo*: establecer cláusulas efectivas de garantía, situadas en el objetivo de inflación, que aseguren el cumplimiento de los incrementos pactados del poder adquisitivo; introducir salarios mínimos de convenio en los sectores para corregir los bajos salarios; homogeneización de los conceptos salariales ligados al trabajo, evitando cualquier división en la plantilla, especialmente en relación a la antigüedad y los salarios de entrada; consolidar estructuras salariales que favorezcan la eliminación de cualquier tipo de discriminación, garantizando la estabilidad salarial sobre la base de conceptos fijos e inequívocos y, en su caso, unificando los conceptos; incluir la situación de «suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo» como supuesto para la percepción de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de enfermedad común; en relación a la previsión social complementaria y planes de pensiones, se propone emplazar inmediatamente a las empresas a iniciar el proceso de exteriorización, no concertar la compraventa de derechos, defender un modelo basado en la titularidad de los trabajadores sobre los patrimonios y derechos reconocidos, integrar en un solo plan tantas empresas como se considere oportuno, utilizando los planes de pensiones de promoción conjunta, apostar por la creación de planes de pensiones sectoriales, extender los sistemas de previsión social complementaria para todos los trabajadores, disponer de asesores propios para los representantes de los trabajadores y dar prioridad a la unidad de acción.

- *Mejorar las condiciones de trabajo*: favorecer la implicación de los trabajadores en todo el proceso de la negociación colectiva; ampliar de hecho y de derecho las competencias de las Comisiones Paritarias, determinando las formas y ámbitos de intervención sindical junto con las materias que deben ser objeto de información, de consulta y de negociación; definir los espacios de negociación; conseguir una mayor eficacia de los instrumentos de mediación y arbitraje para reforzar la autonomía colectiva y nuestra capacidad de intervención; consolidar y ampliar los derechos sindicales; constituir Comisiones Paritarias de Formación, fomentar los permisos individuales de formación, garantizar a todas las personas el derecho a acceder a la formación y apostar por la profesionalidad sectorial, siendo determinante la implantación

del Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales (SNCP); en materia de prevención de riesgos laborales, constituir en convenios sectoriales Comisiones Paritarias de Seguridad y Salud, asegurar el derecho a un mínimo de 40 horas anuales de tiempo de trabajo para la formación en salud laboral y, como objetivos irrenunciables de un sindicalismo comprometido con una sociedad de progreso, elaborar programas de prevención y detección de drogodependencias y lograr la participación de los representantes sindicales en la gestión medioambiental.

- *Favorecer la implicación de los trabajadores en la negociación colectiva*: hacer más efectivos los derechos de información, consulta y negociación; dotar a los convenios de una regulación para las Comisiones Paritarias que propicie una participación activa, y de cláusulas de compromiso para acudir a organismos autónomos de solución de conflictos y/o la adhesión a los ASEC acordados por las organizaciones sindicales y empresariales.

- *Corregir situaciones discriminatorias que aún persisten*: incluir cláusulas generales antidiscriminatorias; adecuar los contenidos de los convenios a las últimas reformas normativas; incorporar la transversalidad, como principio integral, al proceso de negociación colectiva; abrir posibilidades a una distribución negociada y adaptable a las necesidades de la jornada de trabajo, favoreciendo así la conciliación laboral y familiar de hombres y mujeres, asegurar el cumplimiento de la reserva del 2 por 100 en las empresas de más de 50 trabajadores para trabajadores y trabajadoras con discapacidades.

Criterios para la negociación colectiva de 2000 de CEOE y CEPYME

Por su parte, las principales organizaciones empresariales también expusieron sus objetivos a comienzos del año considerando que, en el marco de reactivación del comercio mundial y del ciclo de expansión de nuestra economía, era imprescindible mantener e incrementar nuestro nivel competitivo en el seno de la Unión Europea. Para ello recordaron que «la convergencia salarial que no venga acompañada de convergencia en productividad representará una pérdida de capacidad de competir, de actividad y de empleo». De acuerdo con esa premisa, para las empresas cobraba especial re-

levancia la moderación de precios y costes laborales unitarios, y ello tenía que reflejarse en el comportamiento de los convenios colectivos a la hora de pactar un crecimiento de los costes laborales acorde con los avances de la productividad. En este contexto, estimaban que para que ganen parcelas de flexibilidad, la negociación colectiva ha de concebirse como un instrumento de la gestión empresarial que ha de evitar añadir más rigideces a las relaciones laborales.

De forma resumida, los criterios de actuación para la negociación colectiva de 2000 facilitados por las organizaciones CEOE y CEPYME a sus negociadores fueron los siguientes:

- *Vigencia de los convenios*: la mayor certidumbre de nuestras variables económicas básicas ha permitido incorporar vigencias más amplias en los convenios colectivos y, por tanto, no debe existir inconveniente para dotar de mayor duración a lo pactado, si el nuevo Convenio incorpora cambios sustanciales en diferentes materias, en línea de modernizar las relaciones laborales. Es preciso recomendar moderación salarial e insistir en la conveniencia de limitar los efectos de la «ultraactividad» de los convenios, bien de forma general para todo el texto, bien pactando la caducidad de cláusulas específicas que conlleven revisiones parciales de algunos contenidos, especialmente aquellas que generan costes indirectos de diversa naturaleza.

- *Contratación*: se estima perfectamente compatible el fomento de la estabilidad en el empleo con el mantenimiento de un marco flexible de contratación temporal que permita a las empresas hacer frente a imprevistos; carece de sentido que los negociadores empresariales acepten mayor grado de rigidez en la contratación, dadas las modificaciones realizadas en el marco normativo en los dos últimos años; se destaca el escaso atractivo para las empresas de los contratos de trabajo a tiempo parcial, de fijos discontinuos y de relevo, con la regulación actual.

- *Jornada de trabajo*: se considera que el cómputo anual de la jornada y su distribución flexible constituyen instrumentos idóneos para lograr las necesidades de la empresa a las demandas del mer-

cado por lo que se desaconseja abordar en la negociación el tratamiento de la jornada de trabajo desde la simple óptica de su reducción, considerando que la reordenación y distribución flexible de la jornada, su fijación en términos de jornada efectiva, su cómputo anual, la posibilidad de distribuirla irregularmente, el tratamiento de la estructura salarial y profesional, etc., son factores a tener en cuenta al analizar su tratamiento en la negociación colectiva, evitando en muchos casos recurrir a las horas extraordinarias al disponer de otros medios de flexibilidad de la jornada. Afirman que corresponde al empresario y no al convenio colectivo la regulación de la jornada de apertura de los centros de trabajo o la jornada comercial, que es ajena a la negociación colectiva, recordando también la ausencia de obligación legal de pactar en convenio colectivo los calendarios laborales, cuya confección viene atribuida por ley a la empresa.

- *Clasificación profesional y estructura salarial*: se aconseja sustituir las viejas Categorías por los Grupos Profesionales, como sistema más apropiado de clasificación, correspondiendo en todo caso al Grupo Profesional conformar el nivel de prestaciones exigibles al trabajador. Insisten en la conveniencia de afrontar un cambio en las actuales estructuras salariales, apostando por la reducción o supresión de complementos personales que se sitúan al margen de las vicisitudes que afectan a la carrera profesional del trabajador.

- *Costes laborales*: el crecimiento de los salarios en Convenio debe tener como referencia el promedio de los costes laborales unitarios (conjunto de costes directamente ligados al empleo, tanto los propiamente salariales como los de otra naturaleza, así como la productividad), especialmente de los países de la Unión Europea con los que directamente competimos, los deslizamientos salariales y el resto de los costes sociales, de forma tal que la cifra resultante permita a las empresas, al menos, mantener el grado de competitividad actual y no verse perjudicadas con respecto a sus competidores.

- *Cláusula de descuelgue*: esta cláusula forma parte del contenido mínimo de los Convenios de ámbito superior al de empresa, siendo pues responsabilidad de los negociadores la fijación de las condiciones y procedimiento para que se pro-

duzca la inaplicación del régimen salarial y, en el caso de ausencia de previsión, sólo podrá producirse por acuerdo entre empresario y representantes de los trabajadores cuando así lo requiera la situación económica de la empresa.

- *Cláusula de revisión salarial*: es fundamental mantener la coherencia en las cláusulas de revisión evitando repercutir incrementos coyunturales de precios en las expectativas de inflación y, si se decidiera su inclusión, en ningún caso deberá contribuir a romper con la moderación salarial que inicialmente se pactó.

- *Prevención de riesgos laborales*: partiendo de la larga lista de obligaciones empresariales que contiene la normativa, consideran adecuado evitar la inclusión de otras nuevas, especialmente aquellas relacionadas con manifestaciones del ejercicio de representación del personal en la empresa y con compromisos relativos a la creación de órganos; resulta innecesaria la ampliación del crédito horario de los Delegados de Prevención y es totalmente rechazable la figura del «Delegado Territorial de Prevención». Sin embargo, consideran que algunas materias pueden ser objeto de valoración con ocasión de la discusión del Convenio, entre otras, el establecimiento de otros procedimientos de designación de los Delegados de Prevención, siempre que ésta recaiga en los representantes de los trabajadores o en los propios trabajadores, o la concreción del cumplimiento de la obligación empresarial de formación, tanto de los trabajadores sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo o función, como la de los Delegados de Prevención, para que esta formación no sea omnicomprensiva de todos los aspectos posibles no solamente de aquellos que tengan relación con los riesgos existentes en cada empresa.

Concluye la circular para la negociación colectiva de CEOE y CEPYME con diversas orientaciones y aclaraciones en temas de mediación y arbitraje, formación profesional, compromisos por pensiones, complementos de prestación de Seguridad Social y administración del convenio colectivo. En este sentido, recuerda para el 2000 la necesidad de renovación del ASEC y los trabajos dirigidos a la configuración del Sistema Nacional de las Cualificaciones,

insiste en la necesidad de contar con el correspondiente asesoramiento técnico en materia de exteriorización de los compromisos por pensiones, planteándose en el ámbito de la negociación colectiva la adopción de nuevos compromisos, menciona la tendencia a incorporar al contenido de numerosos convenios las obligaciones empresariales de pago de complementos de prestaciones del Sistema de Seguridad Social, en particular, de la incapacidad temporal y maternidad y destaca el especial cuidado en evitar la inclusión de medidas que pueden implicar discriminación por sexo, raza u otras.

4.1.2. **Estructura de la negociación colectiva**

Para la elaboración de este apartado se utilizan los datos que proporciona la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La información sobre la negociación colectiva del año se confecciona a partir de las hojas estadísticas (según el modelo previsto en la Orden de 10 de octubre de 1996) que han de ser cumplimentadas por las comisiones negociadoras a la firma del convenio, y que se adjuntan como parte de la documentación laboral exigida para la inscripción y posterior registro de los convenios colectivos.

Salvo precisiones posteriores, en el análisis que sigue se utilizará la información sobre los convenios colectivos con inicio de efectos económicos durante el año 2000 y que han sido registrados hasta el 31 de diciembre de ese año. Los datos estadísticos comprenden información sobre los convenios colectivos estatutarios, incluyéndose en ocasiones datos sobre convenios extraestatutarios o de eficacia limitada, en la medida en que se puede obtener de los negociadores de los mismos.

Ahora bien, puesto que el registro de la totalidad de los convenios firmados durante el año 2000 puede prolongarse varios meses, la información que se obtiene de los convenios del año 2000 es parcial y los resultados obtenidos un tanto provisionales. Asimismo, como viene reiterándose en Memorias anteriores, en la información estadística que se presenta sobre empresas y trabajadores afectados puede existir solapamiento de cifras, por un lado,

porque existen diversas unidades de negociación territoriales e incluso funcionales que se superponen y, por otro, por la posibilidad de que una misma empresa pueda estar afectada por más de un convenio.

Número de convenios y trabajadores/ empresas afectadas

Los convenios con inicio de efectos económicos en 2000 y registrados hasta el 31 de diciembre de ese año fueron 3.945, afectando a 977.300 empresas y 7.862.800 trabajadores (cuadro II-23). Las cifras son muy similares a las de 1999, apreciándose quizá un ligero ascenso (1,8 por 100) tanto en el número de convenios registrados a 31 de diciembre de 2000 con respecto a los registrados a 31 de diciembre de 1999, como en el número de trabajadores afectados en dicha fecha en uno y otro año. En cuanto al número de empresas afectadas se aprecia sin embargo un incremento mayor (9,2 por 100) en el número de aquellas a las que afectan los convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre del año en curso; aproximadamente 100.000 empresas más que en 1999.

CUADRO II-23

CONVENIOS COLECTIVOS, 1996-2000

(Número, empresas, trabajadores)

Convenios registrados a 31 de diciembre de cada año con inicio de sus efectos en el mismo año						
Años	**Convenios**		**Empresas**		**Trabajadores**	
	Número	**Variación (%)**	**Miles**	**Variación (%)**	**Miles**	**Variación (%)**
1996	3.550	–1,4	760,8	7,3	6.120,7	0,4
1997	3.763	6,0	847,5	11,4	7.226,8	18,1
1998	3.776	0,3	814,2	–3,3	6.972,2	–3,5
1999	3.874	2,6	894,8	9,9	7.782,8	11,6
2000	3.945	1,8	977,3	9,2	7.862,8	1,83
Total convenios según año de inicio de efectos económicos						
Años	**Convenios**		**Empresas**		**Trabajadores**	
	Número	**Variación (%)**	**Miles**	**Variación (%)**	**Miles**	**Variación (%)**
1996	5.028	4,2	1.027,5	5,4	8.128,2	6,9
1997	5.040	0,2	1.018,3	–1,0	8.365,1	2,9
1998	5.091	1,0	1.077,6	5,8	8.750,6	4,6
1999*	5.074	–0,3	1.112,1	3,2	8.943,7	2,2
2000**	4.228	–17,0	1.066,4	–4,1	8.285,5	–7,4

* Datos provisionales por estar todavía abierto el Registro de convenios.

** Convenios registrados hasta el 28 de febrero de 2001.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

Con datos cerrados a 28 de febrero de 2001, el número de convenios colectivos registrados con efectos económicos en 2000 asciende a 4.228 y afecta a 8.285.500 trabajadores. Debe esperarse a la elaboración de los datos estadísticos de convenios registrados hasta al 31 de marzo de 2001 para apreciar si el ritmo negocial ha sido o no similar al de 1999 (a 31 de marzo de 2000 se habían registrado 4.993 convenios con inicio efectos económicos en 1999, afectando a 8.386.900 trabajadores). Seguramente, como ya ocurrió durante las negociaciones de los años 1994 y 1997, en 2000 ha podido existir también un cierto retraso en las negociaciones debido a la existencia de expectativas de cambios normativos en materia laboral, provocando ciertas cautelas a la hora de abrir negociaciones y de elaborar plataformas concretas de debate.

Desde el punto de vista de la evolución temporal del número de convenios, empresas y trabajadores afectados en el periodo 1986-2000 (cuadro II-24), se observa, como ha venido reiterándose en Memorias de años anteriores, una clara tendencia hacia el incremento de cada una de las tres variables, con la excepción del periodo que comprende las negociaciones del atípico año 1994, en el que importantes convenios de amplia cobertura no lograron cerrarse[100]. Los datos aún provisionales de 1999 alcanzan ya a más de 5.000 convenios colectivos y 8.943.700 de trabajadores por ellos afectados.

Si se tiene en cuenta que conforme a los datos de la EPA el empleo asalariado alcanzó en 1999, en media anual, los 10.771.100 asalariados y los datos, aún provisionales, sobre convenios colectivos registrados en 1999 muestran que los convenios afectan a 8.943.700 trabajadores, podría deducirse que la cobertura de la negociación colectiva se mueve en torno a un porcentaje muy elevado (83 por 100). Ahora bien, diversos motivos aconsejan acoger estas precisiones con la máxima cautela. De un lado, la cifra de trabajadores afectados que recogen las estadísticas sobre convenios colectivos requieren una cierta depuración al advertirse en importantes ramas de actividad unos censos muy superiores a la

[100] Como se señala en la Memoria de 1994, pág. 222, no se alcanzaron acuerdos, entre otros, en RENFE, Metro de Madrid, Mensajería, Textil, convenios provinciales de Hostelería y Metal.

CUADRO II-24

NÚMERO DE CONVENIOS, DE EMPRESAS Y DE TRABAJADORES, 1986-2000

Año	Convenios	Empresas	Trabajadores
1986	3.790	891.800	6.275.100
1987	4.112	996.800	6.867.700
1988	4.096	958.331	6.864.738
1989	4.302	982.651	6.993.751
1990	4.595	1.037.906	7.623.867
1991	4.848	1.006.167	7.821.850
1992	5.010	1.055.084	7.921.935
1993	4.749	1.048.193	7.737.138
1994	4.581	950.700	7.502.100
1995	4.827	975.100	7.605.100
1996	5.028	1.027.500	8.128.200
1997	5.040	1.018.300	8.365.100
1998	5.091	1.077.600	8.750.600
1999*	5.074	1.112.100	8.943.700
2000**	4.228	1.066.400	8.285.500

* Datos provisionales.

** Convenios registrados hasta el 28 de febrero de 2001.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

ocupación total existente en la misma. Ello se debe, como ya se ha advertido al inicio, a que en la elaboración de las estadísticas sobre convenios colectivos se computan trabajadores más de una vez, debido a la existencia de convenios de distinto ámbito territorial, incluso funcional, que acogen simultáneamente a un mismo colectivo laboral[101]. De otro lado, del colectivo asalariado recogido en el censo de la EPA habría que excluir a los empleados públicos cuya relación de trabajo no es laboral, sino administrativa o estatutaria, y por tanto excluida de los convenios colectivos de trabajo.

Las dificultades para hallar la cobertura real de la negociación colectiva se incrementan de manera más significativa en algunos sectores económicos, en concreto en el sector primario y en la industria, pues es en estos donde se aprecian mayores disparidades entre los datos sobre población asalariada de la EPA y los datos sobre el número de trabajadores afectados por la negociación colec-

[101] La iniciativa de incorporar a los documentos de cotización la identificación del código del convenio colectivo permitirá a corto plazo conocer con mayor precisión la cobertura real de la negociación colectiva.

tiva, llegando en ocasiones a superarse el 100 por 100 de cobertura. Por ejemplo, la población asalariada en el sector primario según datos de la EPA, media año 2000, es de 400.900 personas y los datos sobre trabajadores afectados por la negociación colectiva en el sector agrario, datos provisionales a 31 de diciembre de 2000, es de 469.911 trabajadores.

Convenios colectivos por sectores de actividad

En todo caso, las características de la negociación colectiva del año 2000 por sectores de actividad económica no han variado sustancialmente respecto de años anteriores, respondiendo en este sentido a la distribución general de los asalariados en cada uno de ellos. Así, la tendencia sigue siendo la disminución del peso de la negociación colectiva en el sector industrial y, por el contrario, el incremento en el número de convenios del sector servicios.

Los datos de los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 (cuadro II-25) muestran que los sectores primario y construcción suponen únicamente el 2,5 por 100 de los convenios firmados mientras que los convenios del sector servicios, con un 56,5 por 100, y del sector industrial, con 39,9 por 100, suponen el 96,4 por 100 del total de la negociación colectiva del país. En cuanto al número de trabajadores afectados es el sector servicios con casi 4 millones de trabajadores el que concentra casi a la mitad (49,8 por 100) del total de trabajadores que tienen sus condiciones laborales reguladas en convenio, según los datos estadísticos. Se ha producido un ligero aumento respecto de 1999 en que el número de trabajadores afectado por convenio en el sector servicios era el 45,4 por 100.

En cuanto al promedio relativo al número de trabajadores por convenio, que puede indicarnos la mayor o menor dimensión de los convenios según los sectores de actividad, se observa claramente una mayor dimensión en los convenios del sector de la construcción (14.339 trabajadores/convenio), cuyo mejor exponente es el Convenio General del sector para 1998-2001. Por el contrario, la menor dimensión ha de atribuirse a los convenios del sector industrial (1.624 trabajadores/convenio) y del sector servicios (1.755 trabajadores/convenio) reflejando de esta manera la existencia de numerosos convenios de empresa en estos sectores. Los convenios del sector agrario tienen por último una dimensión media (6.024

CUADRO II-25
CONVENIOS COLECTIVOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 2000*

Sectores	Convenios		Empresas		Trabajadores	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Agrario	78	2,0	62.710	6,4	469.911	6,0
Industria	1.576	39,9	220.979	22,6	2.603.345	33,1
Construcción	61	1,5	89.906	9,2	874.703	11,1
Servicios	2.230	56,5	603.731	61,8	3.914.855	49,8
Total	**3.945**	**100,0**	**977.326**	**100,0**	**7.862.814**	**100,0**

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

trabajadores/convenio) mostrando en este sentido características típicas de un sector en el que predominan los convenios provinciales y de Comunidad Autónoma (los más importantes, por ejemplo, el de Recolección de cítricos de la Comunidad Valenciana, Manipulado y envasado de agrios de Murcia, Agropecuario de Sevilla, etc.).

Representación de los trabajadores en la negociación colectiva

Por otro lado, en cuanto al grado de representación de los sindicatos en las mesas negociadoras (cuadro II-26), la información que ofrece la Estadística sobre convenios colectivos viene desglosada únicamente para los sindicatos más representativos a nivel estatal, CCOO y UGT. En la casilla «otros sindicatos» se incluye fundamentalmente a los más representativos de Comunidades Autónomas (ELA y CIG), a otros sindicatos de ámbito estatal (USO, CNT) y a sindicatos específicos del sector o de la empresa, así como los sindicatos de cuadros profesionales. Por último, dentro del encabezamiento «grupos de trabajadores» están los independientes y los no afiliados a sindicatos.

El análisis de los datos que se presentan ha de hacerse con bastante cautela ya que en la negociación de cada convenio intervienen generalmente varias centrales sindicales, sindicatos u otro tipo de representación, y por ello no es posible aislar la representación concreta de cada uno de los representantes en la negociación de un convenio determinado. Es decir, el número de representantes de cada organización sindical, y el peso real de ésta en la negociación de cada convenio, estará en función del número total de representantes en cada ámbito funcional.

CUADRO II-26

COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES NEGOCIADORAS POR CONVENIOS, TRABAJADORES Y REPRESENTANTES, 2000*

Afiliación representantes	Total convenios				
	Convenios	Trabajadores		Representantes	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
CCOO	2.533	7.643.831	97,2	8.528	38,2
UGT	2.573	7.633.187	97,1	8.465	37,9
Otros sindicatos	1.216	2.580.137	32,8	3.468	15,5
Grupo de trabajadores	716	122.967	1,6	1.895	8,5

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

En todo caso también en el año 2000, como viene siendo habitual, destaca la presencia mayoritaria de los dos sindicatos más representativos a nivel nacional, CCOO y UGT. CCOO ha participado en la negociación del 38,1 por 100 del total de convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000, mientras que la participación de UGT ha sido de un 37,8 por 100. De otro lado, el grupo de «otros sindicatos» ha representado a sus organizaciones en el 15,5 por 100 del total de convenios registrados. Y, por último, con gran diferencia respecto de los anteriores, los representantes del «grupo de trabajadores» ha formado parte de las comisiones negociadoras en 8,4 por 100 del total de los convenios registrados en el periodo de referencia.

Ámbito de aplicación temporal

En cuanto a la negociación colectiva de 2000, más de la mitad (55,6 por 100) de los convenios registrados hasta el 31 de diciembre, son revisiones de convenios firmados en años anteriores (cuadro II-27), que afectan a 4.885.971 trabajadores (el 62,1 por 100 del total). Los convenios firmados durante 2000 con vigencia superior a un año alcanzaron al 29,5 por 100 del total de los convenios registrados y al 31,4 por 100 de los trabajadores. Por último, los convenios firmados con vigencia anual (año 2000) fueron el 14,7 por 100, afectando únicamente al 6,4 por 100 de los trabajadores.

Si se atiende al ámbito funcional de los convenios, se observa que la proporción de convenios revisados es mayor en los convenios de ámbito funcional distinto al de la empresa (convenios de ámbito sectorial, aunque se incluyen también datos sobre convenios de grupo de

CUADRO II-27
CONVENIOS COLECTIVOS SEGÚN ÁMBITO TEMPORAL, 2000*

Ámbito funcional y temporal	Convenios		Trabajadores	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Total convenios	**3.945**		**7.862.814**	
Firmados por un año	582	14,8	504.343	6,4
Firmados con vigencia superior al año	1.167	29,6	2.472.500	31,4
Revisados	2.196	55,7	4.885.971	62,1
Convenio de empresa	**2.845**		**860.727**	
Firmados por un año	449	15,8	82.563	9,6
Firmados con vigencia superior al año	859	30,2	175.055	20,3
Revisados	1.537	54,0	603.109	70,1
Convenios de otro ámbito	**1.100**		**7.002.087**	
Firmados por un año	133	12,1	421.780	6,0
Firmados con vigencia superior al año	308	28,0	2.297.445	32,8
Revisados	659	59,9	4.282.862	61,2

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

empresas[102]) en el que se han revisado casi el 60 por 100 de los convenios de dichos ámbitos, que en el ámbito de la empresa, en el que se han revisado el 54 por 100. Sin embargo, el número de trabajadores afectados por convenios de empresa revisados es significativo: un 70 por 100 de los trabajadores totales al amparo de convenios de empresas vieron el suyo revisado en 2000 (frente al 59 por 100 en 1998 y el 54 por 100 en 1999). Quizá muchos de estos convenios tenían fijada su vigencia hasta el año 2000, por ser ésta una fecha trascendente no sólo en sí misma sino también, como ya dijimos, por estar próxima a las renegociaciones de los acuerdos interconfederales de 1997 y a las anunciadas reformas legislativas. Con respecto a los convenios de ámbitos funcionales distintos del empresarial, en el año 2000 el 61

[102] La Información recogida en la Estadística sobre convenios colectivos que proporciona el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sitúa a los convenios de grupo de empresas en el mismo grupo que el de los convenios colectivos sectoriales, con la denominación «convenios colectivos de ámbito distinto del empresarial». Por ello no existen datos sobre ámbitos temporales y territoriales desglosados en función del ámbito funcional más allá de la existencia de los dos grupos mencionados (convenios de empresa o convenios de ámbito funcional distinto de la empresa). Ello con la excepción de los datos relativos al propio del ámbito funcional de los convenios, en el que sí es posible conocer el número, trabajadores y empresas afectadas en cada ámbito funcional (convenios de empresa y grupos de empresa, por un lado, y convenios sectoriales, por otro).

CUADRO II-28
CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRADOS CON VIGENCIA SUPERIOR A UN AÑO, 1993-2000

Años*	Convenios		Trabajadores	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1993	703	18,9	800.098	13,5
1994	577	18,1	1.119.753	21,6
1995	937	26,0	1.359.742	22,3
1996	1.006	28,3	2.042.217	33,4
1997	977	26,0	2.327.490	32,2
1998	1.038	27,5	1.356.825	19,5
1999	1.014	25,7	2.570.569	37,2
2000	1.167	29,5	2.472.500	31,4

* Los datos que se facilitan son de los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de cada año.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

por 100 de los trabajadores de estos ámbitos vieron su convenio revisado; el mismo porcentaje que en 1998.

En todo caso, sobre lo que ya no cabe ninguna duda es que cada vez son más los convenios de cualquier ámbito funcional en los que se pactan vigencias plurianuales. Con la excepción de algunos años, el incremento es casi lineal tanto en cuanto al número de convenios con vigencias superiores al año, como en cuanto al número de trabajadores afectados por convenios con dichas vigencias (cuadro II-28). En 1993, el 18,9 por 100 de los convenios registrados habían pactado una vigencia superior al año y afectaban al 13,5 por 100 de los trabajadores. En 2000, el 29,5 por 100 de los convenios prevén su vigencia con carácter plurianual, afectando al 31,4 por 100 de los trabajadores.

Las razones que explican esta tendencia pueden responder tanto a factores internos de la empresa o del sector, por ejemplo, existencia de procesos de renovación productiva u organizativa, como a factores externos de tipo económico, por ejemplo, la mayor estabilidad de las variables macroeconómicas como las tasas de inflación. En todo caso, en el análisis que se realizará sobre el contenido de los convenios colectivos (apartado 4.2.3), en concreto en materia de salario podrá precisarse con mayor detalle si la tendencia aquí apreciada relativa al incremento en el número de convenios con vi-

gencias plurianuales viene acompañada o no de una mayor incorporación en los convenios de cláusulas de revisión salarial, por un lado, y/o de cláusulas de inaplicación de regímenes salariales, por otro.

Ámbito de aplicación territorial

En cuanto a la distribución territorial de la negociación colectiva por Comunidades Autónomas, hay que advertir que los datos estadísticos no recogen la incidencia de los convenios colectivos autonómicos de ámbito superior al de la propia Comunidad Autónoma, sino exclusivamente los datos sobre convenios que no exceden el ámbito de la misma. El análisis que sigue queda por esta razón un tanto condicionado. A pesar de ello, sí es posible aproximarse, en primer lugar, al volumen y al grado de concentración o dispersión de la negociación colectiva desde el punto de vista de su distribución territorial, medido a partir del ratio: número de trabajadores por convenio.

Así, como se observa en el cuadro II-29, la Comunidad Autónoma con mayor número de convenios es Cataluña (518), seguida de Andalucía (505), Castilla y León (351), País Vasco (326) y Comunidad Valenciana (306). Es básicamente el mismo orden que se viene observando en años anteriores, con algún cambio en los primeros puestos, Castilla y León por País Vasco por ejemplo, respecto de los datos de la negociación colectiva de 1999. En cuanto al número de trabajadores afectados sigue siendo Cataluña la Comunidad Autónoma que ocupa el primer lugar, con 16,5 por 100 del total de trabajadores. A continuación se sitúan Andalucía (9,6 por 100), Madrid (8 por 100) y la Comunidad Valenciana (6,6 por 100).

Si se tiene en cuenta el promedio de número medio de trabajadores por convenio, Madrid ocupa el primer puesto con 2.574 trabajadores; en segundo lugar, Cataluña con 2.509 trabajadores, y Baleares con 2.306 trabajadores por convenio. El último puesto corresponde a Ceuta y Melilla que, con un total de 33 convenios y 7.839 trabajadores afectados, tiene un ratio de 238 trabajadores por convenio.

De otro lado, en cuanto al número y tipo de convenios según su ámbito de aplicación funcional en las Comunidades Autónomas (cuadro II-30), se dispone de datos exclusivamente de convenios de empresa y convenios de otros ámbitos, distintos

CUADRO II-29
NÚMERO DE CONVENIOS Y TRABAJADORES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000*

Comunidad Autónoma	Convenios	Trabajadores	Convenios (%)	Trabajadores (%)	Número medio (trab./convenio)
Andalucía	505	753.538	12,8	9,6	1.492
Aragón	176	156.985	4,5	2,0	892
Asturias	101	105.819	2,6	1,3	1.048
Baleares	62	142.945	1,6	1,8	2.306
Canarias	155	209.255	3,9	2,7	1.350
Cantabria	88	55.049	2,2	0,7	626
Castilla-La Mancha	159	151.327	4,0	1,9	952
Castilla y León	351	257.618	8,9	3,3	734
Cataluña	518	1.299.731	13,1	16,5	2.509
Ceuta y Melilla	33	7.839	0,8	0,1	238
Comunidad Valenciana	306	517.742	7,8	6,6	1.692
Extremadura	69	143.922	1,7	1,8	2.086
Galicia	280	256.579	7,1	3,3	916
Madrid	245	630.651	6,2	8,0	2.574
Murcia	77	129.764	2,0	1,7	1.685
Navarra	96	93.904	2,4	1,2	978
País Vasco	326	195.193	8,3	2,5	599
La Rioja	38	24.843	1,0	0,3	654
Interautonómicos	360	2.730.110	9,1	34,7	7.584
Total	**3.945**	**7.862.814**	**100**	**100**	**1.993**

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

del empresarial (ámbitos sectoriales, aunque se incluyen datos relativos a convenios de grupo de empresas)[103]. Puede observarse que es Madrid la Comunidad Autónoma con mayor número de Convenios de Empresa (84,5 por 100), seguida de Canarias (80 por 100) y del País Vasco (76,1 por 100). Por el contrario, las Comunidades Autónomas con mayor número de convenios de otros ámbitos son: Murcia (44,2 por 100), después Castilla y León (41,9 por 100) y Extremadura (44,2 por 100).

Es conveniente destacar que en la distribución de la negociación por Comunidades Autónomas influyen variables tales como tejido industrial y empresarial de cada zona geográfica, la actividad sindical en ellas desarrollada, así como el grado de articulación y desarrollo de la negociación colectiva en las mismas.

[103] Véase nota anterior.

CUADRO II-30
NÚMERO Y TIPOS DE CONVENIOS (DE EMPRESA/OTROS ÁMBITOS) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000*

Comunidad Autónoma	Convenios	Convenios de empresa	Porcentaje	Convenios otros ámbitos	Porcentaje
Andalucía	505	377	74,7	128	25,3
Aragón	176	123	69,9	53	30,1
Asturias	101	72	71,3	29	28,7
Baleares	62	46	74,2	16	25,8
Canarias	155	124	80,0	31	20,0
Cantabria	88	62	70,5	26	29,5
Castilla-La Mancha	159	103	64,8	56	35,2
Castilla y León	351	204	58,1	147	41,9
Cataluña	518	402	77,6	116	22,4
Ceuta y Melilla	33	22	66,7	11	33,3
Comunidad Valenciana	306	199	65,0	107	35,0
Extremadura	69	42	60,9	27	39,1
Galicia	280	201	71,8	79	28,2
Madrid	245	207	84,5	38	15,5
Murcia	77	43	55,8	34	44,2
Navarra	96	70	72,9	26	27,1
País Vasco	326	248	76,1	78	23,9
La Rioja	38	25	65,8	13	34,2
Interautonómicos	360	275	76,4	85	23,6
Total	**3.945**	**2.845**	**72,1**	**1.100**	**27,9**

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

Ámbito de aplicación funcional

En cuanto al ámbito de aplicación funcional de los convenios colectivos, del total de convenios registrados a 31 de diciembre de 2000, el 73,5 por 100 son convenios de empresas y convenios de grupo de empresas (cuadro II-31), predominando en número los primeros (2.845 convenios) sobre los segundos (54 convenios). Con respecto al número de trabajadores afectados por la negociación colectiva de ámbito de empresa o de grupo de empresa los datos no son excesivamente significativos pues afectan únicamente al 11,4 por 100 del total de los trabajadores que según la estadística de convenios tienen sus condiciones de trabajo reguladas en convenio.

En cuanto a los convenios de ámbito sectorial (26,5 por 100 del total de convenios registrados) destaca de manera significativa la relevancia de los sectoriales de ámbito provincial, tanto en cuanto al número de convenios, el 89 por 100 del total de convenios sectoriales, como en atención al número de trabajadores afectados por

CUADRO II-31

CONVENIOS, EMPRESAS Y TRABAJADORES AFECTADOS SEGÚN ÁMBITO FUNCIONAL, 2000*

Ámbito funcional	Convenios	Empresas	Trabajadores
Total convenios de empresa y convenios de grupo de empresas	**2.899**	**3.049**	**902.874**
Convenios de empresa	2.845	2.845	860.727
Provincial	2.457	2.457	393.024
Autonómicos	113	113	34.534
Interautonómicos	275	275	433.169
Convenios de grupo de empresas	54	204	42.147
Provincial	36	115	9.120
Autonómicos	5	31	3.586
Interautonómicos	13	58	29.441
Total convenios sectoriales	**1.046**	**974.277**	**6.959.940**
Sector local-comarcal	14	622	5.112
Sector provincial	932	678.592	4.115.887
Sector interprovincial	29	76.011	572.958
Autonómicos	28	75.716	571.441
Interautonómicos	1	295	1.517
Sector nacional	71	219.052	2.265.983
Total	**3.945**	**977.326**	**7.862.814**

*Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

convenio de cualquier ámbito (empresarial o sectorial), pues los convenios sectoriales provinciales afectan a más de la mitad de los trabajadores (52 por 100). Es también la negociación colectiva sectorial de ámbito provincial la que afecta a un mayor número de empresas, casi el 70 por 100 de las empresas están afectadas por convenios sectoriales provinciales.

Es relevante también el peso de la negociación colectiva sectorial de ámbito nacional, principalmente en punto al número de trabajadores afectados, 28,8 por 100 del total de los trabajadores. El número de convenios sectoriales de ámbito nacional registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 ha sido 71, cifra superior a los registrados a 31 de diciembre de 1999 (58), de 1998 (64) y 1997 (65), lo que indicaría que cada vez se están negociando más convenios de ámbito estatal en nuevas parcelas de la actividad económica[104].

[104] Entre otros, los siguientes convenios: el convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de las empresas concesionarias y privadas de aparca-

En cuanto a la evolución en la cobertura de los convenios sectoriales de ámbito nacional frente a los de ámbito provincial, tanto en número de convenios como en número de trabajadores, puede observarse (cuadro II-32) una cierta tendencia hacia el incremento en el número de trabajadores afectados por convenios colectivos sectoriales de ámbito nacional, frente a una ligera disminución en el número de trabajadores afectados por convenios sectoriales de ámbito provincial.

CUADRO II-32
CONVENIOS SECTORIALES DE ÁMBITO PROVINCIAL Y NACIONAL, 1992-2000
(Porcentajes sobre el total de convenios y sobre el total de trabajadores)

Años*	Convenios		Trabajadores	
	Ámbito provincial	Ámbito nacional	Ámbito provincial	Ámbito nacional
1992	24,1	1,4	54,8	25,1
1993	25,2	1,3	55,1	21,6
1994	25,3	1,5	54,7	24,3
1995	24,0	1,6	55,3	27,1
1996	22,8	1,5	51,9	27,4
1997	23,3	1,6	51,9	30,7
1998	24,5	1,7	53,1	31,1
1999	23,9	1,5	51,2	30,8
2000	23,6	1,7	52,3	28,8

* Los datos son de convenios registrados hasta el 31 de diciembre de cada año.
Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

Quizá más significativa es la evolución que se aprecia en la negociación de convenios colectivos de grupos de empresas. Aunque la negociación en los grupos de empresas sigue siendo relativamente poco significativa pues ha afectado solamente a 42.147 trabajadores (el 0,5 por 100 del total) según datos a 31 de diciembre de 2000, puede verse en el cuadro II-33 que han ido aumentando tanto el número de convenios de este tipo, como el número de empresas y trabajadores afectados.

mientos de vehículos; el 1.er convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública, mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamientos y el 1.er convenio colectivo de empresas concesionarias de cable de fibra óptica.

CUADRO II-33
CONVENIOS COLECTIVOS DE GRUPO DE EMPRESAS, 1993-2000

Año*	Convenios	Empresas afectadas	Trabajadores afectados
1993	40	128	12.002
1994	26	68	10.124
1995	46	145	19.370
1996	44	141	14.291
1997	45	146	23.675
1998	45	162	37.062
1999	52	183	35.986
2000	54	204	42.147

* Los datos que se facilitan son de los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de cada año.
Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

4.1.3. Articulación de la negociación colectiva y evolución de las unidades de negociación

El AINC de 1997, junto con la reforma legislativa de 1994, han puesto al alcance de los interlocutores sociales los instrumentos necesarios para hacer frente a la consecución de un objetivo, mencionado en el Preámbulo del AINC, establecer un sistema de negociación colectiva articulado u organizado. Y es que la necesidad compartida de proceder a la consecución de este objetivo se justifica en los primeros párrafos del AINC: la atomización excesiva (multitud de unidades de negociación) del existente sistema de negociación colectiva, su descoordinación, estancamiento (consolidación de antiguas unidades) y la aparición de problemas de concurrencia entre convenios (art. 84 ET) que la legislación no lograba resolver.

El AINC diseña un modelo ideal de estructura a determinar por los propios negociadores en los ámbitos sectoriales, estableciéndose qué materias han de regularse en cada uno de los correspondientes niveles o unidades de negociación. Se sientan unas pautas en torno a aquellas materias que han de quedar reservadas al convenio sectorial estatal (materias de directa aplicación), que no son únicamente las previstas en el artículo 84 ET sino también aquellas mencionadas en el propio AINC[105], otras materias que requie-

[105] Junto a las previstas en el artículo 84 ET (periodo de prueba, modalidades de contratación, grupos profesionales, régimen disciplinario, normas mínimas en

ren desarrollo posterior en ámbitos inferiores, y por último, otras materias que podrán ser remitidas o no a ámbitos inferiores. Se establece también que es competencia de la negociación colectiva sectorial el establecimiento de reglas y principios para resolver los conflictos de concurrencia entre los convenios de distinto ámbito[106].

Lentos avances hacia la mejora del sistema de negociación colectiva

Lo cierto es que se avanza de forma muy lenta hacia el objetivo de mejorar el sistema existente de la negociación colectiva, y es que a pesar de que se han ido asumiendo paulatinamente los dictados de la reforma de 1994 y los compromisos alcanzados en los Acuerdos Interconfederales de 1997, aún queda mucho para alcanzar la racionalización, articulación y renovación del sistema de negociación que se desean. A la vista de los datos antes presentados en torno al ámbito funcional de los convenios registrados en 2000, se aprecia que la estructura negocial sigue apoyándose en los convenios sectoriales de ámbito provincial[107] y, en menor medida, que ha avanzado la estrategia negocial a favor de la adopción de convenios colectivos de ámbito autonómico, principalmente en Cataluña[108], en ocasiones con el fin de resolver los problemas actuales relativos a la dispersión provincial, en otras, rompiendo marcos de negociación de carácter general ya establecidos y creando un tanto de confusión en punto a la concurrencia de convenios y a la articulación de las materias en ellos reguladas. El número de convenios de empresa parece mantenerse y se incrementa sin embargo el número de acuerdos o pactos de empresa.

---

materia de seguridad y salud y movilidad geográfica) hay que añadir las materias recogidas en el AINC: estructura salarial, jornada, movilidad funcional y derechos sindicales y régimen de información y consulta en las relaciones laborales.

[106] Se ha puesto de manifiesto que la legislación (art. 84 ET) no aclara cuándo existe o no concurrencia ni entre qué tipo de acuerdos. Pueden verse, por ejemplo, la STS de 7 de abril de 1994 (conflicto entre las panaderías de Asturias y las boutiques del pan) y la STS de 22 de septiembre de 1998 respecto del convenio estatal de la Madera.

[107] Se aprecian tímidos intentos por racionalizar la negociación colectiva en el ámbito provincial por ejemplo en el sector comercio. Prueba de ello es el convenio de Comercio de la provincia de Huelva, al que se han incorporado los convenios de comercio del metal, comercio de calzado, comercio textil y comercio del mueble.

[108] En los últimos años se han alcanzado convenios colectivos en: Ports Comercials dependents de ports de la Generalitat, Sector de Aparcaments, Comercio de Optica al detall, Laboratorios Fotográficos, Productos dietéticos y preparados, Profesionales del doblaje en Cataluña (rama artística), Ayuda a domicilio concertada, Empresas de Trabajo Temporal, etc.

Adopción de nuevos convenios sectoriales de ámbito estatal

En cuanto al desarrollo de la negociación colectiva sectorial de ámbito nacional, y del modelo que pretende el AINC, se ha procedido tímidamente a la adopción de nuevos convenios de ámbito estatal, algunos en nuevas actividades[109], se han redefinido también ámbitos sectoriales de negociación[110] y se ha procedido a la sustitución de antiguas Ordenanzas Laborales[111]. La mayor parte de los nuevos convenios se han alcanzado en las actividades económicas del sector servicios, en las Administraciones Públicas (Ayuntamientos y Personal Laboral —el denominado Convenio Único—), actividades de saneamiento público, actividades recreativas y culturales y otras actividades empresariales. Ahora bien, muchas de las negociaciones que se inician con el propósito de alcanzar convenios de carácter general tropiezan con dificultades para determinar el ámbito funcional del convenio, bien porque aparecen nuevas actividades no contempladas hasta entonces, bien porque algunas áreas de actividad coinciden con los ámbitos de aplicación de otros convenios.

En cuanto a cobertura de vacíos de contenidos de la negociación por la desaparición de las Ordenanzas laborales, objetivo declarado del AICV de 1997[112], se han aprobado desde entonces unos 23 procedimientos de extensión. A pesar de ello el desarrollo y aplicación del AICV ha sido escaso pues se han conseguido pocos ámbitos nuevos de negociación que cubran los sectores que carecen

[109] Por ejemplo, este año se han firmado por vez primera los convenios de Telemarketing, Empresas concesionarias de cable de fibra óptica y Cadenas de Tiendas de Conveniencia.

[110] Entre otros los siguientes convenios: Cales, Yesos, Escayolas, Exhibición Cinematográfica, Salas de Fiestas, Bailes y Discotecas (artistas y técnicos). Se está negociando el Convenio para Prensa diaria y Agencias de noticias y se han revisado, por otro lado, seis Acuerdos Marco este año: Transporte de mercancías por carretera, Puertos, Pastelería, Hostelería, Pizarras y Bebidas refrescantes.

[111] En este sentido, el I convenio colectivo general de ámbito nacional de regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública, mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamientos, sustituye para este sector los contenidos de la Ordenanza laboral para las empresas de Transporte por Carretera (existe además un acuerdo de adhesión del sector garajes al citado nuevo convenio general). Por otro lado, el convenio general de trabajo para Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios, sustituye a la Ordenanza de 1974.

[112] En el AICV de 1997, cuya vigencia en principio improrrogable finaliza el 1 de enero de 2003, las partes se comprometían a que «en el caso de que persistan vacíos de cobertura, se cubrirán definitivamente en las instancias oportunas mediante la extensión de convenios colectivos».

de convenios colectivos. Ello sin perjuicio de la labor asignada al AICV respecto de la posibilidad de que las partes incorporen parte de su contenido, relativo a estructura profesional, salarial, promoción de los trabajadores y régimen disciplinario, para cubrir vacíos de contenido negocial en los sectores y subsectores mencionados en el Anexo 1 del Acuerdo.

Por último, a la vista de los contenidos de la negociación colectiva del año sí puede apreciarse que cada vez con mayor frecuencia se incorporan cláusulas que pretenden ordenar y articular de alguna manera la negociación en el sector correspondiente, siguiendo las indicaciones antes comentadas previstas en el AINC. La realidad muestra, sin embargo, que estas cláusulas son meramente indicativas, no vinculantes y en ocasiones con finalidades inversas a las previstas en el AINC, es decir, posibilitando la aplicación preferente de lo dispuesto en ámbitos inferiores respecto de lo previsto en el sectorial estatal. En este sentido en algunos se estipula que para las empresas con convenio propio, el convenio general será de aplicación meramente supletoria, o que será preferente, desplazando a la regulación general.

Otros convenios, si bien escasos, acuerdan la prohibición de negociar convenios que pudieran concurrir con el convenio sectorial nacional y/o asumen el compromiso de no abrir vías de negociación en ámbitos inferiores. Con carácter marginal unos pocos convenios recogen un efectivo reparto de materias entre los distintos ámbitos funcionales, reservando, por ejemplo, al ámbito autonómico las materias relativas al calendario laboral, idioma o acceso a sistemas autonómicos para la solución de conflictos colectivos. La mayoría de los convenios que se aventuran a una distribución de las materias reproducen la distribución competencial establecida en el artículo 84 ET, añadiéndose en ocasiones algunas de las recomendaciones del AINC.

Son más frecuentes sin embargo, como se apreciará al analizar los contenidos de la negociación colectiva, las cláusulas relativas a la posibilidad de descuelgue o inaplicación del régimen salarial que reenvía dichas cuestiones a ámbitos inferiores. En menor medida se aprecia también la existencia de cláusulas de articulación o reenvío a niveles inferiores en torno a materias relativas a la clasificación profesional y algunos aspectos de la contratación laboral.

En definitiva, se ha avanzado poco hacia la renovación de la estructura de la negociación colectiva de la mano de una más coherente articulación entre los convenios que ponga fin a la inseguridad jurídica que crea su excesiva atomización. Tanto una adecuada articulación como la concurrencia pacífica de convenios ha de ser compatible y puede favorecer una adaptación de lo pactado a nivel sectorial nacional con las necesidades empresariales y las nuevas formas de organización del trabajo.

4.1.4. **Contenidos de la negociación colectiva**

El análisis de los contenidos de la negociación colectiva que se presenta en esta edición aborda las siguientes materias: salario, jornada, empleo, contratación laboral y clasificación profesional. En la elaboración de este apartado se ha utilizado la información que proporcionan las estadísticas oficiales (principalmente del MTAS y del INE), y junto a ello se ha incorporado como novedad respecto de ediciones anteriores, el análisis realizado a partir de una muestra de convenios colectivos confeccionada a tal efecto. La muestra de convenios consiste en la selección de unos 130 convenios vigentes en el año 2000 y publicados hasta el mes de diciembre con una representación proporcional de convenios negociados en distintos ámbitos funcionales y territoriales (Anexo II-1). En este sentido se analizan la mayoría de los convenios colectivos sectoriales de ámbito nacional, algunos de ámbito autonómico y provincial (en función de la importancia o peso de una determinada actividad en una zona geográfica determinada) y un gran número de convenios de empresa. En la selección de los convenios de empresa se ha intentado que la muestra sea representativa del tejido productivo, incluyéndose en la misma empresas de distinto tamaño o importancia económica, de sectores de actividad tradicionales o consolidados y de otros más recientes.

Salario

El salario pactado creció un 2,97 por 100

El incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 fue un 2,97 por 100, ligeramente superior al de los convenios registrados en el año anterior (2,38 por 100). A diferencia de 1999, a lo largo del cual el

incremento salarial medio pactado varió poco, en 2000 se han producido fuertes variaciones a lo largo del año, con altos incrementos en los meses de julio (5,12 por 100), agosto (7,05 por 100) y septiembre (5,48 por 100).

Al incorporar las denominadas cláusulas de salvaguarda, el incremento salarial medio en los convenios colectivos registrados hasta el 28 de febrero de 2001, y con efectos económicos en 2000, ha alcanzado sin embargo el 3,6 por 100. Así, el incremento pactado resultante es superior tanto a la previsión inicial de inflación para 2000, como al IPC real del año 2000 (media anual), 3,4 por 100 (cuadro II-34). Con datos provisionales al cerrar esta memoria, la ganancia de poder adquisitivo de los salarios en el año 2000 se cifra en dos décimas de punto.

CUADRO II-34
AUMENTOS SALARIALES PACTADOS EN CONVENIO, 1985-2000

Años	Aumento salarial (1) (con cláusula de salvaguarda)	IPC real media anual (2)	IPC previsto diciembre	Ganancia poder adquisitivo (1-2)
1985	7,9	8,8	7,0	–0,9
1986	8,2	8,8	8,0	–0,6
1987	6,5	5,2	5,0	1,3
1988	6,4	4,8	3,0	1,6
1989	7,8	6,8	3,0	1,0
1990	8,3	6,7	5,7	1,6
1991	8,0	5,9	5,0	2,1
1992	7,3	5,9	5,0	1,4
1993	5,5	4,6	4,5	0,9
1994	3,6	4,7	3,5	–1,1
1995	3,9	4,7	3,5	–0,8
1996	3,8	3,6	3,5	0,2
1997	2,9	2,0	2,2	0,9
1998	2,6	1,8	2,1	0,8
1999*	2,7	2,3	1,8	0,4
2000**	3,6	3,4	2,0	0,2

* Datos provisionales.
** Convenios registrados hasta el 28 de febrero de 2001.
Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.
Datos IPC, Fuente INE.

En cuanto al ámbito funcional de los convenios colectivos y los aumentos salariales pactados (cuadro II-35), se presentan los datos estadísticos que proporciona la Estadística de convenios colectivos del MTAS. Estos datos han de analizarse con cautela, pues en ocasiones las diversas unidades de negociación territoriales e incluso funcionales se superponen y puede haber un solapamiento de cifras. En todo caso, como viene siendo habitual en los últimos años, en los convenios sectoriales de cualquier ámbito (local, provincial, autonómico y nacional) se pactaron incrementos salariales superiores a los pactados en los convenios de empresa y de grupos de empresa.

El incremento salarial fue mayor en los convenios de sector

En este sentido, el incremento medio pactado en los convenios de empresa y de grupos de empresas registrados hasta el 31 de diciembre de 2000, que afectan a más de 900.000 trabajadores, fue de 2,46 por 100, siendo en los convenios de grupo de empresas donde este

CUADRO II-35

CONVENIOS, TRABAJADORES AFECTADOS Y AUMENTO SALARIAL PACTADO POR ÁMBITO FUNCIONAL Y DE REGISTRO, 2000*

Ámbito funcional y de registro	Convenios	Trabajadores	Aumento salarial (%)
Total	**3.945**	**7.862.814**	**2,97**
Total convenios de empresa y convenios de grupo de empresas	**2.899**	**902.874**	**2,46**
Convenios de empresa	2.845	860.727	2,48
Provincial	2.457	393.024	2,70
Autonómicos	113	34.534	2,86
Interautonómicos	275	433.169	2,24
Convenios de grupo de empresas	54	42.147	2,16
Provincial	36	9.120	2,36
Autonómicos	5	3.586	2,35
Interautonómicos	13	29.441	2,07
Total convenios sectoriales	**1.046**	**6.959.940**	**3,04**
Sector local-comarcal	14	5.112	2,62
Sector provincial	932	4.115.887	3,22
Sector interprovincial	29	572.958	2,63
Autonómicos	28	571.441	2,63
Interautonómicos	1	1.517	3,00
Sector nacional	71	2.265.983	2,82
Ámbito de registro			
Direcciones Provinciales	84	14.097	2,85
Comunidades Autónomas	3.503	743.692	3,11
Dirección General de Trabajo	358	219.537	2,71

* Convenios Registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

incremento fue ligeramente inferior, un 2,16 por 100. En los convenios de sector sin embargo se sobrepasó el 3 por 100 de aumento salarial medio, afectando a casi 7 millones de trabajadores. Entre los convenios sectoriales, los incrementos salariales más elevados se pactaron en los convenios provinciales (3,22 por 100) siguiendo la ya larga tendencia existente en este sentido, con la excepción del año 1999, en el que el mayor crecimiento salarial se fijó en los convenios sectoriales de ámbito local o comarcal. Los convenios sectoriales de ámbito local-comarcal en el año 2000 pactaron un incremento salarial del 2,62 por 100. Por último, en los convenios colectivos de sector nacional registrados hasta 31 de diciembre de 2000 se pactó un incremento medio de 2,82 por 100.

Los mayores incrementos salariales se pactaron en Agricultura y Construcción

Atendiendo a los sectores de actividad (cuadro II-36), se observa que los mayores aumentos salariales se pactaron en la Agricultura, con un incremento de 3,43 por 100, y en la Construcción 3,42 por 100. La tendencia en los últimos años, con la excepción de 1995, era que en el sector agrícola se pactaban los incrementos más altos, dado que era tradicionalmente un sector con remuneraciones más bajas. Llama la atención, sin embargo, que en el año 2000 en el sector de la construcción se haya pactado un incremento alto, pues en años anteriores era el sector con incrementos salariales más bajos. Por último, es el sector servicios el que en términos comparativos ha pactado menores incrementos salariales que en años anteriores, pues tradicionalmente en este sector se pactaban los incrementos más altos de los pactados en sectores no agrarios.

CUADRO II-36

CONVENIOS, EMPRESAS Y TRABAJADORES AFECTADOS Y AUMENTO SALARIAL PACTADO POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 2000*

Sectores de actividad	Convenios	Empresas	Trabajadores	Aumento salarial (en %)
Agrario	78	62.710	469.911	3,43
No agrario	3.867	914.616	7.392.903	2,94
Industria	1.576	220.979	2.603.345	2,87
Construcción	61	89.906	874.703	3,42
Servicios	2.230	603.731	3.914.855	2,88
Total	**3.945**	**977.326**	**7.862.814**	**2,97**

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

CUADRO II-37

CONVENIOS DE EMPRESA, TRABAJADORES AFECTADOS, JORNADA, DISMINUCIÓN MEDIA Y AUMENTO SALARIAL POR TRAMOS DE NÚMERO DE TRABAJADORES, 2000*

Conceptos	Total	Tramos de número de trabajadores						
		Menos de 6	De 6 a 25	De 26 a 50	De 51 a 100	De 101 a 250	De 251 a 500	Más de 500
Convenios de empresa	2.845	26	589	570	549	626	265	220
Trabajadores	860.727	100	9.155	21.443	40.850	102.836	92.002	594.341
Jornada media (horas/año)	1.714,92	1.760,16	1.749,8	1.741,52	1.739,18	1.731,75	1.726,47	1.707,05
Disminución media horas/año	7,15	16,47	12,96	10,18	9,98	8,06	7,85	6,49
Aumento salarial en %	2,48	2,60	3,02	2,90	2,85	2,79	2,84	2,32

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

Las empresas de mayor tamaño pactaron los incrementos salariales más bajos

Si se atiende a los incrementos salariales pactados en los convenios de empresa y al tamaño de las mismas (cuadro II-37), se observa que los mayores incrementos salariales se pactaron en las empresas de 6 a 25 trabajadores, con un 3,02 por 100 de aumento salarial medio. Por el contrario, son las empresas de mayor tamaño (más de 500 trabajadores) las que pactaron en convenios incrementos salariales más bajos. Aunque en las empresas más pequeñas (de hasta 6 trabajadores) se pactaron incrementos salariales bajos, se sigue afianzando la tendencia de que al objeto de reducir la dispersión salarial entre grandes y pequeñas empresas, se suelen pactar incrementos salariales más elevados en las pequeñas que en las grandes, pues son estas últimas las que, tradicionalmente, proporcionaban a sus empleados mejores condiciones salariales.

En cuanto al análisis de los incrementos salariales por Comunidades Autónomas (cuadro II-38), se observa que únicamente en cuatro Comunidades Autónomas —Asturias, Cantabria, Castilla y León y Cataluña— se pactaron incrementos nacionales inferiores a la media nacional, lo que significa que en 14 Comunidades Autónomas sí se superó el aumento salarial medio nacional (2,97 por 100). Las Comunidades Autónomas en las que se pactaron mayores incrementos salariales en el año 2000 fueron: Baleares, País Vasco, Andalucía y Aragón. En 1999 el orden fue el siguiente: Baleares, Andalucía, Navarra y La Rioja.

CUADRO II-38

CONVENIOS AFECTADOS Y AUMENTO SALARIAL PACTADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000*

Comunidades Autónomas	Total convenios	
	Convenios	Aumento salarial en %
Andalucía	505	3,46
Aragón	176	3,27
Asturias	101	2,89
Baleares	62	3,57
Canarias	155	3,29
Cantabria	88	2,80
Castilla-La Mancha	159	3,20
Castilla y León	351	2,78
Cataluña	518	2,79
Comunidad Valenciana	306	3,14
Extremadura	69	3,21
Galicia	280	3,11
Madrid	245	3,11
Murcia	77	3,18
Navarra	96	3,08
País Vasco	326	3,49
La Rioja	38	3,06
Ceuta y Melilla	33	3,30
Interautonómicos	360	2,72
Total	**3.945**	**2,97**

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

Como viene reiterándose en otras Memorias, los incrementos salariales más elevados se han pactado tradicionalmente en las Comunidades con menor grado de industrialización y renta per cápita, al objeto de ir igualando los salarios a nivel nacional. En los últimos años, sin embargo, los incrementos salariales más destacados han ido correspondiendo a las Comunidades que van experimentando mayor grado de desarrollo económico, ejemplo claro el de las Islas Baleares. En todo caso, se observa escasa dispersión salarial entre las distintas Comunidades Autónomas a la hora de pactar incrementos salariales, manifestación quizá de las estrategias centralizadoras de los interlocutores sociales en las negociaciones salariales. Ello no obstante, se plantea el interrogante sobre si la evolución de los salarios en las Comunidades Autónomas se ajusta o no a las diferencias regionales en atención a los niveles de empleo, productividad existentes en las distintas zonas geográficas del país.

CUADRO II-39

CONVENIOS, EMPRESAS, TRABAJADORES AFECTADOS, JORNADA Y AUMENTO SALARIAL POR TRAMOS DE JORNADA PACTADA, 2000*

Conceptos	Tramos de jornada pactada (horas/año)					
	Total	Menos de 1.712	De 1.712 a 1.758	De 1.759 a 1.803	De 1.804 a 1.825	Más de 1.826
Convenios	3.945	773	650	1.464	345	713
Empresas	977.326	26.180	28.510	659.595	129.059	133.982
Trabajadores	7.862.814	847.165	597.305	5.158.538	607.540	652.266
Jornada media (horas/año)	1.763,39	1.606,40	1.735,56	1.778,92	1.810,63	1.826,00
Aumento salarial en %	2,97	2,73	2,72	3,01	2,69	3,46

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

Se dispone también de datos estadísticos para analizar la relación entre los aumentos salariales pactados en convenio (de cualquier ámbito) y la duración de la jornada pactada en los mismos (cuadro II-39). En el año 2000 son los convenios con jornada convencional más elevada (más de 1.826 horas) los que recogen un mayor incremento salarial, 3,46 por 100. En el año anterior (1999) la relación jornada pactada/aumento salarial fue totalmente inversa: en los convenios con menor jornada (inferior a 1.712 horas) se pactaron los incrementos salariales más elevados. Puesto que son numerosos los factores que influyen en las negociaciones salariales, entre ellos la duración y distribución de la jornada, y dado que ya desde hace años la relación entre las variables aumento salarial/jornada pactada no muestra una marcada línea de tendencia, es difícil llegar a alguna conclusión a la vista de los datos aportados.

Los incrementos salariales más elevados se pactaron en los convenios que se firman en el año 2000

Por último, si se observan los incrementos salariales pactados desde el punto de vista del ámbito de vigencia de los convenios, puede verse (cuadro II-40) que existen diferencias significativas entre los incrementos previstos en los convenios que se revisan en el año 2000 y en los convenios que se firman en dicho año (tanto con los firmados por un año como aquéllos con vigencia plurianual, iniciándose ésta en 2000). En este sentido, el incremento salarial fue superior, en 12 décimas y situándose en un 3,09 por 100, en aquellos convenios firmados durante el año 2000 y con efectos económicos en ese año. Este incremento afectaba sin embargo a fecha 31 de diciembre de 2000 al 37,9 por 100 del total de los trabajadores.

CUADRO II-40

CONVENIOS, TRABAJADORES, ÁMBITO DE VIGENCIA Y AUMENTO SALARIAL, 2000*

Ámbito temporal	Aumento salarial (%)	Convenios		Trabajadores	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Total convenios	2,97	3.945		7.862.814	
Revisados	2,90	2.196	55,7	4.885.971	62,1
Firmados	3,09	1.749	44,3	2.976.843	37,9
Firmados por un año	3,22	582	14,8	504.343	6,4
Firmados con vigencia superior al año	3,06	1.167	29,6	2.472.500	31,4

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.
Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

Que sean los incrementos salariales pactados en convenios que se revisan (2,90 por 100) inferiores a los incrementos salariales de los convenios que se firman en el año 2000 (3,09 por 100) ya ocurrió en 1999, año en el que los convenios revisados experimentaron un incremento salarial inferior (en 3 décimas de punto) a los convenios firmados en dicho año. En todo caso, en el año 2000 los convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre que han experimentado un mayor incremento salarial (un 3,22 por 100) han sido los firmados por un año, pero éstos afectan únicamente al 6,4 por 100 del total de los trabajadores afectados por convenios colectivos de cualquier ámbito.

Con mayor precisión en este punto (cuadro II-41) los aumentos salariales por tramos (desde inferior al 1 por 100 a superior al 4 por 100) pactados en convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000, puede verse que para más de la mitad de los trabajadores (52,7 por 100) y en un total de 1.697 convenios colectivos, 43 por 100 del total de los registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 con efectos económicos en ese año, se pactaron incrementos salariales medios entre el 2,01 y el 3 por 100. A su vez, para el 13,8 por 100 de los trabajadores afectados por convenios se fijaron incrementos del 2 por 100, que era la inflación prevista en diciembre de 1999 para el año 2000. De otro lado, el 2,4 por 100 del total de los convenios registrados, que afectan al 0,8 por 100 del total de trabajadores, pactaron incrementos salariales inferiores al 1,99 por 100, es decir, un aumento salarial inferior a la inflación prevista para el año 2000.

CUADRO II-41

CONVENIOS, TRABAJADORES AFECTADOS Y AUMENTO SALARIAL PACTADO POR TRAMOS DE AUMENTO SALARIAL, 2000*

Tramos de aumento salarial	Convenios	Trabajadores	Aumento salarial medio (%)
Inferior al 1,00	18	2.430	0,34
Del 1,00 al 1,49	25	6.223	1,23
Del 1,50 al 1,99	54	58.985	1,62
Igual al 2,00	972	1.088.544	2,00
Del 2,01 al 2,50	689	2.083.141	2,41
Del 2,51 al 3,00	1.008	2.071.151	2,91
Del 3,01 al 3,50	565	1.057.963	3,40
Del 3,51 al 4,00	345	1.109.331	3,67
Superior al 4,00	269	385.046	6,21
Total	**3.945**	**7.862.814**	**2,97**

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre 2000.
Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

Otras cuestiones relativas a las negociaciones salariales

En la negociación de los incrementos salariales y los procedimientos utilizados para su cálculo siguen siendo mayoritarios los convenios que ligan los mismos a la inflación prevista por el Gobierno en el mes de diciembre para el ejercicio económico siguiente. Como ya vimos, en el año 2000 se han producido desviaciones en el IPC previsto inicialmente (2 por 100) con respecto al IPC real en media anual (3,4 por 100). Es por ello que en la negociación colectiva del año 2000 ha alcanzado gran protagonismo la aplicación de cláusulas de revisión salarial o de salvaguarda que tienen por finalidad garantizar la actualización entre la previsión de inflación que se tuvo como referencia a la hora de pactar incrementos salariales y la inflación real del año en curso.

Aumento significativo de la presencia de cláusulas de revisión salarial

La incorporación de este tipo de cláusulas en los convenios estaba descendiendo en los últimos años, pues las previsiones de inflación estaban prácticamente coincidiendo con las tasas de inflación reales de cada año. En el año 2000 sin embargo se produce un aumento significativo en la existencia de cláusulas de salvaguarda tanto en cuanto al número de convenios como en cuanto al número de trabajadores a los que éstas afectan. Así, como puede verse en el cuadro II-42, de los convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000, el 47 por 100 posee cláusula de revisión salarial (en 1999, alcanzaba al 39,8 por 100 de los convenios y en 1998 al 40,6 por 100). Ha aumentado también en el año

CUADRO II-42

CONVENIOS CON CLÁUSULA DE SALVAGUARDA O REVISIÓN SALARIAL, 2000*

Convenios	N.º de convenios	% (1)	N.º de trabajadores	% (1)
Total convenios con cláusula	**1.853**	**47,0**	**5.646.666**	**71,8**
Convenios de empresa	1.239	43,6	470.280	54,6
Convenios de otros ámbitos	614	55,8	5.176.386	73,9
Total convenios registrados	3.945		7.862.814	

* Convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

(1) Se recogen el porcentaje de convenios y de trabajadores afectados por esos convenios respecto del total en cada ámbito funcional señalado (convenios de empresas/convenios de otros ámbitos).

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

2000 el porcentaje de trabajadores cuyos convenios prevén la posibilidad de adecuar sus salarios al IPC real. En este sentido, más del 70 por 100 de los trabajadores, más de 5 millones y medio, están afectados por convenios colectivos con cláusula de revisión salarial (en 1999, esta cifra alcanzaba al 64 por 100 y en 1998 al 53 por 100). En todo caso, como viene siendo habitual son principalmente los convenios sectoriales, frente a los de empresa, los que recogen este tipo de cláusulas.

Si se tiene en cuenta, como ya se ha señalado, que el aumento salarial medio con cláusula de salvaguarda ha sido de 3,6 por 100, en convenios registrados hasta el 28 de febrero de 2001 y con efectos en 2000, por un lado, y que el IPC real del año 2000 (media anual) ha sido 3,4 por 100, la ganancia del poder adquisitivo de los salarios en el año 2000, según los incrementos pactados en convenio, ha sido de dos décimas de punto (véase cuadro II-34). Ahora bien, este dato ha de ser tratado a la vista de los datos del INE (Encuesta de Salarios en la Industria y Servicios[113]), que es prácticamente la única fuente que permite un conocimiento general sobre la evolución de los salarios en España. Además, el crecimiento de los salarios ha de tener en cuenta el llamado «deslizamiento» salarial, que es la diferencia entre el crecimiento efectivo del salario medio y el incremento del salario pactado en convenio, debido a factores personales (antigüedad) o profesionales (cambio de categoría) y/o pagos atrasados.

[113] La Encuesta está dirigida a los establecimientos situados en territorio nacional y excluye, por tamaño de establecimiento, los de menos de 5 trabajadores, y por rama de actividad, el sector agrario y las Administraciones Públicas.

CUADRO II-43
GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES, POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 2000
(Pagos totales en pesetas. Media anual)

Resultados	Pesetas	Tasa (1)
Total	**230.325**	**2,3**
Industria	251.191	2,5
Construcción	201.106	3,8
Servicios	225.790	3,0

(1) Porcentaje de variación respecto al año anterior.
Fuente: INE, *Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios.*

Así, según los datos de la Encuesta de Salarios en la Industria y los servicios, la ganancia salarial media por trabajador y mes en 2000 (cuadro II-43), fue de 230.325 pesetas en pagos totales[114], y supone un incremento de 2,3 por 100 respecto del año 1999, el mismo incremento que los registrados en los años 1999 y 1998. Por sectores de actividad en pagos totales el sector de la industria es el que recoge la mayor ganancia media por trabajador y mes, 245.081 pesetas, pero es el sector de la construcción el que ha experimentado un mayor aumento con respecto a 1999, 3,8 por 100.

Con mayores precisiones pueden verse los datos relativos a la ganancia media por hora trabajada (cuadro II-44), que ofrecen un resultado más ajustado ya que en los cálculos relativos a las ganancias por trabajador/mes no se computan las horas de trabajo realizadas a tiempo parcial. En ambos casos, el concepto de ganancia comprende las remuneraciones en metálico y en especie pagadas a los trabajadores por el tiempo trabajado o por el trabajo realizado, junto con la remuneración por periodos de tiempo no trabajados, como vacaciones o días festivos. Las ganancias incluyen el salario base y los complementos salariales y se refieren a su importe en bruto, antes de las deducciones de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador.

«Deslizamiento» salarial negativo de un punto y cuatro décimas

Si comparamos el incremento salarial (con cláusula de salvaguarda) de los convenios registrados hasta el 28 de febrero de 2001 y con efectos económicos en 2000, que dijimos fue de 3,6 por 100,

[114] Los pagos totales incluyen los pagos ordinarios (pagos de carácter mensual y los extraordinarios si están prorrateados) y los pagos extraordinarios y los atrasados. Las ganancias se recogen en términos brutos.

CUADRO II-44
GANANCIA MEDIA POR HORA TRABAJADA, POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 2000
(Pagos ordinarios en pesetas. Media anual)

Resultados nacionales	Pesetas	Tasa (1)
Total	**1.431**	**2,2**
Industria	1.537	2,3
Construcción	1.271	3,8
Servicios	1.411	2,7

(1) Porcentaje de variación respecto al año anterior.
Fuente: INE, *Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios*.

y la ganancia media total por hora trabajada en 2000 (2,2 por 100) se observa un deslizamiento salarial negativo de un punto y 4 décimas (–1,4). Las razones que pueden explicar el desajuste entre crecimiento salarial efectivo y crecimiento pactado pueden ser tanto el fuerte crecimiento de empleo, como la propia representatividad de la muestra de empresas objeto de la Encuesta de salarios (solamente empresas no agrarias que cuenten con más de 5 trabajadores) que podría ponerse en entredicho dado que no corresponde a la totalidad de la población asalariada.

Por último, en cuanto a las ganancias medias por trabajador/mes en las Comunidades Autónomas (cuadro II-45) según los datos del INE (Encuesta de Salarios de la Industria y los Servicios), es el País Vasco la Comunidad Autónoma con salarios medios más altos, 273.935 pesetas, seguida de la Comunidad de Madrid, Asturias, Navarra, Cataluña y Aragón. Todas estas Comunidades Autónomas experimentaron en 2000 ganancias medias superiores a la media nacional, reflejando seguramente el mayor peso de las empresas del ramo de la Industria en las mismas. Entre las Comunidades Autónomas con ganancias medias inferiores a la nacional se encuentran la Región de Murcia (78 por 100 de la media nacional), Extremadura (82 por 100 de la media nacional) y Castilla-La Mancha (83 por 100 de la media nacional). En cuanto a las Comunidades Autónomas que experimentaron mayores crecimientos salariales con respecto al año 1999 es la Comunidad de Madrid la que se sitúa en el primer puesto, con un crecimiento de 3,3 por 100, seguida de la Región de Murcia (3,2 por 100) y de Canarias (3,2 por 100), y Cataluña (3 por 100). Por último, las Comunidades Autónomas que experimentaron menores crecimientos salariales

CUADRO II-45

GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA, 2000

(Pagos totales en pesetas, media anual, tasa de variación en porcentaje sobre el año anterior)

Comunidades Autónomas	Pesetas	Tasa
Andalucía	209.311	1,3
Aragón	230.644	2,6
Asturias	246.312	2,2
Baleares	206.489	1,0
Canarias	194.783	3,2
Cantabria	225.921	1,2
Castilla-La Mancha	192.374	1,4
Castilla y León	220.838	1,0
Cataluña	238.960	3,0
Comunidad Valenciana	204.986	1,9
Extremadura	189.367	2,8
Galicia	201.162	2,8
Madrid	269.162	3,3
Murcia	181.773	3,2
Navarra	246.308	1,7
País Vasco	273.935	1,8
La Rioja	212.759	2,6
Total	**230.325**	**2,3**

Fuente: INE, *Encuesta de Salarios de la Industria y los Servicios.*

con respecto a 1999 fueron Baleares y Castilla y León (1 por 100) y Cantabria (1,2 por 100).

Salario mínimo de convenio

La inclusión de un salario mínimo de convenio, reconocido a los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del convenio, ha venido siendo una práctica frecuente aunque no generalizada. Este salario mínimo, superior al salario mínimo interprofesional fijado anualmente por el Gobierno, se establece en unas ocasiones como una cuantía mínima y en otras como concepto variable en función del grupo profesional o categoría asignadas a los trabajadores.

En el año 2000, un 19 por 100 de los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de ese año contiene cláusulas relativas al salario mínimo de convenio, afectando al 30 por 100 de los trabajadores (2.322.820). Respecto de los datos de 1999 supone un ligero aumento (4 puntos porcentuales) en cuanto al número de tra-

bajadores afectados por estas cláusulas, pero no se llegan a alcanzar las cifras de 1998, año en el que el 35 por 100 de los trabajadores tenían reconocido un salario mínimo de convenio.

En todo caso, se sigue la tendencia de que sean los convenios sectoriales de ámbito provincial los que incorporen este tipo de cláusulas. En cuanto a los sectores de actividad, la mayor implantación del salario mínimo de convenio corresponde al sector industrial, seguido del sector servicios.

La estructura del salario

A partir de la reforma laboral de 1994 y de la derogación de la normativa reglamentaria reguladora del salario, se ampliaron los contenidos negociales en torno a la determinación de la estructura salarial y los modelos retributivos. El Acuerdo Interconfederal de Cobertura de Vacíos (AICV) de 1997, por su parte, sentaba pautas determinadas en torno a la adaptación de las vigentes estructuras salariales y aconsejaba la racionalización de las mismas. El Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (1997) defendía la articulación («el convenio nacional de rama de actividad puede remitir las cuestiones salariales a ámbitos inferiores»), y exigía mayor claridad y correcta definición de los conceptos salariales.

A pesar de que se ha incrementado el número de convenios sectoriales que avanzan tímidamente hacia la articulación de las materias salariales, la realidad convencional muestra que estamos aún lejos de cumplir los objetivos propuestos por las citadas Reforma y Acuerdos Interconfederales. La estructura del salario sigue estando vinculada a los sistemas tradicionales de clasificación profesional (tablas salariales en torno a categorías, niveles o grupos profesionales), por lo que debe preverse su adaptación a los procesos de modernización de estos sistemas e ir incorporando criterios y complementos salariales más actuales y racionales.

La cuantía del salario base se determina según el tiempo o jornada de trabajo en sus distintas variables, predominando el salario-diario y el salario-mensual. Se sigue utilizando como base para el cálculo de los complementos de carácter personal como la antigüedad o la promoción profesional. Los complementos salariales previstos en los convenios son de muy diversa índole resultando en ocasiones difícil su asimilación a alguna de las categorías previs-

tas en el ET: complementos personales, vinculados al puesto de trabajo, por cantidad o calidad del trabajo realizado y en función de la situación económica de la empresa, dificultando en ocasiones su consideración o no como complementos consolidables.

La estructura salarial se encuentra regulada de forma mayoritaria en los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales. En este sentido, más del 70 por 100 de los convenios de empresa cuentan con una estructura salarial definida y un 50 por 100 de los convenios de otro ámbito, que afectan al 62 por 100 de los trabajadores por ellos cubiertos (cuadro II-46). Estos datos son similares a los de años anteriores sin que pueda apreciarse tendencias significativas en estos aspectos.

Progresiva eliminación del complemento de antigüedad

Aunque no se disponen de datos relativos a la incidencia del complemento personal que retribuye la permanencia en la empresa o antigüedad, la presencia de la misma en la negociación colectiva

CUADRO II-46
CLÁUSULAS SALARIALES POR ÁMBITO FUNCIONAL, 2000*

Total convenios	**N.º de convenios**	**% (1)**	**N.º de trabajadores**	**% (1)**
Con estructura salarial	2.627	66,6	5.117.273	65,1
Complementos y criterios de cálculo	2.326	59,0	4.442.353.	56,5
Consolidación complementos salariales	1.295	32,8	2.591.413	33,0
Incentivos ligados a productividad	1.112	28,2	2.016.505	25,7
Incentivos ligados a asistencia	1.032	26,2	1.538.325	19,6
Convenios de empresa	**N.º de convenios**	**% (1)**	**N.º de trabajadores**	**% (1)**
Con estructura salarial	2.043	71,8	720.159	83,7
Complementos y criterios de cálculo	1.837	64,6	691.350	80,3
Consolidación complementos salariales	1.001	35,2	463.012	53,8
Incentivos ligados a productividad	958	33,7	463.521	53,9
Incentivos ligados a asistencia	802	28,2	264.014	30,7
Convenios de otro ámbito	**N.º de convenios**	**% (1)**	**N.º de trabajadores**	**% (1)**
Con estructura salarial	584	53,1	4.397.114	62,8
Complementos y criterios de cálculo	489	44,5	3.751.003	53,6
Consolidación complementos salariales	294	26,7	2.128.401	30,4
Incentivos ligados a productividad	154	14,0	1.552.984	22,2
Incentivos ligados a asistencia	230	20,9	1.274.311	18,2
Total convenios registrados	**3.945**		**7.862.814**	

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

(1) Porcentaje de convenios y de trabajadores afectados por esos convenios respecto del total en cada ámbito funcional señalado (convenios de empresa/convenios de otro ámbito).

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

ha empezado a decrecer de la mano de la modificación del art. 25 del ET a partir de la Reforma de 1994 y del AICV de 1997, que tenían clara voluntad de restar importancia a este complemento. Las fórmulas escogidas para la progresiva eliminación o al menos contención económica del complemento son, de un lado, el establecimiento de topes más reducidos en los complementos de antigüedad (rebaja de los porcentajes máximos) y, de otro, la congelación del módulo base del complemento. Se prevé también la transformación de los complementos en otros más relacionados con las capacidades de los trabajadores.

En cuanto a las cláusulas de los convenios relativas a los complementos de puesto de trabajo se siguen manteniendo muchos de los previstos en la derogada normativa reglamentaria sobre ordenación del salario, principalmente los tradicionales complementos de toxicidad, penosidad, peligrosidad, trabajo nocturno, turnicidad, festivos, polivalencia funcional, etc. Se trata de complementos no consolidables y de carácter funcional lo que determina que su percepción dependa de la efectiva prestación de trabajo en el puesto determinado y con las circunstancias que obedecen a los mismos.

Incentivos ligados a la productividad

Con respecto a las cláusulas convencionales relativas a los incentivos ligados a la productividad (cuadro II-47), puede verse en los datos que proporciona el MTAS, que durante el periodo 1995-2000 la existencia de este tipo de incentivos en los convenios permanece prácticamente invariable. En el año 2000, afectan a dos millones de trabajadores, el 25,7 por 100 del total de trabajadores y más de la mitad (cerca del 54 por 100) de los trabajadores con convenios de empresa. De todas formas estos datos no parecen coincidir con los cambios que se observan en las empresas, donde cada vez con mayor frecuencia se introducen complementos salariales en atención a la cantidad o calidad del trabajo realizado, tanto como complementos salariales vinculados a la consecución de objetivos individuales, como objetivos de área o de grupo funcional, como objetivos globales de la empresa. De ahí que haya que concluir que los sistemas de incentivos a la productividad y otras modalidades (participación en beneficios, destajo, trabajo a tarea y prima global de producción) en algunas ocasiones aparecen reflejados en los convenios colectivos, pero la mayoría de las veces son producto de acuerdos o pactos de empresa que no quedan reflejados en las estadísticas oficiales de la negociación colectiva.

CUADRO II-47

CLÁUSULAS RELATIVAS A INCENTIVOS LIGADOS A LA PRODUCTIVIDAD, 1995-2000*

Año	Total convenios	Total trabajadores	% (1)	Convenios de empresa	Trabajadores	% (1)	Convenios de otro ámbito	Trabajadores	% (1)
1995	965	2.006.505	34,4	845	427.666	54,2	120	1.578.839	31,3
1996	975	1.752.468	29,9	850	422.160	57,4	125	1.330.308	25,9
1997	994	2.256.811	31,9	849	378.480	52,8	145	1.878.331	29,5
1998	1.054	1.794.460	25,7	900	373.097	55,0	154	1.421.363	22,6
1999	1.076	2.157.736	27,7	921	380.158	48,1	155	1.777.578	25,4
2000	1.112	2.016.505	25,7	958	463.521	53,9	154	1.552.984	22,2

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de cada año.
(1) Porcentaje sobre el total de trabajadores.
Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

Cláusulas de inaplicación del régimen salarial

Como se ha puesto de manifiesto al analizar el ámbito de aplicación temporal de los convenios colectivos, cada vez son más numerosos los convenios que se negocian con vigencias superiores a un año; ya vimos que en el periodo 1993-2000 se ha duplicado prácticamente tanto el número de convenios como el de trabajadores afectados (cuadro II-48) por convenios con vigencia plurianual. En el año 2000, el 29 por 100 de los convenios prevén dicha vigencia, afectando al 31,4 por 100 de los trabajadores. Es interesante en este punto comprobar que esta tendencia viene acompañada también de un aumento paulatino de cláusulas convencionales relativas a la posibilidad de descuelgue salarial o cláusulas de inaplicación del régimen salarial.

Las cláusulas de descuelgue salarial hacen posible la inaplicación del régimen salarial «a las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación» (art. 82.3 ET). En defecto de cláusula, la inaplicación podrá efectuarse mediante acuerdo empresa-representantes de los trabajadores; de no existir acuerdo, la discrepancia será solventada por la Comisión Paritaria del convenio.

Como puede verse en el cuadro II-48, casi la mitad de los convenios, un 46,9 por 100, de ámbito sectorial y de grupos de empresa prevén cláusulas de inaplicación del régimen salarial, afectando a cerca del 70 por 100 de los trabajadores afectados por los mismos. Aunque el ET exige que en los convenios de ámbito

CUADRO II-48

CONVENIOS COLECTIVOS DE ÁMBITO DISTINTO DEL EMPRESARIAL CON CLÁUSULA DE INAPLICACIÓN DEL RÉGIMEN SALARIAL, 2000*

Total convenios	N.º de convenios	% (1)	N.º de trabajadores	% (1)
Con cláusula de inaplicación	516	46,9	4.737.893	67,7
Condiciones para acogerse	477	43,4	4.221.505	60,3
Procedimiento a seguir y/o documentación a aportar	466	42,4	4.410.194	63,0
Participación Comisión paritaria	289	26,3	3.023.320	43,2
Total convenios de ámbito distinto al empresarial	**1.100**		**7.002.087**	

* Convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

(1) Porcentaje de convenios y de trabajadores afectados respecto del total de convenios de ámbito distinto del empresarial.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

superior a la empresa se fijen las condiciones y procedimientos por los que podría no aplicarse el régimen salarial, únicamente cerca del 40 por 100 de los convenios especifican dichos aspectos.

Tiempo de trabajo

La mayoría de los convenios fijan la jornada en cómputo anual

La regulación del tiempo de trabajo, y en especial de la jornada, es uno de los temas básicos de la negociación colectiva por indicación del artículo 34 ET que remite a la regulación convencional, en su defecto contractual, la fijación de la jornada de trabajo. La mayoría de los convenios (más del 80 por 100) fijan la jornada sólo en cómputo anual, cerca del 20 por 100 restante sólo en cómputo semanal y cerca del 30 por 100 establece un módulo doble, anual-semanal.

Reducción de casi dos horas respecto de la jornada media pactada en 1999

A efectos comparativos con años anteriores (cuadro II-49), según los datos correspondientes a los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio, la jornada media anual pactada en el año 2000 ha sido de 1.763,4 horas, equivalente a 38,6 horas a la semana[115], inferior en los convenios de empresa (1.714,9 ho-

[115] El procedimiento utilizado para convertir la jornada anual en jornada semanal es el previsto en el Acuerdo Interconfederal de 1983: Jornada semanal=Jornada Anual x 6/días de trabajo al año (365 – 30 días de vacaciones – 13 días festivos – 48 domingos).

CUADRO II-49

JORNADA PACTADA EN CONVENIOS COLECTIVOS, 1989-2000

Años	Jornada anual	Variación n.º horas
1989	1.772,2	–6,6
1990	1.769,7	–2,5
1991	1.768,0	–1,7
1992	1.766,6	–1,4
1993	1.763,5	–3,1
1994	1.763,4	–0,1
1995	1.765,9	2,5
1996	1.767,5	1,6
1997	1.767,8	0,3
1998	1.766,0	–1,8
1999*	1.765,3	–0,7
2000**	1.763,4	–1,9

* Datos provisionales.

** Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

ras) respecto de los convenios de otro ámbito (1.769,4 horas). Estos datos corroboran la tendencia hacia la progresiva disminución de la jornada media anual, con la excepción del periodo 1995-97. Puede verse en el cuadro II-49 que la jornada media anual de 2000 coincide con la jornada media anual más baja de la década, la de 1994 (1.763,4 horas). Esta disminución de la jornada pactada afecta tanto a los convenios sectoriales como a los convenios de empresa y ha supuesto una reducción de casi dos horas con respecto de la jornada media pactada en 1999. La reducción en la jornada pactada es más significativa que la producida en 1994 pero parece seguir estando frenada por la incorporación de trabajadores a convenios con jornadas superiores a la media.

En este sentido, en el 29 por 100 de los convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 se pactó una reducción de la jornada, cuatro puntos porcentuales más que en 1999, afectando al 36 por 100 del total de los trabajadores amparados por la negociación colectiva del año (casi tres millones de trabajadores). En el 70 por 100 de los convenios en los que se pactó la reducción de la jornada, la disminución media fue de 9,51 horas al año, afectando a 2 millones y medio de trabajadores. Esta disminución corresponde a lo que se ha venido denominando día de convenio. Un 8 por 100 de los trabajadores cuya jornada pactada se redujo res-

pecto de años anteriores experimentaron una reducción de media de 31 horas al año.

Por tramos de jornada (cuadro II-50) en el año 2000, más del 65 por 100 de los trabajadores tiene su jornada media pactada entre 1.759 y 1.803 horas/año, mientras que para un 10,7 por 100 de los trabajadores se pactó una jornada menor a 1.712 horas y para un 8,2 por 100 una jornada pactada mayor a 1.826 horas. La ligera reducción de la jornada media pactada afecta a los tramos intermedios de la jornada, donde están situados la mayoría de los trabajadores. Se mantiene el porcentaje de trabajadores con jornada inferior a 1.759 horas, tiende a bajar el porcentaje de los trabajadores con jornada anual pactada superior a 1.803 horas, y es el porcentaje de trabajadores en los tramos intermedios (1.759-1.803) el que aumenta ligeramente.

En cuanto al ámbito de vigencia de los convenios y las jornadas medias pactadas se producen ligeras modificaciones con respecto a años anteriores. En 2000 los convenios en los que se pactaron jornadas medias más altas fueron los convenios con vigencias plurianuales, 1.764,6 horas/año, a diferencia de 1999, año en el que las jornadas medias más altas se pactaron en los convenios con vigencia únicamente para dicho año (1.773 horas/año). Los convenios con vigencias superiores al año registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 pactaron una jornada media de 1.758,9 horas/año, lo que supone una disminución de casi 14 horas de un año a otro, y apoya la posible consolidación de una tendencia a un descenso paulatino de la jornada pactada. Por último, los convenios revisados en 2000, pactaron una jornada media de 1.763,2 horas/año, inferior en dos horas respecto de la jornada media pactada en los convenios revisados en 1999.

Atendiendo al ámbito funcional de los convenios se observa, como viene siendo habitual, que los convenios de sector (y de grupo de empresas[116]) establecen una jornada media (1.769,3 horas/año) superior a la pactada en los convenios de empresa

[116] Como ya se ha señalado, los datos estadísticos del MTAS, *Boletín de convenios colectivos,* hacen una distinción desde el punto de vista del ámbito funcional, entre convenios de empresa y convenios de ámbito distinto al de empresa, incluyéndose entre estos últimos a los convenios sectoriales y convenios de grupo de empresa.

CUADRO II-50

CONVENIOS, EMPRESAS, TRABAJADORES AFECTADOS Y JORNADA SEGÚN TRAMO DE JORNADA PACTADA, 2000*

Conceptos	Tramos de jornada pactada (horas/año)					
	Total	Menos de 1.712	De 1.712 a 1.758	De 1.759 a 1.803	De 1.804 a 1.825	Más de 1.826
Convenios	3.945	773	650	1.464	345	713
Empresas	977.326	26.180	28.510	659.595	129.059	133.982
Trabajadores	7.862.814	867.165	597.305	5.158.538	607.540	652.266
Jornada media (horas/año)	1.763,39	1.606,40	1.735,56	1.778,92	1.810,63	1.826,00
Aumento salarial en %	2,97	2,73	2,72	3,01	2,69	3,46

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

(1.714,9 horas/año), reduciéndose, con respecto a 1999, en 4 horas en los convenios sectoriales y de grupo de empresas, y en 5 horas respecto de los convenios de empresa. En los convenios de empresa se sigue apreciando, como en años anteriores, una tendencia definida: cuanto mayor es el número de trabajadores en plantilla, menor es la jornada media pactada. En este sentido, en los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000, se han pactado las siguientes jornadas en atención al número de trabajadores en plantilla: 1.760 horas/año en empresas con menos de 6 trabajadores; 1.741 horas/año en empresas con 6-25 trabajadores; 1.749 horas/año en empresas con 26-50 trabajadores; 1.739 horas/año en empresas con 51-100 trabajadores; 1.731 horas/año en empresas con 101-250 trabajadores; 1.726 horas/año en empresas con 251-500 trabajadores; y, por último, 1.707 horas/año en empresas con más de 500 trabajadores.

En cuanto a las jornadas pactadas en los distintos sectores de actividad, la jornada media más alta corresponde al sector agrario (1.782,8 horas/año), produciéndose un incremento de 13 horas con respecto al año 1999 (1.769,2 horas/año). Se reducen sin embargo, con respecto al año anterior, las jornadas medias pactadas en los otros sectores: en el sector industrial (1.769,6 horas/año), se reduce en 4 horas; en el sector de la construcción (1.760,9 horas/año) se reduce en 1 hora; y en el sector servicios se reduce en 7 horas. Como consecuencia del incremento de la jornada pactada en el sec-

tor agrario, se aprecia una escisión en la tendencia hasta ahora apreciada de paulatina aproximación de los sectores a la jornada media anual pactada (1.763,4). La dispersión entre sectores, excluyendo el sector agrario se sitúa en el año 2000 en 12 horas y 20 minutos al año. Con la inclusión de la jornada media pactada en el sector agrario se incrementa dicha dispersión en 25 horas y 40 minutos al año. La dispersión entre sectores en el año 1999 se situó en 12 horas y 10 minutos al año.

Conforme a la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL)[117], de otro lado, la jornada media efectiva por trabajador a jornada completa en cómputo anual[118] (2000) ha sido de 1.675,2 horas (cuadro II-51), una hora superior a la jornada efectiva realizada en 1999 (media anual), y 88 horas y veinte minutos inferior a la pactada en los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000. Con respecto a los datos de 1999, la jornada media efectiva ha permanecido prácticamente igual, apreciándose únicamente un ligero descenso en la jornada media efectiva en el sector de la construcción, de 1.795,3

CUADRO II-51

JORNADA MEDIA EFECTIVA ANUAL POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DEL CENTRO, 2000

(Horas/año)

Tamaño del centro	Total	Industria	Construcción	Servicios
Total	1.675,2	1.733,3	1.781,5	1.632,5
De 1 a 10 trabajadores	1.658,7	1.697,9	1.761,6	1.628,4
De 11 a 50 trabajadores	1.704,6	1.755,3	1.792,1	1.651,6
De 51 a 250 trabajadores	1.683,7	1.746,8	1.793,1	1.625,9
Más de 250 trabajadores	1.650,9	1.714,9	1.773,4	1.623,9

Fuente: MTAS, *Encuesta de Coyuntura Laboral.*

[117] Esta encuesta se elabora trimestralmente por el MTAS desde 1990. En 1997 se modificó el ámbito y se incluyen también a los de trabajo con menos de 5 trabajadores. El ámbito sectorial comprende la Industria, la Construcción y los Servicios, excluyéndose de este último ámbito la Administración Pública, Defensa, Seguridad social obligatoria, Organismos extraterritoriales y las Organizaciones religiosas.

[118] Para el cálculo de la jornada media efectiva se tienen en cuenta las horas anuales pactadas (por convenio colectivo o acuerdo empresa-trabajador) o jornada que teóricamente está previsto trabajar y horas extraordinarias realizadas, restándose las no trabajadas por diferentes motivos, excepto las no realizadas por motivos técnicos.

horas/año a 1.781,5 horas/año en 2000. Puede apreciarse que en todos los sectores las jornadas medias más elevadas se realizaron en las empresas que cuentan con 11-50 trabajadores.

Disminuye el número de horas trabajadas a tiempo parcial

En cuanto a la jornada media efectiva según tipo de jornada, a tiempo completo/a tiempo parcial (cuadro II-52), llama la atención la disminución en el número de horas trabajadas por los contratados a tiempo parcial (978 horas/año), con respecto a los datos de 1999 (997 horas/año) y de 1998 (987 horas/año). Seguramente la ruptura de la tendencia hasta ahora observada de crecimiento continuo del trabajo a tiempo parcial podría encontrarse en el efecto que ha producido la reforma del régimen jurídico del contrato a tiempo parcial en noviembre de 1998 (RD 15/1998) y el establecimiento del tope del 77 por 100 de la jornada a tiempo completo. De otro lado, ha de tenerse en cuenta que los datos de la ECL no incluyen al sector agrario por lo que no se computan las horas trabajadas de los fijos discontinuos.

CUADRO II-52
JORNADA MEDIA EFECTIVA POR TRABAJADOR SEGÚN TIPO DE JORNADA, 1998-2000
(Horas/año)

Años	Total	Tiempo completo	Tiempo parcial
1998	1.671,7	1.770,1	987,4
1999	1.674,3	1.772,5	997,0
2000	1.675,2	1.775,3	978,0

Fuente: MTAS, *Anuario de Estadísticas Laborales y Asuntos Sociales, 1998 y 1999. Encuesta de Coyuntura Laboral.*

Horas extraordinarias

En cuanto a las previsiones convencionales relativas a las horas extraordinarias, se observa (cuadro II-53) que un 69 por 100 de los convenios contienen alguna cláusula relativa a las horas extraordinarias. Más de la mitad de los convenios (52,2 por 100) prevén la compensación de la realización de horas extraordinarias con abono dinerario, afectando a 4 millones de trabajadores (51,8 por 100). La compensación de las horas extraordinarias con descanso, promocionada desde el AINC de 1997, está prevista solamente en el 36,4 por 100 de los convenios, afectando a 3 millones de trabajadores. Llama la atención que, mientras sí se prevé con mayor frecuencia

CUADRO II-53
CLÁUSULAS SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS PACTADAS EN CONVENIOS, 2000*

Conceptos	Convenios		Trabajadores	
	Número	Porcentaje (1)	Número	Porcentaje (1)
Total	3.945	100,0	7.862.814	100,0
Total con cláusula horas extraordinarias	2.724	69,0	5.570.018	70,8
Eliminación de horas extraordinarias	390	9,9	939.578	12,0
– respecto al año anterior	100	2,5	69.961	0,9
– respecto al tope máximo legal	132	3,4	465.874	5,9
– otras no contenidas en apartados anteriores	880	22,3	2.061.867	26,2
Compensación de horas extraordinarias con abono dinerario	2.061	52,2	4.074.153	51,8
– con valor superior a la hora ordinaria	1.759	44,6	3.240.922	41,2
Compensación de horas extraordinarias con descanso	1.434	36,4	3.034.920	38,6
– con acumulación y disfrute en periodos superiores a los legales	560	14,2	820.720	10,4
Obligatoriedad realización horas extraordinarias	386	9,8	598.097	7,6

* Convenios Registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.
(1) Porcentaje de convenios y trabajadores afectados por los convenios que incluyen las cláusulas señaladas respecto del total de convenios.
Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

que se abone la hora extraordinaria con valor superior a la ordinaria, en el 44,6 por 100 de los convenios, no se ha acogido en los convenios la posibilidad de compensar las horas extraordinarias con mayor, o con mejor distribución, del tiempo de descanso compensatorio (se prevé esta posibilidad únicamente para el 10 por 100 de los trabajadores). En cuanto a la reducción o eliminación de horas extraordinarias, por último, siguiendo las previsiones del AINC de 1997 que impulsaban a su eliminación o reducción, el 38 por 100 de los convenios recogen la posibilidad de algún tipo de reducción, y únicamente el 9,9 por 100 prevén su eliminación, afectando al 12 por 100 de los trabajadores.

Según los datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral, el número de horas extraordinarias realizadas (media anual 2000) ha sido de 58.818 horas (cuadro II-54) muy similar al número de horas extraordinarias realizadas en el año anterior. Permanecen también en términos similares a los datos de 1999 las variables relativas al número de horas por trabajador que las ha realizado, 100 horas/año por trabajador, y al promedio horas extraordinarias/trabajadores, 6 horas/año.

CUADRO II-54
HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS, 1992-2000
(Promedios anuales)

Años	Total horas (miles)	Horas por trabajador que las ha realizado	Horas por trabajador a tiempo completo
1992	64.399,4	98,4	10,5
1993	49.966,9	95,1	8,8
1994	53.606,1	95,9	9,7
1995	57.770,2	100,6	10,3
1996	64.550,2	107,7	11,5
1997	71.740,2	124,7	9,7
1998	67.105,4	108,5	8,5
1999	57.212,0	101,9	6,8
2000	58.818,5	100,1	6,7

Fuente: MTAS, *Encuesta de Coyuntura Laboral*.

El valor de la hora extraordinaria en media anual año 2000 fue, según la Encuesta de Salarios en la Industria y el Comercio, 1.691 pesetas, un 18 por 100 más que el valor de la hora ordinaria, 1.431 pesetas, porcentaje similar al correspondiente a los valores de las horas ordinarias y extraordinarias de 1999 (1.400 y 1.664 pesetas respectivamente). La ganancia media por hora trabajada en pagos ordinarios[119], según los sectores de actividad (cuadro II-55) muestra que es la Industria el sector con mayores ganancias y con mayor diferencia entre el valor de la hora ordinaria (1.537 pesetas) sobre la hora extraordinaria (2.090 pesetas), principalmente en la categoría «obreros» (grupos de cotización 8-11) en el que la diferencia entre el valor de una u otra hora alcanza el 53,9 por 100. Por el contrario, como viene siendo habitual en años anteriores, en el sector servicios y en la categoría con mayores remuneraciones, «empleados» (grupos de cotización 1-7), el valor de la hora extraordinaria es inferior en un 20 por 100 al valor de la hora ordinaria. Ello significa probablemente que al haberse eliminado la obligación de incrementar el 75 por 100 del valor de la hora ordinaria en la retribución de la extraordinaria, de un lado, y al suprimirse la sobrecotización de las horas extraordinarias, por otro, en muchas empresas se percibe lo mismo por una hora ordinaria y una extraordinaria. Se ha visto que solamente en convenios que afectan

[119] Los pagos ordinarios incluyen los pagos de carácter mensual, incluidos los pagos extraordinarios si están prorrateados.

CUADRO II-55

GANANCIA POR HORA NORMAL Y EXTRAORDINARIA, POR SECTOR Y CATEGORÍA, 2000

(Pagos ordinarios en jornada normal, pesetas hora. Pagos por hora extraordinaria en pesetas y % de la hora extraordinaria sobre la normal. Promedios anuales)

Categorías	Sectores de actividad			
	Industria	Construcción	Servicios	Total
Total				
Hora normal	1.537	1.271	1.411	1.431
Hora extraordinaria	2.090	1.683	1.360	1.691
Incremento hora extra.	36,0	32,4	–3,6	18,2
Empleados				
Hora normal	2.077	1.810	1.638	1.759
Hora extraordinaria	2.564	1.680	1.316	1.527
Incremento hora extra.	23,4	–7,2	–20,6	–13,2
Obreros				
Hora normal	1.299	1.123	1.021	1.157
Hora extraordinaria	1.999	1.689	1.468	1.818
Incremento hora extra.	53,9	50,4	43,8	57,1

Fuente: INE, *Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios.*

al 41 por 100 de los trabajadores se ha pactado un valor superior para la hora extraordinaria. No ocurre igual en el sector servicios, categoría «obreros», ya que el valor de la hora extraordinaria sí es superior (un 43 por 100) al valor de la hora ordinaria.

Distribución irregular del tiempo de trabajo

Junto a la jornada laboral en cómputo anual es también objeto de negociación la posible distribución irregular de la misma a lo largo del año. Uno de los objetivos básicos de la reforma laboral de 1994 perseguía una más flexible ordenación del tiempo de trabajo mediante la conversión en disponibles para la negociación colectiva de los límites de la jornada máxima en cómputo semanal y diario, de forma que «mediante acuerdo colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año (art. 34.2 ET)», con los únicos límites de los descansos mínimos fijados legalmente.

Como se muestra en el cuadro II-56, de los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000, un 23 por 100 acordaron la

distribución irregular de la jornada pactada en cómputo anual, afectando a más del 45 por 100 de los trabajadores (3.548.782). Aunque los datos son similares a los de 1999, puede considerarse una cifra significativa si se tiene en cuenta que este tipo de cláusulas estaba prácticamente ausente de la negociación colectiva unos años antes. Además, el número de trabajadores afectados ha aumentado en medio millón en la negociación colectiva del año 2000 frente a la del año 1999. De otro lado, el sector en el que se ha procedido de forma más generalizada hacia la distribución irregular de la jornada ha sido el sector industrial, seguido del sector servicios. En el sector industrial, las actividades en las que se registra una mayor implantación son las de química, textil y metalurgia.

El contenido de las cláusulas convencionales relativas a la distribución irregular de la jornada pactada en cómputo anual adoptan, sin embargo, diversas modalidades.

Así, en primer lugar, la distribución irregular de la jornada quedaría determinada en el propio convenio colectivo, respetando normalmente el límite de las 9 horas diarias de trabajo efectivo y modificándose por ejemplo la distribución horaria en los meses de

CUADRO II-56
CLÁUSULAS PACTADAS RELATIVAS A JORNADA, 2000*

	Convenios		Trabajadores	
	Número	Porcentaje (1)	Número	Porcentaje (1)
Total	**3.945**	**100,0**	**7.862.814**	**100,0**
Total con cláusulas relativas a jornada	3.084	78,2	6.341.352	80,7
Distribución irregular de la jornada a lo largo del año	934	23,7	3.548.782	45,1
Jornada ordinaria superior a 9 horas diarias	259	6,6	1.487.356	18,9
En jornada continuada de + 6 horas, el descanso legal se considera tiempo de trabajo	1.790	45,4	2.365.201	30,1
Acumulación del descanso diario en periodos de 14 días	496	12,6	1.246.135	15,9
Régimen de trabajo a turnos	345	8,8	555.376	7,1

* Convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.
(1) Porcentaje de convenios y trabajadores afectados por esos convenios que incluyen las cláusulas señaladas respecto del total de cada ámbito funcional considerado.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

verano. Se trata de formas más o menos tradicionales que no prevén otro tipo de modificaciones de jornada en atención a necesidades empresariales. En segundo lugar, se encuentran otros tipos de cláusulas que si bien recogen una distribución irregular de la jornada, no predeterminan cómo ésta se llevará a cabo, sino que contemplan la duración variable de la jornada como una posibilidad abierta.

Dentro de esta última alternativa de fórmulas abiertas, la aplicación de la distribución irregular de la jornada puede concebirse como facultad empresarial, bien fijando o no unos límites máximos y mínimos entre los que será posible modificar cambios de horarios o duración de la jornada. De otro lado, en otras cláusulas convencionales la distribución irregular está sujeta al control de los representantes de los trabajadores, bien mediante el reconocimiento de derechos de información y consulta sobre las modificaciones de horarios, bien exigiéndose acuerdo específico con los mismos, como sucede en la mayoría de los casos.

La mayoría de los convenios sectoriales de ámbito nacional con efectos económicos en 2000 proceden a una ordenación flexible o irregular de la jornada, superando los límites de 9 horas diarias y 40 semanales. En este punto sí parece que está en vías de consolidación la tendencia hacia la articulación de esta materia en ámbitos superiores respecto del ámbito empresarial. La distribución irregular queda determinada, por indicación del convenio nacional, en el ámbito de la empresa previa negociación con los representantes de los trabajadores o con los propios trabajadores en defecto de aquéllos.

Empleo

Desde el año 1994 y a partir de los AIEE y AINC de 1997, se ha manifestado una progresiva incorporación en los convenios colectivos de cláusulas en materia de empleo y contratación, contenidos que han estado tradicionalmente ausentes de la negociación colectiva. De un lado, la reforma legislativa de 1994 vino a imponer abundantes remisiones de la legislación a la negociación colectiva, bien dispositivizando determinados preceptos legales a los efectos de la negociación, bien reclamando de la negociación la integración o concreción de determinados mandatos legales. Por otro

lado, la Ley 63/1997, que asumía los compromisos del AIEE, recogía las apuestas de los interlocutores sociales por un incremento en la contratación indefinida, así como la delimitación de los supuestos de la contratación temporal al objeto de facilitar una mayor estabilidad y una menor rotación en el conjunto del sistema de contratación. El AINC, por último, mostraba la preocupación de los interlocutores sociales por el mantenimiento y creación de empleo estable y de calidad y fomentaba la traducción a los convenios de los principios y medidas previstos en el AIEE.

El empleo ha sido uno de los ejes fundamentales en las mesas de negociación

En los últimos años, el empleo, en primer lugar, ha sido uno de los ejes centrales en las mesas de negociación y se han elaborado planes específicos tanto en el sector público como en el privado relativos a esta materia. Según los datos del MTAS, respecto de los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000, el 60,2 por 100 de los trabajadores están afectados por convenios que recogen cláusulas relativas al empleo (cuadro II-57). Los datos serían mayores si se tuvieran en cuenta los acuerdos o pactos de empresa que prevén compromisos de creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo.

No se aprecian, por otro lado, diferencias significativas entre los convenios de sector y los convenios de empresa. Quizá una mayor presencia en los convenios de sector (un 44 por 100 de los registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 contienen cláusulas relativas a empleo), frente a los convenios de empresa (un 41 por 100 de los registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 contienen cláusulas relativas a empleo).

Cláusulas más frecuentes: conversión de contratos temporales en indefinidos

Las cláusulas más frecuentes recogidas en los convenios en materia de empleo fueron tanto las relativas a la conversión de contratos temporales en indefinidos como aquellas referidas al compromiso de mantener un volumen de empleo fijo. Respecto a las primeras, que afectan en 2000 a cerca de 2 millones de trabajadores (cuadro II-57), se prevén acuerdos de conversión de contratos temporales en indefinidos, en ocasiones fijando procedimientos y compromisos determinados a tal efecto, bien como mera posibilidad, bien imponiendo la obligación de reunión con la representación de los trabajadores para establecer el número, las condiciones (por ejemplo, mayor antigüedad total en la empresa o contrato de mayor duración) y los plazos temporales para las eventuales conversiones o transformaciones contractuales.

CUADRO II-57
CLÁUSULAS PACTADAS RELATIVAS A EMPLEO, 2000*

	Convenios		Trabajadores	
	Número	Porcentaje (1)	Número	Porcentaje (1)
Total	**3.945**	**100,0**	**7.862.814**	**100,0**
Cláusulas relativas a empleo	1.675	42,5	4.730.539	60,2
Creación neta de empleo	150	3,8	439.435	5,6
Creación de empleo por jubilación parcial (contrato de relevo)	478	12,1	1.891.584	24,1
Mantenimiento de empleo	293	7,4	601.315	7,7
Conversión empleo temporal en fijo	550	13,9	1.920.903	24,4
Otras cláusulas relativas a empleo	362	9,2	952.640	12,1
Número máximo de contratos temporales	110	2,8	544.552	6,9
Utilización de los servicios de Empresas de Trabajo Temporal	400	10,1	1.638.352	20,8

* Convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.
(1) Porcentaje de convenios y trabajadores afectados por los convenios que incluyen las cláusulas señaladas respecto del total de cada ámbito funcional considerado.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos.*

Las cláusulas relativas a la conversión de contratos temporales en indefinidos suelen contener remisiones a la disposición adicional primera de la Ley 63/1997 que contiene la regulación legal del contrato para el fomento de la contratación indefinida, y los incentivos para la conversión de los contratos temporales en indefinidos[120]. Dichas cláusulas tienen mayor presencia en los convenios de sector nacional y autonómico, con remisiones al ámbito empresarial o a la comisión paritaria, que en convenios de otro ámbito, y están previstas principalmente para el sector de la industria y de servicios. Se fomenta en mayor medida la conversión en indefinidos de los contratos eventuales y de los contratos formativos (contrato de formación y contrato de trabajo en prácticas). Los contratos menos susceptibles de transformación son los contratos por obra o servicio determinado.

Junto a las cláusulas de conversión de contratos temporales en indefinidos, se incorporan también en los convenios compromisos

[120] La disposición adicional primera del RDL 5/2001 sustituye a la derogada disposición adicional primera de la Ley 63/1997, relativa al contrato para el fomento de la contratación indefinida. Se suprime la posibilidad de que se regule la conversión de contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida mediante la negociación colectiva.

relativos al mantenimiento de plantillas u obligación de mantener un nivel de empleo fijo (por ejemplo, en torno al 75 por 100 de la plantilla). Se trata, sin embargo, de pactos o compromisos con presencia muy marginal pues únicamente están previstos en convenios que afectan al 7,7 por 100 de los trabajadores respecto de los compromisos de mantenimiento de empleo, y al 5,6 por 100 de los trabajadores respecto de la creación neta de empleo (cuadro II-57). Estas cláusulas se refieren, bien a la prohibición de realizar o negociar expedientes de regulación de empleo durante la vigencia del convenio, bien a compromisos sobre la cobertura de las vacantes que se produzcan.

Otro de los contenidos convencionales relativo al mantenimiento y sobre todo a la calidad del empleo es el relativo al reconocimiento de la igualdad de trato y del principio de no discriminación entre trabajadores fijos y temporales[121]. Se prevén en los convenios, principalmente en los sectoriales de ámbito nacional, distintas fórmulas para lograr la equiparación entre unos y otros trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales, tal y como recomendaba el AIEE de 1997. Los convenios, sin embargo, aunque recogen declaraciones de intenciones con carácter general suelen añadir que la equiparación de derechos entre los trabajadores fijos y los temporales se producirá «salvo las limitaciones que se deriven de la naturaleza y duración de su contrato».

De otro lado, en algunos convenios se fijan previsiones y objetivos de plantilla para el año siguiente, indicando trabajadores por divisiones orgánicas funcionales y grupos profesionales. Y se recogen también declaraciones de intenciones sobre la formulación de propuestas encaminadas a favorecer la creación de empleo y la formación de trabajadores jóvenes. Algunos convenios impulsan la contratación de ciertos colectivos como las personas con minusvalía reproduciendo a tal efecto lo previsto en el artículo 4 del RD

[121] El RDL 5/2001 introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 15 ET en el que se reconoce expresamente el principio de equiparación de derechos entre trabajadores temporales y trabajadores con contrato indefinido, corregido en su caso por la aplicación del principio *pro rata temporis*, «cuando resulte adecuado». Se impone a los empresarios, además, la obligación de informar a los trabajadores temporales acerca de la existencia de vacantes en la empresa o centro de trabajo con el fin de garantizarles oportunidades de acceso a puestos permanentes (art. 15.7 ET).

1451/1983, relativo a la reserva de un 2 por 100 del empleo para trabajadores minusválidos en empresas con más del 50 por 100 de empleo fijo. Mayoritariamente los convenios de sector nacional recogen alguna disposición específica en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso al empleo por cuestiones de ideología, sexo, religión, raza, edad, afiliación política o sindical, etc.

Otras medidas previstas en la negociación colectiva en punto al mantenimiento de empleo estable y de calidad son las relativas a la supresión de las horas extraordinarias, las jubilaciones anticipadas o bajas incentivadas y la promoción del contrato de relevo, el fomento de la formación profesional, el control del pluriempleo, el acceso a las contrataciones vía empresas de trabajo temporal y el recurso a las contratas y subcontratas de la actividad empresarial.

En cuanto a las jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas se suele reproducir la regulación legal del contrato de relevo (art. 12 ET), estableciéndose en ocasiones pactos sobre la utilización de esta modalidad contractual en los procesos de renovación de plantillas. Si bien se manifiesta una tendencia creciente en la negociación colectiva a suscribir compromisos de creación de empleo por la vía de la sustitución a través del contrato de relevo, su presencia es escasa como se desprende de las cifras de contratos realizados bajo esta modalidad.

Algunos convenios, principalmente sectoriales de ámbito nacional, autonómico y provincial, recogen cláusulas relativas al control, e incluso erradicación, del pluriempleo, también como medida dirigida a la creación o mantenimiento del empleo. Se prevén en este sentido compromisos relativos a la no contratación de personas que estuvieran ya contratadas a jornada completa en otra empresa, controlando a tal efecto los boletines de cotización a la Seguridad Social.

Mayor presencia de cláusulas relativas a las empresas de trabajo temporal

De otro lado, cada vez son más frecuentes las cláusulas relativas a las empresas de trabajo temporal, que están previstas en convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 que afectan a más del 20 por 100 de los trabajadores (cuadro II-57). Estas cláusulas suelen o bien restringir o bien limitar el acceso a contrataciones vía empresas de trabajo temporal. En unas ocasiones los negociadores se comprometen a no llevar a cabo ninguna contratación de puesta a disposición, salvo situaciones excepcionales, por el menor tiempo po-

sible e informando cuanto antes a la representación de los trabajadores, incluso exigiendo que dichas contrataciones sean autorizadas por los representantes. Otras veces se fijan en los convenios límites máximos de horas a contratar trabajadores cedidos, generalmente en torno al 5 y 15 por 100 de las horas anuales de la plantilla fija. Mayoritariamente se establecen restricciones al recurso a las empresas de trabajo temporal, por ejemplo, se prohíbe contratar con empresas que no se hayan acogido al Convenio Estatal de Empresas de Trabajo Temporal vigente en cada momento, o se prevé la realización de contratos de puesta a disposición únicamente en los supuestos de sustitución por incapacidad temporal, maternidad, vacaciones o excedencias. Por último se recogen en los convenios determinadas cuestiones ya previstas en la legislación, por ejemplo, la equiparación salarial y de derechos entre trabajadores de plantilla y trabajadores con contratos de puesta a disposición, así como prohibiciones relativas a la cobertura de puestos amortizados por despidos improcedentes, y para la realización de actividades y trabajos peligrosos.

Por último, aunque con escasa presencia en los convenios colectivos, principalmente sectoriales de ámbito nacional, y algunos de empresa, se han establecido cláusulas relativas a la contratación o subcontratación de actividades empresariales o externalización productiva. En términos generales, los convenios se limitan a reproducir el contenido del artículo 42 ET[122], pero en ocasiones se establecen compromisos de los negociadores en torno al inicio del estudio y posible negociación de restricciones o límites a la externalización. Algunos incorporan cláusulas de subrogación obligatorias por cambio de empresa contratista y subcontratista y los menos se comprometen a seleccionar suministradores cualificados y comprar la producción ya terminada en lugar de contratar horas de trabajo.

Contratación laboral

En cuanto a la regulación en los convenios colectivos de la contratación laboral y de las modalidades contractuales previstas en la legislación, se observa también a partir de 1994 un aumento en el número de cláusulas sobre estas materias y un enriquecimiento en

[122] El RDL 5/2001 ha modificado ligeramente el artículo 42 ET y ha añadido tres nuevos apartados.

su contenido. Como se prevé en la regulación legal, son mayoritariamente los convenios sectoriales nacionales, o de ámbito inferior, los que hacen uso de las facultades atribuidas a la negociación colectiva en materia de contratación: un 60,2 por 100 de los convenios sectoriales y de grupos de empresa contienen cláusulas relativas a contratación, frente a sólo un 28,4 por 100 de los convenios de empresa. Teniendo en cuenta los convenios de cualquier ámbito, casi un 75 por 100 del total de trabajadores afectados por convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 contienen este tipo de cláusulas (cuadro II-58), 15 puntos más que en 1999.

Contrato de fomento de la contratación indefinida

Algunos convenios colectivos hacen referencia al contrato para el fomento de la contratación indefinida previsto en el AIEE de 1997, pero son muy pocos los que hacen uso de la facultad de la negociación colectiva de extender la posibilidad de acogerse a esta modalidad contractual incentivada (y a la conversión de contratos temporales) más allá del plazo inicial de cuatro años previsto en la legislación (cuatro años a partir de la entrada en vigor del RDL 8/1997 de 16 de mayo). Los convenios se limitan a reconocer la exis-

CUADRO II-58
CLÁUSULAS RELATIVAS A CONTRATACIÓN, 2000*

	Convenios		Trabajadores	
	Número	Porcentaje (1)	Número	Porcentaje (1)
Total	**3.945**	**100,0**	**7.862.814**	**100,0**
Total con cláusulas relativas a contratación	1.471	37,3	5.886.247	74,9
Duración máxima del periodo de prueba	526	13,3	3.192.970	40,6
Puestos de trabajo que pueden cubrirse con contratos obra o servicio	389	9,9	1.994.710	25,4
Duración máxima contratos eventuales	417	10,6	3.987.899	50,7
Cláusulas relativas al contrato de trabajo en prácticas	434	11,0	2.212.130	28,1
Cláusulas relativas al c. para la formación	499	12,7	3.661.181	46,6
Cláusulas relativas al contrato de trabajo a tiempo parcial	268	6,8	1.645.214	20,9
– Número de horas mínimo de prestación de servicios	73	1,9	270.453	3,4

* Convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.
(1) Porcentaje de convenios y trabajadores afectados por los convenios que incluyen las cláusulas señaladas respecto del total de cada ámbito funcional considerado.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

tencia de este contrato y a reproducir la disposición adicional primera de la Ley 63/1997, que contiene la regulación jurídica del mismo: colectivos afectados, forma, indemnización por extinción objetiva declarada improcedente y límites al acceso de esta modalidad contractual[123]. La presencia de estas cláusulas en los convenios colectivos ha sido mayor en el sector industrial y en el sector servicios y más escasa en los sectores agrícola y en la construcción.

Contratos temporales estructurales

En cuanto a los contratos temporales denominados estructurales (contratos por obra o servicio determinado, eventual e interinidad), la negociación colectiva se limita mayoritariamente a reproducir los términos legales. En algunas ocasiones, como luego se verá al analizar cada modalidad contractual, se identifican las causas objeto de cada una de estas modalidades y se fijan duraciones distintas a las legales, principalmente donde la normativa permite el acceso a la autonomía colectiva, para un mejor cumplimiento de los objetivos que se persiguen con la deslegalización de las materias relativas a la contratación temporal.

En general se aprecia cada vez con mayor frecuencia la presencia de cláusulas que reconocen el derecho a una indemnización por finalización del contrato temporal estructural[124], principalmente en los convenios de sector de ámbito nacional y en relación a los contratos por obra o servicio y a los contratos eventuales. La cuantía de la indemnización prevista es con carácter mayoritario de doce días de salario por año de servicio, pero en algunos convenios se prevé que la cuantía ascienda a dos días de salario por mes trabajado, o al 10 por 100 del total del salario percibido durante la prestación de servicios de carácter temporal. De otro lado, algunos convenios establecen que si el trabajador con contrato temporal se incorporara con carácter definiti-

[123] La disposición adicional primera del RDL 5/2001 sustituye a la derogada disposición adicional primera de la Ley 63/1997, relativa al contrato para el fomento de la contratación indefinida para determinados colectivos con especiales dificultades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo. La nueva normativa amplía el número de esos colectivos y los sujetos comprendidos en los mismos.

[124] El nuevo artículo 49.1.c del ET reconoce a los trabajadores el derecho a recibir una indemnización económica a la finalización de los contratos por obra o servicios determinado, eventual, de relevo y de fomento de empleo de trabajadores minusválidos, cuya cuantía corresponde fijar a la negociación colectiva o «a la normativa específica que les sea de aplicación». En defecto de dicha regulación, la cuantía de la indemnización «será la equivalente a la parte proporcional que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de servicio».

vo en la empresa, se computará el tiempo de prestación de servicios a efectos de su antigüedad en la misma. Por último, en otros convenios se reproduce el artículo 15.3 del ET relativo a la conversión en indefinidos de los contratos temporales celebrados en fraude de ley.

Contrato por obra o servicio determinado

Con respecto al contrato por obra y servicio determinado, el artículo 15.1 del ET prevé que los convenios colectivos sectoriales de ámbito nacional, o inferior, y los convenios de empresa podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza. En muchos casos los convenios se limitan a reproducir esta disposición legal, remitiendo al ámbito empresarial la facultad para identificar dichas tareas o trabajos. Ello no obstante, cerca del 25 por 100 de los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva de 2000 (cuadro II-58) están afectados por convenios en los que aquellos se identifican y las partes se comprometen a no utilizar la modalidad contratual por obra o servicio determinado más allá de las tareas, a veces funciones y/o puestos de trabajo, especificados en los convenios.

A pesar de que los datos son similares a los de años anteriores, puede apreciarse cierta mejora en los contenidos relativos a esta materia. En ocasiones se manifiesta expresamente una preferencia por la contratación por obra o servicio determinado, especificando a tal objeto tareas concretas, a fin de evitar el acceso a la contratación vía ETT y/o a la subcontratación o externalización de la actividad empresarial. Algunos convenios fijan una duración máxima para este contrato o bien la gradúan en función de las obras o servicios a realizar.

Contrato eventual

El contrato eventual (por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos) es en términos cuantitativos menos importante que el contrato por obra y servicio determinado y está presente sobre todo en agricultura y hostelería. La legislación (art. 15.1.b ET) faculta a la negociación colectiva sectorial para: modificar la duración máxima y el periodo de referencia dentro del cual se puede realizar en atención al carácter estacional de la actividad; determinar las actividades en las que pueden contratarse trabajadores eventuales; y fijar criterios relativos a la adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de la empresa.

Llama la atención que en muy pocos convenios la negociación colectiva ha hecho uso de estas facultades, con la excepción de la modificación de la duración máxima del contrato. Casi el 38 por 100 de los convenios sectoriales registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 han modificado la duración del convenio prevista en la legislación, afectando a cerca de cuatro millones de trabajadores (57 por 100 del total de trabajadores afectados por convenios en el año 2000). Así, los convenios sectoriales han ampliado el límite legal de seis meses de duración máxima, en un periodo de referencia de doce meses, en ocasiones más allá del máximo que permite la Ley (trece meses y medio en un periodo de referencia de dieciocho meses[125]), llegando en una ocasión a dieciocho meses en un periodo de referencia de veinticuatro meses. Otros convenios sectoriales prevén también la posibilidad de modificar la duración del contrato eventual pero remitiendo dicha facultad al acuerdo entre la empresa y los trabajadores, en lugar de fijar una duración máxima en el propio convenio sectorial. Por lo demás, son escasos los ejemplos de incorporación en los convenios de los otros instrumentos y facultades otorgadas por la legislación a la negociación colectiva, como la determinación de las actividades susceptibles de ser cubiertas con esta modalidad contractual y/o fijación de criterios relativos al número de contratos eventuales y la plantilla total de la empresa.

Contrato de interinidad

La presencia en la negociación colectiva de referencias al contrato de interinidad es muy marginal. Normalmente se menciona esta modalidad contractual meramente como una posibilidad o tipo de contratación adicional a las anteriores y no suelen los convenios colectivos entrar más allá, aunque tampoco la normativa legitima a la negociación colectiva a modificar la regulación de este contrato. En todo caso, las pocas alusiones que se encuentran en los convenios relativas al mismo, hacen referencia, de un lado, a compromisos sobre la cobertura de las vacantes que puedan producirse con derecho a reserva de puesto de trabajo, de otro, a la posibilidad, prevista anteriormente en la legislación, de que la contratación se convierta en indefinida si no se reincorpora el trabajador sustituido. No se encuentra recogida en los convenios la causa de interinidad prevista en el Real Decreto-Ley 2720/1997 relativa a la

[125] El RDL 5/2001 ha modificado la duración máxima del contrato eventual que antes podía extenderse a trece meses y medio, y que disminuye ahora a doce meses.

cobertura de vacantes mientras tienen lugar los procesos de selección y/o promoción del personal.

Contratos formativos

La remisión o llamamiento de la legislación a la negociación colectiva, tanto a los convenios colectivos sectoriales como a los de ámbito empresarial, en punto a los contratos formativos es muy habitual. Aunque sigue siendo escasa la utilización de las facultades que otorga la normativa a los negociadores para adecuar la regulación de estos contratos a la realidad del sector o de la empresa, se aprecia que ha aumentado tanto el número de convenios, como el número de trabajadores por ellos afectados, que contienen cláusulas relativas a los contratos mencionados. En este sentido, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, estas cláusulas afectan en el año 2000 a cerca de ochocientos mil trabajadores más que en 1999, situándose en el año 2000 (datos de convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000) en casi el 50 por 100 los trabajadores que están afectados por convenios con cláusulas relativas al contrato para la formación, y en cerca del 30 por 100 los que lo están por convenios con cláusulas relativas al contrato de trabajo en prácticas (cuadro II-58), mostrándose que existe una mayor presencia de cláusulas sobre la primera modalidad de contrato formativo (el anterior contrato de aprendizaje). Por lo demás, la presencia de cláusulas es bastante más importante en los convenios de sector, básicamente porque las remisiones legislativas se dirigen principalmente a este ámbito funcional.

Contrato para la formación

Con respecto al contrato para la formación, la legislación llama a los convenios sectoriales, nacionales o de ámbito inferior, para determinar tanto el número máximo de contratos a realizar como para especificar los puestos de trabajo objeto de este contrato. La facultad para determinar el número máximo de contratos, que se establecerá en función de la plantilla, viene reconocida al convenio de empresa y, en defecto de regulación, es de aplicación la escala prevista en el Real Decreto 488/1998. Se aprecia en este sentido que cada vez con mayor concreción, en los convenios sectoriales, principalmente en los de ámbito nacional, se ha procedido a determinar los puestos de trabajo, indicando categorías o grupos profesionales, susceptibles de ser cubiertos con contratos para la formación. O por el contrario, se han identificado los puestos, categorías o grupos que quedan exceptuados del recurso a esta modalidad contractual. En algunas ocasiones se ha establecido una duración diferente, dos o tres

años como permite la normativa, según el puesto, categoría o grupo destinado a los contratos para la formación. En cuanto al límite del número de contratos en función de la plantilla, las referencias en los convenios son más bien escasas por lo que con carácter subsidiario rige la escala establecida en la norma reglamentaria mencionada.

En relación a la edad para ser contratado para la formación (16-21 años)[126], la mayoría de los convenios mantienen los límites legales aunque algunos convenios efectúan determinadas puntualizaciones en función de la naturaleza de los puestos a ocupar bien por razones relativas a la edad del trabajador y a su protección. Sobre la retribución de los trabajadores, la mayor parte de los convenios establecen precisiones al respecto, a veces en relación con el salario mínimo interprofesional, otras en relación con las escalas salariales del convenio y en términos generales elevando la retribución a partir del segundo año de contrato.

Contrato de trabajo en prácticas

En cuanto al contrato de trabajo en prácticas, el artículo 11.1 del ET remite a la negociación colectiva sectorial nacional, o de ámbito sectorial inferior, la determinación de los puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales objeto de este contrato. De otro lado, se prevé que tanto la duración del contrato (dentro de los límites legales de seis meses-dos años) como la retribución (respetando como mínimo que sea el 60 por 100 o el 75 por 100 durante el primer o segundo año de vigencia del salario fijado para trabajadores que desempeñen puestos de trabajo iguales o equivalentes), será regulada en convenio colectivo. Aunque la presencia en la negociación colectiva de cláusulas sobre el contrato en prácticas sigue siendo muy escasa, como ya se indicó respecto del contrato para la formación, se observa también en relación a este contrato un incremento respecto de años anteriores, tanto en el número de convenios, como de trabajadores por ellos afectados, con cláusulas convencionales relativas a esta modalidad contractual. En concreto afectan en el año 2000 a cerca del 30 por 100 de los trabajadores. La mayoría de ellas son relativas a la determinación de

[126] El RDL 5/2001 suprime el límite máximo de edad de 21 años del contrato para la formación cuando se contrata a trabajadores minusválidos, extranjeros durante dos años, desempleados que lleven más de tres años sin actividad laboral, en situación de exclusión social y aquellos que se incorporen a escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

grupos o categorías que, o bien pueden ser asignados a los contratados en prácticas, o bien están excluidas de ser cubiertas con esta modalidad contractual. Por lo demás también la retribución es objeto de tratamiento en los convenios, manteniendo una diferencia salarial según la antigüedad del contrato.

Contrato de trabajo a tiempo parcial

Las cláusulas previstas en los convenios sobre el contrato a tiempo parcial han experimentado desde el año 1998 un crecimiento de 7 puntos porcentuales, un incremento que se observa tanto en los convenios de empresa como en los convenios sectoriales. El contenido de las cláusulas es muy diverso y debe señalarse también que no en todos los convenios se han ajustado a la reforma del contrato a partir del RDL 15/1998 por lo que algunos se remiten a la regulación previa[127], estableciéndose una duración mínima de doce horas y mensual de cuarenta y ocho horas (el ya suprimido contrato a tiempo parcial marginal).

La normativa sobre el contrato a tiempo parcial remite a la negociación colectiva la determinación de la prestación de servicios ya que ésta se hace en función de la jornada máxima prevista en convenio o jornada máxima legal. Además, aunque es el contrato de trabajo el que ha de fijar la distribución horaria, es el convenio el que establece las pautas principalmente en punto a las horas complementarias, cuyo número, distribución y forma de realización es competencia de los convenios sectoriales.

A pesar de las existentes remisiones a la negociación colectiva, la presencia de cláusulas relativas a la distribución del tiempo de trabajo específicas para los contratados a tiempo parcial es relativamente escasa. A pesar de ello algunos convenios, principalmente sectoriales nacionales, prevén la ampliación de las horas

[127] La regulación del contrato a tiempo parcial (art. 12 ET) ha sido modificada de nuevo por el RDL 5/2001. Se ha suprimido el límite porcentual (el 77 por 100 de la jornada a tiempo completo) que desde 1998 marcaba la frontera entre el trabajo a tiempo completo y el trabajo a tiempo parcial, y también la exigencia de que en el contrato figure la concreción mensual, semanal y diaria de las horas ordinarias contratadas, con la determinación de los días en que el trabajador ha de prestar servicios. Se ha incrementado del 30 por 100 al 60 por 100 de las horas ordinarias contratadas el porcentaje máximo de horas complementarias que pueden acordarse. Por último se amplían facultades de la negociación colectiva en punto a la distribución y forma de realización de las horas complementarias.

complementarias (por ejemplo, de un 15 a un 30 por 100 de las horas ordinarias de trabajo), así como ampliar del trimestre al semestre el módulo a tener en cuenta para llevar a cabo la distribución de las horas complementarias a realizar. Otros convenios establecen declaraciones de principio en torno a la equiparación de los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, en cuanto al acceso a prestaciones sociales, número de pagas extras al año y otros derechos de los trabajadores. Con carácter marginal se recogen en ocasiones cláusulas relativas a la preferencia para acogerse a nuevas contrataciones a tiempo completo.

Regulación convencional del trabajo fijo discontinuo

En cuanto a los fijos discontinuos[128], se aprecia una mayor presencia de disposiciones en la negociación colectiva en los convenios provinciales o autonómicos en los que con mayor frecuencia se utiliza esta modalidad contractual: agricultura (e industrias derivadas) y servicios (principalmente, hostelería), que cada vez recogen mayores contenidos en torno a esta figura. Es habitual que se establezca un tiempo de ocupación mínimo al año o bien límites de jornada anuales (máximos o mínimos). En ocasiones se remite al ámbito empresarial, y previo examen de los representantes de los trabajadores, la determinación de las actividades a cubrir con fijos discontinuos y el número de trabajadores que podrían ser objeto de esta modalidad.

En relación a la regulación del llamamiento, los convenios que regulan el trabajo de fijos discontinuos suelen establecer que el llamamiento se hará por antigüedad, dentro de cada categoría. El llamamiento puede llevarse a cabo de forma colectiva y también de forma rotatoria, fijándose en ocasiones la fecha de inicio de campaña o ciclo productivo (por ejemplo, entre el 15 de julio y 30 de agosto), salvo supuestos de fuerza mayor. En cuanto a los plazos de llamamiento, suelen preverse en general en torno a una semana y quince días. Se establece en algunos convenios la obligación de preavisar al trabajador antes de la finalización de la campaña, el acceso preferente de los contratados con carácter eventual a una contratación fija discontinua (por ejemplo, por el transcurso de tres

[128] El RDL 5/2001 configura ahora al contrato indefinido de fijos discontinuos como figura independiente del contrato a tiempo parcial (art. 15 en lugar de art. 12 ET), y prevé que los convenios colectivos sectoriales podrán acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del sector lo justifiquen, los requisitos y especialidades para la conversión de contratos temporales en contratos fijos-discontinuos.

campañas, o la realización de al menos el 50 por 100 de la media de los días trabajados por los fijos discontinuos), y la garantía de no cesar a ningún fijo discontinuo sin haber cesado previamente a los eventuales de cada centro de trabajo.

Clasificación profesional

Tímida sustitución de antiguos sistemas de clasificación profesional

Al analizar el contenido de la negociación colectiva merece especial atención la parte relativa a la clasificación profesional, pues constituye un elemento esencial en la organización de la empresa. En los últimos años se aprecia, aunque muy tímidamente, la tendencia de sustituir el antiguo sistema de clasificación basado en categorías profesionales por otro que se apoye en los grupos profesionales, definiendo éstos en función de diversos principios, siguiéndose el modelo recogido en el AICV y en el AINC y los criterios en ellos establecidos (autonomía, formación, iniciativa, dirección, responsabilidad, complejidad, etc.). La adopción de grupos profesionales, y las posibles divisiones funcionales en ellos establecidas, facilita no sólo la adscripción de los trabajadores a los mismos sino también la movilidad funcional dentro del grupo profesional, con los límites de la idoneidad y la aptitud necesaria para el desempeño de las tareas que se encomienden al trabajador en cada puesto de trabajo.

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales respecto de los convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000, cerca de un 64 por 100 incorporan cláusulas relativas a la clasificación profesional y la promoción en el trabajo (cuadro II-59). La mayoría de ellos son convenios de ámbito empresarial (el 78,5 por 100).

Ahora bien, como se ha indicado, la sustitución del sistema de categorías por grupos profesionales se va realizando muy lentamente y actualmente la estructura profesional sigue estableciéndose mayoritariamente en torno al sistema de categorías profesionales (cerca del 33 por 100 de los trabajadores). El sistema de clasificación definido en función de grupos profesionales siguiendo el modelo del AICV afecta en el año 2000 al 23 por 100 de los trabajadores, aproximadamente un 30 por 100 tiene un sistema mixto de grupos y categorías profesionales y, por último, un 12 por 100 de los trabajadores tiene su sistema de clasificación profesional definido en función de niveles retributivos.

CUADRO II-59
CLÁUSULAS SOBRE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, 2000*

	Convenios		Trabajadores	
	Número	Porcentaje (1)	Número	Porcentaje (1)
Total	**3.945**	**100,0**	**7.862.814**	**100,0**
Total con cláusulas relativas a clasificación profesional	2.524	63,9	5.390.446	68,5
Se definen grupos, categorías y niveles	2.119	53,7	4.842.861	61,5
– categorías profesionales	1.430	36,2	2.605.975	33,1
– grupos profesionales	726	18,4	1.783.511	22,6
– niveles retributivos	538	13,6	919.954	11,7
Polivalencia funcional	834	21,1	2.749.500	34,9
Criterios o requisitos para promoción interna	1.393	35,3	2.804.305	35,6

* Convenios colectivos registrados hasta el 31 de diciembre de 2000.
(1) Porcentaje de convenios y trabajadores afectados por estos convenios que incluyen las cláusulas señaladas respecto al total de cada ámbito funcional considerado.

Fuente: MTAS, *Estadística de convenios colectivos*.

Las razones que pueden explicar el retraso que se aprecia, en cuanto a la incorporación de un sistema coherente de clasificación profesional, en torno a grupos profesionales son básicamente, de un lado, la continuidad de los sistemas existentes durante la vigencia de las ordenanzas laborales, pues se sigue haciendo referencia a las mismas o asumiendo sus contenidos, principalmente en los convenios sectoriales. De otro lado, es práctica frecuente asimilar las viejas categorías a los nuevos grupos profesionales sin actualizar ni modernizar sus contenidos. La presencia sin embargo de sistemas mixtos, grupos y categorías profesionales, pone de manifiesto que quizá se haya necesitado esta combinación para recorrer el periodo transitorio de un sistema a otro.

Polivalencia funcional

En cuanto a la polivalencia funcional, según la cual un trabajador realiza funciones propias de dos o más categorías, al igual que en años anteriores tiene una presencia relativamente importante en la negociación colectiva. Así, se ha pactado la polivalencia funcional, según datos del MTAS respecto de los convenios registrados hasta el 31 de diciembre de 2000, en convenios que afectan a cerca del 35 por 100 de los trabajadores, siendo mayoritaria su presencia lógicamente en los convenios de empresa (en más del 40 por 100 del total de convenios de este ámbito registrados en 2000).

Por último, un 35 por 100 del total de convenios registrados en el año 2000 contienen cláusulas relativas a los criterios o requisitos necesarios para la promoción interna, afectando a casi tres millones de trabajadores, siendo mayoritaria su presencia también en los convenios de ámbito empresarial (cerca del 67 por 100).

ANEXO II-1
MUESTRA DE CONVENIOS COLECTIVOS

CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES DE ÁMBITO ESTATAL

1. Laudo arbitral sustitución Ordenanza del campo (*BOE* 29.11.00) (vigencia indefinida).
2. XII CC General de la industria Química (*BOE* 11.6.99) (1.1.99/31.12.00).
3. CC Estatal empresas y trabajadores de perfumerías y afines (*BOE* 2.6.00) (1.1.00/31.12.01).
4. Convenio General del sector de la Construcción (*BOE* 4.6.98). Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción para los años 1999, 2000 y 2001.
5. CC General del sector derivados del cemento (*BOE* 27.8.96) (1.1.96/31.12.00). Acuerdo estatal cobertura de vacíos para sector del cemento (*BOE* 22.12.98) (1.1.99/31.12.03).
6. CC para el sector de Fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados (*BOE* 20.10.99) (1.8.99/31.12.02) (véase *BOE* 12.8.99).
7. CC de Tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida (*BOE* 29.9.00) (1.1.99/31.12.02).
8. CC del sector de las industrias Extractivas del Vidrio, cerámica y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales (*BOE* 31.7.99) (1.1.99/31.12.01).
9. CC de la Industria Metalgráfica y de Envases Metálicos (*BOE* 24.11.00) (1.1.00/31.12.02).
10. CC Nacional de Artes Gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares (*BOE* 19.1.00) (1.1.99/31.12.00).
11. CC del ciclo de Comercio de papel y artes gráficas (*BOE* 25.10.00) (30.4.03).
12. CC para el sector de conservas, semiconservas y salazones de pescados y mariscos (*BOE* 25.2.98) (1.1.97/31.12.00).
13. CC de la industria del calzado (*BOE* 4.8.00) (1.3.00/28.2.02).
14. CC General de trabajo para la industria textil y de la confección (*BOE* 21.8.00) (13.4.00/31.12.02).
15. CC para las industrias del curtido, correas y cuero industriales y curtido de pieles para peletería (*BOE* 1.1.00/31.12.00).
16. Texto Refundido CC básico de Industrias cárnicas (*BOE* 25.8.99) (1.1.99/indefinida).
17. Acuerdo Marco para las industrias de bebidas (*BOE* 11.11.99/indefinida).
18. CC para la Fabricación de helados (*BOE* 22.3.00) (1.1.99/31.12.01).
19. C de Mataderos de Aves y Conejos (*BOE* 17.11.00) (1.1.00/31.12.02).
20. CC de las empresas Minoristas de Droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías (*BOE* 28.11.00) (1.1.00/31.12.03).

ANEXO II-1 *(Continuación)*

MUESTRA DE CONVENIOS COLECTIVOS

CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES DE ÁMBITO ESTATAL

21. CC del sector del comercio al por mayor e importadores de productos químicos, industriales y de droguería, perfumería y anexos (*BOE* 22.6.99) (1.1.99/31.12.01).
22. Acuerdo Laboral para el sector de hostelería (*BOE* 2.8.96) (24.6.96/31.12.00).
23. CC Grandes Almacenes (*BOE* 11.11.97) (1.1.97/31.12.00).
24. CC para Farmacias (*BOE* 27.7.00/31.12.02).
25. III CC de ETTs (*BOE* 10.11.00) (1.1.00/31.12.02).
26. CC Estatal de Estaciones de servicio (*BOE* 2.2.00) (1.1.99/31.12.00).
27. CC Agencias de viaje (*BOE* 14.8.00) (1.1.99/31.12.01).
28. IV CC de empresas de enseñanza privada, sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (*BOE* 17.10.00) (1.1.00/31.12.03).
29. CC Nacional de centros de enseñanza reglada —sin ningún nivel concertado o subvencionado— (*BOE* 25.8.99) (1.1.98/31.12.00).
30. CC de ámbito estatal para el sector de Entidades de Seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo (*BOE* 11.12.98).
31. CC de las Cajas de Ahorro (*BOE* 23.2.00) (24.2.00/31.12.00).
32. CC Marco para establecimientos financieros de crédito (*BOE* 15.6.00) (1.1.00/31.12.00).
33. CC Banca Privada (*BOE* 26.11.99) (1.1.99/31.12.02).
34. XII CC de las Empresas Consultoras de planificación Organización de empresas y contable (*BOE* 29.9.00) (1.1.00/31.12.00).
35. XI CC empresas de Ingeniería y oficinas de estudios Técnicos (*BOE* 15.12.00) (1.1.99/31.12.01).
36. CC para el sector del telemarketing (*BOE* 31.3.99) (31.3.99/31.12.00).

CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES DE ÁMBITO CCAA

1. CC Recolección de cítricos. Comunidad Autónoma Valenciana (*DOGV* 21.1.98) (1.9.97/31.8.00).
2. CC Manipulado y envasado de agrios. Región de Murcia (*BORM* 6.9.00) (2.12.99/31.12.02).
3. CC Empresas cosecheras y productoras de tomate, lechuga y otros productos agrícolas y sus trabajadores. Región de Murcia (*BORM* 29.8.00) (1.1.00/31.12.02).
4. CC Industrias siderometalúrgicas. Madrid (código convenio: 2803715). *BOE* 15.12.99, acuerdo adhesión Alcatel).
5. CC Madera y corcho. Madrid (*BOCM* 28.7.00) (1.1.00/31.12.00).
6. CC Sector de la Pizarra. (Interprovincial Orense y Lugo) Galicia (*DOG* 1.7.99) (1.1.99/31.12.00).
7. CC Químicas (industrias). Cantabria (*BOC* 17.1.98) (1.1.98/31.12.00).
8. CC Artes gráficas, manipulados de papel, cartón, editoriales. Navarra *(BON* 31.5.00) (1.1.00/31.12.02).
9. CC Industrias de panadería y pastelería. Islas Baleares (*BOCAIB* 18.7.00) (1.1.00/31.12.01).

ANEXO II-1 *(Continuación)*

MUESTRA DE CONVENIOS COLECTIVOS

CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES DE ÁMBITO CCAA
10. CC Comercio. Cataluña (*DOGV* 21.6.99) (1.1.99/31.12.00).
11. CC Comercio del metal. Madrid (*BOCM* 11.8.99) (1.4.98/31.12.01).
12. CC Comercio textil, Madrid (*BOCM* 1.12.97) (1.1.97/31.12.00).
13. CC Hostelería. Islas Baleares (*BOCAIB* 3.8.99) (1.4.99/31.3.02).
14. CC Hostelería y turismo. Cataluña (1.5.00/30.4.01).
15. CC Estaciones de servicio. Comunidad Autónoma Valenciana (*DOGV* 6.9.00) (1.1.00/31.12.01).
16. CC Talleres de tintorerías, despachos a comisión, lavanderías y planchado de ropa (procedimiento de extensión). Castilla y León (*BOC* y L 28.7.00) (1.1.99/31.12.01).
CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES DE ÁMBITO PROVINCIAL
1. CC Agropecuario. Sevilla (*BOP* 26.0.98) (1.1.98/31.12.00).
2. CC Industrias derivados de los agrios. Valencia (*BOP* 26.7.00) (1.1.00/31.12.02).
3. CC Construcción y Obras públicas. Valencia (*BOP* 18.6.99) (1.1.99/31.12.01).
4. CC Construcción. Tarragona (Código convenio 4300145).
5. CC Azulejos, pavimentos y baldosas cerámicas. Castellón (*BOP* 8.6.99) (1.1.99/31.12.01).
6. CC Madera y corcho. Alicante *(BOP* 2.8.99) (1.1.99/31.12.00).
7. CC Plásticos (industrias transformadoras). Valencia (*BOP* 13.6.00) (1.1.00/31.12.01).
8. CC Industria Siderometalúrgica. Zaragoza (*BOP* 4.9.00) (1.1.00/31.12.02).
9. CC Industria Siderometalúrgica. Valladolid (*BOP* 22.7.98) (1.1.98/31.12.00).
10. CC Industria Siderometalúrgica. Valencia (*BOP* 22.8.96) (1.1.96/31.12.99).
11. CC Artes gráficas e industrias auxiliares, manipulados de papel y cartón y editoriales. Vizcaya (*BOP* 1.8.00) (1.1.00/31.12.01).
12. CC Bebidas refrescantes. Guipúzcoa (*BOP* 9.7.99) (1.1.99/31.12.00).
13. CC Panaderías (industrias y comercio). Málaga (13.12.99) (1.1.99/31.12.00).
14. CC Comercio textil. Barcelona (*DOGC* 30.8.99) (1.2.99/31.1.02).
15. CC Estaciones de servicio. Vizcaya (*BOP* 14.2.00) (1.1.99/31.12.00).
16. CC Transportes de mercancias por carretera y agencias de transporte. Vizcaya (*BOP* 31.3.00) (1.1.00/31.12.02).
17. CC Hostelería. Alicante (*BOP* 8.8.00) (1.4.00/31.3.02).
18. CC Hostelería. Málaga (*BOP* 20.8.99) (1.4.99/31.3.02).
19. CC Limpieza edificios y locales. Sevilla (*BOP* 24.9.99) (1.1.99/31.12.00).
20. CC Oficinas y despachos. Cádiz (*BOP* 1.2.00) (1.1.99/31.12.01).
21. CC Empleados fincas urbanas. Barcelona (*DOGC* 30.6.98) (1.1.98/31.12.00).

ANEXO II-1 *(Continuación)*

MUESTRA DE CONVENIOS COLECTIVOS

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA/GRUPO DE EMPRESAS
1. CC Interprovincial de FASA-RENAULT (*BOE* 27.6.00) (1.1.00/31.12.03).
2. XII CC de la empresa FORD España SA (*BOE* 3.3.99) (1.1.98/31.12.00).
3. XXI CC de la empresa FIAT auto España SA (*BOE* 25.5.99) (1.1.99/31.12.00).
4. III CC de Renault España Comercial SA (RECSA) (*BOE* 10.6.99) (1.1.99/31.12.00).
5. XVIII CC de la Empresa Bridgestone, Firestone Hispania SA (*BOE* 1.4.98) (1.1.98/31.12.00). (ver *BOE* 7.9.99).
6. CC de la empresa Neumáticos Michelin SA (*BOE* 14.10.99) (1.1.99/31.12.00).
7. CC de la empresa Pirelli Neumáticos SA (*BOE* 20.10.99) (1.1.99/31.12.02).
8. XIV CC de la empresa Transformaciones agrarias SA (TRAGSA) (*BOE* 16.3.00) (1.1.99/31.12.01).
9. CC de la empresa Fertiberia SA (*BOE* 25.1.00) (1.1.99/31.12.00).
10. XVI CC de Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima (CASA) (*BOE* 29.2.00). (1.1.99/31.12. 01).
12. CC de la empresa Red Eléctrica de España (*BOE* 19.10.99) (1.1.98/31.12.00).
13. I CC de la empresa ENDESA (*BOE* 13.12.00) (25.10.00/31.12.01).
14. CC de la empresa Zardoya Otis SA y Ascensores Aranguren SA AESA (*BOE* 28.6.99) (1.1.99/31.12.00).
15. CC de la empresa Thyssen Boetticher SA (*BOE* 15.12.00) (1.1.00/31.12.02).
16. CC de la sociedad Fábricas Lucía Antonio Betere (FLABESA) (*BOE* 11.8.99) (1.1.99/31.12.00).
17. CC de la empresa Praxair España SL (*BOE* 27.7.00) (1.1.00/31.12.01).
18. CC de la empresa Alcatel España SA (*BOE* 28.12.99) (99-01). Véase VII CC de la empresa Alcatel Cable Ibérica Sl (*BOE* 28.10.00) (1.1.00/31.12.02).
19. CC empresa 3M (*BOE* 11.11.99) (1.1.99/31.12.00)
20. XX CC de Philips Ibérica SA (*BOE* 11.2.00) (1.1.99/31.12.00).
21. CC de las empresas Air Liquide España (*BOE* 30.6.00) (1.1.00/31.12.01).
22. XIX CC de la empresa Repsol Butano (*BOE* 29.9.99) (1.1.99/31.12.01).
23. CC de la empresa Repsol Química (*BOE* 10.11.99)(1.1.99/31.12.01)
24. CC de la empresa Repsol Petróleo (*BOE* 22.11.99) (1.1.99/31.12.01).
25. CC de la empresa Petróleos del Norte, PETRONOR (*BOE* 23.3.00) (1.1.99/31.12.01).
26.-CC de la empresa Cía española de petróleos (CEPSA) (*BOE* 13.12.99) (1.1.99/31.12.02).
27. CC compañía española de Gas (*BOE* 11.11.99/31.12.00).
28. XIV CC para el personal del Canal de Isabel II (*BOE* 20.7.00) (5.5.00/31.12.02).
29. CC de la empresa Telefónica de España AU (*BOE* 10.12.99) (1.1.99/31.12.00).

ANEXO II-1 *(Continuación)*

MUESTRA DE CONVENIOS COLECTIVOS

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA/GRUPO DE EMPRESAS
30. CC de la empresa Telefónica Data (*BOE* 14.2.00) (1.1.99/31.12.00).
31. CC de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Real Casa de la Moneda (*BOE* 2.6.00) (1.1.99/31.12.01).
32. Acuerdo Marco para el personal de Tabacalera SA y Logista SL (*BOE* 19.10.99) (1.10.99/31.12.00).
33. CC para el personal laboral Agencia Tributaria (*BOE* 21.3.99) (1.1.99/31.12.00).
34. VI CC entre Iberia Líneas Aéreas de España SA y sus tripulantes pilotos (*BOE* 20.8.99) (1.1.96/31.12.00). *BOE* 31.3.00. Acuerdo prórroga convenio Iberia-personal tierra.
35 XIII CC de RENFE (*BOE* 18.7.00) (1.1.99/31.12.01).
36. XVI Convenio colectivo Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) (*BOE* 27.6.00) (1.1.00/31.12.01) (sólo revisión salarial, reclasificación categorías y jornada; en anexos jornada/pluses). Normativa FEVE resolución DGT y migraciones de 26 junio de 1996.
37. CC Cía Transmediterránea SA y su personal de tierra (*BOE* 16.2.99) (1.1.98/31.12.01).
38. CC de la empresa Aldeasa Almacenaje y distribución SA (*BOE* 8.6.99) (1.1.99/31.12.00). Ver II CC Aldeasa (*BOE* 22.9.00) (1.1.00/31.12.02).
39. CC de la empresa Leroy Merlín SA (*BOE* 12.5.99) (1.1.99/31.12.02).
40. CC de la empresa Sociedad Anónima El Aguila (*BOE* 19.9.00) (1.4.00/31.12.00).
41. CC de la empresa Cruzcampo SA (*BOE* 23.9.00) (1.1.00/31.12.00). Véase XIX CC de Cruzcampo fabrica de Sevilla y demás centros relacionados en el art. 1 (*BOE* 25.10.00) (1.1.00/31.12.00).
42. IV CC de la empresa Schweppes SA (*BOE* 21.7.99) (1.1.99/31.12.00).
43. CC de la empresa Danone (*BOE* 21.7.00) (1.1.99/31.12.01).
44. XX CC de la empresa Bimbo (*BOE* 3.10.00) (1.1.00/31.12.00).
45. CC de la empresa Banco Vitalicio de España, Cía. Anónima de seguros (*BOE* 17.4.98/ 31.12.01).
46. IV CC Cajas de Ahorro y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián (*BOE* 18.7.00) (1.1.00/31.12.02).
47. CC grupo AXA (*BOE* 13.2.99) (1.1.99/31.12.00).
48. CC de la empresa Allianz, Seguros y Reaseguros SA (*BOE* 18.9.00) (1.1.00/31.12.01).
49. CC AGF Unión Fénix Seguros y Reaseguros SA (*BOE* 4.10.97) (1.1.96/31.12.00).
50. CC de la empresa servicios Securitas SA y su personal (*BOE* 11.9.98) (1.1.98/31.12.01).
51. CC Servimax servicios auxiliares SA (*BOE* 20.6.97) (1.1.97/31.12.00).
52. CC de la empresa Radio Popular SA (COPE) (*BOE* 4.6.99) (1.1.99/31.12.01).
53. CC de la empresa Diario El País SA (*BOE* 29.6.99) (1.1.99/31.12.01).
54. CC de la ONCE (*BOE* 15.7.99) (26.3.99/31.12.00).
55. V CC de Antena 3 (*BOE* 28.7.99/31.12.01).
56. III CC de la empresa Manpower Team ETT (*BOE* 5.2.00) (1.1.00/indefinido).

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5.1. Evolución de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales

Por las dimensiones adquiridas en España y, sobre todo, por la evolución creciente observada en la última década, la siniestralidad en el trabajo se ha ido configurando como un problema con entidad propia, convirtiéndose en objeto de análisis diferenciado dentro del amplio campo de la seguridad y la salud en el trabajo. Pese a que en el año 2000 han seguido aumentando los accidentes de trabajo, tanto en volumen como en incidencia por mil trabajadores, también se ha podido observar una desaceleración de ese crecimiento, por una parte, y una evolución positiva de la gravedad de los accidentes, por otra.

Los accidentes con baja en jornada de trabajo en el año 2000 han mostrado un crecimiento más contenido, o al menos, no tan espectacular como en años anteriores: 7,8 por 100. En segundo lugar, corroborando la tendencia registrada desde hace varios años, ese aumento es atribuible en su mayor parte a los accidentes leves, que han crecido un 7,9 por 100 en relación al año anterior, mientras que se han producido menos accidentes graves (–3,2 por 100) y han aumentado ligeramente los mortales. Los accidentes de camino o a la vuelta del trabajo *(in itinere)* han crecido porcentualmente algo más que los accidentes en jornada de trabajo, principalmente los de carácter leve (cuadro II-60).

En términos de incidencia, la evolución es semejante a la expuesta para el total de accidentes: en el año 2000 ha sido nuevamente la incidencia de accidentes leves la que ha arrastrado el crecimiento de la incidencia total, mientras ha descendido claramente la incidencia de accidentes mortales y graves, descenso sobre todo más acusado en el caso de estos últimos, cuya incidencia ha superado en este año el repunte que sufrió en 1999. Los datos del año 2000 vienen a confirmar las mismas pautas de evolución de la incidencia de la siniestralidad que se aprecian ya desde hace varios años y que, de continuar en esta línea, permitirían confirmar una tendencia a la mejora de la situación de la siniestralidad, al menos en términos de gravedad de los accidentes registrados (gráficos II-19-20-21).

CUADRO II-60

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA, 1996-2000

(Volumen anual de accidentes y enfermedades profesionales)

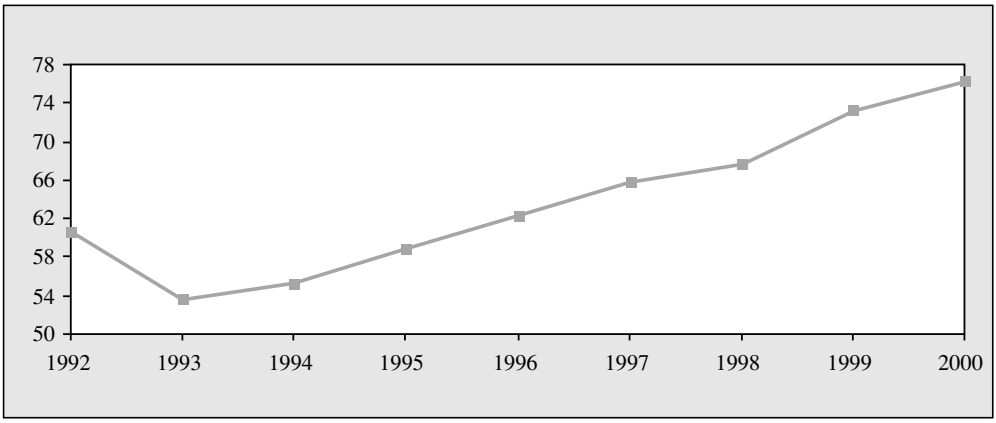
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja	Número					Increm. %
	1996	1997	1998	1999	2000	2000/99
Accidentes	655.575	720.303	804.843	930.151	1.004.454	8,0
En jornada de trabajo	616.237	676.644	752.882	867.772	935.274	7,8
– Leves	604.570	665.181	741.162	854.923	922.785	7,9
– Graves	10.685	10.393	10.649	11.739	11.359	–3,2
– Mortales	982	1.070	1.071	1.110	1.130	1,8
In itinere	39.338	43.659	51.961	62.379	69.180	10,9
– Leves	36.815	41.139	49.055	59.339	66.059	11,3
– Graves	2.201	2.136	2.486	2.578	2.676	3,8
– Mortales	322	384	420	462	445	–3,7
Enfermedades profesionales	7.069	8.440	10.428	14.119	17.261	22,3
– Leves	6.885	8.275	10.241	13.928	17.090	22,7
– Graves	183	164	185	190	169	–11,1
– Mortales	1	1	2	1	2	100,0

Fuente: MTAS, *Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 2000* (Avance).

GRÁFICO II-19

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA, ACCIDENTES LEVES, 1992-2000

(Número de accidentes por cada 1.000 trabajadores; totales anuales)



Fuente: MTAS, *Estadística de accidentes de trabajo* y *Boletín de Estadísticas Laborales*.

GRÁFICO II-20

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA, ACCIDENTES GRAVES, 1995-2000

(Número de accidentes por cada 100.000 trabajadores, totales anuales)

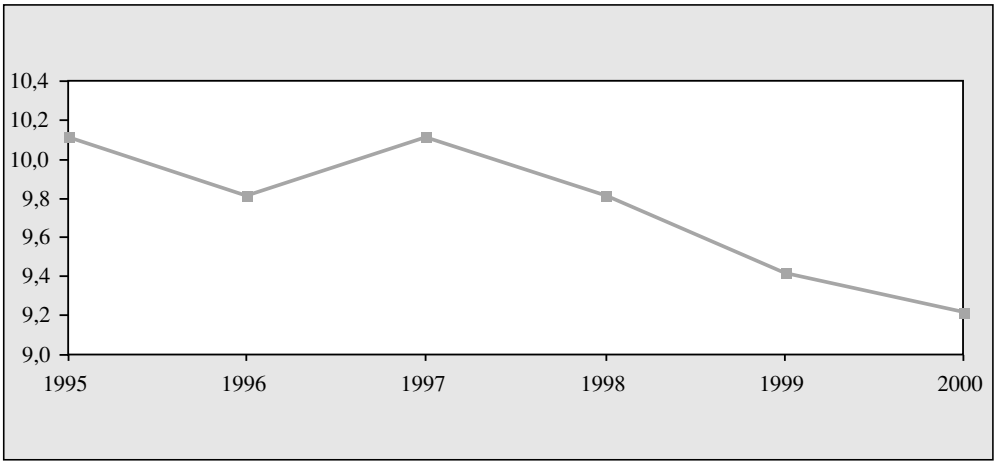


Fuente: MTAS, *Estadística de accidentes de trabajo* y *Boletín de Estadísticas Laborales*

GRÁFICO II-21

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA, ACCIDENTES MORTALES, 1995-2000

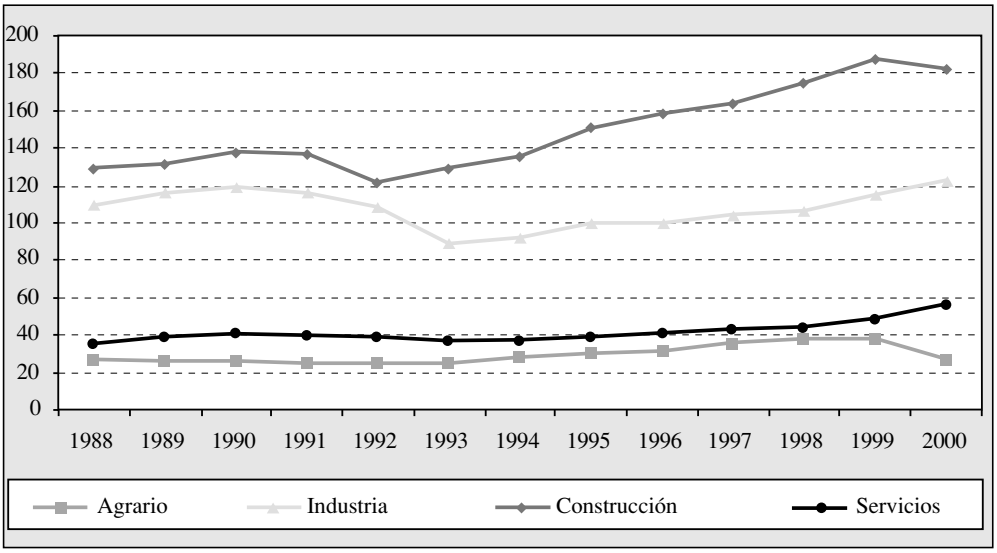
(Número de accidentes por cada 100.000 trabajadores, totales anuales)



Fuente: MTAS, *Estadística de accidentes de trabajo* y *Boletín de Estadísticas Laborales*.

En cuanto a la distribución por sectores, en términos absolutos, el 41,2 por 100 de los accidentes en jornada de trabajo con baja acaeció en el sector Servicios. Industria (29,3 por 100), y Construcción (25 por 100) se situaron a continuación, mientras que el sector agrario registró el 4,7 por 100 de los accidentes. Estos porcentajes guardan relación con la propia composición del mercado de trabajo español, por lo que hay que atender a la incidencia de la siniestralidad dentro de cada sector para una mejor aproximación a la situación. Atendiendo, pues, al volumen de accidentes por mil trabajadores dentro de cada sector, es en Construcción donde el índice de siniestralidad es más elevado, seguido de industria y, a mucha distancia, servicios y agricultura. Sin embargo, en relación al año anterior, se ha podido apreciar una disminución de la incidencia total de accidentes en el sector de la construcción, así como en el sector primario, mientras que el aumento registrado en el año 2000 es atribuible al experimentado por el sector servicios e industria (gráfico II-22).

GRÁFICO II-22
INCIDENCIA TOTAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR SECTORES, 1988-2000
(Número de accidentes por cada 1.000 trabajadores)



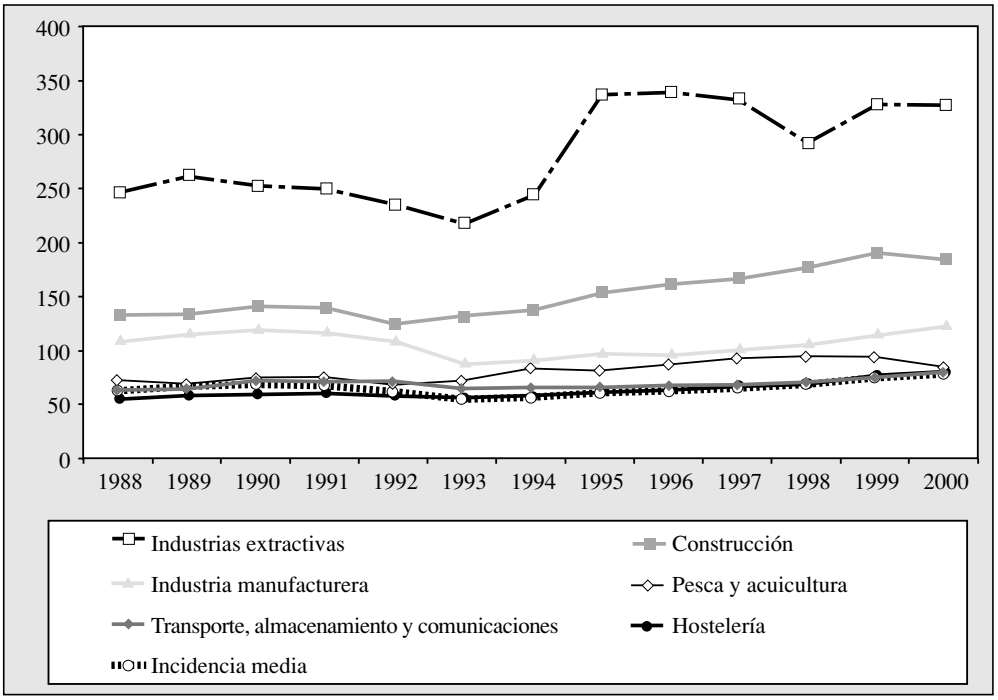
Fuente: MTAS, *Estadística de accidentes de trabajo* y *Boletín de Estadísticas Laborales,* varios años.

La siniestralidad no es un problema que afecte por igual a toda la actividad económica, puesto que, incluso dentro de cada sector, la situación no es homogénea, observándose desde hace años una importante concentración de los accidentes en algunas ramas. En términos de incidencia, la concentración se da principalmente en tres, que están muy por encima de la media de accidentes de trabajo por mil trabajadores: industrias extractivas, construcción e industria manufacturera. A cierta distancia, pero también notablemente por encima de la media, les siguen pesca y acuicultura, transporte, almacenamiento y comunicaciones y hostelería. Las ramas que menor incidencia registran son educación e intermediación financiera, seguidas de administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, otras actividades de servicios sociales y servicios personales, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (gráficos II-23 y II-24).

GRÁFICO II-23

INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA. RAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA, 1988-2000

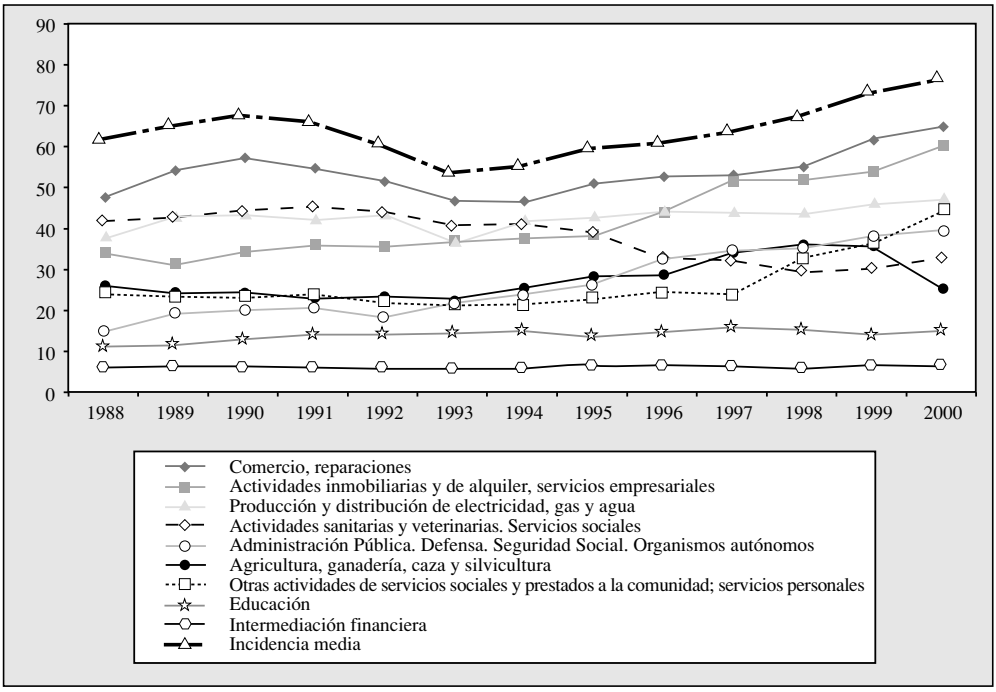
(Número de accidentes por 1.000 trabajadores)



Fuente: MTAS, *Estadística de accidentes de trabajo* y *Boletín de Estadísticas Laborales,* varios años.

GRÁFICO II-24

INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA. RAMAS POR DEBAJO DE LA MEDIA, 1988-2000



Fuente: MTAS, *Estadística de accidentes de trabajo* y *Boletín de Estadísticas Laborales,* varios años.

5.2. LA ESTRATEGIA CONTRA LA SINIESTRALIDAD: PRIORIDADES DE ACCIÓN

En paralelo a la evolución creciente —si bien algo más contenida, como se ha comentado— de la siniestralidad en el trabajo, en el año 2000 ha seguido siendo apreciable la cada vez mayor resonancia social de esta cuestión. Si el marco normativo de la prevención de riesgos en el trabajo derivado de la obligada trasposición de Directivas comunitarias se encuentra prácticamente completo en nuestro país y durante el año 2000 no ha habido incorporaciones relevantes, no cabe afirmar lo mismo en el ámbito de la política de prevención de riesgos laborales, donde todavía existe un amplio margen de intervención. En el año 2000, la puesta en práctica de la estrategia global en el marco de dicha política se ha caracterizado por la continuidad en el desarrollo de las acciones marcadas por

el Plan de Acción contra la siniestralidad aprobado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en octubre de 1998. Tanto la ejecución del Plan como la puesta en marcha de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales son procesos que, por su propia naturaleza, se desarrollan con lentitud no permitiendo todavía una evaluación global de sus resultados. La necesidad de la búsqueda de soluciones que ofrezcan resultados a más corto plazo ha llevado a introducir durante este año una orientación nueva de la política de prevención de riesgos laborales, más selectiva en cuanto a su ámbito de aplicación y más cercana a la realidad productiva de cada territorio en cuanto a su ejecución por las Comunidades Autónomas. Ello ha redundado en la adopción de iniciativas interesantes en el ámbito autonómico, en las que merece la pena detenerse con más detalle más adelante.

En este contexto de creciente preocupación social se inscribe el encargo formulado por el Presidente del Gobierno al Presidente del CES a finales del mes de julio de 2000, para la elaboración de un Informe independiente sobre la situación actual de la siniestralidad laboral en España, las causas y consecuencias de la misma, así como las medidas que podrían contribuir a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. El Informe, acompañado del estudio técnico en que se apoya, se concluyó en febrero de 2001 y se estructura alrededor de cuatro bloques objeto de análisis, en torno a los que se aglutinan una serie de propuestas. En primer lugar, se analizan las fuentes estadísticas disponibles, sus posibilidades y sus insuficiencias, a partir de las cuales se describen los perfiles de la siniestralidad y las enfermedades profesionales en España en la década 1989-1999. En segundo lugar, el Informe intenta aproximarse a las causas de la siniestralidad a través de su relación con el marco productivo; atiende por ello a las características del mercado de trabajo español, las condiciones de trabajo y el crecimiento de la actividad económica, entre otros aspectos, como la formación preventiva existente. En tercer lugar, se examina la relación entre la situación actual y el marco legal de la prevención de riesgos laborales en España desde la perspectiva normativa, aseguradora y del sistema de inspección. Por último, se revisan los principales problemas que afectan al nuevo modelo de gestión de la prevención en la empresa desde la perspectiva de las políticas desarrolladas por las administraciones públicas implicadas, por un lado, así como de las nuevas entidades (formativas, servicios de prevención y audito-

ras) a las que se ha dado entrada en la gestión de la prevención de riesgos, por otro.

Igualmente, el proceso de diálogo social reimpulsado durante el año 2000 tampoco ha sido ajeno a esa creciente preocupación por el problema de la siniestralidad en el trabajo, habiéndose constituido una Mesa de diálogo sobre prevención de riesgos laborales. Entre los temas que siguen pendientes como objeto de discusión en la misma cabe reseñar el futuro marco de actuación de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la revisión de la tarifa vigente de accidentes de trabajo y las posibilidades de desarrollo de un sistema *bonus-malus* que module las cotizaciones en función de los resultados en siniestralidad de las empresas, así como la elaboración de un Plan de vigilancia de la salud en el trabajo.

La salud y seguridad en el trabajo en la Agenda Social Europea

En el ámbito comunitario se puede hablar del avance que ha supuesto la definitiva asunción de la prevención de riesgos laborales en la definición de la política europea de empleo y su inclusión entre las prioridades de la Agenda Social Europea. Aprobada esta última en el Consejo Europeo de Niza celebrado en diciembre de 2000, en ella se contempla el desarrollo de la estrategia comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo sobre la base de una futura comunicación de la Comisión en 2002, a partir de los siguientes puntos:

— codificar, adaptar y, en su caso, simplificar la normativa actual;

— responder a los nuevos riesgos como, por ejemplo, las situaciones de estrés en el trabajo, mediante iniciativas normativas e intercambios de buenas prácticas;

— favorecer la aplicación de la legislación en las Pymes, considerando las condiciones específicas a las que se enfrentan, en particular mediante un programa específico;

— desarrollar, a partir de 2001, el intercambio de buenas prácticas y la colaboración entre los servicios de inspección del trabajo para responder mejor a los requisitos esenciales comunes.

Prevención en Pymes: una prioridad por desarrollar

El programa específico para Pymes a que se hace alusión en la Agenda Social Europea se ha establecido, a petición del Parlamento Europeo y la Comisión, como una de las actividades clave de la Agencia Europea para la Seguridad en el Trabajo. Esta última será la encargada de la organización de un Programa de Prevención de Accidentes dirigido a las Pymes que contará con un presupuesto de 5 millones de euros. El programa, que será la contribución de la Agencia a la preparación de la estrategia de seguridad y salud de la Unión Europea prevista en la Agenda Social Europea, se centrará en el desarrollo e intercambio de ejemplos de buenas prácticas dirigidos a reducir el número y la gravedad de los accidentes laborales en Europa.

En esta área de actuación, no hay que olvidar que en España, la LPRL estableció como instrumento específico para el fomento de la prevención de riesgos en las Pymes la creación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que finalmente fue constituida en abril de 1999. La Fundación debería cubrir una importante función, como es la de dar respuesta a las necesidades de la pequeña y mediana empresa en materia de prevención de riesgos laborales, en especial a sus dificultades de dar cumplimiento a una normativa compleja que, en ocasiones, requiere inversiones importantes y, en todo caso, un esfuerzo organizativo que no todas están en condiciones de asumir y que la Fundación se propone aminorar mediante la financiación de acciones de asistencia técnica, información y promoción del cumplimiento de la normativa y elaboración de materiales formativos.

Sin embargo, tan importante cometido deberá llevarse a cabo con cargo a un presupuesto que es fijo, lo que puede restringir su ámbito de aplicación y obligará a priorizar acciones. En efecto, la financiación de la Fundación para sus primeros cinco años de vida está establecida desde su creación en 10.000 millones de pesetas, procedentes de los excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Además, tal presupuesto deberá ser compartido con los órganos tripartitos análogos de las Comunidades Autónomas mediante un reparto de atribuciones en el que predomina el elemento territorial de las acciones sobre el sectorial. Así, los presupuestos que la Fundación asigne a los ámbitos territoriales autonómicos que tengan asumidas competencias de ejecución de la

legislación laboral en materia de Seguridad Social se atribuirán para su gestión a los órganos tripartitos y de participación institucional que existan en dichos ámbitos y tengan naturaleza similar a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En dicha asignación del presupuesto a nivel territorial se tendrán en consideración criterios socioeconómicos como la población ocupada, el tamaño de las empresas y los índices de siniestralidad laboral. Hay que tener en cuenta, además, que en la distribución anual de los recursos por el Patronato de la Fundación entre las acciones que forman parte del programa de actividades, se priorizarán las acciones que por su cercanía y proximidad a los sujetos beneficiarios de la actividad se lleven a efecto a través de la gestión de los órganos territoriales tripartitos.

Resultados de la primera convocatoria de ayudas de la FPRL

En el año 2000, la Fundación se ha puesto en marcha con la primera convocatoria de asignación de ayudas[129], destinada a financiar acciones clasificables como de Información, de Asistencia Técnica, de Formación y de Promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. En respuesta a esta primera convocatoria se recibieron 313 solicitudes para la ejecución de otras tantas acciones. La distribución de las mismas en función de su procedencia distinguió entre acciones directas, es decir, emanadas directamente del Patronato de la Fundación por propia iniciativa o a solicitud de la CNSST (6 acciones, el 2 por 100 del total), y acciones indirectas, generadas para su aprobación por el Patronato desde los órganos tripartitos territoriales (77 acciones, o lo que es lo mismo, el 25 por 100 de acciones presentadas) o bien a solicitud de fundaciones sectoriales de ámbito estatal y de Organizaciones Sindicales o Empresariales de carácter sectorial y ámbito estatal (230 acciones, es decir, el 73 por 100).

Finalmente se aprobaron 117 acciones por un importe global de 2.202.501.956 pesetas, distribuidas entre 77 acciones provenientes de los órganos tripartitos territoriales, por un importe de 1.446.072.168 pesetas; 4 acciones directas a propuesta de los Patronos de la Fundación (273.642.475 pesetas) y, por último, 36 acciones indirectas sectoriales (482.787.314 pesetas). Resulta destacable el alto porcentaje de acciones indirectas sectoriales

[129] *BOE,* 27 de julio de 2000, *Convocatoria de asignación de recursos para el ejercicio 2000.*

solicitadas que no obtuvo financiación. En efecto, la solicitud de recursos por este concepto desbordó totalmente la asignación prevista para este tipo de acciones, pues se solicitaron recursos por un montante de 8.041.331.226 pesetas, lo que representaba más del 1.000 por 100 del presupuesto disponible para estas acciones que era de 775.529.031 pesetas. Ante esta situación, el Grupo de Organizaciones Empresariales en el Patronato de la Fundación se opuso a que se aprobaran acciones directas en detrimento de más del 35 por 100 del total destinado a las acciones indirectas solicitadas.

Grado de ejecución del Plan de Acción contra la siniestralidad

Una de las iniciativas más ambiciosas en el marco de la política de prevención en nuestro país fue la aprobación por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Plan de Acción contra la siniestralidad en octubre de 1998. Durante el año 2000 ha continuado su desarrollo y se ha acordado su prórroga durante el año 2001 para poder finalizar las acciones contempladas en el mismo.

Cabe recordar que la puesta en marcha de una de sus principales iniciativas —el conjunto de acciones contempladas en el marco del Plan Nacional de Formación— se encuentra paralizada por la falta de mecanismos de financiación. Este Plan pretendía dotar al conjunto de actores implicados en el sistema (empresarios, trabajadores y sus representantes), de una formación básica en prevención de riesgos laborales, así como reforzar la formación especializada de profesionales tanto técnicos como sanitarios, mediante acciones de formación profesional ocupacional y continua. Entre tanto se ha trabajado en la preparación y firma de diferentes convenios, así como en la elaboración del material didáctico que servirá de base para el desarrollo del Plan.

No cabe hablar de grandes progresos en el marco de las acciones de fomento e incentivación de la cultura preventiva que preveía el Plan de acción. Así, dentro de las acciones previstas en esta área no se ha avanzado hasta el momento en el establecimiento de una nueva tarifa para el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en la que se contemplaran factores y resultados respecto de los que fijar las cuotas. Tampoco se han adoptado medidas de ámbito estatal para el fomento de las inversiones destinadas a promover la mejora del medio de trabajo y el

perfeccionamiento de los niveles de protección, tal y como estipulaba el Plan.

En cuanto al fomento de la investigación en el campo de la prevención de riesgos laborales se prevé el futuro desarrollo de un Plan Nacional de Investigación en el marco del plan estratégico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). En este campo, el Plan contemplaba la necesidad de realizar estudios sectoriales específicos para identificar los problemas concretos de las distintas actividades económicas.

Por cuanto hace a la actividad de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), durante el 2000 se creó un grupo de trabajo específico para el sector agrario actualmente en fase de constitución. Asimismo presentó sus trabajos el Grupo Sector Marítimo-Pesquero, que concluyeron en un documento de análisis de las condiciones de trabajo en el sector y de las dificultades de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, identificando seis campos de actuación específicos. El Grupo de Construcción ha finalizado la preparación de un documento de trabajo «Construcción. Ponencia General», en el que se informa sobre la necesidad de cooperación entre las Administraciones Públicas, las estadísticas de siniestralidad del sector, los procedimientos de Información y Formación, el análisis de la normativa vigente y acciones para reducir la siniestralidad laboral en el sector. Igualmente, han continuado sus trabajos para la elaboración de sendos informes el Grupo de Amianto y el de Profesionales sanitarios en relación a su integración en los servicios de prevención.

Finalmente, el desarrollo del Plan de Acción ha avanzado en el plano de las actuaciones de sensibilización, promoción y apoyo de la actividad preventiva, mediante la preparación de campañas de difusión de la prevención de riesgos laborales así como en actuaciones de asesoramiento e información a las empresas por parte del INSHT.

Un complejo marco normativo casi completo

En el año 2000 no se han aprobado nuevas disposiciones ni se han producido modificaciones dignas de mención de la normativa de desarrollo de la LPRL[130]. Como ya se ha mencionado, el marco

[130] No se puede considerar como novedad, por su propio carácter de texto refundido, el RD Ley 6/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y sanciones en el orden social, en el que se reordenan diversas disposiciones de la LPRL.

jurídico laboral español se ha ido completando en los últimos años gracias al intenso proceso de trasposición de Directivas comunitarias, al tiempo que tanto la propia LPRL, como sus disposiciones de desarrollo han sido objeto de diversas reformas parciales. Anteriores ediciones de esta Memoria han ido dando cuenta de esta actividad de producción normativa que se puede afirmar que, en lo sustancial, ha completado sus objetivos. Se encuentran pendientes de publicación, habiendo sido informados por la CNSST los Reales Decretos referidos a: modificación de la normativa reglamentaria sobre agentes cancerígenos; protección radiológica; riesgos eléctricos; y agentes químicos. Se cuenta ya, pues, con un profuso marco jurídico emanado de la Directiva Marco y de las Directivas específicas derivadas del antiguo artículo 118 A del Tratado de la Unión (actual 138 del Tratado de Amsterdam), caracterizado además por un grado de complejidad notable, sobre todo por lo que hace a la interpretación y puesta en práctica de los Reglamentos de desarrollo de la LPRL.

A este respecto las Guías Técnicas orientativas para la aplicación de los Reglamentos derivados de la LPRL, elaboradas por el INSHT, son ya una referencia para la evaluación y prevención respecto de la materia concreta de que se trate. Hasta el momento se han elaborado Guías relativas a la utilización de lugares de trabajo, a la manipulación manual de cargas, a la utilización de equipos que incluyan pantallas de visualización, la de utilización de equipos de trabajo, la de señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo y la de utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Se encuentran en preparación las Guías sobre exposición a agentes biológicos y cancerígenos durante el trabajo, la de utilización de los buques de pesca y la relativa a las obras de construcción. En el año 2000 se ha publicado además el listado de valores límite de exposición profesional a agentes químicos, aprobado por la CNSST.

Escasos avances en la negociación colectiva

El avanzado estado de desarrollo del marco legal de la prevención de riesgos en el trabajo contrasta con la pobreza de contenidos que sigue caracterizando a la negociación colectiva en este campo. Es éste un terreno en el que la LPRL, por su carácter de derecho necesario mínimo e indisponible y, a la vez, por su naturaleza de norma de principios, admitía un amplio margen de mejoras y de especificación de sus previsiones para una efectiva adecuación de la

LPRL a la realidad de las empresas. La regulación convencional no ha cumplido satisfactoriamente este cometido puesto que, a pesar de la generalización de las cláusulas sobre seguridad y salud en el trabajo, su aportación en relación al marco legal es escasa cuando no deficiente. Según la estadística de convenios colectivos del MTAS[131], el 78,6 por 100 de los convenios incluía cláusulas de salud laboral. Sin embargo, lo más frecuente es que los convenios contengan una remisión global a la normativa vigente o que el capítulo correspondiente reproduzca en términos literales los preceptos legales. También es habitual encomendar a las Comisiones mixtas o paritarias la tarea de impulsar el desarrollo y aplicación de la normativa. En cuanto a la previsión de acciones específicas de mejora, la más frecuente —y única en la mayoría de las ocasiones— es la regulación de los reconocimientos médicos como instrumento de garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores: la incorporaba el 65,5 por 100 de los convenios registrados según la Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La designación de delegados de prevención distintos a los legales estaba contemplada en el 11,6 por 100 de los convenios: en el 10,4 por 100 de los convenios se les concedía un crédito horario mensual y en el 5 por 100 se establecía el tiempo disponible para su formación. La existencia de programas de prevención de riesgos y de cursillos en materia de seguridad y salud estaba prevista en el 41,5 por 100 y en el 38 por 100 de los convenios, respectivamente.

Actuaciones de la Inspección de Trabajo

Siguiendo las orientaciones del Plan Nacional de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para actuaciones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, incluido como Anexo al Plan de Acción sobre la siniestralidad, las actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo se han intensificado durante el año 2000 en cuanto al número de actas de infracción levantadas, un 7 por 100 más que en el año anterior, así como en cuanto a la cuantía de las sanciones impuestas (22 por 100), si bien ha descendido el número de accidentes investigados y, en menor medida, el número de visitas a centros, datos que parecen apuntar a una línea de actuación más selectiva por parte de la Inspección. Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid han sido las Comunidades Autónomas en las que más infracciones se detectaron (cuadro II-61).

[131] Convenios registrados hasta el 28 de febrero de 2001, inicio de efectos económicos enero-diciembre de 2001.

CUADRO II-61
ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN EL ÁREA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 1996-2000
(Totales anuales)

Actividad de la Inspección de Trabajo	1996	1997	1998	1999	2000
Número visitas a centro	107.912	93.551	102.170	111.587	111.309
Número actas infracción	10.742	15.521	18.721	22.992	25.339
Número infracciones en acta	14.710	22.476	27.035	33.445	37.472
Importe sanciones (millones pesetas)	4.101	7.190	8.895	11.625	14.173
Número requerimientos de subsanación	75.002	76.706	92.441	112.449	112.465
Número paralizaciones de trabajo	691	1.095	1.778	2.392	2.498
Número accidentes investigados	13.659	14.892	15.939	15.716	14.222

Fuente: MTAS, *Informe sobre la Actividad y Resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 1999*; para 2000: datos proporcionados por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Cabe recordar que uno de los objetivos del Plan de Acción contra la Siniestralidad era promover la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas, algo que de momento se ha traducido en escasas iniciativas concretas[132]. No obstante, en el orden jurisdiccional penal se ha asistido durante el año 2000 a la creación de fiscalías especializadas en temas de seguridad y salud laboral en Madrid y Alicante.

5.3. INICIATIVAS AUTONÓMICAS CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL

El propio planteamiento del Plan de acción contra la siniestralidad como una estrategia global y continuada de acción en todos los órdenes se conjuga difícilmente con la necesidad de adoptar medidas urgentes y efectivas que reduzcan la siniestralidad en un breve plazo. A este respecto, a raíz de los buenos resultados obte-

[132] Ya en el año 2001 cabe señalar que el INSHT ha propiciado encuentros entre estas instituciones. Así, en mayo, a instancias de dicho organismo, se han celebrado las «Jornadas de coordinación de actuaciones en materia de vigilancia, control y sanción por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales» en las que han participado fiscales, inspectores de trabajo, responsables laborales de las Comunidades Autónomas, miembros de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo además de los agentes sociales.

nidos por el Plan 677 de la Comunidad de Aragón sobre 677 empresas con altas tasas de siniestralidad, el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su reunión de marzo de 2000, acordó encomendar a las Comunidades Autónomas el desarrollo de sus propios planes de actuación selectiva, cuyo ámbito de aplicación orientativo se estima que podía abarcar en torno a unas 30.000 empresas en las que se registra alrededor del 50 por 100 del total de accidentes. Esta iniciativa, que se ha venido en llamar «Plan de choque contra la siniestralidad» se enmarca y es coherente con el desarrollo de una de las líneas de actuación del propio Plan de acción contra la siniestralidad, como era la coordinación y cooperación interinstitucional y entre las Administraciones Públicas, General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

La reacción de estas últimas no se hizo esperar, y en el año 2000 la mayoría de ellas ya había puesto en marcha iniciativas de distinta índole, algunas de las cuales ya pueden ser evaluadas, aunque difícilmente se prestan a la comparación. Como punto de partida común todos los Planes abordan la cuestión a partir de la selección de un conjunto de empresas caracterizadas por haber registrado niveles elevados de siniestralidad. Sin embargo, las diferencias comienzan ya en los propios *criterios de selección* de dicho conjunto de empresas: además del principal criterio que es el de elevada tasa de siniestralidad, en varias Comunidades Autónomas las actuaciones selectivas se dirigen hacia sectores o actividades consideradas especialmente peligrosas. La actividad contemplada específicamente con mayor frecuencia es la de construcción, que cuenta con planes de choque o acciones propias en varias Comunidades Autónomas (por ejemplo, País Vasco, Cataluña, Aragón, Madrid, Valencia, Cantabria, etc.) así como la contratación a través de empresas de trabajo temporal (ETT) (Madrid, Valencia, Aragón, Cantabria). La agricultura y pesca son destinatarias de acciones específicas en alguna Comunidad con importante presencia de estos sectores (Canarias).

Tanta relevancia como el grupo de empresas seleccionado, que debe responder a las peculiaridades del tejido productivo de cada Comunidad Autónoma, tiene la distinta naturaleza de las acciones. En su mayoría predominan las de tipo *informativo y formativo*. Otras contemplan instrumentos más expeditivos, generalmente recabar la actuación de la Inspección una vez comprobada la inefectividad de

las visitas de los técnicos. En esta línea, algunas Comunidades Autónomas han establecido limitaciones a la contratación con las Administraciones Públicas de empresas o tienen previsto hacerlo próximamente.

La asunción de la política de prevención de riesgos laborales y la *implantación de órganos especializados*, bien de la Administración, bien tripartitos con participación de agentes sociales no se ha producido al mismo ritmo ni en la misma medida en todas las Comunidades Autónomas, ni siquiera en aquellos territorios en los que la situación pudiera ser preocupante en atención a sus elevadas tasas de siniestralidad. En este sentido, el año 2000 ha sido especialmente fructífero al menos en cuanto a la creación de órganos e instituciones que, en algunos casos, han venido acompañados de la adopción de iniciativas de acción. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Asturias (en 1999 se situaba entre las cinco que más superaban la media de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, junto con Murcia, la Comunidad Valenciana, Islas Baleares e Islas Canarias), donde hasta el año 2000 la acción en el campo de la prevención de riesgos laborales no era objeto de atención diferenciada, sino que constituía un capítulo del llamado Pacto Institucional por el Empleo. Ha sido en el segundo semestre del año 2000, a partir de la creación en el mes de abril de un Instituto Asturiano de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando se ha puesto en marcha por primera vez un Plan contra la Siniestralidad Laboral.

Baleares: equipos mixtos de técnicos de sindicatos y empresarios

También en las Islas Baleares (Comunidad que, junto a Murcia, presenta los crecimientos más altos de siniestralidad total entre 1994 y 1999) el 2000 ha sido un año decisivo, con la aprobación de un Plan de Choque desde el Gobierno Insular, y la previsión de que en el 2001 comience a funcionar el Consejo de Salud Laboral Balear Tripartito, con participación de los agentes sociales. El Plan de Baleares contempla un amplio conjunto de medidas en todos los ámbitos, desde el refuerzo de la eficacia de las actuaciones en materia de vigilancia, control y acción sancionadora; coordinación con otras entidades y administraciones; acciones de información, promoción y fomento de la prevención; un plan de formación; creación del servicio de prevención de la Administración autonómica; seguridad y salud en las diferentes políticas de las Islas Baleares; un sistema de información, creación de una base de datos y un programa estadístico. Una de las novedades más interesantes es la

creación de un protocolo específico para su aplicación por parte de técnicos de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. Parte importante del Plan se concentra sobre todo en la planificación de visitas a las empresas de mayor siniestralidad, lo que no obstante, choca con la falta de técnicos de prevención existente en esta Comunidad.

Aragón: herramientas para mejorar la «autoevaluación» continua en la empresa

Otras medidas pretenden incidir en aspectos de la *organización interna* de la empresa que pueden repercutir en una mejora de la prevención de riesgos laborales apropiada para cada centro de trabajo. Una experiencia innovadora en este campo es la adoptada por la propia Comunidad de Aragón, que fue pionera en este tipo de medidas con su Programa 667 en 1999, con el diseño de un sistema organizativo en el marco de un Programa denominado «Objetivo cero» en el año 2000, relativo a la comunicación o evaluación cotidiana de riesgos en la empresa y su subsanación, de libre adhesión por las empresas, encaminado a incrementar la seguridad laboral que implica un compromiso entre empresarios y trabajadores y que aporta herramientas de trabajo para introducir la mejora continua de la prevención. Los datos disponibles, referidos al primer semestre de 2000, ponen de manifiesto que el grupo de empresas en las que se ha aplicado el Programa ha mostrado un comportamiento sensiblemente mejor, con una reducción del 26,8 por 100 en un semestre, al desarrollado por el grupo del Programa 667 a lo largo del mismo periodo en el pasado año (19,5 por 100).

En el Anexo II-2, se presenta una síntesis de las principales características de los distintos Programas autonómicos de prevención de riesgos laborales para empresas de mayor siniestralidad.

ANEXO II-2

PROGRAMAS REGIONALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EMPRESAS DE MAYOR SINIESTRALIDAD

Comunidades Autónomas	Ámbito de aplicación	Criterios de selección	Órganos implicados	Resultados y observaciones
Aragón	Programa 2000: 1.163 empresas/103 actividades económicas. Plan Objetivo 0 accidentes: de una selección de 1.800 participan voluntariamente 489.	Tasa superior al 25%. Haber tenido 3 o más accidentes en 1999. Plan Objetivo 0 accidentes: 2 o más e incidencia inferior a la media o inferior al 25%.	Técnicos de Gabinetes de Seguridad y Salud y de la Inspección de Trabajo en los sectores de construcción, Administraciones Públicas y ETT.	Primer semestre 2000: reducción del 26,8% del total de accidentes de trabajo dentro del grupo del Programa 2000. Desaceleración en el ritmo de producción de accidentes.
Asturias	563 empresas (en 44 Concejos asturianos) que acumulaban 14.133 accidentes en 1999.	Índice de incidencia > 150% de su sector. Haber tenido 4 o más accidentes en 1999.	Dirección General de Trabajo, Dirección General de Minería, Instituto Asturiano e Inspección de Trabajo.	El objetivo prioritario del Plan es el estudio de las características de la accidentalidad en las empresas, mediante visitas, emisión de informes y seguimiento posterior. El 85% de las empresas recibieron informe tipo «llamada de atención».
Baleares	697, en 5 zonas: Mallorca (3 zonas), Menorca e Ibiza-Formentera. Sectores: Construcción (332 empresas), servicios (254) e industria (111).	– Prioritariamente, empresas de < 25 trabajadores. – Índice de siniestralidad = o > 50% de la media nacional del sector.	Consell Balear de Salut Laboral, Consellería de Treball i Formació, Inspección de Trabajo, Mutuas, Consells Insulares, Felib y otros.	Se ha elaborado un protocolo a seguir por equipos mixtos de técnicos de empresarios y sindicatos.
Cataluña	4.132 (de 4.500 empresas encuestadas escogidas al azar). Actuaciones concretas en la construcción: 705 visitas a obras, investigación de 136 accidentes.	Empresas con una media de accidentes superior a la de su sector de actividad.	Consejo Catalán de Seguridad y Salud Laboral, Inspección de Trabajo.	Las visitas de los técnicos de la Administración no han surtido efectos por sí solas hasta que se ha recabado la intervención de la Inspección de Trabajo.

ANEXO II-2 *(Continuación)*

PROGRAMAS REGIONALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EMPRESAS DE MAYOR SINIESTRALIDAD

Comunidades Autónomas	Ámbito de aplicación	Criterios de selección	Órganos implicados	Resultados y observaciones
Comunidad Valenciana	3.714 empresas: – Construcción: 1.255 empresas, con 13.835 accidentes (28%). – Industria: 2.249 empresas, con 31.050 accidentes (63%). – ETT: 150, con 3.174 accidentes (6%). – Administración Pública, Defensa, Orden Público y Seguridad: 60 centros, con 884 accidentes (2%).	– Empresas con más de 4 accidentes de trabajo con baja (excluidos los *in itinere*). – Índice de incidencia > 175 por 1.000 en 1999.	Consejería de Empleo, Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Valenciana, organizaciones empresariales y sindicales, MATEPSS y Servicios de Prevención ajenos.	Primer semestre 2000: Se había visitado al 42% de las empresas a las que se dio un plazo de 3 meses para adecuar su actividad preventiva a la LPRL. Se observa reducción dentro del grupo del 11,8% en la cifra total de accidentes con respecto al año anterior.
Extremadura	240 empresas.	Empresas con mayor número de accidentes.	Técnicos del CESSLA, Inspección de Trabajo, Delegados de Prevención.	Actuación conjunta técnicos del CESSLA y de la Inspección. Remisión de informe al empresario y delegado de prevención o representante de los trabajadores.
Galicia	«Proyecto 1100». En total, 1.100 empresas (el 1,28% del total, acumulando el 35,5% de accidentes).	Empresas con 5 o más accidentes en 1998 y 1999.		

ANEXO II-2 *(Continuación)*

PROGRAMAS REGIONALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EMPRESAS DE MAYOR SINIESTRALIDAD

Comunidades Autónomas	Ámbito de aplicación	Criterios de selección	Órganos implicados	Resultados y observaciones
Madrid	974 empresas seleccionadas (aprox. 52% accidentes con baja en 1998). 4 grupos de empresas: construcción, ETT, empresas de especial significado por el número de accidentes y trabajadores, y el resto.	Haber registrado 4 o más accidentes (de todo tipo y grado) en el primer semestre de 1999, y haber superado el 50% del índice de incidencia del sector; haber registrado el primer y segundo trimestre 4 o más accidentes (graves o mortales); o 25 o más accidentes leves en el primer semestre de 2000.	Dirección General de Trabajo, Instituto Regional de Seguridad y Salud, MATEPSS, Inspección de Trabajo.	Se proporcionaba información sobre la siniestralidad laboral comparada y se solicitaba información sobre su organización preventiva. Si no existía respuesta se pasaba a la inspección.
Murcia	585 empresas (52% de la siniestralidad de la CA). Agricultura (0,28%); Industria (28,4%); Construcción (26,7%); Servicios (44,65 %)	Empresas de mayor siniestralidad: > 50% del índice de incidencia de su sector, o haber tenido 5 o más accidentes en 1998.	Consejería de Trabajo y Política Social, Instituto de Seguridad y Salud Laboral, Inspección de Trabajo.	507 empresas visitadas; 277 expedientes; 226 actas; 450 requerimientos.
Navarra	755 empresas (Programa DIANA).	Empresas con índices de siniestralidad más altos respecto a su actividad económica, y las que, tras asesoramiento y seguimiento, todavía manifiestan deficiencias preventivas básicas en cuanto a carencias en aplicación de LPRL y presencia de máquinas peligrosas.	Consejo Navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo, Instituto Navarro de Salud Laboral, Inspección de Trabajo, MATEPSS, Fundaciones.	Para el control y seguimiento de las actuaciones se han organizado Comisiones específicas de composición tripartita.

Fuente: Elaboración propia a partir de los organismos competentes de las Comunidades Autónomas y de la CNSST.

6. CONFLICTIVIDAD LABORAL

Se analiza en este apartado la evolución de la conflictividad laboral en el año 2000, materializada bien en huelgas, cierres patronales o conflictos colectivos, bien en los distintos procedimientos de solución extrajudicial de conflictos laborales.

Con relación a las huelgas, si bien se registró un número menor que en 1999, esta circunstancia debe ser matizada, pues implicaron un aumento de la conflictividad en términos de trabajadores participantes y jornadas no trabajadas, siendo industria y servicios los sectores y Madrid y Cataluña las Comunidades Autónomas donde se apreció una mayor incidencia. Destaca, por otra parte, que la mitad de las huelgas desarrolladas concluyeron por acuerdo de las partes.

Los cierres patronales, por su parte, experimentaron un importante aumento en el año 2000, si bien este incremento no tuvo el mismo reflejo en términos de trabajadores afectados, que disminuyeron en relación a 1999.

La conflictividad vista por los órganos administrativos de mediación y arbitraje experimentó una notable disminución, reflejando su bajo porcentaje de efectividad el mantenimiento de la tendencia de años anteriores, que confirma el carácter de trámite previo a la vía jurisdiccional que estos procedimientos representan en las relaciones laborales.

La jurisdicción social registró un incremento de la conflictividad relativa a conflictos individuales y colectivos, mientras que los relativos a Seguridad Social disminuyeron respecto a 1999. En cuanto a sus resultados, se mantuvieron porcentajes similares a los del anterior año.

Especial transcendencia mantiene en los últimos años la conflictividad encauzada a través de los sistemas y procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, nacidos de la autonomía colectiva. El aumento de su actividad en el año 2000, tanto en el número de conflictos que se tramitaron como en la eficacia de sus resultados, confirman la implantación progresiva de estos mecanismos de autocomposición de conflictos, así como la intención de

sindicatos y empresarios de consolidar y racionalizar un sistema más avanzado de relaciones laborales.

Prueba de la anterior afirmación ha sido la renovación del Acuerdo Interconfederal de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC II), que ha tenido lugar en el mes de enero de 2001, y que, por su especial significado, es objeto de comentario en esta Memoria.

6.1. Huelgas, cierres patronales y conflictos colectivos

Disminución del número de huelgas, aunque notable aumento en participantes y jornadas no trabajadas

En el año 2000, aunque disminuyó el número de huelgas realizadas (cuadro II-62) respecto a 1999 (626 huelgas, frente a 739), tanto el número de participantes como de jornadas no trabajadas experimentaron un importante aumento. Por un lado, se superaron en 748.000 los participantes en huelgas respecto al año anterior, hasta alcanzar 1.873.000 participantes, lo que representa un incremento del 66 por 100 y, por otro, aumentaron en más de 1.610.000 las jornadas no trabajadas. Ambos datos, sin alcanzar el volumen de conflictividad del año 1994, se sitúan, por primera vez desde entonces, entre los más altos del periodo.

También aumentaron en el año 2000 los centros de trabajo implicados en las huelgas, que pasaron de 70.300 en el año 1999 a 512.400, así como las plantillas implicadas, que ascendieron a 5.101.700 trabajadores censados frente a 2.005.500 en 1999[133].

Mayor incidencia en industria y servicios

Las huelgas en el año 2000 tuvieron una mayor incidencia sectorial en industria y servicios, donde se desarrollaron 299 y 295 huelgas respectivamente, lo que representa un 95 por 100 de las huelgas realizadas. En cuanto a la industria, si bien se mantuvo el volumen de trabajadores, con 96.800 participantes, las jorna-

[133] Según el Informe sobre Conflictividad Laboral 2000 de CEOE se contabilizan 589 convocatorias de huelgas, que afectaron a sectores y empresas con un total de 4.571.291 trabajadores censados, de los que 471.449 resultaron directamente implicados y supusieron 12.362.886 horas de trabajo perdidas. En relación a huelgas estrictamente laborales (donde excluyen las ocurridas en servicios de carácter público y las debidas a motivos extralaborales) registran 404 paros, con 1.284.089 trabajadores en plantillas, de los que 172.369 resultaron implicados y 7.170.638 horas de trabajo perdidas.

CUADRO II-62
PRINCIPALES INDICADORES DE HUELGA, 1991-2000

Años	Número de huelgas	Participantes		Jornadas no trabajadas		
		Total (miles)	Por huelga	Total (miles)	Por huelga	Por participante
1991	1.552	1.945	1.253	4.421	2.849	2,3
1992	1.296	5.170	3.989	6.247	4.820	1,2
1993	1.131	997	882	2.013	1.780	2,0
1994	890	5.428	6.099	6.255	7.028	1,2
1995	866	570	658	1.443	1.666	2,5
1996	807	1.078	1.336	1.553	1.924	1,4
1997	709	631	890	1.790	2.525	2,8
1998	618	672	1.087	1.264	2.044	1,8
1999	739	1.125	1.522	1.477	1.999	1,3
2000	626	1.873	2.992	3.088	4.933	1,6

Fuente: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

das no trabajadas aumentaron hasta 380.500, esto es, un incremento de un 40 por 100 respecto al año 1999. El sector servicios experimentó, por su parte, un importante aumento en relación a 1999, tanto en términos de trabajadores como de jornadas no trabajadas. Los primeros se incrementaron en 875.800 trabajadores, hasta situarse en 1.125.500 el número de trabajadores participantes. En cuanto a las jornadas no trabajadas, se registraron en el año un total de 1.313.200. Destaca, el sector de la construcción, en el que con veinte huelgas registradas se dejaron de trabajar 1.269.600 jornadas y participaron 616.300 trabajadores, datos éstos notablemente superiores a los de 1999, año en el que las 12 huelgas desarrolladas en la construcción representaron la pérdida de 191.600 jornadas de trabajo. Respecto a la conflictividad en el sector agrario, en el año 2000 se reproduce la tónica de años anteriores, con cifras muy bajas, registrándose, en las seis huelgas desarrolladas, 11.800 trabajadores participantes y 88.600 jornadas no trabajadas.

Por otra parte, si en el año 1999 se produjeron cuatro huelgas generales que movilizaron a casi 600.000 trabajadores, con un número idéntico de jornadas no trabajadas, las seis huelgas generales del año 2000 registraron una incidencia muy inferior, disminuyéndose la participación a 35.600 trabajadores y a 36.100 las jornadas no trabajadas.

Cuatro ramas de actividad concentran el 80 por 100 de las jornadas no trabajadas

Por rama de actividad, se observa que de las 45 ramas identificadas, en 4 de ellas se concentra el 80 por 100 de las jornadas no trabajadas. El mayor número de jornadas dejadas de trabajar se registró en la construcción, con un 41 por 100, seguido del comercio al por menor, la Administración Pública y el transporte terrestre y por tubería, con 453.100, 403.700 y 343.600 jornadas no trabajadas, respectivamente.

No obstante, este aumento significativo de la conflictividad no tiene un desarrollo uniforme a lo largo del año 2000, sino que obedece a conflictos y convocatorias específicas, como las realizadas en el mes de febrero, en la construcción por motivos de salud laboral (1.213.000 jornadas perdidas); en octubre en el comercio al por menor, por limitación de horarios de apertura (450.100 jornadas perdidas), así como en el transporte terrestre, por una reducción en el precio de los hidrocarburos (216.600 jornadas perdidas); en diciembre en la Administración Pública, por motivos salariales (391.100 jornadas perdidas).

Aunque lejos de las cifras anteriores, también destacan los incrementos que se observan en la industria de la madera y el corcho, con 82.700 jornadas no trabajadas, frente a las 1.300 de 1999; en la metalurgia, con 96.200 jornadas no trabajadas, esto es 86.000 jornadas más que en el año anterior; así como en la industria de alimentos, bebidas y tabacos, donde, con 55.200 jornadas no trabajadas, se observa un incremento de un 53 por 100 respecto a 1999. Entre las ramas de actividad que experimentaron un descenso de sus conflictos, destacan las importantes bajadas en el año 2000 (un 90 por 100), registradas en fabricación de otros materiales de transporte, en las actividades anexas al transporte y en actividades sanitarias y servicios sociales, así como la disminución de jornadas perdidas que se aprecia en la rama de la educación.

Madrid y Cataluña registraron el mayor número de jornadas no trabajadas

El aumento del número de jornadas no trabajadas se reparte entre el conjunto de las Comunidades Autónomas, aunque son Madrid y Cataluña las Comunidades que presentan un mayor aumento, pasando de 51.700 a 559.200, y de 72.400 a 503.900, respectivamente, lo que significa haber superado en más de un 85 por 100 su volumen de conflictividad del año 1999. De igual forma, destacan las cifras de jornadas no trabajadas de Galicia (311.400), Comunidad Valenciana (222.200) y Extremadura (194.500). En el sentido opuesto, en el año 2000 vieron reducidas las jornadas no trabajadas por

causa de huelga, Andalucía, con 144.000 jornadas, frente a las 292.300 perdidas el año anterior, y País Vasco[134], que las redujo en un 70 por 100, hasta registrar 202.700 jornadas no trabajadas.

Un 94 por 100 de las huelgas se originaron por motivos laborales

La motivación de las huelgas en un 94 por 100 de los casos (587 huelgas), fue estrictamente laboral, debiéndose el 6 por 100 restante (39 huelgas) a motivos no estrictamente laborales[135]. Sin embargo, el mayor porcentaje de incremento de jornadas no trabajadas, con un 87 por 100, se registra en las huelgas originadas por este último tipo de motivos, que pasan de 100.500 jornadas no trabajadas en 1999 a 772.400, esto es un 25 por 100 de las jornadas no trabajadas por huelga en el año 2000.

Entre los motivos estrictamente laborales se distinguen los que afectan o no a la negociación colectiva. Durante el año 2000 se apreció un importante repunte de las huelgas derivadas del proceso de negociación colectiva, con 217 huelgas desarrolladas, que implicaron 106.500 trabajadores y 477.100 jornadas no trabajadas, lo que supuso un incremento de un 64 por 100 respecto al año 1999, en términos de jornadas perdidas, retornando a cifras anteriores a 1997, año este en que se registraron 400.600 jornadas no trabajadas; en este tipo de motivos se incluyen otras clasificaciones como las desarrolladas por presión durante la negociación de un convenio (154, que representaron 359.600 jornadas no trabajadas). Por otra parte, persiste la importancia económica de aquellas cuyos motivos no derivan de la negociación colectiva, que ascendieron a 370 huelgas con 1.087.500 trabajadores participantes y 1.838.500 jornadas no trabajadas; en términos de jornadas de trabajo perdidas, este grupo representa un 60 por 100 en el año 2000 y un incremento superior al 50 por 100 en relación al anterior ejercicio.

Entre los motivos ajenos a la negociación colectiva sobresalen la organización del trabajo (origen de 52 huelgas), mejoras inde-

[134] El País Vasco tuvo en el año 1999 un volumen excepcional de jornadas no trabajadas (659.400), con motivo de la huelga general que se desarrolló en su territorio, en reivindicación de la reducción de la jornada máxima de trabajo hasta las 35 horas semanales como medida de fomento de empleo.

[135] Los motivos no estrictamente laborales agrupan cuatro subgrupos: motivadas por anuncio o aplicación de medidas de política económico-social (15 huelgas), de solidaridad (7), relacionadas con causa sindical (1), y otras causas no laborales (16).

pendientes del convenio (51), impago de salarios (40) y sanciones, despidos y medidas disciplinarias (34).

La mayoría de las huelgas concluyeron en el periodo de referencia fijado

Por último, según la forma de terminación y resultados, un 93 por 100 de las huelgas concluidas en el año 2000, esto es 585 huelgas, terminaron en el periodo de referencia fijado en la convocatoria[136], representando tan sólo un 7 por 100 (41 huelgas) aquellas que no finalizaron en este periodo. Con relación a la forma de terminación, se mantiene la tónica general de años anteriores, debiéndose la conclusión de un 85 por 100 bien a la finalización del tiempo fijado (311 huelgas) o a la decisión de las partes (187 huelgas). Finalizaron por la negociación de las partes, 51 por negociación directa y 24 por acuerdo con la mediación de terceros.

En la finalización, destaca el ligero incremento de las concluidas con acuerdo (50 por 100), frente al 46 por 100 del año 1999; de las cuales las dos terceras partes reprodujeron un acuerdo sin predominio de ninguna de las partes, mientras en un 28 por 100 predominó la aceptación de las peticiones de los trabajadores.

Incremento de los cierres patronales

Atendiendo a los cierres patronales (cuadro II-63), en el año 2000 se aprecia un significativo incremento de la conflictividad, por el número de cierres y jornadas no trabajadas que ocasionaron los 16 cierres patronales registrados en este año, lo que representa un aumento de un 60 por 100 respecto a 1999, y con relación a las jornadas de trabajo perdidas, éstas aumentaron en más de 11.800, superando las 38.800 jornadas; sin embargo, hubo un 38 por 100 menos de trabajadores afectados que en 1999.

La conflictividad laboral encuentra otro cauce de expresión en los conflictos colectivos planteados ante los órganos administrativos de conciliación y mediación. La conciliación supone para las partes, con participación de la Administración Pública, un intento obligatorio, y previo a la vía jurisdiccional social, de consecución de un acuerdo libre y pactado que ponga fin a una controversia derivada del contrato de trabajo; por su parte, la mediación implica una actuación encaminada a conseguir la solución de los conflictos laborales, a través de las propuestas formuladas por un tercero.

[136] En este sentido, cabe subrayar que un 90 por 100 de las jornadas no trabajadas (2.790.500) se registraron en huelgas cuya duración fue inferior a 6 días laborales.

CUADRO II-63
CIERRES PATRONALES, 1991-2000

Año	Número de cierres	Trabajadores	Jornadas no trabajadas
1991	93	39.320	115.264
1992	64	22.492	86.029
1993	78	79.554	128.694
1994	18	9.734	21.991
1995	17	3.554	14.155
1996	23	9.765	26.786
1997	35	19.644	46.674
1998	14	8.631	17.342
1999	10	7.599	27.085
2000	16	5.511	38.897

Fuente: MTAS. Subdirección General de Estadísticas.

Nuevo descenso de los conflictos tramitados en los servicios administrados de MAC

Esta vía (cuadro II-64) mantuvo la tónica de ejercicios anteriores, registrando un apreciable descenso en el número de asuntos acogidos por estos organismos administrativos. De esta forma, a noviembre de 2000, se habían registrado, por un lado, un total de 981 conciliaciones colectivas, frente a las 1.195 del mismo periodo del año anterior, y, por otro, 89 mediaciones, esto es 9 mediaciones menos que en 1999.

CUADRO II-64
CONCILIACIONES COLECTIVAS TERMINADAS POR TIPO DE SOLUCIÓN, 1998-2000

Tipo de solución	1998	1999	2000
Total conciliaciones	1.596	1.306	1.070
Con avenencia	155	149	122
Sin avenencia	1.042	859	669
Intentadas sin efecto	245	193	172
Otras (1)	154	105	107

(1) Otras: tenidas por no presentadas, desistidas y otros tipos.

Fuente: MTAS. Subdirección General de Estadísticas.

Por Comunidades Autónomas, el mayor número de conciliaciones colectivas se registró en Cataluña (268) y Madrid (220), seguidas, a mayor distancia por Castilla y León (73) y Galicia (76). Por su parte, el número de conciliaciones interautonómicas, esto es las resueltas por el correspondiente departamento de la Dirección General de Trabajo, representaron, en 2000, 164 conciliaciones colectivas.

Desde el punto de vista de la incidencia de las conciliaciones colectivas terminadas en el año 2000, fueron 309.967 trabajadores y 3.544 empresas los afectados por estos conflictos[137]. Respecto a las conciliaciones interautonómicas, se registraron 1.644.296 trabajadores y 3.761 empresas afectadas.

Eficacia meramente procesal

En cuanto a los resultados obtenidos, nuevamente se hace necesario efectuar una llamada de atención sobre el bajo porcentaje de efectividad de esta vía de composición de conflictos colectivos. Así, tan sólo un 11,4 por 100 de las conciliaciones (122) concluyó con acuerdo entre las partes, frente a un 62,5 por 100 (669), que finalizó sin avenencia, o un 26 por 100 que se tuvo por intentada sin efecto, archivada o desistida.

Aumento de asuntos judiciales...

Finalmente, los asuntos judiciales sociales resueltos en el año ascendieron a 232.782, esto es, 335 asuntos más que en el año anterior. Del total de asuntos resueltos, se apreció un ligero incremento (11 por 100) en los relativos a conflictos colectivos (1.293) y de un 5,4 por 100 en los conflictos individuales (154.055), observándose, por el contrario, un descenso de 3.181 asuntos en los referidos a cuestiones de Seguridad Social (77.434).

...aunque descenso de los asuntos de Seguridad Social

En atención a los resultados se registró un descenso de dos puntos en el número de sentencias favorables, total o parcialmente, al trabajador, con un 37 por 100 (86.158 litigios) frente al 39 por 100 del anterior año, mientras que el número de asuntos que finalizaron con sentencia desfavorable para el trabajador, con 59.581 casos, mantiene el mismo porcentaje que en 1999 (26 por 100), sucediendo lo mismo con los asuntos finalizados por conciliación (10 por 100) y por desistimiento (17 por 100).

[137] No se dispone de datos referidos a Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana.

6.2 Procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales: principales resultados del año

6.2.1. **Balance del Acuerdo Interconfederal de Solución Extrajudicial de Conflictos**

Consolidación y aumento de la actividad desarrollada por el SIMA

Con la eficacia jurídica de un acuerdo interprofesional sobre materias concretas y ámbito de aplicación en todo el territorio nacional, el Acuerdo Interconfederal de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC)[138], gestionado por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), ha concluido su vigencia el 31 de diciembre de 2000.

Este Acuerdo ha ofrecido un marco estatal y autónomo de solución de los conflictos colectivos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones, cuyos resultados han venido siendo objeto de estudio en anteriores ediciones de esta Memoria[139].

Prevalecen los conflictos de empresa, relativos a interpretación y aplicación, y el procedimiento de mediación

En el año 2000 se tramitaron por el SIMA 121 conflictos (cuadro II-65), con un aumento en el número de asuntos de un 25 por 100 en relación a 1999, referidos a empresas o sectores y subsectores de actividad, que afectaban a diferentes Comunidades Autónomas, predominando los de empresa frente a los de sector: 106 conflictos de empresa (87,6 por 100) y 15 procedimientos sectoriales (12,4 por 100 de los asuntos tramitados).

Los 15 conflictos de sector tramitados en el año 2000 han afectado a 169.397 empresas y 2.106.226 trabajadores; por su parte, los 106 conflictos de empresa gestionados en este mismo año han afectado a 61 empresas y 210.749 trabajadores. Respecto a los sectores afectados, se mantiene la pauta de otros años, con el predominio de conflictos en el metal, grandes almacenes, eléctricas, seguros y químicas.

---

[138] Resolución de fecha 29 de enero de 1996 (*BOE* de 8 de febrero).

[139] Del seguimiento de este Acuerdo se ha ocupado, igualmente, el *Observatorio de Relaciones Industriales* del CES, n.º 33 (octubre de 2000).

CUADRO II-65
CONFLICTOS TRAMITADOS EN EL SIMA EN 1998, 1999 Y 2000

Conceptos	1998		1999		2000	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Total conflicto	49	100	97	100	121	100
Ámbito del conflicto						
Empresa	41	83,7	91	93,8	106	87,6
Sector	8	16,3	6	6,2	15	12,4
Tipo de conflicto						
Interpretación y aplicación	39	79,6	77	79,4	85	70,2
Bloqueo de negociación	2	4,1	2	2,1	3	2,5
Huelga	8	16,3	18	18,6	33	27,3
Consultas	0	0	0	0	0	0
Tipo de procedimiento						
Mediación	47	95,9	94	96,9	115	95
Arbitraje	2	4,1	3	3,1	6	5
Resultado mediaciones						
Con acuerdo	12	25,5	34	36,2	30	26,1
Sin acuerdo	25	53,2	43	45,7	67	58,3
Otros (*)	10	21,3	17	18,1	18	15,7

(*) Archivadas (1998:3, 1999:4, 2000:6), Intentadas sin efecto (1998:7, 1999:13, 2000:11) y Pendientes (2000:1).
Fuente: SIMA.

Ante el SIMA pueden plantearse distintos tipos de conflictos: 1) los relativos a interpretación y aplicación, 2) los ocasionados por discrepancias surgidas durante la negociación de un convenio u otro acuerdo o pacto colectivo, 3) aquellos que dan lugar a la convocatoria de una huelga, o se suscitan en la determinación de los servicios de seguridad o mantenimiento, y 4) los derivados de discrepancias originadas en el periodo de consultas por traslados, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensiones o despidos colectivos. Pese a su diversidad, se confirma la primacía de los de interpretación y aplicación, que representan 85 conflictos y un porcentaje de un 70,2 por 100 de los casos, seguidos, en menor número, por los que dan lugar a la convocatoria de una huelga y sus servicios de seguridad y mantenimiento, con 33 procedimientos, esto es, un 27,3 por 100, 3 asuntos (2,5 por 100) referidos al bloqueo en la negociación colectiva, y la ausencia de procedimientos derivados de discrepancias surgidas en el periodo de consultas.

En relación al año 1999, en el año 2000 se aprecia un aumento de los conflictos que dan lugar a la convocatoria de una huelga, que

registran un porcentaje de un 27,3 por 100 frente al 18,6 del pasado año, y un descenso, de casi 10 puntos, en los de interpretación y aplicación, de manera que de un 79,4 por 100, en 1999, se registró un 70,2 por 100 en 2000.

Respecto a los ocasionados por bloqueo de la negociación colectiva, sus cifras son prácticamente idénticas, habiéndose planteado, únicamente, un conflicto más de este tipo (2 en 1999, 3 en 2000). Igualmente, sigue llamando la atención la nula incidencia de los motivados en periodos de consulta. La escasa eficacia del procedimiento para este tipo de conflictos podría explicarse por la circunstancia de que, en la mayoría de casos, ambos asuntos se terminan reconduciendo a la convocatoria de una huelga.

En términos de motivación, predominan los conflictos que encuentran su causa en problemas salariales (43 conflictos), seguidos por otros motivos, como los relativos a tiempo de trabajo (18) o contratación laboral (10). No obstante, se aprecia bien la posible concurrencia de diversas causas en un único procedimiento, bien otros conflictos que destacan por su singularidad, como los derivados de clasificación profesional, representación de trabajadores, y sucesión empresarial.

El ASEC establece el tratamiento de los conflictos en dos procedimientos: la mediación, en general, siempre que la solicite una de las partes, y el arbitraje cuando ambas lo requieren; por otra parte, contempla la intervención previa de la Comisión Paritaria para los conflictos laborales surgidos en la aplicación e interpretación del convenio colectivo, e, incluso, para evitar la duplicidad de trámites, la posibilidad de que la mediación se realice por esta Comisión. Configura, de este modo, un sistema no escalonado, que deja a la voluntad de las partes la elección del mecanismo al que someter el conflicto, como medio de fomentar el contacto entre sus implicados y promover la cultura de la negociación[140]. El procedimiento más acogido ha sido la mediación, que representa, en los tres años de actuación del SIMA, una media de un 95 por 100 de los casos, lo que tiene fiel reflejo en el año 2000, con el registro de 115 mediaciones (95 por 100) frente a 6 arbitrajes (5 por 100).

[140] Sala Franco, Tomás y Alfonso Mellado, Carlos L., *Los Acuerdos estatal y autonómicos sobre solución extrajudicial de conflictos laborales. Análisis comparativo*. CES, 2001.

Con relación al número de mediadores, el Acuerdo prevé, con carácter general, la actuación de dos mediadores por procedimiento, designados uno por cada parte, como ocurrió en el año 2000 con 82 conflictos. No obstante, las partes han optado por 1 mediador en 24 conflictos, por 3 mediadores en 3 conflictos, y por 4 mediadores en 6 conflictos.

Disminución de los conflictos concluidos con acuerdo

Del análisis de resultados de los procedimientos entablados resulta un importante descenso del número de acuerdos obtenidos. Así, mientras que en 1999 el acuerdo se alcanzó en un 36,2 por 100 de los casos, en 2000 la efectividad se reduce a un 26,1 por 100 de las mediaciones. En todo caso, son significativas algunas evidencias, apuntadas por la Fundación SIMA, de que, si bien no existen mecanismos de seguimiento de los conflictos que concluyen sin acuerdo, el acercamiento entre las partes a través de la actividad mediadora, facilita en ocasiones soluciones posteriores de la controversia, que evitan la vía judicial.

Nuevas adhesiones o ratificaciones

En último término, subrayar que, durante el año 2000, nuevos sectores se han adherido o ratificado al ASEC: Agencias de viajes, Cadenas de tiendas de conveniencia, Empresas concesionarias de cable de fibra óptica, Técnicos de producción audiovisual, y Regulación del establecimiento limitado de vehículos en la vía pública. De igual forma, se han dado nuevas incorporaciones de empresas. La implantación del ASEC ha seguido un importante proceso de adhesiones o ratificaciones desde su creación, situándose, en el año 2000, en un total de 80 sectores y 41 empresas adheridos, lo que representa una estimación de 5,6 millones de trabajadores y 550.000 empresas afectadas por este Acuerdo.

Renovación del ASEC: el Segundo Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos

Concluida la vigencia del ASEC, con fecha 31 de enero de 2001, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas han firmado el Segundo Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC II) y su Reglamento de Aplicación (RASEC II). Su entrada en vigor se ha producido el día siguiente de su publicación en el *BOE*[141], y se ha previsto que su vigencia se prolongue hasta el 31 de diciembre del año 2004.

[141] Resolución de fecha 2 de febrero de 2001 (*BOE* de 26 de febrero).

Perfección de cuestiones técnicas

El nuevo Acuerdo no crea un sistema diferente de solución de conflictos laborales al pactado en 1996 sino que, a raíz de la experiencia aplicativa acumulada, perfecciona algunas cuestiones técnicas y dispone que su objeto es el mantenimiento y desarrollo del sistema existente[142]. Bajo esta premisa incide, fundamentalmente, en tres aspectos:

— Ampliación del ámbito del ASEC II, con la inclusión de las controversias colectivas surgidas en el seno de las Comisiones Paritarias.

— Modificación de las condiciones previas para que se produzca la intervención ante el SIMA en caso de bloqueo en la negociación colectiva.

— Redefinición de diversos aspectos de la mediación, potenciando la figura del mediador o mediadores.

Sucesión temporal

La aprobación del ASEC II atiende a los problemas derivados de su sucesión temporal en relación con el anterior Acuerdo. De este modo, con el fin de evitar que la aplicación del ASEC II y su Reglamento exijan su ratificación o adhesión expresa, para lo que habría que esperar a la renegociación de los convenios colectivos adheridos al ASEC I, la disposición transitoria primera establece que el nuevo Acuerdo será aplicable a las empresas y sectores adheridos o incorporados al anterior Acuerdo a 31 de diciembre de 2000, salvo que, en el plazo de 3 meses desde la publicación en el BOE del ASEC II, manifiesten por escrito su decisión en contrario. Por su parte, mediante la disposición transitoria segunda**,** se dispone que las mediaciones y arbitrajes registrados en el SIMA con anterioridad a la publicación oficial del ASEC II, se tramitarán conforme al anterior Acuerdo.

El ASEC II es plenamente operativo desde el momento de su entrada en vigor, frente al anterior Acuerdo, cuya efectividad, conforme a la disposición final primera del ASEC I, se hacía depender de la puesta en funcionamiento del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). La gestión del Acuerdo y sus pro-

[142] Un análisis de las novedades del ASEC II se realiza en el *Observatorio de Relaciones Industriales* del CES, n.º 38, de marzo de 2001.

cedimientos se encomendó a la Fundación SIMA, cuya creación no tuvo lugar hasta el 14 de julio de 1997, y que inicia sus funciones el 16 de abril de 1998. La Fundación, de cuyo Patronato forman parte representantes de la Administración, y de las partes firmantes del Acuerdo, esto es de las organizaciones empresariales, y de las organizaciones sindicales, cuenta con una dotación presupuestaria pública, siendo los mecanismos y procedimientos que gestiona gratuitos para las partes en conflicto.

El ASEC II da continuidad a las funciones del Comité Paritario Interconfederal, formado por seis representantes empresariales y seis por la parte sindical, al que se atribuyen competencias para la interpretación, aplicación y seguimiento del nuevo Acuerdo y su Reglamento de aplicación, circunstancia esta última que no se contemplaba expresamente por el anterior Acuerdo.

Inclusión de las controversias colectivas originadas en las Comisiones Paritarias

Una de las novedades más relevantes de la nueva regulación es que se da cabida a la inclusión de las controversias colectivas surgidas por el bloqueo en la adopción de un acuerdo en el seno de las comisiones paritarias de los convenios colectivos, por diferencias en la interpretación y aplicación del convenio colectivo. Estas discrepancias, que no llegan, en ocasiones, a ser verdaderos conflictos, encuentran así un cauce específico de expresión en el ámbito del ASEC II. Está legitimada para instar la mediación en este tipo de conflictos la Comisión Paritaria en la que surja la controversia, siempre que actúe por acuerdo mayoritario de sus dos representaciones.

Modificación de los requisitos en los conflictos por bloqueo de negociación

Fruto igualmente de la experiencia, se modifica la anterior regulación de los conflictos surgidos por el bloqueo de la negociación de un convenio colectivo, acuerdo u otro pacto colectivo. A tal efecto, se cambia el requisito de espera al transcurso de seis meses desde el comienzo de la negociación, para poder acudir al SIMA, por un criterio mixto (temporal y subjetivo), en virtud del cual se puede solicitar la intervención de este Servicio bien tras cinco meses de bloqueo desde la constitución de la mesa negociadora, o bien, sin necesidad de tiempo mínimo alguno, cuando la intervención se interese por las dos partes de forma conjunta. Obedece este nuevo criterio a la voluntad de potenciar esta vía de solución, infrautilizada en el pasado, probablemente por la previsión estricta de los seis meses de espera, lo que abocaba, en ciertos casos, a la convocatoria de huelga.

Posición más activa del mediador

La confirmación de la mediación como el procedimiento más utilizado en el periodo 1998-2000, ha permitido extraer conclusiones diversas, de forma que el grueso de las novedades del ASEC II se refiere a este tipo de procedimientos, con el objeto de dotar al mediador de una posición más activa en la solución del conflicto y lograr un incremento del porcentaje de acuerdos, situado, en el referido periodo, en una media del 30 por 100.

Reflexión sobre modificaciones legislativas y conflictos individuales

Para consolidar el sistema de solución de conflictos laborales previsto por el ASEC II, sus firmantes entienden que la intensificación de estos procedimientos debe venir acompañada de diversas modificaciones legislativas[143], por lo que apuntan la constitución de un Grupo de Trabajo, encargado de desarrollar y formular propuestas al respecto. De igual forma, encargan a este Grupo abordar el tratamiento a otorgar a los conflictos individuales de trabajo.

Por último, cabe señalar que la presencia de la solución autónoma de los conflictos en las relaciones laborales dependerá no sólo de la plasmación práctica de los principios y novedades propuestas por el ASEC II, sino de diversos factores como la evolución de la conflictividad laboral, el diálogo social, y la adhesión o ratificación del Acuerdo por los sectores o empresas que aún no lo han hecho (sectores como Transporte, Banca, Cajas de Ahorro y Comunicación, o empresas de la envergadura de RENFE, Telefónica, Iberia, o TVE).

6.2.2. **Balance de los Acuerdos Autonómicos**

Creciente implantación de los sistemas autonómicos

Los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos laborales de ámbito autonómico, que han sido objeto de estudio en sucesivas ediciones de esta Memoria, muestran una implantación y un desarrollo desigual, dado que su progresiva puesta en funcionamiento da lugar a la acumulación de distintas experiencias aplica-

[143] En este mismo sentido, el Informe 2/1994, del Consejo Económico y Social, sobre Procedimientos autónomos de solución de los conflictos laborales, aprobado por el Pleno en sesión de 19 de octubre de 1994, ya señaló la necesidad de que «la ley prevea con mayor detalle, rigor y seguridad la eficacia jurídica de las soluciones alcanzadas en cualquiera de los procedimientos autónomos».

tivas de estos Acuerdos[144]. En todo caso, la potenciación que a través de los mismos se efectúa de la negociación colectiva redunda, en suma, en una reducción de la conflictividad individual.

En este sentido, en el año 2000 se analiza la gestión de 15 acuerdos autonómicos, habiéndose incorporado la actividad llevada a cabo por el Servicio Regional de Mediación y Arbitraje de Extremadura, y por el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León[145]. Por otra parte, se prevé que en el primer trimestre de 2001 comience a funcionar la Fundación de solución extrajudicial de conflictos laborales en Murcia, cuyo Acuerdo fue firmado en el mes de abril de 2000.

En este ejercicio se ha apreciado con carácter general un notable incremento del número de procedimientos tramitados ante los órganos gestores de los Acuerdos Autonómicos (cuadro II-66).

Incremento de un 37 por 100 en su actividad

Como circunstancia destacable, cabe apreciar que, por segundo año consecutivo, el volumen de asuntos gestionados por estos Acuerdos Autonómicos superó con creces los tramitados en las unidades administrativas de mediación, arbitraje y conciliación. Por otra parte, se observa, además, un considerable aumento de la conflictividad en la actividad que han desarrollado, de modo que frente a los 1.695 conflictos que estos organismos tramitaron en 1999, los 2.329 gestionados en el año 2000 representan un incremento porcentual de un 37 por 100.

Sin embargo, llama la atención el escaso uso que las partes en conflicto hacen del arbitraje, de forma que lejos de apreciar siquiera un mínimo aumento, los 56 arbitrajes llevados a cabo en el año 2000 representan una disminución de un 5,1 por 100 respecto al año 1999, en el que en la actividad de los 13 acuerdos analizados se registró un total de 59 arbitrajes.

[144] Interesante intercambio de experiencias tuvo lugar en La Rioja, en octubre de 1999, donde los representantes de estos Acuerdos Autonómicos llevaron a cabo unas jornadas de trabajo, en las que, entre otros temas de relevancia para estos organismos, se elaboraron una serie de conclusiones sobre los problemas aplicativos en el vigente ordenamiento jurídico respecto a la conciliación, mediación y arbitraje en temas laborales y reflexiones sobre posibles modificaciones del mismo.

[145] Este Organismo dio comienzo a su actividad en septiembre de 2000, con el fin de gestionar los procedimientos sometidos al ámbito del Acuerdo de Solución Autónoma de conflictos laborales en Castilla y León.

CUADRO II-66

ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000

Comunidad Autónoma	Número conflictos	Conciliación Mediación	Arbitraje	Trabajadores	Empresas
Andalucía (SERCLA)	488	486	2	242.436	28.146
Aragón (SAMA)	66	63	3	77.867	53
Baleares (TAMIB)	55	54	1	15.371	986
Canarias (TLC)	136	136	—	21.304	s.d.
Cantabria (ORECLA)	90	87	3	11.077	692
Castilla y León (SERLA)	21	21	—	13.516	228
C.-La Mancha (J.ARBITRAL)	120	118	2	43.188	2.123
Cataluña (TLC)	452	438	14	94.599	934
Comunidad Valenciana (TAL)	273	271	2	180.308	12.791
Extremadura (SERMAE)	37	36	1	3.349	109
Galicia (CRL-AGA)	15	11	4	13.045	1.454
Madrid (Instituto Laboral)	293	290	3	235.751	76.793
Navarra (TLN)	34	34	—	n.d.	n.d.
País Vasco (CRL-PRECO)	222	201	21	64.688	3.477
La Rioja (TLR)	27	27	—	2.295	27
Total	**2.329**	**2.273**	**56**	**1.018.794**	**127.813**

n.d.: no disponible.
Fuente: Elaboración propia, a partir de las estadísticas de los distintos órganos gestores.

Por Comunidades Autónomas destaca el considerable número de conflictos tramitados en Andalucía (488) y Cataluña (452), seguidas de Madrid (293), Comunidad Valenciana (273) y País Vasco (222).

En otro orden de cosas, en el análisis territorial se observan otros dos aspectos de gran relevancia para estos acuerdos interconfederales. En primer lugar, la asunción por determinados órganos autonómicos de competencias administrativas para la solución extrajudicial de conflictos, como es el caso de Cantabria, que ha visto duplicado en el año 2000 el volumen de asuntos tramitados en el año 1999; y, en segundo lugar, la inclusión en el ámbito objetivo de un importante número de Acuerdos de los conflictos individuales, lo que ha dado lugar a que en el año 2000 se hayan tramitado un importante número de conflictos de este tipo, pudiendo citar a Aragón (3.761), Navarra (2.923), Baleares (545), Cantabria (235), o Canarias (30).

Aumento de los conflictos resueltos

En atención a los resultados de las conciliaciones-mediaciones colectivas ante los órganos autónomos de solución extrajudicial de conflictos (cuadro II-67), en el año 2000 no sólo se aprecia un aumento de la actividad, sino que se observa una tendencia a un incremento progresivo en los conflictos finalizados con acuerdo entre las partes. Así, frente al 41 por 100 del año 1998, y el 49 por 100 de 1999, en el año 2000 se consiguió que un 51,3 por 100 de las conciliaciones y/o mediaciones tramitadas concluyesen con la avenencia de las partes.

Desde el punto de vista territorial, el porcentaje de efectividad señalado se traduce en que en 10 de los 15 Acuerdos en funcionamiento se haya alcanzado o superado el 50 por 100 de asuntos finalizados con acuerdo entre las partes. En este sentido, destacan País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Baleares con una efectividad en torno al 70 por 100 de conflictos finalizados con la avenencia de las partes.

CUADRO II-67

RESULTADOS DE LAS CONCILIACIONES-MEDIACIONES COLECTIVAS ANTE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS, 2000

Comunidad Autónoma	Con acuerdo		Sin acuerdo	Otras (1)
	Número	Porcentaje (2)		
Andalucía (SERCLA)	186	50,1	185	115
Aragón (SAMA)	34	55,7	27	2
Baleares (TAMIB)	30	69,7	13	12
Canarias (TLC)	33	36,6	57	46
Cantabria (ORECLA)	41	53,2	33	16
Castilla y León (SERLA)	11	73,3	2	4
Castilla-La Mancha (J. ARBITRAL)	59	57,8	43	16
Cataluña (TLC)	197	53,3	172	69
Comunidad Valenciana (TAL)	78	37,7	129	64
Extremadura (SERMAE)	17	70,8	7	12
Galicia (CRL-AGA)	1	50,0	1	9
Madrid (Instituto Laboral)	111	47,4	123	56
Navarra (TLN)	13	46,4	15	6
País Vasco (CRL-PRECO)	84	75,0	28	89
La Rioja (TLR)	6	23,0	20	1
Total	**901**	**51,3**	**855**	**517**

(1) Se incluyen: pendientes, desistidas, archivadas y sin efecto.
(2) Porcentaje obtenido sobre los expedientes que han tenido tramitación completa y efectiva.

Fuente: Elaboración propia, a partir de las estadísticas de los distintos órganos gestores.

Capítulo III

CALIDAD DE VIDA Y PROTECCIÓN SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN

Fiel a su vocación, el capítulo III que ahora comienza continúa el tratamiento dado en anteriores ediciones de la Memoria del CES a las grandes cuestiones que, como la educación, la sanidad, la vivienda y la Seguridad Social hoy denominamos calidad de vida. Prosigue asimismo el discurso de años anteriores en otros dos ámbitos que hoy están ya incuestionablemente ligados a ese bienestar, y expresan como pocos el concepto de desarrollo social: el consumo, no sólo en sus pautas o hábitos, sino como centro de organización y expresión de intereses ciudadanos; y el medio ambiente. En este último se recogerá además, como también es habitual, una cuestión destacable del año —y sin duda en 2000 tuvo un protagonismo sobresaliente— que excede con mucho el estricto ámbito de la preocupación por el entorno natural: el agua, cuyo proyecto de Plan Hidrológico Nacional mantuvo en primer plano la polémica sobre su reparto y eficiente aprovechamiento.

Entre las vertientes escogidas como manifestaciones expresivas de la calidad de vida de los españoles se incluyen, además, los rápidos cambios acaecidos —en sólo un año— en todo ese ámbito que ha dado en llamarse sociedad de la información, y cuya impronta disruptiva, que ya se deja sentir en todas las formas en que los ciudadanos viven y se relacionan, hace aumentar la preocupación y los esfuerzos aplicados en garantizar que todos puedan apro-

vechar sus oportunidades y en evitar algunos de los nuevos riesgos que está haciendo aparecer.

En todos los casos, el trabajo de estos aspectos de la calidad de vida se inicia con el tratamiento de los datos básicos disponibles, siempre que se ha podido actuales y con detalle para una doble comparación: la temporal, o evolutiva, y la territorial, u horizontal; ésta última tanto «hacia fuera», es decir, hacia la gran referencia que es la Unión Europea, como «hacia adentro», esto es, entre las distintas Comunidades Autónomas españolas. La abundante —aunque dispar— información que producen numerosos organismos obliga a una cuidadosa selección de los indicadores a estudiar, única forma de evitar un discurso cacofónico, pero obviamente limitadora de la multiplicidad de facetas que incorpora cada uno de los grandes ámbitos más arriba citados. Por ello, continúa la tradicional incorporación de anexos, en los que se recogen numerosos datos útiles para que cada lector complete a su gusto el repaso dado en el texto a esos ámbitos.

Respecto de cada tema ese tratamiento se enlaza con la identificación, en unos casos, de problemas; la constatación, en otros, de las mejoras producidas; y, en algunos más, el relato de las polémicas suscitadas y de las iniciativas públicas adoptadas para resolver los primeros o profundizar en las segundas. Pero no concluye aquí el trabajo realizado. Éste se enriquece, y en esta ocasión con más atención si cabe que en años anteriores, con la inclusión de la dimensión subjetiva, es decir, de resultados que hablan de las percepciones, hábitos y actitudes de los españoles ante los distintos temas tratados.

Tras el estudio, en los términos que se acaban de explicar, de la educación, la sanidad, la vivienda, el medio ambiente, el consumo y la sociedad de la información, la atención de este capítulo III se centra —como es ya asimismo tradicional en su estructura— en la protección social en sentido estricto, es decir, en el Sistema de Seguridad Social, que incluye su tercer pilar constitucional, la previsión social complementaria. Previo repaso de las grandes cifras sobre las que se sustenta la comparación de España con los países de la Unión Europea (desgraciadamente disponibles con casi tres años de retraso sobre el que centra esta Memoria), se aborda con cierto detalle la situación del Sistema en lo que más importa: la tendencia hacia la consecución de los objetivos básicos de su mejora, modernización y garantía de futuro.

Finalmente, como cuestión merecedora de especial atención en el panorama social español en 2000, el capítulo III aborda el tratamiento de la inmigración. Y no porque buena parte del año estuvo cargada de debates jurídico-políticos en esta materia a propósito de la promulgación —primero— y la reforma —después— de nueva legislación sobre la población extranjera, ni tampoco, mucho menos, por la desgraciada concurrencia de algunos acontecimientos luctuosos de gran repercusión pública —Lorca— con el estallido de episodios de violencia —El Ejido—, ni por el continuo goteo de noticias sobre pateras cuyos tripulantes no llegaron con bien a las costas españolas, sino porque las repercusiones del aumento de la inmigración se despliegan, para bien y para mal, en todos los ámbitos sociales.

De hecho, la inclusión de un apartado monográfico sobre la inmigración en esta edición de la Memoria no es sino una primera descripción abierta, prólogo de un proceso de estudio y debate de la cuestión en el seno del Consejo, que continuará en breve con la celebración de seminarios y jornadas (algunos ya programados en la fecha de escritura de estas páginas), para los que se quiere contar con un amplio elenco de reputados especialistas, y que proseguirá después en las formas que se vayan considerando más adecuadas.

Las líneas precedentes bastan para introducir los contenidos del capítulo III de la Memoria en esta edición, pero quizá resulten insuficientes para quienes busquen aquí, y nos consta que así sucede, un rápido resumen de los aspectos más destacados del panorama que se irá trazando en cada uno de sus apartados. Por esta razón, la presente introducción se cerrará con tal resumen, que atiende, más que lo anterior, al estricto orden de lo tratado en el texto.

Efectiva extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años

Los principales datos sobre el sistema educativo muestran el descenso del alumnado en la enseñanza no universitaria, en consonancia con la evolución demográfica española, en el primer año de la efectiva extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años. Ello es compatible con un ligero aumento de alumnado en educación infantil, que permitió elevar las tasas de escolaridad en esas edades, aunque siguen presentes, de forma preocupante, notables diferencias regionales.

Reformas legislativas en secundaria y en la FP: proyectos y avances

El replanteamiento de la comprensividad en el segundo ciclo de ESO, el establecimiento de nuevos itinerarios y la eliminación de la promoción casi automática de los alumnos son los debates clave del año 2000 en estos niveles del sistema educativo, que afectan al corazón de una LOGSE a punto de terminar su implantación. Algunos han impulsado, siquiera colateralmente, la adopción de reformas normativas, entre las que cabe destacar, por una parte, la ya efectuada sobre las enseñanzas mínimas en ESO y en bachillerato, que ha ampliado en una y otro la carga lectiva horaria de matemáticas y humanidades, y, por otra parte, el borrador para lo que será la primera Ley de formación profesional, que trata de mejorar la situación de ésta, integrando sus tres subsistemas y concluyendo el catálogo de cualificaciones y certificaciones profesionales, con el objetivo de remontar la situación actual, en la que claramente se aprecian importantes problemas y disfunciones, que han llevado tanto a un escaso interés de los jóvenes —y sus familias— en seguir este tipo de estudios como a una preocupante falta, en el panorama laboral español, de suficientes profesionales con este nivel de cualificación.

Debate para la reforma universitaria

Continúa en 2000 el debate sobre el sistema universitario y su adecuación al mercado laboral que culmina, ya en 2001, con la presentación de un texto borrador para una futura Ley de Universidades. El bajo rendimiento académico, la alta tasa de abandono, el elevado desempleo y la sobrecualificación en determinados puestos de trabajo siguen mostrando claras ineficacias y desajustes, que están en la base —junto con cuestiones organizativas y de personal— de ese debate. Los cambios en la selectividad y la introducción del «distrito abierto», que favorece la movilidad territorial de los estudiantes, son las novedades legislativas más destacables en este ámbito.

Nuevas fórmulas organizativas en el sistema sanitario público

En el plano organizativo, tras el controvertido debate que acompañó la aprobación de su reglamento de aplicación en el ámbito del Insalud a principios del año 2000, las fundaciones sanitarias han dejado de protagonizar el debate sobre la gestión sanitaria, al tiempo que van abriéndose paso otras fórmulas, como institutos clínicos o áreas funcionales. Por otra parte, se han adoptado nuevas medidas en el marco de la política de uso racional del medicamento y de racionalización del gasto farmacéutico, entre las que cabe mencionar el nuevo recorte del margen profesional de las oficinas de

farmacia, introduciendo al mismo tiempo la posibilidad de aplicar descuentos, y la puesta en marcha a finales de año del sistema de precios de referencia de los medicamentos. La desaceleración observada en el crecimiento del gasto en farmacia en el año 2000 permitiría hablar, por primera vez, de resultados de las medidas que desde hace años se han ido adoptando en este campo.

Las listas de espera en 2000

El problema de accesibilidad al sistema que representan las listas de espera se ha seguido manifestando en toda su gravedad en el año 2000. Es evidente que la solución a esta cuestión reviste mayor complejidad que la habitual puesta en marcha de respuestas coyunturales ante incidentes ocasionales. Requiere un enfoque integral en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), que aborde los factores que subyacen al mismo. Por ello, merece la pena destacar que, en el año 2000, el Consejo Interterritorial del SNS abordó en profundidad esta temática, aprobando la adopción de una serie de actuaciones inmediatas, otras que deberían ser abordadas a medio plazo y un seguimiento permanente del problema a cargo de un grupo de trabajo específico.

Preparando la plena descentralización: políticas de coordinación

Por último, cabe recordar que el sistema sanitario público se encuentra en los momentos previos a la plena descentralización, estando prevista para el año 2002 la culminación de las transferencias a las diez Comunidades Autónomas que componen hoy el «territorio Insalud». Se trata de un momento clave para vertebrar la coordinación del futuro SNS, en la que desempeñará un papel importante el Consejo Interterritorial, y su Comité Consultivo. En este marco deberán resolverse importantes cuestiones derivadas de la ausencia de homogeneidad que caracteriza al SNS en diversas vertientes, entre ellas, la inexistencia de un sistema oficial de acreditación y evaluación de centros y servicios, la necesidad de mejorar la información y la comparabilidad de los indicadores de actividad, gestión y gasto de los distintos Servicios de Salud, así como la falta de criterios de coordinación en el área de salud pública.

Empeoramiento de la accesibilidad a la vivienda

En materia de vivienda, el balance del año 2000 arroja, por un lado, cierta ralentización en el aumento de la oferta inmobiliaria y, por otro, una clara moderación en el impulso de la demanda, provocada fundamentalmente por la elevación de los precios, el crecimiento moderado de los tipos de interés y la disminución en la capacidad de endeudamiento de las familias. Consecuencia de ello es el empeoramiento en la accesibilidad a la misma en toda España,

llegando a alcanzar el esfuerzo sobre la renta neta dedicada para acceder a una vivienda de tipo medio un 50 por 100 de la renta anual total de las familias en algunas Comunidades Autónomas.

Bajo grado de cumplimiento del Plan de Vivienda: el problema de la VPO

El Plan de Vivienda logró un 74 por 100 de las actuaciones previstas, pero sólo ejecutó en un 48,6 por 100 el volumen de financiación presupuestado. El resultado fue, además, peor en la vivienda de protección oficial, donde el grado de ejecución fue un 46,5 por 100. En una situación en la que el 60 por 100 de la población es demandante de este tipo de vivienda, era de esperar que surgiera, y así ocurrió en 2000, un vivo debate sobre este problema. Su consecuencia, tal como se reclamaba desde varios sectores, fue la modificación del Plan de Vivienda 1998-2001, al objeto de aumentar en un 2 por 100 el precio básico a nivel nacional del módulo de VPO, además de aumentar hasta un 25 por 100 el margen de aumento de este precio por las Comunidades Autónomas, y establecer nuevas ayudas a la vivienda y al suelo, entre ellas la denominada ayuda directa a la entrada.

Plan Hidrológico Nacional: la polémica del reparto del agua

En el aspecto del medio ambiente el año vino cargado de noticias, como la conclusión del proceso por el vertido de Aznalcóllar, la aprobación del Plan Nacional de Residuos Urbanos, y la presentación del Plan de Fomento de Energías Renovables —ambos para el periodo 2000-2006—. Continuaron además los debates sobre grandes cuestiones de fondo, de las que da buena cuenta la situación del Protocolo de Kioto en relación al cambio climático, y se intensificaron los centrados en los *transgénicos*, u organismos modificados genéticamente.

Pero sin duda el evento más importante del año fue la aprobación, en febrero, del Plan Hidrológico Nacional, que se remitió posteriormente a las Cortes para su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley. Nuclea el texto remitido la transferencia de recursos hidráulicos, en un volumen total anual de algo más de 1.000 hectómetros cúbicos, desde la cuenca del Ebro a las del Segura, Júcar, Sur e internas de Cataluña.

Estas transferencias sólo podrán efectuarse si se cumplen varios requisitos de caudal mínimo y no desembalsamiento —salvo tres excepciones— en la cuenca cedente, y siempre sujetas en las cuencas receptoras a una serie tasada de usos y destinos que se especi-

fican en el propio Plan. Sin embargo, como en todo problema de reparto —aunque incluya medidas para un uso más eficiente, para un mayor ahorro del recurso, para la preservación de los caudales mínimos ambientales en las cuencas cedentes, y para la compensación económica por la cesión de un recurso que es riqueza— la polémica era inevitable. Y lo que ha parecido más oportuno es exponer brevemente los contenidos del Plan presentado, sin pronunciarse acerca del mismo. Tiempo habrá, en su caso, de proceder a tal valoración, precisamente sobre esos puntos que se acaban de citar, pues se trata de un proyecto de largo alcance.

Un patrón europeo de consumo

La distribución del gasto en consumo de los hogares españoles responde ya claramente al modelo maduro vigente en Europa Occidental, y se manifiesta en un menor peso de los elementos relacionados con las necesidades básicas y un aumento de la proporción de gasto en partidas como la comunicación, los transportes y la cultura. El gasto en alimentación se ha reducido en el último decenio hasta el 20 por 100 del presupuesto anual de los hogares; al tiempo, el capítulo del transporte —individual y colectivo— ha pasado a ocupar un lugar preponderante en la atribución de recursos familiares, habiendo alcanzado el 12 por 100 del total de gasto, lo que ilustra también el alcance y repercusiones del crecimiento urbano, y las nuevas formas de poblamiento en las grandes ciudades, mucho más centrífugas en áreas residenciales que en las de negocios, trabajo y ocio. Otras partidas con mayor representación hoy en el total de gastos son las constituidas por los bienes y servicios relacionados con el ocio y la cultura y las comunicaciones. El mayor gasto sigue reservado a la vivienda, un 35 por 100 del total.

En este contexto, la evolución de las manifestaciones culturales del consumo se ha materializado de forma patente en un nuevo aumento de las consultas y reclamaciones formuladas por los consumidores, un 9 por 100 más que en 1999. La información recogida en las asociaciones revela, además, un mayor volumen de quejas en los sectores de mayor importancia cualitativa y cuantitativa.

Aumento del comercio electrónico

En el ámbito del consumo, por otra parte, cabe destacar algunos resultados de lo que es novedad en el tratamiento de este apartado, las transacciones electrónicas. Éstas no sólo constituyen una interesante modalidad de comercio a distancia, cuyo medio característico es Internet, sino que expresan el alcance actual de esa sociedad

de la información hacia la que parecen encaminarse todos los países avanzados. Su práctica se encuentra menos extendida en España que en otros países de la Unión Europea: en 2000, un 18 por 100 de los usuarios españoles de Internet habría comprado en la red, frente a casi un 31 por 100 de los internautas europeos, cifra que se eleva hasta el 40 por 100 en los escandinavos y británicos. Pero el aumento que ha experimentado en España en el último año pone de manifiesto una fuerte tendencia al crecimiento, que empieza además a contar con apoyo institucional.

Reacción del consumo: crisis de las «vacas locas»

Tras la aparición, ya en los últimos meses de 2000, de los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en Europa, el agravamiento de la crisis abierta por la desfavorable evolución posterior —en la que cabe incluir no sólo la aparición de sucesivos casos en España, sino la difusión de problemas tales como qué hacer con la enorme cantidad de «materiales», ahora de riesgo— ha tenido notables consecuencias en el consumo ciudadano. La pérdida de confianza, que en España se ha manifestado especialmente en los primeros meses de 2001, resulta ser un extremo en una distribución polar de actitudes: casi la mitad de los españoles (48,4 por 100) manifestaba mucha o bastante preocupación por el problema de las «vacas locas»; la otra mitad decía sentir una preocupación moderada o nula. En buena lógica, uno de cada dos ciudadanos declaraba haber reducido su consumo de carne de vacuno. Y así, aunque quizá excediendo el horizonte temporal de esta edición de la Memoria, se ha dado cuenta de las principales medidas adoptadas, en el último tramo de 2000 y en los primeros meses de 2001, para atajar el problema sanitario y para remontar esa crisis de confianza: test generalizados; sacrificio de animales y destrucción controlada de restos; prohibición temporal de las harinas de carne y hueso en la alimentación de animales; control laboratorial de la EEB; medidas de intervención de los mercados.

Avances en el desarrollo de la sociedad de la información

En el tratamiento de la sociedad de la información se da cuenta de la posición, todavía retrasada, de España en comparación con los grandes países de la Unión Europea. Se analizan, además, algunos de los problemas identificados como mayores obstáculos para su adecuado desarrollo, como son los relacionados con la seguridad en la red. Pese al largo camino aún por recorrer, queda de manifiesto el avance obtenido en 2000, medido en función del crecimiento del número de usuarios de Internet en el año (un 94 por

100, lo que se traduce en unos 4,6 millones de usuarios, es decir, el 14 por 100 de la población), o en la tasa de penetración de la telefonía móvil, donde se contabilizaban en septiembre de 2000 unos 23 millones de usuarios, casi el 60 por 100 de la población española.

Polémica adjudicación de licencias UMTS

Para la puesta en marcha de la sociedad de la información ha sido necesaria la adopción, por parte de las distintas administraciones públicas, españolas y europeas, de una serie de estrategias orientadas a la liberalización de las telecomunicaciones, el fomento del acceso a las nuevas tecnologías o el establecimiento de un adecuado marco regulador que aporte seguridad y mejore la prestación de servicios. Es casi imposible relatar todas ellas de forma más resumida que como se llevará a cabo en el apartado correspondiente, por lo que se ha desistido del intento en esta introducción. No obstante, parece oportuno recordar que 2000 fue el año de la concesión de licencias en la telefonía móvil de tercera generación, o UMTS, que se produjo en España (como en Francia y Suecia) mediante la aplicación de un sistema mixto, entre el concurso por el que se optó en algunos países y la subasta que escogieron otros. El tiempo transcurrido ha permitido abordar esta cuestión sin el ruido de las cifras astronómicas que se alcanzaron en las primeras subastas, para centrarla en uno de sus aspectos clave: una parte suficiente de la recaudación que se obtenga con la tasa por la utilización del espacio radioeléctrico español, que es actualmente la tercera más elevada de Europa (361 euros/habitante), debería destinarse a financiar infraestructuras que garanticen la difusión de los servicios avanzados de telecomunicaciones y cubran las necesidades de formación, investigación y desarrollo.

Superávit financiero de la Seguridad Social en 2000 y nueva dotación al Fondo de Reserva

Como antes se dijo, la consecución de los objetivos básicos de mejora, modernización y garantía de futuro de la protección social requiere un sistema de Seguridad Social cada vez más saneado y estable. Pues bien, en 2000 se ha logrado un superávit del orden del 0,5 por 100 del PIB, no teniendo que acudir a préstamos del Estado como ocurrió en otros años. Precisamente hay que insistir, como ya se hizo en otras ocasiones, en la necesidad de decidir cuanto antes si se habrán de devolver o no tales préstamos y, en su caso, en qué condiciones se efectuarán las devoluciones. Dentro de este análisis, por otra parte, cabe destacar la dotación por 91.000 millones de pesetas (que se añaden a los 100.000 mi-

llones ya materializados de su anterior dotación) al Fondo de Reserva, instrumento creado a partir del Pacto de Toledo con la finalidad, como es sabido, de atender necesidades futuras del sistema de pensiones.

Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de la Seguridad Social

Precisamente este Fondo ha sido uno de los puntos del Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de la Seguridad Social, alcanzado el 9 de abril de 2001 entre el Gobierno, CEOE-CEPYME y CCOO. El Acuerdo, objeto de análisis en un epígrafe específico de la Memoria, incluye una serie de medidas que encaran diversas cuestiones. Algunas habían quedado pendientes para el diálogo social —como es el caso del encuadramiento definitivo de los complementos a mínimos de pensiones y la culminación del proceso de separación de recursos de la Seguridad Social— y otras venían siendo objeto de reiterado planteamiento por parte de los interlocutores sociales —como la jubilación anticipada voluntaria y la reducción de las cotizaciones—. El sindicato UGT decidió no suscribir el Acuerdo, por entender que no recogía aspectos fundamentales de la propuesta sindical, referidos a las necesidades más urgentes de cobertura de la protección social, ni aseguraba la viabilidad futura del sistema de pensiones.

Nuevo aplazamiento del compromiso de exteriorización de los planes de pensiones

El análisis de la protección social termina con la consideración, como en otros años, de la previsión social complementaria, contemplando el nuevo aplazamiento del compromiso de exteriorización solicitado por los interlocutores sociales y que ha quedado prorrogado hasta el 16 de noviembre de 2002, el alcance de los compromisos de prestaciones sociales en los convenios, y la evolución de los planes de pensiones. Se analiza en este epígrafe el contrato de seguro colectivo de vida como segundo instrumento para la exteriorización de las pensiones y el papel de las mutualidades de previsión social, destacando, en lo que se refiere a éstas, la pervivencia de ciertas deficiencias de carácter técnico-legislativo que se manifiestan de modo evidente en el terreno fiscal.

Hacia una política europea de inmigración

El último apartado de este capítulo III describe, como se explicó al principio, las principales facetas que muestra, hoy por hoy, el fenómeno de la inmigración. Un fenómeno que desborda los límites de su marco regulador y que ha llevado a la Unión

Europea en el año 2000 a plantearse la necesidad de sentar las bases de una política comunitaria e integral de migración. Las repercusiones del aumento de la inmigración se despliegan en todos los órdenes: social, económico, cultural y, especialmente, en el ámbito laboral. Y aunque su dimensión no haya alcanzado en España la que ya presenta en otros países de nuestro entorno, características propias del proceso español, cuales son su progresión crecientemente acelerada en muy pocos años, su marcada concentración regional y local, la carencia de experiencia anterior como país receptor y su propia posición como frontera de Europa, inducen a considerarlo uno de los principales retos a abordar en el futuro inmediato.

Inmigración y mercado de trabajo

Es evidente que el trabajo es uno de los principales alicientes que mueven a la inmigración. Al mismo tiempo, es el puente imprescindible para la regularización y la integración social de los extranjeros. Dos principios rigen la política laboral española en este ámbito: preferencia de mano de obra nacional, en función de la situación nacional de empleo —cuya principal expresión es la determinación anual del contingente de extranjeros—; y regularización de la situación laboral en el país de origen. Hasta el momento, estos dos principios no han podido garantizar una adecuada canalización de los flujos migratorios; ha ido en aumento, por el contrario, la población extranjera en situación jurídicamente irregular. La respuesta que se ha dado ha sido de dos tipos, ambos de carácter coyuntural: la convocatoria de sucesivos procesos de regularización extraordinaria y la conversión del contingente anual, en la práctica, en una regularización anual encubierta, dado su aprovechamiento por personas que ya se hallaban en España en situación irregular. Las solicitudes presentadas ante la regularización extraordinaria celebrada en el año 2000 ascendieron nada menos que a 246.089, lo que evidencia las dimensiones adquiridas por el colectivo de extranjeros en situación irregular en aquel momento.

Unido a lo anterior, el procedimiento administrativo de tramitación de los permisos de residencia y trabajo reviste una complejidad y una lentitud que dificultan enormemente la contratación de extranjeros extracomunitarios. Y sin embargo, existen dificultades evidentes para reclutar mano de obra en determinadas épo-

cas, sectores u ocupaciones. Por ello, como ya apuntaba el CES en su Informe 1/2000 sobre la movilidad geográfica, es preciso mejorar la conexión entre la oferta y la demanda, desde el punto de vista de las necesidades reales de los sectores y de las posibilidades de respuesta a las mismas mediante una intermediación regularizada del trabajo de los inmigrantes. En este sentido, cabe destacar la puesta en marcha a partir del año 2000 de experiencias innovadoras —como la firma de convenios de colaboración con algunos de los principales países de origen (Ecuador, Marruecos, Polonia, Colombia)— que, de articularse adecuadamente, podrían constituir una alternativa más racional para la ordenación de las migraciones.

Reforma de la Ley de Extranjería y política de integración

Independientemente de la controversia suscitada en su proceso de elaboración, en el balance de la reforma de la legislación de extranjería llevada a cabo en el año 2000 cabe subrayar la asunción, por vez primera, de la inmigración como fenómeno permanente y global. Destacan asimismo, como novedades más positivas, la introducción de una auténtica «declaración de derechos» de los extranjeros —incluyendo la educación obligatoria y la asistencia sanitaria—, así como la residencia permanente tras cinco años y el derecho a la reagrupación familiar. Los aspectos que han sido objeto de mayor crítica han sido la regulación del procedimiento de expulsión y el no reconocimiento de los derechos de reunión, manifestación y asociación, sindicación y huelga. La importancia del futuro desarrollo reglamentario es clave para articular mejoras de la Ley, especialmente desde el punto de vista de la necesaria agilización de los procesos administrativos.

Con todo, el verdadero reto en materia de inmigración lo plantea la perspectiva de una sociedad cada vez más multicultural y la consiguiente necesidad de articular respuestas en el marco de una política integral de inmigración, que favorezca la plena integración en el trabajo y en la convivencia diaria a personas y grupos de costumbres diferentes, que necesitan viviendas, servicios sociales, espacios de expresión, educación, etc. A esta necesidad se ha querido responder con la reciente aprobación del Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración (Programa GRECO).

2. CALIDAD DE VIDA

2.1. Educación

En el curso 1999/2000 finalizó la ampliación de la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años, siguiendo la última fase de implantación del nuevo sistema educativo. De acuerdo con el calendario de aplicación de la LOGSE, se implantó el 4º curso de ESO y dejó de impartirse 2.º de BUP y 2.º de FP de primer grado.

Pero se plantean ya nuevas reformas, que previsiblemente cambiarán sustancialmente el sistema educativo, los principios y objetivos de la legislación en vigor, y, en definitiva, el modelo que propugnaba la LOGSE. Entre otros, cabe destacar los borradores (uno en discusión en el seno del Consejo de FP, y el otro en el de Universidades) para una ley de formación profesional y para una nueva ley de universidades, así como el anuncio de una ley de calidad de la educación, que afectaría a las tres grandes leyes hoy en vigor en este ámbito. A ello se añade la aparición, a finales de 2000, de dos decretos que han venido a regular las enseñanzas mínimas en la ESO y en el bachillerato.

El presente epígrafe dará cuenta, al hilo de los principales datos sobre el sistema educativo en 2000, de los debates que están animando todas esas reformas, las ya emprendidas y las anunciadas. Se tratará asimismo, como es habitual en la Memoria del CES, un desarrollo específico del problema del acceso al empleo desde el sistema educativo, con especial atención a la situación de la formación profesional. Y se abordará además, por primera vez, el creciente impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (o mejor, de la denominada sociedad de la información) en el ámbito educativo, dando cuenta de las principales iniciativas en marcha. Todo ello teniendo bien presente, por otra parte, que el proceso de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas está casi concluido, lo que hace imprescindible un cambio de perspectiva en el análisis de los problemas y en la evaluación de los resultados. La función de las Comunidades Autónomas es ya una pieza básica en uno y otro, y la de la Administración Central ha cambiado, a tal punto que, desde ahora, su responsabilidad primordial —tan importante en todo caso como en el esquema anterior— será la de dotar a todo el sistema de suficiente

cohesión. Para la necesaria coordinación que tal objetivo requiere será determinante, en el futuro, el papel de la Conferencia Sectorial de Educación[1].

2.1.1. **Enseñanza no universitaria**

En el curso 1999-2000, como consecuencia del descenso de la natalidad en los últimos años, el número de alumnos matriculados en enseñanza no universitaria siguió disminuyendo (cuadro III-1). Sin embargo, las tasas de escolaridad volvieron a aumentar, debido a la creciente escolarización infantil y la extensión de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años establecida en la LOGSE. Paralelamente, el profesorado se incrementó en un 3 por 100, probablemente por la progresiva adecuación al límite máximo de alumnos por aula en las diferentes enseñanzas que estableció la LOGSE.

En consonancia con sus volúmenes demográficos, Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades con mayor número de estudiantes no universitarios. En el curso 1999/2000, agruparon a más de la mitad (57 por 100) de los estudiantes. Dos de cada tres de éstos (68,3 por 100) cursaban sus estudios, en ese año lectivo, en centros públicos, aunque era patente el mayor peso de la enseñanza pública en Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Andalucía, en los tres casos por encima de la media nacional, y el menor en el País Vasco, Cataluña, Madrid y Baleares.

Ligero aumento en educación infantil

El número de alumnos en educación infantil registró un ligero aumento (0,2 por 100) en el curso 1999/2000. En todo caso, ese crecimiento fue el menor de los últimos años, y no sólo por razones demográficas: aún no se ha alcanzado la escolarización total en niños de tres a cinco años, y la tasa de escolaridad en esas edades fue un 91 por 100, apenas 2 décimas superior a la del curso anterior. El 72 por 100 de los centros que impartieron educación infantil eran de titularidad pública, y en ellos estaba matriculado el 67 por 100 del alumnado. Apenas se redujo el número medio de alumnos por unidad en el total nacional, siendo las mayores ratios las de la Comunidad

[1] Reúne a los Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas, y está presidida por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Su reglamento de funcionamiento fue aprobado en el Pleno de la Conferencia de 22 de julio de 1999.

CUADRO III-1
ALUMNADO POR NIVELES DE ENSEÑANZA, 1995/1996-1999/2000

Nivel de enseñanza	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999 (1)	1999-2000 (2)
Preescolar/infantil	1.096.677	1.115.244	1.122.740	1.128.864	1.131.044
EGB/primaria	3.849.991	3.137.278	2.615.467	2.562.785	2.526.565
EEMM/educación secundaria (general)	1.858.482	2.443.343	2.838.238	2.820.145	2.771.914
BUP y COU	1.259.778	1.080.784	880.268	533.227	282.170
Bachillerato experimental	31.920	27.257	12.344	693	0
Educación secundaria obligatoria	457.386	1.181.466	1.686.652	1.890.008	2.005.484
Bachillerato LOGSE	109.398	153.836	258.974	396.217	484.260
EEMM/educación secundaria (profesional)	774.126	704.556	635.116	524.695	453.870
FP I	301.472	232.113	169.340	69.540	0
FP II	410.912	369.369	310.110	225.083	147.094
Módulos profesionales II	29.457	48.609	75.766	119.556	158.337
Módulos profesionales III	32.285	54.465	79.900	110.516	148.439
Educación especial	30.043	28.536	28.437	27.029	27.160
Programas de garantía social	13.996	17.229	24.273	30.192	35.075
Total	**7.623.315**	**7.446.186**	**7.264.271**	**7.093.710**	**6.945.628**

(1) Datos provisionales.
(2) Datos avance.

Fuente: MEC, *Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Series e indicadores 1990/1991 a 1999/2000.*

Valenciana y Andalucía. Por otra parte, mientras en Navarra, el País Vasco y La Rioja la tasa neta de escolarización de niños de 3 a 5 años fue del 100 por 100, en otras comunidades fue notablemente más baja, sobre todo en Andalucía (donde fue un 79 por 100). Es preocupante, además, que en seis Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, y Galicia) dicha tasa fuera más baja que en el año anterior.

Precisamente sobre el problema de la educación infantil, el Consejo Escolar del Estado, en su *Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo en el curso 1998/1999*, entendía que el primer ciclo de este nivel debería ser asumido por las administraciones educativas, como ocurre con los demás. Se reafirmaba, además, en sus anteriores recomendaciones sobre la extensión de la oferta y para la cohesión de los dos ciclos de educación infantil, y hacía especial hincapié en la necesidad de que el acceso a este nivel no se convierta en un elemento de desigualdad

en el sistema educativo, perspectiva desde la que había de abordarse la cuestión de su financiación. Consideraba, para ello, que la concertación del segundo ciclo de educación infantil era un mecanismo que, además de facilitar la escolarización total en este nivel contribuyendo al tratamiento de necesidades educativas especiales y corrigiendo situaciones socioeconómicas desfavorables, garantizaría la gratuidad de las enseñanzas, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la inclusión de esta oferta educativa en la red de centros sostenidos con fondos públicos.

Nuevo retroceso en el número de alumnos en educación primaria

La educación primaria, por su parte, agrupó a algo más de dos millones y medio de alumnos en el curso 1999/2000, registrando un nuevo descenso, en esta ocasión de un 1,4 por 100 respecto del curso anterior. Al igual que en educación infantil, tres cuartas partes de los centros que impartían este nivel de enseñanza eran de titularidad pública, aunque esa proporción era, atendiendo al número de niños, un 67 por 100. La reducción del alumnado volvió a explicar, en primer término, el descenso en el número de estudiantes por unidad escolar (cuadro III-2), pero hay que subrayar que los centros públicos de Ceuta y Melilla, y los privados de Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Extremadura superaron la ratio de 25 alumnos por unidad, máximo establecido para este nivel en la LOGSE.

CUADRO III-2

NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR UNIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL/PREESCOLAR Y EDUCACIÓN PRIMARIA/EGB, 1995/1996-1999/2000

Nivel educativo	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
Infantil/preescolar					
Todos los centros	21,2	21,0	20,6	20,1	19,9
Centros públicos	20,6	20,5	20,1	19,6	19,4
Centros privados	22,4	22,1	21,6	21,3	21,0
Primaria/EGB					
Todos los centros	23,4	22,6	21,6	21,3	21,2
Centros públicos	21,7	20,9	20,0	19,9	19,8
Centros privados	27,6	26,7	25,4	24,9	24,6
Secundaria obligatoria					
Todos los centros	28,3	27,5	27,0	26,1	26,2
Centros públicos	27,7	26,8	26,2	25,6	25,0
Centros privados	31,2	30,0	29,5	28,8	28,4

Fuente: MEC, *Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Series e Indicadores 1990/1991 a 1999/2000.*

Evaluación de la educación primaria

La reciente difusión de los resultados del *Estudio de Evaluación de la Educación Primaria 1999*, llevada a cabo por las administraciones educativas y el INCE, permite, en esta ocasión, completar el panorama de este nivel educativo con algunos datos interesantes sobre los progresos de los alumnos desde 1995, año en el que se efectuó la anterior evaluación. Los datos apuntan que las matemáticas siguen siendo el punto débil de los escolares, pero en sólo cuatro años se aprecia un significativo avance en esta materia. En lengua y literatura el avance es mucho menor, y en la asignatura de conocimiento del medio (antes ciencias sociales y naturales) obtienen unos resultados similares.

El estudio incluye además múltiples aspectos de interés sobre el perfil y actitudes del alumnado y sus familias, e información relevante sobre la organización y funcionamiento de los centros. Abordar siquiera una síntesis de todos estos aspectos, de contrastada importancia a la hora de explicar el desempeño y rendimiento escolar de los alumnos, excedería con mucho el propósito de este apartado, pero su indudable interés ha movido a recoger, en el Anexo III-1.1, varias tablas con los datos más significativos. No obstante, quizá merezca la pena destacar aquí que el 77 por 100 de las familias quería que sus hijos estudiaran una carrera universitaria, y que un 92 por 100 de ellas declararon estar muy o bastante satisfechas con los profesores de sus hijos.

Concluyó la implantación de la ESO

Como se dijo al inicio de este epígrafe, en el curso 1999/2000 se implantó con carácter general el cuarto curso de la ESO, de manera que concluyó la extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Así, el número de alumnos en los dos ciclos de la ESO fue, en ese curso, algo más de un 6 por 100 mayor que en el anterior, mientras que se redujo a casi la mitad, por la desaparición del 2.º de BUP, el volumen de alumnos en los cursos del anterior sistema.

De acuerdo con el informe del Consejo Escolar del Estado que antes se citó, persisten en la ESO problemas de dotación, así como algunos otros —quizá más preocupantes— cuyo origen podría estar en la propia concepción de la LOGSE.

Entre los primeros, resulta incomprensible que, dos años después de terminada la implantación del primer ciclo, numerosos alumnos continúen en centros de primaria, que carecen de los recursos humanos, materiales, pedagógicos y organizativos imprescindibles para garantizar la calidad de la etapa secundaria.

Respecto a los segundos, el informe sugiere el replanteamiento de la comprensividad en el segundo ciclo de la ESO, el establecimiento de itinerarios y la eliminación del principio de promoción casi automática del alumnado. Parte de las razones que llevaron a formular tales recomendaciones están en el origen de las iniciativas adoptadas para la reforma de los contenidos de las enseñanzas en la ESO —y también en el bachillerato— que después se tratarán, y explican la apertura de un intenso debate social sobre el modelo educativo. A este debate ha contribuido, sin duda, la difusión de los resultados del *Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria 2000*, efectuado, como el que se citó sobre la primaria, por las administraciones educativas y el INCE (Anexo III-1.1).

Esfuerzo en la implantación del bachillerato tecnológico y el de las artes

Entrando ya en el siguiente nivel educativo dentro de la enseñanza no universitaria, esto es, en el bachillerato, hay que recordar primeramente que en el curso 1999/2000, como consecuencia del calendario de aplicación de la LOGSE, aún coexistieron distintos planes de estudio. Por una parte, BUP y COU, con algo más de 280.000 alumnos; por otra, las distintas modalidades del denominado bachillerato LOGSE, que agrupó a cerca de 485.000. No se dispone aún de datos sobre el número medio de alumnos por grupo en el último curso, pero a tenor de lo que advertía el Consejo Escolar del Estado en el antedicho informe, correspondiente al curso 1998/1999, los institutos públicos tendrían grupos más numerosos que los centros privados, circunstancia que difícilmente dejará de repercutir en una menor capacidad de los primeros para prestar a los alumnos la debida atención. Por otro lado, es preciso reiterar, siguiendo también al Consejo Escolar, que se debería realizar un mayor esfuerzo en la implantación del bachillerato tecnológico y el de artes, para garantizar una oferta que permita la opción real del alumnado dentro de su entorno geográfico más inmediato.

Descenso de alumnos en formación profesional

Por lo que respecta al subsistema de formación profesional reglada, en el curso 1999/2000 se produjo un nuevo descenso en su número de alumnos, en esta ocasión del 13,5 por 100. La evolución descendente de la población escolar, la implantación del segundo ciclo de la ESO (que afecta necesariamente al ámbito de edad de un sector de alumnos de FP), y la menor duración de los nuevos ciclos formativos respecto a la antigua FP explican esta trayectoria, pero también hay otros factores tanto o más importantes que están contribuyendo a ella, como es la falta de aprecio de esta

modalidad educativa por parte de la sociedad, a pesar de las posibilidades de incorporación laboral que ofrece.

Quizá por ello el informe del Consejo Escolar del Estado instaba a las administraciones educativas competentes a que revisaran con periodicidad los currículos de los ciclos formativos, así como a que ampliasen la oferta de las distintas familias profesionales (ajustándose a lo previsto en el artículo 34.1 de la LOGSE). Llamaba asimismo la atención sobre la débil implantación de la FP de grado medio y superior, y destacaba la importancia de la formación en los propios centros de trabajo en la preparación de los alumnos. Para facilitar esta última, proponía intensificar la colaboración de las administraciones educativas con las empresas, y mejorar la orientación, diseño y coordinación de las prácticas laborales en FP. Todas estas cuestiones se tratarán más adelante, en el apartado correspondiente a educación y acceso al empleo.

Baja escolarización en educación especial

El número de alumnos de educación especial, finalmente, se situó en algo más de 27.000, cifra casi igual que la del curso anterior. De ellos, sólo el 50,4 por 100 estaba escolarizado en centros públicos, porcentaje mucho más bajo que el que se citó para los otros ámbitos de la educación no universitaria. A esta menor presencia de la iniciativa pública se añade un importante desequilibrio en las políticas de integración entre los distintos tipos de centros, pues mientras en los centros específicos son mayoría los privados (60,1 por 100), de cada diez aulas que integran alumnos de educación especial, nueve son públicas.

La desescolarización de este tipo de alumnado hace preciso acometer un seguimiento especial, para lo que habría que mejorar la coordinación entre centros de primaria y de secundaria, ajustar el número y características de los especialistas respecto de las verdaderas necesidades de estos centros, aumentar la dotación de infraestructuras y reforzar los equipos de orientación. El reiteradamente citado informe del Consejo Escolar del Estado observaba con preocupación esta falta de coordinación entre las diferentes administraciones (en los ámbitos de educación, sanidad, trabajo y asuntos sociales), y recomendaba, para superarla, crear una comisión intersectorial específica para educación especial.

2.1.2. **Reforma de las enseñanzas mínimas en ESO y en bachillerato**

El debate social abierto en torno al reforzamiento en la enseñanza de las humanidades que antes se citó; los resultados del programa europeo Eurydice, que pusieron de manifiesto que España estaba en el último lugar en las cargas horarias de estas materias (con la LOGSE los alumnos han perdido 220 horas anuales de matemáticas y 500 de lengua en la secundaria); los estudios sobre el funcionamiento del bachillerato, realizados a instancias de la Conferencia de Educación; y las recomendaciones del Consejo de Europa para el desarrollo de la formación para el empleo, recogidas en el Tratado de Amsterdam y en la cumbre de Lisboa, tuvieron como respuesta dos Reales Decretos sobre enseñanzas mínimas, que afectaban a la ESO[2] y al bachillerato[3].

De acuerdo con sus exposiciones de motivos, todas las circunstancias que se acaban de citar requerían de nuevos planteamientos en las materias comunes y en las de modalidad, así como en la propia formulación de los currículos, actualizándolos desde el punto de vista científico-didáctico, atendiendo a las directrices de la OCDE, del Consejo de Europa y de la UNESCO. Asimismo, se justificaban en que la necesidad de facilitar la movilidad de los alumnos por el territorio nacional y de garantizar una formación común para todos (y, por tanto, la validez del título al que dan lugar estos estudios) precisaban mayor concreción de los objetivos y contenidos básicos comunes.

A través de estas normas, el MECD ejerció su facultad, establecida en la LOGSE[4], para establecer los llamados contenidos mínimos (que representan el 55 por 100 de lo que estudian los alumnos en las Comunidades Autónomas con lengua propia y el 65 por 100 en las demás), y actualizó los currículos de las áreas y materias de la ESO y el bachillerato.

---

[2] RD 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el RD 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO.

[3] RD 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el RD 1700/1991, de 29 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato, y el RD 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del bachillerato.

[4] Competencia que establece la LOGSE en su artículo 4.2 según el cual «el Gobierno fijará (...) las enseñanzas mínimas, con el fin de garantizar una formación común de todos los alumnos».

Los principales cambios introducidos en las enseñanzas mínimas en ESO son: sendos incrementos de 35 horas en las áreas de lengua y matemáticas en primer y segundo curso; introducción en el currículo del área de tecnología, con contenidos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y reforzamiento de la enseñanza y el uso de las nuevas tecnologías, consideradas como herramienta básica para la docencia y el aprendizaje; ampliación a dos cursos de la oferta obligatoria en el área de cultura clásica; posibilidad, en tercer curso, de evaluación y calificación separadas en biología y geología, por una parte, y física y química, por otra; y contenidos mínimos comunes en lengua española e historia.

En el bachillerato, por su parte, las novedades básicas son: incremento de los estudios de filosofía, ahora materia común en los dos cursos de esta etapa; incorporación de un segundo curso de griego al bachillerato de humanidades y ciencias sociales; extensión de la oferta de estudio de la historia de la música al segundo curso de bachillerato de ciencias sociales; ampliación de los estudios de dibujo técnico en el bachillerato de artes, en el de ciencias de la naturaleza y de la salud, y en el de tecnología. De esta forma, la estructura del nuevo bachillerato, en sus diferentes modalidades, experimenta modificaciones importantes.

2.1.3. **Universidad**

Los datos de la Estadística Universitaria en España del curso 1999/2000, del Consejo de Universidades, muestran un aumento de 10.847 alumnos matriculados con respecto al curso anterior. Del total de alumnos, un 62,5 por 100 cursa estudios de ciclo largo, y el resto está matriculado en titulaciones de ciclo corto. No obstante, destaca la progresiva reducción del porcentaje de alumnos matriculados en ciclo largo desde el curso 1996/1997 (cuadro III-3). En el curso 1999/2000, un 94 por 100 de los estudiantes estudiaban en universidades públicas, si bien el alumnado de las privadas experimentó un continuado aumento desde el curso 1994/1995, duplicándose hoy el número de alumnos que había entonces.

CUADRO III-3

ALUMNOS UNIVERSITARIOS POR ÁREA DE ENSEÑANZA Y CICLO, 1994-2000

(Número de alumnos matriculados en cada área/ciclo y porcentajes sobre el total)

Área de enseñanza	94-95		95-96		96-97		97-98		98-99		99-2000	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Humanidades	136.084	9,45	143.930	9,61	155.735	10,09	163.964	10,56	173.642	11,06	179.588	11,36
CC jurídicas y sociales	766.198	53,20	790.470	52,77	800.381	51,83	785.839	50,62	776.417	49,44	766.266	48,45
Ciencias experimentales	117.079	8,13	126.088	8,42	129.122	8,36	131.565	8,48	134.557	8,57	140.758	8,90
Ciencias de la salud	110.918	7,70	108.361	7,23	110.447	7,15	112.908	7,27	112.823	7,18	116.457	7,36
Técnicas	309.980	21,52	329.019	21,97	348.477	22,57	358.096	23,07	373.129	23,76	378.346	23,93
Total	**1.440.259**	**100**	**1.497.868**	**100**	**1.544.162**	**100**	**1.552.372**	**100**	**1.570.568**	**100**	**1.581.415**	**100**
Ciclo corto	485.592	33,70	501.270	33,50	524.418	34,00	542.424	34,90	558.070	35,50	592.374	37,50
Ciclo largo	954.667	66,30	996.598	66,50	1.019.744	66,00	1.009.948	65,10	1.012.498	64,50	989.041	62,50
Tercer ciclo	54.498	—	56.728	—	56.760	—	61.097	—	62.625	—	61.483	—
Titulaciones propias	5.063	—	7.744	—	7.807	—	11.804	—	8.224	—	—	—

Fuente: Consejo de Universidades, *Estadística Universitaria del curso 1999-2000*.

La tasa de escolarización universitaria siguió su ritmo ascendente, aunque cada vez más ralentizado. En el curso 1999/2000, el 27 por 100 de los jóvenes de 18 a 24 años seguía estudios universitarios. La mayor proporción de mujeres en el alumnado se está convirtiendo en estructural, superando en ese curso el 53 por 100. Respecto al tipo de enseñanzas, casi la mitad (48,4 por 100) de los estudiantes estaba matriculado en ciencias sociales y jurídicas, aunque esta proporción no ha dejado de disminuir en los últimos cursos, y cada vez más alumnos estudian humanidades y carreras técnicas.

La calidad de las universidades

Al proceso de análisis sobre la situación de la enseñanza superior ha contribuido en 2000 el Informe de Resultados de la Segunda Convocatoria[5], correspondiente a 1998, del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. Dicho informe persigue promover la evaluación de las universidades para que éstas adopten acciones concretas orientadas a mejorar su calidad, y facilitar unos criterios de evaluación básicos, compatibles con la práctica vigente en la Unión Europea. En esta segunda convocatoria ha participado el 82 por 100 de las universidades españolas, y se ha logrado un fuerte aumento en las enseñanzas evaluadas.

[5] Consejo de Universidades, *Informe sobre los resultados de la segunda convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades*.

Bajo rendimiento académico y alto abandono

Según se refleja en ese informe, el índice de aprobados sobre matriculados en los cursos de primer ciclo universitario es algo superior al 50 por 100, y entre un 75 por 100 y un 80 por 100 en los cursos de segundo ciclo, aunque existen variaciones sensibles respecto a estos porcentajes generales en función de las titulaciones cursadas. En el curso académico 1997/1998, cerca de 180.000 estudiantes obtuvieron una titulación universitaria, y prácticamente otros 80.000 abandonaron la universidad.

El hecho de que en torno a un 50 por 100 de los alumnos no termine sus estudios en plazo establecido determina la necesidad de incidir en las causas de las altas tasas de abandono y rendimiento, muy especialmente en primer curso, y en la necesidad de incrementar las tasas de éxito.

Mayor definición de las metas y objetivos de cada titulación

Entre las conclusiones del informe, se destaca la necesidad de mejorar la formulación de metas y objetivos de las titulaciones evaluadas. Se apunta la necesidad, por un lado, de generalizar la realización de estudios sistemáticos sobre la inserción laboral de los titulados y las demandas del mercado de trabajo y, por otro, de aumentar la efectividad y el uso de la orientación curricular y tutorías a lo largo de toda la carrera, y las actividades que orienten al alumno en su búsqueda de empleo.

Se señala la importancia de preparar informes detallados sobre la evaluación de enseñanzas, departamentos y universidades, y de establecer un sistema de indicadores que faciliten información cuantitativa sobre diversos aspectos del funcionamiento de las universidades[6].

Cambios en la selectividad

El nivel de anticipación del bachillerato LOGSE ha llevado, en la práctica, a una generalización del mismo; y aunque sería en el año 2002 el momento de la implantación total del 2.º curso del bachillerato, el alto porcentaje de adelanto ha hecho necesaria la regulación de las pruebas de acceso universitario.

El primer Real Decreto[7] que regulaba las bases generales que deben regir esta prueba se aprobó en octubre de 1999, pero las du-

[6] La Secretaría General del Consejo de Universidades está elaborando un Catálogo de Indicadores con información cuantitativa sobre las universidades: www.mec.es/consejou/indicadores/index.html.

[7] RD 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios.

das que suscitó la aplicación de alguna de sus disposiciones hicieron necesaria la aprobación de uno nuevo[8] que modificó y completó el anterior. Los principales cambios que introduce el primer RD respecto a la situación anterior son: se permite que los estudiantes repitan las pruebas de acceso a la universidad (selectividad) en cualquier nueva convocatoria tantas veces como deseen, incluso en diferentes universidades si acreditan un cambio de residencia; por primera vez, la media de los dos cursos de bachillerato pondera más (60 por 100) que la nota de selectividad. Los cambios que incorpora el segundo RD se refieren a la estructura general de la prueba de acceso, limitando las pruebas a las materias que los estudiantes hayan cursado en segundo ciclo de bachillerato.

Introducción del «distrito abierto»

En el año 2000, con el establecimiento del «distrito abierto»[9], se establecen las bases para favorecer la movilidad estudiantil, es decir, los estudiantes de cualquier parte del territorio nacional, tendrán la posibilidad de cursar sus estudios superiores en cualquier universidad pública, independientemente de su lugar de origen o residencia.

El «distrito abierto» se implantará de forma gradual, durante 3 años, comenzando el curso 2001/2002, con lo que en 2004 estará totalmente implantado. Las Comunidades Autónomas, previo informe de las universidades de su territorio, determinarán los porcentajes concretos de plazas a ofertar y los procedimientos para la solicitud y adjudicación de plazas. En ningún caso, durante el primer año de implantación, las plazas destinadas al «distrito abierto» podrán ser inferiores al 20 por 100 de las ofertadas en todas y cada una de las enseñanzas que se impartan. Para una mejor coordinación del «distrito abierto» el MECD estableció una serie de normas encaminadas a garantizar el derecho de admisión de los estudiantes[10]. Junto a es-

[8] RD 990/2000, de 2 de junio, por el que se modifica y completa el RD 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios.

[9] RD 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la universidad.

[10] Orden de 26 de julio de 2000 por la que se desarrolla la disposición adicional cuarta del RD 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la universidad.

tas normas, se hará necesario adelantar las convocatorias de becas y ayudas al estudio, así como potenciar unas y otras, pues resultan básicas para implantar el «distrito abierto» de manera efectiva[11].

2.1.4. **Educación y acceso al empleo**

Formación y empleo

La introducción en el análisis del desempleo por niveles de educación permite constatar que el mercado de trabajo español muestra una evolución bastante similar al de otros países europeos, en cuanto a la progresiva mejora de las oportunidades de empleo de la población con cualificación media-alta, mientras que hay un repunte de desempleo de aquellos que no tienen estudios o que sólo cuentan con estudios primarios (no obstante, en 2000 creció el empleo en este último nivel de estudios). Hay una mayor necesidad de mano de obra más cualificada, aunque —como se verá más adelante— subsistirán el problema de la falta de personas con cualificaciones intermedias[12] y las dificultades de integración de los más cualificados.

Esta característica se ve matizada por la incidencia del ritmo de crecimiento económico, pues en las fases recesivas es más difícil observar tal estratificación educativa del mercado de trabajo, mientras que en momentos de auge las titulaciones educativas resultan un factor más determinante en la asignación de puestos de trabajo. El incremento en las tasas de escolaridad, la reducción del ritmo de incorporación de nuevas cohortes de jóvenes a la población activa, y la progresiva modificación de los requerimientos de la demanda de trabajo en los distintos sectores productivos constituyen factores a tener en cuenta para entender estas tendencias.

La situación del mercado de trabajo afecta a la demanda educativa a los 16 años[13]. Se estiman dos efectos diferentes del desempleo

[11] Este adelanto se ha llevado a cabo en la Orden de 16 de febrero de 2001 por la que se convocan becas para los alumnos que vayan a iniciar estudios universitarios en el curso 2001/2002.

[12] Luis Fina y otros: «Cambio ocupacional y necesidades educativas de la economía española». En Felipe Sáez (coord.): *Formación y empleo (*Fundación Argentaria, 2000).

[13] M.ª Jesús San Segundo y Bárbara Petrongolo: «¿Estudias o trabajas? Los efectos del desempleo sobre la escolarización». En Felipe Sáez (coord.): *Formación y empleo* (Fundación Argentaria, 2000).

CUADRO III-4

TASA DE EMPLEO Y PARO SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO Y SECTOR DE ESTUDIOS, 2000

(Porcentaje de ocupados sobre total población mayor de 16 años y porcentaje de parados sobre total población activa en cada nivel de formación/sector de estudios, cuarto trimestre)

Nivel de formación alcanzado y sector de estudios	Tasa de empleo	Tasa de paro
Total	**44,1**	**14,1**
Analfabetos	5,9	28,7
Educación primaria	28,0	14,5
Formación e inserción laboral que no precisa título de primera etapa de secundaria	48,2	22,0
Primera etapa de educación secundaria	54,8	15,7
Formación e inserción laboral que precisa título de primera etapa de secundaria	60,7	21,9
Segunda etapa de educación secundaria	51,1	14,1
Formación e inserción laboral que precisa título de segunda etapa de secundaria	74,2	11,6
Enseñanzas técnico-profesionales de grado superior	72,5	12,5
Títulos propios (no homologados) de universidades y formación e inserción laboral de formación profesional superior	65,3	16,1
Enseñanza universitaria de primer y segundo ciclo	69,2	11,1
• Enseñanzas universitarias primer ciclo y equivalentes o 3 cursos completos de licenciatura o créditos equivalentes	62,9	11,5
Programas de formación básica y desarrollo personal	54,1	25,9
Educación	65,6	10,8
Artes y humanidades	40,8	18,6
Ciencias sociales, enseñanza comercial y derecho	57,8	14,6
Ciencias	53,0	11,1
Mecánica electrónica y otra formación técnica	67,9	6,1
Agricultura	59,0	16,2
Salud y servicios sociales	67,8	11,0
Servicios	68,4	16,3
Sectores no especificados	54,3	24,0
• Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes	75,5	10,7
Programas de formación básica y desarrollo personal	86,7	0,0
Educación	74,9	13,4
Artes y humanidades	72,5	12,3
Ciencias sociales, enseñanza comercial y derecho	75,9	12,2
Ciencias	76,3	12,0
Mecánica electrónica y otra formación técnica	79,6	5,8
Agricultura	77,5	9,0
Salud y servicios sociales	79,9	5,8
Servicios	55,2	8,8
Sectores no especificados	62,3	18,2
Estudios oficiales de especialización profesional	75,6	11,3
Enseñanza universitaria de tercer ciclo (doctorado)	87,2	4,0

Fuente: INE, *Encuesta de Población Activa.*

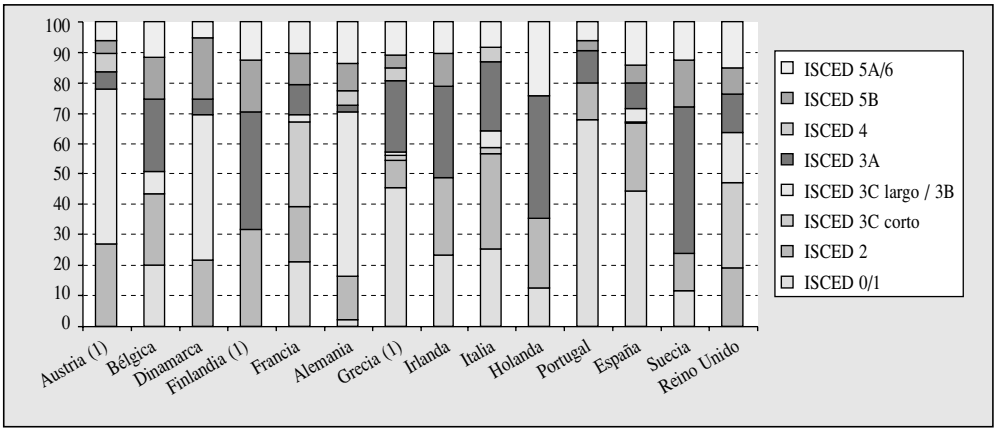
sobre la escolarización: por un lado, el paro juvenil incentiva la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, al reducir el coste de oportunidad de estudiar para esta población; por otro, el paro agregado de la población adulta desincentiva la realización de estudios secundarios, pudiendo reflejar un efecto negativo sobre las expectativas de desempleo en el futuro. Además, la pérdida de importancia de la renta familiar como determinante de la demanda educativa y la fuerte relación de la demanda de educación secundaria con el nivel educativo de los padres confirman una cierta persistencia intergeneracional de las desigualdades en capital humano, que puede resultar difícil de eliminar sólo con políticas de financiación.

Formación profesional y empleo

España es uno de los países de Europa que cuenta con un menor nivel formativo profesional. Sólo el 17,1 por 100 de la población activa tiene estudios secundarios, frente al 41,7 por 100 de media europea. En el curso 1999/2000 hay un 18 por 100 de estudiantes universitarios frente al 5 por 100 de estudiantes de formación profesional (gráfico III-1 y gráfico III-2).

GRÁFICO III-1

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS DE EDAD POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 1998



(1) Datos referidos a 1997.

ISCED (International Standard Classification of Education): Clasificación estándar internacional de niveles educativos.

ISCED 0/1: Educación preescolar y enseñanza primaria.

ISCED 2: Educación secundaria obligatoria.

ISCED 3: Educación secundaria superior (3A: programas designados para dar acceso a ISCED 5A —general—, 3B: facilitan acceso a ISCED 5B —técnicos—, 3C: facilitan acceso a ISCED 5C —profesional—).

ISCED 4: Educación post-secundaria no terciaria (4B: facilitan acceso directo a ISCED 5A, 4C: prepara para la inserción directa en el mercado de trabajo).

ISCED 5: Educación universitaria (5A: programas teóricos que orientan hacia la investigación y cualificación profesional, 5B: orientan hacia ocupaciones más prácticas, preparación técnica).

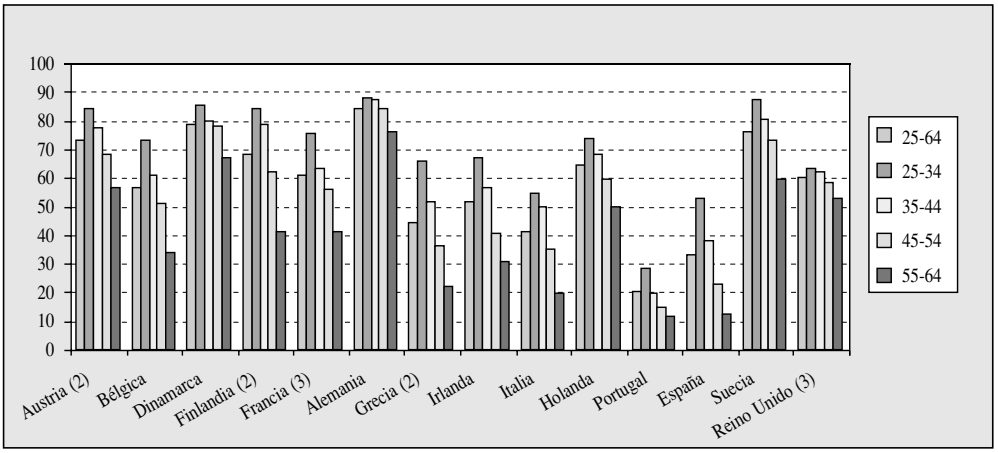
ISCED 6: orientan hacia la investigación avanzada.

Fuente: OCDE, *Education at a Glance,* 2000.

GRÁFICO III-2

POBLACIÓN QUE HA TERMINADO AL MENOS EDUCACIÓN SECUNDARIA SUPERIOR (1), POR GRUPOS DE EDAD, 1998

(En porcentaje)



(1) Excluyendo programas cortos 3C.
(2) Año de referencia 1997.
(3) No todos los programas ISCED 3 reúnen requerimientos mínimos para programas largos ISCED 3.
Fuente: OCDE, *Education at a Glance,* 2000.

El escaso número de trabajadores cualificados de niveles intermedios se convertirá en un problema grave del mercado laboral en la presente década. Las causas del problema se pueden encontrar en la desaparición de numerosas ramas formativas, en el desinterés de los estudiantes españoles y sus familias, consecuencia del desprestigio estructural de la FP en España, en la falta de orientación hacia estudios profesionales, y en la desconexión entre estos estudios y las necesidades del mercado de trabajo.

Aunque sean datos que no reflejan sino una parte de la oferta de puestos de trabajo que efectúan las empresas, las estadísticas del INEM sobre ofertas sin cubrir indican cierta escasez de trabajadores de cualificación profesional media. De las 102.089 ofertas que en marzo de 2000 quedaron sin cubrir, el 58 por 100 requería obreros cualificados o trabajadores con estudios de FP.

Por otra parte, según datos del MECD, los universitarios tienen una tasa de desempleo un 38 por 100 más baja que la media na-

cional, pero los estudiantes de FP se colocan antes y perciben un 40 por 100 más de sueldo que los titulados superiores en su primer empleo. Redundando en esta idea, la distribución de los niveles de inserción laboral en 2000[14] de los alumnos que cursaron cursos de formación ocupacional en el año 1999 por nivel académico muestra que la mayor inserción se produce en los alumnos cuyo nivel formativo es precisamente FP.

A resolver esta situación debe encaminarse la futura Ley de Formación profesional[15]. De acuerdo con el segundo borrador presentado, sus objetivos serían: lograr una mayor cualificación para una mejor inserción laboral, facilitar la transición de la escuela a la vida profesional, prevenir el abandono escolar sin una titulación mínima y sin competencias reconocidas, posibilitar la formación a lo largo de toda la vida[16], y con ello favorecer la empleabilidad, articular las ofertas de formación con las necesidades del mercado de trabajo, favorecer la movilidad laboral a nivel regional, nacional y europeo, e integrar la oferta formativa de los diferentes Agentes y Administraciones.

Se trata de elevar a rango de Ley lo establecido en el II Programa Nacional de Formación Profesional, aprobado en 1998, estableciendo un Sistema Nacional de Cualificaciones (SNCP) que reflejará en un catálogo actualizado y homologado a la Unión Europea los patrones de competencias que requiere el mercado de trabajo. Dicho SNCP permitirá la mejor adecuación de las cualificaciones a las necesidades de producción y a los cambios tecnológicos y sociales, que tendrán un carácter lo suficientemente amplio como para facilitar oportunidades de empleo. Ello supone un nuevo sistema de FP que integrará formación reglada, continua y ocupacional, y que permitirá la convalidación de módulos formativos entre los distintos sistemas.

---

[14] Fuente: Datos facilitados por la Subdirección General de Servicios Técnicos. Unidad de Evaluación. Oferta INEM.

[15] Será la primera ley que con carácter exclusivo regula estas enseñanzas. Un segundo borrador de la misma ya ha sido presentado al Consejo General de la FP.

[16] Memorándum sobre el aprendizaje permanente. Comisión de las Comunidades Europeas. SEC(2000)1832.

Esquema del nuevo sistema de FP



Falta de formación media y adecuada a las demandas de empleo

Dentro del subsistema de la FP reglada, cabe recordar que los puntos débiles que se detectaron en el año 1999 continúan en 2000. Por un lado, como se vio en el apartado 2.1.1, se acusa una reducción del alumnado; por otro, se produce una clara concentración de los alumnos en determinadas familias profesionales. En el curso 1998/1999, el 68,3 por 100 del alumnado de FP de primer y segundo grado y el 50,3 por 100 del alumnado de los módulos profesionales de grado medio y superior se concentraba en las ramas de administración, electricidad y electrónica y sanidad[17]. Sin embargo, las familias profesionales con mayores tasa de inserción[18] (superiores al 75 por 100) fueron: automoción, fabricación de equipos electromecánicos, industrias alimentarias, industria pesada y construcciones metálicas, montaje e instalaciones, mantenimiento y reparación, edificación y obras públicas, comercio, transporte y comunicaciones.

Por otra parte, esta concentración presenta una clara segmentación por género[19]. De todas las mujeres matriculadas en FP, el 52,4 por 100 se concentraba en las ramas administrativa y comercial y el 9,1 por 100 en servicios a la comunidad (hogar). En los módulos profesionales, el 36,5 por 100 estaban matriculadas en administración, el 20,6 por 100 en sanidad y el 8,6 por 100 en comercio y marketing. Los hombres matriculados en FP se concentraban en las ramas

[17] Fuente: MECD. *Estadísticas de la Educación en España, 1998-99*. Resultados detallados.

[18] Fuente: INEM. MTAS. *Resumen anual de datos del Observatorio Ocupacional,* 1999.

[19] Fuente: Elaboración propia a partir de MECD, *Estadísticas de la Educación en España, 1998-99* e INE, *Encuesta de Población Activa*.

de electricidad y electrónica (31,3 por 100), administrativa y comercial (29,3 por 100), sanitaria (16,9 por 100) y automoción (10,1 por 100), y en los módulos profesionales de electricidad y electrónica (24,7 por 100), administración (14,4 por 100), mantenimiento de vehículos autopropulsados (11,2 por 100), informática (8 por 100) y fabricación de equipos mecánicos (8 por 100).

Universidad y empleo

Según algunos estudios recientes[20] el paro entre los licenciados españoles, poco después de acabar la carrera, sería más alto que el de los titulados de otros países desarrollados. Por otra parte, los universitarios españoles tendrían con más frecuencia que sus homólogos europeos un contrato temporal. Parece que los jóvenes licenciados españoles, siendo uno de los más numerosos entre los europeos (gráfico III-3), son los que menos partido laboral obtienen a sus estudios universitarios.

Habría, además, un elevado número de titulados que aseguran estar sobrecualificados para el puesto de trabajo que ocupan. El desfase también se produce entre las competencias adquiridas en los estudios y las requeridas por el puesto de trabajo. En España, los mayores desajustes entre el mercado laboral y la universidad se dan en aspectos como la capacidad de negociación, los conocimientos de informática, el trabajo bajo presión, la planificación, coordinación y organización.

No obstante, el paro entre los licenciados europeos es la mitad que el de los no universitarios [21], la tasa de paro de las personas con un nivel educativo superior es la mitad (un 6 por 100) que los que dejaron los estudios tras hacer la enseñanza obligatoria, por lo que cada vez son más los estudiantes europeos que deciden prolongar su formación, aunque una cuarta parte de los jóvenes europeos entre 15 y 24 años se encuentran sin empleo, mientras que la tasa de paro entre la población adulta es inferior al 10 por 100. España, con un 36 por 100, es el país de la Unión Europea con más jóvenes desempleados. Con el mismo nivel de estudios las mujeres sufren proporcionalmente más que los hombres el problema del

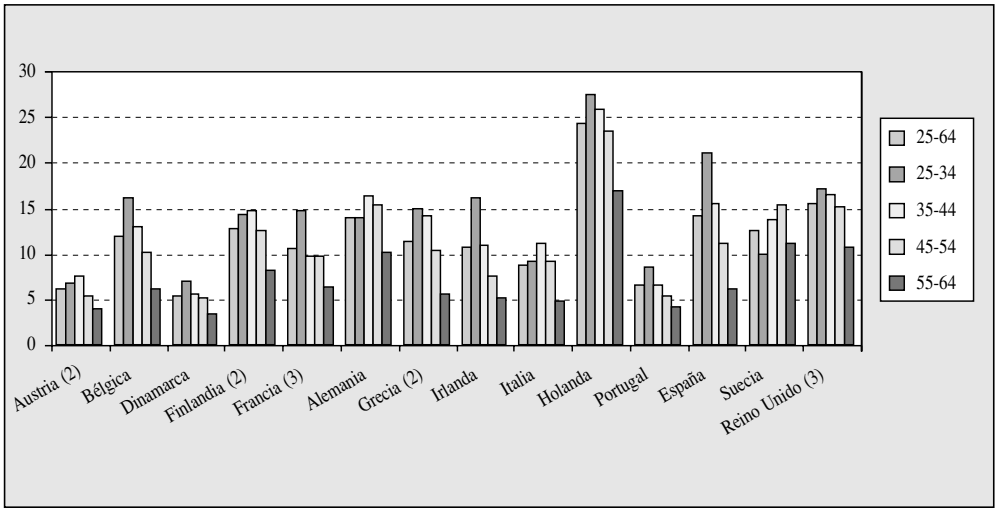
[20] José García Montalvo y José Ginés Mora: «El mercado laboral de los titulados superiores en España y en Europa» en *Papeles de Economía Española* n.º 86 (Fundación FIES, 2000).

[21] Informe Estadístico de la Comisión Europea, Eurostat y Eurydice sobre datos del curso escolar 96-97.

GRÁFICO III-3

POBLACIÓN QUE HA TERMINADO AL MENOS EDUCACIÓN TERCIARIA (1), POR GRUPOS DE EDAD, 1998

(Porcentajes sobre el total de población en cada grupo de edad)



(1) Excluyendo programas cortos 3C.
(2) Año de referencia 1997.
(3) No todos los programas ISCED 3 reúnen requerimientos mínimos para programas largos ISCED 3.
Fuente: OCDE, *Education at a Glance,* 2000.

paro. La tasa de desempleo de los jóvenes entre 34 y 35 años es el doble que entre los adultos. Un problema que se agrava en España e Italia, donde se multiplica la diferencia por cuatro.

El crecimiento de las nuevas tecnologías, según datos de diversos informes realizados por diferentes universidades españolas[22], ha disparado en los últimos años la demanda de licenciados en ingeniería de telecomunicaciones, informática e industrial. Pero el mercado también demanda servicios a empresas, consultoría, banca y finanzas, es decir, personas con titulaciones de

[22] Vicerrectorado de alumnos de la UCM, *Informe Infoempleo 2000*. y diversos informes de los Servicios de Orientación y Planificación Profesional de las Universidades: Carlos III de Madrid, Ramón Llull, Deusto, Sevilla, Autónoma de Barcelona, Pública de Navarra, A Coruña, etc.

ciencias económicas, empresariales, y administración y dirección de empresas. En estas titulaciones más demandadas, los estudiantes obtienen su primer trabajo apenas terminada su titulación, mientras que en carreras con menor demanda el tiempo de espera puede superar el año. Estas titulaciones más demandadas, también lo son por los estudiantes, pero no se puede hablar de ajuste de intereses entre los estudiantes que acceden a la universidad y el mercado laboral para el que se forman, pues continúan estudios con alta solicitud estudiantil y baja oferta laboral, y titulaciones que aunque no tienen mala oferta laboral, no se encuentran entre las más demandadas por los estudiantes. Buenos conocimientos informáticos y de idiomas, un buen expediente y, preferiblemente, experiencia profesional previa, competencias de comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad, iniciativa, versatilidad, capacidad de aprendizaje, liderazgo y disponibilidad geográfica, es el perfil más valorado por las empresas.

Finalmente, parece que existe una creciente apertura de las universidades al mundo empresarial y un quehacer de las empresas que se ha materializado en distintos proyectos: encuentros, foros, bolsas de trabajo, convenios de investigación, parques tecnológicos vinculados a las universidades, etc.

El impacto de políticas activas en universidades

El estudio realizado por el INEM[23] analiza la repercusión que representa en los titulados universitarios los programas de prácticas, de formación y de prácticas más formación orientados a la inserción laboral, es decir, intenta comprobar la incidencia que estos programas tienen a la hora de insertarse en el mercado de trabajo, para lo cual compara estos grupos con el grupo denominado control, formado por titulados que no han realizado ningún tipo de programa.

A la vista de los resultados, parece que todas las políticas activas de inserción entre universitarios tienen una incidencia favorable en la inserción, siendo los programas que combinan la formación y las prácticas los que obtienen mejores resultados.

[23] INEM, «Impacto de las Políticas Activas en Universitarios» en *Observatorio Ocupacional*. Febrero 2000.

2.1.5. **La educación en la Sociedad de la Información**

La globalización del conocimiento puede llevar en sí el germen de la exclusión social, y nuevas barreras generacionales en el mercado laboral. Para reforzar la empleabilidad y cohesión social, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países comunitarios, invitaron al Consejo y a la Comisión Europea a que prepararan un plan de acción «e-Europe»[24]. En este contexto, y para reforzar las sinergias a todos los niveles, la iniciativa «e-Learning»[25] articula los diferentes componentes de las acciones para movilizar a las comunidades educativas, culturales y a los agentes económicos y sociales europeos y acelerar así la evolución de los sistemas de educación y de formación para la transición de Europa hacia la sociedad del conocimiento.

Esta globalización del saber a través de Internet pone de relieve cada vez más la utilidad, viabilidad, credibilidad y atractivo de la educación virtual. Conceptos e ideas como los del «aprendizaje a lo largo de toda la vida»[26], «aprender a aprender» o la autoformación (entendida como la responsabilidad en nuestro propio proceso de formación), el valor del aprendizaje significativo y activo como eje de la actividad formativa, son cada vez más importantes y relevantes en un marco donde el acceso a la información empieza a ser universal y dinámico.

En España, dentro del territorio con competencias del MECD, en enero de 2000, el 94 por 100 los centros de secundaria y el 81 por 100 de los de primaria están conectados a Internet, mientras que 70.000 profesores disponen de cuenta de correo electrónico[27]. El desarrollo de los cursos para la formación del profesorado entre 1996 y 1999 ha formado a través de Internet a más de 20.000 profesores.

La introducción y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) en el ámbito de la

---

[24] Plan de Acción Global e-Europe. Comunicación de la Comisión (2000)330.

[25] *E-learning: concebir la educación del futuro*. Comunicación de la Comisión. COM(2000)318.

[26] OCDE: *Lifelong learning for all,* París 1996: Eurydice: *Lifelong learning: the contribution of education systems in the Member States of the European Union*, Bruselas 2000.

[27] MCYT, *Informe sobre la liberalización de las telecomunicaciones y para el desarrollo de la Sociedad de la Información.*

Educación en España depende del Centro de Información y Comunicación Educativa (CNICE) del MECD, que mantiene cuentas de acceso a Internet y correo para 75.000 centros, profesores y alumnos. Además de los servicios para usuarios (correo, html, publicación de páginas web), el centro ofrece actualmente un directorio y web de centros educativos.

El Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (PNTIC) gira alrededor de la dotación de infraestructuras para la Sociedad de la Información mediante la conexión de los centros educativos a la red, la creación y distribución de contenidos, y la formación para la utilización de estas herramientas por los centros de educación infantil, primaria y secundaria con objeto de generalizar el uso de las herramientas de acceso a la información y comunicación interpersonal que ofrece Internet. Tiene entre sus funciones diseñar, implantar y evaluar la introducción progresiva de las NTIC en el sistema educativo. Su portal[28] ofrece servicios de apoyo educativo y cultural, facilita recursos y materiales para el aula, forma y actualiza a los profesores y a los ciudadanos, crea ámbitos de colaboración múltiple entre los profesores y los centros, apoya campañas educativas estratégicas del Gobierno, constituye un referente en la búsqueda de recursos fiables, y es el soporte de contenidos y servicios de formación, actualización, innovación y cooperación en NTIC.

Colaboración con las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas

La coordinación MECD-Comunidades Autónomas se basa fundamentalmente en los proyectos de colaboración de carácter tecnológico ya iniciados y en el desarrollo de otros nuevos, además de poner en marcha el correspondiente *software* libre de educación y el relativo al equipamiento físico y lógico para la educación y los sistemas de acceso a Internet en los centros educativos.

Las consejerías de educación de todas las Comunidades Autónomas son sensibles a la gran influencia que las NTIC están imprimiendo a las escuelas. Por ello, cada una de ellas aborda los tres pilares fundamentales que son imprescindibles para el uso de aquéllas en el aula. Están realizando un esfuerzo en infraestructuras: dotando y renovando a los centros de equipos y conexión a Internet, y haciendo hincapié en los centros rurales, que son los más

[28] www.pntic.mec.es.

beneficiados en la incorporación a la sociedad de la información. Hay preocupación consciente en cuanto a la formación de los profesores, y dentro de cada Consejería existen programas y proyectos específicos que pretenden cubrir esta necesidad. Finalmente, se ofrecen, a través de «portales», varios servicios a la comunidad educativa.

Las importantes innovaciones tecnológicas en la información y la comunicación también afectan al ámbito universitario, especialmente sensible a los cambios en la transmisión de la información. La docencia universitaria ha incorporado el software informático (programas estándar y otros desarrollados específicamente para la docencia) y la utilización de Internet como fuente de documentación e información.

Existen numerosos centros de enseñanza superior que realizan diferentes experiencias basadas en el uso de Internet. La UNED incluye el acceso a su web mediante telefonía móvil, lo que le ha permitido aportar el primer servicio universitario español, denominado «Campus WAP». Otras universidades, como la Universidad Abierta de Cataluña, son exclusivamente telemáticas.

Cabe destacar iniciativas bastante novedosas, como las comunidades virtuales educativas (entre ellas, la Red Iris), que se podrían definir como grupos con intereses de formación compartidos que han establecido un contacto y adoptado unos medios de colaboración, a través de Internet y de una gran variedad de canales de comunicación y de herramientas específicas, que favorecen el trabajo cooperativo.

Finalmente, el repertorio de iniciativas privadas que prestan cobertura al uso de las NTIC en la enseñanza es extenso y variado, y se puede decir que cubre todos los niveles educativos, materias tanto curriculares como extracurriculares y las necesidades especiales. Son proyectos o programas puestos en marcha por diferentes entidades que se están desarrollando en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación: iniciativas de enseñanzas profesionales a través de la web, centros de formación empresarial, portales relacionados con la educación, divulgación de foros, jornadas, comunidad de universitarios, etc.

ANEXO III-1.1

EDUCACIÓN PRIMARIA

Perfil del alumnado
– 9% ha repetido algún curso. – 78% estaba escolarizado a los 3 años. – 57% dedica entre 1 y 3 horas a realizar los deberes. – 67% hace los deberes sin ayuda. – Como promedio hacen semanalmente algo más de dos actividades extraescolares. – Ven la televisión entre 2 y 3 momentos distintos del día. – 35% no sabe hasta qué nivel desea seguir estudiando; 46% quiere estudiar carrera universitaria.
Familias de los alumnos de 6.º de primaria
– 51% cree que están bastante motivados sus hijos, 26% que poco o nada. – El seguimiento es compartido por la pareja en el 59% de los casos. – 77% desea que sus hijos finalicen estudios universitarios. – Las expectativas de los padres hacia las hijas son más elevadas que hacia los hijos y también mayores en los centros privados que en los públicos. – 66% se comunica habitualmente por medio de reuniones de padres y el 58% a través del teléfono. – La mayoría está muy satisfecha (37%) o bastante satisfecha (55%) con los profesores de sus hijos. – 77% no desea cambiar a sus hijos de centro.
Actitudes y expectativas de los alumnos de 6.º de primaria ante el estudio de la lengua inglesa
– 66,9% le importa mucho aprender inglés. – 74,2% le gusta mucho o bastante aprender inglés. – 72,2% cree que sus resultados en inglés son buenos o muy buenos. – Un 40,5% de los alumnos en la enseñanza privada estudia inglés fuera del horario escolar, frente a un 29% en la enseñanza pública.
LOS CENTROS EDUCATIVOS **Información proporcionada por la dirección de los centros**
Agrupación de los alumnos: 85% permaneció en el mismo grupo de 1.º a 6.º de primaria.
Número de profesores por grupo de alumnos. El 19% de los centros tiene más de 10 profesores, el 18% de 7 a 10, el 25% de 5 a 6, el 21% de 3 a 4 y el 17% tiene 1 o 2 profesores.
Dirección del centro
Nombramiento: el 46% es elegido por el Consejo Escolar y el 43% por la Admón. o el titular.
Número de directores nombrados en los últimos 10 años: el 28% de los alumnos sólo ha tenido 1 director y el 14%, 4 o más.
Formación de profesores
Existencia Plan de Formación: 60% asiste a centros en los que existe Plan de Formación para profesores.
Horas de formación: el 45% ha asistido a cursos de 20-40 horas y el 25% de 40 a 60 horas.
Tutorías
Número de tutores por grupo de alumnos: el 41% de los alumnos tiene 1 solo tutor en 6 años, el 26% cuenta con 3 tutores, y el 25% tiene más de 3 tutores.

ANEXO III-1.1 *(Continuación)*

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS EVALUACIONES DE PRIMARIA REALIZADAS EN 1995-1999

Matemáticas	**6.º EGB 1995**	**6.º primaria 1999**
Global	50	54
Por contenidos:		
En números y operaciones	50	49
En medida de magnitudes	49	52
En geometría	51	52
En organización de la información	—	65
Conocimiento del medio	**6.º EGB 1995**	**6.º primaria 1999**
Global	61-64*	62
Por contenidos:		
El ser humano y la salud	68	65
El paisaje	61	70
El medio físico	63	60
Los seres vivos	64	61
Los materiales y sus propiedades	59	52
Población y actividades humanas	51	65
Máquinas y aparatos	—	55
Organización social	58	67
Medios de comunicación y transporte	65	66
Cambios y paisajes históricos	64	60
Lengua castellana y literatura	**6.º EGB 1995**	**6.º primaria 1999**
Global	64	65
En comprensión escrita	64	65
Por tipo de texto:		
Texto literario	60	52
Texto informativo	66	71
Texto verbal y no verbal	68	73
En expresión escrita:	64	68
En sílabas	59	58
En palabras	61	69
En frases	70	67
En texto	67	73

* En 1995 corresponden a ciencias sociales con una media de aciertos del 61 por 100 las asignaturas de: el paisaje, población y actividades humanas, organización social, medios de comunicación y transporte y cambios y paisajes históricos. El resto de las asignaturas pertenecía a ciencias de la naturaleza, cuya media de aciertos es de 64 por 100.

Fuente: INCE, *Evaluación de la educación primaria 1995 y 1999.*

ANEXO III-1.1 *(Continuación)*

EVALUACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, 6.º CURSO DE PRIMARIA

Lengua castellana y literatura (% de aciertos)								
Global	65	**Por tipo de texto:**		**Por niveles de comprensión:**		**En expresión escrita:**	68
En comprensión:	65	Texto literario	52	Comprensión literal	69	En sílabas	58
En comprensión oral	57	Texto informativo	71	Información	66	En palabras	69
En comprensión escrita	65	Verbal	73	Comprensión inferencial	66	En frases	67
				Lectura crítica	58	En texto	73
				Apreciación	61		

Resultados	Lengua castellana y literatura										
	% aciertos (*)	Sexo		Titularidad		Tamaño		Nivel cultural de la familia			
		Chicos	Chicas	Pública	Privada	Grandes	Pequeños	Sin estudios	Estudios primarios	E. secundarios	E. universitarios
Global	65	64	67	63	68	65	63	59	63	68	72
En comprensión	65	63	67	63	68	65	63	58	63	67	71
En expresión escrita	68	67	71	66	72	68	63	62	67	71	76

Fuente: INCE, *Evaluación de la educación primaria,* 1999.

ANEXO III-1.1 *(Continuación)*

EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO, 6.º CURSO DE PRIMARIA

Resultados	Matemáticas 6.º primaria								
	% aciertos (*)	Sexo		Titularidad		Nivel cultural de la familia			
		Chicos	Chicas	Pública	Privada	Sin estudios	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios univers.
Global	54	56	53	53	58	47	52	57	63
Por contenidos:									
En números y operaciones	49	51	48	47	53	40	47	53	59
En medida de magnitudes	52	54	50	50	56	43	49	55	62
En geometría	52	54	51	51	55	46	50	55	60
En organización de la información	65	66	65	63	68	59	63	67	72
Por niveles de competencia sobre los contenidos:									
Conocimiento conceptual	56	57	55	54	60	48	53	59	65
Procedimientos y estrategias	60	61	59	58	64	52	57	63	68
Resolución de problemas	47	49	46	45	50	40	44	49	56

ANEXO III-1.1 *(Continuación)*

EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO, 6.º CURSO DE PRIMARIA

Resultados	Conocimiento del medio 6.º primaria								
	% aciertos (*)	Sexo		Titularidad		Nivel cultural de la familia			
		Chicos	Chicas	Pública	Privada	Sin estudios	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios univers.
Global	62	64	59	61	65	55	60	65	69
Por contenidos:									
El ser humano y la salud	65	65	65	63	67	58	63	67	71
El paisaje	70	71	69	68	73	64	68	73	76
El medio físico	60	61	59	58	64	50	58	64	68
Los seres vivos	61	63	61	60	64	56	59	63	69
Los materiales y sus propiedades	52	54	51	51	55	45	50	55	58
Población y actividades humanas	65	66	65	63	70	56	64	68	74
Máquinas y aparatos	55	58	52	54	57	50	53	56	60
Organización social	67	68	67	66	70	62	65	70	76
Medios de comunicación y transporte	66	68	65	65	69	59	65	69	74
Cambios y paisajes históricos	60	61	59	58	63	54	58	62	67
Por niveles de competencia sobre los contenidos:									
Conocimiento	61	62	60	59	64	—	—	—	—
Comprensión	59	61	59	58	62	—	—	—	—
Aplicación	62	64	62	61	66	—	—	—	—
Análisis	66	68	65	65	70	—	—	—	—

—: no disponible.

Fuente: INCE, *Evaluación de la educación primaria,* 1999.

ANEXO III-1.1 *(Continuación)*

EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS, CIENCIAS DE LA NATURALEZA, GEOGRAFÍA E HISTORIA Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, 4.º CURSO DE ESO

Resultados	% aciertos (*)	Matemáticas 4.º ESO			
		Sexo		Titularidad	
		Chicos	Chicas	Pública	Privada
Global	40	42	38	38	44
Por contenidos:					
Números y operaciones	40	41	39	38	44
Medida, estimación y cálculo de magnitudes	39	42	36	37	43
Geometría	33	35	31	31	36
Interpretación, representación y tratamiento del azar	44	47	42	42	48
Por niveles de operación cognitiva:					
Uso de algoritmos y destrezas básicas	41	43	39	40	44
Conocimiento de conceptos matemáticos básicos	45	46	44	43	49
Uso de procedimientos más complejos	40	43	37	38	44
Resolución de problemas	34	37	32	32	38
Resultados	**Ciencias de la naturaleza 4.º ESO**				
Global	54	56	52	53	57
Por contenidos:					
Diversidad y estructura de la materia	45	47	42	43	47
La energía	60	64	57	59	63
Los cambios químicos	53	53	53	50	57
La tierra en el universo	43	46	39	42	43
Los materiales terrestres	52	56	49	52	52
Diversidad y unidad de los seres vivos	56	57	55	54	59
Las personas y la salud	63	63	63	63	64
La interacción de los componentes del medio natural	60	62	58	59	61
Los cambios en el medio natural	54	57	51	53	55
Las fuerzas y los movimientos	50	54	47	49	53
Electricidad y magnetismo	57	60	55	56	60
Por niveles de competencia sobre los contenidos:					
Conocimiento	52	53	51	50	54
Comprensión	56	59	54	55	59
Aplicación	55	58	53	54	57
Generalización del conocimiento científico	54	55	53	52	57

ANEXO III-1.1 *(Continuación)*

EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS, CIENCIAS DE LA NATURALEZA, GEOGRAFÍA E HISTORIA Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, 4.º CURSO DE ESO

Resultados		Geografía e historia 4.º ESO			
	% aciertos (*)	Sexo		Titularidad	
		Chicos	Chicas	Pública	Privada
Global	60	62	58	59	63
Por contenidos:					
Sociedad y Territorio	64	67	62	63	67
Sociedades históricas y cambio en el tiempo	53	55	53	52	56
El mundo actual	62	64	61	60	65
Por niveles de operación cognitiva:					
Conocimiento	62	64	61	61	65
Comprensión	58	60	56	56	61
Aplicación	63	65	62	62	66
Análisis	57	58	56	56	59
Resultados		**Lengua castellana y literatura 4.º ESO**			
Global	64	62	66	62	67
Por contenidos:					
Comprensión oral y escrita	69	66	71	67	71
Expresión escrita	58	55	61	56	62
La lengua como objeto de conocimiento	59	57	61	57	63
Literatura	60	58	62	59	63

Fuente: INCE, *Evaluación de la ESO,* 2000.

ANEXO III-1.2
INDICADORES DE EDUCACIÓN

Nivel educativo de la población 25-64 años, 1998 (distribución porcentual)	UE 15	Alemania	Austria	Bélgica	Dinamarca	Finlandia	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Luxemburgo	Portugal	Reino Unido	Suecia	España
ISCED 0/1		2,1	x	20,3	0,1	x	21,1	45,4	12,5	23,1	25,5	—	67,7	x	11,8	**44,5**
ISCED 2		14,1	26,7	23,0	21,4	31,7	18,2	9,0	23,2	25,6	30,9	—	12,2	19,2	12,1	**22,2**
ISCED 3 ABC		56,3	57,0	31,4	53,2	38,9	40,0	26,1	40,1	30,2	30,3	—	10,8	57,3	58,5	**13,5**
ISCED 4		4,4	5,7	x	x	—	0,2	3,9	x	x	4,6	—	x	x	x	—
ISCED 5 AB		23,0	10,7	25,3	25,2	29,5	20,6	15,5	24,2	21,1	8,7	—	9,2	23,6	23,0	**19,8**
Al menos hasta Ed. secundaria superior (ISCED 3 A, B)																
mujeres		79,0	66,0	56,0	76,0	69,0	58,0	43,0	60,0	54,0	40,0	—	22,0	50,0	78,0	**31,0**
hombres		89,0	80,0	57,0	81,0	67,0	64,0	45,0	69,0	48,0	43,0	—	18,0	70,0	74,0	**35,0**
Al menos hasta Ed. terciaria tipo A (ISCED 5A)																
mujeres		11,0	5,0	9,0	4,0	12,0	9,0	10,0	21,0	9,0	8,0	—	7,0	14,0	13,0	**14,0**
hombres		17,0	8,0	14,0	6,0	14,0	12,0	13,0	27,0	12,0	9,0	—	6,0	17,0	13,0	**14,0**
Tasa de escolaridad a determinadas edades, 1998 (porcentaje sobre el total de individuos de esa edad)																
De 3 a 4 años (E.0.1)	41	49	36	82	53	24	79	18	33	19	64	—	38	51	43	**63**
De 5 a 14 años (E.0.2)	98	98	99	96	98	91	100	98	99	100	99	—	106	99	97	**104**
De 15 a 19 años (E.0.3)	77	88	76	86	80	82	88	78	86	81	70	—	76	70	86	**77**
Alumnos universitarios graduados por área (educación terciaria tipo A), 1998 (porcentaje sobre el total de graduados universitarios)																
Educación	9,8	6,7	4,1	7,6	—	10,8	8,2	—	14,3	9,2	2,6	—	—	11,9	19,8	**12,9**
Humanidades y artes	14,5	13,6	15,5	17,7	—	13,1	19,9	—	7,9	22,4	13,5	—	—	18,9	6,6	**9,9**
Ciencias sociales, negocios y leyes	32,0	25,1	39,2	32,2	—	23,5	36,4	—	38,0	30,9	35,7	—	—	27,8	25,2	**38,5**
Servicios	2,7	2,5	—	0,5	—	2,2	1,2	—	2,8	1,2	0,3	—	—	1,7	0,3	**3,4**
Ingeniería, manufactura y construcción	14,9	20,1	14,7	14,6	—	24,2	12,9	—	12,7	10,0	15,2	—	—	12,4	16,2	**11,2**
Agricultura	2,4	2,7	4,2	5,3	—	3,1	0,5	—	2,4	1,7	2,2	—	—	1,2	1,1	**2,9**
Salud y bienestar	12,9	14,5	8	13,8	—	15,1	2,2	—	16,2	7,6	19,5	—	—	11,7	21,8	**11,7**
Ciencias de la vida	5,8	2,8	13,7	4,1	—	1,7	15,9	—	1,1	6,6	5,7	—	—	4,3	5,0	**2,1**
Ciencias físicas	3,5	6,8	—	2,2	—	2,9	—	—	2,7	3,9	2,0	—	—	4,5	—	**3,2**
Matemáticas y estadística	1,6	2	—	0,8	—	1,3	—	—	0,5	0,7	2,3	—	—	1,5	4,0	**1,3**
Informática	2,6	3,1	—	1	—	2,1	—	—	1	5,7	1,1	—	—	4,2	—	**2,8**

ISCED, Clasificación estándar internacional de niveles educativos (International Standard Classification of Education).
ISCED 0/1: Educación preescolar y enseñanza primaria.
ISCED 2: Educación secundaria obligatoria.
ISCED 3: Educación secundaria superior (3A: programas designados para dar acceso a ISCED 5A —general—, 3B: facilitan acceso a ISCED 5B —técnicos—, 3C: facilitan acceso a ISCED 5C —profesional—).
ISCED 4: Educación post-secundaria no terciaria (4B: facilitan acceso directo a ISCED 5A, 4C: prepara para la inserción directa en el mercado de trabajo).
ISCED 5: Educación universitaria (5A: programas teóricos que orientan hacia la investigación y cualificación profesional, 5B: orientan hacia ocupaciones más prácticas, preparación técnica).
ISCED 6: orientan hacia la investigación avanzada.
—: no disponible.
X: no procede.
Fuentes: Eurostat, *Education across the European Union. Statistics and Indicators, 1998/OCDE, Education at a glance, 200/INE, Encuesta de Población Activa,* segundos trimestres. MEC, *Estadísticas de la Educación no Universitaria en España 1999-2000* y *Estadística Universitaria en España 1999-2000.*

ANEXO III-1.2 *(Continuación)*

INDICADORES DE EDUCACIÓN

Gasto en Educación, 1998	UE 15	Alemania	Austria *	Bélgica **	Dinamarca	Finlandia	Francia	Grecia **	Holanda	Irlanda	Italia *	Luxemburgo	Portugal *	Reino Unido **	Suecia	España
(% sobre el PIB a precios corrientes)																
Gasto público (E.1.1)	5,10	4,5	6,0	4,8	6,5	6,3	5,8	3,5	4,3	4,5	4,6	4,2	5,8	4,2	6,8	**4,7**
Gasto privado (E.1.2)	0,75	1,46	0,45	0,56	1,71	—	0,70	1,40	0,74	0,41	0,55	—	0,12	—	0,17	**1,4**
Gasto por alumno, 1998																
(Dólares USA convertidos utilizando PPP)																
Educación infantil (E.2.1)	3.874	4.288	4.867	2.768	5.487	6.340	3.462	x	3.310	2.559	4.462	—	2.044	5.312	2.943	**2.520**
Educación primaria (E.2.2)	4.037	3.490	6.258	3.813	6.596	4.639	3.261	2.351	3.335	2.574	5.073	—	3.248	3.206	5.491	**3.180**
Educación secundaria (E.2.3)	5.489	6.564	8.213	6.938	7.198	5.065	6.564	2.581	4.992	3.864	6.284	—	4.264	4.609	5.437	**4.274**
Educación post-secundaria (E.2.4)	5.843	10.839	7.412	x	7.585	—	5.163	183	x	3.873	x	—	—	x	—	**x**
Educación terciaria (E.2.5)	7.936	9.466	9.993	7.834	7.294	7.145	7.177	3.990	9.989	7.998	5.972	—	—	8.169	12.981	**5.166**

* El gasto por alumno se refiere a instituciones públicas.

** El gasto por alumno se refiere a instituciones públicas e instituciones privadas dependientes del Estado.

–: no disponible.

X: no procede.

Fuentes: OCDE, *Education at a glance,* 2000.

ANEXO III-1.2 *(Continuación)*

INDICADORES DE EDUCACIÓN

Indicadores internacionales de la OCDE sobre Procesos Escolares	UE 15	Alemania	Austria	Bélgica	Dinamarca	Finlandia	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Luxemburgo	Portugal	Reino Unido	Suecia	España
Organización de los Centros y Dirección escolar (1996)																
Dirección escolar en Centros de Primaria																
Promedio de tiempo total de trabajo del director en:																
a) Actividades no lectivas (%)	—	—	76	92	—	52	34	57	64	47	100	—	33	—	88	**52**
b) Docencia (%)	—	—	24	8	—	48	66	43	36	54	—	—	67	—	12	**48**
Características de directores con carga docente																
a) Directores con carga docente (%)	—	—	64	14	—	99	85	99	77	68	—	—	92	—	25	**96**
b) Tiempo de trabajo dedicado a docencia (%)	—	—	38	58	—	50	78	43	47	79	—	—	72	—	48	**50**
Trabajo en equipo de los profesores: frecuencia reuniones																
Informales (%)																
1 vez/día	—	—	56	30	—	66	57	61	57	57	33	—	41	—	44	**43**
1 vez/semana	—	—	28	32	—	25	24	22	38	26	48	—	24	—	46	**42**
< 1 vez/semana	—	—	16	38	—	9	19	17	5	17	19	—	35	—	10	**15**
Formales (%)																
1 vez/semana	—	—	4	4	—	51	12	36	4	93	81	—	1	—	60	**16**
1 vez/mes	—	—	42	61	—	30	61	36	15	17	16	—	51	—	23	**45**
< 1 vez/mes	—	—	54	35	—	19	27	28	81	76	3	—	48	—	17	**39**
Personal, ratios y tamaño de las clases																
Ratio alumnos/profesor (1991-1996)																
Preescolar	—	—	23,3	—	15,8	—	25,5	—	19,1	28,7	—	—	–	27,8	—	—
Primaria	—	—	11,3	—	11,7	—	17,0	—	19,1	26,8	12,8	13,7	–	21,4	11,1	—
Secundaria	—	—	10,8	—	11,1	—	13,4	—	20,0	17,5	9,2	—	–	16,5	11,5	—
Ratio directores/personal docente centros primaria (*100) (1994)	—	—	4,3	7,3	—	2,4	1,7	4,2	8,0	2,1	2,0	—	1,0	—	9,4	**1,4**
Ratio personal dirección/alumnos centros primaria (*1.000)	—	—	2,7	4,1	—	1,6	0,8	2,7	3,8	0,8	2,2	—	0,6	—	6,1	**1,0**
Tamaño de la clase centros primaria	—	—	18,8	19,4	—	20,6	16,5	—	24,6	—	17,0	—	14,5	—	20,6	**20,0**

ANEXO III-1.2 *(Continuación)*

INDICADORES DE EDUCACIÓN

Indicadores internacionales de la OCDE sobre Procesos Escolares	Eur 15	Alemania	Austria	Bélgica	Dinamarca	Finlandia	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Luxemburgo	Portugal	Reino Unido	Suecia	España
Alumnado																
Empleo del tiempo no escolar por parte de los alumnos de matemáticas de 8.º curso en el estudio y realización de tareas escolares (% alumnos) (1995)																
< 1 hora/día	—	14	9	7	39	–	8	6	3	5	—	—	3	17	7	**3**
1-3 horas/día	—	69	67	53	52	–	61	31	81	69	—	—	59	71	72	**44**
> 3 horas/día	—	17	24	40	9	–	31	59	16	26	—	—	38	12	21	**53**
Participación de los padres																
Participación de padres y madres en centros de ed. primaria (1996)																
% alumnos de centros primaria donde se informa a los padres sobre aspectos educativos (inf. regular)																
– Progreso de sus hijos	—	—	75	89	—	85	93	98	100	89	99	—	98	—	97	**98**
– Objetivos centro	—	—	88	58	—	82	84	69	73	59	96	—	83	—	95	**90**
– Misión pedagógica	—	—	91	65	—	84	83	90	70	53	96	—	79	—	92	**82**
– Les involucra en apoyo aprendizaje	—	—	56	83	—	92	86	59	56	87	71	—	78	—	76	**89**
% alumnos de centros primaria con estructuras o procedimientos para implicar a los padres en el proceso de toma de decisiones																
– Curriculum	—	—	4	8	—	92	4	1	63	16	37	—	14	—	34	**33**
– Planificación escolar	—	—	61	55	—	89	58	23	71	31	73	—	55	—	65	**75**
– Organización	—	—	83	49	—	63	35	24	72	43	85		50		38	**65**
– Economía	—	—	64	36	—	26	51	61	42	81	74	—	55	—	45	**82**
– Personal	—	—	8	12	—	20	11	9	62	28	20	—	62	—	14	**27**

Fuentes: MEC, Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), *Indicadores sobre entornos y procesos (1999).*

2.2. SANIDAD

2.2.1. **Panorama general**

Además de su extensión a prácticamente toda la población[29], el sistema sanitario español ha alcanzado, un grado de desarrollo muy importante y recibe en general una valoración favorable tanto en comparación con otros sistemas nacionales —así lo corrobora el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)[30]— como por parte de los propios usuarios, que lo consideran como un servicio público prioritario. Sin embargo, notables avances, como el buen funcionamiento del sistema nacional de transplantes, la importante reducción de infecciones adquiridas en los hospitales, o la favorable evolución de los casos de SIDA conviven con la permanencia de destacados problemas de accesibilidad al sistema —de los que el conocido problema de las listas de espera es suficientemente revelador—, junto con la falta de desarrollo de una red sociosanitaria que responda a necesidades emergentes o crecientes —como los cuidados paliativos a enfermos terminales, la atención integral a la mayor longevidad de los pacientes o a fenómenos como la inmigración.

No sólo la respuesta a estas nuevas necesidades, sino el propio mantenimiento del nivel de prestaciones y servicios alcanzados, la inversión en nuevas tecnologías y la exigencia cada vez mayor de los usuarios requieren un considerable nivel de inversión pública para responder a una demanda asistencial creciente. A falta de información homogénea sobre el conjunto del SNS, los principales indicadores de actividad del Insalud —que atiende al 38,7 por 100 de la población y absorbe el 38,13 por 100 del gasto del SNS— son suficientemente ilustrativos de esa tendencia ascendente en el volumen de servicios prestados (cuadros III-5 y III-6).

[29] La cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social alcanzaba a finales de 1999 a 37.528.638 personas entre activos (40,22 por 100) y sus beneficiarios (35,92 por 100) y pensionistas (17,84 por 100) y sus beneficiarios (6,02 por 100). En conjunto, la población protegida a través de la Seguridad Social, equivalía al 95,23 por 100 de la población de derecho, quedando reducido el colectivo sin cobertura sanitaria pública a las personas que, pudiendo hacerlo, no han solicitado el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social o bien, a las personas con poder adquisitivo suficiente que no tienen derecho a la asistencia.

[30] WHO/OMS, *World Health Report 2000*.

CUADRO III-5
ATENCIÓN PRIMARIA DEL INSALUD. INDICADORES DE ACTIVIDAD, 1998-2000

Tipo de asistencia	Total consultas			Variación	Consultas totales/hab./año		
	1998	1999	2000	00/99 (%)	1998	1999	2000
Medicina de familia	91.124.648	91.412.261	91.404.832	–0,01	6,6	6,0	6,0
Pediatría	10.170.086	10.157.685	10.156.785	–0,01	6,9	6,9	6,9
Enfermería	58.711.976	59.132.059	60.320.259	2,01	3,9	3,9	4,0

Fuente: Insalud, Subdirección General de Coordinación Administrativa, Avance de Memoria 2000.

CUADRO III-6
ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL INSALUD. INDICADORES DE ACTIVIDAD, 1998-2000

Indicador	1998	1999	2000	Variación 00/99 (%)
Ingresos totales/1.000 hab.	82,6	84,2	85,9	2,0
Consultas totales/1.000 hab.	1.508,1	1.532,5	1.559,3	1,7
Urgencias totales/1.000 hab.	357,3	369,3	382,1	3,5
Intervenciones quirúrgicas totales/1.000 hab.	55,9	54,8	55,8	1,8
Intervenciones quirúrgicas programadas con ingreso/día hábil	1.385	1.352	1.338	–1,0
Intervenciones totales/día	2.151	2.108	2.143	1,7
Consultas totales/día hábil	86.866	88.291	89.814	1,7
Urgencias/día	13.758	14.220	14.671	3,2
Estancia media	8,1	8,0	7,9	–1,7
Índice de ocupación	79,9	80,3	80,8	0,6
Índice de rotación	35,9	36,9	37,8	2,6
Presión de urgencias	66,5	68,1	69,2	1,6
% de urgencias ingresadas	14,4	14,6	14,5	–0,3
Relación consultas sucesivas/primeras consultas	2,0	2,0	2,0	2,1

Fuente: Insalud, Subdirección General de Coordinación Administrativa, Avance de Memoria 2000.

Al objetivo de racionalización de la distribución de los recursos del sistema cabe vincular tanto la introducción de medidas que pretenden actuar sobre la eficiencia en la gestión de los recursos del sistema, sin menoscabo de su eficacia —como la diversificación de las formas de gestión de los hospitales y centros de investigación— como toda la política de racionalización del gasto farmacéutico, una

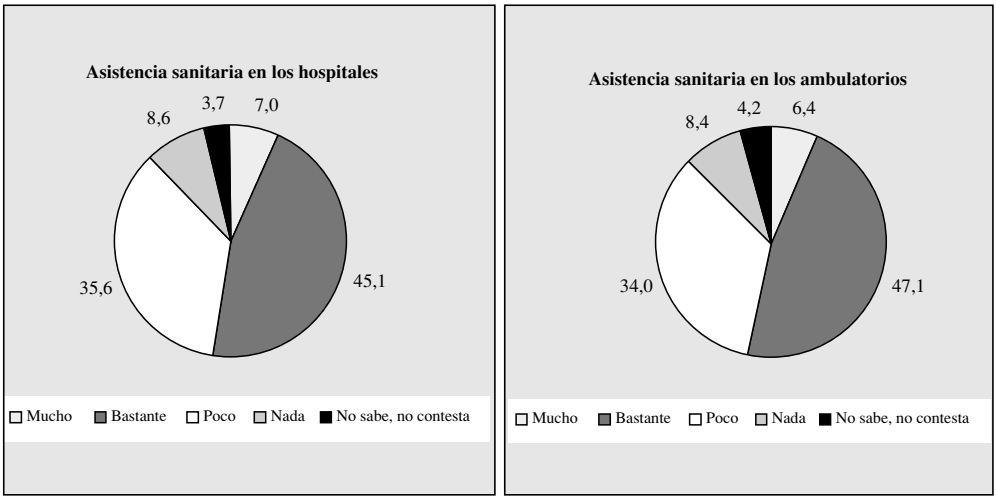
partida que absorbe una parte importante del gasto sanitario total[31]. En ambos campos se han producido iniciativas de interés en el año 2000 que se referirán más adelante.

Quizá por esta confluencia entre un elevado nivel de los servicios prestados y la presencia de problemas que afectan en definitiva a la calidad de los mismos, en el año 2000 las opiniones sobre el funcionamiento del sistema sanitario se encontraban bastante polarizadas entre los que consideraban que funcionaba bastante o muy bien y los que estimaban, por el contrario, que funcionaba poco o incluso nada bien (gráficos III-4 y III-5). En todo caso, más del 62 por 100 había apreciado mejoras en los últimos diez años —percepción sólo mejorada en el caso de las obras públicas y el transporte urbano—, y ello a pesar de que la mayoría consideraba que en ese tiempo había aumentado su grado de exigencia para con el sistema.

GRÁFICOS III-4 Y III-5

ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA

(¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada diría usted que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente?)



Fuente: CIS. *Estudio 2394. Barómetro de junio 2000.*

[31] En el ámbito del Insalud la gestión directa la partida de gasto farmacéutico presupuestado para el año 2001 representa el 22,44 por 100 del total.

Apertura a nuevas formas de gestión

Como ya se ha mencionado, a algunos de los problemas de eficiencia del sistema se viene respondiendo desde hace varios años introduciendo diferentes fórmulas de gestión de los servicios sanitarios. En todo el Sistema Nacional de Salud, la relación de entidades que han surgido en el contexto de este proceso de diversificación de las formas organizativas de gestión, creadas por distintos Servicios autonómicos de salud y por el propio Insalud, supera ya las 40 respondiendo a diferentes fórmulas jurídicas, no sólo en el nivel de atención hospitalaria, sino también en el de atención primaria y en el ámbito de la investigación[32]. En el ámbito del Insalud, a comienzos del año 2000 tuvo lugar la aprobación del Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud, que regula el funcionamiento tanto de las fundaciones públicas sanitarias como de las restantes nuevas formas de gestión. De su contenido ya se dio cuenta brevemente en la pasada edición de esta Memoria. Valga recordar que esta norma vino a regular, entre otros aspectos, los límites a la autonomía de gestión de estas entidades, estableciendo los procedimientos de participación y control de las mismas. Aparte de los centros ya existentes con anterioridad al Real Decreto que habían adoptado la forma jurídica de Fundación desde su creación (Fundación Hospital Alcorcón, Fundación Hospital Manacor) y los más recientes de nueva constitución (Fundación Hospital Calahorra y el Hospital Palma II), durante el año 2000 ningún hospital de los ya existentes había solicitado todavía su transformación en alguna de las nuevas formas de gestión, conforme a la posibilidad prevista por el RD de cambio voluntario de forma jurídica. El impulso de este tipo de fórmulas desde el Insalud se ha aplazado para que, a la vista de la proximidad de las transferencias sanitarias a las diez Comunidades Autónomas que lo componen, sean ellas las que en su momento opten por el modelo de gestión que consideren más adecuado. Con ello, las fundaciones sanitarias han dejado de centrar el debate sobre la gestión mientras que se van abriendo paso otras fórmulas que no implican cambios en la naturaleza jurídica de los centros. Entre ellas, cabe destacar la de los institutos clínicos o áreas funcionales,

[32] Además de bajo la fórmula de fundación, existen empresas públicas, consorcios (especialmente presentes en el Servicio de Salud de Cataluña), así como concesiones administrativas. La anterior edición de esta Memoria incluía una relación de los centros instituidos bajo estas distintas fórmulas. Véase, CES, *España 1999, Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral*.

muy desarrollada ya en algunos servicios de salud, principalmente el catalán, que se apoyan también en el fomento de la autonomía de gestión a través de la agrupación de servicios y de la atribución de más responsabilidad y autonomía a los profesionales. Otra fórmula consiste en aplicar la autonomía a la gestión de los procesos o patologías concretas, un sistema desarrollado en el año 2000 por el Servicio Andaluz de Salud.

En todo caso, al margen del debate en torno a las ventajas e inconvenientes de la implantación de este tipo de fórmulas de gestión, es evidente que, como el CES puso de manifiesto en su Informe del año 2000 sobre la unidad de mercado y la cohesión social, a efectos de mantener el necesario equilibrio entre los objetivos de eficiencia en la utilización de los recursos económicos, y los de calidad y equidad en la prestación de los servicios, debe realizarse un seguimiento específico de las mismas a través de las herramientas de gestión existentes (por ejemplo, el contrato de gestión en el Insalud y los indicadores de actividad de los centros), así como por otros medios de evaluación y control (auditorías externas, encuestas sobre usuarios).

Cultura de calidad: necesidad de homogeneizar criterios

La apertura a nuevas formas de gestión hospitalaria ha aflorado la necesidad de desarrollar un modelo de evaluación de calidad común a todo el SNS. Sin embargo, la ausencia de homogeneidad se hace notar de forma especialmente acusada en este terreno, en el que llama la atención la inexistencia de un sistema homogéneo de acreditación y evaluación de centros y servicios, lo que conlleva para éstos inseguridad en cuanto a las condiciones de ejercicio de la actividad. En efecto, el desarrollo de la cultura de calidad en el sistema sanitario español ha supuesto la puesta en marcha de Planes de Calidad en los distintos servicios de salud y la proliferación de diversos sistemas de acreditación a través de certificaciones ISO, evaluaciones EFQM (el de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) o conforme a los criterios de la *Joint Comission* norteamericana, u otros que combinan modelos de calidad distintos. Cada vez más se produce incluso la difusión de evaluaciones de los centros hospitalarios que parecen tendentes a introducir competencia en el sector pero que, sin embargo, no responden al mismo criterio de homologación. Todo ello hace que se encuentre abierto un debate en cuanto a la necesaria homogeneidad del sistema de evaluación de calidad en el conjunto del SNS, la idoneidad de los dis-

tintos modelos, la necesidad de mejorar los sistemas de información para recoger los indicadores de calidad, la regulación de la publicidad de los datos a favor de los derechos de los pacientes y las peculiaridades de la aplicación de estos sistemas en Atención Primaria. De momento, sólo Cataluña tiene un modelo oficial de acreditación de hospitales, mientras la Comunidad Valenciana cuenta con la Agencia Valenciana de Calidad y varias comunidades, entre ellas Andalucía y Madrid, tienen prevista la creación de agencias de acreditación de centros sanitarios.

Reestructuración del MSC en el escenario previo a las transferencias

Desde el punto de vista organizativo, en el año 2000 se han producido cambios importantes en la estructura del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC). La reestructuración, entre otros aspectos, pretende responder a las características del futuro panorama de un sistema sanitario cuya gestión esté completamente transferida a las Comunidades Autónomas. Por el momento, el 61,3 por 100 de la población protegida está adscrita a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas con plenas competencias en materia de sanidad, mientras que el 38,7 por 100 restante es atendido todavía a través del Insalud, que gestiona el territorio de las diez Comunidades Autónomas que aún no han recibido las transferencias. Con respecto a estas últimas, el proceso para su culminación se abrió oficialmente el 25 de enero de 2001 en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. A partir de ese momento han comenzado las reuniones con las Ponencias Técnicas de dichas Comunidades Autónomas, con las que se llevará a cabo la negociación de las condiciones de las transferencias de manera simultánea y paralela, habiéndose fijado el horizonte del año 2002 para su definitiva realización. En estrecha conexión con la terminación del proceso de transferencias, también se están desarrollando los trabajos de revisión del futuro esquema de financiación de la sanidad pública, cuya elaboración corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera, dada la próxima expiración del actual Acuerdo de Financiación para el periodo 1996-2001 y teniendo en cuenta que por algunas de sus características —en especial por la consideración del presupuesto del Insalud no transferido como referencia general del sistema— no se podrá aplicar en una situación de traspaso general de estos servicios a todas las Comunidades Autónomas.

Obviamente, en el nuevo marco de distribución de competencias tendrán que redefinirse las funciones del MSC, que a partir del mo-

mento en que se produzca la total descentralización de la gestión sanitaria, además de ocuparse de las competencias residuales que permanezcan en su ámbito (sanidad exterior, investigación y regulación de productos farmacéuticos) deberá focalizar su actuación en vertebrar la coordinación del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y salvaguardar las garantías de la prestación sanitaria en todo el Sistema. En este cometido desempeñará un papel preponderante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y su Comité Consultivo, cuyos medios y recursos se quiso potenciar con la citada reestructuración ministerial llevada a cabo en 2000. Entre otros aspectos, y en colaboración con la nueva Dirección General de Planificación sanitaria, se prevé que la ordenación del mapa sanitario aborde la mejora de la regulación de las actuales prestaciones sanitarias, contenida en el catálogo de 1995, estableciendo unas prioridades comunes a todo el Sistema Nacional de Salud, una cuestión que será objeto de estudio en la Comisión de Prestaciones del CISNS. Otro de los aspectos en los que se deberá hacer hincapié es en la mejora de la información y la comparabilidad de los indicadores de actividad, gestión y gasto de los distintos Servicios de Salud, información que, con algunas excepciones como la relativa a la prestación farmacéutica, carece de la periodicidad y homogeneidad deseables. A fin de abordar los problemas del actual sistema de información, en el año 2000 se ha constituido una Subcomisión de sistemas de información en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Igualmente, está prevista la creación del Observatorio Sanitario del Sistema Nacional de Salud, una institución que deberá permitir conocer el funcionamiento de los servicios sanitarios en los distintos territorios.

Salud pública: necesidad de mejorar la coordinación

Uno de los aspectos en que deberá reforzarse en el futuro la coordinación y la cooperación en la definición de criterios de actuación es en el área de salud pública, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el año 2000 con episodios como la crisis de las «vacas locas» o el brote de legionellosis. El hecho de que la salud pública sea una materia transferida por completo a las Comunidades Autónomas, responsables del marco médico sanitario para la detección, tratamiento y control de este tipo de enfermedades de declaración obligatoria, no obsta para que deba establecerse una red coordinada de actuación frente a estos casos entre todas las Comunidades Autónomas y entre todos los departamentos implicados, a fin de evitar la falta de respuestas ágiles a la ciudadanía en momentos de inquietud social.

Sin duda una de las vertientes más preocupantes de la crisis de las «vacas locas» era la sanitaria. De hecho, la alarma despertada obedecía a la falta de información de la población en torno a las consecuencias para la salud humana del consumo de carne o productos derivados de animales afectados por encefalopatía espongiforme bovina (EEB). En un primer momento, las autoridades sanitarias no respondieron con la suficiente agilidad y claridad en la difusión de dicha información, lo que pudo contribuir a aumentar la confusión de los consumidores. El asunto fue abordado por el Consejo Interterritorial, que en diciembre de 2000 aprobó un acuerdo por el que las Comunidades Autónomas se comprometían a aportar un informe sobre la situación en cada una de ellas de la actividad de control sanitario de determinados elementos relacionados con la EEB, así como las necesidades de recursos humanos y financieros para su tratamiento en una reunión ulterior. Como resultado de la crisis de la EEB la idea de crear una Agencia de Seguridad Alimentaria se está materializando en forma de un Proyecto de Real Decreto que se encuentra en tramitación en la fecha de cierre de esta Memoria. Otro incidente ocurrido en este mismo ámbito de la salud pública fue un brote de legionellosis en la segunda mitad del año 2000, que dio lugar a un acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial, por el que se elaboraría una norma de ámbito estatal, norma que está siendo tramitada como Proyecto de Real Decreto sobre prevención y control de la legionellosis.

Conflictos en el marco de las profesiones sanitarias

Por otro lado, en el año 2000 los problemas organizativos del sistema sanitario público han seguido manifestándose también desde la vertiente de la gestión de sus recursos humanos, un colectivo caracterizado por la complejidad y diversidad de estatutos jurídicos y con un elevado grado de conflictividad. La puesta en marcha del procedimiento excepcional para el acceso al título de Médico Especialista, que fue aprobado en 1999 a consecuencia del conflicto planteado por los médicos ejercientes como especialistas sin título oficial (MESTOS) y cuya realización estaba prevista para el año 2000, ha sido aplazada, habiéndose presentado más de 12.000 solicitudes[33]. Por otra parte, en el año 2000 ha sido anula-

[33] RD 1497/1999, de 24 de septiembre, por el que se regula un procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista. Cabe recordar que la aprobación de este procedimiento ha estado acompañada de una gran litigiosidad. Véase Auto del

da por el Tribunal Supremo la Oferta Pública de Empleo extraordinaria destinada solamente a personal interino que aprobó el Insalud en 1998.

Otra cuestión tradicionalmente fuente de litigios en el sector, la regulación de las jornadas, ha sido objeto de un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas que puede tener importantes repercusiones organizativas en las plantillas de los centros de salud. El Tribunal, en Sentencia dictada el 3 de octubre de 2000, en relación al trabajo realizado por los médicos de Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, reconoció su derecho a disfrutar de una jornada de trabajo que no exceda de 48 horas por semana en cómputo de 12 meses, incluido el tiempo de trabajo dedicado a atención continuada, mientras que las guardias localizadas sólo tendrían esa consideración en cuanto acarreen trabajo efectivo. Por tanto, si con la realización de guardias la jornada del médico supera esas 48 horas éste podría negarse a hacer más guardias, no debiendo verse alterada esa voluntad, en opinión del Tribunal, por los acuerdos que rigen en la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo, la Sentencia declaró la condición de trabajadores a turnos de estos trabajadores, con la consecuencia de la aplicabilidad de las medidas de especial protección establecidas en la normativa comunitaria al respecto[34]. Las consecuencias de la aplicación de esta sentencia, desde el punto de vista de la organización de los recursos humanos del sistema, han sido objeto de estudio tanto por el Insalud como por otros servicios de salud, como el navarro, reflexión que se trasladó al Consejo Interterritorial de Salud, donde el asunto está siendo estudiado en una comisión específica desde diciembre del año 2000. En cuanto a la extensión de la misma Directiva a los médicos residentes, en

TS, Sala de lo contencioso administrativo, Sección 4.ª, de 17 de julio de 2000 (RJ 2000/7002), que declara que no ha lugar la suspensión de la aplicación del Real Decreto 1497/1999 solicitada por la Asociación de Defensa de los Médicos y Farmacéuticos Residentes de Ourense mediante recurso contencioso administrativo núm. 464/1999 (RCL 1999/2433).

La convocatoria de las pruebas de acceso está pendiente de que se apruebe la Resolución por la que se establecen los criterios comunes sobre formato, contenido, garantías y calificación aplicables a los procedimientos de evaluación curricular y desarrollo de las pruebas a las que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre.

[34] Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

relación a la jornada máxima de 48 horas, el debate comunitario se zanjó retrasando su entrada en vigor para este colectivo hasta dentro de cuatro años, prorrogables hasta 12 años en función de la concurrencia de diversas circunstancias.

A finales del año 2000 volvió a manifestarse otro conflicto planteado por una buena parte de la plantilla de facultativos que se encuentran sustituyendo a los titulares de las plazas mediante contratos de interinidad, una circunstancia que sólo en el ámbito del Insalud afecta a la cuarta parte del personal a su servicio, más de un tercio en el caso de la atención primaria. La Oferta Pública de Empleo extraordinaria aprobada por el Insalud en 1998 y por la que se abría un proceso de oposición para optar a 4.000 plazas a las que sólo se podía presentar personal interino, ha sido anulada por el Tribunal Supremo en el año 2000, habiéndose planteado ante el Tribunal Constitucional varios recursos sobre diversos aspectos de la OPE.

A los problemas de la organización de los recursos humanos en el sistema sanitario español —fuente permanente de conflictos y litigios— subyacen, entre otros factores, las carencias de una inadecuada regulación de la oferta y demanda de profesionales del sistema, la falta de una planificación en la distribución de los médicos especialistas para cubrir las demandas asistenciales de la sociedad, así como la necesidad de revisión de la regulación de las condiciones que rigen el ejercicio de los profesionales del sector sanitario público, cuyo Estatuto Marco sigue sin aprobarse. Todos ellos son aspectos que repercuten en la asistencia y en la calidad del sistema y que requerirían un análisis en profundidad de su origen y consecuencias, a fin de articular vías de solución de carácter estructural.

El sistema sanitario ante necesidades emergentes

Por último, cabe recordar que junto a problemas tan arraigados en el funcionamiento del sistema sanitario español como el de las demoras quirúrgicas, la planificación sanitaria debe hacer frente a realidades emergentes que están afectando ya al sistema, como la aparición de nuevos factores epidemiológicos, el avance de las nuevas tecnologías y de la investigación científica, así como factores demográficos entre los que el envejecimiento de la población y el fenómeno de la inmigración ocupan un lugar destacado.

En efecto, la prolongación de la esperanza de vida aumenta cada vez más el volumen de pacientes geriátricos con enfermedades crónicas evolutivas generadoras de gran dependencia y un deterioro importante. La mejora de los tratamientos produce un alargamiento de las situaciones terminales y un volumen de enfermos incurables con una esperanza de vida larga, para los que el modelo tradicional de asistencia hospitalaria, que tiene esencialmente objetivos curativos, deviene insuficiente. Por otro lado, el enfoque de la problemática de la atención sociosanitaria se amplía con la creciente presencia de dependencias y enfermedades psíquicas crónicas, de pacientes en riesgo o en situación de exclusión social. En este ámbito entrarán en juego cada vez más las repercusiones de la inmigración en el ámbito sanitario, un fenómeno al que se dedica un apartado específico en esta Memoria. Durante el año 2000 se extendió[35] el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles a los extranjeros que se encuentren en España, aun cuando no cuenten con permiso de residencia, exigiendo únicamente el certificado de empadronamiento para el reconocimiento del derecho. La extensión del derecho a la asistencia sanitaria a este colectivo —que solamente en el territorio Insalud supuso en el año 2000 la incorporación de 137.000 personas protegidas más— no sólo supondrá una ampliación de la población cubierta, sino que probablemente requiera respuestas adecuadas del sistema hacia colectivos con demandas de salud específicas y procedentes de países con diferente grado de desarrollo y cultura sanitaria.

En el año 2000 el Senado aprobó una Proposición no de Ley para la elaboración de un Plan de Cuidados Paliativos dirigido a los enfermos en situación terminal y sus familias, al objeto de mejorar su calidad de vida. La propuesta dio lugar a la aprobación por el Consejo Interterritorial de Salud de un documento de Bases para el desarrollo del Plan de Paliativos, al que deberán incorporarse las aportaciones de las Comunidades Autónomas. Con el desarrollo del futuro Plan se pretende dar una respuesta homogénea y coordinada al problema de la atención sociosanitaria a este co-

[35] Artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, precepto que no se vio afectado por la posterior Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la anterior.

lectivo a partir de las realizaciones y proyectos que ya existen en diferentes Servicios de Salud. Entre las bases para su desarrollo se contemplan el impulso a la formación profesional, el desarrollo de estándares de calidad, la evaluación de los servicios, posibilitar un mejor acceso a los opiáceos, constituir equipos multidisciplinares y la mejora de la financiación pública de los dispositivos asistenciales.

Todo ello, sin embargo, no suple la necesidad de definición y desarrollo del modelo de atención sociosanitaria del Sistema Nacional de Salud. Hasta el momento este área ha sido abordada de diferentes maneras en los distintos Servicios de Salud, y se ha dado una dispersión de soluciones y recursos incluso dentro de cada uno de ellos. En general, existe una ambigüedad notable respecto a las competencias de servicios sociales y sanidad, así como una falta de coordinación no sólo entre estos departamentos sino entre los propios niveles de la Administración, entre los que las corporaciones locales desempeñan un importante papel. La constatación de este problema ha llevado a que en el año 2000 se constituya una Subcomisión de planes sociosanitarios en el CISNS, que se encuentra trabajando en las futuras líneas de actuación para desarrollar un modelo de atención sociosanitaria.

2.2.2. **Demoras excesivas: un problema de accesibilidad al sistema**

Uno de los principales problemas por los que los usuarios del sistema sanitario público se vieron aquejados durante el año 2000 ha sido la persistencia de las listas de espera quirúrgicas, para el acceso al especialista y para realización de pruebas diagnósticas. La falta de una definición homogénea del propio concepto de demora para todo el Sistema Nacional de Salud ha impedido hasta ahora el conocimiento de las dimensiones del problema, detectándose carencias importantes en cuanto a la necesaria transparencia y comparabilidad de un indicador básico para evaluar la calidad asistencial del sistema sanitario en términos de accesibilidad al mismo por parte de los usuarios. La demora no debería afectar a procesos graves que, sin presentar el carácter de urgencias, no admiten periodos de espera prolongados por el deterioro que producen en la calidad de vida de los pacientes, por lo que los criterios de prio-

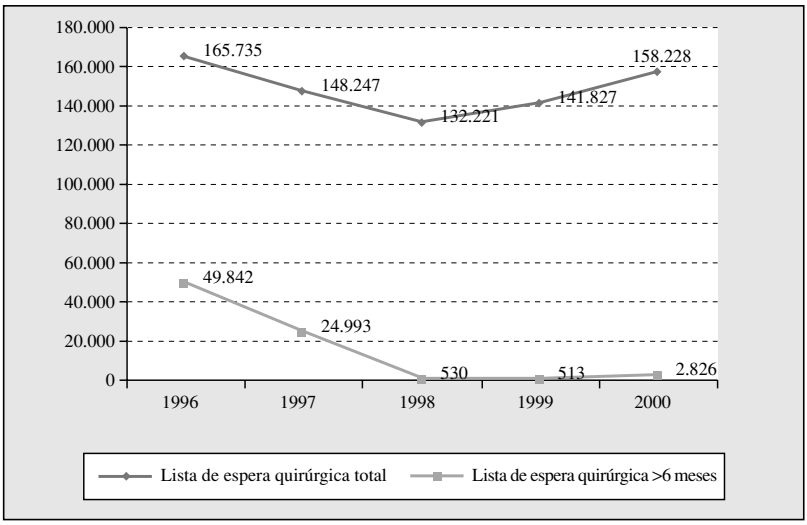
ridad al respecto deberían ser claros. Sin embargo, durante el año 2000 se produjeron algunas incidencias en la especialidad de cirugía cardiovascular que pusieron en duda dichos criterios, dando lugar a la aplicación de medidas de choque.

Dada la falta de información comparable para el conjunto del SNS, como muestra de las características de la demora para el acceso a los servicios sanitarios de atención especializada, y en especial a las intervenciones quirúrgicas, cabe aludir a los indicadores específicos disponibles relativos a las diez Comunidades Autónomas del ámbito Insalud[36]. Desde la implantación del Plan de reducción de la demora quirúrgica en 1996 se ha venido distinguiendo entre demora quirúrgica total, demora quirúrgica de más de seis meses y demora media, habiéndose conseguido desde aquel año una considerable reducción, centrada en buena parte en procedimientos llevados a cabo con cirugía ambulatoria (cataratas, varices, etc.). Desde 1999, la lista de espera quirúrgica total aumenta considerablemente, rompiendo la tendencia descendente registrada desde que se vienen publicando este tipo de indicadores en el territorio Insalud. En el último año ha sido especialmente acusado el aumento de la lista de espera de más de seis meses (gráfico III-6). Consecuentemente, la demora media ha aumentado notablemente, habiendo pasado de los 62 días registrados en 1998 y 1999 a 67 días en el año 2000. Mención aparte merecen los resultados del plan de choque específico en cirugía cardiovascular puesto en marcha en el año 2000 en respuesta a la alarma social levantada por la grave demora detectada en la realización de algunas intervenciones de este tipo. Tras los tres meses de su aplicación se redujeron los enfermos en lista de 602 a 28, situándose la demora media en esta especialidad en 30 días.

En el sustancial incremento del conjunto de la lista de espera quirúrgica ha influido la disminución del rendimiento que ha provocado la realización de obras de infraestructura en los quirófanos de tres de los hospitales más importantes (Doce de Octubre, de Madrid, Marqués de Valdecilla, de Santander, y Valle del Nalón, de Asturias), a los que estaban adscritos el 78 por 100 de pacientes que esperaban cirugía desde hacía más de seis meses. Unido a lo anterior, tanto el aumento de la lista de espera como, en general, el

[36] Insalud, Avance de Memoria 2000.

GRÁFICO III-6
EVOLUCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA DEL INSALUD, 1996-2000



Fuente: Subdirección General de Coordinación Administrativa del Insalud, Avance de Memoria 2000.

conjunto de la actividad quirúrgica, guardan relación con el incremento de actividad de consultas externas. En el año 2000, éstas se incrementaron un 1,3 por 100 hasta llegar a sumar 21.827.658, lo que supone 284.557 consultas más que en 1999, mientras que las intervenciones programadas realizadas en el territorio Insalud en el año 2000 fueron 796.233, lo que representa un incremento del 5,9 por 100 con respecto al año anterior.

Pero, como ya se ha mencionado, no hay que olvidar que aunque la cuestión de las demoras se haya centrado fundamentalmente en torno a la espera quirúrgica, el problema afecta a otras áreas de la atención especializada, tanto en consultas como en pruebas diagnósticas, lo que requeriría un análisis en profundidad de cara a la adopción de medidas estructurales también en esta vertiente del problema de las demoras. Es evidente que la suma de los tiempos de espera desde la derivación de atención primaria a primeras consultas de atención especializada, añadidos a la de la realización de pruebas diagnósticas y ulteriores consultas, actúan en detrimento de la calidad del conjunto del proceso asistencial, prolon-

gando en exceso y añadiendo incertidumbre al itinerario sanitario del paciente, no sólo cuando éste debe afrontar una intervención quirúrgica.

En el área del Insalud, la demora media global de primeras consultas de especialista fue de 28 días en el año 2000, pero existen marcadas diferencias por especialidades, siendo las mayores demoras las observadas en cirugía maxilofacial (48 días), ginecología (45 días), neurología (43 días), reumatología (42 días), alergología (42 días), oftalmología (41 días) y dermatología (31 días), mientras que entre las de menor demora destaca la de una semana registrada en oncología. En cuanto a las pruebas diagnósticas, la demora media oscilaba, a 31 de diciembre de 2000, entre los 57 días para resonancia magnética, los 50 para mamografías, los 29 para ecografías y los 20 para TAC. No obstante, aun dentro de la misma especialidad o tratamiento, existen importantes desviaciones de la demora media en función de las diferentes zonas y centros de salud.

En cuanto a las medidas adoptadas, hasta el momento éstas se habían centrado principalmente en actuaciones de choque por parte de los distintos Servicios de Salud. En el ámbito del Insalud, a los ya aludidos se suman los objetivos contemplados en el programa Avance en materia de listas de espera quirúrgica, recogidos en el contrato de gestión de atención especializada para el año 2001, y entre los que se contemplan distintos tiempos máximos de demora, así como la posibilidad de elección de hospital por el paciente en 1os procesos más presentes en las listas de espera quirúrgica.

La solución al problema, sin embargo, reviste mayor complejidad que la sola puesta en marcha de respuestas coyunturales ante incidentes ocasionales y requiere un enfoque integral en todo el Sistema Nacional de Salud, que aborde los factores que subyacen al mismo. En el año 2000, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud abordó en profundidad esta temática, aprobando la adopción de una serie de actuaciones inmediatas, otras que deberían ser abordadas a medio plazo y un seguimiento permanente del problema a cargo de un grupo de trabajo específico.

Las actuaciones inmediatas van dirigidas a obtener la máxima rentabilidad social de los recursos públicos disponibles mediante la

colaboración entre las Administraciones sanitarias. Se acordó analizar la organización quirúrgica en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, incrementando su actividad cuando sea necesario mediante el fomento de la cirugía mayor ambulatoria, la mejora de los rendimientos en jornada de mañana y la apertura de quirófanos por la tarde donde sea necesario. Además, al grupo permanente de trabajo se encomendó el seguimiento constante del problema, a través de la monitorización permanente de las listas de espera, el análisis del impacto sobre éstas de factores organizativos y de gestión del Sistema Nacional de Salud, así como la adopción de medidas tendentes a consolidar en el tiempo los criterios y actuaciones contenidos en el Acuerdo.

Entre las actuaciones a medio plazo se contempla la mejora de la información sobre las listas de espera, orientada tanto hacia los ciudadanos como a la mejora de la gestión de las listas a través de elaboración de criterios comunes en todo el Sistema Nacional de Salud, en un marco de cooperación entre los distintos Servicios de Salud competentes. En este ámbito, en el marco del mencionado Grupo de Trabajo, durante el año 2000 se ha estado trabajando en la posibilidad de establecer un sistema de remisión periódica de datos sobre listas de espera quirúrgica, la definición de los criterios que se incorporarán al sistema de información, por ejemplo, en cuanto a priorización de los pacientes, la protocolización de los procesos más frecuentes así como en la propuesta de tiempos máximos de espera a efectos de garantizar que, una vez superado el tiempo establecido, el paciente pueda optar entre permanecer en lista de espera en su propio hospital o elegir otro centro para realizar la intervención.

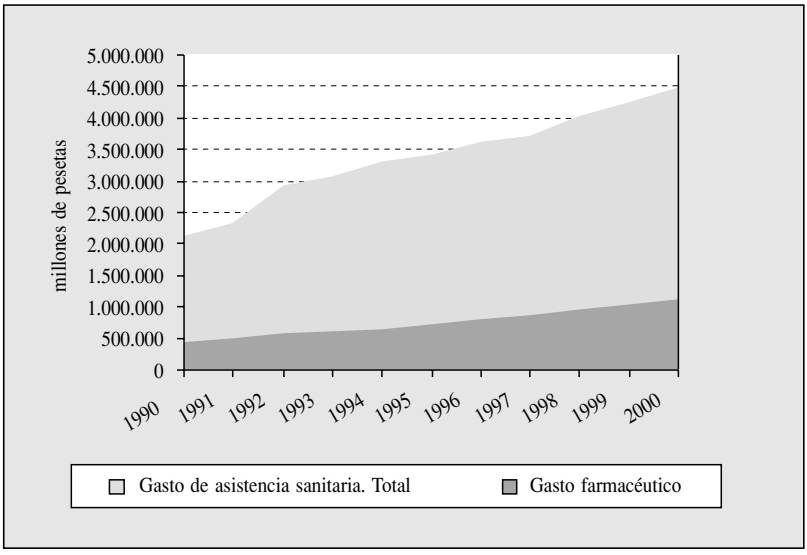
2.2.3. **Política de uso racional del medicamento**

La política de uso racional del medicamento y de racionalización del gasto farmacéutico tienen como objetivo reducir la importancia del medicamento en el Sistema Nacional de Salud. Ciertamente, el sistema sanitario público debe hacer frente a una demanda asistencial creciente— condicionada, como es sabido, por la confluencia de múltiples factores demográficos, tecnológicos y de cultura sanitaria— que requiere un esfuerzo presupuestario cada vez mayor. Dentro del gasto sanitario público la prestación farmacéutica sigue

absorbiendo una parte demasiado importante (gráfico III-7), tanto en relación a las otras partidas[37] como en comparación con otros países (Anexo III-2).

No obstante, como el CES ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, el interés por controlar el gasto público no debe empañar la necesidad de profundizar en la racionalización del consumo de medicamentos en nuestro país, objetivo prioritario que debe involucrar a todos los agentes que intervienen en el sistema sanitario, desde los propios usuarios a través de una información adecuada, hasta los profesionales de la salud a través de programas de formación continua que insistan en este aspecto. A este

GRÁFICO III-7
EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO Y DEL GASTO FARMACÉUTICO, 1990-2000



Fuente: Elaboración propia a partir de: MTAS, *Informe Económico Financiero de los Presupuestos de la Seguridad Social* de 2001 (el gasto sanitario de 2000 se refiere al presupuestado) y MSC, Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, Subdirección General de Asistencia y Prestación Farmacéutica.

[37] A título ilustrativo, cabe atender a la distribución por capítulos del presupuesto económico del Insalud gestión directa para el año 2001. Del total presupuestado para gestión directa (1.762.501.806), los tres capítulos más importantes son el de Personal, al que se destina el 45,73 por 100; el de Gasto de bienes corrientes y servicios, al que se dedica el 25,85 por 100 del presupuesto, y Farmacia, que representa el 22,44 por 100.

respecto, conviene recordar que en las ocasiones en que el CES ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre distintas medidas dirigidas a controlar el gasto farmacéutico, entre ellas las que se han adoptado o han entrado en vigor en el año 2000, ha subrayado la importancia de que la toma de decisiones económicas que afectan a un bien de primera necesidad, como el medicamento, esté presidida en todo caso por argumentos y justificaciones de naturaleza sanitaria.

Nuevas medidas para la contención del gasto farmacéutico

Durante el año 2000 se han adoptado nuevas medidas dirigidas a la racionalización del gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud. Entre ellas, la aprobación del Real Decreto-Ley 5/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los medicamentos, introdujo cambios con importantes repercusiones. En primer lugar, estableció un nuevo recorte del margen profesional de las oficinas de farmacia[38], manteniendo el porcentaje vigente hasta la entrada en vigor de esta norma —el 27,9 por 100 sobre el precio de venta al público sin impuestos (PVP s.i.)— únicamente para aquellas especialidades cuyo precio de venta de laboratorio sea igual o inferior a 13.035 pesetas, mientras que las que superen dicha cuantía estarán sometidas a un margen de 5.580 pesetas por envase. En cambio, para la venta y dispensación de genéricos se fijó un margen profesional más elevado —el 33 por 100 sobre PVP s.i.—, lo que pretende suponer un estímulo a la dispensación de este tipo de especialidades farmacéuticas por parte de las oficinas de farmacia. En el caso de los almacenes farmacéuticos, el margen vigente (9,6 por 100), se mantuvo también hasta el límite de 13.035 pesetas de precio, a partir del cual se fijó en 1.384 pesetas por envase.

Revisten especial relevancia desde el punto de vista de su repercusión en la reducción del gasto público en farmacia las par-

[38] Con anterioridad a la entrada en vigor del RDL, el margen profesional vigente para las oficinas de farmacia se había establecido por RD 165/1997, de 7 de febrero, por el que se establecen los márgenes correspondientes a la dispensación al público de especialidades farmacéuticas de uso humano, mientras el margen vigente de los almacenes farmacéuticos se había fijado en el RDL 6/1999, de 16 de abril, de Medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia, que modificaba el RD 164/1997, por el que se establecen los márgenes correspondientes a los almacenes mayoristas por la distribución de especialidades farmacéuticas de uso humano.

ticulares previsiones que se aplicarán, conforme al Real Decreto-Ley, a la facturación de recetas al SNS. En efecto, cuando se trata de medicamentos dispensados conforme a recetas emitidas por facultativos del sistema público, en la facturación a este último la oficina de farmacia deberá aplicar descuentos determinados conforme a una escala creciente[39] que tiene en cuenta la facturación mensual de cada oficina de farmacia por dichas recetas.

Por último, en el caso de las especialidades farmacéuticas publicitarias —aquellas que pueden ser objeto de publicidad, están destinadas a la prevención, alivio o tratamiento de síntomas menores y no son financiadas con fondos públicos— se autorizó a las farmacias a aplicar descuentos de hasta el 10 por 100 sobre el PVP s.i.

Puesta en marcha del sistema de precios de referencia

Pese a la aprobación de la regulación del sistema de precios de referencia a mediados de 1999[40], el inicio de su puesta en marcha no pudo despegar hasta que en julio de 2000 se produjo la determinación de los conjuntos homogéneos de presentaciones de especialidades farmacéuticas y los precios de referencia concretos a ellos referidos[41]. El CES, en su Dictamen emitido sobre la correspondiente OM, sin descender al detalle del contenido de la lista de precios de referencia, insistió en la necesidad de impulsar el mercado de medicamentos genéricos y de realizar campañas de difusión de su implantación entre profesionales y usuarios. En este campo durante el año 2000 se han podido apreciar avances con la puesta en marcha de campañas de información.

Sin embargo, en 2000 la puesta en funcionamiento de este sistema apenas ha podido comenzar a surtir efectos sobre el gasto pú-

[39] Las deducciones oscilan entre las 112.000 pesetas aplicables a partir de una facturación mensual de 6.200.000 hasta 3.686.000 pesetas fijadas para una facturación a partir de 42.000.000 pesetas.

[40] RD 1035/1999, de 18 de junio, por el que se regula el sistema de precios de referencia en la financiación de medicamentos con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad.

[41] Orden 13 de julio de 2000 por la que se determinan los conjuntos homogéneos de presentaciones de especialidades farmacéuticas y se aprueban los precios de referencia.

blico en farmacia, puesto que la efectividad de la obligación de sustitución por el farmacéutico, así como la aplicación de los nuevos precios a efectos de facturación por lo que se refiere a la parte del gasto satisfecho por el SNS conforme al nuevo sistema no entraron en vigor hasta el 1 de diciembre de 2000. No obstante, ya durante ese mes se pudo observar un ligero descenso (–1,1 por 100) de la factura en farmacia del Sistema Nacional de Salud en relación al mismo periodo del año anterior.

Prestación farmacéutica, menor crecimiento del gasto

Pese a ello, la evolución del gasto en prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud durante el primer semestre del año 2000 permite realizar un balance más positivo que en años anteriores, teniendo en cuenta la desaceleración que se observa en este periodo en relación al año anterior (cuadro III-7). Es posible, pues, que en ese año hayan comenzado a notarse los efectos de medidas adoptadas con anterioridad en el marco de la política de racionalización del gasto farmacéutico, entre las que cabe recordar —sin que sea posible de momento identificar en qué medida cada una de ellas ha influido en dicha desaceleración— la potenciación del mercado de genéricos, la reducción de los márgenes de los almacenes farmacéuticos o la regulación de los precios industriales máximos.

CUADRO III-7

GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO POR SERVICIOS DE SALUD, 1995-2000

(Miles de pesetas corrientes y porcentaje de variación sobre el año anterior)

Organismo gestor	1995		1996		1997		1998		1999		2000	
	M. ptas.	Var. %	M. ptas.	Var. %	M. ptas.	Var. %	M. ptas.	Var. %	M. ptas.	Var. %	M. ptas.	Var. %
Insalud	261.568	12,2	290.770	11,2	304.222	4,6	336.513	10,6	370.219	10,0	396.573	7,12
S. Andaluz	138.751	8,8	152.485	9,9	158.848	4,2	173.034	8,9	184.888	6,8	198.318	7,26
S. Canario	26.531	15,6	29.687	11,9	31.910	7,5	35.580	11,5	39.757	11,7	43.271	8,84
I. Catalán	120.323	13,7	136.418	13,4	145.750	6,8	160.770	10,3	176.778	9,9	190.019	7,49
S. Gallego	50.861	14,8	56.715	11,5	61.425	8,3	69.203	12,7	77.604	12,1	83.348	7,40
S. Navarro	9.488	12,3	10.432	10,0	10.932	4,8	12.207	11,7	13.607	11,5	14.588	7,21
S. Valenciano	87.523	14,7	97.179	11,0	102.199	5,2	112.959	10,5	126.167	11,7	135.935	7,74
S. Vasco	34.753	14,3	38.990	12,2	41.504	6,4	46.536	12,1	52.014	11,8	56.652	8,92
Total nacional	**729.799**	**12,5**	**812.677**	**11,4**	**856.790**	**5,4**	**946.804**	**10,5**	**1.041.035**	**10,0**	**1.118.707**	**7,46**

Fuente: Insalud, *Indicadores de la prestación farmacéutica*, varios años y Dirección General de Farmacia y Productos sanitarios. Año 2000, datos provisionales.

Una encuesta del CIS realizada a finales de 1999[42] daba cuenta de la, en general, buena valoración de las medidas de contención del gasto farmacéutico por parte de los ciudadanos: el 72 por 100 las consideraba positivas, mientras el 7,7 por 100 las juzgaba negativamente, al tiempo que el 19,5 por 100 no tenía formada opinión al respecto. Pese al todavía escaso conocimiento del sistema de precios de referencia (apenas el 26 por 100 de la población lo conocía), justificado por lo reciente de la aprobación del Real Decreto justo antes de la realización de la encuesta, entre los que lo conocían se podría apreciar una favorable predisposición hacia la participación en el sistema de precios de referencia: al 66,6 por 100 les parecía bien o muy bien otorgar mayores facultades a la labor de los farmacéuticos en el sentido de poder sustituir medicamentos previamente recetados por un médico por otro de iguales propiedades dentro del precio de referencia. No obstante, si bien el 50,2 por 100 aceptaría la sustitución por el farmacéutico, el 24,3 por 100 optaría por volver a su médico para que le recetase otra dentro del precio de referencia mientras el 16,9 por 100 pagaría la diferencia de precio.

[42] CIS, *Estudio n.º 2.371*, noviembre 1999, Barómetro sanitario 1999 (Tercera oleada).

ANEXO III-2
INDICADORES DE SANIDAD

Indicadores generales, 1997-1998	Alemania	Austria	Bélgica	Dinamarca	Finlandia	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Luxemburgo	Portugal	Reino Unido	Suecia	España	Media UE
Esperanza de vida al nacer, 1999 (años). Hombres	74,5	74,4	74,3	74,0	73,7	74,9	75,5	75,2	73,5	75,5	73,7	71,7	74,8	77,1	75,3	74,6
Esperanza de vida al nacer, 1999 (años). Mujeres	80,6	80,9	80,5	78,8	81,0	82,3	80,6	80,5	79,1	81,8	80,5	78,9	79,7	81,9	82,5	80,9
Esperanza de vida a los 65 años. Hombres (años)	15,3*	15,6*	15,6*	14,7*	14,9*	16,3**	16,2*	14,7*	13,7**	15,8**	14,7**	14,4*	15**	16,3*	16,4	15,5
Esperanza de vida a los 65 años. Mujeres (años)	19*	19,3*	19,8*	18*	19,1*	20,8**	18,7*	18,6*	19,5**	20,2**	19,2**	17,9*	18,5**	20*	20,5	19,3
Población > 65 (% población)	17,5*	17,5*	17,9*	15,5**	17,3*	15,4**	16**	13,3**	11,4**	16,3**	13,7**	16,3*	15,6**	17,5**	18,2	17,5
Mortalidad infantil/1.000 nacidos vivos	4,7*	4,9*	6**	4,7*	4,2*	4,7**	6,7*	5,2*	6,2*	5,8**	5*	6*	5,7*	3,6**	5**	5,1
Fecundidad (n.º hijos/mujer), 1999	1,4	1,3	1,5	1,7	1,5	1,8	1,3	1,6	1,9	1,2	1,7	1,5	1,7	1,5	1,2	1,5
Cobertura asistencia sanitaria pública (% población)	92,2**	99*	99*	100*	100,0	99,5**	100*	72**	100,0	100*	100*	100*	100*	100*	99,8	97,4
Recursos sanitarios, 1997-1998																
Personal sanitario/1.000 habitantes (S.1)	42,3**	—	—	18,9	43,7*	26,3**	—	23,8**	18,8*	22,6	13,1	13,1*	20,3*	34,8	9,4*	23,7
Camas hospitalarias/1.000 habitantes (S.2)	9,3*	8,9*	7,2**	4,6**	7,8*	8,5*	5**	11,3*	3,7**	5,9**	8*	4*	4,2*	3,8*	3,9*	6,4
Gasto sanitario, 1998																
Gasto sanitario (% PIB)	10,5*	8,3*	8,3*	8,3	6,9*	9,6*	8,3*	8,6*	6,1	8,4	5,9*	7,8*	7,0	8,4*	7,1*	8,0
Gasto sanitario por habitante ($ convertidos PPA) (S.3)	2.476,0	2.039,0	2.081*	2.186,0	1.502*	2.077,0	1.167*	2.070*	1.508,0	1.839,0	2.215*	1.237*	1.583,0	1.746,0	1.218*	1.796,3
Gasto sanitario público (% PIB)	7,9*	5,9	7,9*	6,8*	5,3*	7,3*	4,7*	6*	4,7	5,7	5,4*	5,2*	5,9	7*	5,4*	6,1
Gasto sanitario público por habitante ($ convertidos PPA) (S.4)	1.863,0	1.459,0	1.866*	1.784,0	1.146*	1.587*	663*	1.458*	1.162,0	1.251,0	2.044*	828*	1.333,0	1.463*	936*	1.389,5
Gasto farmacéutico público (% gasto sanitario público) (S.5)	12,2	14,1*	16,1**	8,5**	14,7*	21,5*	—	10,8*	9,3**	17,5	12,2*	25,8*	16,3**	12,8**	20,7**	15,2
Utilización, 1998																
Duración media hospitalización (días)	12,0	9,3*	11,3**	7,1*	10,9*	10,8**	8,2**	33,7*	7**	8,1**	15,3**	9*	9,8**	7,5**	8,12*	12,1
Admisión hospitalaria (% ingresos)	21,57*	27,8*	20**	19,5**	26,8*	22,9**	3,58**	10,8*	14,8*	18,55**	—	12*	15,2*	18,1**	10,1*	16,8

* Indica que los datos se refieren a 1998. En ausencia de marca, los datos se refieren a 1999.

** Indica que los datos son de 1997 o anteriores.

Fuentes: OCDE, *Health Data, 2000.* MTAS, Secretaría de Estado para la Seguridad Social. *Anexo al Informe Económico-Financiero de los Presupuestos de la Seguridad Social para 2001.*

ANEXO III-2 *(Continuación)*

INDICADORES DE RECURSOS Y ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO INSALUD-GESTIÓN DIRECTA

I. ATENCIÓN PRIMARIA	1995	1996	1997	1998
A) Cobertura				
Equipos de atención primaria (EAP)	1.040,0	1.083,0	1.134,0	1.161,0
Población atendida por EAP (%)	77,7	80,7	93,7	95,7
Población censal con tarjeta sanitaria (%)	90,7	100,0		
B) Accesibilidad de los usuarios				
Tiempo medio consulta (minutos)				
— Medicina General	6,0	6,6	6,2	6,2
— Pediatría	7,9	9,5		
Frecuentación (n.º consultas/hab./año) (%)				
— Medicina General	6,3	6,6	7,0	6,6
— Pediatría	6,2	6,9	7,2	6,9
Consultas con presión asistencial superior a 35 personas/día (%)	41,6	42,4	43,5	43,0
C) Recursos materiales				
Centros de Salud (1.041 EAP)	964			1.161
Consultorios	171			
Puntos de Atención Continuada	695			
Servicio Normal de Urgencias	76			
Centros de Orientación Familiar	66			
Unidad de Salud Mental	117			
Unidad de Psicoprofilasis Obstétricas	516			
Salas de Fisioterapia	185			
D) Recursos humanos (1)				
Facultativo (Médicos Generales)	9.474		9.935	1.042
Facultativo (Pediatras)	1.691		1.654	1.607
Resto Facultativo (Farmac., Odont., Técn., Salud)	492		520	526
Sanitario no Facultativo (ATS-DUE, Fisiot., Matrona)	10.123		10.374	10.542
Sanitario no Facultativo (Técn., Expec., Aux., Enf.)	1.058		1.132	1.187
No Sanitario	7.630		8.036	8.162

II. ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1995	1996	1997	1998
A) Actividad hospitalaria				
Ingresos	1.069.022	1.145.712	1.153.755	1.160.930
Estancias	9.772.725	9.799.684	9.556.560	9.429.987
Urgencias	4.451.506	4.641.574	4.845.212	5.021.685
Consultas externas (totales)	19.632.097	20.689.593	20.890.786	21.195.229
Intervenciones quirúrgicas	739.059	789.381	761.928	785.151
Trasplantes totales	1.892	2.046	2.348	2.201
B) Frecuentación hospitalaria				
Ingresos/1.000 hab.	77,64	82,70	83,28	82,60
Urgencias/1.000 hab.	323,33	335,04	349,74	357,30
Consultas externas/1.000 hab.	1.425,94	1.493,43	1.507,95	1.508,06
Intervenciones quirúrgicas/1.000 hab.	48,24	53,63	55,00	55,86
Estancia media (días) (2)	9,14	8,55	8,28	8,12
Índice de ocupación (3)	82,44	81,88	80,67	79,92
C) Recursos materiales				
Hospitales propios	79	—	82	82
Hospitales concertados	84	—	105	108
Centros Especialidades Perifér.	99	—	—	—
Camas instaladas propias	36.417	—	37.188	37.477
Camas concertadas	14.876	—	21.722	21.916
Quirófanos instalados	784	—	825	833
Paritorios	163	—		
Locales de Consulta	4.662	—	4.964	5.149
D) Recursos humanos				
Facultativos	16.220	—	16.424	16.450
Resto Facultativo (Farmac., Odont., Técn., Salud)		—	—	—
Sanitario no Facultativo (ATS-DUE, Fisiot., Matrona)	30.438	—	30.044	29.924
Sanitario no Facultativo (Técn., Expec., Aux., Enf.)	24.404	—	24.938	25.374
No Sanitario	29.638	—	29.657	29.654

(1) El personal facultativo no incluye médicos, ni los ATS y matronas de APD no integrados en EAP (que totalizan, en 1995: 387, 201 y 5; y en 1997: 441, 245 y 181, respectivamente).
(2) Definición ratio: EM = n.º estancias/n.º ingresos.
(3) Definición ratio: 10= (n.º estancias/promedio anual camas en funcionamiento x 365 días) x 100.

Fuente: MTAS, Secretaría de Estado para la Seguridad Social. *Anexo al Informe Económico-Financiero de los Presupuestos de la Seguridad Social para 2001* (hasta 1998: Presupuestos de SS).

ANEXO III-2 *(Continuación)*

TERRITORIO INSALUD GESTIÓN DIRECTA (1)

Indicadores sanitarios	Aragón		Asturias		Baleares		Cantabria		Castilla-La Mancha		Castilla y León		Extremadura	
Población (miles), 1998	1.175,3		1.060,4		736,9		526,4		1.707,3		2.496,1		1.080,5	
Esperanza de vida al nacer (años)	78,7		77,0		77,2		78,1		78,5		79,4		77,9	
Población mayor 65 años (% población)	20,3		20,9		16,1		18,3		19,4		21,2		17,8	
Incidencia SIDA/1 millón hab.	822,3		831,0		1.799,2		885,9		497,6		708,4		596,6	
Acc. tráfico con víctimas/100.000 hab.	12,5		15,7		10,8		12,0		13,2		13,1		13,4	
Acc. laborales c/baja/ 1.000 trabajadores	45,4		61,5		83,1		46,9		48,6		38,5		34,8	
Fumadores 16 y más años (% población)	34,0		35,0		34,0		42,0		32,0		35,0		37,0	
Bebedores excesivos (% población)	3,7		0,5		1,1		3,6		4,5		3,2		4,4	
Drogodependientes opiáceos-cocaína/ 100.000 hab.	60,0		131,0		134,7		71,3		45,8		62,0		95,6	
Cobertura asistencia sanitaria pública (% población)	93,4		96,6		95,1		95,6		94,7		93,2		93,7	
% satisfechos con el sistema sanitario público	68,6		73,9		64,9		n.d.		52,0		66,1		75,3	
Recursos sanitarios														
Ordenación territorial														
Área de Salud/Región/ Área sanitaria (n.º total)	5		8		3		4		7		11		8	
Zonas básicas de salud (n.º total)	121		74		46		n.d.		198		245		103	
Atención primaria pública														
Centros de salud públicos (n.º total)	110		78		42		32		184		217		99	
Consultorios rurales (n.º total)	874		137		37		n.d.		200		100		379	
Cobertura EAP (% población atendida)	90,0		89,7		84,0		67,3		93,4		91,6		93,4	
Hospitales	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas
Total hospitales y camas/ 10.000 hab.	27	45,39	24	36,98	19	42,05	11	41,91	31	29,92	53	46,11	17	36,73
Públicos	20	38,37	11	28,93	8	29,30	5	29,43	19	27,32	31	34,33	11	33,61
SNS	8	24,76	9	25,05	3	16,65	3	26,15	12	22,15	15	23,42	8	23,85
Otros	12	13,61	2	3,87	5	12,65	2	3,29	7	5,17	16	10,91	3	9,75
Privados	7	7,03	13	8,05	11	12,75	6	12,48	12	2,60	22	11,77	6	3,12
Benéficos	2	3,81	6	5,16	2	2,44	2	9,02	0	0,00	14	9,36	2	1,87
No benéficos	5	3,21	7	2,89	9	10,31	4	3,46	12	2,60	8	2,42	4	1,26
Alta tecnología hospitalaria	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.
TAC	6	3	9	2	4	6	4	0	9	6	15	3	7	1
Litrotriptor	1	1	1	0	1	1	1	0	2	0	0	2	0	0
Resonancia magnética	1	1	1	2	0	3	1	0	0	3	0	2	0	0
Equipos de megavoltaje	3	0	4	0	2	2	3	1	0	1	4	0	2	0

ANEXO III-2 *(Continuación)*

TERRITORIO INSALUD GESTIÓN DIRECTA (1)

Indicadores sanitarios	Aragón		Asturias		Baleares		Cantabria		Castilla-La Mancha		Castilla y León		Extremadura	
Personal sanitario	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.
Médico Atención Primaria/1.000 hab.	0,84		0,65		0,59		nd.		0,78		0,98		0,78	
Hospitales														
Médico contratado/ 1.000 hab.	1,57	n.d.	1,33	n.d.	0,98	n.d.	1,19	n.d.	1,02	n.d.	1,21	n.d.	1,03	n.d.
Médico contratado/cama funcionante	0,37	0,16	0,40	0,19	0,28	0,11	0,37	0,06	0,35	0,15	0,34	0,04	0,30	0,06
Enfermera/cama funcionante	0,68	0,18	0,74	0,22	0,60	0,35	0,77	0,07	0,64	0,20	0,61	0,08	0,58	0,15
Auxiliar enfermería/cama funcionante	0,62	0,41	0,64	0,29	0,60	0,44	0,76	0,34	0,56	0,43	0,51	0,22	0,53	0,16
Gasto sanitario público														
Compras y gastos hospitalarios/hab./año (miles ptas.)	63,52		59,53		57,52		61,49		43,98		52,31		46,65	
Inversiones hospitalarias/ hab./año (miles ptas.)	3,63		3,65		2,47		1,82		0,70		2,62		1,85	
Ingresos y fuentes financiación/hab./año (miles ptas.)	63,89		59,94		57,69		61,63		43,81		52,62		46,71	
Gasto sanitario privado														
Gasto anual medio por hogar (ptas.)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
Utilización														
Utilización subjetiva														
Consultas al médico (/1.000 hab.)	1.092,05		848,12		859,88		713,94		929,75		887,82		538,70	
Consulta a dentista (en miles)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
Hospitalización (ingresos/1.000 hab.)	116,02		108,12		152,39		97,15		90,15		101,77		93,90	
Urgencias (/1.000 hab.)	397,10		318,66		539,04		445,20		319,25		310,10		318,70	
Aportación de la población protegida sobre el consumo farmacéutico total (%)	7,05		6,13		7,60		6,83		7,29		6,88		7,98	
Utilización registrada														
Frecuentación médico 1.er nivel (consultas/ 1.000 hab.)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
Frecuentación urgencia Atención Primaria (urgencias/1.000 hab.)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
Frecuentación hospitalaria (altas/1.000 hab.)	115,66		107,67		152,31		96,41		89,76		101,46		93,72	
Altas financiac. pública/ 1.000 hab.	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
Índice ocupación (%)	78,1		82,0		78,1		83,5		80,1		79,4		81,0	
Índice de rotación enfermo-cama	25,2		28,6		35,5		22,8		29,2		21,71		25,0	
Estancia media (días)	11,3		10,5		8,0		13,4		10,0		13,4		11,8	
Frecuentación de urgencia hospitalaria (urgencias/1.000 altas)	343,33		295,96		353,91		461,78		355,67		305,64		340,06	
Consumo fármacos. Gasto hab./año (ptas.)	29.042		28.744		21.944		26.295		28.615		25.706		27.984	
Recetas/hab./año	15,59		14,82		12,29		14,45		16,17		13,98		15,89	

ANEXO III-2 *(Continuación)*
TERRITORIO INSALUD GESTIÓN DIRECTA (2)

Indicadores sanitarios	Madrid		Murcia		La Rioja		Ceuta y Melilla		T. Insalud	
Población (miles), 1998	5.027,9		1.097,5		259,479		136,1		15.460,1	
Esperanza de vida al nacer (años)	78,9		77,5		78,4		75,3		77,9	
Población mayor 65 años (% población)	14,4		14,3		18,9		10,2		17,4	
Incidencia SIDA/1 millón hab.	2.459,5		775,7		1.225,1		1.180,0		1.071,0	
Acc. tráfico con víctimas/100.000 hab.	8,8		13,3		15,3		5,6		12,2	
Acc. laborales c/baja/1.000 trabajadores	48,8		71,0		53,7		25,1		53,2	
Fumadores 16 y más años (% población)	37,0		40,0		35,0		—		36,1	
Bebedores excesivos (% población)	2,4		0,8		1,0		1,2		2,4	
Drogodependientes opiáceos-cocaína/ 100.000 hab.	94,5		105,4		103,8		228,4		103,0	
Cobertura asistencia sanitaria pública (% población)	91,5		92,8		95,3		78,2		92,7	
% satisfechos con el sistema sanitario público	45,1		43,8		64,5		n.d.		61,6	
Recursos sanitarios										
Ordenación territorial										
Área de Salud/Región/Área sanitaria (n.º total)	11		6		1		2		66	
Zonas básicas de salud (n.º total)	247		70		17		2		1.123	
Atención primaria pública										
Centros de salud públicos (n.º total)	224		69		17		6		1.078	
Consultorios rurales (n.º total)	150		105		6		0		1.988	
Cobertura EAP (% población atendida)	86,5		89,1		87,5		97,6		88,2	
Hospitales	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas	N.º	c a m a s
Total hospitales y camas/10.000 hab.	75	40,65	23	31,18	5	35,92	4	36,08	289	38,45
Agudos	63	21.173,00	18	3.289,00	4	764,00	4	535,00		5.081,91
Públicos	32	27,78	10	22,41	3	32,24	4	36,08	154	30,89
SNS	16	18,03	6	17,15	1	18,90	2	24,54	83	21,88
Otros	16	9,75	4	5,26	2	13,34	2	11,55	71	9,01
Privados	43	12,87	13	8,77	2	3,68	0	0,00	135	7,56
Benéficos	11	5,38	5	4,70	0	0,00	0	0,00	44	3,79
No benéficos	32	7,50	8	4,07	2	3,68	0	0,00	91	3,76
Alta tecnología hospitalaria	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.
TAC	29	23	5	3	1	0	0	0	89	47
Litrotriptor	4	6	0	0	0	0	0	0	10	10
Resonancia magnética	8	13	0	2	0	0	0	0	11	26
Equipos de megavoltaje	24	5	2	0	1	0	0	0	45	9
Personal sanitario	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.
Médico Atención Primaria/1.000 hab.	0,65		0,57		0,77		0,49			
Hospitales										
Médico contratado/1.000 hab.	1,37	n.d.	1,06	n.d.	1,10	n.d.	1,39	n.d.	1,20	n.d.
Médico contratado/cama funcionante	0,43	0,11	0,43	0,05	0,33	0,03	0,38	0,00	0,36	0,09
Enfermera/cama funcionante	0,82	0,24	0,89	0,09	0,65	0,06	0,77	0,00	0,70	0,15
Auxiliar enfermería/cama funcionante	0,69	0,38	0,78	0,30	0,57	0,36	0,67	0,00	0,63	0,30
Gasto sanitario público										
Compras y gastos hospitalarios/hab./año (miles ptas.)	72,42		49,04		44,45		74,81		56,88	
Inversiones hospitalarias/hab./año (miles ptas.)	3,09		2,27		1,08		2,23		2,31	
Ingresos y fuentes financiación/hab./año (miles ptas.)	72,54		49,25		44,55		74,81		57,04	
Gasto sanitario privado										
Gasto anual medio por hogar (ptas.)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	

ANEXO III-2 *(Continuación)*

TERRITORIO INSALUD GESTIÓN DIRECTA (2)

Indicadores sanitarios	Madrid	Murcia	La Rioja	Ceuta y Melilla	T. Insalud
Utilización					
Utilización subjetiva					
Consultas al médico (/1.000 hab.)	942,56	832,89	1.115,20	951,19	882,92
Consulta a dentista (en miles)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Hospitalización (ingresos/1.000 hab.)	111,33	102,90	92,90	126,20	108,44
Urgencias (/1.000 hab.)	427,96	433,95	334,15	562,87	400,63
Aportación de la población protegida sobre el consumo farmacéutico total (%)	8,51	8,24	7,49	8,83	7,59
Frecuentación médico 1.er nivel (consultas/1.000 hab.)	4.623,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Frecuentación urgencia Atención Primaria (urgencias/1.000 hab.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Frecuentación hospitalaria (altas/1.000 hab.)	111,21	102,24	93,81	126,03	108,21
Altas financiac. pública/1.000 hab.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Índice ocupación (%)	76,3	79,1	86,8	64,0	78,9
Índice de rotación enfermo-cama	26,9	31,9	25,8	34,3	27,9
Estancia media (días)	10,4	9,06	12,3	6,8	10,6
Frecuentación de urgencia hospitalaria (urgencias/1.000 altas)	384,82	424,44	356,20	446,62	369,86
Consumo fármacos. Gasto hab./año (ptas.)	21.434	28.266	26.524	18.353	25.719
Recetas/hab./año	12,29	15,85	14,46	11,63	14,31

Fuente: MSC, *Sistema Nacional de Salud. Servicios de Salud. Datos y cifras (2.ª edición), 1995*. Insalud, *Memoria 1999. Libro Blanco de los Servicios Sanitarios Asturianos 2000 (1.er borrador). Plan de Salud de Extremadura 1997-2000 y 2001-2004*.

ANEXO III-2 *(Continuación)*

COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON GESTIÓN DEL INSALUD TRANSFERIDA

Indicadores sanitarios, 1999	Andalucía		Canarias		Cataluña		C. Valenciana		Navarra		País Vasco		Galicia	
Población (miles), 1998	7.188,2		1.589,9		6.058,7		3.931,2		528,9		2.053,8		2.716,6	
Esperanza de vida al nacer (años)	77,94		78,04		78,20		77,20		79,00		78,00		77,75	
Población mayor 65 años (% población)	13,91		11,59		17,11		16,26		18,03		16,69		19,36	
Incidencia SIDA/ 1 millón hab.	927,49		748,5		1.871,1		1.014,6		1.132,2		1.880,3		914,6	
Acc. tráfico con víctimas/ 100.000 hab.	11,40		7,30		11,60		14,50		15,30		9,80		18,60	
Acc. laborales c/baja/ 1.000 trabajadores	44,12		62,01		63,92		67,56		60,82		51,51		36,84	
Fumadores 16 y más años (% población)	36,00		36,00		35,00		36,00		38,00		39,00		35,00	
Bebedores excesivos (% población ad.)	3,40		2,20		1,70		1,30		2,20		2,10		6,30	
Drogodependientes opiáceos-cocaína/ 100.000 hab.	103,36		303,70		88,40		60,20		32,40		98,40		130,80	
Cobertura asistencia sanitaria pública (% población)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
% satisfechos con el sistema sanitario público	67,5		53,0		—		—		—		—		63,6	
Recursos sanitarios														
Ordenación territorial														
Área de Salud/Región/ Área sanitaria (n.º total)	33		7		7		20		—		7		11	
Zonas básicas de salud (n.º total)	351		118		82		244		—		—		93	
Atención primaria pública														
Centros de salud públicos (n.º total)	291		n.d.		262		238		80		315		224	
Consultorios locales (n.º total)	625		n.d.		n.d.		562		—		—		269	
Cobertura EAP (% población atendida)	68,6		96,4		73,6		—		—		—		86,51	
Hospitales	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas	N.º	camas
Total hospitales y camas en func./10.000 hab.	84	30,13	49	48,46	176	48,62	56	29,24	14	48,92	51	41,70	63	38,75
Públicos	35	23,19	23	32,35	34	17,30	30	24,57	6	31,56	20	27,11	22	27,80
SNS	30	21,81	8	16,17	12	7,19	24	20,08	6	31,56	20	27,11	15	23,41
Otros	5	1,38	15	16,17	22	10,11	6	4,50	—	—	—	—	7	4,39
Privados	49	6,64	26	16,11	142	31,33	26	4,67	8	17,36	31	14,59	41	10,95
Benéficos	11	2,60	5	2,30	50	11,94	3	1,04	5	14,43	9	7,13	4	1,79
No benéficos	38	4,34	21	13,81	92	19,38	23	3,63	3	2,93	22	7,46	37	9,17
Alta tecnología hospitalaria/ 1.000 hab.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.	H. públ.	H. priv.
TAC	20,10	3,10	28,12	2,18	14,42	12,11	30,24	5,92	36,44	23,69	31,36	6,68	36,44	23,69
Rayos X	497,96	65,44	291,62	101,61	254,91	386,78	436,59	71,67	408,38	172,42	446,32	76,17	417,18	130,96
Resonancia magnética	1,25	1,51	—	1,18	0,95	3,98	1,97	2,13	10,91	8,94	4,46	6,90	4,02	6,16
Gammagrafía	7,10	0,03	10,20	2,22	6,87	1,23	6,63	0,87	11,87	6,65	11,90	4,26	1,34	7,08
Personal sanitario	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.	S. públ.	S. priv.
Médico Atención Primaria/1.000 hab.	0,70	n.d.	0,47	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,3895	n.d.
Hospitales														
Médico contratado/ 1.000 hab.	0,11	n.d.	0,11	n.d.	0,12	n.d.	0,10	n.d.	0,14	n.d.	0,11	n.d.	0,1066	n.d.

ANEXO III-2 *(Continuación)*

COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON GESTIÓN DEL INSALUD TRANSFERIDA

Indicadores sanitarios, 1999	Andalucía		Canarias		Cataluña		C. Valenciana		Navarra		País Vasco		Galicia	
Médico contratado/ cama funcionante	0,43	0,08	0,29	0,10	0,34	0,17	0,38	0,16	0,33	0,19	0,3898	0,04	0,3303	0,12
Enfermera/cama funcionante	0,88	0,17	0,58	0,11	0,65	0,33	0,78	0,23	0,73	0,64	0,73	0,17	0,62	0,15
Auxiliar enfermería/ cama funcionante	0,72	0,36	0,63	0,30	0,47	0,37	0,65	0,36	0,67	0,37	0,63	0,29	0,48	0,32
Gasto sanitario público														
Compras y gastos hospitalarios/hab./año (miles ptas.)	53,91		65,16		64,44		50,47		80,13		63,73		52,16	
Inversiones hospitalarias/hab./año (miles ptas.)	2,48		3,63		3,86		1,28		3,63		3,03		1,90	
Ingresos y fuentes financiación/hab./año (miles ptas.)	53,98		66,43		63,57		50,47		80,83		63,78		52,54	
Gasto sanitario privado														
Gasto anual medio por hogar (ptas.)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
Utilización														
Utilización subjetiva, 1999														
Consultas al médico (/1.000 hab.)	764,34		711,95		1.136,37		624,98		905,62		807,28		1.552,25	
Consulta a dentista (en miles)	501,35		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
Hospitalización (ingresos/1.000 hab.)	98,11		103,28		103,21		102,13		135,81		118,49		104,08	
Urgencias (/1.000 hab.)	424,03		353,77		554,32		403,98		424,22		370,97		327,47	
Aportación de la población protegida sobre el consumo farmacéutico total (%)	7,42		8,48		6,70		7,59		7,83		6,87		6,64	
Utilización registrada														
Frecuentación médico 1.er nivel (consultas/ 1.000 hab.)	678,75		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		464,31	
Frecuentación urgencia Atención Primaria (urgencias/1.000 hab.)	424,03		353,77		554,32		403,98		424,22		370,97		327,47	
Frecuentación hospitalaria (altas/1.000 hab.)	98,26		103,23		130,08		101,58		133,11		116,69		103,46	
Altas financiac. pública/ 1.000 hab.	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
Índice ocupación hospitalaria (%)	76,30		81,80		83,13		74,81		78,77		78,61		76,79	
Índice de rotación enfermo-cama	31,88		20,88		26,40		33,85		26,80		27,66		31,88	
Estancia media (días)	8,74		14,3		11,49		8,07		10,73		10,37		9,05	
Frecuentación de urgencia hospitalaria (urgencias/1.000 altas)	432,1986		342,7008		426,1		397,7		318,7		317,9		316,5	
Consumo fármacos. Gasto hab./año	25.721		25.007		29.178		32.094		25.725		25.326		28.567	
Recetas/hab./año	14,71		13,89		15,38		17,80		13,82		12,75		14,36	

Fuentes: INE, *Estadística de Indicadores Hospitalarios 1995 (1999)* y *Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado 1995*. *Encuesta Nacional de la Salud 1993*. Fundación La Caixa, *Anuario Social de España 2000*. Insalud *Indicadores de la prestación farmacéutica 1999*. Consejería de Salud Andalucía, *Anuario Estadístico 1999*. *Plan Andaluz de Salud 1999*. Servicio Canario de Salud, *Plan de Salud de Canarias 1999*. Servicio Catalán de Salud, Memoria de Actividad 1999. Consejería de Sanidad Valenciana, información on-line recursos sanitarios (actualizada). Servicio de Docencia, Investigación y Desarrollo Sanitarios, *Plan de Salud de Navarra 2001-2005*. Sergas (Servicio Gallego de Salud), *Memoria 1999, Plan de Salud de Galicia 1998-2001*. Servicio Vasco de Salud, *Memoria 1999*.

2.3. VIVIENDA

A lo largo de 2000, los factores más ligados a la demanda de vivienda están mostrando ciertos síntomas de agotamiento: se ha ralentizado el ritmo de creación de empleo y se está produciendo una moderación de los salarios reales. Aunque la confianza de los consumidores se mantiene en niveles elevados, el alza de los tipos de interés y la elevación de los precios han empeorado las expectativas de los consumidores, lo que podría llevar a un enfriamiento del mercado en el medio y largo plazo. Por otra parte, también el sector turístico comienza a dar muestras de cierta desaceleración.

Además, el empeoramiento de la capacidad adquisitiva de las familias, el aumento en su esfuerzo financiero y la pérdida de la capacidad de compra, podrían producir algunos cambios en el comportamiento de la demanda hacia superficies menores, localizaciones más baratas, créditos con plazo de amortización más largos, una mayor demanda de vivienda social y, posiblemente, una menor demanda residencial a medio plazo.

Entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la edificación

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE), objeto de amplio comentario en la anterior edición de esta Memoria, tuvo su entrada en vigor el día 6 de mayo de 2000. A través de esta Ley se define la responsabilidad de los distintos agentes intervinientes en el proceso de la construcción, además de establecer un sistema de garantías que asegure la calidad de la construcción. En cuanto a este sistema actualmente, la única garantía de cobertura obligatoria es la de daños que afecten a la resistencia mecánica y estabilidad de la estructura del edificio, mediante la figura de un seguro decenal. Cabe destacar, en este sentido, que, conforme al análisis efectuado por el Ministerio de Fomento este seguro puede implicar un encarecimiento del precio de la construcción de un 0,8 por 100.

Pese al escaso tiempo transcurrido, puede señalarse, con carácter general, que la Ley ha arrancado con carencias, desconfianza y lentitud, así como que aún no se observan recortes en el número de reclamaciones y coste por deficiencias en la edificación.

La Ley ha dejado pendiente de desarrollo diversos aspectos esenciales, de gran influencia en su futura evolución y consolidación,

tales como: el seguro trienal, de habitabilidad, el seguro anual, o de acabados. Para todo ello se prevé la aprobación por el Gobierno de un Código Técnico de la Edificación, en el que se establecerían los parámetros adecuados para satisfacer la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de los edificios.

2.3.1. **Panorama general**

El estudio de las necesidades residenciales debe ser tratado desde dos ópticas, la oferta residencial y la demanda potencial, siendo especialmente relevante el análisis de aquellos aspectos que permiten a la demanda potencial acceder al mercado, como son el nivel de ingresos, la disponibilidad financiera, los costes de las hipotecas y el papel del alquiler para ajustar las necesidades de vivienda.

En relación con el entorno europeo, la estructura de la vivienda en España[43], tiene similitudes con la de los países de la cuenca mediterránea, pero con rasgos aún más acentuados: el tamaño de los hogares es superior a la media, al tener un menor porcentaje de hogares unipersonales, presenta el mayor número de viviendas por habitante, por el elevado peso en este país de la segunda residencia y el sector turístico, y el régimen de tenencia dominante es la propiedad. Portugal, España y Grecia tienen sectores especialmente grandes de viviendas ocupadas por sus propietarios, unos sectores mínimos de vivienda en alquiler (un 14,7 por 100, frente a un 35,8 por 100 como media en la Unión Europea), y unos sectores privados de alquiler de baja calidad y en declive. En España, el gasto del Estado en política de vivienda es inferior al 1 por 100 del PIB.

El parque de viviendas, junto el dinamismo del sector de la construcción en la iniciación de nuevas viviendas, marcan la disponibilidad existente y son, por tanto, claros indicadores de la oferta. Respecto al parque de viviendas, parece suficiente para dar cobertura a las necesidades residenciales, dada su gran renovación en los últimos decenios, que garantiza cierto nivel de calidad, y el fluido ritmo de construcción en la media de los mercados en España.

[43] European Commission, *Housing Statistics in the European Union*, 1998.

Desde el comienzo del ciclo expansivo del mercado inmobiliario, en 1992, se han iniciado en España más de 3 millones de viviendas. Sin embargo, tanto el parque como su desarrollo no se distribuyen homogéneamente en el territorio nacional. Los mayores incrementos en el último decenio[44] se observan en Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias (cuadro III-8).

Ralentización en el desarrollo de la oferta

El sector de la construcción ha venido mostrando desde 1998 una evolución favorable, como consecuencia de la buena marcha de la edificación. El segmento de la construcción inmobiliaria es el principal protagonista de este buen momento del sector, tanto por la construcción de nuevas viviendas como por la rehabilitación de las existentes (cuadro III-9).

CUADRO III-8

STOCK DE VIVIENDAS, VIVIENDAS INICIADAS Y CRECIMIENTO DEL STOCK, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidades Autónomas	Stock viviendas 1991	Viviendas iniciadas		Crecimiento del Stock	
		1998-2000	1992-2000	1997-1999 (%)	1992-1999 (%)
Nacional	17.160.175	1.616.173	3.390.385	8,2	16,4
Andalucía	2.830.028	301.431	591.329	8,8	16,9
Aragón	574.011	34.095	80.344	5,5	11,9
Asturias	462.283	38.863	72.532	6,2	11,9
Baleares	414.035	49.606	87.920	10,4	17,7
Canarias	581.037	89.623	167.204	13,4	23,4
Cantabria	225.789	29.650	59.511	11,2	21,8
Castilla-La Mancha	1.269.443	59.517	158.716	4,2	10,8
Castilla y León	819.427	83.420	192.190	9,1	19,9
Cataluña	2.748.541	263.025	538.452	8,4	16,2
Comunidad Valenciana	2.087.123	233.095	449.288	9,3	17,4
Extremadura	470.055	31.507	69.566	5,7	12,4
Galicia	1.132.559	81.505	180.221	6,2	13,4
Madrid	1.928.940	190.580	447.960	9,3	20,3
Murcia	478.870	52.465	116.254	9,9	20,4
Navarra	202.041	18.033	44.348	7,8	18,6
País Vasco	773.986	46.800	106.947	5,4	11,6
La Rioja	128.346	12.958	27.603	9,2	18,0

Fuente: Boletín BBVA, julio de 2000.

[44] El crecimiento del parque no se puede calcular hasta el año 2000 por la falta de datos disponibles sobre viviendas demolidas por Comunidades Autónomas.

CUADRO III-9
LICENCIAS MUNICIPALES DE OBRA, 1996-2000

Año	Viviendas a construir (1)	Viviendas creadas en rehabilitación (2)	Viviendas a demoler (3)	Viviendas (1+2–3)
1996	256.151	9.805	8.346	257.610
1997	292.996	13.459	10.491	295.964
1998	350.431	13.655	12.638	351.448
1999*	392.208	12.624	13.947	390.885
Enero a octubre 2000**	357.312	11.743	12.540	356.515

* Los datos anteriores a 1999 no incluyen información del País Vasco.
** La información correspondiente al año 2000 es provisional.
Fuente: Ministerio de Fomento. *Boletín Estadístico.*

Sin embargo, en 2000, el crecimiento de los costes de los materiales de construcción (cuadro III-10), el fuerte incremento de los salarios del sector, el aumento de los costes financieros, la escasez de suelo edificable, y los elevados precios de los solares disponibles, están suponiendo una desaceleración en este ritmo de crecimiento. El VAB del sector de la construcción creció un 6,3 por 100 en el año 2000, lo que supone una desaceleración respecto al incremento del 8,7 por 100 que se recogió en 1999, según datos de la Contabilidad Nacional Trimestral.

CUADRO III-10
ÍNDICE DE COSTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, 1996-2000
(Base 1990 =100)

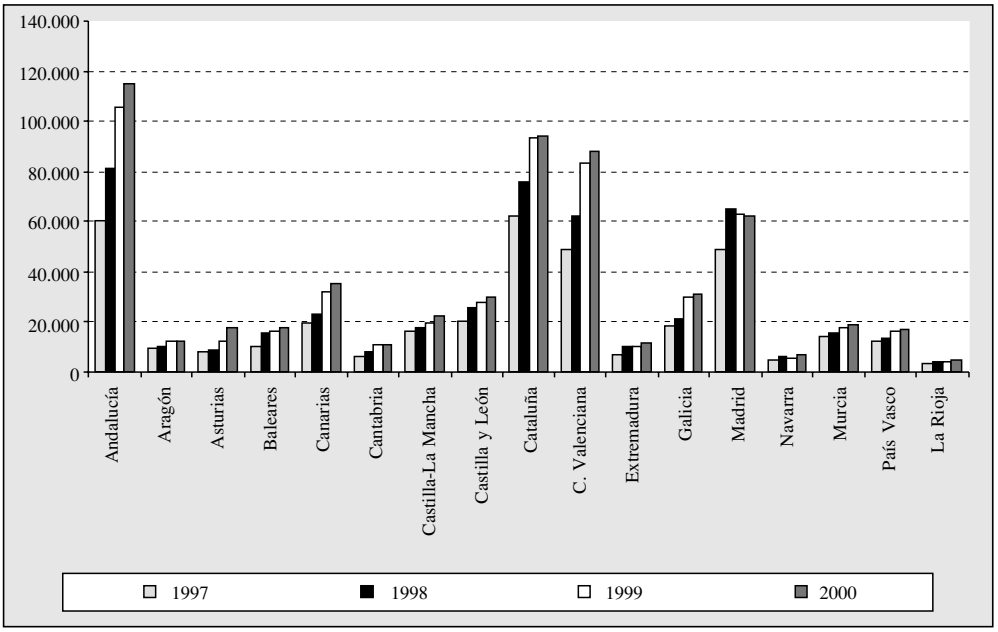
Año	Ponderados, consumo y mano de obra		Precios de la mano de obra	Materiales y consumos diversos	
	Total sector	Edificación		Total sector	Edificación
1996	125,6	125,2	142,6	115,5	115,2
1997	128,3	127,8	148,0	116,6	116,0
1998	130,1	130,0	152,3	116,9	117,1
1999	132,4	132,0	155,9	118,5	118,2
2000	139,8	137,6	161,2	127,1	124,0

Fuente: Ministerio de Fomento. *Boletín Estadístico.*

Los principales indicadores de actividad residencial muestran síntomas de esta desaceleración del crecimiento a lo largo del año 2000. Pero no se trata de una caída de la edificación, sino de un reajuste de los elevados volúmenes de producción de periodos anteriores. El nivel de iniciación de viviendas ha sido sólo un 6,5 por 100 superior al observado en 1999, a pesar del elevado número de viviendas iniciadas en España, que alcanza un total de 594.814 unidades en el año 2000. El número de viviendas terminadas asciende en el año a 366.612 como consecuencia lógica del elevado número de viviendas iniciadas en años anteriores.

El ritmo de edificación en los cuatro últimos años no se distribuye, por otra parte, de manera homogénea en el territorio nacional (gráfico III-8). El mayor ritmo de crecimiento en el número de viviendas iniciadas, por encima de la media nacional, se produce en Andalucía, Cantabria, Extremadura y Comunidad Valenciana, seguidas de Baleares, Canarias, Galicia y Asturias. Respecto al nú-

GRÁFICO III-8
VIVIENDAS INICIADAS* POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1997-2000

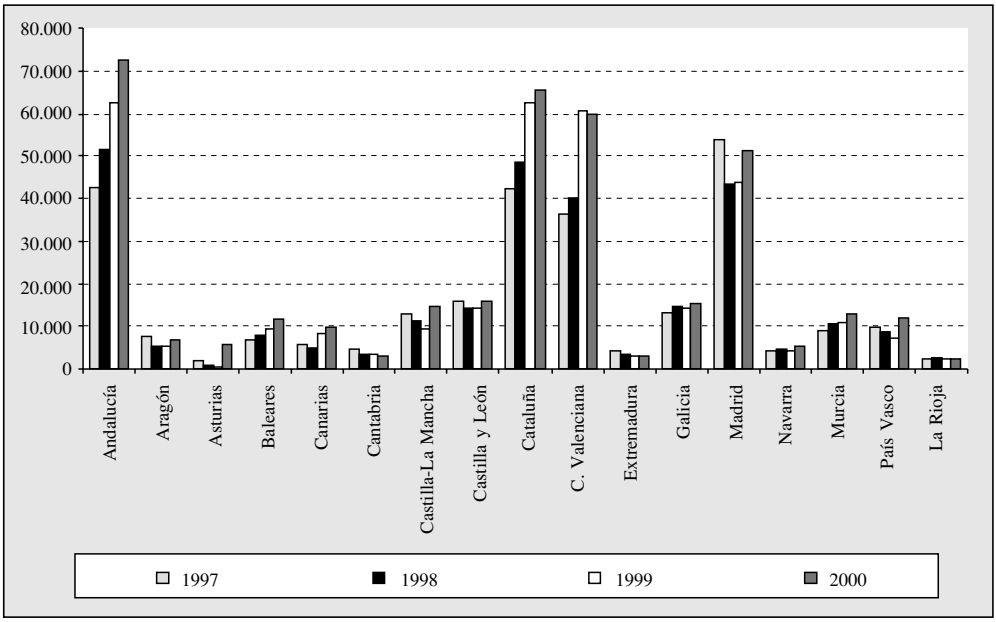


* Visados de dirección de obra. Obra nueva, ampliación y/o reforma de edificios.

Fuente: Ministerio de Fomento, *Visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos (Obras en edificación).*

GRÁFICO III-9

VIVIENDAS TERMINADAS* POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1997-2000



* Certificaciones fin de obra.

Fuente: Ministerio de Fomento. *Visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos (Obras en Edificación).*

mero de viviendas terminadas (gráfico III-9), los mayores crecimientos se dieron en Cataluña, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.

Señales de elevación de los precios

Los precios de la vivienda, siguiendo la tendencia recogida desde el verano de 1999, registraron una importante elevación a lo largo de 2000. La demanda inmobiliaria se mostró muy fuerte, lo que llevó a un gran dinamismo en este mercado, empujando los precios inmobiliarios al alza. En el año 2000, el precio medio fue de 150.905 pesetas por metro cuadrado construido, lo que ha supuesto un aumento del 14,5 por 100 respecto al año anterior. Los precios de la vivienda nueva subieron por encima de la media y, dentro de las usadas, los mayores incrementos se registraron en las de menos de un año y en las de entre uno y 20 años.

Los precios del metro cuadrado de la vivienda son muy diferentes en función de la zona geográfica de que se trate (cuadro III-11).

Además, el alza en los precios de la vivienda no ha sido de la misma magnitud en todas las Comunidades Autónomas. Los mayores incrementos en los precios (por encima de la media nacional) por orden de mayor a menor, se han producido en Baleares, País Vasco, La Rioja, Aragón, Canarias, Navarra y Cataluña, mientras en Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha y Asturias, la evolución de los precios fue mucho menor que la media. Los precios más elevados se encuentran en el País Vasco, Madrid y Baleares.

CUADRO III-11
PRECIO POR METRO CUADRADO DE VIVIENDA, 1996-2000
(Miles de pesetas)

Áreas	1996	1997	1998	1999	2000	Var. inter-anual 99/00
España	112,2	113,9	119,2	131,8	150,9	14,5
Comunidades Autónomas						
Andalucía	87,3	88,7	90,1	97,9	110,4	12,8
Aragón	91,0	90,6	97,1	109,4	128,0	17,0
Asturias	103,1	104,8	109,3	120,1	132,1	10,0
Baleares	100,0	106,6	123,3	155,5	191,8	23,3
Canarias	99,2	106,4	119,0	137,2	160,2	16,8
Cantabria	115,2	116,3	118,1	128,1	145,8	13,8
Castilla y León	103,7	105,2	112,8	121,3	136,3	12,3
Castilla-La Mancha	74,5	75,9	75,7	79,6	86,5	8,6
Cataluña	133,3	137,1	146,6	168,4	194,6	15,6
C. Valenciana	80,1	82,7	87,5	97	109,8	13,2
Extremadura	64,9	64,9	67,4	71,1	76,3	7,3
Galicia	93,9	95,1	99,1	102,1	110,0	7,8
Madrid	180,4	179,3	181,7	195,6	224,1	14,6
Murcia	67,5	70,4	74,7	79,9	89,5	12,1
Navarra	113,8	121,1	125,9	138,4	161,3	16,6
País Vasco	153,6	154,9	166,8	194,7	235,4	20,9
La Rioja	101,0	101,0	99,4	112,2	131,6	17,3
Áreas geográficas						
Madrid	209,6	206,6	209,1	225,3	259,2	15,1
Barcelona	185,6	188,4	200,0	233,2	271,9	16,6
Madrid y área de influencia	182,5	181,3	183,9	198,1	227,2	14,7
Barcelona y área de influencia	153,6	158,2	169,6	196,4	228,6	16,4
Municipios de 100 a 500 mil hab.	118,4	122,3	129,4	145,6	168,1	15,4
Municipios de menos de 100 mil hab.	89,0	90,8	95,3	104,3	118,0	13,1

Fuente: Ministerio de Fomento, *Boletín Estadístico*.

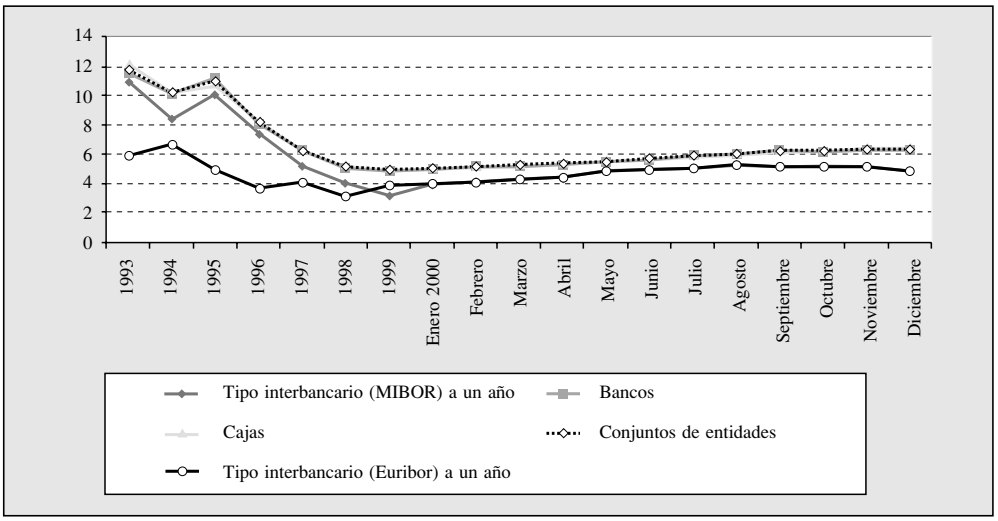
En algunas zonas turísticas, como Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana, los aumentos de precio se han moderado, lo que pudiera indicar cierta fatiga de algunos segmentos del mercado de segunda residencia.

En los casos de Madrid y Barcelona, donde la ausencia de oferta está impulsando los precios al alza, los precios de la vivienda han alcanzado, respectivamente, las 259.216 y 271.897 pesetas por metro cuadrado construido. Además, continúa el alza de los precios en Madrid, Barcelona y sus áreas de influencia, por encima de la media nacional, a pesar de partir de unos precios medios más elevados que los del resto de municipios de más de medio millón de habitantes.

Crecimiento moderado de los tipos de interés hipotecario

La incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria ha proporcionado una mayor estabilidad al mercado financiero español, lo que está facilitando que los movimientos de tipos de interés sean más suaves que los observados en el pasado. Pero el encarecimiento del precio del dinero[45], se ha traducido en incre-

GRÁFICO III-10
TIPOS DE INTERÉS HIPOTECARIOS, 1993-2000



Fuente: Banco de España, *Boletín Estadístico*.

[45] Tal y como se describe en el capítulo I, epígrafe 5.

mentos de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios y de los índices que sirven de referencia para los tipos de interés variable (gráfico III-10). Así, el tipo interbancario *euribor* a un año ha aumentado 1,05 puntos respecto a enero de 2000, situándose en el mes de diciembre en un 4,9 por 100. Durante el ejercicio, el nivel más alto se alcanzó en el mes de agosto. El tipo de interés medio efectivo anual aplicado por la banca, de acuerdo al IRPH que elabora el Banco de España, se situó a finales de año en el 6,26 por 100 y el de las Cajas de Ahorro en 6,49 por 100.

Se modera el impulso de la demanda

El efecto del alza de tipos es el descenso en la capacidad de endeudamiento de las familias, que implica una menor capacidad de compra en el mercado inmobiliario y, por tanto, un menor número de viviendas demandadas, reduciéndose así las tensiones en los precios. En la financiación a largo plazo, cada punto de aumento de los tipos hipotecarios reduce la capacidad media de endeudamiento en un 8 por 100[46].

En la segunda mitad de 2000, la demanda de viviendas ha mostrado un empuje más suave, lo que se ha traducido en un menor ritmo de ventas en el mercado inmobiliario y en repuntes de precios algo más moderados. La suave desaceleración del consumo familiar, junto con la revalorización de las viviendas y la reducción que se ha producido en la capacidad de endeudamiento de las familias, ha contribuido a moderar el impulso de la demanda en el mercado inmobiliario. En el conjunto del año 2000, se efectuaron en España un total de 800.000 tasaciones, lo que supone una reducción del 7 por 100 respecto de las efectuadas en 1999, marcando la ruptura de la tendencia ascendente observada desde 1996[47]. A pesar del incremento que han experimentado los tipos de interés en el año 2000, la financiación a las familias para la adquisición o rehabilitación de viviendas alcanzó un saldo superior a los 26,1 billones de pesetas, lo que ha supuesto un aumento interanual del 19,6 por 100.

El número de hipotecas sobre vivienda construida que se han realizado, a noviembre de 2000, es de 480.895, un 4,2 por 100 menos que el del año anterior. Sin embargo, aumenta el importe medio de las hipotecas tanto sobre la vivienda construida como sobre la proyectada (cuadro III-12).

[46] BBVA, *Situación inmobiliaria*, octubre 2000.
[47] BBVA, *Situación Inmobiliaria,* febrero 2001.

CUADRO III-12

HIPOTECAS INMOBILIARIAS, 1996-2000

(Número de inmuebles hipotecados e importes en millones de pesetas)

Fincas urbanas	1996	1997	1998	1999	2000
Vivienda construida					
Número	352.877	422.283	467.058	506.775	480.895
Importe total	2.760.417	3.540.601	4.312.752	5.177.970	5.476.184
Importe medio	7,82	8,38	9,23	10,21	11,39
Vivienda proyectada					
Número	60.105	56.954	62.507	79.007	79.761
Importe total	495.124	508.93	611.554	848.276	989.988
Importe medio	8,24	8,94	9,78	10,74	12,41
Solares					
Número	11.665	15.854	16.844	17.907	17.928
Importe total	249.175	373.597	533.973	699.586	905.821
Importe medio	21,36	23,56	31,70	39,07	50,53
Total					
Número	424.647	495.091	546.409	603.689	578.584
Importe total	3.504.716	4.423.161	5.458.279	6.725.832	7.371.993
Importe medio	8,25	8,93	9,99	11,14	12,74

Fuente: INE, *Boletín Mensual de Estadística.*

Empeoramiento en la accesibilidad a la vivienda

La capacidad de las familias para adquirir una vivienda depende de los precios, de la riqueza o ahorro previo, de los ingresos y de las condiciones de financiación existentes. Esta capacidad se puede medir con diferentes indicadores. El primer indicador recoge el número de años de trabajo necesarios para poder realizar la compra de una vivienda sin necesidad de financiación externa, lo que permite realizar una comparación directa de la situación de los precios de vivienda en relación con el nivel de vida de distintas regiones. Cuanto menor es el valor de este indicador, más fácil resulta el acceso a la vivienda. En España, la revalorización en los precios de las viviendas, aunque sin alcanzar los máximos del anterior ciclo inmobiliario, indican que, en estos dos últimos años, se ha producido una cierta pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias. En el año 2000, una familia con un solo salario necesitaba trabajar durante casi cinco años para poder adquirir una vivienda.

El alza de los tipos y de los precios inmobiliarios por encima de los salarios conduce a que el ligero empeoramiento en la accesibilidad que se producía en 1999, se agudice en el año 2000. Actualmente una familia debe destinar el 39 por 100 de su renta bruta anual para adquirir una vivienda de tipo medio, mientras que en 1999 el grado de esfuerzo era de un 32,6 por 100 (cuadro III-13).

CUADRO III-13
ACCESIBILIDAD DE LA VIVIENDA, 1992-2000

Año	Precio/Renta	Esfuerzo sobre salario (%)		Vivienda adquirible
		Bruto	Neto	
1992	4,7	63,8	52,6	—
1993	4,4	49,5	38,6	—
1994	4,2	44,0	34,4	—
1995	4,2	45,4	36,0	—
1996	4,1	37,6	30,0	—
1997	4,0	32,7	26,3	12,0
1998	4,1	32,2	26,0	13,2
1999	4,4	32,9	26,4	14,6
2000	4,8*	39,4	30,3*	13,4

Salario: Media de ingresos totales industria y servicios. INE.
Precio m^2: Valor de tasación medio del m^2 construido. Ministerio de Fomento.
E. Bruto: Esfuerzo bruto, porcentaje de los ingresos brutos que supone el pago de las cuotas mensuales de un préstamo por el 80 por 100 del precio de la vivienda a tipos de interés de mercado en plazo de 15 años.
E. Neto: Esfuerzo bruto menos desgravaciones fiscales a las que un comprador de vivienda tiene derecho.
* II Trimestre 2000.
Fuente: BBVA, *Situación Inmobiliaria,* febrero 2001.

La capacidad de endeudamiento (reflejada en el precio que debería tener una vivienda para que fuera adquirible por una familia con un salario medio y que no supusiera un esfuerzo superior a la tercera parte de sus ingresos brutos anuales) o, lo que es lo mismo, la capacidad de financiación, también se está reduciendo. Así, si en 1999 una familia media podía acceder a una vivienda de 14,5 millones mediante un crédito hipotecario a 20 años al 5,5 por 100 de interés, hoy día sólo podría acceder a una vivienda de 13,4 millones, mientras que una vivienda de tipo y tamaño medio cuesta 15 millones.

No obstante, la accesibilidad a la vivienda no ha sido homogénea a nivel territorial. Las comunidades autónomas que presentan mayores niveles salariales parecen reflejar a su vez mayores precios de las viviendas, excepto en el caso de Asturias. De igual modo, se puede observar (cuadro III-14) que las diferencias regionales en los precios de las viviendas son superiores a las diferencias interterritoriales en términos de salario medio. El precio más elevado, que corresponde al País Vasco, se situó 56 puntos por encima de la media nacional, y el más bajo, que se dio en Extremadura, 50 pun-

tos por debajo. En cambio, el salario más alto, también en el País Vasco, se situó 20 puntos por encima de la media, y el más bajo, el de Murcia, 20 puntos por debajo (cuadro III-14).

Parece que, en términos generales, las diferencias interregionales se mantienen desde 1998, excepto en el caso del País Vasco, en el que por primera vez, han aumentado más los precios, y éstos son más altos que en la Comunidad de Madrid.

Además, el acceso a una vivienda de tipo medio, en términos de esfuerzo sobre el salario bruto, presenta algunas diferencias regionales. Así, en el País Vasco, Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid, el esfuerzo para acceder a una vivienda es mayor, superando el 50 por 100 de los ingresos brutos de una familia con un solo salario. En estas Comunidades Autónomas (junto a Navarra y Aragón) es donde la accesibilidad ha empeorado más con respecto al año anterior (cuadro III-15).

CUADRO III-14
PRECIOS DE LA VIVIENDA Y SALARIOS MEDIOS, 2000
(Media nacional = 100)

Comunidades Autónomas	Salarios/hora	Precios de la vivienda
Andalucía	90,0	73,2
Aragón	100,4	84,9
Asturias	102,8	87,6
Baleares	92,0	127,1
Canarias	82,8	106,2
Cantabria	99,4	96,6
Castilla y León	96,6	90,3
Castilla-La Mancha	83,2	57,3
Cataluña	104,8	129,0
Comunidad Valenciana	89,2	72,7
Extremadura	81,4	50,5
Galicia	87,3	72,9
Madrid	116,1	148,5
Murcia	80,1	59,3
Navarra	106,3	106,9
País Vasco	120,2	156,0
La Rioja	94,3	87,2

Fuentes: Ministerio de Fomento, *Boletín Estadístico*. INE, *Encuesta de salarios en la Industria y los Servicios.*

CUADRO III-15
ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1999-2000

Comunidades Autónomas	Esfuerzo bruto (% salario bruto)		Vivienda adquirible (millones de pesetas)		Vivienda mercado (millones de pesetas)	
	1999	2000	1999	2000	1999	2000
Andalucía	26,6	31,7	13,3	12,2	9,8	11,0
Aragón	27,6	35,5	14,3	12,7	11,0	12,8
Asturias	27,0	32,6	15,5	14,4	12,0	13,2
Baleares	41,0	52,9	13,7	12,5	15,6	19,2
Canarias	40,7	48,7	12,2	11,5	13,7	16,0
Cantabria	35,9	42,8	12,9	11,9	12,8	14,6
Castilla-La Mancha	23,2	26,7	12,4	11,5	8,0	8,7
Castilla y León	34,5	40,9	12,7	11,8	12,1	13,6
Cataluña	44,0	52,5	13,8	13,0	16,8	19,5
C. Valenciana	26,4	32,1	13,3	12,1	9,7	11,0
Extremadura	21,1	23,5	12,2	11,5	7,1	7,6
Galicia	29,0	33,5	12,7	11,7	10,2	11,0
Madrid	42,9	50,2	16,4	15,6	19,6	22,4
Murcia	25,6	29,8	11,3	10,5	8,0	8,9
Navarra	35,6	43,4	14,0	12,9	13,8	16,1
País Vasco	43,8	56,7	16,0	14,4	19,5	23,5
La Rioja	33,1	39,6	12,2	11,6	11,2	13,2
Media nacional	**32,9**	**39,4**	**14,5**	**13,4**	**13,2**	**15,1**

Fuente: BBVA, *Situación Inmobiliaria,* febrero 2001.

Igualmente, la distancia entre la capacidad de compra y los precios existentes en el mercado en el año 2000 presenta diferencias regionales. Las diferencias mayores entre el precio de una vivienda de tipo medio adquirible por una familia y lo que cuesta una vivienda tipo medio en el mercado, se producen en el País Vasco, Baleares, Cataluña y Madrid. Sin embargo, es en Asturias, Baleares, Valencia, Galicia, Navarra y País Vasco donde la capacidad de financiación se ha reducido más respecto al año anterior.

2.3.2. **Política de apoyo a la vivienda**

El Programa 2000 del Plan de Vivienda 1998-2001

La política estatal de vivienda interviene mediante flujos financieros públicos en la evolución del sector de dos maneras: ayudas directas e indirectas. Las ayudas directas (gasto presupuestario) son canalizadas a través de los programas anuales del Plan de Vivienda

1998-2001 (cuyas principales novedades fueron expuestas en la Memoria de 1998); suponen un porcentaje moderado del volumen total de ayudas, si se tienen en cuenta las ayudas indirectas, que componen el denominado gasto fiscal.

El Programa para el año 2000 del Plan de Vivienda, estableció como objetivos 146.760 actuaciones, de las que 78.975 son viviendas protegidas de nueva construcción, y 22.648 de rehabilitación, con un volumen de préstamos cualificados para cumplir dichos objetivos que asciende, al igual que en 1999, a 780.000 millones de pesetas.

El precio básico por metro cuadrado de superficie útil, fijado a nivel nacional, y que sirve de referencia a las Comunidades Autónomas para fijar los precios máximos según su propia normativa, se ha situado en los tres años transcurridos de vigencia del Plan (1998, 1999 y 2000) en 98.500 pesetas. Respecto al cumplimiento de los objetivos del Programa en 2000 (cuadro III-16), el número de actuaciones financiadas por el Plan para el año 2000 asciende a 108.335, lo que supone un grado de cumplimiento del 73,8 por 100, con un volumen de préstamos cualificados, en esta misma fecha, de 379.832 millones, que representa el 48,6 por 100 del volumen previsto para el Programa 2000, situación que se agrava respecto a la vivienda de protección oficial, donde el grado de cumplimiento alcanzó sólo el 46,5 por 100 sobre lo previsto. Por Comunidades Autónomas, destacan por su mayor grado de cumplimiento sobre las actuaciones convenidas, las actuaciones financiadas por Extremadura, Aragón y Cantabria.

La baja oferta de vivienda social provocó que la línea de crédito pactada entre la Administración y la banca, destinada a otorgar préstamos a los beneficiarios del Plan sólo se utlizase el referido porcentaje de un 7,9 por 100. El encarecimiento de la vivienda libre, la escasez de suelo y la fijación de un precio poco realista para las viviendas de protección oficial han podido motivar este escaso resultado. Según las estimaciones de las asociaciones de cooperativistas, el número de viviendas sociales construidas estará muy por debajo de 50.000, la cifra más baja desde hace diez años. La rectificación del Ministerio de Fomento, incrementando en un 2 por 100 el precio máximo por metro cua-

CUADRO III-16

ACTUACIONES DEL PLAN DE VIVIENDA 1998-2001. PROGRAMA 2000 (*)

(Actuaciones previstas, realizadas y grado de cumplimiento sobre objetivos iniciales)

Tipos de actuaciones	Actuaciones previstas	Actuaciones realizadas	Grado de cumplimiento (%)
Viviendas protegidas de nueva construcción	79.975	37.202	46,5
— Para venta	76.837	n.d.	n.d.
— Para alquiler	3.102	n.d.	n.d.
Cofinanciación de VPO	590	n.d.	n.d.
— Para venta	185	n.d.	n.d.
— Para alquiler	405	n.d.	n.d.
Adquisición de otras viviendas existentes	13.757	7.747	56,3
Rehabilitación	22.648	44.753	197,6
Suelo	29.790	16.333	62,5
Total	**146.760**	**108.335**	**73,8**

* Están incluidas aquellas viviendas protegidas que han pasado al programa 1999 del Plan 1998-2001 al amparo de las disposiciones transitorias 2.ª y 4.ª del RD 1186/1998, de 12 de junio.

Fuente: Ministerio de Fomento, abril de 2001.

drado para las VPO[48], no se produce en este ejercicio. Por otra parte, el tipo de interés efectivo para los préstamos cualificados se mantiene igual que en 1999, situándose en el 3,88 por 100[49].

El Plan de Vivienda 1998-2001 establece que los ingresos familiares son una referencia fundamental para poder acogerse o no, así como para graduar qué ayudas corresponderán en cada caso. Para calcular estos ingresos se parte de la base o bases imponibles del IRPF. Sin embargo, el nuevo tratamiento fiscal de la vivienda que contiene la Ley 40/1998 del IRPF (cuyas principales modificaciones fueron tratadas en la Memoria del CES de 1998) «en la medida que varía la forma de cuantificar la base imponible, podría ocasionar la alteración de los grupos de población potencialmente beneficiarios de las ayudas previstas en el vigente

[48] RD 115/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el RD 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001, y se establece la ayuda estatal a la entrada.

[49] OM de 14 de abril de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 16 de marzo de 2000 sobre revisión del tipo de interés efectivo anual vigente para los préstamos cualificados concedidos o que se concedan en el ámbito del Plan de Vivienda 1998-2001.

Plan de vivienda, posibilitando el acceso a personas con un nivel de ingresos que, antes de esta modificación, estarían excluidas» [50], ha hecho necesaria la adaptación del Plan de Vivienda a la nueva Ley del IRPF.

Para adaptar las medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001 al actual marco regulador de la fiscalidad sobre los ingresos familiares, y con ello conseguir que la evaluación de los solicitantes se realice en adelante de forma que se mantengan aproximadamente los mismos grupos de población a los que se destinaba originariamente cada tipo de ayudas estatales, se modifica el concepto de ingresos familiares, para que se calcule a partir únicamente de la suma general y especial de la base imponible, excluyendo la deducción del mínimo personal y familiar.

La vivienda de protección oficial

La vivienda de protección oficial ha alcanzado, en el tercer trimestre de 2000, su peor cota en los últimos cinco años. El número de viviendas protegidas iniciadas entre enero y septiembre de 2000 supone un 3 por 100 del total de viviendas iniciadas en dicho periodo. Respecto a las viviendas terminadas los datos son muy similares (cuadro III-17). Sin embargo, la proporción de viviendas protegidas visadas en el último trimestre es bastante superior, alcanzando el 25 por 100 del total de proyectos visados

Como se puede observar en el cuadro III-18, la proporción de viviendas de protección oficial visadas en el año 2000 respecto al total de viviendas no se distribuye homogéneamente en el territorio nacional. La proporción de viviendas de protección oficial visadas (teniendo en cuenta que no todas las viviendas visadas son terminadas) respecto al total de viviendas es mayor en La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla y Extremadura (entre un 17 y un 28 por 100) y mucho menor en Baleares, Canarias, Cantabria, ambas Castillas, Madrid y Cataluña (entre un 1 y un 3,5 por 100). Además, es en estas Comunidades Autónomas, exceptuando Madrid, dónde más se han reducido respecto al año anterior.

[50] RD 1190/2000, de 23 de junio, por el que se modifica el RD 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001.

CUADRO III-17
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN PROMOTOR, 1996-2000
(Miles)

Conceptos	1996	1997	1998	1999	2000*
Viviendas iniciadas					
Total	287,1	322,6	407,2	510,6	392,4
Protegidas	62,9	64,4	55,9	57,6	12,9
% Protegidas	21,9	20,0	13,7	11,3	3,3
Viviendas terminadas					
Total	274	299,2	297,6	356,1	345,3
Protegidas	79,3	74,6	71,4	59,9	10,6
% Protegidas	28,9	24,9	24,0	16,8	3,1
Proyectos visados por Colegio de Arquitectos					
Protegidas	240,7	329,9	400,4	502,9	143,3
Libres	66,7	72,0	60,2	58,6	36,2
% Protegidas	27,7	21,8	15,0	11,7	25,3
Viviendas calificac. prov. VPO. Reg. General	49,9	58,7	42,4	53,4	11,6

* Datos hasta el tercer trimestre.
Fuente: INE, *Boletín Mensual de Estadística.*

La gravedad de este asunto viene dada porque se trata de pisos que se mueven en una horquilla de precios entre 9 y 20 millones de pesetas, que coincide con la capacidad de gasto estimada para el 60 por 100 de la población española demandante de vivienda y que no forma parte de la demanda solvente que acude a la compra de la vivienda libre. Una demanda semi-insolvente que, mediante ayudas públicas, se transforma en solvente y se canaliza hacia la vivienda de protección oficial. Como factor añadido, la promoción de este tipo de viviendas implica un efecto positivo en la contención de los precios de la vivienda libre y de la inflación.

No obstante, la variación del marco económico y financiero en el que se inscribe el Plan de Vivienda 1998-2001, ha venido exigiendo el replanteamiento de la política de vivienda para lograr un mayor desarrollo de la vivienda protegida, en general, y de la de protección oficial de régimen especial, en particular.

CUADRO III-18

EVOLUCIÓN DE VIVIENDAS LIBRES Y PROTEGIDAS VISADAS, 1999-2000

Comunidades Autónomas	1999				2000				Variación interanual 1999-2000		
	VPO	Libres	Total	Proporción VPO	VPO	Libres	Total	Proporción VPO	VPO	Libres	Total
Total nacional	57.807	528.781	586.588	9,9	43.916	538.895	582.811	7,5	–24,0	1,9	–0,6
Andalucía	15.476	124.585	140.061	11,0	12.167	131.229	143.396	8,5	–21,4	5,3	2,4
Aragón	573	16.095	16.668	3,4	1.303	16.393	17.696	7,4	127,4	1,9	6,2
Asturias	1.008	7.717	8.725	11,6	1.148	9.860	11.008	10,4	13,9	27,8	26,2
Baleares	829	15.064	15.893	5,2	278	13.605	13.883	2,0	–66,5	–9,7	–12,6
Canarias	4.534	28.364	32.898	13,8	994	31.326	32.320	3,1	–78,1	10,4	–1,8
Cantabria	374	9.840	10.214	3,7	131	7.242	7.373	1,8	–65,0	–26,4	–27,8
Castilla-La Mancha	2.618	18.262	20.880	12,5	721	19.818	20.539	3,5	–72,5	8,5	–1,6
Castilla y León	1.564	41.370	42.934	3,6	577	32.335	32.912	1,8	–63,1	–21,8	–23,3
Cataluña	3.653	85.102	88.755	4,1	2.922	80.274	83.196	3,5	–20,0	–5,7	–6,3
Comunidad Valenciana	12.511	62.059	74.570	16,8	9.475	68.051	77.526	12,2	–24,3	9,7	4,01
Extremadura	1.648	7.567	9.215	17,9	3.092	7.893	10.985	28,1	87,6	4,3	19,2
Galicia	2.773	28.745	31.518	8,8	2.183	33.134	35.317	6,2	–21,3	15,3	12,1
Madrid	1.349	45.555	46.904	2,9	1.208	45.115	46.323	2,6	–10,5	–1,0	–1,2
Murcia	4.190	12.003	16.193	25,9	3.134	14.716	17.850	17,6	–25,2	22,6	10,2
Navarra	1.849	5.622	7.471	24,7	404	5.646	6.050	6,7	–78,2	0,4	–19,0
País Vasco	1.836	15.652	17.488	10,5	3.126	17.366	20.492	15,3	70,3	11,0	17,2
La Rioja	543	3.419	3.962	13,7	728	3.505	4.233	17,2	34,1	2,5	6,8
Ceuta y Melilla	479	1.760	2.239	21,4	325	1.387	1.712	19,0	–32,2	–21,2	–23,5

Fuente: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Comisión de Estadística y Edificación. *Informe de Coyuntura 2000*.

Debate social y demandas de revisión del precio de la vivienda

Los agentes intervinientes en el proceso de desarrollo de viviendas sociales han coincidido[51] en señalar las dificultades para promocionar viviendas protegidas, tanto para los promotores públicos como para los privados, por ser los costes superiores a los precios oficialmente establecidos para su venta o adjudicación. En este contexto, destaca el mínimo grado de cumplimiento que ya se ha descrito del Plan de Vivienda 1998-2001, en el año 2000, y la existencia, por el contrario, de una amplia bolsa de vivienda de protección oficial paralizada.

Ante estas circunstancias, se afirma que mientras el precio máximo de venta o adjudicación de la vivienda de protección oficial permanece estancado en 98.500 pesetas por metro cuadrado, los costes de la construcción han aumentado. La solución que se propone pasa entonces por la revisión al alza de este precio, de modo suficiente para permitir la promoción de la vivienda protegida.

La revisión de los precios máximos de venta o adjudicación ha sido apoyada tanto por los Consejeros de las Comunidades Autónomas, reunidos en la Conferencia Sectorial sobre Vivienda y Suelo de 19 de septiembre de 2000, como por el Congreso y el Senado, que presentaron sendas mociones, aprobadas por unanimidad, por las que: «instan al Gobierno a adecuar su política en materia de vivienda, y actualizar el precio básico a nivel nacional, al que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, en función de la evolución de costes y precios en el subsector vivienda, y modificar, si fuera necesario, el sistema mismo de fijación de precios máximos de venta de las viviendas protegidas acogidas al marco de dicho Real Decreto».

Adaptación de los precios y reforma del Plan de Vivienda 1998-2001

Recogiendo las iniciativas planteadas, el Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero[52], modifica el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001, y establece la ayuda estatal directa a la entrada. Entre sus principales novedades, cabe

[51] «Manifiesto sobre la Vivienda Social», octubre de 2000. Firmado, entre otras, por la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI), Asociación Nacional de Empresarios Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas (AGECOVI), Asociación Nacional de Promotores Constructores (APCE), Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), y Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas (AEGC).

[52] Publicado en el *BOE* de 10 de febrero de 2001.

destacar que procede a adaptar los precios máximos de venta de las viviendas protegidas, ampliar los plazos de afectación de la calificación a la vivienda, potenciar un sistema de financiación mixto (público y privado), y crear la «ayuda estatal directa a la entrada» como un nuevo instrumento de intervención.

De este modo, el precio básico a nivel nacional para las viviendas de protección oficial (VPO) se incrementa en un 2,03 por 100, pasando a 100.500 pesetas por metro cuadrado de superficie útil. No obstante, se amplían las posibilidades de incremento de este precio, por las Comunidades Autónomas, hasta un 25 por 100, frente al 15 por 100 anterior, en orden a su adaptación a las distintas realidades territoriales.

Asimismo, se aumenta el precio máximo de las viviendas de protección oficial de régimen especial, pasando su índice de referencia de un 85 a un 90 por 100 del precio máximo de las viviendas de régimen general.

Se preocupa esta norma, igualmente, del destino y ocupación de las viviendas, mediante la fijación de reglas de prohibición y limitación a la facultad de disponer y a la descalificación. En este sentido, por un lado, establece el impedimento de la descalificación, con carácter voluntario, del régimen de protección oficial de las viviendas durante un plazo de 15 años, a computar desde la calificación definitiva de las viviendas nuevas construidas; y, por otro, eleva de 5 a 10 años, a partir de la escritura de préstamo cualificado para la adquisición de la vivienda, del plazo durante el que la venta de la vivienda protegida sólo cabe por motivos justificados y con autorización de la Comunidad Autónoma.

Creación de la «ayuda a la entrada»

Para dar cabida a la realidad social de la dificultad que entrañan los costes de adquisición de la vivienda, el sistema de ayudas previstas por el Plan se complementa mediante la creación de una ayuda a la entrada, para el primer acceso a la vivienda en propiedad, siempre que los ingresos (base imponible de la última declaración de IRPF) no superen los 3,5 millones de pesetas anuales, y la vivienda adquirida no exceda de 90 metros cuadrados útiles. Circunstancia a destacar es que, en esta medida, se amplia el concepto de joven, de la edad de 30 a 35 años, reflejando el retraso en la edad de emancipación juvenil.

Esta ayuda a la entrada consiste en el abono de un determinado porcentaje (cuadro III-19) del precio total de la vivienda que figure en la escritura de compraventa o adjudicación o, caso de promoción individual para uso propio, de la suma de los valores de la edificación y del suelo. Con carácter general, constituye una alternativa adicional a los instrumentos de intervención del Plan de Vivienda, a elegir por los potenciales compradores; no obstante, conscientes de la mayor necesidad de los adquirentes de viviendas de régimen especial, se prevé que éstos disfruten, además, de una subsidiación, durante cinco años, del 15 por 100 de la cuota del préstamo.

Nuevas ayudas para la adquisición y urbanización del suelo

Finalmente, con relación a la adquisición y urbanización del suelo para la promoción de viviendas protegidas, se incrementan las ayudas públicas. Así, entre otras medidas, se compatibiliza la posibilidad de obtener préstamos cualificados con la subvención de un 10 por 100 de la cuantía del préstamo, y se aumenta del 6 al 10 por 100 la subsidiación de las cuotas a pagar por el préstamo cualificado.

El objetivo de este abanico de acciones es concentrar el apoyo público a la compra de la vivienda en las situaciones donde la relación de accesibilidad se encuentre más debilitada, bien porque sea el momento de la adquisición, bien porque la economía de la unidad familiar no supere determinados niveles de renta. Por otra par-

CUADRO III-19

PORCENTAJE DE AYUDA DIRECTA A LA ENTRADA SOBRE PRECIOS TOTALES DE VIVIENDA SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

Cuantías	Vivienda Tipo A Precio máximo general	Vivienda Tipo C Régimen especial	Vivienda Tipo B Precio máximo superior
Cuantía básica	7	11	3
Cuantía adicional a jóvenes (1)	3	3	3
Cuantía adicional a familias numerosas	3	3	3
Cuantía adicional por otras circunstancias (2)	1	1	1

Nota general: las cuantías adicionales no son acumulables entre sí.
(1) Edad no superior a 35 años.
(2) Unidad familiar monoparental, o unidad familiar en que haya personas con minusvalías.
Fuente: Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero.

te, se apuesta por favorecer la existencia de unas cifras adecuadas de nuevas viviendas protegidas, y, en último término, garantizar que el esfuerzo presupuestario, que conlleva la existencia de un amplio parque de vivienda protegida, no se vea frustrado por posteriores operaciones especulativas.

2.3.3. **Vivienda, urbanismo y cohesión social**

En opinión del CES, en su Informe 3/2000, de 28 de junio, sobre unidad de mercado y cohesión social, la vivienda y el urbanismo son elementos esenciales para la conformación armónica de una sociedad justa y cohesionada.

El artículo 47 de la Constitución Española establece el derecho a la vivienda en el marco de los principios rectores de política social y económica. Su traslación a la realidad configura un marco de competencias a distribuir entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En este sentido, la cuestión se desarrolla en la operatividad del artículo 149.1 de la Constitución, que determina la competencia estatal exclusiva para establecer las bases y coordinación de la planificación económica, frente al artículo 148.1.3.º, que otorga a la Comunidades Autónomas la asumibilidad de competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

La realidad demuestra que esta relación no siempre es pacífica. De este modo, el Estado ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad frente a diversas normas autonómicas reguladoras de la ordenación del territorio, por estimar que invaden competencias exclusivas estatales. Este es el caso de Aragón, Islas Baleares y Castilla-La Mancha[53].

Por otra parte, el campo competencial de los ayuntamientos viene siendo ampliado paulatinamente, de forma que a la tradicional competencia de formulación y ejecución de sus planes urbanísticos, se une la circunstancia de que algunas Comunidades Autónomas

[53] Aragón: Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Territoriales. Islas Baleares: Ley 6/1999, de 3 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial. Castilla-La Mancha: Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística.

han delegado en los ayuntamientos de municipios de determinado número de habitantes la competencia de aprobación definitiva de planes urbanísticos.

Negativa disposición normativa

Todo ello ha derivado en una situación de dispersión normativa, con consecuencias negativas, por un lado, en la unidad de mercado, que reclama una cierta igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de la actividad económica, de manera que el libre juego de la oferta y la demanda se traslade a la moderación en el crecimiento de los precios de la vivienda, y, por otro, en la libre circulación de trabajadores, al implicar las diferentes posibilidades territoriales de acceso a la vivienda un obstáculo para la movilidad geográfica.

Disponibilidad de suelo y precio de la vivienda

Asimismo, cabe destacar el problema de la disponibilidad del suelo como condicionante esencial en el encarecimiento del precio de la vivienda en España. Dado que sólo los suelos urbanizables sirven de soporte a la edificación, la promoción inmobiliaria requiere una política eficaz de calificación más flexible de este tipo de suelo, luchando contra la escasez artificial del suelo, producida bien por la actitud de determinados Ayuntamientos de no promover el suelo urbanizable, bien por la especulación o retención que de este suelo realizan algunos propietarios.

Es por ello necesario un marco jurídico de referencia, que clarifique la regulación del suelo y contribuya a la reducción de su precio, y, por tanto, de la vivienda, en último término.

Líneas de actuación en urbanismo y vivienda

La situación existente, y la falta de una ley armonizadora en la materia, exigen para el CES varias líneas de actuación:

— Potenciar un elevado grado de coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

— Transparencia de criterios, simplificación urbanística, y acotamiento de la discrecionalidad administrativa.

— Uso eficaz del suelo público y el planeamiento urbanístico, con el fin de evitar un crecimiento desmesurado de los precios del suelo.

— Evitar los procesos de retención en la urbanización del suelo, estimulando los deberes de urbanizar y edificar.

— Fomento de planes de vivienda y suelo, en los que se contengan ayudas reales para nuevos desarrollos y promociones urbanísticas y de vivienda.

Liberalización del sector inmobiliario

Como novedad legislativa, para flexibilizar el mercado inmobiliario, se aprueba el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes[54]. Obedece este Decreto al objetivo general de incidir en el comportamiento de los distintos agentes económicos, estimular la competencia, conseguir una mejor asignación de los recursos e influir, en definitiva, sobre el nivel de precios.

De forma más específica, respecto al sector inmobiliario, se busca dinamizar un mercado que, como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda y la incidencia del precio del suelo en el precio de la vivienda, se califica de rígido y necesitado de un incremento en la oferta de suelo urbanizable, que redunde positivamente en el precio final de los bienes inmobiliarios.

Las medidas adoptadas pretenden, entre otras cosas: evitar márgenes de discrecionalidad en la actuación administrativa, incrementar el suelo urbanizable, y dotar de mecanismos de participación tanto para la Administración, con independencia de su competencia, como para la iniciativa privada.

En este sentido, se procede a la modificación, de diversos artículos de la Ley 6/1998:

1. El suelo no urbanizable se define (art. 9, apdo. 2.º) como aquel que «el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales»; de esta forma, suprime el inciso «así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano»[55].

[54] Publicado en el *BOE* de 24 de junio de 2000. En la actualidad, se encuentra en vía parlamentaria para su tramitación como Proyecto de Ley.

[55] Diversas han sido las reacciones que ha provocado esta supresión, lo que ha llevado a que distintos municipios de más de 50.000 habitantes y la Junta de Extremadura anuncien la intención de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional, al entender que el RD invade su ámbito competencial.

2. En la regulación de los derechos de los propietarios de suelo urbanizable (art. 15), se añade un segundo apartado, por el que «la transformación del suelo urbanizable podrá ser también promovida por las Administraciones Públicas sean o no competentes para la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo».

3. Respecto al derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, se permite (art. 16, apartado 1.º) que el planeamiento de desarrollo sea promovido «en virtud de un proyecto de delimitación o de planeamiento formulado por la iniciativa privada».

El Real Decreto, finalmente, sienta las condiciones para el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria, mediante el establecimiento del denominado principio de libre ejercicio, por el que se permite su desarrollo sin necesidad de estar en posesión de título alguno ni de pertenencia a ningún colegio oficial.

ANEXO III-3

INDICADORES DE VIVIENDA

Indicadores	Alemania	Austria	Bélgica	Dinamarca	Finlandia	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Luxemburgo	Portugal	Reino Unido	Suecia	Noruega	España	UE-15
Stock y régimen de tenencia, 1998 [1]																	
Viviendas (millones) (V.1)	37,5	3,4	3,7	2,5	2,4	28,9	4,7	6,6	1,1	26,3	0,1	4,2	24,0	4,2	1,9	**18,8**	170,4
Idem per cápita (V.2)	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	**0,5**	0,5
Propiedad (%) (V.3)	42,0	54,0	67,0	50,0	67,0	54,0	76,0	48,0	68,0	79,0	64,0	67,0	65,0	39,0	—	**78,0**	65,6
Alquiler (%) (V.4)	58,0	42,0	33,0	44,0	25,0	39,0	24,0	52,0	25,0	18,0	30,0	28,0	35,0	44,0	—	**14,0**	36,5
Régimen privado (%) (V.5)	83,0	44,0	81,0	42,0	48,0	52,0	100,0	26,0	45,0	70,0	70,0	87,0	29,0	50,0	—	**92,0**	65,6
Régimen público (%) (V.6)	17,0	48,0	19,0	41,0	52,0	44,0	0,0	74,0	55,0	23,0	26,0	10,0	71,0	50,0	—	**8,0**	38,4
Gasto Público en vivienda [2]**, 1998**																	
Prestaciones sociales (% PIB) (V.7)	0,2	0,1	n.d.	0,7	0,4	0,9	0,7	0,4	0,5	0,0	0,1	0,0	1,6	0,8	0,2	**0,1**	0,6
(% total prestaciones) (V.8)	0,7	0,3	n.d.	2,5	1,4	3,2	3,1	1,6	3,4	0,0	0,3	0,0	6,2	2,5	0,7	**0,3**	2,1
Nuevos préstamos hipotecarios, 1998-99																	
Tipos de interés indicativos, IIT 1999 [5] (V.9)	5,4	5,5	5,8	6,7	4,4	5,5	12,8	4,9	5,3	4,7	5,5	4,9	6,4	6,3	7,8	**4,2**	8,0
Crédito hipotecario total (% PIB), 1997 [6] (V.10)	57,0	5,0	24,0	71,0	29,0	20,0	8,0	72,0	24,0	9,0	25,0	31,0	63,0	54,0	50,0	**24,0**	40,0
Residencial, 1998 (V.11)	53,0	5,0	24,8	69,4	30,1	20,6	n.d.	65,4	27,5	7,8	n.d.	n.d.	53,1	48,8	n.d.	**24,1**	39,1
Comercial, 1998 (V.12)	10,4	n.d.	n.d.	22,6	n.d.	n.d.	n.d.	23,7	4,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	**10,9**	—
Crédito hipotecario bruto (MM euro) (V.13)	—	1.178	13.541	42.804	16.800	—	—	118.305	—	44.010	1.383	5.803	—	22.540	—	**69.417**	—
Residencial (V.14)	—	—	12.341	29.275	9.058	39.637	—	90.647	4.588	28.687	—	6.604	183.983	20.064	—	**40.959**	—
Comercial (V.15)	—	—	1.200	13.529	7.742	—	—	27.658	—	15.323	—	-801	—	2.476	—	**28.458**	—
Construcción de viviendas, 1999 [3]																	
Viviendas iniciadas (miles) (V.16)	—	46,0	32,6	15,7	35,0	309,7	—	83,4	—	240,0	—	—	179,7	15,0	18,0	**407,4**	138,2
Viviendas terminadas (miles) (V.17)	472,8	54,2	—	15,5	27,8	—	—	92,3	38,8	263,2	—	84,5	170,8	14,0	19,0	**275,6**	139,0
Precio de la vivienda, 1999 [4] –medias nacionales–																	
Vivienda «existente» (Índice 1990 = 100) (V.18)	115,0	103,0	150,0	142,0	106,0	150,0	—	216,0	190,0	118,0	—	130,0	134,0	117,0	175,0	**127,0**	151,8
Nueva vivienda (Índice 1990 = 100) (V.19)	116,0	134,0	116,0	134,0	110,0	113,0	112,0	133,0	125,0	118,0	125,0	152,0	—	122,0	123,0	**132,0**	133,2

Notas: — : no consta; n.d. = no disponible.

(2) Comprende los pagos en favor de hogares con la finalidad de mitigar los costes de la vivienda.

(5) La modalidad hipotecaria es diferente según los países, lo cual dificulta la comparabilidad de los datos. No obstante, se ha optado por incluir uno de los tipos de referencia. Para una información más detallada remitirse a la fuente.

Fuentes: (2) MTAS, *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social, Ejercicio 1998, Informe Económico-Financiero*. Dépenses et recettes de protection sociales, Eurostat 2000. (1), (3) y (4) European Mortgage Federation, *Annual report, 1999*. Housing statistics in European Union 1998. (5) Sociedad Española de Tasación S.A., 1999; Asociación Hipotecaria Española (AHE). (6) BCE, *La estabilidad bancaria y los precios de los activos,* abril 2000.

2.4. MEDIO AMBIENTE

2.4.1. **Indicadores ambientales**

Los indicadores propuestos para este epígrafe coinciden básicamente con los de la edición del año anterior de esta Memoria, si bien es cierto que se recogen algunos nuevos con el doble objetivo de ampliar la información aportada en ocasiones anteriores, y facilitar la relativa a otros ámbitos, directa o indirectamente afectados por factores medioambientales[56] (Anexo III-4).

Entre los indicadores incluidos en el apartado «Territorio», se ha considerado oportuno añadir los datos de superficie total territorial, porcentaje de superficie forestal y tasa de defoliación de especies forestales (indicativo de la salud de los bosques europeos). Debe señalarse que, como medida de la superficie destruida por incendios forestales, se ha considerado el porcentaje respecto de la superficie forestal total por tratarse de una medida relativa más clarificadora de la situación en cada caso.

Pese a ser España uno de los países de mayor extensión territorial en la Unión Europea, tanto la superficie forestal como la protegida en términos relativos están por debajo de la media europea. El dato relativo a la salud de los bosques españoles —la tasa de defoliación—, tampoco es bueno con respecto al del resto de los países europeos, y el de superficie destruida por incendios forestales

[56] Se facilita la definición de algunos términos para la correcta interpretación de los indicadores correspondientes:

– *Superficie boscosa*: según definición del Informe sobre Gestión de los Recursos Forestales en zonas templadas y boreales 2000 (CEE-ONU/FAO), se define como el terreno bajo bosque de coníferas, no-coníferas y otras superficies boscosas según especificaciones FAO.

– *Cubierta forestal*: según la fuente mencionada, se define como el terreno bajo un área con cubierta arbolada de más del 20 por 100 y utilizada prioritariamente para propósitos forestales. Se excluyen, por tanto, pequeños grupos arbolados, así como parques y jardines urbanos.

– *Tasas relativas a medio ambiente*: se establecen para el control de la contaminación e incluyen las asignadas en concepto de producción de energía y elaboración de productos energéticos, servicios y equipamiento de transporte, medidas o estimaciones de emisiones y vertidos (a la atmósfera y agua respectivamente), tales como substancias que reduzcan la capa de ozono o fuentes difusas de contaminación del agua, gestión de los residuos y ruido.

es la segunda cifra más alta detrás de la correspondiente a Grecia, lo que sitúa a España, con datos de 1998, como uno de los países europeos más afectados en este aspecto[57].

Respecto a los indicadores correspondientes a «Contaminación atmosférica», se han sustituido las cifras absolutas (en miles de Tm) por datos relativos a la población en ese año (Kg/hab o Tm/hab), al objeto de facilitar su comprensión y comparabilidad. En este ámbito, es evidente la posición poco favorable de España en cuanto a las emisiones de óxidos de azufre —responsables de la acidificación de suelo y ecosistemas acuáticos—; por lo que respecta a las de óxidos de nitrógeno —que contribuyen junto con los anteriores a la precipitación ácida—, el valor correspondiente a España supera, aunque ligeramente, al de la media europea; sin embargo, la cifra nacional relativa a CO_2 —máximo responsable del «efecto invernadero» o calentamiento climático—, es inferior al correspondiente dato europeo. Se ha incluido en este apartado el indicador de población expuesta a un nivel de ruido superior al considerado aceptable (>65 dBA —decibelios—), para el que en España se registra un valor doble al de la media en Europa.

En lo relativo a «Calidad de aguas», se han mantenido las cifras correspondientes a la población conectada a tratamiento de aguas residuales, incorporándose una cifra indicativa de las reservas netas de agua o agua embalsada en proporción a la disponibilidad bruta de agua. Según estos indicadores, España se encuentra por debajo de la media en lo que respecta a población conectada a tratamiento de aguas residuales, únicamente por delante de Portugal, y muy por encima de la media europea en cuanto a reservas netas de agua, siendo su valor el segundo mayor alcanzado por los países de Unión Europea, detrás de Bélgica.

Las cifras correspondientes al apartado «Generación y tratamiento de residuos sólidos» recogen valores de los indicadores correspondientes también muy inferiores a los de la media europea.

[57] Debe advertirse que el dato correspondiente a superficie forestal quemada en España según la información aportada por el Compendio Medioambiental de la OCDE 1999 (0,63 por 100), es superior al aportado para el mismo año —1998— por el Ministerio de Medio Ambiente (0,49 por 100), debido a que la OCDE incluye en esta cifra a los terrenos de pastos. Pero, aun considerando este segundo valor, la situación de España en este punto seguiría siendo la tercera más desfavorable de la Unión Europea.

En relación a los indicadores incluidos en «Gasto público I+D para protección del medio ambiente», ha parecido interesante aportar las cifras no sólo en porcentaje del PIB sino también en millones de dólares. De los datos disponibles, España es el país que alcanza la cifra más baja en porcentaje del PIB.

2.4.2. **Aspectos generales**

Legislación

En el ámbito de la Unión Europea, en el año 2000 se publicaron 25 Directivas y 19 Reglamentos comunitarios que, en su gran mayoría, constituyen modificaciones, adaptaciones y ampliaciones de normas anteriores en materias de residuos, contaminación atmosférica, transporte de sustancias peligrosas, comercialización de productos fitosanitarios y alimenticios, etc.

En el ámbito interno cabe señalar la creación, mediante Real Decreto, del Consejo Nacional de Bosques, la prohibición de comercialización de gasolinas con plomo y la creación e implantación de unidades de apoyo ante desastres. Entre las normativas autonómicas cabe destacar el Decreto andaluz por el que se regulan las autorizaciones administrativas de actividades de valoración y eliminación de residuos; la aprobación definitiva del Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos urbanos de Mallorca; el Decreto de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se determinan las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha contaminación; las leyes autonómicas de declaración de cuatro Parques Naturales en Castilla y León y Castilla-La Mancha; la Ley catalana reguladora de la incineración de residuos; un Decreto de la Comunidad Autónoma de Galicia que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Contaminación Atmosférica; y las leyes de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Región de Murcia y de La Rioja.

Vertido de Aznalcóllar

La causa judicial por el vertido tóxico debido a la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en abril de 1998[58] finalizó, con el Auto de la juez instructora del caso, emitido a finales de diciembre de 2000.

[58] El accidente vertió cinco hectómetros cúbicos de aguas ácidas y lodos tóxicos contaminando más de 6.000 hectáreas de terrenos, 40 kilómetros de cauce del río Guadiamar, y una zona de marismas del Parque Nacional de Doñana.

En dicho Auto se concluye que ni la empresa propietaria de la mina ni la empresa constructora de la balsa incurrieron en un delito de imprudencia grave y se desestima la existencia de responsabilidades penales en el caso. El auto cierra la vía penal, pero continúan los procedimientos civiles para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios.

Los trabajos de descontaminación y regeneración de la zona afectada, han supuesto un coste de 40.000 millones de pesetas que solamente podría recuperarse mediante la utilización de la vía jurisdiccional civil.

Residuos urbanos

En febrero de 2000 se aprobó el Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) para el periodo 2000-2006 y responde al mandato legal expresamente recogido en la Ley 10/1998, de Residuos. Están incluidos en el Plan todos los residuos urbanos o municipales, entendiendo por tales los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas, servicios y todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que, por su naturaleza o composición, puedan asimilarse a los producidos en los citados lugares y actividades. A efectos de este Plan, también tienen la consideración de residuos urbanos los procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y plazas, los productos textiles y residuos de maderas de origen doméstico y otros como aceites, grasas vegetales, etc.

El Plan contempla diferentes programas de actuación que, en conjunto prevén la consecución de los objetivos y porcentajes de gestión de los residuos que se señalan en el cuadro III-20[59] (el cuadro contiene datos correspondientes al año 1996, año que se toma como referencia en el PNRU).

Energías renovables

A principios de año se presentó el Plan de Fomento de Energías Renovables para el periodo 2000-2006. En dicho Plan se prevé que las denominadas «energías limpias» supongan un 12 por 100 del total de la energía producida en España para el año 2010. Este objetivo general supone la práctica duplicación de la participación actual de las energías renovables en España, lo cual implica cambios considerables de calidad y de cantidad que requieren la armoni-

[59] Hasta el momento no se han publicado datos sobre el cumplimiento del Plan.

CUADRO III-20

GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN DIFERENTES SISTEMAS RECOGIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS URBANOS: DATOS DE 1996 Y OBJETIVOS PARA 2000 Y 2006

Gestión/Sistema	1996		2000		2006	
	Tm	%	Tm	%	Tm	%
Vertido autorizado	9.989.386	58,2	8.244.091	48,0	0	0,0
Vertido controlado autorizado	0	0,0	0	0,0	5.969.236	33,1
Vertido incontrolado	2.101.250	12,2	858.759	5,0	0	0,0
Reciclaje (no compostaje)	1.985.040	11,6	3.349.161	19,5	4.500.000	25,0
Compostaje	2.394.162	13,9	3.179.126	18,5	4.372.701	24,2
Valorización energética	705.348	4,1	1.544.049	9,0	3.192.008	17,7
Total	**17.175.186**	**100,0**	**17.175.186**	**100,0**	**18.033.945**	**100,0**

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, *Plan Nacional de Residuos Urbanos.*

zación de esfuerzos y voluntades desde la consideración estratégica de estas energías como valor de futuro para el desarrollo económico y social, para la reducción de la acusada dependencia energética y para la mejora del medio ambiente.

En términos generales, el Plan prevé una inversión total de dos billones de pesetas que se destinarán a fomentar el incremento de la producción de energía de la biomasa (6,1 millones de tep), eólica (1,8 millones de tep), solar termoeléctrica (180 Ktep), solar fotovoltaica (19 Ktep), residuos sólidos (683 Ktep), biogás (100 Ktep), biocarburantes (500 Ktep), solar térmica de baja temperatura (336 Ktep), hidráulica y minihidráulica (3.271 Ktep)[60].

Cambio climático

En la denominada Cumbre del Clima, celebrada en La Haya durante los días 13 a 27 de noviembre de 2000, no se logró alcanzar el acuerdo entre los principales negociadores: Estados Unidos y Unión Europea. La Cumbre se suspendió y los 180 países representados acordaron volver a reunirse en 2001.

En la Cumbre se tenían que acordar los reglamentos del Protocolo de Kioto por el que los países desarrollados se comprometen a reducir en un 5,2 por 100, como media, las emisiones de gases con efecto invernadero.

[60] Tep: tonelada equivalente de petróleo. Es una medida de energía calorífica, equivalente a la combustión de una tonelada de crudo (1 tep = 10.000 termias = 10.000.000 kilocalorías). Ktep = 1.000 tep.

Las tres cuestiones principales que bloquearon el pacto son el papel de los bosques como sumideros de CO_2, las medidas para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Kioto y los mecanismos a utilizar para el cumplimiento de los compromisos de reducción en la emisión de gases con efecto invernadero.

España, por su parte, ha anunciado la creación de una Oficina de Cambio Climático que entrará en funcionamiento en el año 2001 bajo la autoridad del Ministerio de Medio Ambiente. Dicha Oficina se encargará de elaborar la estrategia para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y hará un seguimiento de todas las políticas que tengan relación con esas emisiones.

Transgénicos

El debate sobre la seguridad ambiental de los organismos genéticamente modificados (OGM) se centra en la dificultad de evaluar los efectos de los productos transgénicos sobre la biodiversidad a medio y largo plazo. El estudio que se suele citar como el más completo de los publicados hasta ahora es el de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, en el cual se reconoce que los científicos todavía desconocen la verosimilitud de las amenazas medioambientales de aquellos y reclaman más investigaciones. Tampoco existen sistemas estadísticos organizados oficialmente que ofrezcan detalle de los mercados de estos productos. Quizá el estudio más completo realizado en este campo es el de la Universidad de Cornell de Estados Unidos que señala que las semillas transgénicas mueven a nivel mundial un volumen de negocios de 2,3 billones de pesetas y que, para el año 2005 se estima que esta cifra llegue a los 8 billones de pesetas.

Por otra parte, según los datos del Servicio Internacional sobre la Incorporación de la Biotecnología en la Agricultura (ISAAA), la superficie de vegetales transgénicos es de 44 millones de hectáreas a nivel mundial, siendo Estados Unidos, Argentina, Canadá y China los cuatro países que encabezan la lista de los mayores productores de transgénicos. La Unión Europea aportaría a esa cifra unas 50.000 hectáreas repartidas entre España, Alemania y Francia, sin que existan datos desglosados sobre tipo de cultivos y zonas en cada país europeo. En consecuencia, la falta de información estadística sobre la realidad de los cultivos transgénicos se presenta hoy como un objetivo a superar y al que se debería dedicar la atención presupuestaria que el tema merece.

2.4.3. **Plan Hidrológico Nacional: el problema del reparto del agua**

2.4.3.1. *Las bases de la planificación hidrológica*

En el ámbito de la planificación hidráulica, la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional constituye el último eslabón de un proceso que se inició en 1985 con la Ley de Aguas y que se ha ido desarrollando, entre otros, a través de la elaboración del Libro Blanco del Agua, los Planes Hidrológicos de Cuenca y la reforma, en 1999, de la propia Ley de Aguas.

Con fecha 9 de febrero de 2001, previo dictamen del Consejo Nacional del Agua, el Consejo de Ministros acordó la remisión del Proyecto de Ley de Plan Hidrológico Nacional a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Se trata de un texto que ha sido objeto de grandes debates, los cuales se han visto reflejados en los medios de comunicación durante los últimos doce meses. En particular, el aspecto que mayor atención ha merecido a la opinión pública es el relativo al trasvase desde la cuenca del Ebro a las cuencas internas de Cataluña, Júcar, Segura y Sur.

Los fundamentos que sustentan el contenido del Proyecto de Ley están recogidos en una serie de documentos técnicos que constituyen los antecedentes y presupuestos del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y que se desarrollan detalladamente en cinco volúmenes.

En el primero, dedicado a los sistemas hidráulicos, se analiza la viabilidad hidrológica de las transferencias en el sentido de determinar las necesidades estrictas en las cuencas receptoras, máximos trasvasables en las cedentes y condiciones técnicas del proceso. En el segundo se describen y analizan las transferencias planteadas para resolver los problemas de déficit planteados en el Libro Blanco del Agua y cuya solución puede ser abordable mediante trasvases intercuencas en función de la situación de los distintos sistemas hidráulicos. El tercero, dedicado a los análisis económicos y financieros, centra su contenido en el coste de los trasvases y sus posibles medios de financiación. En el cuarto se describen de forma genérica los impactos ambientales de las transferencias y se enumeran los aspectos que habrán de considerarse, en su caso, durante

el desarrollo de los proyectos de transferencias previstos en el PHN. El quinto volumen, finalmente, se dedica a la evaluación de los recursos de las unidades hidrogeológicas.

2.4.3.2. *El texto del Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional*

El eje central de este texto lo constituye la regulación de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes de cuenca, y en tal sentido cabe señalar que dicho texto, que se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria contempla las transferencias que se indican en el cuadro III-21:

También están previstas otras transferencias de pequeña cuantía cuyo volumen anual máximo se sitúa en 5 hm^3.

Se especifican tres condiciones a que se sujetarán las transferencias de agua autorizadas con origen en el bajo Ebro:

- Para que pueda efectuarse una derivación, el caudal que circula por el río, en los puntos de toma, ha de ser superior al que resulte de sumar el caudal mínimo ambiental fijado en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, más el correspondiente a las concesiones existentes aguas abajo de las tomas.
- Por el conjunto de tomas de las transferencias solo podrá derivarse un caudal total igual al circulante por el río que exceda de la suma anteriormente citada.

CUADRO III-21
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS HÍDRICOS CON ORIGEN EN EL RÍO EBRO

Destino (cuenca)	Volumen anual (hm^3)
Internas de Cataluña	190
Júcar	315
Segura	450
Sur	95

Fuente: Proyecto de Ley del PHN.

- Los embalses y sistemas hidráulicos de la cuenca del Ebro no se verán obligados a efectuar ningún desembalse con destino a favorecer los trasvases desde el bajo Ebro, excepto tres embalses (Mequinenza, Ribarroja y Flix).

Las normas técnicas de explotación de los trasvases se aprobarán mediante Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente.

En lo que respecta a los destinos de las aguas trasvasadas, el Proyecto de Ley fija los siguientes:

- Garantizar los usos actuales y futuros del abastecimiento urbano en las cuencas receptoras, siempre y cuando se esté llevando a cabo una gestión racional y eficiente del agua.

- Mejorar las condiciones ambientales de aquellos ecosistemas que se encuentren sometidos a intensa degradación.

- Consolidar el suministro de las dotaciones de los regadíos existentes de acuerdo con lo establecido en su correspondiente Plan Hidrológico de cuenca, que estén en situación de precariedad.

- Eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a la sobreexplotación existente en los acuíferos de la cuenca receptora.

Además las aguas trasvasadas no podrán destinarse, en ningún caso, a la creación de nuevos regadíos.

El régimen económico-financiero de los trasvases queda regulado a través del establecimiento de un tributo ecológico denominado «canon de trasvase» que tiene naturaleza de tasa y atiende tanto a los costes de las transferencias como a los derivados de las compensaciones de carácter ambiental a las cuencas cedentes por el agua trasvasada.

Los sujetos pasivos de dicho canon son los usuarios de las aguas trasvasadas. En caso de que la ejecución y gestión de las infraestructuras se encomiende a una entidad diferente de la Administración General del Estado, la misma será considerada sujeto

pasivo del canon en calidad de sustituto del contribuyente, obligándose a repercutir el mismo en las tarifas que deba percibir de los usuarios.

El importe del canon del trasvase se obtiene sumando la «cuota de utilización» del trasvase a la «cuota ambiental». En la primera están comprendidos los importes fijados para la compensación de los costes de la inversión repercutibles y la gestión de las infraestructuras del trasvase. La segunda incluye los costes de carácter medioambiental que se generan a las cuencas cedentes.

En lo que se refiere a los criterios de cálculo de dichas cuotas, la de utilización se calculará en función de los siguientes elementos:

- Gastos de funcionamiento y conservación de las infraestructuras.

- Gastos de administración de los organismos gestores, imputables a las obras.

- Coste anual de la compensación a los usuarios no consuntivos en la cuenca cedente o de tránsito, por las afecciones que se les produzca.

- Una anualidad de amortización aplicada a coste de las inversiones repercutibles requeridas para la ejecución de las obras.

La «cuota ambiental», por su parte, es una cuota fija por metro cúbico de agua trasvasada. Su cuantía se fija inicialmente en tres céntimos de euro (cinco pesetas) y se actualizará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El canon es independiente de la tarifa que haya de satisfacerse por la utilización de las infraestructuras y será gestionado y recaudado por los respectivos organismos de cuenca o administración hidráulica de las cuencas receptoras, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Otras materias contempladas en el Proyecto de Ley son las relativas a las sequías, inundación, aguas subterráneas, aguas para

abastecimiento urbano, humedales, investigación y desarrollo hidrológico y programación de inversiones.

Para la gestión de las sequías, los organismos de cuenca deben elaborar planes especiales y las Administraciones Públicas, responsables de los sistemas de abastecimiento urbano de poblaciones de más de veinte mil habitantes, deberían disponer de planes de emergencia ante situaciones de sequía.

Para las actuaciones en zonas inundables y la protección del dominio público hidráulico, el Proyecto de Ley faculta al Ministerio de Medio Ambiente para promover convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes del mencionado dominio.

En materia de aguas subterráneas, se elaborarán, en el Ministerio de Medio Ambiente, planes de acción para las cuencas intercomunitarias, y en las Administraciones hidráulicas de las Comunidades Autónomas en el caso de cuencas intracomunitarias.

En lo que se refiere a las aguas para abastecimientos urbanos, se declaran unos principios de eficacia en la gestión y sostenibilidad, así como la colaboración entre las diferentes administraciones públicas y las asociaciones representativas de empresarios y trabajadores en lo que respecta, en este caso, a la recuperación y utilización del agua en circuito cerrado en usos industriales.

Se prevé el establecimiento de un sistema de investigación y control para determinar los requerimientos hídricos necesarios que garanticen la conservación de los humedales.

En lo que se refiere a las actividades de investigación y desarrollo hidrológico se contempla la aprobación de programas que contribuyan a la mejora del conocimiento, tecnologías y proceso en los campos en que la planificación hidrológica detecte como prioritarios y en especial, en lo referente a la gestión, preservación de la calidad y uso sostenible del recurso.

Finalmente, se contempla un sistema de información a través de un registro oficial de datos hidrológicos y de la publicación, cada cuatro años, de un informe de seguimiento sobre la aplicación de los Planes Hidrológicos de Cuenca y del Plan Hidrológico Nacional.

2.4.3.3. *Las inversiones previstas*

El Plan Hidrológico Nacional contempla una inversión total de 3,8 billones de pesetas, de los cuales 0,7 corresponden a trasvases y 3,1 al resto de medidas previstas, con la distribución que se señala en el cuadro III-22.

CUADRO III-22
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PREVISTA EN EL PHN

Capítulo	Objetivos	Inversión (millones ptas.)
Modernización de regadíos	Mejorar las canalizaciones de riego. Favorecer el ahorro en la agricultura.	1.023.345
Saneamiento y depuración de aguas	Mejorar la calidad de las aguas. Fomentar la reutilización.	433.512
Abastecimientos	Garantizar el suministro y la calidad del agua para el consumo humano a todos los municipios.	468.386
Regulación general		452.379
Acondicionamiento de cauces y prevención de avenidas	Contribuir a prevenir los graves efectos que producen las inundaciones.	238.594
Restauración hidrológica-forestal	Recuperar los ecosistemas asociados a los cauces de los ríos.	309.407
Programas de control y calidad de las aguas	Vigilar las cualidades organolépticas y químicas de las aguas.	209.655

Fuente: Proyecto de Ley del PHN.

En el aspecto territorial, la distribución de las inversiones se reparte de la forma que se indica en el cuadro III-23.

CUADRO III-23
REPARTO TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN DEL PHN

Comunidades Autónomas	Millones ptas.	Porcentaje
Andalucía	691.802	22,1
Aragón	418.295	13,3
Asturias	80.648	2,6
Baleares	46.589	1,5
Canarias	98.995	3,2
Cantabria	61.202	2,0
Castilla-La Mancha	205.752	6,6
Castilla y León	250.970	8,0
Cataluña	181.226	5,8
Ceuta	4.388	0,1
Comunidad Valenciana	217.112	6,9
Extremadura	194.054	6,2
Galicia	98.454	3,1
Madrid	100.630	3,2
Melilla	8.610	0,3
Murcia	177.377	5,7
Navarra	167.541	5,3
País Vasco	69.912	2,2
La Rioja	36.934	1,2
Varias Comunidades	24.788	0,8
Total	**3.135.279**	**100,0**

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.

2.4.3.4. *El problema del reparto del agua*

Como ya se ha expuesto, los desequilibrios existentes en el territorio en materia de disponibilidad de recursos hídricos en las diferentes zonas, han llevado a una planificación hidrológica centrada

principalmente en el reparto del agua, en que las cuencas excedentarias cederían una parte de sus recursos a favor de las deficitarias. Pero las soluciones puramente técnicas de transferir el recurso de unas zonas a otras, no suelen ser inocuas desde la perspectiva social, pues en toda transferencia de agua de una cuenca a otra hay que contemplar, entre otros, determinados aspectos económicos y ambientales que afectan, en mayor o menor medida, a las poblaciones de las zonas implicadas.

Estas cuestiones son precisamente las que han centrado los debates sociales relativos al agua en los últimos años. En los aspectos económico-financieros preocupan especialmente los costes de las inversiones y su repercusión sobre los precios del agua a pagar por los consumidores finales. En materia ambiental las preocupaciones se centran en los problemas que, potencialmente, se crearían sobre los ecosistemas de las zonas cedentes.

Si bien es cierto que el proyecto de Plan Hidrológico Nacional contempla en su regulación estas cuestiones, también lo es que las soluciones previstas en aquél no han dado plena satisfacción a la totalidad de sectores económicos y sociales, pues algunos se opusieron al texto presentado a las Cortes Generales.

ANEXO III-4

INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE

Indicadores	Alemania	Austria	Bélgica	Dinamarca	Finlandia	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Luxemburgo	Portugal	Reino Unido	Suecia	España	UE-15
Territorio, 1998																
Superficie total (1.000 Km^2) (MA1)	357	84	31	43	338	549	132	42	70	301	3	92	245	450	**506**	39.790
Áreas protegidas (% territorio nacional) (2) (MA2)	26,9	29,2	2,8	32,0	8,4	10,1	2,6	11,6	0,9	7,3	14,4	6,6	20,4	9,0	**5,7**	12,4
Superficie forestal (% territorio nacional) –1999– (MA3)	30,1	47,6	22,2	10,5	75,5	31,4	22,8	9,2	8,8	23,3	34,4	37,9	10,5	73,5	**27,5**	38,0
Defoliación todas las especies (%) (MA4)	21,7	6,8	17,7	13,2	11,4	19,7	16,6	—	13,0	35,3	—	11,1	21,4	13,2	**12,9**	—
Superficie destruida por incendios forest. (%)* (MA5)	0,006	0,001	0,009	0,001	0,004	0,139	0,879	0,011	0,032	0,728	0,002	0,313	0,013	0,008	**0,6345**	0,194719
Contaminación atmosférica, 1997																
Emisiones de gases contaminantes																
SOx (Kg/hab.) (MA6)	17,9	7,1	23,7	20,7	19,5	16,2	48,2	8,0	45,1	23,1	14,3	36,2	34,5	10,3	**49,1**	25,5
NOx (Kg/hab.) (MA7)	22,0	21,2	32,9	47,0	50,6	29,1	35,1	28,5	33,9	30,9	47,5	37,6	35,0	38,1	**31,7**	30,3
CO_2 (Tm/hab.) (MA8)	11,0	9,2	13,1	12,1	12,6	6,5	8,4	12,7	10,6	7,8	21,7	5,5	9,6	6,4	**6,8**	8,9
Ruido																
Población expuesta a leq>65 dB(A) (millón. hab.) (1) (MA9)	9,5	—	1,2	0,5	0,2	9,4	2,0	0,6	—	—	—	3,0	5,7	—	**8,9**	4,1
Calidad de aguas, 1997																
Población conectada a tto. aguas residuales (%) (MA10)	89,0	74,7	27,1	87,4	77,0	77,0	50,0	97,4	61,0	61,0	88,0	21,0	88,0	93,0	**48,3**	73
Reservas de aguas (% disponibilidad bruta anual) (MA11)	24,4	2,7	42,5	15,7	2,2	23,9	12,1	4,9	2,6	32,2	3,4	11,9	14,6	1,5	**36,8**	20,7
Generación y tratamiento de residuos sólidos, 1997																
Residuos municipales (kg/habitante) –1997– (MA12)	460,0	690,0	480,0	560,0	410,0	590,0	370,0	560,0	560,0	460,0	460,0	380,0	480,0	360,0	**390,0**	450
Reciclado papel y cartón (% consumo aparente)* (MA13)	70,0	69,0	16,0	50,0	57,0	41,0	29,0	62,0	12,0	31,0	—	40,0	40,0	62,0	**42,0**	48,8
Reciclado de vidrio (% consumo aparente)* (MA14)	79,0	88,0	75,0	70,0	62,0	52,0	26,0	82,0	38,0	34,0	—	44,0	26,0	76,0	**37,0**	61,8
Gasto público I+D para protección medio ambiente*, 1998																
% PIB (MA15)	0,26	0,24	0,35	0,99	0,32	0,41	—	0,80	0,31	0,20	0,61	—	0,27		**0,25**	
MM $ (a precios y paridad poder compra de 1991) –1997–	—	21,6	21,8	30,5	23,3	255,7	—	100,1	—	—	—	35,2	—	11,5	**86,5**	586,2
Energía*, 1997																
Producción total (Mtep)	139,7	8,0	13,2	20,3	15,1	127,8	9,6	65,3	2,9	29,3	—	2,3	269,0	33,1	**31,4**	767,0
Consumo (Mtep)	244,3	22,5	40,4	15,8	24,0	161,2	18,0	58,1	9,3	125,5	3,2	15,9	157,2	35,7	**74,9**	1.006
Agricultura*, 1997																
Superficie en regadío (Km^2)	4.750	40	350	4.760	640	16.700	13.850	5.650	—	26.980	—	6.320	1.080	1.150	**36.030**	118.300
Consumo de fertilizantes NPK (1.000 Tm)	2.857	233	320	445	309	5.072	506	501	675	1.841	—	239	2.105	105	**2.062**	17.270
Ingresos por impuestos medioambientales*, 1997																
MM$	59.161	4.787	5.733	7.725	3.457	—	—	13.817	1.916	—	—	3.908	32.341	—	**11.495**	144.340
% PIB	2,5	4,9	4,8	8,7	6,5	—	—	3,6	3,1	—	—	3,8	2,9	—	**2,1**	

—: no disponible.
* Datos referentes a 1997 o último año disponible.
(1) Datos referidos a ruido de tráfico rodado.
(2) Datos referidos a las categorías I-IV IUNC.
Fuentes: OECD *Environmental Data, Compendium 1999*. Comisión Europea. *Estado de los bosques en Europa, Informe 2000*.

2.5. Consumo

Los cambios registrados en la estructura del consumo durante los últimos años dan cuenta de la consolidación en España del modelo dominante en Europa occidental. Tal como se puso de manifiesto en anteriores ediciones de esta Memoria, ese modelo de consumo, que es síntoma de desarrollo de las sociedades industriales, se articula en torno a una distribución del gasto privado en la que pesan menos los bienes asociados a las necesidades elementales. Exhibe además actitudes características de los consumidores: más conscientes de sus derechos y más reflexivos en sus decisiones. Y presenta un claro correlato en el espectro normativo.

La actual falta de crecimiento relativo en los elementos que componen las categorías tradicionales del consumo (como la alimetación y el textil) queda, sin embargo, compensada con el aumento de otros grupos de gasto (como transportes, telecomunicaciones, ocio y salud). Pero el gasto principal lo constituye hoy la vivienda.

A lo largo de 2000 las familias dedicaron el 20,7 por 100 de su gasto total en consumo a productos de alimentación. La comparación de esa distribución del gasto de los hogares con la registrada diez años antes permite confirmar la consolidación de un patrón de consumo maduro en España, por cuanto que el ritmo de evolución hacia una distribución en la que las necesidades básicas —especialmente la alimentación— pierden peso, disminuye con el paso del tiempo. En los primeros años noventa el dinero que en cada hogar se destinaba a alimentos suponía un 23 por 100 del total del presupuesto familiar. En 2000 la proporción se reduce en dos puntos y medio. Teniendo en cuenta que en el transcurso de las décadas anteriores el volumen del cambio en esa dirección había sido muy superior a lo ocurrido en los últimos diez años, puede afirmarse que el modelo de distribución se encuentra ya establecido, y ello ha sido posible en un contexto socioeconómico y cultural de rasgos propicios: aumento de la riqueza y transformación axiológica, entre cuyos síntomas más notables se encuentra el nuevo reparto de responsabilidades entre los actores implicados en los actos de consumo.

La asunción de esas responsabilidades viene reflejándose año tras año en el aumento del número de consultas y reclamaciones realizadas por los consumidores. Dicho aumento debe interpretarse como un indicador de la madurez del modelo, transformado desde el punto de vista de la cultura, por la extensión del conocimiento de los instrumentos disponibles para la salvaguarda de los derechos reconocidos a los consumidores, tanto como por la progresiva toma de conciencia de esos derechos. Como se verá más adelante, el año 2000 ha sido testigo de un apreciable aumento del número de quejas presentadas en las asociaciones de consumidores para su tramitación, correspondiéndose las áreas de consumo más afectadas con los grupos de gasto doméstico a los que más importancia atribuyen los consumidores, tanto por su peso en las economías familiares como por su creciente relevancia simbólica.

Pero los consumidores tienen a su disposición mecanismos de acción más inmediatos cuando se encuentran en situaciones de insatisfacción. La reducción del consumo de determinados productos y su sustitución por otros es una forma de resolver, desde el estricto ámbito privado, los conflictos que puedan derivarse de la pérdida de confianza, como ha ocurrido en los últimos meses del año con la carne de vacuno. Precisamente, la aparición de la enfermedad de las «vacas locas» en España ha encendido una de las más destacadas polémicas en el ámbito del consumo. La rápida respuesta individual —activación de la solución preventiva tras la pérdida de confianza— vino a unirse, como queda reflejado en las páginas siguientes, a la reaparición del debate en torno a la necesidad de una mayor coordinación en el tratamiento administrativo de los problemas relacionados con la alimentación y la salud.

Entre las novedades y polémicas recogidas también a lo largo del año se dedicará especial atención al comercio electrónico, que por primera vez es objeto de consideración en esta Memoria. El rápido aumento del volumen de las transacciones comerciales realizadas a través de Internet, no sólo en los países pioneros en tal modalidad de comercio, sino también en España, justifica la presencia de esta novedad, a la que se dedicará un apartado específico, en el que se repasarán, además, las respuestas normativas a las demandas de seguridad por parte de los potenciales usuarios.

2.5.1. **Indicadores básicos**

Con el fin de situar todos esos contenidos concretos en un amplio contexto, se aborda, en primer lugar un breve recorrido a través de los aspectos estructurales del consumo. La distribución del gasto de los hogares esto es, la cuantía proporcional de cada partida, así como el marco actitudinal en el que se desarrollan los procesos de consumo constituyen indicadores básicos de la evolución del fenómeno, sobre los que debe apoyarse el examen de las cuestiones puntuales.

Durante el año 2000, según los últimos datos ofrecidos por el INE en la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, los hogares españoles dedicaron al consumo final algo más de 40 billones de pesetas, lo que supuso un aumento del gasto sobre el año anterior, una vez descontado el efecto de la inflación, del 5,8 por 100. Ese incremento superó de forma notable al experimentado en el periodo anterior, que registró un 2,9 por 100.

Sin embargo, aunque los hogares gastaran en términos globales más que en el año anterior, los datos desglosados trimestralmente revelan una trayectoria anual desigual, por cuanto que la aceleración de los primeros meses remitió en el último tramo, poniendo de relieve un cierto empeoramiento de la situación económica de los españoles (gráfico III-11).

El gasto en consumo que cada hogar realizó en todo el año, esto es, el gasto medio por hogar, superó los 3 millones de pesetas, incrementándose en un 3,6 por 100 sobre 1999. Esa variación positiva fue, como ya se detectó en la información sobre los gastos totales, notablemente más alta que la que correspondió al año anterior (0,5 por 100).

La estructura del consumo

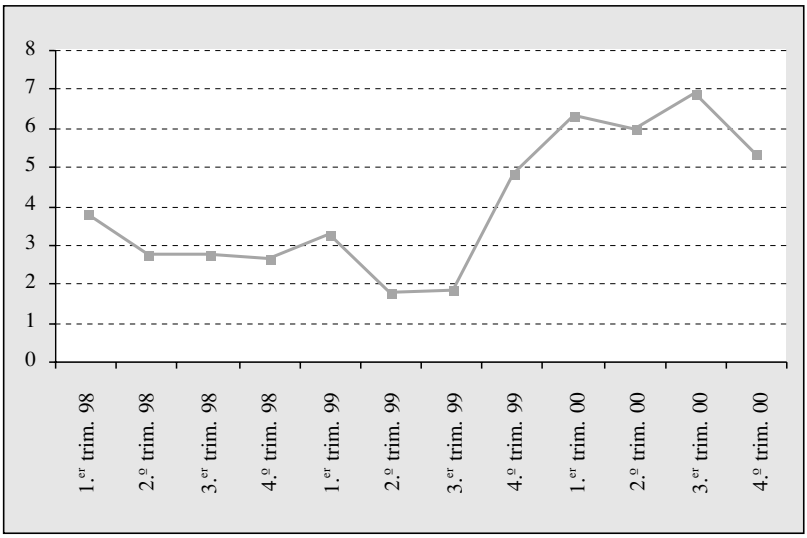
Los hogares españoles dedican en la actualidad más del 35 por 100 de su presupuesto anual a gastos de vivienda, incluyendo equipamiento y conservación. Los últimos datos desagregados de los que se dispone[61] sitúan a la vivienda en el primer lugar en cuanto

[61] Correspondientes a la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares de 1998.

GRÁFICO III-11

EVOLUCIÓN DEL GASTO TOTAL TRIMESTRAL, 1998-2000

(Porcentajes de variación sobre el mismo trimestre del año anterior)



Fuente: INE, *Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.*

al empleo de recursos (cuadro III-24). Sin embargo, la dispersión de los datos con respecto a la media revela importantes diferencias interregionales. Así, la proporción de gasto que los hogares madrileños dedicaron a la compra, alquiler y mantenimiento regular de sus viviendas superó el 39 por 100, alejándose del resto de las comunidades. En el otro extremo, Murcia, Galicia y Extremadura fueron las comunidades en las que las familias tuvieron que destinar menos recursos, en términos proporcionales, a una partida que en ninguno de los casos supuso más de la tercera parte del consumo total en esas regiones[62]. La naturaleza de este gasto, realizado con arreglo a una trama motivacional que trasciende el objetivo de cubrir una necesidad básica, muestra matices diferenciadores territorialmente, siendo la elevación de los precios uno de los principales causantes del aumento del peso relativo de esta partida en los últimos años. No debe olvidarse, además, que la compra de inmuebles constituye hoy una de las modalidades de ahorro más practicadas

[62] Para una explicación detallada de las diferencias de gasto entre las distintas Comunidades Autónomas, consúltese el apartado sobre precios del metro cuadrado de vivienda construida en el capítulo dedicado a la vivienda.

CUADRO III-24

ESTRUCTURA DEL GASTO TOTAL Y DEL GASTO MEDIO POR HOGAR, 1998

(Gasto total en millones de pesetas y gasto medio por hogar en pesetas. Totales anuales)

Grupos de gasto	Gasto total	Gasto %	Gasto por hogar
Alimentos y bebidas no alcohólicas	6.116.378	17,4	506.064
Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	916.201	2,6	75.806
Artículos de vestir y calzado	2.532.338	7,2	209.523
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	10.670.837	30,4	882.896
Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos de conservación vivienda	1.671.445	4,8	138.294
Salud	835.066	2,4	69.093
Transportes	4.193.509	12,0	346.967
Comunicaciones	673.261	1,9	55.075
Ocio, espectáculos y cultura	2.074.705	5,9	171.659
Enseñanza	473.472	1,4	39.175
Hoteles, cafés y restaurantes	3.137.335	8,9	259.580
Otros bienes y servicios	1.794.279	5,1	148.457
Total	35.088.827	100,0	2.903.218

Fuente: INE, *Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.*

en ciertos segmentos, aunque en los últimos meses, tal como se explica en el epígrafe 2.3, dedicado a la vivienda, el ritmo de este gasto se haya ralentizado.

El equipamiento de los hogares, base del gasto en consumo de bienes duraderos, se presenta como un episodio cargado de connotaciones de contenido cultural entre las que no se excluyen las motivaciones ligadas al prestigio —lo que hace suponer la pervivencia de algunos rasgos propios del nacimiento del consumo de masas en España en los años sesenta— y la creciente valoración del tiempo de ocio como espacio privilegiado para la adquisición y el disfrute de elementos producidos con ese fin. Baste como ejemplo la aparente contradicción que se percibe en la información que el CIS[63] ofrece sobre las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos con respecto a algunos bienes de consumo: uno de cada diez considera necesario poseer un aparato de vídeo, sin embargo la proporción de poseedores es muy superior —siete de cada diez disponen de uno—. De la misma manera, el 15 por 100 de los encuestados

[63] CIS, *La calidad de vida de los españoles*, 2000 (Estudio 2380).

encuentran necesario poseer lavavajillas, pero la proporción de quienes lo tienen es ciertamente superior. Mediando entre la percepción de la necesidad y el acto de compra, se encuentra la dimensión del deseo, concepto lábil por su sujeción a las cambiantes variables socio-psicológicas que intervienen en la construcción de ese proceso mental. La concepción social de la vivienda como valor patrimonial y como reflejo de estatus explicarían en parte la importancia concedida a su acomodo a través de la incorporación de objetos que superan el umbral de la necesidad subjetiva y que son situados explícitamente por los ciudadanos en el ámbito de lo deseable (cuadro III-25).

Aumenta el consumo de alimentos en hostelería

El capítulo de la alimentación merece ser abordado matizando algunos aspectos que, desde la implantación del nuevo registro de categorías de consumo en el INE, pueden ser cuantificados con un mayor ajuste. A partir de la publicación de los datos de la *Encuesta Continua de Presupuestos Familiares* de 1998 es posible distinguir el gasto familiar en productos de alimentación para consumo dentro del hogar y el realizado en esa misma área, pero a través del circuito hostelero. Si bien es cierto que el nuevo grupo incluye gastos en hoteles además de los realizados en cafés y restaurantes, el volumen total de los recursos dedicados permite entender que una parte importante del gasto en comidas se ha ido desviando en los últimos años fuera del ámbito doméstico. Los nuevos estilos de vida, asociados a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, a la emergencia de nuevas estructuras familiares —la función reproductora pierde importancia, reduciéndose el tamaño de la familia media—, y a la asunción de nuevos valores vinculados al disfrute del tiempo li-

CUADRO III-25
ACTITUDES ANTE ALGUNOS OBJETOS DE EQUIPAMIENTO, 2000
(En porcentaje)

Objetos	Renunciable	Deseable	Necesario	Posee
Aparato de vídeo	71	22	5	68
Ordenador	47	36	15	33
Lavavajillas	41	42	15	29
Televisor	13	30	56	97

Fuente: CIS, *La calidad de vida de los españoles*, 2000 (Estudio 2380).

bre, han supuesto modificaciones en algunas pautas de comportamiento relacionadas con la alimentación. Baste observar los datos relativos a la evolución reciente del hábito de consumo de alimentos en los hogares y en restaurantes y hoteles: entre 1994 y 1999 las compras de productos alimentarios para consumo doméstico han aumentado un 0,9 por 100, mientras que el crecimiento del consumo extradoméstico en ese periodo ha alcanzado casi el 7 por 100.

Atendiendo a la distribución del gasto se observa una pérdida de peso de las compras de alimentos para su ingesta dentro del hogar (76 por 100 en 1994 y 71,7 por 100 cinco años más tarde) a favor del gasto en establecimientos hosteleros, que pasa de suponer el 21, 7 por 100 al 26,3 del gasto total en elementos de nutrición.

El estudio *La alimentación en España* que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) edita anualmente[64], recoge algunos datos relevantes acerca de las costumbres de los españoles en este ámbito. La información suministrada confirma la tendencia al crecimiento del volumen de gasto familiar en alimentación fuera de casa, aunque matiza la composición de la cesta extradoméstica, poniendo de manifiesto que una parte importante del consumo en ese sector (43 por 100 en 1999) corresponde a bebidas, alcohólicas y no alcohólicas (cuadro III-26).

CUADRO III-26
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE COMPRA DE ALIMENTOS, 1994-1999
(Miles de millones de pesetas)

Año	Hogares	Hoteles y restaurantes	Instituciones	Total
1994	6.052	1.728	183	7.963
1995	5.852	1.854	200	7.905
1996	5.944	1.976	180	8.100
1997	6.094	2.084	164	8.628
1998	6.187	2.273	167	8.342
1999	6.334	2.325	175	8.834

Fuente: MAPA, *La alimentación en España*, 2000.

[64] Desde 1986 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realiza un seguimiento de la alimentación en España a través del Panel de Consumo Alimentario, que recoge información de los sectores doméstico, extradoméstico e institucional.

Diferencias regionales en la atribución de recursos de los hogares a las partidas de gasto

Considerando la partida en su conjunto —supone aproximadamente el 20 por 100 del total—, y atendiendo a lo acontecido en las distintas Comunidades Autónomas, destaca Madrid por la baja proporción de gasto familiar anual en alimentos, que compensa el alto valor de los recursos destinados a la vivienda. Los hogares cántabros, en cambio superaron al resto en su consumo alimentario, dedicando casi la cuarta parte del presupuesto anual.

El panorama presentado revela la proximidad de las pautas de consumo en España con los países más desarrollados de su entorno. Como se desprende de los datos ofrecidos por la OCDE, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, y Finlandia muestran relaciones muy similares entre el gasto en alimentación y el resto de los gastos, situándose en una ratio que varía entre el 18 y 20 por 100. En cambio, se separa de Grecia, Irlanda y, en menor medida, de Portugal, que muestran patrones de distribución menos desarrollados[65].

Los actos de consumo poseen una dimensión que no puede ser obviada si se pretende caracterizar, siquiera a grandes rasgos, el estado puntual de ese fenómeno, y más aún cuando se trata de elementos de consumo cotidiano y de cierto peso en los presupuestos familiares. El consumo de alimentos, tanto como otros, muestra una faceta de costumbre, visible en la información cuantitativa que ofrecen regularmente algunos institutos y centros de investigación y que se concreta en la preferencia sobre los espacios para realizar la compra, la asociación de ciertas compras con determinados roles familiares y el hábito de compañía, que refleja tanto la función ociosa del consumo como su transformación en un espacio de codecisión en un entorno familiar que tiende a recomponerse en nuevos repartos de tareas y responsabilidades, aunque la estructura tradicional sea aún dominante.

Los españoles hacen la compra preferentemente en supermercados e hipermercados, pero la elección de unos u otros depende, además de los criterios de proximidad con respecto al domicilio y las ventajas en los precios, de que esta labor se realice o no en compañía. El supermercado es, tal como muestran los datos del CIS, la alternativa más frecuentada. El 40 por 100 de quienes hacen la com-

[65] Véase Anexo de Indicadores de consumo (Anexo III-5).

pra solos y el 35 de los que reconocen hacerla acompañados acuden a esa clase de establecimientos habitualmente. En cambio, las grandes superficies se frecuentan generalmente en compañía (38 por 100 frente al 12 por 100 de quienes acuden solos).

La compra de alimentos es una tarea ligada al mantenimiento del hogar, y como tal está tradicionalmente asignada a la figura del ama de casa, y por tanto a las mujeres. En los últimos tiempos esa función ha venido repartiéndose entre los sexos, aunque dicho reparto dista todavía de ser completo. Del total de los entrevistados que realizan la compra personalmente, el 76 por 100 son mujeres y sólo el 22 por 100 son hombres.

Aumenta la proporción de gasto familiar en transportes

A otro importante grupo de gasto, los transportes, los hogares han dedicado en el último periodo casi el 12 por 100 de su presupuesto anual. El aumento reciente del gasto en esta área, que incluye los medios privados, está estrechamente relacionado con los estilos de vida propios de las sociedades modernas, entre cuyos rasgos se encuentra el distanciamiento entre un gran número de domicilios familiares y los lugares de trabajo, en tanto que los primeros han ido desplazándose a la periferia de lo grandes núcleos urbanos. Pero ese aumento no llega a modificar la estructura del gasto con la misma intensidad de las décadas pasadas, contribuyendo a explicar la estabilización del modelo de consumo. En definitiva, el aumento del gasto en esta partida, notable en las dos décadas pasadas y más moderado en los últimos años, viene a situar a los hogares españoles en una posición muy similar a la de la mayoría de los países miembros de la Unión Europea.

De la misma manera, el volumen de gasto en ropa y calzado, algo más bajo que a principios de los años noventa, no cambia en lo esencial la distribución del consumo familiar de los últimos años. Los españoles se acercan a sus vecinos europeos en algunas de sus costumbres de consumo en indumentaria[66]. Pero conservan rasgos actitudinales característicos de la cultura mediterránea, entre cuyos contenidos tradicionales figura una mayor proclividad a la atención de la apariencia personal como registro idiosincrásico. No en vano, la gran mayoría, según los datos recogidos en 2000, considera necesario o deseable poder comprar ropa nueva con regularidad y sólo

[66] Véase Anexo de Indicadores de consumo (Anexo III-5).

el 17 por 100 opina que se puede renunciar a la renovación regular del vestuario[67]. En coherencia con esa generalizada actitud, siete de cada diez españoles tienen la costumbre de comprar ropa regularmente, aunque dos de cada diez reconocen no hacerlo por falta de medios.

Esa preferencia por la renovación del vestuario lleva a los españoles a dedicar más del 7 por 100 de sus presupuestos familiares a artículos de vestir y calzado, proporción que sólo es superada ligeramente por los hogares italianos y portugueses.

2.5.2. **Consultas y reclamaciones de los consumidores**

Uno de los síntomas más claros de la madurez de las formas de consumo viene dado, incuestionablemente, por el acervo de actitudes relacionadas directa o lateralmente con los actos de compra de bienes y servicios. Entre las más denotativas del alcance de la madurez lograda en la cultura del consumo en España se encuentra la asunción, relativamente rápida, de los derechos de los consumidores, que se ha materializado en un progresivo aumento de las quejas formuladas a través de los mecanismos dispuestos por las administraciones. Asimismo, viene siendo notable el ritmo de incorporación, por parte de las empresas, de los instrumentos creados para la solución de conflictos de consumo. En pocos años el número de empresas asociadas al sistema arbitral de consumo ha aumentado de forma importante, lo que unido a la actividad promovida desde el ámbito de los consumidores, en cuya movilización ha contribuido enormemente el movimiento asociativo, conforma un escenario renovado, en el que los derechos y responsabilidades de los agentes —empresas y consumidores— reflejan el asentamiento de un patrón de consumo maduro también en términos culturales.

El número de consultas y reclamaciones realizadas por los usuarios y consumidores durante el año 2000 ascendió a 928.677, según los datos aportados por las asociaciones de consumidores que integran el Consejo de Consumidores y Usuarios. Esta cifra supone un aumento del 9,3 por 100 sobre el año anterior.

[67] CIS, *La calidad de vida de los españoles*, 2000 (Estudio 2380).

Sin embargo, el incremento del número de consultas y reclamaciones fue, pese a su cuantía, inferior al registrado en el ejercicio anterior. Durante 1999 la actividad de asesoramiento y defensa de los consumidores aumentó, según el informe anual presentado por el Instituto Nacional de Consumo[68], en un 21,3 por 100 sobre 1998. Pues bien, esta moderación del ritmo de crecimiento de las quejas presentadas no responde al seguimiento de una trayectoria lineal en la evolución de ese indicador. Antes al contrario, la información que sobre ello proporciona el informe del INC, muestra importantes oscilaciones, aunque la tendencia viene orientándose, desde el comienzo de la pasada década, al crecimiento. Probablemente el recorrido oscilatorio de ese comportamiento, manifestación no sólo del desacuerdo de un significativo número de ciudadanos con las prestaciones recibidas en tanto que consumidores, sino sobre todo de la madurez alcanzada por éstos, responde, entre otras razones, a las variaciones en las modalidades de presentación de las reclamaciones, que en determinados casos se realizan de manera colectiva (frecuentemente en el sector de la vivienda), contribuyendo con menos registros al cómputo total de casos.

Importante crecimiento del número de protestas en el sector telefónico

La distribución sectorial, por contra, se mantiene (cuadro III-27), aunque algunos capítulos han experimentado cambios que reflejan las variaciones habidas en los hábitos de consumo. Así, por ejemplo, aumentó el número de protestas relacionadas con las telecomunicaciones, y más específicamente con los servicios de telefonía, que experimentaron un extraordinario incremento, lo que muy probablemente se relaciona con el considerable crecimiento del número de usuarios de telefonía móvil[69]. El sector telefónico aumentó en un 44 por 100 como motivo de consulta y reclamación entre 1999 y 2000.

Los servicios financieros, con un 10 por 100 del total de las consultas y reclamaciones emitidas, constituyeron otro foco de insatisfacción, que sin embargo fue más moderada que la reflejada, en términos de quejas, durante 1999, año en el que se registró como un 12 por 100 del total.

[68] INC, *Consultas y reclamaciones recibidas en las asociaciones de consumidores de ámbito nacional, Ejercicio 1999*.

[69] Véase la información contenida a este respecto en el epígrafe 2.6, dedicado a la sociedad de la información.

CUADRO III-27
DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES, 2000

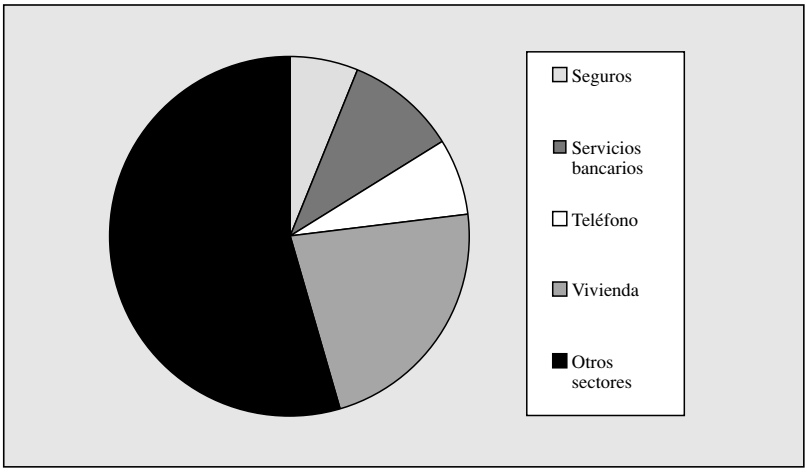
Conceptos	Porcentaje
Agencias de viaje	1,8
Agua	0,9
Alimentación	3,8
Automóvil usado	1,8
Automóvil nuevo	1,2
Reparación de automóvil	2,3
Seguros de automóvil	1,5
Seguros	4,6
Electricidad	2,1
Electrodomésticos	2,5
Electrodomésticos SAT	2,6
Farmacia	0,6
Gas	2,9
Hostelería y restauración	1,5
Muebles	1,0
Reparación hogar	3,8
Ropa y calzado	1,8
Sanidad pública	2,4
Servicios bancarios	10,0
Teléfono	7,0
Tintorería	1,0
Transportes públicos	2,5
Vivienda	22,6
Otros sectores	17,9
Total	**100,0**

Fuente: Elaboración propia a partir de información remitida por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que componen el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).

La vivienda continúa siendo el sector con más reclamaciones

Con más frecuencia que los anteriores, el sector de la vivienda acumuló buena parte de las consultas y reclamaciones atendidas por las asociaciones de consumidores, que durante el año 2000 recibieron una cantidad que representa el 22,6 por 100 del total de las recibidas (gráfico III-12), y supuso un incremento de más de tres puntos sobre el anterior ejercicio. Vinculadas con las deficiencias de construcción, las condiciones de venta y los precios, entre otras, las quejas en este ámbito se reparten desigualmente entre el sector de la propiedad y el alquiler. El primero motivó el 17,9 por 100 de las consultas y reclamaciones, que según las propias asociaciones deben atribuirse a las reparaciones realizadas por las comunidades

GRÁFICO III-12
DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS Y RECLAMACIONES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2000



Fuente: Elaboración propia a partir de información remitida por las asociaciones de consumidores y usuarios que componen el CCU y el Instituto Nacional de Consumo.

de propietarios, así como a defectos de construcción y a los retrasos en la entrega de viviendas nuevas, mientras que el segundo fue causa del 4,7 de las recibidas.

Por otra parte, el capítulo de las reparaciones del hogar mantuvo el volumen de quejas que acumulara durante 1999, y que constituye algo más del 3 por 100 del conjunto. En definitiva, no debe olvidarse el contenido simbólico del sector de la vivienda, que constituye un importante apartado de la economía de las familias y que por ello genera más atención y vigilancia.

2.5.3. **Transacciones electrónicas**

Entre las variadas modalidades de venta a distancia el comercio electrónico es, probablemente, la que más interés ha despertado en los últimos tiempos por las novedades implicadas en su práctica, ligada a un medio escasamente regulado y poco frecuentado y por ello generador de inquietud. La información disponible sobre las pautas de comportamiento de los agentes del consumo —necesariamente reciente— revela algunas de las claves del amplio debate

suscitado en torno a un fenómeno sobre el que la literatura prospectiva acerca de Internet y de las posibilidades —no sólo comerciales— abiertas por las tecnologías de la información, viene abundando desde mediados de los años noventa.

El volumen del comercio electrónico en España, inferior a la media europea

En España, el volumen de la actividad mercantil a través de Internet es todavía muy inferior al que se registra en otros países, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, el fuerte crecimiento experimentado durante el último año hace suponer un progresivo acercamiento, si no a aquel país, a otros de Europa.

La instalación del comercio electrónico de manera normalizada requiere el cumplimiento de unas condiciones sin las cuales ese objetivo es difícilmente alcanzable. En primer lugar, el crecimiento del número de consumidores que realicen sus compras a través de Internet pasa necesariamente por el aumento del número de usuarios de ese canal de comunicación. Como se explica en recientes estudios, ese aumento será notablemente visible a medida que se avance hacia la denominada convergencia digital[70], facilitando fórmulas de acceso alternativas al ordenador personal. Debe, por otro lado, garantizarse la seguridad en las transacciones con el fin de elevar el nivel de confianza de los usuarios potenciales. Por tanto, la regulación normativa debe atender a los criterios de seguridad y control demandados por los consumidores.

Los últimos estudios sobre penetración de las tecnologías de la información en los hogares revelan una situación de retraso de España con respecto a los países del norte de Europa. Aunque ponen de manifiesto un ritmo de crecimiento superior a la media europea[71] (gráfico III-13).

El comercio electrónico, cuya evolución en los tres últimos años habría supuesto alcanzar en términos de facturación 34.000 millones de pesetas en España[72] (gráfico III-14), se ha beneficiado de las compras realizadas por el 18 por 100 de los usuarios actuales de

[70] La convergencia digital consiste en la unión de las funciones del ordenador, la televisión y el teléfono en un mismo aparato.

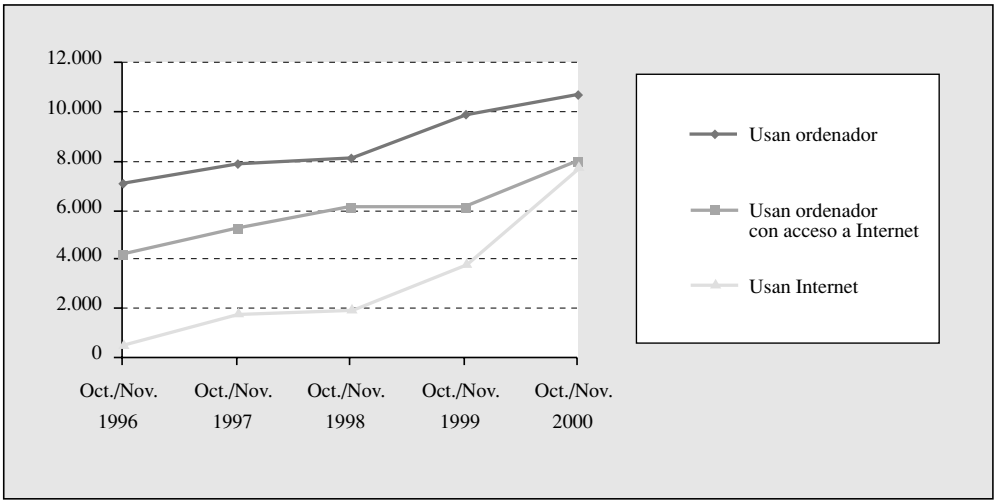
[71] Véase el epígrafe dedicado a la sociedad de la información.

[72] Estimación realizada por la Asociación Española de Comercio Electrónico, 2001.

GRÁFICO III-13

USUARIOS EN ESPAÑA DE ORDENADOR E INTERNET, 1996-2000

(Miles de personas)

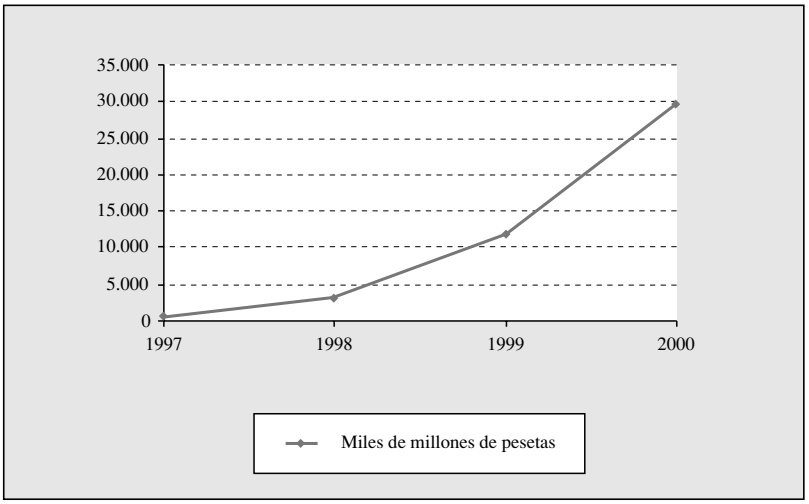


Fuente: Instituto Nacional de Consumo.

GRÁFICO III-14

FACTURACIÓN GENERADA A TRAVÉS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, 1997-2000

(Estimación. Millones de pesetas corrientes)



Fuente: Instituto Nacional de Consumo.

CUADRO III-28
MOTIVOS DE LOS USUARIOS PARA COMPRAR EN INTERNET

Por su mayor comodidad	42,5
Por su precio	18,6
Por la rapidez	13,0
Por la mayor accesibilidad	7,5
Por no encontrarlo en otro sitio	5,1
Por ser el único medio posible	5,0
Por probar	3,8
Otras	4,0
NS/NC	2,1

Fuente: AECE, 2000.

Internet[73]. Dicha proporción se encuentra muy por debajo de la media uropea, situada en el 30,8 por 100 de los usuarios, y a gran distancia de Suecia, Dinamarca y Reino Unido, países en los que el número de compradores a través de Internet alcanzó e incluso superó el 40 por 100 de los internautas en 2000.

La medida del hábito, más aproximada a la realidad de los procesos de consumo, muestra en cambio valores muy bajos en Europa. Únicamente el 4,7 por 100 de los usuarios de Internet compran regularmente a través de los mecanismos ofrecidos en la red. Mientras que los consumidores españoles no superan el 2,7 por 100 de los internautas. Este panorama contrasta con lo ocurrido en Estados Unidos —referencia ineludible—, donde casi tres de cada diez internautas practican el comercio electrónico.

Demandas de seguridad en las transacciones electrónicas

La seguridad en la red, aspecto tratado en el epígrafe 2.6, dedicado a la sociedad de la información, ha sido durante el año 2000 motivo de preocupación entre los consumidores, que aún encuentran obstáculos para realizar operaciones comerciales a través de ese ca-

[73] Datos extraídos del eurobarómetro correspondiente al mes de octubre de 2000.

nal. Entre esos obstáculos cabe mencionar las dificultades técnicas inherentes al medio (congestión de Internet, falta de accesos de suficiente capacidad a bajo coste, entre otras) y la escasa confianza que genera una herramienta que se percibe poco segura. Algunas de las fuentes de inseguridad de los consumidores en este canal son generadoras de ese sentimiento en la utilización de otros medios de venta sin establecimiento o no presencial. Así, las dudas acerca de las garantías de devolución de los productos que no satisfagan las expectativas de los compradores, la fiabilidad de los vendedores, que no siempre son empresas dotadas de prestigio y generadoras de confianza, la falta de certeza sobre la no utilización de los datos bancarios de los compradores para hacer envíos publicitarios y el temor ante la posibilidad de que se puedan ceder los datos personales a otras empresas, por citar algunas, se unen a la reticencia de los usuarios a enviar los datos de su tarjeta de crédito a través de Internet.

La Unión Europea aprueba nuevas medidas de seguridad para las operaciones en Internet...

Con el fin de paliar los efectos que la falta de seguridad y confianza están teniendo sobre la extensión de la práctica del comercio electrónico, desde 1999 la Comisión Europea ha emitido dos directivas orientadas a la regulación de algunas cuestiones específicas. Así, la firma electrónica, instrumento diseñado para asegurar la autenticidad de las partes, la integridad de los contenidos que se intercambian y la confidencialidad de la información transmitida[74], ha sido objeto de consideración en la primera Directiva[75] en tanto que instrumento que hace posible «(...) intercambiar información y comerciar electrónicamente de una forma segura con independencia de las fronteras».

Se reconoce a la firma electrónica la misma validez que a la manuscrita, llegando a ser admisible como prueba en procedimientos judiciales, supuesto que la firma digital está basada en un certificado emitido por un *proveedor de servicios de certificación*[76] que cumple con los requisitos establecidos en la citada Directiva.

[74] La firma electrónica consiste en un conjunto de datos, en forma electrónica, que permite detectar alteraciones no autorizadas en los documentos digitales. Se trata de una clave contenida en una tarjeta personal protegida por un código secreto.

[75] Directiva 1999/93, de 13 de diciembre, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica.

[76] Entidad o persona que expide certificados (certificación electrónica que vincula unos datos de verificación de firma a una persona y confirma la identidad de ésta).

Avanzando en el objetivo de establecer un espacio sin fronteras interiores en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en 2000 se aprobó una segunda Directiva[77], encaminada a facilitar la celebración de contratos por vía electrónica. El texto establece las condiciones básicas sobre requerimientos de información a emitir por los prestadores de servicios (pasos técnicos para celebrar el contrato, intención por parte del prestador de servicios de registrar o no el contrato, lenguas ofrecidas para su celebración) así como las condiciones exigidas a los prestadores en torno a la realización de los pedidos (obligación de acusar recibo sin demora indebida y por vía electrónica, entre otras).

No obstante la desconfianza en la seguridad de las operaciones de transmisión de datos bancarios, el medio de pago usado con más frecuencia por los consumidores ha sido en el año 2000 la tarjeta de crédito[78], siendo el pago contra reembolso el mecanismo más usado después de la tarjeta (cuadro III-29). Pero la falta de confianza mostrada no se refiere solamente a la escasa certeza sobre la seguridad en los pagos, sino a todas las formas de comunicación que requieren garantías de privacidad.

CUADRO III-29

MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

(En porcentaje)

Transferencia	7,0
Tarjeta VISA	47,0
Otras tarjetas	9,0
Contrarreembolso	29,0
Domiciliación	8,0

Fuente: Instituto Nacional de Consumo, 2000.

[77] Directiva 2000/31, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular del comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

[78] Debe recordarse que el pago a través de tarjeta electrónica es el medio ofrecido con más frecuencia por las empresas que operan comercialmente en Internet.

2.5.4. **Seguridad alimentaria**

La detección de los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en España en los últimos meses del año ha reavivado el debate sobre la necesidad de crear un organismo que vele por el mantenimiento de las condiciones de seguridad en la producción y comercialización de alimentos, debate inaugurado vigorosamente hace ya dos decenios con ocasión del *síndrome tóxico*, consecuencia de la venta fraudulenta para consumo humano de aceite de colza desnaturalizado.

Medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis de confianza de los consumidores

La aparición de la enfermedad de las «vacas locas» en varios países de la Unión Europea ha llevado durante el año 2000 a la aprobación urgente, por parte de la Comisión, de medidas de protección que se insertan en el marco de las recomendaciones incluidas en el Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria. El texto contempla, entre otras medidas, la creación de un organismo comunitario dedicado a la protección de la seguridad, así como de organismos estatales en los Estados miembros.

La difícil situación creada con el rebrote de la enfermedad más allá de las fronteras británicas ha puesto de manifiesto, durante el último tramo de 2000 y el primero de 2001, la falta de control interno en un contexto en el que los controles fronterizos han desaparecido, desvelando las carencias de coordinación entre las distintas administraciones.

Pendiente la puesta en funcionamiento de la Agencia de Seguridad Alimentaria

En el caso de España, la seguridad alimentaria es, además, competencia de las Comunidades Autónomas, que poseen su propia normativa, lo que unido a la transversalidad del asunto (sanidad, agricultura, consumo, entre otras) ha hecho que se descubra como un problema en la emisión y aplicación normativa eficaz. El anunciado compromiso de creación de una agencia estatal de control alimentario ha desembocado en un Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria[79].

[79] El 15 de diciembre de 2000 el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales de ese proyecto, cuyo objeto es la puesta en funcionamiento de un organismo intersectorial, autónomo y adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo. En la fecha de cierre de esta Memoria continúa su tramitación parlamentaria.

El agravamiento de la crisis abierta por la desfavorable evolución de la EEB en Europa ha tenido notables consecuencias en el consumo ciudadano. La pérdida de confianza, que en España se ha manifestado especialmente en los primeros meses de 2001, se ha presentado como uno de los extremos de una distribución polar de las actitudes. Al comenzar el año 2001 casi la mitad de los españoles (48,4 por 100) manifestaba mucha o bastante preocupación por el problema de las vacas locas; la otra mitad reconocía sentir una preocupación moderada o nula[80]. En buena lógica, uno de cada dos ciudadanos declaraba haber reducido su consumo de carne de vacuno, al tiempo que la frecuencia de consumo de pescado, cerdo y pollo crecía, según declaración de los propios encuestados en torno al 25 o 30 por 100. Ahondando más en la repercusión de la enfermedad de las «vacas locas» en las actitudes ciudadanas, es notable su consideración como uno de los principales problemas que existen actualmente en España. Más de dos de cada diez entrevistados consideraron la aparición de la EEB como uno de los tres problemas más importantes, situándolo después del terrorismo (70 por 100) y el paro (60 por 100) y por delante de la inmigración (17 por 100).

Pues bien, con el fin de paliar las consecuencias negativas de la crisis de confianza ciudadana sobre el sector ganadero —y debe decirse que ante la mirada escéptica de un importante segmento de la población, pues la Administración española genera desconfianza en tanto que instancia de control del problema en un 43 por 100 de los ciudadanos—, y persiguiendo además evitar posibles efectos sobre la salud humana, en los primeros meses de 2001 vienen ejecutándose las siguientes medidas: Eliminación de los materiales especificados de riesgo; sacrificio de animales en las explotaciones y destrucción controlada de restos; prohibición temporal de las harinas de carne y hueso en la alimentación de animales; control laboratorial de la EEB; medidas de intervención de los mercados. La regulación de estas medidas se recoge en España en casi una veintena de disposiciones, acuerdos, reales decretos y órdenes ministeriales emitidas entre el último tramo de 2000 y los primeros meses de 2001.

[80] CIS, Barómetro de enero de 2001 (estudio 2406).

ANEXO III-5
INDICADORES DE CONSUMO

Indicadores	UE 15	Alemania	Austria	Bélgica	Dinamarca	Finlandia	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Luxemburgo	Portugal	Reino Unido	Suecia	España
Precios al consumo (IPCA, dic. 2000)																
Tasa anual (C.1)	2,3	2,3	1,8	3,0	2,3	2,9	1,7	3,7	2,9	4,6	2,8	4,3	3,8	0,9	1,3	**4,0**
Nivel de precios comparativo [1] (sept. 2000)																
(Ptas. España = 100) (C.2)	—	123	122	115	146	139	120	92	113	119	103	119	85	140	142	**100**
Estructura del gasto en consumo doméstico (%), 1998																
Productos alimentarios, bebidas y tabaco (C.3)	—	18,9	16,8	16,3	20,0	19,4	17,7	36,6	14,1	30,5	18,1	17,7	27,0	19,9	18,4	**19,3**
Ropa y calzado (C.4)	—	6,8	7,4	6,6	5,2	4,6	5,1	6,4	5,9	7,1	8,7	5,9	8,5	5,9	5,3	**7,4**
Vivienda, energía, decoración y obras domés. (C.5)	—	33,2	28,2	29,6	33,0	31,0	29,4	21,4	27,5	21,5	26,9	29,5	18,2	26,2	38,5	**19,5**
Atención médica y gastos de salud (C.6)	—	4,0	5,4	12,1	2,1	5,5	10,1	4,9	12,6	4,0	6,7	9,9	5,2	1,6	4,0	**5,2**
Transporte y comunicaciones (C.7)	—	17,5	16,3	12,7	18,0	15,7	16,0	13,5	13,3	14,3	13,3	17,4	16,3	17,1	17,1	**15,8**
Diversión, espectáculos, educ. y cultura (C.8)	—	9,9	8,1	6,5	10,6	9,7	7,3	5,4	9,8	11,5	8,4	7,0	8,3	10,8	9,2	**6,9**
Bienes y servicios diversos (C.9)	—	9,8	17,7	15,7	11,1	14,0	14,3	11,8	16,8	11,2	17,9	12,7	16,5	18,5	7,5	**25,9**
De ellos, restaurantes, cafés, hoteles (C.10)	—	—	12,0	8,7	5,7	7,2	7,2	7,6	5,3	3,3	10,4	—	9,2	8,8	4,1	**17,3**
Gasto final en consumo privado, 1998																
(Índice 1991=100) (C.11)	112,8	110,4	113,6	111,3	126,7	109,8	111,7	113,1	119,4	144,2	107,3	114,5	122,2	119,6	103,9	**111,9**
(1.000$/cap.) (C.12)	10,4	10,7	10,5	12,0	10,5	8,2	11,6	7,9	11,5	9,6	11,3	17,4	7,8	11,8	8,7	**8,4**
(% PIB)	42,6	34,4	34,3	41,4	28,4	21,6	41,4	64,6	39,1	41,6	57,0	34,9	64,9	57,0	30,5	**51,6**
Consumo de recursos, 1997																
Extracciones de agua corriente (m^3/cap.) (C.13)	630	530	280	690	180	480	700	830	290	330	990	140	870	180	310	**1.030**
Para abastecimiento público (m^3/cap.)	100,2	71	87	73	98	82	103	82	82	131	140	140	76	123	106	**110**
Energía (Tep./cap.) (C.14)	2,69	2,98	2,78	3,97	3,00	4,67	2,75	1,71	3,72	2,54	2,18	7,62	1,60	2,67	4,03	**1,89**
Total (Mtep) (C.15)	1.006,0	244,3	22,5	40,4	15,8	24,0	161,2	18,0	58,1	9,3	125,5	3,2	15,9	157,2	35,7	**74,9**
Sector transporte [2] (%) (C.16)	29,5	26,6	29,0	23,3	31,0	18,2	29,7	38,3	23,8	31,2	32,4	46,8	33,9	32,2	22,0	**38,1**
Sector industria [3] (%) (C.17)	30,2	29,6	23,9	36,9	19,3	45,0	28,1	24,6	32,9	26,4	32,7	29,5	38,3	25,6	38,2	**32,8**
Otros [4] (%) (C.18)	37,1	41,1	41,3	36,7	46,9	34,2	39,2	34,8	38,6	40,3	31,9	23,0	23,1	39,4	37,8	**24,1**
Nivel de satisfacción del ciudadano europeo respecto a los servicios de interés general (%), 2000																
Telefonía fija (C.19)	70	76	68	65	76	80	58	72	80	78	55	85	50	80	80	**80**
Distribución electricidad (C.20)	75	70	77	68	85	80	78	68	82	82	63	80	62	83	73	**65**
Distribución gas (C.21)	70	62	60	65	63	40	73	—	80	68	60	80	59	83	47	**67**
Distribución agua (C.22)	70	65	78	73	82	80	70	80	83	75	60	85	65	80	68	**77**
Transporte urbano (C.23)	60	56	62	60	78	72	62	78	58	63	56	82	58	62	70	**65**

Fuente: OCDE, *Enviromental Data 1999; Main Economic Indicators 2000;* «Towards a sustainable house hold consumption patterns. Indicators to measure progress» (ENV/EPOC/SE (98) 2 final). Comisión Europea (DG Protección de Salud y Consumo, Eurobarómetro –sept. 2000–), Facts and Figures on Europeans and services of general interest. MERCASA, *Distribución y Consumo n.º 52* (junio-julio-2000). Anexo III-6.1

2.6. Sociedad de la Información

La implantación de nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) en la denominada *sociedad de la información*, comporta, como se ha tratado de forma específica en la edición 1999 de esta Memoria, importantes cambios económicos y socio-culturales, cuyas previsiones de hace unos años se han cumplido e incluso han quedado cortas en el breve tiempo transcurrido. La participación de distintos sectores sociales, organismos y departamentos ministeriales, así como la dimensión profunda y rápida de los cambios constatados justifica el seguimiento de su evolución.

2.6.1. **Panorama general**

Con frecuencia la enorme complejidad de este sector se ve simplificada con la difusión de datos de mayor impacto informativo o más sencilla interpretación. Sin embargo, para una adecuada comprensión de la situación actual e implicaciones de las nuevas tecnologías, es necesario considerar varios indicadores, ofreciendo como en otras ocasiones una visión comparativa respecto al resto de Estados miembros (Anexo III-6.2). A la hora de interpretar los indicadores en este epígrafe, debe tenerse en cuenta que su elaboración puede considerarse todavía incipiente en relación a la de otros sectores, lo que dificulta en ocasiones su manejo estadístico, problema que irá desapareciendo en la medida en que se disponga de series de datos más largas y precisas. A modo de resumen gráfico, en la representación radial de algunos indicadores seleccionados puede observarse con claridad la posición de España respecto a la media en Europa (gráfico III-15).

Situación actual

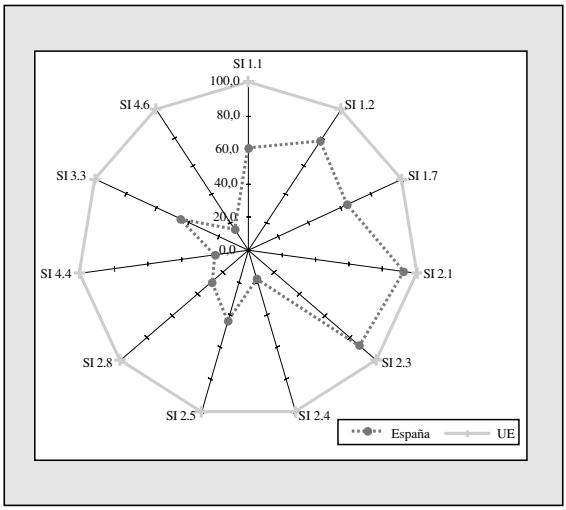
Dada la disponibilidad de datos más actualizados para España, se ha considerado interesante exponer una panorámica de su situación actual[81].

Comenzando por el número de usuarios de Internet, se detecta un incremento del 94 por 100 entre septiembre de 1999 y el mis-

[81] Cifras aportadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología al Consejo de Ministros en el *Informe sobre la liberalización de las Telecomunicaciones para el desarrollo de la Sociedad de la Información,* 18 de diciembre de 2000.

GRÁFICO III-15

INDICADORES SOCIEDAD INTERACTIVA: ESPAÑA RESPECTO A MEDIA UE



- SI 1.1: Gasto TI (%PIB), 1997
- SI 1.2: Gasto TIC (%PIB), 1997
- SI 1.7: Gasto TIC (% respecto total)
- SI 2.1: Líneas telefónicas convencionales/100 hab., 1998
- SI 2.3: Abonados a telefonía móvil/100 hab., 1998
- SI 2.4: Líneas RDSI/100 hab., 1998
- SI 2.5: Nº PCs/100 hab., 1998
- SI 2.8: Conexiones a Internet/100 hab., 1998
- SI 3.3: Usuarios Internet/100 hab., 1999
- SI 4.4: Usuarios e-commerce/100 hab., 1998-99
- SI 4.6: Teletrabajadores/100 trabajadores, 1997-98

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la tabla de indicadores (Anexo III-6.1).

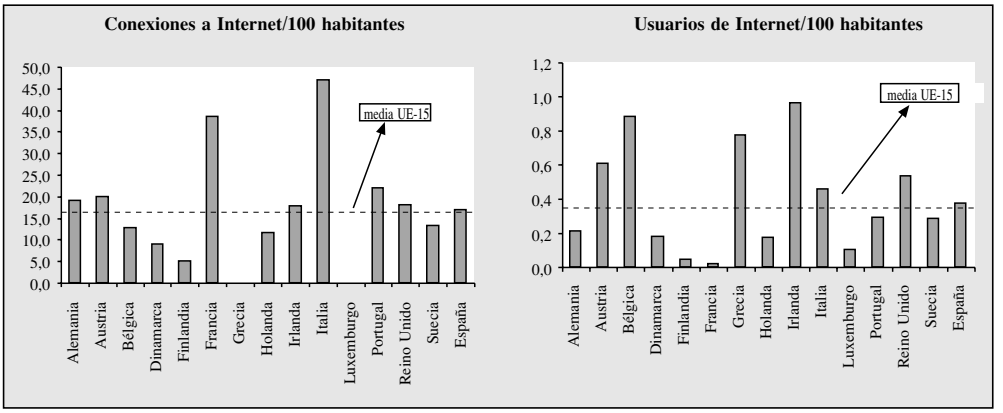
mo mes de 2000, lo que se traduce en unos 4,6 millones de usuarios, es decir, el 14 por 100 de la población, convirtiéndose España en uno de los países europeos de mayor crecimiento; posiblemente en ello influya la implantación del sistema de tarifa plana y bonos. La tasa interanual de crecimiento ha sido evidente, en especial para el númeo de conexiones a Internet (España registra un aumento próximo al 17 por 100 mientras la media en Europa no llega al 13 por 100): los valores nacionales, tanto para el número de conexiones como para el de usuarios, son superiores a la media europea (gráfico III-16).

El acceso a Internet se realiza en más de la mitad de los casos desde los hogares, siendo el usuario más habitual varón (casi 60 por 100), con edad comprendida entre 24 y 35 años (casi 32 por 100), de clase media (37,8 por 100) y residente principalmente en las autonomías de Cataluña o Madrid[82].

En relación al comercio electrónico, según un estudio de la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), de las dos

[82] Según Informe *Estudio General de Usuarios*, noviembre de 2000 (Asociación Española de Usuarios de Internet, Estudio General de Medios).

GRÁFICO III-16
CONEXIONES Y USUARIOS DE INTERNET EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, 1999-2000
(Tasas de crecimiento interanual)



Fuente: Asociación Usuarios Internet.

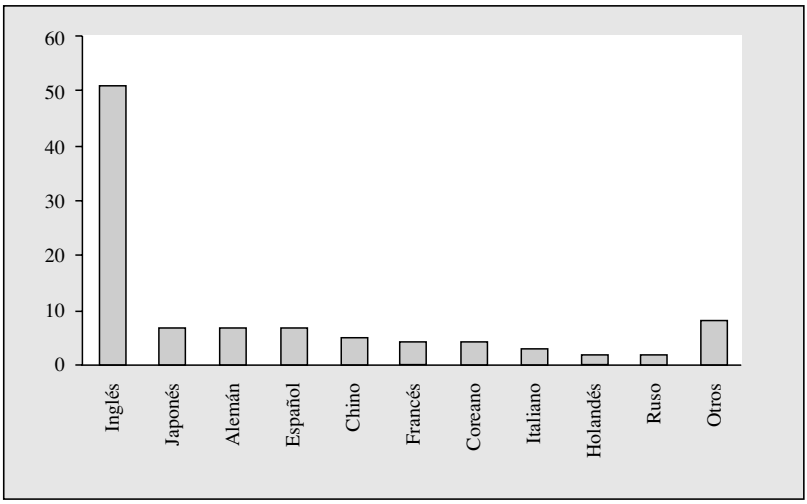
modalidades existentes, empresa-consumidor y empresa-empresa, la primera representa entre un 10 y un 20 por 100 del total y, habría alcanzado en 2000 una cifra en volumen de negocio de unos 34.000 millones de pesetas, superando las previsiones que no llegaban a los 30.000 millones[83]. Pese a esta evolución del comercio electrónico, sólo un 24 por 100 de las empresas tenía *página web* en abril de 2000, y únicamente el 2,6 por 100 de las páginas publicadas en Internet eran en español, escasas si se tiene en cuenta que alrededor del 5 por 100 de usuarios en el mundo (unos 19 millones) son hispano-hablantes (gráfico III-17).

Por su parte, las tarifas telefónicas experimentaron entre 1996 y 2000 una clara evolución hacia la reducción de precios, destacando las tarifas reducidas para llamadas locales. La aparición de nuevos operadores en el mercado ha sido espectacular, de forma especial en telefonía fija y otras comunicaciones móviles (cuadro III-30).

Por último, en cuanto a la penetración de móviles en España, definitivamente se ha generalizado su uso debido en gran medida al abaratamiento de costes, registrándose entre septiembre de 1999

[83] AECE, *Comercio Electrónico en España. Ventas al consumidor B2C,* 2001.

GRÁFICO III-17
UTILIZACIÓN DE IDIOMAS EN INTERNET, 2000
(En porcentaje)



Fuente: MSC, *El Consumidor y las nuevas tecnologías*, 2001.

CUADRO III-30
TARIFAS DE LLAMADAS, SERVICIOS Y OPERADORES TELEFÓNICOS, 1996-2000

Llamadas de larga distancia (porcentaje de variación interanual)					
Provincial	Interprovincial	Internacional	Fijo-Móvil	Minuto Móvil	
–25%	–57%	–49%	–20%	–31%	
Llamadas locales (porcentaje de variación interanual)					
Cable	Bono 10 horas (horario reducido)		Bono 10 horas (todo el día)		Tarifa Plana
–19%	–76%		–60%		–77%
Servicios Telefónicos (porcentaje de variación interanual teniendo en cuenta crecimiento IPC)					
Metropolitana	Provincial	Interprovincial	Internacional	Fijo-móvil	Minuto Móvil
–5,6%	–34,6%	–66,6%	–58,6%	–29,6%	–40,6%
Nuevos Operadores (marzo 1996/diciembre 2000)					
Telefonía fija	Telefonía móvil GSM	Telefonía cable	Otras comunicac. móviles	Futuros operadores UMTS	
1/92	2/3	0/38	7/21	0/4	

Fuente: MCYT, *Informe sobre la liberalización de las telecomunicaciones para el desarrollo de la Sociedad de la Información,* diciembre de 2000.

y el mismo mes de 2000 un crecimiento del 94 por 100; es decir, se contabilizaban a esa fecha unos 23 millones de usuarios, casi el 60 por 100 de la población.

2.6.2. **Políticas de implantación y promoción**

Legislación y normativa

Para la puesta en marcha de la sociedad de la información ha sido necesaria la adopción, por parte de las distintas Administraciones, de una serie de estrategias orientadas a la liberalización de las telecomunicaciones, el fomento del acceso a las nuevas tecnologías o el establecimiento de un adecuado marco regulador que aporte seguridad, mejore la prestación de servicios y promueva los contenidos en español.

La liberalización de las telecomunicaciones, que redunda simultáneamente en el incremento de su calidad y en la reducción de precios, ha sido fundamental para el acercamiento de las nuevas tecnologías a los ciudadanos, tanto desde la autorización de nuevos operadores como a través del desarrollo de redes alternativas capaces de soportar banda ancha para la prestación de nuevos servicios. Impulsado por la Comisión Europea, este proceso ha supuesto la incorporación de determinadas medidas al ordenamiento español, como es el caso de las que afectan a la reducción del coste de llamadas metropolitanas (Planes Metropolitanos I y II)[84]. La seleccin de operador para llamadas metropolitanas y la apertura de bucle de abonado incluyendo el tramo final —o lo que se conoce como *bucle local de abonado*—, completarán a medio plazo la implantación de la libre competencia en la telefonía local; a este respecto, la normativa europea[85] recomendaba a los Estados miembros la adopción de medidas regulatorias precisas para el acceso desagregado (completo o compartido) al bucle local en condiciones transparentes, justas y no discriminatorias[86].

---

[84] RDL 7/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones.

[85] Reglamento (CE) N.º 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, sobre el acceso desagregado al bucle local.

[86] España ha traspuesto esta normativa por RD 3456/2000, de 22 de diciembre, que aprueba el Reglamento que establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red pública telefónica fija de operadores dominantes. Se entiende por «acceso desagregado completo» la conexión a red del operador dominante que per-

Como estrategia para fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, se ha establecido un horario de coste reducido o tarifa plana que impulsará la utilización de Internet[87], posibilitando además que estas «llamadas» sean desviadas de las rutas telefónicas habituales[88], con lo que se evita la posible degradación de la calidad y se agiliza el servicio de acceso.

Con respecto a la promoción de contenidos en español, el ente público Red Técnica Española de Televisión (actualmente «Red.es») ha sido designado autoridad competente para la gestión del Registro de los nombres y direcciones de dominio Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»)[89]. Además, se ha regulado el sistema nacional de asignación de nombres de dominio Internet[90], estableciendo un marco de funcionamiento desde la garantía del amparo legal y permitiendo la entrada del sector privado en la actividad. Debe señalarse, sin embargo, el elevado importe de la nueva tasa para la asignación y mantenimiento de los dominios «.es», actualmente uno de los más altos en la Unión Europea (asignación y primer año 18.000 pesetas; mantenimiento anual 12.000 pesetas)[91].

---

mite a otros operadores el uso exclusivo de los elementos del bucle, y por «acceso compartido» si el operador dominante mantiene la prestación del servicio telefónico fijo, permitiendo a otros el uso de frecuencias no vocales del espectro.

[87] Mediante la Tarifa Plana I para Acceso a Internet se aplica un coste de 2.750 pts/mes, sin cuota de alta, en horario restringido entre las 0 y las 8,00 horas y entre las 18,00 y las 24,00 horas todos los días laborables, así como entre las 0 y las 24 horas los sábados, domingos y festivos de ámbito nacional.

[88] Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la SI, por la que se atribuye un rango de numeración específico al servicio de acceso a Internet.

[89] Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de 10 de febrero de 2000, en cumplimiento del Reglamento que desarrolla el Título II de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones —modificada por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que otorga nueva denominación al ente público Red Técnica Española de Televisión («Red.es») y crea además una nueva tasa para asignación y mantenimiento de los dominios «.es».

[90] Orden de 21 de marzo de 2000, por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España («.es»).

[91] El coste del registro de dominios «.es» en PPP, es de 90$ para España, inferior al de otros países como Francia (175), Grecia (150), Holanda (145) o Suecia (98) pero superior a la media europea (86,7) y a los valores alcanzados por el resto de Estados miembros (véase Anexo III-6.2).

Por último, cabe mencionar que el impulso del desarrollo de los servicios telemáticos en el ámbito normativo europeo, concretamente del comercio electrónico[92], tiene por objeto contribuir al correcto funcionamiento de un mercado interior que garantice su desarrollo y libre circulación entre los Estados miembros. Esta normativa está en proceso de incorporación al derecho español[93], momento a partir del cual se creará un Registro de prestadores de servicios de la SI y serán establecidas las condiciones exigibles, régimen de responsabilidad y códigos de conducta aplicables a los mismos; además, se dispondrán una serie de regímenes para la regulación de los aspectos económicos y socio-laborales de este nuevo sector. Para empezar, la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento será el órgano competente para la acreditación de los prestadores de servicios de certificación y de certificación de determinados productos de firma electrónica[94].

El incremento en la utilización de la telefonía móvil está marcando la línea evolutiva del sector, siendo hoy posible realizar operaciones de comercio electrónico o puramente de consulta vía Internet desde estos dispositivos. El sistema inicial GSM[95], cuya velocidad de transmisión es hoy insuficiente para la mayor parte de los usuarios, está dejando paso al denominado GPRS[96], que ofrece una mayor velocidad y la posibilidad de conexión a Internet para las modalidades inalámbricas (que reciben el nombre de WAP[97]). El nuevo sistema, sin embargo, no resolverá completamente el problema aunque facilitará la transición para operadores, fabricantes y usuarios hacia la auténtica comunicación multimedia móvil o *de tercera generación*: UMTS[98], que posibilitará un extenso abanico de aplicaciones, como el acceso móvil a la totalidad del contenido

[92] Dva. 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre Comercio Electrónico).

[93] Anteproyecto de Ley de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, publicado con fecha 29 de septiembre de 2000.

[94] Orden de 21 de febrero de 2000, Reglamento de Acreditación de prestadores de servicios de certificación y de certificación de determinados productos de firma electrónica.

[95] *Global System for Mobile Communications*.

[96] *General Packet Radio Service*.

[97] *Wireless Application Protocols*.

[98] *Universal Mobile Telecommunications Systems*.

Internet o a servicios multimedia interactivos (video-conferencias, etc.), y cuya llegada se espera para 2002[99].

La puesta en marcha del sistema UMTS presenta ciertas dificultades técnicas, ya que el número de licencias debería estar limitado únicamente por el espectro de frecuencias disponible sobre la base de los previsibles requerimientos de mercado; sin embargo, ante la marcada variación en las condiciones de adjudicación de licencias, la Comisión Europea ha incidido en la necesidad de incrementar la armonización legislativa de los Estados miembros. Las frecuencias requeridas, entre 4 y 6 en todos los países, han sido adjudicadas mediante subastas (Austria, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Suiza y Holanda), concursos (Finlandia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal) o sistemas mixtos (Francia, España y Suecia), habiéndose completado los procesos en Italia, Holanda, Alemania y España (cuadro III-31).

Adjudicación de licencias

En España, la adjudicación de telefonía móvil se resolvió otorgándose cuatro licencias[100] mediante un sistema mixto (concurso y tasa administrativa) y, de cumplirse los compromisos, sería el primer país en su lanzamiento comercial (agosto de 2001). La tasa a aplicar para la utilización del espacio radioeléctrico español es actualmente la tercera más elevada de Europa (361 euros/habitante), seguramente en compensación a la inferior recaudación resultante del concurso frente a las subastas de otros países. Este ha sido un tema de consideración en el CES, en cuya opinión buena parte de los ingresos generados por esta tasa debería destinarse a financiar unas infraestructuras que garanticen la difusión de los servicios avanzados de telecomunicaciones y cubran las necesidades de formación, investigación y desarrollo para su adecuado avance[101]. En este sentido, es interesante destacar el potencial de actuación que

[99] La Decisión n.º 128/1999/CE del Parlamento y del Consejo, de 14 de diciembre de 1998, se refiere a la introducción coordinada de un sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación (UMTS) en la Comunidad Europea, a más tardar el 1 de enero de 2002.

[100] Orden del Ministerio de Fomento, de 10 de marzo de 2000 (*BOE* n.º 62, de 13 de marzo de 2000), según la cual se otorgan cuatro licencias individuales de tipo B2 para comunicaciones UMTS-IMT2000 (International Mobile Telecommunications 2000) a: Telefónica Móviles de España S.A., Airtel Móviles S.A., Retevisión Móvil S.A. y el consorcio Xfera Móviles S.A.

[101] Dictamen del CES 5/2000, sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden Social.

CUADRO III-31
SITUACIÓN DE LICENCIAS DE TERCERA GENERACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS

Estado miembro	Adjudicación licencias	Situación y fecha	Número licencias	Precio total a pagar por licencia
Austria	Subasta	Finalizado (nov. 00)	6	830 mill. €
Bélgica	Subasta	Finalizado (marzo 01)	4	450,2 mill. €
Dinamarca	Subasta	Pendiente (octubre 01)	4-6	Pendiente
Finlandia	Concurso	Finalizado (marzo 99)	4	1.000 € (tasas adm.)
Francia	Concurso + Pago	En vías (julio 01)	4 (2 pendientes de adjudicación)	9.800 mill. € + tasas adm. (por 2 lic.)
Alemania	Subasta	Finalizado (agosto 00)	6	50.800 mill. €
Grecia	Subasta	Pendiente (med. 01)	4 o más	Pendiente
Irlanda	Concurso	Pendiente (abril 01)	4	Pendiente
Italia	Subasta	Finalizado (octubre 00)	5	14.640 mill. €
Luxemburgo	Concurso	Pendiente (junio 01)	4	Pendiente
Holanda	Subasta	Finalizado (julio 00)	5	2.680 mill. €
Portugal	Concurso	Finalizado (nov. 00)	4	400 mill. € + tasa anual
España	Concurso + Pago	Finalizado (marzo 00)	4	520 mill. € + tasa anual + tasa adva. por 20 años: 14.100 mill. €
Suecia	Concurso + Pago	Finalizado (dic. 00)	4	46.800 € + 0,15% tasa anual
Reino Unido	Subasta	Finalizado (abril 00)	5	38.475 mill. €

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2001) 141 final (20 de marzo de 2001).

suponen, por ejemplo, las explotaciones de turismo rural en España, para las que en muchos casos, especialmente en los núcleos más pequeños y aislados, existe un marcado déficit de puntos de conexión a Internet.

Estrategias de la Administración Central

Desde el Consejo Extraordinario de Europa celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron una serie de medidas para la implantación de las nuevas tecnologías que sirvieron de base para la elaboración del documento, posteriormente discutido por los Estados miembros y finalmente adoptado por el Consejo Europeo de Feira (19-20 de junio de 2000), denominado *Plan de Acción e-Europe 2002*; se estructura alrededor de tres objetivos clave: conseguir una Internet más económica, rápida y segura; invertir en la preparación y capacitación de profesionales y usuarios; y estimular a la utilización de Internet desde todos los ámbitos.

En respuesta a este proyecto europeo y según el recientemente presentado «Plan de Acción Info XXI para el periodo 2001-2003»[102], que concreta los objetivos, plazos, responsables y financiación de la iniciativa *Info XXI: Sociedad de la Información para todos*[103], la Administración española ha establecido una serie de acciones repartidas entre los distintos Departamentos ministeriales, que, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, persiguen fomentar la implantación y utilización de nuevas tecnologías. Este Plan se articula alrededor de cuatro líneas de acción:

- Impulso del sector de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información, desde el fomento de la liberalización y la competencia.

- Implantación de Administración electrónica o *e-Gobernment* (TeleAdministración y portal único, Administración de Justicia y Sistema Sanitario en Red);

- Sociedad de la Información para todos (Internet en la escuela o *e-learning*; comercio electrónico en Pymes; formación para nuevos empleos; seguridad en la red y promoción de las nuevas tecnologías desde la gestión del Plan Nacional I+D+I).

- España en la red (desarrollo de contenidos de calidad en español para la Red, en materia de Cultura y Turismo).

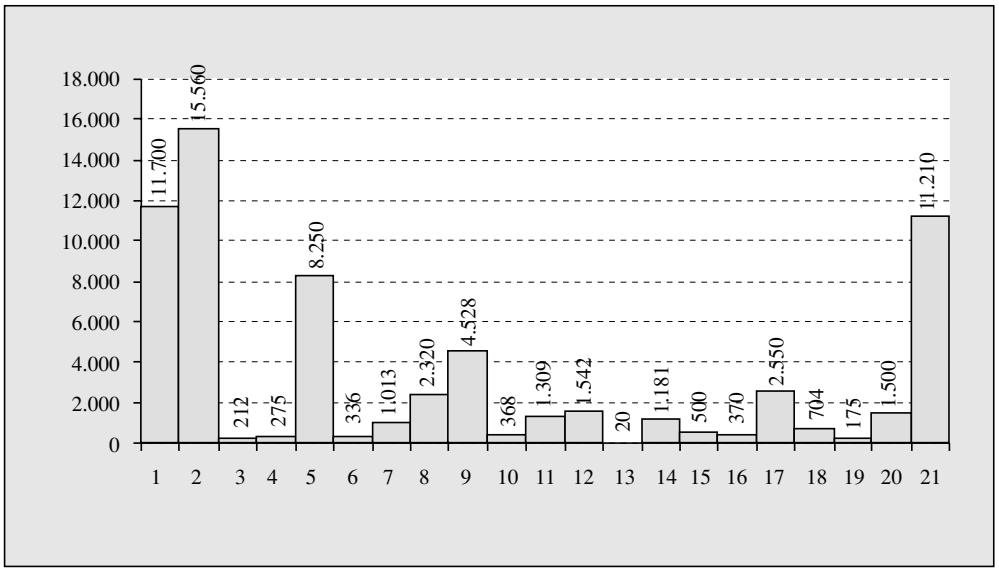
De las múltiples acciones propuestas, 21 de ellas con plazo de ejecución definido entre 2001 y 2003, destacan por su especial trascendencia social (cuadro III-32). Sus variados ámbitos de actuación y aplicaciones comportan una adjudicación presupuestaria muy dispar: más del 70 por 100 se concentra en sólo cuatro acciones (1, 2, 5 y 21), destacando «Red Iris 2» que supone prácticamente un 24 por 100 del total, mientras otras acciones no alcanzan el 1 por 100 (gráfico III-18).

[102] Consejo de Ministros de 19 de enero de 2001.
[103] Iniciativa aprobada en Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 1999.

GRÁFICO III-18

INVERSIÓN EN 21 ACCIONES DESTACABLES DE LA INICIATIVA INFO-XXI

(Millones de pesetas)



Fuente: MCYT, *Plan de Acción Info XXI 2001-2003*.

CUADRO III-32

21 ACCIONES EMBLEMÁTICAS DE INFO XXI, 2001-2003

ID	Nombre	Ministerio	Objetivo
1	Internet en la enseñanza	Educación, Cultura y Deporte	Extender el acceso a Internet en los centros educativos por banda ancha.
2	Red Iris2. La nueva Internet para investigación	Ciencia y Tecnología	Implantar Rd Alta Capacidad (2,5 Gbps) —Internet 2— conectada con otras redes investigación UE (proyecto GEANT) y mundiales (Worl Wide Grid).
3	Puntos de Acceso Público a Internet (PAP)	Fomento	Facilitar PAP a Internet desde oficinas correos (banda ancha); proporcionar dirección e-mail a ciudadanos que lo soliciten.
4	Accesibilidad y alfabetización digital	Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)	Facilitar acceso a SI y uso intensivo de Nuevas Tecnologías a discapacitados para conseguir igualdad de oportunidades
5	Formación de profesionales TIC	MTAS	Insertar en el mundo laboral 14.000 profesionales TIC en 3 años.
6	Pymes y comercio electrónico	Economía	«Centro de Información y Red de Creación de Empresas», Red puntos acceso para asesoramiento y tramitación electrónica en creación empresas.
7	Portal Único de las Administraciones	Administraciones Públicas	Facilitar acceso a información de AAPP y ampliar número de gestiones en línea.
8	DNI electrónico: la identidad digital	Interior	Facilitar identidad digital a todos los ciudadanos.
9	Seguridad Electrónica: Proyecto CERES	Economía	Ofrecer seguridad, validez y eficacia a comunicaciones Administración General del Estado y OOPP con ciudadano vía certificaciones electrónicas
10	Declaraciones y pago de impuestos por Internet	Hacienda	Posibilitar presentación y pago por Internet de declaraciones e impuestos: Renta, IVA, Retenciones y declaraciones informativas.

CUADRO III-32 *(Continuación)*
21 ACCIONES EMBLEMÁTICAS DE INFO XXI, 2001-2003

ID	Nombre	Ministerio	Objetivo
11	Seguridad Social en la Red	MTAS	Puesta en marcha de Nuevos Servicios Interactivos Tesorería General SS.
12	Registro Civil electrónico	Justicia	Informatización y puesta en Red de Registros Civiles: admisión certificados de otros Registros y tramitación centralizada de expedientes por Internet.
13	Derecho de petición	Presidencia	Posibilidad tramitación por Internet de peticiones de ciudadanos con garantía de confidencialidad
14	Plan Director de Sistemas de Información de Defensa	Defensa	Impulsar y coordinar el uso de las TICs en la gestión interna y la relación con miembros de las Fuerzas Armadas y ciudadanos.
15	Portal Salud	Sanidad y Consumo	Facilitar información sanitaria personalizada mediante servicios interactivos multicanal a ciudadanos y profesionales
16	Identificación y control del ganado	Agricultura, Pesca y Alimentación	Implantar un sistema de identificación del ganado para control de desplazamientos entre CCAA; establecer una red de epidemio-vigilancia.
17	El español en Red	Asuntos Exteriores	Fomentar y difundir presencia del español en Red: buscador pan-hispánico, cursos de español multimedia, desarrollo proyectos de ingeniería lingüística.
18	Patrimonio Histórico en Red	Educación, Cultura y Deporte	Puesta en marcha mapa Infraestructuras, Operadores y Recursos Culturales en Red (MIOR); digitalización y acceso a Museos, Archivos y Bibliotecas.
19	El Medio Ambiente en Red	Medio Ambiente	Acceso a información general, técnica, legal y geográfica de la Red Nacional de Parques Nacionales
20	Portal de Turismo español	Economía	Promoción del turismo español con información sobre productos y recursos turísticos; desarrollo de Intranet para informadores turísticos.
21	Creatividad española en Red	Ciencia y Tecnología	Digitalización contenidos artes e industrias culturales; creación y difusión nuevos contenidos digitales con tecnologías innovadoras.

Fuente: MCYT, *Plan de Acción Info XXI*.

Por su parte, los Gobiernos autonómicos están asumiendo paulatinamente sus respectivas competencias en el ámbito de la sociedad de la información, como es el caso de Baleares[104], Cantabria[105], Aragón[106] o Castilla-La Mancha[107]. En tanto se elaboran estas regulaciones, numerosas autonomías han diseñado y puesto en marcha una serie de iniciativas para el impulso de determinados servicios (Anexo III-6.1).

[104] Ley 30/1998, de 29 de julio, sobre Régimen Especial de las Islas Baleares.

[105] Orden de 12 de mayo de 2000, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión para el fomento de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías (BOC 18-5-2000).

[106] Decreto 112/2000, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para asuntos relacionados con la sociedad de la información (BOA 3-7-2000).

[107] Ley 3/2000, de 26 de mayo, de creación del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha.

2.6.3. **Empleo y Sociedad de la Información**

El desarrollo del hipersector Tecnologías de la Información y la Comunicación en los últimos años ha incidido en la evolución de diversos ámbitos relacionados con el entorno empresarial, tales como *e-Services* —especialmente en la versión *business to business*—; despegue de tecnología WAP y adjudicación de nuevas licencias de UMTS; ampliación de redes de telecomunicación y telefonía móvil, etc., que, pese a la caída en ventas de algunos productos, empujan con fuerza al sector provocando un manifiesto desequilibrio entre oferta y demanda de profesionales. Internet se ha caracterizado hasta el momento por su comportamiento inestable, por lo que como consecuencia del reajuste del sector y según lo previsible, tras un largo periodo de buen comportamiento —que se aprecia en la evolución hasta marzo de 2000 del índice Nasdaq, referente de los valores tecnológicos—, se ha constatado una recesión con el anuncio en abril de 2001 de la posibilidad de numerosos despidos en empresas transnacionales de la «nueva economía».

En cuanto al empleo en el sector TIC, España presenta una posición de incipiente desarrollo respecto a los Estados miembros. Analizando los datos referidos a 1996, se constata una posición claramente inferior a la media europea (1,2 frente al 3,9 por 100 en Europa), sólo por encima de Grecia. Exceptuando países con una menor población aunque tradicionalmente punteros en el sector (Finlandia e Irlanda), otros como Francia destacan por el mayor número de empleos respecto al total, con valores que superan incluso los alcanzados por Reino Unido o Alemania (gráfico III-19).

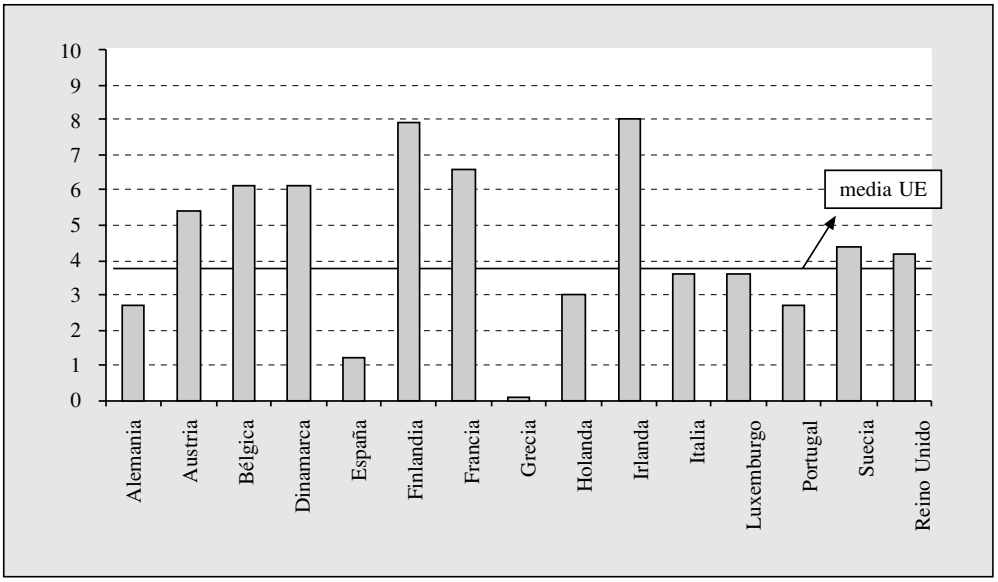
En ausencia de datos territoriales nacionales desagregados, fundamentales para conocer la repercusión del sector en cada economía y su aportación al crecimiento regional, se dispone de información sobre el número de sedes de empresas tecnológicas para 1999[108], según la cual más del 40 por 100 se encuentra en Madrid y casi el 30 por 100 en Cataluña (gráfico III-20). Sin embargo, el crecimiento del mercado neto de nuevas tecnologías manifiesta un comportamiento menos disperso, reflejando unos valores superiores para Canarias, Murcia y Extremadura (gráfico III-20).

[108] Fuente: SEDISI, Asociación Española de Empresas de Tecnología de la Información.

GRÁFICO III-19

EMPLEO EN EL SECTOR ICT EN LOS PAÍSES MIEMBROS, 1996

(Porcentajes respecto al total)



Fuente: Eurostat, *Statistics in focus,* n.º 31/1999.

GRÁFICO III-20

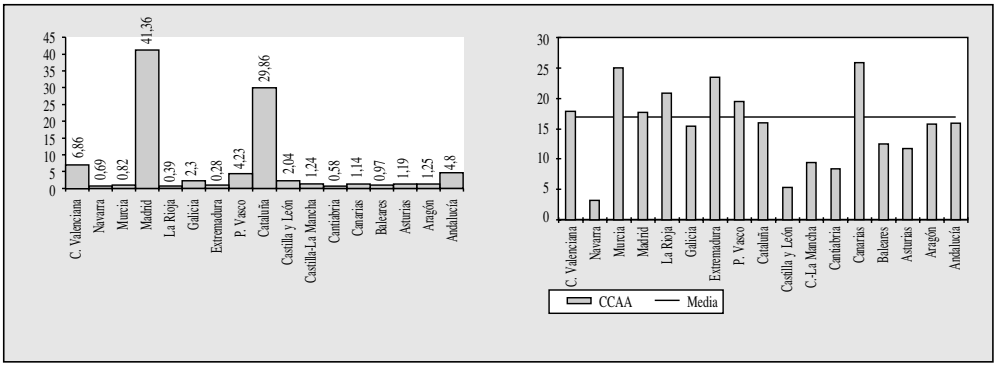
COMPORTAMIENTO AUTONÓMICO DEL MERCADO TIC

Sedes de empresas de Tecnologías de Información por CCAA, 1999

(Distribución porcentual)

Crecimiento interanual del mercado neto de nuevas tecnologías por CCAA, 1998-99

(Porcentajes respecto a total)



Fuente: SEDISI.

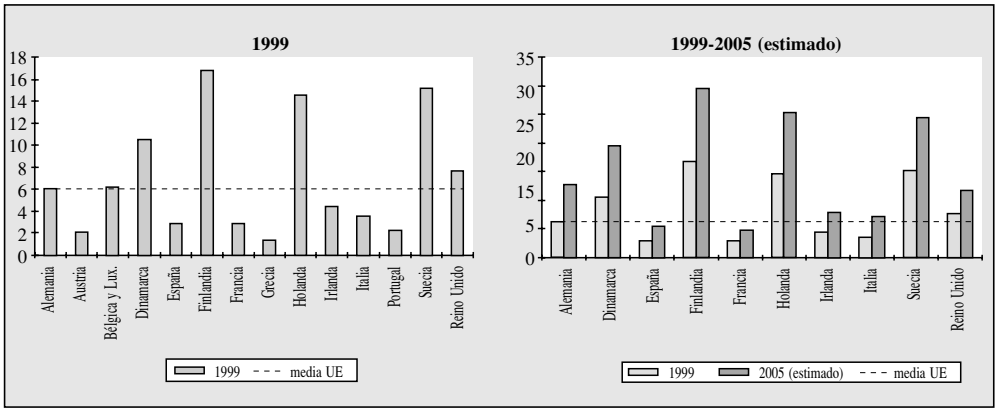
Otra variable a considerar es el denominado *tele-trabajo* o trabajo a distancia, que incluye trabajadores desde el hogar (al menos una jornada completa por semana), trabajadores autónomos en «SOHOs»[109], trabajadores móviles (permanecen como mínimo 10 horas por semana lejos del hogar y/o lugar habitual de trabajo) y tele-trabajadores suplementarios (dedican menos de una jornada semanal a esta práctica). Es significativo en Finlandia, Suecia y Holanda, países con posiciones próximas al 15 por 100, muy superiores al 6 por 100 de media europea, mientras España registra cerca de un 3 por 100 de teletrabajadores, según el Informe Anual de la Comisión Europea para 2000, *e-Work 2000*. El mismo documento presenta una previsión de la evolución del teletrabajo entre 1999 y 2005 para una selección de 10 países, según la cual no parece que el crecimiento en España durante este periodo vaya a ser espectacular (gráfico III-21).

Esta pobre evolución prevista para el teletrabajo en España, pese a los proyectos financiados por la Comisión Europea para su promoción (NOW, ADAPT, HORIZON), podría obedecer a la existencia de un sistema laboral todavía hoy más basado en el número

GRAFICO III-21

TELETRABAJADORES EN LOS PAÍSES MIEMBROS, 1999

(Porcentajes sobre el total)



Fuente: Comisión Europea, *eWork 2000*. Informe anual sobre nuevas formas de trabajo en la sociedad de la información, 2000.

[109] *Small Office, Home Office*.

de horas trabajadas que en los resultados obtenidos, así como a una legislación laboral adaptada a trabajos propios de una economía industrial, sin olvidar el todavía escaso nivel de implantación y uso de las nuevas tecnologías en Pymes.

Como iniciativa en este sentido destaca la creación de la web para la Asociación Española de Teletrabajo (www.aet-es.org), entorno sin ánimo de lucro que pretende ser punto de partida, lugar de encuentro, puente y portavoz entre trabajadores, empresas y Administraciones en el desarrollo del *e-trabajo*, promoviendo entre comunidades españolas, europeas y latinoamericanas actividades propias de la sociedad de la información desde el concepto de sociedad distribuida, que «favorece el trabajo en equipo y la conjunción sinérgica de las cualidades de los individuos».

2.6.4. **Seguridad en la red**

Los aspectos relacionados con procedimientos o contenidos en materia de seguridad jurídica, junto con la necesaria adecuación de la regulación al mercado, son claves para generar en empresas y consumidores un grado de confianza que fomente la adecuada utilización de Internet. Sus ámbitos de aplicación varían desde la protección de datos personales, marcas y contenidos en la Red y el control de difusión de virus o de competencia desleal provocada por la denominada «ciber-piratería», hasta la minimización de accesos no deseados a determinada información.

Desde la Unión Europea se ha venido analizando la problemática suscitada en materia de protección de datos: en 1999 fue aprobado un Plan de Acción plurianual para promover el uso seguro de Internet, fomentar la autorregulación del sector e incentivar la propuesta de nuevos medios de filtro[110]; posteriormente se elaboró el Reglamento sobre la protección de datos personales por parte de instituciones y organismos comunitarios[111]; y por fin, la Directiva

[110] Decisión n.º 276/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 1999.

[111] Reglamento (CE) n.º 45/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por instituciones y organismos comunitarios y la libre circulación de estos datos.

2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, sobre determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

Las condiciones que debería reunir toda comunicación segura a través de Internet son: confidencialidad, para evitar accesos no deseados a la información; integridad, para evitar modificaciones por parte de terceros; autenticación, para asegurar que remitente y destinatario sean los que se pretende; e irrefutabilidad, o no repudio de origen-destino[112]. Hasta el momento, los métodos utilizados con más frecuencia para garantizar la seguridad en Internet son las denominadas técnicas criptográficas (impiden el reconocimiento de los documentos, enviados o recibidos, por parte de terceros), en especial los sistemas de cifrado/descifrado mediante la asignación de claves de reconocimiento del documento. En esta línea, para garantizar la seguridad y privacidad de las transacciones electrónicas, se perfila el Proyecto CERES (Info XXI), consistente en una tarjeta que, mediante un proceso criptográfico y dos claves, posibilitará el pago de impuestos y tasas, la presentación de declaraciones y denuncias, la renovación de documentos personales y la tramitación de subsidios y pensiones.

Protección de marcas de propiedad industrial

Otro aspecto crucial es la protección de las marcas de propiedad industrial, cuya regulación vigente sigue siendo la Ley de Marcas de 1988, mientras se tramita el nuevo proyecto de Ley[113] que agilizará el sistema e impulsará mecanismos de protección de consumidores y propietarios en la Red (fortaleciendo la posición del titular de una marca en Internet mediante nombres de dominio frente a vulneraciones de su derecho —«ciberocupación» y «ciberpiratería»—). Según un Informe de la Bussines Software Alliance (BSA), portavoz de empresas encargadas del desarrollo del *software, hardware* y tecnologías para la implantación de Internet y comercio electrónico, España se constituyó en 2000 en el país europeo con mayor número de denuncias (363) sobre el

[112] Ministerio de Ciencia y Tecnología, *Estudio de Situación del Comercio Electrónico en España*, mayo 1999.

[113] El Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2001 aprobó, a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el proyecto de Ley de Marcas.

uso ilegal de contenidos informáticos. Este documento eleva el índice de piratería *software* en Europa al 34 por 100 (más de 1/3 de las aplicaciones de negocio son copias ilegales), lo que se traduce en unas pérdidas estimadas de 3.600 millones de dólares. Conflictos como el protagonizado por la empresa Napster en relación con la posibilidad de obtener música de forma gratuita, podrían resolverse mediante estrategias como el Acuerdo de colaboración recientemente firmado entre la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM) y la de Música en Internet (AMI).

La presencia generalizada de virus informáticos cada vez más versátiles y rápidos ha sido otra fuente de inquietud entre usuarios habituales y proveedores de Internet. Por este motivo, el Gobierno lanzó a mediados de 2000 la Primera Campaña Nacional Anti-Virus Informáticos[114], al objeto de divulgar consejos para incrementar la seguridad, facilitando gratuitamente programas antivirus para el análisis y desinfección del contenido de ordenadores.

[114] Promovida por el MCYT, en colaboración con empresas y asociaciones del sector y el patrocinio de medios de comunicación, prensa, empresas, universidades, etc.

Anexo III-6.1
INICIATIVAS AUTONÓMICAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CCAA	Plan Regional I+D	Nombre iniciativa	Objetivos, contenidos y aplicaciones
Andalucía	Plan Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Nuevo siglo: Gobierno Andalucía on-line: www.junta-andalucia.es	Aplicaciones: • Universidad y enseñanza de nuevas tecnologías. • Modernización tecnológica de empresas. • Creación de Agencia de la Innovación y Centro Evaluador de Proyectos Tecnológicos. • Telecomunicaciones y desarrollo económico y social: difusión y promoción del empleo de TIC. • Creación de Infraestructuras territoriales de innovación para la comunicación. • Creación de Agencia de la Energía. • Impulso tecnológico para el sector agro-ambiental: fomento de la explotación sostenible. • Desarrollo de tecnologías medioambientales: para la vigilancia de emisiones, ahorro de recursos, etc.
Aragón	(en elaboración)	Asociación para Promoción de Tecnologías de la Información y Comercio Electrónico (APTICE), del Ito. Aragonés de Fomento (www.aptice.org) Red Aragonesa Comunicaciones Institucional (RACI)	Creado para reducir o eliminar obstáculos ante el uso generalizado de las tecnologías de información, en especial el comercio electrónico. Aplicaciones: • Creación Agencia para Garantía Comercio Electrónico (AGACE). • Formación (incremento de oferta en educación formal y continua). • Seguridad: calificación APTICE como entidad evaluación prestadores servicios certificación y productos firma electrónica (contacto ENAC). • Implantación y desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en el territorio regional.
Asturias	II Plan Regional de Investigación (1994-99)	www.aulanet.uniovi.es	Aula universitaria virtual, para uso eficiente de nuevas tecnologías en entorno universitario; ofrece información administrativa, documental, análisis datos económicos (ADEnet) —asignatura de libre configuración, proyecto conjunto con otras universidades—, consultorías, etc.
Baleares	Plan Balear de Innovación y Transferencia Tecnológica para las Islas del Siglo XXI	Sistemas On Line (Proyecto SOL), del Gobierno Balear junto a los de Córcega y Cerdeña (territorio IMEDOC): www.caib.es/sol	Creación plataforma de gestión de información administrativa para la utilización de ámbitos internacional, nacional, regional o local, mejora de información territorial y optimización sistema de telecomunicaciones a disposición del usuario. Aplicaciones: • Sistema de Atención al Ciudadano: información sobre servicios de la Administración. • Base de consulta y seguimiento procedimientos administrativos. • Sistema de Información a Empresa. • Sistema Informativo Territorial Georreferencial. • Sistema Alternativo de Telecomunicaciones (para facilitar el acceso a las «autopistas de la información»).

ANEXO III-6.1 *(Continuación)*

INICIATIVAS AUTONÓMICAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CCAA	Plan Regional I+D	Nombre iniciativa	Objetivos, contenidos y aplicaciones
Canarias	Plan Estratégico Innovación Canarias (PEINCA)	Gobierno de Canarias on-line: www.gobiernodecanarias.org/ de scan/pdsic.pdf	Aplicaciones: • Administración: RedCanaria ofrece servicios de conexión a instituciones dependientes de la Administración Pública. • Educación: Programa PINCEL, informatización de centros LOGSE. • Centro de Información y Servicios Telemáticos Integrados de Apoyo (CISTIA): proveedor acceso a Internet e información (plataforma de servicios) a Pymes, organismos y profesionales del ámbito TIC.
Castilla-La Mancha	Plan Regional de Innovación (PRICAMAN)	Gobierno Castilla-La Mancha on line: www.jccm.es	Aplicaciones: • Castilla-La Mancha Región de Europa: puesta al día aspectos europeos que afecten a la región (InfoPoint Europa, Oficina Junta en Bruselas).
Cataluña	Plan de Innovación de Cataluña	Plan estratégico Cataluña en Red, Gobierno Generalitat Cataluña on-line (www.gencat.es)	Objetivos: • I+D en SI orientada y aplicada a las potencialidades catalanas. • Red de Centros de Investigación Avanzada: con la universidad como laboratorio de investigación de SI. Presencia del catalán en la SI: soporte y fomento contenidos digitales de Cataluña en Internet: digitalización y difusión de patrimonio catalán. Desarrollo de marco regulador y normas de conducta en apoyo al comercio electrónico. Aplicaciones: • Infraestructuras y servicios básicos: despliegue red de comunicaciones en banda ancha. • Implementación de Internet II catalana. • Industria, Comercio y Contenidos: estímulo demanda de productos e impulso de industrias catalanas TIC. • Educación y Formación: adaptación curricula a nuevas necesidades SI. • Administración y servicios: información pública en red, intranets de Administración catalana, acceso del ciudadano a firma electrónica, etc. • Sanidad: creación de «portal» de la salud, Intranet sanitaria, historia clínica digital, etc. • Sociedad y cambio cultural: promoción de iniciativas de participación ciudadana en la Red, fomento de tele-democracia.
Galicia	Estrategia Gallega de Innovación	Autopista Gallega de la Información, Gobierno Gallego on-line (www.xunta.es)	Aplicaciones: • Tele-enseñanza, para paliar la dispersión geográfica de la región. • Bibliotecas Digitales; acceso virtual Archivos Históricos y Museos. • Tele-medicina, para el acceso a consultas y diagnósticos remotos. • Administración electrónica. Protección Civil on-line.

ANEXO III-6.1 *(Continuación)*

INICIATIVAS AUTONÓMICAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CCAA	Plan Regional I+D	Nombre iniciativa	Objetivos, contenidos y aplicaciones
Extremadura	II Plan Regional I+DT+I (1998-2000)	Infodex (Gobierno Extremadura on-line, www.juntaex.es) Plan Alfabetización Nuevos Centros Conocimiento Ciudad Joven de Extremadura, «Un Nuevo Milenio» Plataforma Regional comercio electrónico (www.Feval.com) ViverNet Sistema Información Administrativa (SIA)	Objetivo: integrar nuevas tecnologías en el desarrollo autonómico, impulsando tecnologías y sectores desde diversas líneas estratégicas para mejorar políticas sectoriales (implantación de tele-medicina, tele-educación, tele-tramitación de expedientes administrativos, etc.). Objetivo: difusión de la cultura regional y local. Objetivo: facilitar el acceso de los jóvenes a información, recursos y herramientas de SI. Objetivo: escaparate regional de empresas y actividades productivas. Objetivo: Espacio físico y virtual para gestión y desarrollo de nuevos negocios y actividades desde la explotación de tecnologías SI. Objetivo: optimización servicio administrativo, mediante ejecución de 5 proyectos: Sistema Intercomunicado Registro, Hipercentro Información Administrativa, Call Center, Certificación Electrónica Documentos y creación de Diez Puntos Respuesta Inmediata al Ciudadano.
Madrid	III Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2000-2003 (PRICIT)	Sistema Regional de Información y Promoción Tecnológica (www.madridmasd.org) Red Europea de Información de la CAM (REIMAD)	Aplicaciones: • Incluido en Programa Marco UE, ofrece mediante sistema de información activa (SIA), un servicio exclusivo para investigadores y empresas miembros de la Red Madri+d, que facilita información relacionada con oferta científico-tecnológica regional (I+D+I información on-line, Asesorías on-line, diagnósticos gestión, círculos innovación, vivero virtual empresas, foro estrategias innovación grandes áreas, etc). • Constituida por centros de documentación e información europeos de CAM e integrados de redes y enlaces de información de la Comisión Europea de la CAM, se propone su coordinación para que el ciudadano disponga de información actualizada y de calidad sobre políticas, programas, legislación y documentación europea.
Murcia	Programa I+DT	Ciez@net	Objetivo: el proyecto trata de conjugar prestaciones del servicio público con agilidad del sector privado en ámbito de SI. Aplicaciones: tele-educación, tele-medicina (experiencia piloto Medicis), empresas (impulso a Pymes, tele-trabajo y tele-formación); sociedad (acercamiento al ciudadano amplio elenco de servicios, equipamiento y tecnologías, como la tarjeta inteligente Cieza); tele-administración (con líneas Ayuntamiento XXI y Acceso Institucional).

ANEXO III-6.1 *(Continuación)*

INICIATIVAS AUTONÓMICAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CCAA	Plan Regional I+D	Nombre iniciativa	Objetivos, contenidos y aplicaciones
Navarra	Plan Tecnológico de Navarra (2000-2003)	Gobierno de Navarra on line: www.cfnavvarra.es	Aplicaciones: • InfoPoint Europa: Centro de Información Europeo en Navarra, con información general sobre políticas y legislación UE, etc. • Creación de CEIN (Centro Europeo Empresas e Innovación de Navarra): para fomento y asesoramiento sobre innovación empresarial. • Creación Foro de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. • Biblioteca Virtual de la Universidad Pública de Navarra: con información documental y cultural dirigida especialmente al estudiante.
País Vasco	Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2001-2004	Gobierno Vasco on-line (www.euskadi.net)	Objetivo: recoge información en distintos ámbitos, como Ciencia, Tecnología e Innovación: acceso a centros de investigación tecnológicos de Euskadi, guía tecnológica, información I+D ámbito empresarial y universitario, acceso a centros europeos enlace, descripción Plan 2001-2004. Aplicaciones: • Tecnologías de Información y Telecomunicaciones. • Sistemas y Servicios al Ciudadano (administración on-line, tele-medicina, tele-educación, etc). • Cultura y contenidos en sociedad multilingüe; • Empresa Digital; Gestión Empresarial Avanzada.

ANEXO III-6.1 *(Continuación)*

INICIATIVAS AUTONÓMICAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CCAA	Plan Regional I+D	Nombre iniciativa	Objetivos, contenidos y aplicaciones
Valencia	Plan Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	Red Europea de Oficinas para la Sociedad de la Información (Gobierno Valenciano-Comisión Europea): www.ovsi.com	Aplicaciones: • InfovillePlus: informatización de 1.000 puntos acceso localidad de Villena. EuroInfoville: desarrollo municipio digital. • InfoCole: proyecto de tele-educación para aplicación desde primeras etapas del proceso formativo. • InfoCampus: proyecto de creación Campus Virtual en Universidad Miguel Hernández. • InfoPress: proyecto conjunto con Asociación de Prensa de Alicante para integración nuevas tecnologías en sector periodístico. • InfoMóvil: Centro Demostración Móvil sobre contenidos Infoville. • InfoMúsica: ofrece programas de formación nuevas tecnologías orientados a músicos. • InfoSenior: ofrece servicios de formación y asistencia en Centros Atención Mayores. • InfoMed: acercamiento nuevas tecnologías sector medicina. • InfoMarket: facilita a Pymes centro de gestión para comercio electrónico. • InfoCenter: Centro de Gestión Servicios Telemáticos.
Rioja, La	I Plan I+D+I Riojano (1999-2002)	Plan Estratégico para la Sociedad del Conocimiento www.larioja.org	Objetivo: transformar La Rioja en sociedad en red. Aplicaciones: • Conocimientos: potenciar el uso de los contenidos que se intercambian a través de las nuevas tecnologías. • Infraestructuras: potenciar la competitividad de la iniciativa privada y fomentar la cooperación sector público/privado. • Actores Sociales: garantizar la igualdad de oportunidades, evitando fracturas sociales. • Acceso: garantizar el acceso a las nuevas tecnologías.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información ofrecida por los Gobiernos autonómicos on-line (mayo 2001) —la ausencia de algunas Comunidades Autónomas se debe a que sus páginas web se encuentran en proceso de construcción o de incorporación de datos al respecto.

ANEXO III-6.2
INDICADORES DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Indicadores	Alemania	Austria	Bélgica	Dinama.	Finlandia	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Luxemb.	Portugal	R. Unido	Suecia	España	UE
Industria																
(SI1,1) Gasto TI (% PIB), 1997	2,2	2,1	2,4	3	2,7	2,5	0,9	2,9	2,1	1,6	2,4	1,4	3,4	3,5	**1,4**	2,3
(SI1,2) Gasto TIC (% PIB), 1997	4,3	4,1	4,8	5,4	5,2	4,8	4,1	5,8	6	3,9	4,8	4,9	6,3	6,2	**3,8**	5,0
(SI1,3) Gasto Telecomunicaciones (% PIB), 1995	2	1,9	1,6	2,2	2	1,7	2,5	2,2	2,9	1,8	1,8	3,1	2,6	2,6	**2**	2,2
(SI1,4) Importaciones TIC (% respecto a total), 1998 (I)	11	8,2	7,4	12,7	16,1	11,1	8,6	16,7	33,9	8,5	*	8,4	14,9	14,2	**8,6**	11,8
(SI1,5) Exportaciones TIC (% respecto a total), 1998 (E)	8,6	5	6,7	8,3	19,6	9,4	4,2	14,6	32,6	4,4	*	6,3	15	14,9	**5,3**	10,1
(SI1,6) Saldo E-I TIC (% respecto a total)	–2,4	–3,2	–0,7	–4,4	3,5	–1,7	–4,4	–2,1	–1,3	–4,1	*	–2,1	0,1	0,7	**–3,3**	–1,7
(SI1,7) Gasto TIC (% respecto a total)	9,8	6,6	7,1	10,4	18,1	10,2	7,6	15,6	33,1	6,3	*	7,5	14,9	14,6	**7**	11,0
(SI1,8) N.º Empresas sector ITC, 1997	—	9.317	—	11.888	6.040	30.867	—	—	—	81.524	—	7.223	95.520	15.021	**1.642**	259.042
(SI1.9) N.º Empleos sector ITC (miles), 1997	974	165	130	96	97	681	—	208	56	671	—	94	1.112	174	**129**	4.587
(SI1,10) Empleos ITC (% respecto a total), 1997	3,1	4,9	4,3	5,1	5,6	4	—	3,8	4,6	3,5	—	2,7	4,8	6,3	**0,8**	4,1
Infraestructura, 1998																
(SI2,1) Líneas telef. convencionales/100 hab.	42	41	47	55	50	52	54,4	47	38	39	52	37	52	65	**43,8**	47,7
(SI2,2) % Líneas fijas digitales	82	72	72	84	95	98	43	80	83	85	100	79	93	96	**67**	81,9
(SI2,3) Abonados a telefonía móvil/100 hab.	28,3	51,3	31,3	52,8	65,9	35	36,5	42,5	35,9	52,2	48,2	46,9	40,4	57,4	**38,1**	44,2
(SI2,4) Líneas RDSI (1)/100 hab,	16	9	3	12	15	6	1	15	5	7	20	5	5	7	**1,5**	8,5
(SI2,5) N.º PCs/100 hab.	36,0	35,9	39,0	61,0	41,7	30,5	11,0	35,0	18,0	20,0	52,0	22,0	49,0	51,0	**15,0**	34,5
(SI2,6) Empresas con PC/100 hab,	13,0	16,1	19,6	28,3	18,4	12,0	10,0	11,0	17,0	11,0	27,0	15,0	38,0	20,0	**9,0**	17,7
(SI2,7) Hogares con PC/100 hab.	23,0	19,8	19,4	32,7	21,3	18,5	1,0	18,0	7,0	9,0	25,0	7,0	11,0	31,0	**6,0**	16,6
(SI2,8) Conexiones a Internet/100 hab.	1,7	1,9	1,8	5,5	8,9	0,8	0,4	3,8	1,4	0,6	1,7	0,5	2,4	4,6	**0,7**	2,4
Idem, 2000	34	39,7	24,9	54	53,5	31,6	—	47,8	26,4	28,7	—	11,4	45,6	65,2	**12,4**	34,1
(SI2,9) Empresas acceso a Internet (%), 1999	69	57	49	91	95	69	32	65	55	66	73	47	62	75	**47**	63,5
(SI2,10) Servidores/100 hab. (2)	2	2,1	1,1	9	1,8	0,7	2,9		1,1	0,6	3	0,6	3,1	4,8	**0,6**	2,2
(SI2,11) Servidores seguros/100.000 hab., 2000	3,9	4,7	2,4	4,8	5,6	2,0	0,6	3,4	5,8	1,2	9,0	1,0	6,0	7,8	**1,8**	4,0
(SI2,12) Implantación UMTS (3) (MM. hab.), 2000	82	7,9	10,1	5,2	5,3	58,4	10,5	15,3	3,6	57,4	—	9,9	58,7	8,8	**39,2**	372,3

ANEXO III-6.2 *(Continuación)*
INDICADORES DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Indicadores	Alemania	Austria	Bélgica	Dinamarca	Finlandia	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Luxemburgo	Portugal	R. Unido	Suecia	España	UE
Servicios, 1998-2000																
(SI3.1) Hogares abonados a TV satélite (%), 1998	50,1	38,3	5	—	14	6,3	—	4,7	9,5	7,5	5	1,4	20	19	**10,9**	12,8
(SI3,2) Hogares abonados serv, cable (%), 1999	64,9	54,7	84,4	70	56,5	29	2,7	95,6	40,4	0,3	73	44,2	55,9	68,4	**10**	50,0
(SI3,3) Usuarios de Internet/100 hab., 1999	20,0	23,0	14,0	41,0	42,0	15,0	7,0	39,0	14,0	16,0	19,7	7,0	23,0	44,0	**10,0**	22,3
Idem, 2000	24,3	36,9	26,4	48,4	43,9	15,3	12,4	45,8	27,5	23,3	21,7	9,0	35,4	56,4	**13,7**	29,4
Usos, 1998-99																
(SI4,1) Consumo teléfono móvil (min./mes/usuario), 99	115	—	—	155	240	180	98	125	170	145	—	140	168	148	**155**	—
(SI4.2) Usuarios teléf. móvil (MM hab.), 2000	34,0	5,0	4,0	3,4	3,9	24,3	4,8	8,7	2,0	35,4	—	5,2	30,6	5,7	**19,9**	193,8
(SI4,3) Comercio electrónico (E-commerce) (Euro/100 hab.)	6.882	6.090	754	8.508	7.983	3.360	1.145	7.585	3.756	2.389	—	1.309	7.732	9.531	**117**	4.476,1
(SI4,4) Usuarios E-commerce (n.º/100 hab.)	4	4	2	16	13	2	—	7	2	2	5	1	5	11	**1**	5,0
(SI4,5) Correo electrónico externo (% empresas)	70	—	—	—	—	45	—	—	—	44	—	—	72	—	—	15,4
(SI4,6) Teletrabajadores/100 trabajadores (1997-98)	1,9	1,5	5,3	9,7	6,3	1,1	0,5	9,1	6,1	1,2	—	1,3	7	5,4	**0,6**	4,1
(SI5,1) Web-sites (n.º directores bajo dominio nac.)	1.461.467	23.397	97.127	93.141	17.663	72.037	14.070	272.828	12.809	93.279	11.551	6.786	478.844	46.199	**19.586**	
(SI5,2) Empresas con website (%)	48	—	—	—	—	25	—	—	—	30	—	—	51	—	**24**	11,9
(SI5,3) Utilización publicitaria Internet (% empresas)	43	—	—	—	—	16	—	—	—	23	—	—	44	—	—	8,4
(SI5,4) Dominios conectados a Internet	173.168	26.878	12.567	61.179	9.463	28.066	8.464	48.899	6.320	42.980	1.623	6.986	132.237	29.534	**11.755**	40.008
(SI5.5) Coste registro dominio directo Internet (tasa anual, $ PPP), 1999	48	60	75	45	30	175	150	145	150	35	80	60	60	98	**90**	86,7
(SI5,6) Tarifas acceso a Internet ($ PPP), 1998	68	65	47	32	20	48	60	40	50	35	54	47	47	38,6	**42,0**	46,2

* Los datos correspondientes a Luxemburgo están incluidos en los de Bélgica.

(1) RDSI: Líneas de Red Digital de Servicios Integrados. (2) Bajo dominio genérico (com, net, org) y nacional. (3) UMTS: Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universales.

Fuentes: Ministerio de Fomento, *Métrica de la Sociedad de la Información 1999;* Comisión Mercado Telecomunicaciones, *Informe sobre Comunicaciones Móviles* (enero 2001); AUI, Asociación Española de Acceso a Internet; European IT Observatory (EITO, 98): EEUU and CEE Statistics; e-Work 2000 (Status Report on the new ways to work in the IS); European Survey of Information Society (ESIS), Basic Facts and Indicators (2000); Information Society Promotion Office (ISPO); OECD, *Measuring the ICT Sector (abril, 1998), Communications Outlook 1999, Internet Infrastructure Indicators (octubre 1998);* UNESCO/CINDOC, *Informe Mundial sobre la Comunicación y la Información 1999-2000.*

3. PROTECCIÓN SOCIAL

Un año más, en la Memoria del Consejo Económico y Social, dentro del capítulo III, tiene especial relevancia tratar la situación de la protección social en España y analizar su tendencia hacia la consecución de los objetivos básicos de su mejora y la garantía de su futuro, totalmente coincidentes con los que se propugnan en el ámbito de la Unión Europea. El primero surge de la constatación de unas cifras representativas de la protección social en España notoriamente por debajo de las que presentan países de nuestro entorno e incluso inferiores a la media de la Unión Europea. El segundo objetivo es consecuencia de la evolución de acontecimientos que más condicionan la protección social en todos los países: el crecimiento económico en una economía cada vez más abierta y mundializada y, por tanto, más sujeta a los avatares que en cualquier zona geográfica se produzcan, actualmente con tendencia decreciente, y el envejecimiento demográfico que amenaza los modelos socioeconómicos de los Estados de bienestar, particularmente sombrío en el caso de España[115] y que podrá plantear problemas para mantener una población activa suficiente.

Además, el tema de la modernización y mejora de la protección social continúa teniendo especial significado entre los objetivos estratégicos de la Unión Europea. En las conclusiones de la

[115] Según el informe demográfico efectuado por la División de Población de Naciones Unidas, dado a conocer a finales de febrero de 2001, en el año 2050 España será el país más viejo del mundo, con una edad media de 55,2 años, y habrá perdido el 21,6 por 100 de su actual población, pasando de 39,9 millones de habitantes en 2000 a 31,2 millones cincuenta años después. Otro informe, *Las personas mayores en España,* presentado a mediados de marzo por la Secretaría General de Asuntos Sociales del MTAS y elaborado por el IMSERSO en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ofrece una amplia selección de datos estadísticos procedentes en su mayoría de grandes encuestas sobre la población española y, en ocasiones, de investigaciones cuantitativas monográficas sobre personas mayores, poniendo de manifiesto cómo el aumento del número de personas de edad está presionando a la sociedad y lo va a hacer cada vez más al requerir la implantación, desarrollo y mejora constante de sistemas de apoyo social, financiero y de atención sanitaria. Esta publicación, estructurada en dos volúmenes, se presenta como un observatorio, a actualizar periódicamente, para analizar y difundir información relativa a las personas mayores; en el primero recoge información de ámbito estatal sobre indicadores demográficos, económicos, sanitarios y servicios sociales; en el segundo contempla tales indicadores por Comunidades Autónomas.

Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa (23 y 24 de marzo de 2000), se hizo hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación entre los Estados miembros en materia de protección social. Por Decisión del Consejo de 29 de junio de 2000 se creó el Comité Consultivo de Protección Social que se constituyó formalmente el 12 de diciembre de 2000[116]. Por su parte, la Comisión Europea presentó en octubre de 2000 una comunicación sobre el futuro de la protección social, estando previsto un informe final, en particular de la viabilidad a largo plazo de las pensiones, para junio de 2001.

Bajo los planteamientos anteriores, en este capítulo, en primer lugar, se van a analizar los indicadores básicos de protección social en España y en Europa, a través de las estadísticas de Eurostat, que permitirán deducir consecuencias tanto de su estado según los últimos datos disponibles[117], como de su evolución. En segundo lugar se tratarán las cifras básicas más significativas de la Seguridad Social, su adaptación a las Recomendaciones del Pacto de Toledo y sus perspectivas para el mantenimiento de este sistema fundamental para la cohesión social que coadyuve eficazmente al reparto solidario de los beneficios del crecimiento económico. Los avances en la renovación del Pacto de Toledo y en particular lo relativo al Acuerdo tripartito firmado el 9 de abril de 2001 entre el Gobierno, CEOE-CEPYME y el sindicato CCOO, como fruto de la negociación llevada a cabo en la denominada mesa de pensiones dentro del diálogo social, son tratados en un epígrafe siguiente. Seguidamente se abordará la situación de la previsión social complementaria en España y los instrumentos en que la misma se materializa, particularizando el papel de las mutualidades.

[116] La creación del Comité Consultivo de Protección Social se formalizó con la nueva redacción del artículo 144 del TCE, aprobado en la Cumbre de Niza celebrada los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000. Está compuesto por dos representantes de cada Estado miembro y dos representantes de la Comisión Europea. Destacan entre las tareas del Comité hacer un seguimiento de las políticas de protección social de cada país, facilitar el intercambio de información, experiencia y buenas prácticas entre los Estados miembros y con la Comisión y presentar un informe anual al Consejo sobre el estado y los avances en materia de protección social.

[117] Los últimos datos disponibles corresponden a 1998 para los gastos y a 1997 para los ingresos.

3.1. Indicadores básicos de la protección social en España y en la Unión Europea

En todos los países de la Unión Europea se ha ido alcanzando, en general y a distinto ritmo, un elevado desarrollo de la protección social. Diseñada en cada caso de forma diferente, responde a sistemas que se encuentran arraigados cultural e institucionalmente, centrándose los esfuerzos, como ya se ha indicado, en conservar, al menos, los niveles alcanzados, introduciendo las reformas necesarias que garanticen su futuro, y de avanzar en su mejora y modernización entendida, fundamentalmente, como la adaptación constante a las necesidades sociales que surjan y a los cambios que vayan produciéndose en el sistema productivo.

Gastos de protección social sobre el PIB

Un indicador relevante del esfuerzo de los países a favor de la protección social, es la participación de los gastos sobre el PIB elaborada con la metodología uniforme SEEPROS. En 1998 —último año del que se dispone de información, si bien con la característica de avance— la media en el conjunto de la Unión Europea es del 27,7 por 100 del PIB, cifra que es 0,5 puntos menor que en el año anterior (28,2 por 100) y 1,3 puntos inferior al 29,0 por 100 del PIB del año 1993. Y es que en la década de los noventa se han producido dos tendencias opuestas; una, que culminó en 1993, de signo creciente en dicha participación por la que desde 1990 ganó en tan sólo tres años 3,6 puntos (pasó del 25,4 por 100 al 29,0 por 100); otra, mantenida desde el mencionado año, de paulatino descenso presentando una pérdida, como se ha indicado, de 1,3 puntos, con dos excepciones: los casos de Grecia y Portugal que en los últimos cinco años han mejorado los gastos de protección social sobre el PIB en más de dos puntos y que junto con Irlanda presentaban en 1993 los valores más bajos.

España presenta una evolución diferente a la expuesta media europea; de un lado de cuantía, y de otro de signo (1998). Así, de 1990 a 1993 mejoró en 4,0 puntos el porcentaje de participación sobre el PIB, ligeramente más que en la Unión Europea; en los cuatro años siguientes pierde notoriamente más que la media europea: 2,6 puntos frente a 0,8 puntos como consecuencia, sobre todo, del menor gasto en desempleo, pero en el último año considerado (1998) ganó 0,2 puntos cuando en el conjunto de la Unión Europea, como ya se ha hecho referencia, descendió 0,5 puntos (cuadro III-33).

CUADRO III-33
GASTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, 1993-1998
(Porcentajes del PIB)

Países	1993	1994	1995	1996	1997	1998	Diferencias 1993-1998
Alemania	29,1	28,9	29,6	30,6	29,9	29,3	–0,2
Austria	29,0	29,8	29,8	29,6	28,8	28,4	–0,6
Bélgica	29,4	29,0	28,4	28,8	28,5	27,5	–1,9
Dinamarca	33,0	34,2	33,4	32,5	31,4	30,0	–3,0
Finlandia	35,4	34,6	32,6	32,3	29,9	27,2	–8,2
Francia	31,0	30,6	30,7	31,0	30,8	30,5	–0,5
Grecia	22,0	22,1	22,7	23,3	23,6	24,5	2,5
Holanda	33,6	32,7	31,5	30,8	30,3	28,5	–5,1
Irlanda	20,7	20,1	19,6	18,5	17,5	16,1	–4,6
Italia	26,0	25,8	25,0	25,3	25,9	25,2	–0,8
Luxemburgo	24,5	24,1	24,9	25,2	24,8	24,1	–0,4
Portugal	21,0	21,0	20,8	21,6	22,5	23,4	2,4
Reino Unido	28,9	28,0	27,7	27,7	26,8	26,8	–2,1
Suecia	38,6	37,4	35,3	34,6	33,7	33,3	–5,3
España	24,0	22,8	22,1	21,9	21,4	21,6	–2,4
UE 15	29,0	28,6	28,5	28,7	28,2	27,7	–1,3

Nota: incluye gastos de prestaciones sociales de funcionamiento y otros gastos.
Fuentes: 1993-1997: MTAS, *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para 2001, Informe Económico-Financiero;* 1998: Eurostat, *Estadística de ingresos y gastos de protección social.*

Con la evolución indicada, en 1998 España dedicó a protección social apreciablemente menos que la media de los países de la Unión Europea: 21,6 por 100 frente al 27,7 por 100, superando sólo a Irlanda (16,1 por 100), pero la diferencia se había atenuado respecto al año anterior, al alcanzar 6,1 puntos cuando era de 6,8 puntos en 1997. Tal diferencia queda reducida a 5,6 puntos si se consideran los gastos en prestaciones sociales[118] como consecuencia de unos gastos de funcionamiento de los sistemas de protección social mucho más bajos en España, concretamente el 0,6 por 100 del PIB cuando la media de la Unión Europea fue del 1,1 por 100, esto es, en España casi la mitad (cuadro III-34).

Gastos de protección social por habitante

Otro indicador representativo de la parte que cada país dedica a protección social es el gasto por habitante en unidades homogéneas, bien medido en una determinada moneda, bien en paridades

[118] No incluyen los gastos de gestión y administración así como diversos gastos como son, entre otros, los intereses a los bancos y los pagos por impuestos.

de poder de compra. Puede observarse en el cuadro III-34 que el gasto por habitante fue en España, en 1998, de 2.707 ecus, menos de la mitad de la media de la Unión Europea que alcanzó 5.601 ecus; no llegaba a la cuarta parte de Luxemburgo, país que con 9.395 ecus presentó la cifra más alta; fue del orden de la tercera parte de Dinamarca y Suecia; finalmente, la cifra española sólo superó a las que presentaron Portugal y Grecia.

En cuanto al gasto por habitante en unidades de poder estandarizado de compra (SPA), la situación española es bastante parecida a la perspectiva anterior. En 1998, España alcanzó la cifra de 3,22 miles de unidades, encontrándose por debajo sólo Portugal (3,11 miles SPA) y Grecia (3,14 miles SPA). La media de la Unión Europea fue de 5,53 miles SPA, encontrándose, por tanto, España un 42 por 100 por debajo (cuadro III-34).

La protección social por funciones

Se completa la comparación de la protección social en los países de la Unión Europea a través de lo que cada uno dedica a las distintas funciones en las que se desagrega el gasto total[119], medido en porcentajes del PIB. Dado que, como ya se ha expuesto, España dedicó en 1998 a prestaciones sociales 5,6 puntos menos que la media de la Unión Europea, ello tiene su reflejo en menores porcentajes en todas las funciones excepto en la de desempleo, a la que en ese mismo año destinó el 2,8 del PIB frente al 1,9 por 100 de media europea, en este caso, fruto de la mucha mayor tasa de desempleo (en 1998 la tasa media de desempleo en España era del 19,0 por 100 y del 10,1 por 100 como media en la Unión Europea).

En las funciones más significativas puede mantenerse que España, con la salvedad expuesta, presentaba, también en 1998, una distribución bastante similar a la europea. La mayor proporción corresponde a vejez, que representó un gasto del 8,8 por 100 del PIB, equivalente al 42 por 100 del gasto total (la media en la Unión Europea fue el 10,8 por 100 del PIB y el 41 por 100 del total), seguida de la función de enfermedad con el 6,1 por 100 del PIB y el 29 por 100 del gasto total (la media en la Unión Europea fue el 7,1 por 100 y el 27 por 100, respectivamente).

[119] La metodología SEEPROS distingue la cobertura de ocho riesgos o necesidades, denominadas funciones de protección social, que son: enfermedad, invalidez, vejez, supervivencia, familia/hijos, desempleo, vivienda y exclusión social.

CUADRO III-34

INDICADORES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Gastos e ingresos de protección social	Alemania	Austria	Bélgica	Dinamarca	Finlandia	Francia	Grecia	Holanda	Irlanda	Italia	Luxemburgo	Portugal	Reino Unido	Suecia	España	UE 15
Gastos, 1998																
Gasto total de protección social (% PIB)	29,3	28,4	27,5	30,0	27,2	30,5	24,5	28,5	16,1	25,2	24,1	23,4	26,8	33,3	21,6	27,7
Gasto prestaciones sociales (% PIB)	28,2	27,5	25,9	29,2	26,3	28,9	23,7	26,8	15,3	24,4	23,2	20,4	26,0	32,8	21,0	26,6
Distribución prestaciones sociales por funciones (% PIB)																
Enfermedad	7,9	7,2	6,3	5,6	6,0	8,5	5,7	7,6	5,6	5,7	5,7	6,8	6,6	7,7	6,1	7,1
Invalidez	2,2	2,4	2,3	3,4	3,8	1,4	1,5	3,2	0,7	1,5	2,8	2,6	3,0	3,8	1,7	2,2
Vejez	11,4	10,4	8,2	11,2	8,0	11,0	10,4	9,6	2,9	13,0	9,2	7,2	10,4	12,2	8,8	10,8
Supervivencia	0,5	2,8	2,9	0,0	1,0	1,8	2,1	1,4	0,9	2,6	1,0	1,5	1,0	0,7	0,9	1,4
Familia-hijos	2,8	2,8	2,2	3,8	3,4	2,8	1,9	1,2	1,9	0,9	3,3	1,1	2,2	3,5	0,4	2,2
Desempleo	2,5	1,5	3,3	3,4	3,2	2,2	1,1	1,9	2,4	0,7	0,8	1,0	0,9	3,1	2,8	1,9
Vivienda	0,2	0,1	—	0,7	0,4	0,9	0,7	0,4	0,5	0,0	0,1	0,0	1,6	0,8	0,1	0,6
Exclusión social	0,6	0,3	0,7	1,1	0,6	0,4	0,3	1,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,2	1,0	0,2	0,4
Gasto por habitante en ecus	6.865	6.654	6.040	8.784	6.696	6.696	2.516	6.371	3.339	4.664	9.395	2.239	5.717	7.980	2.707	5.601
Gasto por habitante en miles de unidades de SPA	6,46	6,30	6,13	7,10	5,17	6,42	3,14	6,70	3,37	5,29	9,26	3,11	5,31	6,52	3,22	5,53
Ingresos, 1997																
Ingresos según naturaleza (% total ingresos)																
Cotizaciones de los empleadores	37,6	37,7	49,7	8,5	35,1	46,4	37,6	22,6	21,4	50,3	25,1	28,6	25,2	39,2	52,2	38,5
Cotizaciones de las personas protegidas	28,9	27,1	23,1	17,5	13,3	26,4	23,2	46,4	13,8	17,1	23,5	18,1	15,3	7,8	17,5	23,4
Aportaciones públicas	30,1	34,6	24,9	67,8	44,8	24,0	29,6	15,6	63,8	30,5	47,2	43,3	47,3	46,2	27,1	32,9
Otros	2,4	0,6	2,8	6,2	6,8	3,2	9,6	15,3	0,9	2,1	4,1	10,0	12,2	6,8	3,2	5,2
Ingresos según sector de procedencia (% PIB)																
Total	30,8	28,9	30,5	35,8	33,5	30,7	24,5	35,0	17,3	26,3	26,3	21,9	29,5	36,8	21,7	29,4
Cotizaciones de empleadores	11,9	10,9	15,0	3,0	11,7	14,2	9,2	7,9	3,7	13,2	6,6	6,3	7,4	14,4	11,3	11,3
Cotizaciones efectivas	8,3	8,7	11,9	1,5	10,8	11,5	4,9	5,3	2,4	10,6	5,2	6,1	5,2	13,2	9,2	8,6
Cotizaciones computadas	3,6	2,2	3,1	1,6	0,9	2,8	4,3	2,6	1,3	2,6	1,4	0,2	2,2	1,2	2,1	2,7
Cotizaciones personas protegidas	8,9	7,8	7,1	6,3	4,5	8,1	5,7	16,3	2,4	4,5	6,2	4,0	4,5	2,9	3,8	6,9
Aportaciones públicas	9,3	10,0	7,6	24,2	15,0	7,4	7,3	5,5	11,1	8,0	12,4	9,5	13,9	17,0	5,9	9,7
Otros	0,7	0,2	0,8	2,2	2,3	1,0	2,4	5,4	0,2	0,5	1,1	2,2	3,6	2,5	0,7	1,5

Notas: los gastos totales de protección social incluyen los gastos por prestaciones sociales, los de funcionamiento y otros gastos. Las cotizaciones de los empleadores se diferencian en cotizaciones efectuadas a los sistemas de protección social y las cotizaciones imputadas que se corresponden con las prestaciones de protección social otorgadas directamente por los empleadores a sus trabajadores.

Fuentes: 1997: MTAS, *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para 2001, Informe Económico-Financiero;* 1998: Eurostat, *Estadística de ingresos y gastos de protección social.*

Por el contrario, es de resaltar la apreciable diferencia respecto a las funciones de menor gasto. Concretamente, en 1998, España dedicó a la función de familia/hijos el 0,4 por 100 del PIB (2,2 por 100 en la Unión Europea), a vivienda el 0,1 por 100 del PIB (0,6 por 100 en la Unión Europea) y a exclusión social el 0,2 por 100 del PIB (0,4 por 100 en la Unión Europea), porcentajes que venían siendo los mismos en los últimos años (cuadros III-34 y III-35). El nivel de protección social existente en España en estas funciones, comparativamente con otros países, se pone también de manifiesto a través de su participación en el gasto total al significar la función familia/hijos el 2,1 por 100 en España y el 8,3 por 100 como media europea, la función vivienda el 0,3 por 100 frente al 2,1 por 100 en la Unión Europea y la exclusión social el 0,6 por 100 del gasto total, siendo la media de la Unión Europea el 1,6 por 100. No obstante, a la hora de interpretar estos porcentajes, se ha de tener en cuenta que en la estadística SEEPROS se incluyen sólo los gastos directos y no los gastos fiscales que en el caso de España son significativos para algunas funciones.

El gasto contra la exclusión social

Es de significar que desde el Consejo Europeo se ha impulsado una estrategia de lucha contra la exclusión social y todas las formas de discriminación, por entender que es uno de los elementos centrales de la modernización del modelo social europeo[120]. Entre sus orientaciones estratégicas se encuentra el objetivo de prevenir y erradicar la pobreza y la exclusión, y promover la integración y la participación de todos los ciudadanos en la vida económica y social. En tal sentido, el Consejo Europeo ha invitado a los Estados miembros a presentar en junio de 2001 un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social para un periodo de dos años (junio 2001 a junio 2003).

[120] El Consejo Europeo de Niza (7, 8 y 9 de diciembre de 2000), aprobó la Agenda Social Europea como parte de un enfoque integrado para conseguir la economía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer de manera sostenible y en dónde se conjugue una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social. En dicha Agenda se fijaron seis orientaciones estratégicas en el ámbito de toda la política social: 1. Promover un mayor número y una mejor calidad de los puestos de trabajo. 2. Anticiparse a los cambios del entorno laboral. 3. Luchar contra todas las formas de exclusión y de discrimiación para favorecer la integración social. 4. Modernizar la protección social. 5. Fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer. 6. Reforzar la dimensión social de la ampliación y de las relaciones exteriores de la Unión Europea.

CUADRO III-35
GASTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA POR FUNCIONES
(Porcentajes del PIB)

Funciones	**1993**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1998 UE**
Enfermedad	6,6	6,4	6,2	6,2	6,0	6,1	7,1
Invalidez	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	2,2
Vejez	8,4	8,4	8,6	8,7	8,7	8,8	10,8
Supervivencia	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4
Familia-hijos	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,2
Desempleo	5,1	4,2	3,6	3,2	2,9	2,8	1,9
Vivienda	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
Exclusión social	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4
Total funciones	23,3	22,2	21,5	21,3	20,9	21,0	26,6
Gastos funcionamiento y otros	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,1
Total gastos	24,0	22,8	22,1	21,9	21,4	21,6	27,7

Fuentes: 1993-1997: MTAS, *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para 2001. Informe Económico-Financiero;* 1998: Eurostat, *Estadística de ingresos y gastos de protección social.*

Previsiblemente, el cumplimiento por parte del Gobierno español de tal compromiso, implicará el establecimiento de nuevas iniciativas en orden a prestaciones y servicios y, en definitiva, aumentar el esfuerzo para mejorar esta prestación que queda muy lejos de la que se efectúa en otros países (1,4 por 100 del PIB en Holanda, 1,1 por 100 en Dinamarca, 1,0 por 100 en Suecia, 0,7 por 100 en Bélgica, 0,6 por 100 en Alemania y en Finlandia, países todos ellos por encima del 0,4 por 100 del PIB como media en la Unión Europea), si bien se ha de tener en cuenta que, en este caso, las comparaciones han de interpretarse con reservas al incluir la metodología SEEPROS en este apartado prestaciones en efectivo o en especie destinadas específicamente a luchar contra la exclusión social de las personas que no están cubiertas por otra prestación.

Las cotizaciones de empleadores, principal fuente de recursos

Finalmente, en el análisis de los indicadores básicos de protección social para calibrar la situación española respecto a los países europeos, cabe referirse a la procedencia de los recursos. En este caso, el último año del que se dispone información es 1997 y muestra que en España el 52,2 por 100 de los ingresos para atender los gastos de protección social procede de cotizaciones de los empleadores (empresarios y organismos públicos por sus funcionarios y personal laboral), el 27,1 por 100 de aporta-

ciones públicas, el 17,5 por 100 de cotizaciones de las personas protegidas y el 3,2 por 100 restantes de otros ingresos. Estos porcentajes difieren bastante de los que se dan en otros países y también de la media de la Unión Europea que son, en cada caso, del 38,5 por 100, 32,9 por 100, 23,4 por 100 y 5,2 por 100 (cuadro III-34), si bien se aprecia la coincidencia del orden de importancia de cada fuente.

Por otro lado, España es uno de los países con menor financiación a cargo de las cotizaciones sociales de los trabajadores que alcanzan el 3,8 por 100 del PIB, cuando la media en la Unión Europea es del 6,9 por 100. En cambio, las cotizaciones de los empleadores alcanzan en España el 11,3 por 100 del PIB, cifra coincidente con la media de la Unión Europea. Una información más detallada de la contribución de las empresas, se obtiene diferenciando las cotizaciones efectivas al sistema de protección social de las cotizaciones imputadas que se corresponden con las prestaciones de protección social otorgadas directamente por los empleadores a sus trabajadores, y que significan en 1997 el 2,7 por 100 del PIB en el conjunto comunitario y un 2,1 por 100 en España (cuadro III-34).

Las aportaciones públicas en España, por debajo de la media europea

Otra característica de la estructura de la financiación de la protección social en España es que los ingresos procedentes de las Administraciones Públicas quedan muy por debajo de las aportaciones que, como media, resultan en la Unión Europea. En 1997 significaban en España el 8,6 por 100 del PIB, frente al 12,7 por 100 de media europea. La cifra española es la más baja de todos los países, muy inferior a las que presentan Dinamarca (25,1 por 100 del PIB) y Suecia (23,7 por 100 del PIB) como países dónde la participación pública es mayor.

En consecuencia, tal y como se recogía en la Memoria de 1999 y ahora se repite, la amplia diferencia que presenta España respecto a otros países en la financiación pública de la protección social, justifica planteamientos de una mayor participación del Estado y de cumplimiento cuanto antes de los compromisos de separación de las fuentes de financiación, corriendo a cargo del Estado todas las prestaciones de carácter no contributivo.

3.2. Las cifras de la Seguridad Social

La consecución de los objetivos básicos de mejora, modernización y garantía de futuro de la protección social, a los que se ha hecho referencia al comienzo de este capítulo, requiere un sistema de Seguridad Social cada vez más saneado y estable, con capacidad de adaptación continua a las exigencias de un entorno cambiante y con especial atención a las políticas de solidaridad que permitan avanzar en la cohesión y equidad social y en el adecuado reparto de los beneficios del desarrollo económico. En términos más concretos y en esencia, tales requerimientos se deben traducir, además de la atención a las nuevas necesidades que se vayan planteando, fundamentalmente sanitarias y asistenciales, en el cumplimiento de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, en particular la suficiencia financiera y consolidación presupuestaria a un mayor plazo posible; la paulatina mejora comparativa de las prestaciones más bajas, así como las de viudedad y orfandad para las que existe un compromiso electoral del Gobierno; continuar en la dotación del Fondo de Reserva que reduzca las incertidumbres ante posibles futuras situaciones de menores o insuficientes crecimientos, cuando no de recesión económica; y considerar la viabilidad de reducciones selectivas de las cotizaciones sociales.

Todas estas cuestiones han sido abordadas en el «Acuerdo sobre el Desarrollo del Sistema de Seguridad Social», firmado el 9 de abril de 2001 entre el Gobierno, CEOE-CEPYME y el sindicato CCOO, Acuerdo en el que se abordan además otras iniciativas que permitan al sistema de la Seguridad Social enfrentarse a retos futuros, como son la introducción de la jubilación flexible, seguir avanzando en la contributividad y equidad del sistema, tratar sobre la convergencia de los regímenes especiales y plantear con la debida atención las situaciones de dependencia y la previsión social complementaria. La trascendencia de este Acuerdo, que viene a marcar las pautas para la renovación del Pacto de Toledo, justifica la dedicación de un epígrafe específico.

3.2.1. **Superávit financiero**

En la línea expuesta, lo primero que cabe poner de manifiesto es que el sistema de la Seguridad Social presenta en el año 2000

un superávit financiero, no teniendo que acudir a préstamos del Estado, tanto para alcanzar el equilibrio financiero como para cubrir desfases de tesorería. En resumen, los recursos de la Seguridad Social se han mostrado suficientes para la cobertura de los gastos.

Superávit del 0,5 por 100 del PIB

Según datos de avance provisional, el conjunto de la Administración Pública cerró el año 2000 con un déficit del 0,3 por 100 del PIB (343.900 millones de pesetas), mejor de lo previsto que era del 0,8 por 100 del PIB. A ello ha contribuido el que la Seguridad Social ha obtenido un superávit del orden del 0,5 por 100 del PIB (en torno al medio billón de pesetas[121]), resultado mucho más favorable al que se dio en el ejercicio del año anterior que en términos de operaciones no financieras se cerró con un déficit del 0,02 por 100 del PIB[122]. Ello abre las puertas para plantear la posibilidad de una rebaja selectiva de las cotizaciones como elemento dinamizador del empleo a tenor de lo previsto en la Recomendación 8.ª del Pacto de Toledo. También permite dotar el Fondo de Reserva; en los presupuestos de la Seguridad Social para 2001 figuran 90.000 millones de pesetas a añadir a los 100.000 millones ya dotados en el ejercicio anterior. Esta cuestión se tratará con detalle dentro del epígrafe de los gastos de la Seguridad Social.

Debe significarse que el mencionado superávit de la Seguridad Social en el año 2000 se consigue a pesar de haberse imputado a dicho año la paga adicional a los pensionistas por desviación del IPC[123], en vez de haberse cargado a los gastos del año en que se abona como ha sido la norma hasta ahora. Dado que en el pasado año también procedió el abono de la compensación por la evolución real del IPC por encima de lo previsto[124], para evitar que en

[121] Según el avance de liquidación del ejercicio 2000, emitido por la Intervención General de la Seguridad Social, la ejecución presupuestaria hasta el final del año, implica un superávit, en términos de derechos reconocidos, por operaciones no financieras de 507.457 millones de pesetas, equivalente al 0,51 por 100 del PIB.

[122] Datos de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social.

[123] En el caso de las pensiones contributivas ascendió a 181.000 millones de pesetas según información de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social (datos de avance de liquidación del ejercicio 2000).

[124] 116.300 millones de pesetas.

el mismo año se contabilizasen dos cantidades por el mismo concepto, se ha retrotraído el cargo al año de su devengo, lo que no deja de ser una regla para el futuro. Sin duda, se ha utilizado el buen año de la Seguridad Social para facilitar el objetivo de déficit público cero previsto para 2001.

3.2.2. **Cobertura financiera**

La cobertura financiera de las prestaciones y servicios comprendidos en la Seguridad Social se ha conseguido en el año 2000 con unos recursos que, según la previsión de liquidación de la Tesorería General a 1 de febrero de 2001, alcanzan 14,73 billones de pesetas, algo por encima a lo previsto para dicho año (14,15 billones de pesetas). Por otro lado, los derechos reconocidos de las Mutualidades de Accidentes de Trabajo (cuotas e IT derivada de contingencias comunes), según el mencionado avance de liquidación es de 918.000 millones de pesetas.

El origen de dichos recursos es, en primer lugar, las cotizaciones sociales, que significan el 64,4 por 100, seguidas de las transferencias corrientes, con el 31,4 por 100, y las tasas y otros ingresos, equivalentes al 4,2 por 100[125]. Estos porcentajes se alejan algo de los presupuestados para dicho año 2000 (previó un 65,1 por 100 para las cotizaciones sociales, un 33,1 para las transferencias corrientes y un 1,87 por 100 en la partida de tasas y otros ingresos) lo que, de confirmarse, pondría de manifiesto la continuación de las tendencias de participación de cada fuente en la financiación de la Seguridad Social: decreciente en el caso de las cotizaciones sociales (en 1990 eran el 71,76 por 100 y el 65,58 por 100 en 1999) y creciente en el de las transferencias corrientes, prácticamente en su totalidad aportaciones del Estado (en 1990 eran el 24,98 por 100 y el 31,10 por 100 en 1999).

Pero la pérdida de importancia relativa de las cotizaciones sociales de empleadores y trabajadores, no implica disminución de su

[125] La partida más importante está constituida por recargos y multas (131,9 miles de millones de pesetas) que superan casi en un 50 por 100 a la previsión.

cuantía; al contrario, lo recaudado por este concepto en el año 2000 ha superado en un 5 por 100 la previsión del ejercicio como consecuencia, básicamente, del aumento del número de cotizantes y de la equiparación progresiva de las bases máximas de cotización, a lo que habría que añadir el esfuerzo en el control del fraude en la liquidación de los ingresos.

Importante aumento de la afiliación

Tras el récord de afiliación alcanzado en noviembre de 2000, en el que hubo 15.364.569 cotizantes ocupados, el año se cerró con un crecimiento interanual del 4,5 por 100, que llevó la cifra total de afiliados a 15.236.218, superándose ampliamente la prevista, que era alcanzar los 15 millones al final del año. Por regímenes, el General, que agrupa a un 73,9 por 100 de los afiliados, ha sido el que ha registrado el incremento interanual más importante, el 5,6 por 100, lo que representa un total de 613.909 nuevos cotizantes. En cuanto a los regímenes especiales, destaca el de Trabajadores Autónomos, que alcanza 2.591.100 ocupados, con un incremento interanual del 2,5 por 100. Por su parte, el Régimen Especial Agrario, el de Trabajadores del Mar y el de la Minería del Carbón han cerrado con ligeras disminuciones.

Continuación del proceso de mejora de las bases de cotización

En cuanto a la mejora de las bases de cotización, en cumplimiento de la Recomendación 3.ª del Pacto de Toledo, ha continuado el proceso iniciado en el año 1997 a través de una aproximación de las cuantías de las bases máximas de cotización de los grupos 5 a 11 inclusive; éstas han experimentado subidas en el año 2000 del 7,1 por 100 frente al 2,0 por 100 de las bases máximas de los grupos 1 a 4. Para el año 2001 tales bases presentan también incrementos del mismo orden del 7,1 por 100 y 2,0 por 100 respectivamente, de modo que en el año 2002 se alcance la equiparación de los importes de las bases máximas de cotización de los indicados grupos con la cuantía del tope máximo[126].

En el ámbito de la acción inspectora de la Seguridad Social, su actuación ha permitido la afloración de empleos irregulares y la re-

[126] Según las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en el año 2000 las bases máximas de cotización son de 407.792 pesetas/mes para los grupos 1 al 4 y de 369.750 pesetas/mes para los grupos 5 a 11, pasando a ser de 415.950 pesetas/mes y 396.060 pesetas/mes, en cada caso, para el año 2000.

cuperación en el año 2000 por el control de la cotización de una cantidad un 4 por 100 mayor que en el año anterior, siguiendo así las orientaciones de la Recomendación 5.ª dedicada a la mejora de los mecanismos de recaudación y lucha contra la economía irregular[127].

Devolución de los préstamos del Estado

Por su parte, las transferencias corrientes, en su mayoría aportaciones del Estado, se han comportado prácticamente, en los términos previstos. Característica de la cobertura financiera actual de la Seguridad Social frente a años anteriores es, como ya se indicó, la ausencia del recurso a préstamos sin interés del Estado que, junto con la emisión de empréstitos, venían apareciendo hasta 1999 en los presupuestos de la Seguridad Social bajo la rúbrica de pasivos financieros. Esta nueva situación, manifestación de la solvencia de la financiación de la Seguridad Social, ya fue objeto de comentario en la Memoria del Consejo del año 1999, debiendo no obstante insistir en la necesidad de quedar determinada cuanto antes la decisión sobre si se habrán de devolver o no tales préstamos y, en su caso, en qué condiciones se efectuará esa devolución.

Dentro de 12 años se culminará la separación de fuentes

Otra característica de las fuentes de financiación de la Seguridad Social y de la aportación que efectúa el Estado es que no ha llegado a culminarse el proceso de separación y consolidación de las esferas contributivas y no contributivas previsto en la Recomendación 1.ª del Pacto de Toledo, trasladada a la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social. En los presupuestos para el 2001, las transferencias del Estado cubren la asistencia sanitaria, las pensiones no contributivas, las prestaciones familiares por hijo a cargo, las de la LISMI y para financiar el denominado «síndrome tóxico», las jubilaciones anticipadas y los servicios sociales del IMSERSO, pero sólo testimonialmente los complementos a mínimos de pensiones, que la citada Ley recogía como de naturaleza no contributiva y cuyo proceso de traspaso en su totalidad a cargo del Estado se ha dejado al marco del diálogo social.

[127] Según información de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social, la acción inspectora ha permitido aflorar en el primer semestre del año 20.876 empleos irregulares y 70.969 millones de pesetas.

En el Acuerdo Tripartito ya mencionado y que más adelante se tratará con mayor profundidad, se ha determinado que el Estado asuma la totalidad del gasto por complementos a mínimos en el plazo máximo de doce años, determinándose las cuantías anuales en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado.

3.2.3. **Los gastos de la Seguridad Social en la perspectiva del Pacto de Toledo**

Para el año 2000 y tal como se ha venido haciendo en Memorias anteriores del Consejo, el punto de referencia de los gastos de la Seguridad Social, además de su capacidad para afrontar los compromisos de un sistema público de previsión, continúa siendo su adaptación al Pacto de Toledo. Sus Recomendaciones, de aplicación para el Gobierno, iban dirigidas con carácter general, como se sabe, a atajar los problemas estructurales de la Seguridad Social y orientar las reformas que deberían efectuarse para garantizar su viabilidad, en particular el sistema de pensiones, proponiendo la última (15.ª) la creación, cada cinco años, de una Comisión en el Congreso de los Diputados que estudiara el presente y el futuro de la Seguridad Social.

Avances en la renovación del Pacto de Toledo

Dentro de la VII Legislatura, el 14 de junio de 2000, se constituyó en el Congreso de los Diputados la denominada Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por aplicación de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de que haya elaborado y facilitado algún documento sobre cuestiones a contemplar para la renovación del referido Pacto[128]. Previsiblemente al haberse constituido una denominada Mesa de pensiones, dentro del diálogo social, ha estado a la espera de los avances que pudieran conseguirse.

[128] Hasta el 23 de marzo de 2001 ha celebrado veinte sesiones, habiendo tenido lugar ante la misma 21 comparecencias de personalidades y expertos, entre ellas, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, catedráticos y profesores titulares, fundamentalmente de economía de diversas universidades, directores de servicios de estudios de diversas entidades y altos cargos de organismos de España y otros países de la Unión Europea, todas ellas para informar sobre los temas relacionados con el objeto de la Comisión. El Presidente del Consejo Económico y Social compareció el 17 de octubre de 2000.

En la perspectiva de los gastos de la Seguridad Social en el año 2000, los objetivos deberían incardinarse, por tanto, en seguir avanzando en el principio de solidaridad tendente a alcanzar la suficiencia de las prestaciones (Recomendación 12.ª), reforzar los principios de equidad y contributividad (Recomendación 9.ª), el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (Recomendación 11.ª) y la constitución de reservas (Recomendación 2.ª), sin olvidar la mejora de la gestión, introduciendo rigor, disciplina y racionalización en los gastos de funcionamiento y el control del cobro o utilización indebida de las prestaciones (Recomendaciones 7.ª y 13.ª).

Esta perspectiva implica un análisis de los gastos de la Seguridad Social según su clasificación funcional, por grupos de programas, en la que se contemplan las contingencias a cubrir o los beneficios de la acción protectora a otorgar, de forma que pueda conocerse el grado de eficacia conseguido a tenor de las citadas Recomendaciones. Tal clasificación distingue cuatro funciones: prestaciones económicas (contributivas y no contributivas), asistencia sanitaria, servicios sociales y la función de tesorería, informática y otros servicios funcionales, incorporando además un epígrafe de activos y pasivos financieros en el que se incluye la dotación del Fondo de Reserva[129].

Datos generales[130]

En primer lugar cabe decir que los gastos de la Seguridad Social en el año 2000 muestran un equilibrio casi perfecto con las previsiones efectuadas, del orden de 14,6 billones de pesetas. La evolución a lo largo de los últimos años muestra una ligera tendencia decreciente de la importancia de estos gastos respecto al PIB: 14,9 por 100 en 1997, 14,8 por 100 en 1998, 14,6 por 100 en 1999 y 14,5 por 100 en 2000 (cuadro III-36). Esto permite suponer que la disminución de la importancia de la participación de los gastos totales de protección social sobre el PIB en España, tratada en el epígrafe 3.1, continuará en los años siguientes al último contemplado en esa serie (1998).

[129] La estructura de presentación de los gastos de la Seguridad Social se ajusta a una triple clasificación: orgánica, según sea el agente gestor; funcional, que sirve a los objetivos perseguidos; y la tercera según la naturaleza económica del gasto, la cual distingue las operaciones corrientes (gastos de personal, gastos corrientes, gastos financieros y transferencias corrientes) y operaciones de capital.

[130] No incluye el gasto por desempleo.

CUADRO III-36

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DE LOS GASTOS POR FUNCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 1997-2001

(Miles de millones de pesetas corrientes y porcentajes sobre el PIB)

Conceptos	1997	1998	1999	2000	2001
PIB (precios corrientes)	82.059,6	87.545,6	93.693,2	100.872,8 (1)	106.925,2 (2)
Total gastos	12.260,9	12.986,9	13.683,3	14.597,5	15.759,9
% del PIB	14,9	14,8	14,6	14,5	14,7
Prestaciones económicas	8.126,8	8.504,6	8.907,8	9.489,3	10.087,1
% del PIB	9,9	9,7	9,5	9,4	9,4
Asistencia sanitaria	3.703,3	4.018,4	4.263,8	4.481,6	4.763,6
% del PIB	4,5	4,6	4,5	4,4	4,4
Servicios sociales	236,1	260,0	266,2	263,1	282,9
% del PIB	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tesorería, informática y otros servicios	153,2	168,2	173,1	200,8	221,2
% del PIB	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Activos y pasivos financieros	41,4	35,7	72,4	162,7	405,0
% del PIB	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4

(1) Estimación.

(2) Previsión del Ministerio de Economía y Hacienda.

Fuentes: INE, *Contabilidad Nacional Trimestral de España*. MTAS, *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para 2001, Informe Económico-Financiero*.

Las prestaciones económicas, por importe de 9,5 billones de pesetas en 2000, presentan también una disminución en cuanto a su significado sobre el PIB: 9,9 por 100 en 1997, 9,7 por 100 en 1998, 9,5 por 100 en 1999 y 9,4 por 100 en 2000. Con ello, aun siendo con mucho la función más importante del sistema de la Seguridad Social, su importancia relativa sobre el total de gastos va disminuyendo, desde el 66,3 por 100 en 1997, 65,5 por 100 en 1998, 65,1 por 100 en 1999 y 65,0 por 100 en 2000, estando previsto que en el año 2001 equivalga al 64,0 por 100.

La segunda función en importancia de los gastos de la Seguridad Social es la asistencia sanitaria, que alcanzó 4,5 billones de pesetas en el año 2000; en porcentajes del PIB se mantiene en torno al 4,5-4,4 por 100, y con relación a los gastos totales se sitúa sobre un 30 por 100.

A mucha distancia se encuentran los gastos por servicios sociales, 263,1 miles de millones de pesetas en el año 2000, equivalente a un 0,3 por 100 del PIB. Este porcentaje no ha variado

en los últimos cinco años, incluida la previsión para el 2001. Pero la partida muestra una importancia relativa decreciente, en torno al 1,8 por 100 en el último año, sobre el total. Finalmente, los gastos de tesorería, informática y otros servicios, del orden de 200,8 miles de millones de pesetas en el año 2000, vienen a significar el 0,2 por 100 del PIB y el 1,4 por 100 de los gastos totales. En cuanto a los activos y pasivos financieros, estos datos muestran una apreciable elevación a partir del año 2000 en cuanto que aquí se encuentran los activos afectados al Fondo de Reserva y la amortización de préstamos concedidos por el Banco de España[131]; con ello la cifra alcanza 162,7 miles de millones de pesetas, equivalente al 0,2 por 100 del PIB y al 1,1 por 100 del total de gastos, mientras que para el ejercicio del 2001 está presupuestada una cifra notoriamente superior: 405,0 miles de millones de pesetas, que significarán el 0,4 por 100 del PIB y el 2,3 por 100 de los gastos totales.

Tras esta consideración general de los gastos totales parece oportuno profundizar en el Fondo de Reserva y en el gasto en prestaciones, particularmente en pensiones.

El Fondo de Reserva y su materialización

El Consejo de Ministros celebrado el 1 de diciembre de 2000 acordó una materialización adicional del Fondo de Reserva por importe de 60.000 millones de pesetas, que vino a sumarse a los 40.000 millones materializados en el mes de octubre, cumpliendo así el compromiso de completar antes de finalizar el año los 100.000 millones que componen la dotación actual. Tal y como se recogía en la Memoria del Consejo de 1999, la materialización deberá efectuarse en activos financieros públicos depositados en el Banco de España, encargado de su adquisición, con las características que determine la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Como ya se ha indicado, en los Presupuestos Generales del Estado para 2001 se incrementa la dotación del Fondo de Reserva en 90.000 millones, con lo que éste alcanzará 190.000 millones de

[131] La amortización del principal del crédito concedido por el Banco de España sobre la base de la disposición transitoria sexta de la Ley 41/1994, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, comienza a efectuarse en el año 2000, ascendiendo a 12.878 millones de pesetas en 2000 y a 12.865 millones de pesetas en el año 2001.

pesetas a finales de dicho año. Pero la cuantía futura del Fondo también se ha previsto en el Proyecto de Ley General de Estabilidad presupuestaria, cuyo objetivo es garantizar en los próximos años el equilibrio presupuestario en las Administraciones y entidades públicas empresariales, incluidas las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. En el capítulo 2.º de este Proyecto de Ley, dedicado al equilibrio presupuestario del sector público estatal, en la Sección relativa a la gestión presupuestaria, cuando se trata el saldo de la liquidación, se recoge que cuando se sitúe en una situación de superávit se aplicará a reducir el endeudamiento neto de la Administración General del Estado y prioritariamente al Fondo de Reserva en el sistema de la Seguridad Social, con la finalidad de atender necesidades futuras del sistema.

De cumplirse las previsiones contenidas en el Programa de Estabilidad 2000-2004, se pasará de una situación de déficit presupuestario cifrado en el 0,3 por 100 del PIB en el año 2000, a equilibrio en 2001 y superávit en los tres años siguientes, del orden del 0,3 por 100 del PIB, lo que debe permitir una dotación al Fondo de Reserva hasta alcanzar un billón de pesetas al finalizar el año 2004. Esta cuestión ha sido tratada e incluida en el Acuerdo sobre Pensiones de abril de 2001, en los términos que más adelante se expondrán.

El gasto en pensiones

Ciñéndonos al gasto directo en prestaciones, la partida más importante es la destinada al pago de pensiones. Entre las contributivas y no contributivas, la Seguridad Social ha dedicado 8,6 billones de pesetas en el año 2000, el 91,6 por 100 del total de prestaciones. A continuación se sitúa la incapacidad temporal, que supone algo más de medio billón de pesetas, el 5,6 por 100 de las prestaciones. El resto lo constituyen las prestaciones de maternidad, riesgos durante el embarazo, prestación familiar y otras; en todas ellas la Seguridad Social gasta, en conjunto, cerca de 300.000 millones de pesetas, el 2,8 por 100 del total.

La importancia cualitativa y cuantitativa del gasto en pensiones merece resaltar algunas de sus características. La primera es que va perdiendo importancia relativa sobre el PIB: en 1997 representó el 8,9 por 100 y en el año 2000 viene a significar el 8,5 por 100 del PIB. Si se considera con relación al total de gastos de la Seguridad Social, también presenta una cierta disminución: 59,4 por 100 en 1997 y 58,9 por 100 en 2000.

La segunda característica atañe a su estructura: la esfera contributiva es, con mucho, la principal componente del gasto en pensiones, si bien el peso de la acción protectora no contributiva va aumentando poco a poco. En 1997 las pensiones contributivas representaban el 97,2 por 100 y las no contributivas el 2,8 por 100 restante, mientras que en el año 2000 han pasado a significar un 97,0 y un 3,0 por 100, respectivamente.

Como es lógico, esta evolución depende de los colectivos afectados y del importe de las revalorizaciones de las pensiones, en la que influye no solamente la actualización en función de la variación prevista del índice de precios al consumo y la revisión posterior en caso de desviación, de forma que quede garantizado el poder adquisitivo, sino también el denominado efecto sustitución, consecuencia del diferencial de pensión existente entre las cuantías de las nuevas pensiones que causan alta y de las bajas.

Moderación en el crecimiento del número de pensiones contributivas

El número de pensiones contributivas a 31 de diciembre del año 2000 fue de 7.644,3 miles que, frente a 7.556,2 miles en la misma fecha del año anterior, supone un incremento de 1,2 por 100[132], porcentaje muy alejado de los que se producían en las dos décadas anteriores. Efectivamente, el aumento interanual del número de pensiones tiende a moderar su marcha ascendente a pesar del descenso de la mortalidad y el consiguiente aumento de la permanencia en la condición de pensionista. Se ha pasado así de incrementos interanuales entre el 4 y el 5 por 100 a comienzos de los años ochenta[133], a otros entre el 2 y el 3 por 100 en la primera mitad de los noventa y claramente por debajo del 2 por 100 a finales de siglo: 1,8 por 100 en 1998, 1,3 por 100 en 1999 y 1,2 por 100 en 2000. Tal moderación está suponiendo una sensible mejora de la relación cotizantes/pensiones, en situación regresiva hasta 1997 en que llegó a 1,98, para situarse en los últimos años por encima de la proporción dos a uno; el dato correspondiente al año 2000 es de 2,20 cotizantes por pensión, estimándose llegar a 2,22 en el año 2001[134].

[132] Fuente: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

[133] Fuente: MTAS, *Anexo al Informe Económico-Financiero. Presupuestos de la Seguridad Social*.

[134] Según datos recogidos en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social, Ejercicio 2001, Informe Económico-Financiero, la relación cotizantes/pensiones es muy dispar por Regímenes: la estimación para el año 2000 es la siguiente: General 2,77, Autónomos 2,84, Agrario 0,65, Carbón 0,25, Mar 0,70 y Hogar 0,71.

Pero esta tendencia del número de pensiones es distinta por clases. El cuadro III-37 muestra el mayor número de pensiones de jubilación, casi 4,5 millones como media anual del año 2000, el 59 por 100 del total de pensiones, equivalentes a un aumento del 1,0 por 100 respecto al año anterior. Siguen las pensiones de viudedad, prácticamente dos millones, el 27 por 100 del total, suponiendo con relación a 1999 un incremento del 1,8 por 100. El tercer lugar en cuanto al número de pensiones lo ocupan las de incapacidad permanente, 792,6 miles, el 10 por 100 de todas las pensiones pero con una característica significativa: su notoria disminución experimentada en 1998 con motivo de que la pensión de los titulares mayores de 65 años pasó a denominarse de jubilación, y el mantenimiento de una cierta regresión en razón de las actuaciones de inspección, control y revisión del derecho a la percepción de estas prestaciones, lo que ha llevado a su descenso, un 0,8 por 100, en 1999 y un 0,7 por 100 en 2000. El resto de pensiones son las de orfandad y favor de familiares (las medias anuales del año 2000 son de 259,0 miles y 44,3 miles en cada caso), equivalentes al 4 por 100 del total, con la diferencia de que mientras las primeras han aumentado a causa de la ampliación de la edad límite (21 años o 23 si no sobrevive ninguno de los padres), las segundas, tras aumentar hasta 1998, han descendido ligeramente en los dos últimos años.

Mayor crecimiento del número de pensiones no contributivas

En cuanto a las prestaciones no contributivas, el número total a 31 de diciembre de 2000 era de 644,6 miles, cifra superior a la de un año antes (629,0 miles) en un 2,5 por 100, más del doble que el incremento del número de pensiones contributivas según se ha visto (1,2 por 100). Esta circunstancia, junto con un aumento del importe de la pensión no contributiva en el año 2000, del 6,1 por 100 (para un beneficiario pasó de 37.955 a 40.255 pesetas al mes, fruto del Acuerdo de 16 de septiembre de 1999), apreciablemente superior al que ha experimentado la pensión media en el mismo año, que fue del 4,9 por 100 (pasó de 74.300 a 77.900 pesetas al mes), han dado lugar al aumento de la proporción del gasto de las pensiones no contributivas según se indicó anteriormente.

Crecimiento de las pensiones en términos reales

Finalmente, cabe hacer algunas consideraciones sobre la pensión media y su evolución. El cuadro III-37 recoge el importe medio en los últimos años de la pensión contributiva, que en el año 2000 se ha situado en 77.900 pesetas al mes, un 10,2 por 100 superior al

CUADRO III-37

EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU IMPORTE MENSUAL, 1997-2000

(Miles de pensiones en vigor a 31 de diciembre e importe medio mensual en miles de pesetas corrientes)

Conceptos	1997	1998	1999	2000
Total pensiones				
Número	7.279,3	7.410,7	7.509,3	7.598,9
Importe	69,5	71,9	74,3	77,9
Incapacidad Permanente				
Número	1.626,6	804,5	798,0	792,6
Importe	73,9	81,1	84,7	89,3
Jubilación				
Número	3.502,5	4.400,9	4.450,2	4.493,4
Importe	81,1	82,0	84,8	89,1
Viudedad				
Número	1.897,5	1.936,7	1.973,3	2.009,6
Importe	49,3	50,9	52,4	55,2
Orfandad				
Número	207,6	222,7	242,7	259,0
Importe	30,0	30,9	31,6	33,1
Favor Familiar				
Número	45,0	45,8	45,1	44,3
Importe	35,9	37,2	38,6	40,9

Fuente: MTAS, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

salario mínimo interprofesional que estuvo vigente en dicho año (70.680 pesetas al mes), suponiendo un aumento del 4,9 por 100, como ya se ha mencionado, respecto a la cuantía media mensual de la pensión contributiva en 1999. Dado que el incremento del índice de precios al consumo en media anual fue del 3,4 por 100, se infiere que la pensión media ha tenido un crecimiento en términos reales de un punto y medio, en el que ha influido diversas medidas adoptadas en la línea de las Recomendaciones del Pacto de Toledo tendentes a reforzar los principios de equidad y contributividad del sistema (9.ª) y el de solidaridad y suficiencia de las pensiones (12.ª) elevando proporcionalmente más las mínimas en la medida que la situación económica del país lo permita. Precisamente el Acuerdo Gobierno-Sindicatos de septiembre de 1999 elevó las pensiones mínimas en el año 2000 por encima de la variación del IPC, estableciendo además que la pensión mínima de jubilación e incapacidad para mayores de 65 años con cónyuge a cargo se igualara al salario mínimo interprofesional y que la pensión mínima de viudedad

para menores de 60 años con cargas familiares se equiparara a la mínima de viudedad de 60 a 64 años[135].

De conformidad con la Recomendación 11.ª del Pacto de Toledo, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, y con la Ley 24/1997, reiteradamente aludida, para el año 2001 se han revalorizado las pensiones en un 4,1 por 100, porcentaje del que 2,1 puntos responden a la desviación del índice de precios al consumo de noviembre de 1999 a noviembre de 2000 y que dio origen a una paga de compensación en el mes de enero de 2001, y los 2 puntos restantes a la previsión de inflación prevista para el año 2001, con la misma cláusula de revisión en caso de que en el mes de noviembre del 2001 no se cumpla la previsión anual de variación del IPC.

3.3. Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de la Seguridad Social

Con fecha 9 de abril de 2001, Gobierno, CEOE-CEPYME y CCOO firmaron el Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de la Seguridad Social[136] presentado en la línea de continuar en la senda del Acuerdo de octubre de 1996 (esta vez con la participación de la citada patronal, que no lo hizo en 1996, y sin la firma de UGT, que sí refrendó el acuerdo de dicho año) y avanzar en el desarrollo de las Recomendaciones del Pacto de Toledo dentro del objetivo de la consolidación de la viabilidad presente y futura del sistema y, en particular, de la pervivencia del sistema de pensiones.

De esta forma se han aprobado un conjunto de iniciativas que encaran diversas cuestiones, algunas que habían quedado pendientes para el diálogo social —como es el caso del encuadramiento definitivo de los complementos a mínimos de pensiones— y otras que habían venido siendo objeto de reiterado planteamiento por parte

[135] Véase *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la nación,* año 1999, págs. 566 y ss.

[136] Negociado en la denominada Mesa de Pensiones dentro del proceso de diálogo social. La primera sesión formal de negociación tripartita se celebró el 3 de julio de 2000. El 29 de marzo de 2001 el sindicato UGT anunció que se retiraba del Acuerdo.

de los interlocutores sociales, pudiendo mencionarse la jubilación anticipada voluntaria del trabajador y la reducción de las cotizaciones sociales. Además, el Acuerdo entra en otros temas dentro de la consideración de que los modelos de seguridad social han de ir introduciendo reformas que permitan su modernización en función de la evolución de las necesidades sociales y que incidan positivamente sobre los dos apoyos del sistema: el crecimiento económico y la creación de empleo.

Las medidas adoptadas en los quince puntos de los que consta el citado Acuerdo, son las siguientes:

I. Separación de las fuentes de financiación

Se culminará el proceso de separación de recursos de la Seguridad Social de forma que se han de disponer las modificaciones precisas en la legislación para la ubicación definitiva de los complementos a mínimos como de naturaleza no contributiva. Se fijarán, en las respectivas Leyes de Presupuestos, las sucesivas aportaciones del Estado hasta la financiación total de tales complementos en un plazo que no superará doce años.

II. Aplicación de excedentes

Para la consolidación del sistema de la Seguridad Social, se considera que sería un elemento de garantía que el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sociales, de acuerdo con las posibilidades económicas de cada momento y la situación económica prevista, dedicase prioritariamente los excedentes en cotizaciones sociales procedentes de las liquidaciones presupuestarias a la dotación del Fondo de Reserva. En todo caso, el Gobierno, previa consulta con la Comisión de Seguimiento del Acuerdo (apartado XIV), establecerá el destino de los excedentes, si los hubiese, de forma equilibrada a la mejora de las prestaciones y a la reducción de las cotizaciones sociales.

III. Fondo de Reserva

Se fija la cuantía que debe alcanzar el Fondo en una mensualidad ordinaria del total de pago de prestaciones periódicas que realiza la Tesorería General de la Seguridad Social, más el prorrateo de las pagas extraordinarias, mensualidad que se estima se situará en el año 2004 en torno a los 800.000 millones de pesetas. Esta cantidad deberá dotarse en la medida que lo permitan las posibilidades financieras, de forma que quede íntegramente ingresada en la cuenta abierta por la Tesorería en el Banco de España a finales de dicho año. De conformidad con las orientaciones del Plan de Estabilidad, sería deseable que la cuantía del Fondo llegara hasta un billón de pesetas.

El Gobierno, en el plazo máximo de un año y previa consulta con la Comisión de Seguimiento, dictará las normas precisas que regulen los mecanismos de inversión del Fondo de Reserva, los instrumentos de control y rendición de resultados, así como los supuestos de realización del referido Fondo, que deberá limitarse a situaciones estructurales de déficit financiero de prestaciones del sistema de la Seguridad Social en el nivel contributivo.

IV. Jubilación flexible

Se declara la conveniencia de modificar la regulación actual de la prestación de jubilación, de forma que no impida una presencia social activa de los ciudadanos, teniendo en cuenta, a su vez, que esta permanencia repercute en la autoestima del trabajador, tiene efectos positivos en el sistema de pensiones y presenta indudables ventajas para el conjunto de la sociedad que puede aprovechar las experiencias y conocimientos de los trabajadores de más edad. En tal línea se acuerda:

1. Mantener en 65 años la edad mínima general de acceso a la pensión de jubilación. El Gobierno presentará un estudio que recoja las experiencias del Derecho comparado en esta materia.

2. Con el objetivo de lograr una mayor permanencia en la actividad laboral, el Gobierno se compromete a introducir modificaciones legales en:

a) La regulación de la jubilación parcial que posibilite la compatibilidad entre el percibo de una pensión de jubilación y el desarrollo de actividades laborales desde el momento en que se comience a percibir una pensión de jubilación.

b) La exoneración del pago de cotizaciones sociales por contingencias comunes de los trabajadores de 65 o más años en los términos previstos en el apartado XII del Acuerdo.

c) La medida anterior obliga, a su vez, a introducir en la legislación de la Seguridad Social otras modificaciones como: posibilidad de acceder a las pensiones de incapacidad permanente aunque el trabajador tenga 65 años o más y reúna las condiciones de acceso a la pensión de jubilación cuando la causa originaria de la incapacidad derive de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional; modificar la regulación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años de forma que éste ya no se extinguirá por el hecho de que el beneficiario alcance la edad a la que pueda tener derecho a una jubilación contributiva; y que, a efectos del cálculo de la pensión de jubilación, la base de cotización a partir de los 65 años no podrá verse incrementada respecto a la del ejercicio anterior en un porcentaje superior al índice de precios al consumo más dos puntos.

d) Se estudiará el desarrollo de medidas que posibiliten que el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación pueda superar el 100 por 100 respecto a aquellos trabajadores que permanezcan en activo más allá de los 65 años de edad y 35 de cotización.

3. Modificar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada.

Se mantiene en su regulación actual el acceso, por aplicación del derecho transitorio, a la jubilación a partir de los 60 años. A su vez, podrán acceder a la jubilación anticipada a partir de los 61 años, los trabajadores afiliados a la

Seguridad Social con posterioridad al 1 de enero de 1967 siempre que reúnan las siguientes condiciones:

- Estar incluidos en un régimen de la Seguridad Social que contemple el derecho a la jubilación anticipada.

- Acreditar un periodo mínimo de cotización efectivo de 30 años.

- Que el cese en el trabajo no sea por causa imputable al trabajador. En el caso de despido colectivo, se requerirá que las empresas estén sujetas a expedientes de regulación de empleo.

- En el supuesto de extinción de contratos de trabajo derivados de un expediente de regulación de empleo, promovidos por empresas que no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal, aquel deberá llevar como anexo un acuerdo en cuyas cláusulas se obliguen a financiar un convenio especial con la Tesorería General hasta la edad de 65 años, y cuyo coste deberá ser soportado, salvo pacto en contrario, por empresarios y trabajadores en la misma proporción en que se cotiza por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social.

- Encontrarse inscrito el trabajador en el INEM como demandante de empleo durante un plazo, al menos, de seis meses a la fecha de solicitud de jubilación anticipada.

El coeficiente reductor aplicable a la pensión de jubilación cuando se acceda a una edad inferior a los 65 años, será el siguiente:

Años cotización efectiva acreditada	Por cada año que falte para 65 años (%)
40 o más	6,0
39-38	6,5
37-35	7,0
34-31	7,5
30 o menos	8,0

V. Contributividad y equidad del sistema

Se revisará el sistema de cálculo de la base reguladora de manera que se tenga en cuenta, de forma progresiva, el esfuerzo realizado por el trabajador a lo largo de su vida laboral. Para ello deberá estudiarse en profundidad el efecto que en las prestaciones han producido las medidas adoptadas en 1996, con el objetivo de reforzar el carácter contributivo y la equidad en el cálculo de aquéllas. En el año 2003, una vez finalizado el periodo transitorio de ampliación de cálculo de la base reguladora hasta los quince años, se tomarán las medidas oportunas para que se adopte la forma más idónea para el cálculo de las prestaciones.

VI. Mejora de prestaciones

Es conveniente profundizar en la aplicación del principio de solidaridad, especialmente en las situaciones de mayor necesidad o de cuantía más reducida de pensión, concretamente en las pensiones de viudedad, de orfandad y en las mínimas.

• **Viudedad.** El porcentaje aplicable a la base reguladora pasará de forma progresiva del 45 al 52 por 100. En el caso de cargas familiares cuando la pensión de viudedad constituya la principal fuente de renta, el porcentaje será del 70 por 100. Se aplicará un nuevo marco de compatibilidades, permitiendo el mantenimiento aunque el pensionista contraiga nuevas nupcias, siempre que concurran simultáneamente las circunstancias de personas mayores o incapacitadas, que la pensión de viudedad constituya la principal fuente de ingresos y que se trate de personas con menores niveles de rentas.

• **Orfandad.** Se incrementará el límite de edad para la percepción siempre que el huérfano no trabaje, o que si lo hace los ingresos no superen el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, que pasa a 22 años y en caso de orfandad absoluta a 24 años.

• **Mínimas.** Se incrementarán las pensiones mínimas de jubilación con beneficiarios de menos de 65 años y de viudedad para beneficiarios menores de 65 años y las no concurrentes del extinto Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI).

VII. Convergencia de Regímenes Especiales

Teniendo en cuenta la favorable evolución del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, resulta conveniente introducir medidas que mejoren su marco de acción protectora de forma que vaya acercándose a la dispensada en el Régimen General ante supuestos homogéneos. En tal línea, se acuerda incluir en aquel Régimen la prestación de incapacidad permanente total «cualificada», cuando el trabajador autónomo tenga 55 o más años y no ejerza una actividad ni sea titular de un establecimiento mercantil o industrial.

Con los mismos requisitos se aplicará a los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario y a los del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, entendiendo la referencia al establecimiento mercantil o industrial, en estos dos casos, a la explotación agraria o marítimo pesquera.

De igual modo, se incluirá en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la cobertura de riesgos profesionales, estableciéndose las correspondientes cotizaciones.

A su vez, para superar la deficiente estructura formal actual se estimulará la simplificación e integración de los regímenes para que a medio o largo plazo todos los trabajadores o asimilados queden integrados bien en el de por cuenta ajena bien en el de por cuenta propia, integración que deberá iniciarse por la inclusión de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario en el de Trabajadores Autónomos y seguirse sucesivamente respecto a los autónomos del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, sin perjuicio de mantener las especialidades que procedan y de instituir los sistemas que se consideren procedentes en materia de afiliación, altas, bajas, cotización y recaudación.

Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la discriminación de la mujer agraria en orden a su inclusión en el Régimen Especial Agrario y para asegurar el encuadramiento y afiliación correctos de los trabajadores agrarios. Se constituirá una Mesa que tendrá como misión analizar la integración de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario en el Régimen General.

VIII. Dependencia

Dado que el fenómeno de la dependencia de las personas mayores está adquiriendo una dimensión inédita debido, básicamente, al aumento de la esperanza de vida, y de que la solución eficaz habrá de ser compartida por las tres Administraciones Públicas, se reconoce que la Administración General del Estado debe jugar un papel de impulso en la cobertura social de esta contingencia, contribuyendo de esta forma a garantizar la igualdad en todo el Estado al acceso a prestaciones y programas por parte de las personas dependientes.

Se considera necesario abrir un periodo de análisis y debate social en orden a que, antes de finalizar la presente legislatura, pueda estar diseñada y aprobada una política de atención a la dependencia con el rango normativo oportuno. En consecuencia, en el plazo de tres meses desde la firma del Acuerdo, se constituirá una Comisión de Trabajo con participación de los ámbitos competentes de las tres Administraciones Públicas, con la finalidad de llevar a cabo un análisis y elaborar las propuestas adecuadas sobre el marco jurídico en el que ha de incardinarse la cobertura de las situaciones de dependencia, así como la elaboración de las líneas básicas de actuación en esta materia, cuyos trabajos deberán estar finalizados antes del 30 de junio del año 2002.

IX. Agencia de la Seguridad Social

El Gobierno asume el compromiso de remitir a las Cortes Generales, en el plazo máximo de un año, previa consulta con las organizaciones sociales, un Proyecto de Ley de Creación de la Agencia de la Seguridad Social, a fin de que la gestión y administración de la Seguridad Social se lleve a cabo con sujeción a principios de simplificación, racionalización, economía de costes y de eficacia social, además de descentralización funcional.

X. Lucha contra el fraude

Dentro de las actuaciones de lucha contra el fraude, resulta preciso continuar con las medidas de mejora de gestión de la inca-

pacidad temporal de modo que, dando cobertura a las situaciones reales de imposibilidad de acceder al trabajo, se evite la utilización indebida de la prestación. Las medidas a adoptar irán dirigidas a impedir la concatenación abusiva de la IT con la prestación de desempleo, evitar la prolongación de la prestación cuando el trabajador no acuda sin causa justificada a los reconocimientos médicos requeridos por la entidad pagadora, e incrementar la coordinación entre las entidades responsables del pago y el Insalud y los servicios de salud que permitan un mejor control de las situaciones de IT.

Se adoptarán las medidas normativas necesarias para incluir a los trabajadores en el sistema de la Seguridad Social y en el Régimen que corresponda, de forma que se adecúe correctamente el encuadramiento a la actividad económica realizada. Asimismo se adoptarán las medidas adecuadas para evitar afiliaciones de trabajadores de forma indebida en el Régimen Especial Agrario y se estudiará la situación de personas que, carentes de las debidas licencias o permisos administrativos de actividad, están hoy encuadradas indebidamente en el sistema.

XI. Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social

Bajo los pilares fundamentales de mantener las garantías del trabajador para acceder a la protección, de una adecuada combinación del alcance y consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de afiliación y/o cotización por las empresas y de preservar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social, se estima conveniente la adopción de las siguientes medidas:

- Adecuar la aplicación del principio de automaticidad de las prestaciones, limitando el anticipo por parte de la entidad gestora colaboradora exclusivamente hasta dos veces y media el salario mínimo interprofesional. La Tesorería General remitirá anualmente a cada trabajador un documento que informe de la cuantía y número de cotizaciones que consten en su registro fruto de las declaraciones o ingresos efectuados por los empleadores.

- Proceder al desarrollo normativo oportuno en esta materia, a efectos de dotar de mayor eficacia y agilidad al actual procedimiento declarativo de responsabilidad empresarial, pudiendo atribuir las competencias necesarias a las entidades gestoras, fundamentalmente en relación con las prestaciones que reconoce el sistema de Seguridad Social.

- Condicionar el reintegro por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a las Mutuas del importe de las prestaciones anticipadas por las mismas a que, con carácter previo, se proceda a la declaración administrativa o judicial de insolvencia del empresario declarado responsable.

XII. Reducciones y bonificaciones en la cotización

Con la finalidad de ampliar y mejorar la situación de las mujeres trabajadoras, se ampliarán las bonificaciones que actualmente reciben las mujeres en activo. Así, en los supuestos de suspensión de contrato de trabajo por maternidad, cuando se produzca la reincorporación, los empresarios tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante el periodo máximo de un año.

Por otro lado, con el objetivo de que los trabajadores mayores de cincuenta años permanezcan laboralmente activos más allá de la edad de jubilación, los trabajadores contratados de 55 o más años de edad y que tengan una antigüedad en la empresa de cinco o más años, gozarán de una bonificación o reducción gradual de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo en lo que se refiere a la incapacidad temporal, hasta cumplir los 65 años. Dicha medida comenzará a hacerse efectiva a partir del 1 de enero de 2002, de forma que las bonificaciones o reducciones de la cuota patronal por contingencias comunes sean del 50 por 100 respecto de los trabajadores de 60 años, aumentando gradualmente de modo que a los 65 años de edad alcancen el 100 por 100. Las reducciones deberán extenderse sucesivamente hasta que sean de aplicación a las cotizaciones del colectivo de trabajadores con más de 55 años.

Asimismo, y con la finalidad de incentivar la prolongación en la actividad laboral a los trabajadores que alcancen la edad legal de jubilación, se exonerará del pago de cotizaciones sociales por contingencias comunes, salvo en lo que se refiere a la incapacidad temporal, para los trabajadores que voluntariamente decidan la continuidad o la reiniciación de la actividad laboral, tengan una edad superior a 65 años y acrediten 35 años efectivos de cotización; en el caso de que no se acreditara en la fecha del cumplimiento de los 65 años, la exoneración se iniciará a partir de dicha acreditación.

XIII. Previsión Social Complementaria

Se considera necesario introducir modificaciones en el marco regulador vigente. Deberá estudiarse la actual situación de los planes de pensiones de empleo a fin de potenciar los mismos, lo que supondrá facilitar la incorporación de las Pymes y de los empresarios individuales a planes de promoción conjunta o en su caso propio. Se mejorará la interacción de los planes de pensiones de empleo con la negociación colectiva, lo que deberá realizarse en el marco del diálogo social, y se concretará la definición de las contingencias previstas en la normativa de planes de pensiones. Entre otras cuestiones, se abordará la problemática de las comisiones de control, se analizará con detalle el papel de la negociación colectiva y se modernizarán las posibilidades de gestión e inversión de los fondos de pensiones en el contexto de la Unión Europea.

XIV. Comisión de Seguimiento

Se constituirá una Comisión integrada por las partes firmantes para el análisis y seguimiento del Acuerdo y, en general, de la evolución del sistema de la Seguridad Social. Esta Comisión se constituirá en el plazo máximo de un mes y aprobará sus propios procedimientos, realizando sus funciones durante la vigencia del Acuerdo para lo cual contará con los medios y recursos precisos que facilitará la Administración.

XV. Duración del Acuerdo

El Acuerdo extenderá su vigencia hasta el año 2004, salvo para las medidas o supuestos en los que se establece específicamente un límite diferente.

UGT no suscribió el Acuerdo

Como se ha indicado al comienzo de este epígrafe, el sindicato UGT decidió no suscribir el Acuerdo, por entender que en el mismo no se recogían aspectos fundamentales de la propuesta sindical referidos a las necesidades más urgentes de cobertura de la protección social, ni se aseguraba la viabilidad futura del sistema de pensiones públicas, y más concretamente las medidas relacionadas con los puntos 1 (separación de las fuentes de financiación), 4 (jubilación anticipada) y 5 (modificación del sistema de cálculo de la base reguladora).

UGT consideró que el plazo de doce años para culminar la separación de las fuentes de financiación pone en riesgo la estabilidad del sistema, cuya preservación hubiera exigido un plazo máximo de seis años. En cuanto a la jubilación anticipada a partir de los 60 años para quienes no hayan cotizado antes de 1967, queda restringida a los trabajadores en paro, a partir de los 61 años y cuyo cese en el trabajo se haya producido por causa que no les sea imputable, con lo que queda en manos del empleador la posibilidad de jubilación anticipada para estos trabajadores. Por otra parte, el Acuerdo no resuelve el grave problema de los trabajadores que quedan en paro a partir de los 52 años sin posibilidad de encontrar un nuevo empleo. Finalmente, UGT no consideraba asumible el compromiso implícito recogido en el Acuerdo de aumentar los años exigidos para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones a partir de 2003, con la consiguiente disminución en la prestación de los futuros pensionistas.

3.4. Previsión social complementaria: la exteriorización de los compromisos por pensiones

La Recomendación 14.ª del Pacto de Toledo recogía expresamente que el sistema público de Seguridad Social podría completarse voluntariamente mediante sistemas de ahorro y protección social y aconsejaba abordar la ordenación de la previsión social

complementaria como elemento de consolidación del modelo de protección social, así como la mejora de los incentivos fiscales dirigidos a la promoción de dicho sistema complementario.

Estos sistemas alternativos de previsión social pueden instrumentarse mediante planes de pensiones, contratos de seguro o planes de previsión gestionados por mutualidades de previsión social y cubrir contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento.

En el caso de los planes de empleo promovidos y financiados en su totalidad o en parte por una empresa o grupo de empresas para proporcionar protección social a sus empleados, la legislación se remonta a la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y fondos de pensiones, al RD 1307/1988, de 30 de octubre y a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados. Posteriormente se constituyó en 1996, en el Congreso de los Diputados, una Ponencia de estudio sobre los sistemas privados de previsión social cuyo trabajo desembocó en una Proposición no de ley aprobada por el Parlamento el 10 de febrero de 1998.

La Ley 30/1995 establece que los compromisos por pensiones asumidos por las empresas con sus empleados en materia de jubilación, invalidez y fallecimiento deben instrumentarse mediante fórmulas de gestión externa.

Nuevo aplazamiento del compromiso de exteriorización

El plazo para la exteriorización se fijó inicialmente en tres años y debía finalizar en mayo de 1999. Pero el retraso en la aprobación del desarrollo reglamentario necesario supuso una demora hasta el 1 de enero de 2001, plazo que también resultó insuficiente debido a las complicaciones técnicas y administrativas inherentes al proceso de exteriorización. Es por ello que las organizaciones sindicales UGT y CCOO y las confederaciones empresariales CEOE y CEPYME llegaron al acuerdo de proponer al Gobierno la prórroga de dicho plazo hasta el 16 de noviembre de 2002, lo cual se ha recogido en la disposición adicional 25.ª de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

En lo que se refiere a los compromisos a los que afecta esta obligación, la Ley señala que éstos engloban las obligaciones legales y contractuales que supongan el otorgamiento de prestaciones y que

cubran cualquiera de las contingencias referidas a jubilación, invalidez o fallecimiento, no estando sometidas a exteriorización las prestaciones no dinerarias.

Las empresas obligadas a exteriorizar son todas aquellas personas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, que tengan nacionalidad española, domicilio en territorio nacional o cuyo principal establecimiento o explotación radique en España, así como personas físicas que hayan asumido con sus trabajadores compromisos por pensiones en los términos referidos anteriormente. También se incluyen las comunidades de bienes y demás entes que, aún carentes de personalidad jurídica, sean susceptibles de asumir con sus trabajadores compromisos por pensiones. Se prevé la posibilidad de exceptuar de esta obligación a los bancos y cajas, las compañías de seguros y las sociedades y agencias de valores.

El personal afectado es todo aquel que presta servicios en virtud de relación laboral, incluidas las de carácter especial, y se extiende a personas en situación de excedencia o suspensión del contrato o incluso a personas con la relación laboral extinguida, pero con las que la empresa mantenga compromisos. Igualmente, afecta a empleados jubilados y beneficiarios de prestaciones, hayan sido o no empleados de la empresa. Por otra parte, mientras no se produzca la exteriorización, deberá mantenerse la efectividad de los compromisos por pensiones y el cobro de las prestaciones causadas en los términos estipulados entre la empresa y los trabajadores hasta que se integren plenamente en un plan de pensiones, en un contrato de seguro o en ambos.

Los compromisos de prestaciones sociales en los convenios

Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales[137], el número de convenios registrados a 31 de diciembre de 2000, con efectos económicos a dicho año, ascendió a 3.945, de los cuales, 3.015 convenios (el 76,4 por 100) contenían cláusulas de complementos de prestaciones sociales (1.083 convenios de jubilación, 968 de invalidez, 236 de viudedad, 147 de orfandad y 223 de establecimiento de planes de pensiones).

[137] MTAS, *Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo* (Avance año 2000).

Del número total de trabajadores en dichos convenios colectivos (7.862.814 personas), el 69,3 por 100 (5.450.314 trabajadores) estarían afectados por dichas cláusulas de complementos de prestaciones sociales (2.313.555 trabajadores con complementos a la jubilación, 1.983.831 a la invalidez, 627.446 a la viudedad, 511.162 a la orfandad, 4.519.489 al accidente de trabajo y enfermedad profesional, y 176.062 al establecimiento de planes de pensiones.

Aumento de los planes de pensiones

A lo largo del año 2000 se ha producido un incremento en el número de planes de pensiones del conjunto de los tres sistemas (cuadro III-38) del 9,3 por 100, siendo el sistema de empleo el que ha experimentado un mayor incremento, el 14,3 por 100, seguido del sistema individual, 9,0 por 100 y disminuyendo el del sistema asociado en un 17,4 por 100. El número de partícipes de los fondos de pensiones del sistema de empleo se ha incrementado a lo largo del año 2000 en un 24,7 por 100, porcentaje que supone un aumento de 91.871 partícipes. El sistema individual experimentó un incremento de 788.845 partícipes y el sistema asociado, por su parte, ha perdido 3.847 partícipes a lo largo del año. En lo que respecta al patrimonio de los fondos de pensiones, los datos se presentan en el cuadro III-39.

El seguro de vida como instrumento de exteriorización

El segundo instrumento para la exteriorización de los compromisos por pensiones es el contrato de seguro colectivo sobre la vida, que deberá formalizarse a través de la correspondiente póliza de seguro en cuyo condicionado general se hará constar expresamente y de forma destacada que la póliza instrumenta compromisos por pensiones y, por tanto, está sujeta al régimen previsto para ello. A 31 de diciembre del año 2000, el patrimonio gestionado en primas de seguros de vida colectivos era de 1,4 billones de pesetas correspondientes a un número de pólizas de 65.903, de las cuales, 16.777 son consecuencias del proceso de exteriorización[138].

El papel de las mutualidades

Este aseguramiento de compromisos por pensiones puede efectuarse también con mutualidades de previsión social que actuarán como instrumento de previsión social empresarial.

[138] Datos suministrados por ICEA (Investigaciones Cooperativas de Entidades Aseguradoras)

CUADRO III-38

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

Fechas	Número de planes de pensiones							
	Sistemas			Variaciones			Total	
	Individual	Empleo	Asociado	Individual trim./año	Empleo trim./año	Asociado trim./año	Variación trim./año	Sistemas
31/12/99	511	1.035	190	89	270	35	394	1.736
31/03/00	520	1.055	171	9	20	–19	10	1.746
30/06/00	518	1.071	159	–2	16	–12	2	1.748
30/09/00	519	1.115	172	1	44	13	58	1.806
31/12/00	557	1.183	157	38	68	–15	91	1.897
Var. año 2000	9,0%	14,3%	–17,4%	46	148	–33	161	9,3%
Partícipes de los fondos de pensiones								
Fechas	**Sistemas**			**Variaciones**			**Total**	
	Individual	**Empleo**	**Asociado**	**Individual trim./año**	**Empleo trim./año**	**Asociado trim./año**	**Variación trim./año**	**Sistemas**
31/12/99	3.623.507	371.648	76.448	669.757	55.103	–49	724.811	4.071.603
31/03/00	3.756.578	382.060	73.223	133.071	10.412	–3.225	140.258	4.211.861
30/06/00	3.884.024	386.414	74.072	127.446	4.354	849	132.649	4.344.510
30/09/00	3.968.459	391.147	71.187	84.435	4.733	–2.885	86.283	4.430.793
31/12/00	4.412.352	463.519	72.601	443.893	72.372	1.414	517.679	4.948.472
Var. año 2000	21,8%	24,7%	–5,0%	788.845	91.871	–3.847	876.869	21,5%

Fuente: Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social (INVERCO).

Las mutualidades de previsión social acumulan en la actualidad unos activos superiores a 2,7 billones de pesetas, con unos ingresos por cuotas de unos 300.000 millones de pesetas anuales y con más de 2 millones de personas asociadas.

La evolución del desarrollo y extensión de los sistemas complementarios de pensiones de naturaleza colectiva se presenta en el cuadro III-39.

El desarrollo de la previsión social se ha visto impedido por no haberse producido hasta la fecha un consenso social al respecto. En lo que se refiere a las mutualidades continúan existiendo además determinadas deficiencias de carácter técnico-legislativo que se manifiestan de modo evidente en el terreno fiscal.

En cualquier caso, la exteriorización de los compromisos por pensiones que tiene que realizarse, como se ha dicho, antes del 16 de noviembre de 2002, se presenta como un paso más dentro de un proceso que debería llevar a la consolidación del modelo constitucional.

CUADRO III-39

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO GESTIONADO POR LOS FONDOS DE PENSIONES

(Importes en millones de pesetas)

Año	Planes de pensiones		
	Sistema individual	Sistema empleo	Sistema asociado
1990	170.108	348.839	15.896
1991	287.628	503.332	22.804
1992	426.064	642.843	29.950
1993	629.941	760.448	42.021
1994	788.753	892.249	50.662
1995	1.049.282	1.020.900	63.266
1996	1.512.686	1.304.961	84.343
1997	2.045.242	1.494.690	105.614
1998	2.713.793	1.677.809	127.615
1999	3.148.903	1.969.072	139.795
2000	3.583.075	2.556.050	134.154

Nota: Las mutualidades y entidades de previsión social voluntaria gestionaron 2,8 billones de pesetas en el año 2000.

Fuente: Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social (INVERCO).

La previsión social complementaria en el Acuerdo de Pensiones

El Acuerdo sobre el Desarrollo del Sistema de Seguridad Social, de 9 de abril de 2001, avanza en la temática relativa a la previsión social complementaria estableciendo los siguientes puntos concretos que, aunque señalados en el epígrafe anterior de este capítulo, conviene ahora destacar:

- Necesidad de abordar el marco regulador vigente con objeto de, valorando la situación actual, introducir modificaciones al mismo.

- Estudiar la actual situación de los planes de pensiones de empleo a fin de potenciarlos, facilitando su desarrollo e implantación.

- Facilitar la incorporación de las Pymes, empresarios individuales y trabajadores a planes de empleo de promoción conjunta o, en su caso, propios.

- Mejorar la interacción de los planes de empleo con la negociación colectiva compatibilizando el ámbito supraempresarial con los acuerdos en el de la empresa.

- Concretar la definición de las contingencias previstas en la normativa de planes de pensiones.

- Estudiar la situación de la previsión social complementaria con el propósito de proponer las mejoras necesarias que permitan su adaptación permanente a la realidad en que se desenvuelve.

- Abordar la problemática de las comisiones de control de Planes y Fondos de Pensiones, facilitando que en determinados supuestos la negociación colectiva establezca criterios al respecto.

- Se analizará con detalle el papel de la negociación colectiva en materia de Planes y Fondos de Pensiones.

- Deberán modernizarse las posibilidades de gestión e inversión de los Fondos de Pensiones en el contexto de la Unión Europea.

- El desarrollo de los trabajos y conversaciones que se van a desarrollar en esta materia, con atención especial a la mejora de la interacción de los planes de pensiones de empleo con la negociación colectiva, deberá realizarse en el marco del diálogo social.

El seguro de dependencia

Dentro de la materia de previsión social complementaria y en la consideración del paulatino envejecimiento de la población española, se puede situar una figura que todavía no ha tenido desarrollo en España, pero que cabe pensar lo tendrá en plazo cercano. Se trata del denominado seguro de dependencia, que cubre la necesidad de cuidados esenciales y de atenciones integrales para la vida ordinaria, no sólo a las personas de mayor edad, sino también para las grandes discapacidades cuando, en ambos casos, no puedan valerse por sí mismas.

El Gobierno, hasta finales de 2000, no ha presentado un informe que permita debatir su articulación, previsiblemente en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, y que pueda ser consensuado por los agentes sociales[139]. La experiencia de otros países, como el Reino Unido o Alemania, donde el seguro de dependencia se financia vía cotizaciones, puede servir de punto de partida.

Cuestión paralela a la implantación y desarrollo del seguro de dependencia es su repercusión como nuevo yacimiento de empleo del que prioritariamente se verían favorecidas las mujeres cuyo trabajo de atención a personas dependientes tendría que quedar adecuadamente profesionalizado.

El citado Acuerdo de Pensiones también dedica un apartado a la dependencia, como quedó reflejado en el epígrafe 3.3, fenómeno que, según recoge el texto, está adquiriendo una dimensión inédita y cuya solución exige del esfuerzo de todas las

[139] El tema es ciertamente complejo puesto que se trata básicamente de determinar un modelo que permita acogerse al espectro más amplio posible de la sociedad y no sólo al colectivo de rentas más altas. Por ello, será oportuno plantearse las opciones desde los puntos extremos, esto es, desde la financiación a cargo totalmente de los Presupuestos del Estado o de aportaciones a empresas (aseguradoras) privadas.

Administraciones y de respuestas imaginativas en diversos órdenes.

Resumidamente, se considera necesario, al respecto, abrir un periodo de análisis y debate social sobre cómo debe garantizarse la atención a la dependencia en España y el papel que ha de jugar el sistema de protección social.

Es importante destacar el compromiso de, en el marco del Acuerdo, constituir una Comisión de Trabajo con la participación de los ámbitos competentes de las tres Administraciones Públicas, con la finalidad de llevar a cabo un análisis y elaborar las propuestas adecuadas sobre el marco jurídico en el que ha de incardinarse la cobertura de las situaciones de dependencia, así como la elaboración de las líneas básicas de actuación en esta materia, cuyos trabajos deberán estar finalizados antes del 30 de junio del año 2002.

4. INMIGRACIÓN, MERCADO DE TRABAJO E INTEGRACIÓN SOCIAL

4.1. Los perfiles de una nueva realidad

Una de las vertientes con repercusiones sociales más importantes de la denominada globalización y de la permeabilidad de las fronteras es el aumento de la inmigración económica, un fenómeno que ha existido siempre pero que a finales del siglo XX ha cobrado unas dimensiones sin precedentes, planteando interrogantes de todo tipo, desde los jurídico-económicos a los planteamientos éticos y culturales. En el ámbito de la Unión Europea, la creciente presión migratoria ha puesto en evidencia el dilema al que se han tenido que enfrentar recientemente los Estados miembros, entre optar por mantener la visión de que la Unión puede continuar resistiendo las presiones migratorias, o aceptar que la inmigración va a continuar y debe regularse adecuadamente. Esta última es la tesis que se ha ido abriendo paso, exigiendo un esfuerzo importante de cooperación entre los países para intentar maximizar los efectos positivos de la inmigración en la Unión Europea, tanto para los propios migrantes como para los países receptores.

Hacia una política comunitaria de inmigración

A partir del Tratado de Amsterdam, quedó establecida la competencia comunitaria en materia de inmigración y asilo, mientras que en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere[140], en octubre de 1999, se aprobaron los elementos para una política común de la Unión Europea en materia de asilo e inmigración que, junto con el plan de acción aprobado por el Consejo en Viena en 1998[141], forman la base de un programa de trabajo para la Comisión y los Estados miembros. Las orientaciones para el debate sobre una futura política europea común de asilo e inmigración han sido marcadas recientemente por la Comisión Europea[142] que aborda la política de integración en el contexto establecido en Tampere, a saber, sobre la base del trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión y el fomento de la diversidad. La lucha contra la inmigración ilegal, las relaciones con los países de origen y de tránsito y, especialmente, la dimensión humanitaria en la política de asilo se identifican como componentes de la política global sobre migración sobre los que los países miembros deberán adoptar respuestas coordinadas. Pero además de esos elementos, la Comisión Europea propone examinar la manera en que las cuestiones complejas relacionadas con la admisión de migrantes económicos, que apenas se abordaron por encima en el Consejo de Tampere, se desarrollen en el marco de una política comunitaria de migración. Asimismo, insiste en la importancia de desarrollar políticas adecuadas dirigidas a fomentar la integración de los migrantes, incluidos los que ya residen en la Unión Europea, y a luchar contra el racismo y la xenofobia.

Aunque se haya incorporado con retraso a una tendencia ya imperante con anterioridad en otros países de nuestro entorno comunitario, también España ha pasado en apenas unas décadas de ser un país emisor de emigrantes a un lugar de acogida de inmigrantes procedentes del extranjero. Al finalizar el año 2000, el total de extranjeros que residen en España —tanto comunitarios como extracomunitarios—, incluyendo los resultados de la última regularización extraordinaria, representan el 2,3 por 100 de la población total. Se trata de una com-

[140] SN 200/99, Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999.

[141] DO C 19 de 23.01.1999.

[142] Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2000) 757 final, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una política comunitaria de migración.

posición de la población todavía muy diferente a la de países como Alemania, Francia, Bélgica o el Reino Unido que ostentan porcentajes de población extranjera residente notablemente superiores (cuadro III-40).

Sin embargo, mientras el saldo migratorio[143] anual en la UE-15 se ha estabilizado en torno a una media del 2,2 por 1.000 en el año 2000, sólo la regularización extraordinaria que tuvo lugar en España ese mismo año elevaría su saldo migratorio real al 7,5 por 1.000. Es decir, aunque las dimensiones de este fenómeno no hayan alcanzado las magnitudes ya adquiridas en otros países, una característica del proceso español es la progresión del fenómeno inmigratorio en muy po-

CUADRO III-40
LA INMIGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
(Residentes no nacionales en porcentaje, saldo migratorio por 1.000 habitantes, solicitudes de asilo y nacionalizaciones en número)

Países	No nacionales (1998)	Saldo Migratorio (2000)	Solicitantes de asilo (1998)	Nacionalizaciones (1997)
UE-15	**5,1**	**2,2**	**228.757**	**360.800**
Bélgica	8,9	2,0	21.965	:
Dinamarca	4,7	1,9	5.699	5.482
Alemania	8,9	2,4	98.644	83.027
Grecia	1,5	2,4	1.990	930
España	1,5	1,0 (1)	6.639	9.801
Francia	6,2	0,8	22.374	83.676
Irlanda	3,0	6,6	4.630	294
Italia	1,5	3,5	6.940	:
Luxemburgo	34,9	11,4	1.709	761
Holanda	4,3	3,3	45.217	59.831
Austria	6,6	1,4	13.805	15.792
Portugal	1,8	1,1	355	1.364
Finlandia	1,6	0,6	1.272	1.439
Suecia	5,9	2,6	12.844	28.875
Reino Unido	4,0	2,3	46.015	37.010

(1) No se considera en el saldo migratorio del año 2000 los resultados de la regularización extraordinaria, que elevaría el saldo en el año de referencia hasta el 7,5 por 1.000.
Fuentes: Eurostat, *Migration, 2000*; *Statistiques en bref,* Theme 3-16/2000.

[143] La diferencia entre inmigrantes que llegan y emigrantes que salen del país, por mil habitantes. Eurostat, «Premières estimations démographiques pour 2000», *Statistiques en bref*. Theme 3-16/2000.

cos años y la falta de experiencia anterior como país receptor, con la que sí contaban otros países centroeuropeos.

El impacto social de la inmigración se ha hecho sentir sobre todo en relación a la creciente presencia de ciudadanos no comunitarios que han llegado a España en búsqueda de oportunidades de vida y trabajo. A finales de los noventa es esta inmigración, denominada económica, la que más ha aumentado en nuestro país, que no ha pasado por las mismas fases que otros países europeos y presenta características diferenciales importantes respecto a ellos. En efecto, la importante presencia de extranjeros en algunos países de la Unión Europea se ha ido conformando a lo largo de varias décadas, generando diversas respuestas en las sucesivas fases del proceso. Así, tras las primeras oleadas de inmigrantes demandados por el desarrollo económico en los años 60 y 70, la reacción tras las segundas oleadas de inmigración procedente de terceros países durante los 80 fue la implantación de una política muy restrictiva de acceso por motivos de trabajo, por lo que la población extranjera en los años 90 ha seguido engrosando en estos países a través de la institución de asilo y refugio. En España, esta última vía de entrada es residual: en el año 2000 se produjeron 7.037 solicitudes de asilo, mientras que, como se verá más adelante, se han multiplicado las solicitudes de permisos de trabajo y residencia tanto por la vía general como, sobre todo, a través del mecanismo de los contingentes —sistema que, en el ámbito de la Unión Europea únicamente es aplicado en Italia— y de las regularizaciones extraordinarias. Estas diferencias entre las legislaciones apuntan a otra característica del fenómeno de la inmigración en España: su carácter de país de tránsito para muchos emigrantes, que intentan obtener aquí la regularización como paso previo para poder acceder con más facilidad a otros países de la Unión Europea.

Las cifras oficiales, que como tales no consideran el volumen indeterminado de la inmigración no regularizada asentada en España, hablan por sí solas de esta evolución. Si en 1975 se registraban 165.289 extranjeros residentes, al finalizar el año 2000 España contaba ya con 938.783 residentes extranjeros registrados (gráfico III-22). En cuanto a la distribución por origen de la población extranjera en España, tradicionalmente han sido mayoría los ciudadanos de régimen comunitario, un amplio colectivo al margen de la problemática jurídico-administrativa que rodea al fenómeno de la inmigración por disfrutar del régimen

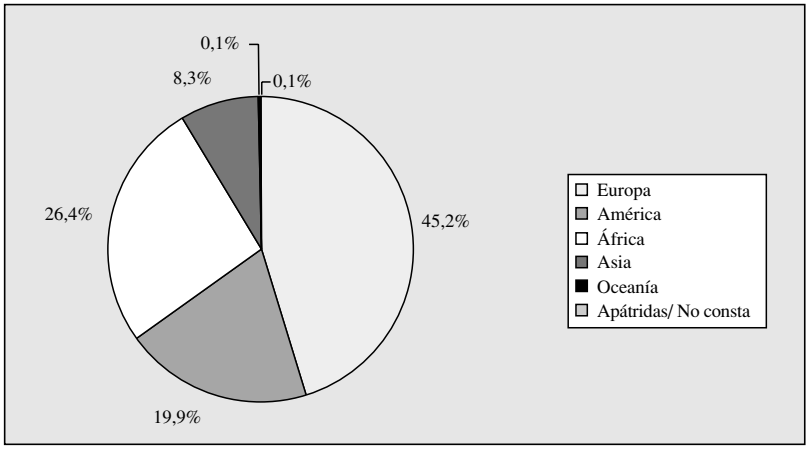
de libre circulación de personas y trabajadores aplicable a los ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, a 31 de diciembre de 1999, los ciudadanos no comunitarios (515.955) superaban ya a los comunitarios (422.828)[144]. No hay que olvidar el incremento constante de las nacionalizaciones registradas anualmente que, considerando solamente la última década, han oscilado entre las 7.033 concedidas en 1990 y las 16.361 registradas en 1999. Entre un año y otro se ha reconocido la nacionalidad española a un total de 87.322 personas, siendo la mayoría de los solicitantes procedentes del continente americano (63,3 por 100 en 1999), especialmente nacionales en origen de Perú, Argentina, Colombia y República Dominicana.

Otra característica del fenómeno en nuestro país es que, a pesar de que en términos porcentuales la representación de los extranjeros es escasa, su concentración en algunas Comunidades Autónomas

GRÁFICO III-22

EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA POR CONTINENTE DE PROCEDENCIA

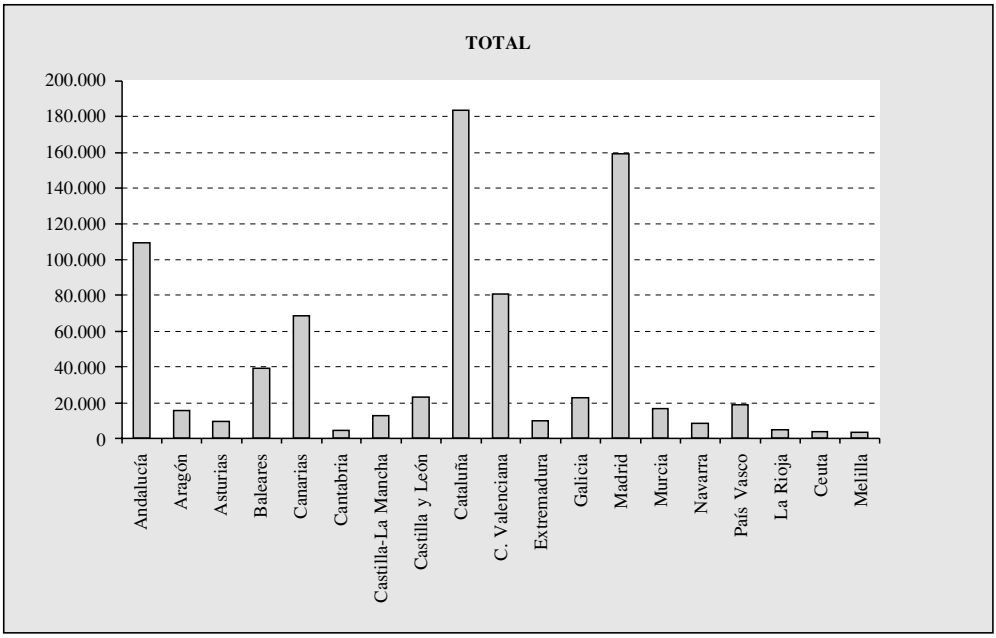
(Porcentajes sobre el total a 31 de diciembre de 1999)



Incluye total residentes registrados, tanto comunitarios como extracomunitarios.
Fuente: MTAS, *Anuario de Migraciones,* 2000.

[144] Estas son las cifras oficiales que proporciona el Anuario de Migraciones a partir de los ciudadanos censados, por lo que hace a los de régimen comunitario, o con un permiso de residencia y, en su caso, de trabajo en vigor, por lo que respecta a los ciudadanos extracomunitarios.

GRÁFICO III-23
DISTRIBUCIÓN DE LOS RESIDENTES EXTRANJEROS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Fuente: MTAS, *Anuario de Migraciones,* 2000.

(gráfico III-23), ciudades, pueblos e incluso barrios plantea demandas de políticas específicas de integración en todos los órdenes de la acción pública a fin de evitar conflictos sociales, de los que los sucesos ocurridos en el año 2000 en El Ejido constituyen una extrema e indeseable expresión.

4.2. INMIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO

El trabajo es uno de los principales alicientes que mueven a la inmigración al mismo tiempo que su obtención se convierte en el puente imprescindible para la regularización y la integración social de los extranjeros. Son dos los principios que rigen la política laboral española con respecto a los ciudadanos de terceros países: el de preferencia de mano de obra nacional, en función de la situación nacional de empleo, y el de regularización de la situación la-

boral en el país de origen. En virtud del primero, al que sin embargo no están sujetos los nacionales de algunos países con los que España ha tenido especiales vínculos históricos, a partir del año 1993 se fue consolidando la práctica de la aprobación de contingentes anuales de trabajadores, un mecanismo no contemplado en la normativa hasta su inclusión en el Reglamento de 1996 y su asunción definitiva en la Ley Orgánica 4/2000, como principal vía para articular la concesión de permisos de trabajo por cuenta ajena. Como lo definía el Reglamento de 1996, se trataba de una potestad del Gobierno «con el objeto de garantizar la cobertura de aquellas ofertas de empleo no atendidas por el mercado nacional de trabajo».

Regularización desde el país de origen: principio preferente

El segundo principio que rige la política española de inmigración laboral es la exigencia de que el extranjero que desea establecerse en España debe haber tramitado el permiso de trabajo y residencia en su país de origen. Este requisito, orientado a desincentivar las situaciones de entrada irregular en el país, responde a un esquema ideal que en la práctica raramente se cumple. En la realidad la mayoría de los inmigrantes entran en España por otras vías: la mayor parte de las veces como turistas, otras como estudiantes, en ocasiones a través de un trabajo de temporada. Una vez en el país, intentan obtener un contrato de trabajo que les permita acceder al permiso de trabajo y de residencia. Así, la entrada legal puede transformarse en permanencia irregular, o regularizarse si se accede a un trabajo, o bien la regularidad puede ser en muchos casos una cuestión transitoria o intermitente a lo largo de años de estancia en función de si se consigue la renovación de los permisos o no. La entrada ilegal, franqueada normalmente a través de mafias organizadas, no es ni mucho menos la vía de acceso más frecuente de los inmigrantes a nuestro país, si bien sí es la que mayor repercusión ha adquirido en los medios de comunicación y la que acarrea consecuencias humanas más trágicas, de las que han sido testigos las costas españolas en demasiadas ocasiones durante los últimos años. Como se desprende de esta diversidad de situaciones, el planteamiento del debate sobre la inmigración en términos de separación tajante entre regularidad/irregularidad de la situación de trabajo y residencia es un intento simplificador de una realidad mucho más compleja.

Situaciones irregulares: vías coyunturales de acceso al permiso de trabajo

Los principios que presiden la política laboral de inmigración no han podido, pues, garantizar una adecuada canalización de los flujos migratorios mientras que, por el contrario, ha ido en aumento la población extranjera en situación jurídicamente irregular y socialmente expuesta, muchas veces, al riesgo de explotación y marginación. La respuesta que se ha dado ha sido de dos tipos, ambos de carácter coyuntural. Por una parte, la convocatoria de sucesivos procesos de regularización extraordinaria (en 1986, tras la aprobación de la LOE, en 1991, en 1996 tras la aprobación del RELOE y las que se han sucedido en el año 2000, tras la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y la que se encuentra en curso en estos momentos, tras la reforma de la Ley Orgánica 4/2000 por la Ley Orgánica 8/2000). Por otra, la conversión del contingente anual, en la práctica, en una regularización encubierta, dado su aprovechamiento por personas que en realidad ya se hallaban en España en situación irregular pero que, precisamente por vivir ya aquí, podían optar más fácilmente a una oferta de trabajo y que, sin embargo, para la tramitación del correspondiente permiso, deben regresar a su país para desde allí solicitar el visado correspondiente.

Desde el punto de vista de la oferta de trabajo, ciertamente en España existen trabajos u ocupaciones en determinados sectores para los que, al igual que ocurre en otros países desarrollados, por su dureza o las condiciones físicas en que se desenvuelven, es difícil encontrar candidatos en un país como el nuestro en que el acceso a la educación se ha generalizado y que ha conocido una mejora importante del nivel de vida en las últimas décadas. De momento no ha aflorado en España la carencia de mano de obra en empleos tecnológicos derivados de la sociedad de la información que en países como Alemania ha llevado a adoptar medidas específicas de captación de trabajadores extranjeros. Al problema de la localización de un número suficiente de candidatos para esos trabajos bastante «ingratos» en determinadas épocas, se añadiría la dificultad de responder a una oferta de empleo que implique movilidad geográfica o un desplazamiento desde su localidad de origen. Por ello algunos sectores y actividades recurren a la inmigración procedente del extranjero para cubrir o completar sus necesidades de mano de obra.

Concentración de extranjeros en «nichos laborales»

La fijación desde 1993 del contingente anual de autorizaciones para el empleo de trabajadores extranjeros no comunitarios se justifica precisamente en la existencia de esos «nichos laborales», de demandas que no son atendidas por el mercado de trabajo nacional y en la necesidad de normalizar la actividad laboral desarrollada por trabajadores extranjeros en estos sectores. La interrelación entre el sistema de contingentes y esa demanda de mano de obra no cubierta han contribuido a consolidar la concentración de trabajadores extranjeros en determinadas actividades económicas. Desde aquel año hasta 1999, el total de autorizaciones anuales ha variado entre las 5.000 y las 30.000, con los paréntesis del año 1996 y el año 2000 en los que se produjeron sendas regularizaciones extraordinarias. Los criterios de distribución sectorial y territorial de las autorizaciones han variado año a año pero, en todo caso, no han servido ni para satisfacer las necesidades principalmente estacionales de algunos sectores ni para facilitar el permiso de trabajo a un volumen importante de extranjeros que ya se encuentran en España, muchos encuadrados en la economía sumergida. A modo de ejemplo, el número de solicitudes presentadas para el contingente de 1999 (97.028) casi triplicó el de las concedidas finalmente (39.711) (cuadro III-41).

CUADRO III-41

CONTINGENTE Y AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS POR SECTORES, 1993-2000

Año	Agricultura y ganadería	Construcción	Servicio doméstico	Otros servicios /sectores	Total
1993					5.197
1994*	5.000	1.000	11.000	3.600	20.600
1995	7.855		12.091		19.946
1996	Proceso de documentación de ciudadanos extranjeros en situación irregular (permisos de trabajo y residencia: 14.055; permisos de residencia: 24.691)				
1997	7.333	494	14.241	2.517	24.585
1998	8.700	941	14.662	3.792	28.095
1999	8.987	1.576	18.393	1.044	30.000
2000	Proceso de regularización extraordinaria RD 239/2000, cerrado a 21 de diciembre: 137.454 solicitudes resueltas favorablemente** (datos a diciembre de 2000).				

* Cupos fijados inicialmente aunque el total final se amplió a 25.604

** Las solicitudes denegadas exclusivamente por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999 (en total 61.365) están siendo revisadas de oficio conforme a los requisitos previstos en el Real Decreto 142/2001, de 16 de febrero, estando previsto que el proceso termine antes del 3 de junio de 2001.

Fuente: MTAS.

Uno de los principales problemas de la legislación de extranjería, que no se ha visto mejorado por las recientes reformas, ha sido la estrecha vinculación de la concesión de la autorización para el trabajo al criterio de situación nacional de empleo y de inexistencia de candidatos desempleados (españoles, comunitarios o extracomunitarios en situación regular), para la cobertura de determinados puestos a efectos de la fijación del contingente anual. Los datos de los Servicios Públicos de Empleo no sirven a este respecto de orientación, habida cuenta de que el porcentaje de mediación que ostentan es aproximadamente del 15 por 100 de la oferta total de empleo. Además, es evidente que aunque exista desempleo en determinados sectores de actividad algunas ocupaciones son rechazadas por los propios desempleados por distintas razones (condiciones especialmente duras, exigencia de movilidad geográfica, etc.), por lo que la existencia de paro registrado es un criterio insuficiente por sí solo para estimar las necesidades reales de mano de obra. Por tanto, como ya apuntaba el CES en su Informe 1/2000 sobre la movilidad geográfica, es preciso mejorar la conexión entre la oferta y la demanda, también desde el punto de vista de las necesidades reales de los sectores y de las posibilidades de respuesta a las mismas mediante una intermediación regularizada del trabajo de los inmigrantes.

Complejidad del procedimiento administrativo

A las dificultades que caracterizan al contingente anual como vía coyuntural de regularización se añade la complejidad del procedimiento administrativo que conduce a la concesión de los permisos de residencia y trabajo por la vía general, regulado en el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España, aprobado por Real Decreto 155/1996[145], de 2 de febrero, que se encuentra en trámite de modificación a partir de la reciente reforma de la citada Ley.

El total de permisos de trabajo concedidos anualmente a extranjeros no comunitarios ha oscilado en los últimos años entre los 94.955 concedidos en 1992 y los 99.337 en 1999[146] (cuadro III-42). En total, sin contar los efectos de la regularización extraordinaria

[145] Véase CES, Dictamen 3/1995 sobre el Proyecto de RD, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España.

[146] Hay que tener en cuenta que estas cifras no recogen únicamente permisos de trabajo iniciales sino también renovaciones.

CUADRO III-42

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EXTRACOMUNITARIOS EN ESPAÑA POR CONTINENTE DE ORIGEN, 1991-1999

(Total de extranjeros extracomunitarios con permiso de trabajo en vigor a 31 de diciembre de cada año)

Nacionalidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Europa	56.558	9.922	8.700	6.399	7.004	8.392	9.785	11.394	11.540
África	51.155	66.884	53.483	56.383	65.223	78.383	86.876	91.370	82.962
América del Norte	6.056	4.266	3.348	2.475	3.053	3.083	3.151	3.015	2.703
América Centro y Sur	37.708	37.641	32.165	37.389	42.893	51.709	52.395	56.072	50.471
Asia	19.083	20.326	17.471	18.862	20.613	24.640	26.202	28.476	24.885
Oceanía	251	176	136	134	121	121	137	135	110
Apátridas	222	206	134	138	131	162	201	181	167
Total	**171.033**	**139.421**	**115.437**	**121.780**	**139.038**	**166.490**	**178.747**	**190.643**	**172.838**

Fuente: MTAS, *Anuario de Migraciones,* 2000.

del año 2000, el volumen total de trabajadores extracomunitarios en España con permiso de trabajo en vigor ha variado entre los 171.033 registrados tras la regularización de 1991, presentando un mínimo de 115.437 en 1993 y un máximo de 190.643 en 1998, siendo 172.838 los trabajadores extranjeros extracomunitarios en situación regularizada a 31 de diciembre de 1999, es decir, justo antes de la apertura de la regularización extraordinaria que tuvo lugar en el año 2000 y que se comentará más adelante.

Dentro de ese grupo de trabajadores con permiso de trabajo en vigor a 31 de diciembre de 1999, por continentes de origen eran los africanos los que componían el colectivo más numeroso, el 48 por 100 del total, con 82.962 personas, de las cuales el 78,6 por 100 procedía de Marruecos. Les siguen los ciudadanos de América Central y del Sur, que representaban el 29,2 por 100 del total de trabajadores extranjeros no comunitarios, mientras que los asiáticos componían el 14,4 por 100 y los europeos de países no comunitarios suponían el 6,7 por 100 (cuadro III-42). El 90,5 por 100 trabajaban por cuenta ajena (cuadro III-43).

En cuanto a los sectores de actividad, el sector servicios ocupa a una gran mayoría de los trabajadores extranjeros: el 61 por 100. El 18,7 por 100 trabajaba en el sector agrario, el 7,3 por 100 en industria y el 9,4 por 100 en construcción. Cabe apreciar, además,

CUADRO III-43

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES EXTRACOMUNITARIOS EN ESPAÑA

(Distribución por continente de origen, sexo, dependencia laboral y sector de actividad, a 31 de diciembre de 1999)

Nacionalidad	Total 1999	Dependencia laboral		Sexo		Agrario	No agrario			No clasif.
		C. ajena	C. propia	Hombres	Mujeres		Industria	Construc.	Servicios	
Europa	11.540	10.596	944	7.077	4.463	1.092	1.189	1.810	7.267	182
África	82.962	75.570	7.392	68.101	14.861	29.476	7.448	11.847	29.816	4.375
América del Norte	1.983	1.612	371	1.194	789	19	280	25	1.610	49
América Centro y Sur	51.191	48.564	2.627	18.460	32.731	1.192	2.458	2.330	44.068	1.143
Asia	24.885	19.967	4.918	15.331	9.554	516	1.227	362	22.373	407
Oceanía	110	84	26	71	39	3	2	2	84	4
Apátridas	167	150	17	144	23	17	20	20	103	4
Total	172.838	156.543	16.295	110.378	62.460	32.315	12.624	16.396	105.321	6.164

Fuente: MTAS, *Anuario de Migraciones,* 2000.

una acusada tendencia a la concentración de los trabajadores por continentes de origen y sector de actividad, de modo que el 91,2 por 100 de los ocupados extranjeros en el sector agrario procedían de África, al igual que el 72,3 por 100 de los trabajadores extranjeros en la construcción. En cambio, aunque en el sector servicios la población trabajadora está más repartida, el 86,0 por 100 de los que provienen de América Central y del Sur, en una gran mayoría mujeres, trabajan en este sector. No obstante, en los últimos dos años (entre 1997 y 1999) se ha podido apreciar una ligera relocalización de trabajadores procedentes de América Central y del Sur en el sector agrícola, lo que ha aumentado sensiblemente su presencia proporcional en relación a los africanos en ese ámbito de actividad.

Distribución territorial y sectorial de los trabajadores extranjeros

Por Comunidades Autónomas de destino, el 53 por 100 de los trabajadores extranjeros se repartía entre Cataluña y Madrid, mientras el 11,6 por 100 trabajaba en Andalucía y el 4 por 100 en Murcia. Es posible apreciar una cierta concentración de trabajadores extranjeros dentro de las Comunidades Autónomas en determinados sectores, que suelen coincidir con las referencias conocidas en cuanto a necesidades de mano de obra en determinadas épocas y circunstancias, sobre todo en el sector agrario y servicios:

— Madrid y Cataluña presentan un predominio acusado del sector servicios, si bien en el caso catalán la construcción

y el sector agrario también ocupan a bastantes trabajadores.

— En Andalucía, el sector agrario y los servicios se reparten casi por igual a prácticamente todos los extranjeros.

— En Valencia es el sector servicios seguido del agrícola el que más trabajadores ocupa, mientras que en Murcia el 77 por 100 de los extranjeros trabajan en el sector agrario.

— En Canarias, donde reside el 4 por 100 de los trabajadores extranjeros, el sector servicios ocupa al 85 por 100 del total.

Las necesidades de mano de obra que se han detectado en algunos sectores han llevado a éstos a recurrir a trabajadores extranjeros cuando los incentivos del empleo no logran atraer trabajadores de otras regiones. El proceso de convocatoria de trabajadores y tramitación de los permisos de trabajo cuando éstos no existen o no están en vigor, es complejo y requiere una antelación y una planificación adecuada que, de no producirse, puede contribuir, entre otras causas, a la presencia de contrataciones irregulares en el marco de la economía sumergida. Existen, no obstante, experiencias de agilización del reclutamiento de trabajadores extranjeros en el sector agrícola, en el que en diciembre de 1997 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provinvicas, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y los agentes sociales para facilitar las migraciones internas y, en defecto de mano de obra nacional, agilizar la captación de trabajadores extranjeros interesados mediante la firma de convenios de colaboración con algunos países.

Resultados de la regularización extraordinaria del año 2000

Tanto la vía general como la vía de contingentes se han mostrado insuficientes para responder a la necesidad de regularización del importante colectivo que ya vive en España pero que no cuenta con las correspondientes autorizaciones de residencia/trabajo. La política de regularizaciones extraordinarias es un exponente de la insuficiencia de esas vías. Como ya se ha mencionado, ha tenido hasta el momento cuatro episodios, en los años 1985, 1991, 1996 y, la más reciente, en el año 2000, cuya revisión parcial seguirá en curso hasta junio de 2001. La apertura de un proceso de regulari-

zación extraordinaria en el año 2000[147] fue una de las previsiones contempladas por la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Sus destinatarios eran los extranjeros que se encontraran en territorio español antes del 1 de junio de 1999 y acreditaran haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo o que lo hubieran tenido alguna vez en los últimos tres años. Desbordando todas las previsiones, el total de solicitudes presentadas a diciembre de 2000 ascendió nada menos que a 246.089, lo que proporciona una idea del volumen de extranjeros en situación irregular en aquel momento (cuadro III-44).

Dicho proceso de regularización se dio por concluido el 21 de diciembre del año 2000, abarcando el 92,1 por 100 de las solicitudes, es decir, las resueltas hasta aquella fecha, pues el 7,9 por 100 seguía en trámite. Del total de 226.570 solicitudes resueltas[148], 137.454 recibieron respuesta favorable al ser aprobadas (el 60,7 por 100), pero 82.845 fueron denegadas (el 36,6 por 100) y 6.271 archivadas (2,8 por 100).

En relación con los inmigrantes que han tenido una resolución favorable, 125.317 (91,2 por 100) han recibido permisos de trabajo y residencia, 7.757 (5,6 por 100) sólo de residencia, y 4.380 (3,2 por 100) tarjeta comunitaria. De las de trabajo, la mayoría son para el sector agropecuario, y en menor medida, para los sectores hostelero, doméstico y construcción, siendo las provincias con más demanda Madrid (22 por 100), Barcelona (21 por 100), Almería (8,4 por 100) y Murcia (7,5 por 100).

Respecto a las solicitudes denegadas, un 71 por 100 se acordó por no acreditar haber llegado a España antes de junio de 1999, y aproximadamente un 27 por 100 por no haber presentado la solicitud de un permiso de trabajo o/y residencia antes del 31 de marzo de 2000. Las solicitudes que fueron denegadas exclusivamente por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999

[147] RD 239/2000, por el que se establece el procedimiento para la regularización de los extranjeros prevista en la disposición transitoria primera de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

[148] Datos de la Delegación del Gobierno para la Inmigración y Extranjería, a 22 de diciembre del año 2000.

CUADRO III-44

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2000

(Solicitudes presentadas distribuidas por Comunidades Autónomas y sector de actividad)

CC.AA.	Agrario y Pesquero	Construcc.	Hostelería	Servicio doméstico	Comercio al por menor	Industria alimentaria	Resto de actividades	Sin clasificar	Total
Andalucía	18.837	1.577	1.398	2.185	2.181	30	3.771	11.726	41.705
Aragón	1.896	522	363	527	102	45	669	324	4.448
Asturias	—	—	—	—	—	—	—	1.198	1.198
Baleares	316	958	776	609	444	8	713	627	4.451
Canarias	778	2.131	694	765	655	—	4.474	4.524	14.021
Cantabria	33	39	106	136	203	4	113	184	818
Castilla-La Mancha	1.111	382	183	432	60	6	632	568	3.374
Castilla y León	438	476	331	519	186	21	342	434	2.747
Cataluña	5.309	5.720	3.409	3.518	729	177	9.550	32.602	61.014
Ceuta	12	57	12	17	27	1	60	1.004	1.190
C. Valenciana	4.792	3.144	340	2.163	59	8	8.264	4.058	22.828
Extremadura	1.757	62	269	180	194	—	162	38	2.662
Galicia	91	86	315	283	314	5	253	1.411	2.758
Madrid	842	6.770	3.720	10.862	1.585	83	7.919	22.926	54.707
Melilla	—	73	12	59	39	2	36	1.197	1.418
Murcia	14.895	643	427	863	135	194	566	666	18.389
Navarra	1.066	321	211	405	44	22	172	187	2.428
País Vasco	112	378	285	461	186	7	222	744	2.395
La Rioja	570	227	80	167	11	40	231	105	1.431
Total	**52.855**	**23.566**	**12.931**	**24.151**	**7.154**	**653**	**38.149**	**84.523**	**243.982**

Fuente: MTAS, *Anuario de Migraciones,* 2000.

serán revisadas de oficio, sin que el inmigrante tenga que realizar ningún tramite, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en virtud de su disposición transitoria cuarta. Los requisitos de esta nueva revisión se han recogido en el Real Decreto 142/2001, de 16 de febrero[149], y tras ella, 61.365 personas

[149] RD 142/2001, de 16 de febrero, por el que se establecen los Requisitos para la regularización prevista en la disposición transitoria 4.ª de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de febrero, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Los requisitos para el proceso de revisión son: haber presentado solicitud de regularización en aplicación del procedimiento del RD 239/2000, haber sido objeto de denegación por el motivo exclusivo de no haber acreditado el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999, encontrarse en España antes del 4 de marzo de 2001, fecha de entrada en vigor del RD 142/2001, y haber acreditado el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en el RD 239/2000, además de no existir contra el interesado una resolución de expulsión vigente, ni encontrarse incurso en causa de expulsión o prohibición de entrada en España, contemplada en el RD 239/2000, y que se recoja como tal en la Ley Orgánica

más verán revisado su caso. Las solicitudes denegadas deberán ser nuevamente examinadas en el plazo más breve posible, debiendo concluir el proceso, como máximo, en tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 142/2001, de 16 de febrero, es decir, de 3 de marzo a 3 de junio del año 2001.

Un colectivo cambiante

Además de las dimensiones aproximadas de la bolsa de irregulares en ese momento, las solicitudes de regularización extraordinaria dan cuenta de la cambiante distribución por nacionalidades del colectivo. Así, poniendo en relación las diez primeras nacionalidades de residentes legales con las diez primeras nacionalidades solicitantes de permiso de trabajo conforme a la regularización extraordinaria, cabe constatar diferencias. Los países que encabezaban en número de nacionales el total de extranjeros extracomunitarios de régimen general residentes en España eran, en 1999: Marruecos (129.224), Perú (21.302), China (20.033), República Dominicana (17.302), Argentina (9.213), Estados Unidos (8.581), Filipinas (11.575) Cuba (4.663), Colombia (6.608), India (6.707), Ecuador (6.308) y Argelia (5.739). Las solicitudes de regularización extraordinaria en 2000 estaban encabezadas por marroquíes (59.249), seguidas por ecuatorianos (20.063), nacionales de Colombia (13.277), Argelia (7.166), Rumanía (7.938), Pakistán (5.910), Senegal (6.274) y Ucrania (3.247). Estas diferencias dan cuenta del protagonismo adquirido en muy pocos años, por ejemplo, por la presencia de los nacionales de Ecuador, así como por nacionales de antiguas repúblicas de la Unión Soviética y de países bajo su influencia (Rumanía) y, por parte del África subsahariana, Senegal.

Como ya se ha adelantado, las regularizaciones extraordinarias no suponen sino un fracaso de las vías ordinarias como respuesta a la canalización de los flujos migratorios. En el año 2000 y comienzos del 2001 se han puesto en marcha experiencias innovadoras que, de articularse adecuadamente, podrían constituir una alternativa más racional que las actuales para la ordenación de las migraciones. Destacan en esta dirección la firma de convenios de colaboración entre el Gobierno español y algunos de los países

8/2000 de 22 de diciembre, ni tener proceso judicial penal en curso, salvo que el interesado acredite el archivo definitivo de la causa judicial o el sobreseimiento libre de las actuaciones.

(Ecuador, Polonia y Marruecos) con mayor volumen de emigrantes que eligen España como destino, en un intento de canalizar los flujos de trabajadores requeridos por la economía española, propiciando la regulación de su situación desde el país de origen, un sistema que exige profundizar en las vías existentes de la cooperación internacional al desarrollo.

Trabajadores extranjeros y afiliación a la Seguridad Social

Cabe referir, por último, algunos datos que pueden servir de aproximación a los efectos en el sistema de Seguridad Social de la incorporación regularizada de los extranjeros al mercado de trabajo español. Atendiendo a la afiliación a la Seguridad Social, el total de trabajadores extranjeros (comunitarios y extracomunitarios) afiliados se ha visto incrementado entre 1998 y el año 2000 en un 96,8 por 100, con 222.349 nuevos afiliados. En diciembre del año 2000 se hallaban registrados 452.097 afiliados extranjeros, el 68,9 por 100 de los cuales (311.706), eran ciudadanos no comunitarios. Entre estos últimos, y atendiendo a la nacionalidad de los trabajadores, destacaba por volumen de afiliados el colectivo oriundo de Marruecos (22,5 por 100), seguido de los nacionales de Ecuador (5,7 por 100), Perú (4,1 por 100) y China (3,5 por 100).

Entre los dos años de referencia, el mayor incremento de afiliados ha correspondido a los extranjeros no comunitarios, que han aumentado un 136,7 por 100 entre diciembre de 1998 y diciembre del año 2000, pasando de 131.699 personas afiliadas en 1998 a 311.706 en diciembre del año 2000, siendo evidente en este incremento el efecto surtido por la regularización extraordinaria del último año. En consonancia con la distribución por nacionalidades de las autorizaciones para el trabajo concedidas con dicha regularización, el mayor aumento, en términos absolutos, se ha producido entre los afiliados de origen marroquí, con 64.704 nuevos afiliados, seguidos por los ciudadanos de origen ecuatoriano, con más de 22.000 afiliados nuevos, y después los colombianos, con 8.587 más.

Atendiendo a los regímenes, el mayor incremento se ha producido en el Régimen General, al que se han incorporado 138.000 afiliados extranjeros en los dos últimos años, siendo la mayor parte (109.353) de países extracomunitarios. El siguiente régimen con mayor incremento de afiliados extranjeros ha sido el Agrario, con

55.503 (50.982 ciudadanos no comunitarios), seguido del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con un aumento de17.698 afiliados extranjeros, en este caso 10.019 de ellos proceden de países de la Unión Europea. El tercer régimen donde mayor incremento han tenido los afiliados extranjeros no comunitarios ha sido el de Empleados del Hogar.

En el futuro, las respuestas a la integración laboral de los inmigrantes deberán responder a la diversidad de situaciones y trayectorias personales de estos trabajadores. Hay un tipo de inmigración con finalidad temporal, incluso de carácter transfronterizo y orientada a actividades marcadamente estacionales como la agricultura, que exige respuestas coyunturales para facilitar unas condiciones de vida y trabajo dignas en el lugar de destino, así como una mayor agilidad de los trámites burocráticos desde el lugar de origen, incluyendo facilidades al retorno, lo que deberá propiciarse con la firma de convenios de colaboración con los países de origen. Sin embargo, estas respuestas coyunturales no son útiles para hacer frente a la regularización estable de un importante volumen de inmigrantes con vocación de permanencia, que en no pocas ocasiones han conseguido traer a sus familias pero que por las características de los empleos en que se ocupan incurren en una situación de regularidad «intermitente» que no facilita su integración.

4.3. La reforma de la regulación de los derechos y libertades de los extranjeros en España

El año 2000 ha estado marcado por la reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España, una Ley que había demostrado su inadecuación a un fenómeno pluridimensional como el de la inmigración, que ha superado con los años ampliamente las previsiones de una norma excesivamente centrada en los aspectos de control y sanción y en la que —pese a su rúbrica— la vertiente de los derechos y libertades de los extranjeros en España estaba poco desarrollada. Como es sabido, la reforma de la Ley se ha sucedido en dos episodios, con la aprobación de sendas leyes orgánicas (la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y la posterior Ley

Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000) que han dado lugar en el transcurso de su aprobación a uno de los debates sociopolíticos más controvertidos de los últimos años.

La inmigración, fenómeno permanente y global

Sin entrar en la comparación pormenorizada entre la LO 4/2000 y la LO 8/2000, uno de los aspectos más relevantes del balance final de la reforma es la superación del planteamiento restringido de la LO 7/1985 y la apreciable mejoría que en relación a la misma, en conjunto, y a pesar de las limitaciones introducidas por la LO 8/2000 en relación a la LO 4/2000, se ha producido en la situación jurídico legal de los extranjeros en España. Por primera vez, aunque con retraso, la normativa española afronta la inmigración como fenómeno permanente y global y se aplican criterios democráticos de reconocimiento de derechos a un colectivo con caracteres y necesidades específicos. Ello viene a suponer el reconocimiento de la tendencia de una sociedad que va siendo cada vez más multicultural y en la que el fenómeno inmigratorio global afecta a todos los órdenes, económico, social y cultural.

Declaración de derechos de los extranjeros

La Ley Orgánica 4/2000 contiene por primera vez una importante declaración de derechos de los extranjeros que, en su redacción inicial suponía una equiparación real con los nacionales incluso en el caso de los extranjeros cuya situación legal no estuviese plenamente regularizada, bastando el requisito del empadronamiento para el ejercicio de algunos de ellos. Si bien la LO 8/2000 introdujo restricciones en este capítulo, en el sentido sobre todo de limitar algunos derechos a los extranjeros en situación regularizada, mantuvo algunos derechos sociales importantes extensibles a todos los extranjeros, principalmente el derecho a la educación obligatoria y la asistencia sanitaria. Respecto a la educación, no obstante, llama la atención la falta de previsión alguna respecto a la educación no obligatoria, así como la ausencia a cualquier referencia al principio de protección a la lengua y cultura originarias.

En cambio, la Ley Orgánica 8/2000 suprimió la extensión generalizada del reconocimiento de otros derechos sociales y políticos, como el de reunión, manifestación y asociación, sindicación y huelga que había introducido la primera, limitando su ejercicio a la obtención de la autorización de estancia o residencia en España, siendo este uno de los aspectos que ha suscitado mayor

controversia social y política. La falta de reconocimiento de vías de participación social a los inmigrantes que no tienen regularizada legalmente su estancia o residencia en España plantea la carencia de vías de interlocución válidas para la solución de conflictos sociales de los que el año 2000 ha sido testigo, como los lamentables sucesos de El Ejido o los encierros de inmigrantes irregulares en iglesias, pudiendo aumentar su indefensión en situaciones de explotación.

En cuanto a los permisos de residencia y trabajo se ha mantenido la opción básica de su interdependencia y de su obtención previa tramitación de la contratación desde el país de origen. La viabilidad de esta opción requerirá, sin embargo, un esfuerzo en la articulación de nuevas funciones de las oficinas consulares que deberán desempeñar tareas de auténticas oficinas de contratación.

Residencia permanente tras cinco años

El principal avance en este campo ha sido la consagración legal por la LO 4/2000 de una figura introducida por el Reglamento de 1996, el derecho a la residencia permanente para los extranjeros que hayan tenido residencia temporal durante cinco años. No obstante, la introducción por la LO 8/2000 del requisito de que la residencia haya sido continuada puede plantear dudas en su aplicación en los casos de periodos de carencia de cobertura legal de la situación de estancia en el caso, bastante habitual, de que no siempre se haya dado la renovación inmediata del anterior permiso de trabajo sino que media un tiempo entre la obtención de uno u otro. El artículo 32 de la LO 8/2000 en el que se regula esta figura remite al desarrollo reglamentario el establecimiento de criterios excepcionales para la no exigibilidad de dicho plazo en supuestos de especial vinculación con España.

Reagrupación familiar, puente para la integración

El reconocimiento legal del derecho a la reagrupación familiar, contemplado ya por primera vez en el Reglamento de 1996, es uno de los aspectos más positivos de la Ley, siendo como es un derecho fundamental reconocido por reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y constituyendo el principal instrumento de arraigo de los inmigrantes en el país de acogida, puente para su integración social y, al mismo tiempo, una de las principales vías de llegada de nuevos inmigrantes, como ha ocurrido en otros países de la Unión Europea en los que ha sustituido a la vía tradicional de inmigración puramente laboral. En relación al procedi-

miento para la reagrupación establecido en el Reglamento de 1996, la LO 8/2000 añadió la exigencia de que el extranjero que ejerce la reagrupación a favor de sus familiares haya residido legalmente un año y tenga autorización para residir al menos otro año.

La regulación del capítulo de infracciones y sanciones dada por la LO 8/2000 se endurece al adoptar como opción básica la posibilidad de aplicación de la expulsión, en lugar de la sanción de multa, del extranjero que se encuentre irregularmente en territorio español. Al margen de ello, la tipificación de las causas de expulsión mejora técnicamente la redacción anterior, reduciendo la anterior presencia de cláusulas abiertas que podían dar lugar a arbitrariedades. Con todo, el contenido más cuestionable de este capítulo es la previsión del procedimiento preferente de expulsión previsto en el artículo 63 de la Ley, realizable en 48 horas, y que supone un importante obstáculo al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y ello aun a pesar de que el inmigrante pueda interponer los recursos pertinentes desde las oficinas consulares de su país de origen una vez producido el retorno. Este procedimiento constituye además toda una excepción en el Derecho comparado europeo, siendo además España el único país europeo que no cuenta con un procedimiento sumario especial de revisión de la orden de expulsión en el plazo de unos días.

La expulsión: necesidad de mejoras

La nueva regulación de los derechos y libertades de los extranjeros en España omite además una definición de los Centros de Internamiento y de la situación de los extranjeros cuya orden de expulsión no ha sido ejecutada, centros estos que han sido objeto de varias recomendaciones específicas del Defensor del Pueblo denunciando graves deficiencias en sus condiciones. Téngase en cuenta que solamente en 1998 se decidió expulsar alrededor de 18.000 personas, de las que apenas unas 4.000 se llevaron a cabo, muchas veces por imposibilidad fáctica grave (coste económico del viaje de retorno e incluso desconocimiento del país de origen, etc.). Esta preocupante situación debería dar lugar a iniciativas dirigidas, por una parte, a mejorar la eficacia de la ejecución de las expulsiones y, por otro lado, a la atención de estas personas desde un punto de vista social.

Especialmente acertada resulta la introducción en la LO 8/2000 del principio de coordinación entre administraciones, si bien se ob-

serva un elevado grado de indefinición en este campo. Las previsiones legales en este punto deberán completarse para ser efectivas con la articulación de programas o planes de ámbito estatal y aplicación a nivel autonómico y local.

Regularización extraordinaria: revisión de solicitudes denegadas

Por último, como ha ocurrido cada vez que se ha aprobado una norma importante en materia de extranjería, la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 8/2000 abría un nuevo proceso de regularización extraordinaria, sin necesidad de presentar nueva documentación para los extranjeros que se encuentren en España y que habiendo presentado solicitud de regularización al amparo de lo previsto en el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, hayan visto denegada la misma, exclusivamente por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999. El desarrollo de esta nueva regularización está planteando muchos problemas, entre otras razones, porque desde algunas organizaciones no gubernamentales se recomendó a los inmigrantes que no pudieran acreditar un año de residencia que no presentaran las solicitudes, inmigrantes que se han encontrado con posterioridad con que si las hubieran presentado hubieran podido optar ahora a esta regularización.

Con todo, entre las principales carencias de la regulación actual, al margen de las ya mencionadas, merece la pena destacar la ausencia de vías para articular el tránsito de la situación irregular a la regular, carencia que reviste especial gravedad por la ya referida inexistencia hasta el momento de vías factibles de contratación legal en el país de origen y por la existencia de una importante bolsa de inmigrantes irregulares en nuestro país, como demuestra la avalancha de solicitudes presentadas ante cada convocatoria de regularización extraordinaria. No se pueden considerar como tales vías de acceso de la situación irregular a la regular, aplicables a la generalidad del colectivo de inmigrantes irregulares, las razones humanitarias, circunstancias excepcionales o la acreditación de la situación de arraigo (art. 31.4) o de colaboración con la justicia (art. 31.7), conforme a los que la Ley Orgánica 8/2000 contempla la posibilidad de otorgamiento de un permiso de residencia temporal. Existe diversidad de opiniones en torno a si la posibilidad de regularización individual en casos de estancia acreditada de cinco años aunque no regularizada y tras la consecución de una oferta de contrato de trabajo (art. 31.4)

constituye una solución adecuada para ese tránsito. En todo caso, se trata de un aspecto directamente relacionado con las características del propio procedimiento de obtención de las autorizaciones que, como se ha mencionado, se caracteriza por su lentitud, complejidad y, consecuentemente, de falta de adecuación a la realidad por lo que deberían estudiarse soluciones a este tipo de problemas desde el punto de vista de la agilización del proceso, un aspecto en el que todavía es posible la introducción de mejoras a través del desarrollo reglamentario.

Importancia del futuro Reglamento

En conjunto, la Ley contiene las numerosas remisiones al futuro Reglamento en aspectos clave, con lo que se confiere una importancia decisiva a la futura norma de desarrollo. Entre los aspectos que se han dejado abiertos destaca la duración de los permisos de residencia temporal de uno a cinco años (art. 31), los mencionados supuestos que dan lugar a la admisión de una regularización individual (art. 31.4), la renovación del permiso de trabajo según circunstancias (art. 38.3.d), así como la composición y funciones del Consejo Superior de Política de Inmigración (art. 68). Este último aspecto, de capital importancia dadas las funciones de este organismo a la hora de establecer las bases y criterios sobre los que se debe asentar una política global en materia de integración social y laboral de los inmigrantes, ha sido ya objeto de regulación específica mediante el reciente Real Decreto 344/2001, de 4 de abril, por el que se crea el Consejo Superior de Política de Inmigración.

4.4. Políticas de integración social

La polémica despertada en torno a la reforma de la legislación de extranjería ha desviado la atención hacia la vertiente jurídica de la situación de los extranjeros en España, contribuyendo a sobredimensionar el problema de la irregularidad y las formas de entrada irregular en el país. En una sociedad como la española, aún poco acostumbrada a convivir en la multiculturalidad, este protagonismo otorgado en el debate social a los aspectos legales de la inmigración puede llevar a identificarla con los fenómenos de irregularidad, marginación, mafias, etc., es decir, con los factores que contribuyen a calificar la inmigración como problema.

Lo cierto es que, al margen de la necesidad de canalizar adecuadamente los flujos migratorios mediante una regulación adecuada y coherente con la del resto de países europeos, la irregularidad representa una porción ínfima en comparación con las dimensiones alcanzadas por el conjunto de extranjeros que viven en España en situación legal. Sin embargo, se trata de un proceso abierto y es previsible que la inmigración siga en aumento, incluso teniendo en cuenta únicamente las vías de acceso regular. Así, el actual proceso abierto de regularización que culmina en junio de 2001 puede implicar la incorporación de entre 70.000 y 80.000 personas más. La posibilidad de que buena parte de las familias de estas personas acudan a la vía de la reagrupación familiar nos sitúa en un horizonte en el que a buen seguro se superará el millón de extranjeros no comunitarios residiendo en España. Por otro lado, como ya se ha adelantado, las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española han vivido un importante aumento, la mayoría reconocidas a ciudadanos de origen latinoamericano.

La perspectiva de una sociedad cada vez más multicultural plantea la necesidad de articular respuestas en el marco de una política integral de inmigración, que favorezca la plena integración en el trabajo y en la convivencia diaria a personas y grupos de costumbres diferentes, que necesitan viviendas, servicios sociales, espacios de expresión, educación, etc. Los retos que plantea la inmigración varían según cómo sea la realidad social y política en la cual surge, pero algunos datos recientes sobre actitudes de los españoles hacia la inmigración son reveladores de la necesidad de actuar en todos los frentes de la integración, y en acciones dirigidas tanto hacia la sociedad de acogida como hacia los inmigrantes.

Actitudes de los españoles hacia la inmigración

Llama la atención, en primer lugar, que en España todavía el 47,2 por 100 de la población[150] no haya tenido nunca relación o trato con inmigrantes, pero que, al mismo tiempo, un tercio de los encuestados considere que las personas procedentes de otros países son demasiadas, mientras un 44,7 por 100 considera que son bastantes, aunque no demasiados. Por otro lado, a principios del año 2000 la inmigración era percibida[151] como el tercer problema prin-

[150] CIS, *Estudio 2383,* Barómetro de febrero de 2000.
[151] CIS, *Estudio 2409,* Barómetro de febrero de 2001.

cipal que existe actualmente en España, tras el paro y el terrorismo. El racismo, en cambio, apenas era considerado un problema, pues apenas el 1,5 por 100 de la población lo mencionaba. Sin embargo, marroquíes y subsaharianos recibían puntuaciones notoriamente peores que el resto de los extranjeros cuando se les proponía como posibles compañeros de trabajo (les importaría mucho o bastante casi al 8 por 100 en el caso de los marroquíes y al 6 por 100 en el caso de los subsaharianos), como vecinos (les importaría mucho o bastante al 10 por 100 en el primer caso y 7 por 100 en el de los segundos), mientras que a la tópica pregunta de si le preocuparía mucho, bastante, poco o nada que un hijo o una hija suya se casara con ciudadanos de este origen más del 25 por 100 respondía que le importaría mucho o bastante en el caso de los marroquíes y más del 22 por 100 en el caso de los oriundos de un país del África subsahariana.

Respecto a los trabajadores extranjeros en España que proceden de países menos desarrollados, un 80,3 por 100 estaba de acuerdo con que estos trabajadores desempeñan trabajos que los españoles no quieren hacer. Pero, al mismo tiempo, el 36,7 estaba de acuerdo con la afirmación de que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles y un 42,2 por 100 opinaba que, al aceptar sueldos más bajos, los trabajadores extranjeros hacen que bajen los salarios de los españoles.

Es decir, la tolerancia es mayor cuando se plantea como principio hipotético que cuando se materializa en situaciones cotidianas y es menor cuando se proyecta sobre colectivos cuya presencia es más evidente y cuya cultura es más desconocida. Son sólo algunos elementos de reflexión a la hora de plantear las necesidades en materia de política de integración en un horizonte próximo de una todavía mayor presencia de extranjeros en España.

Desarrollo del Plan para la Integración Social de los Inmigrantes

La política española de integración de los inmigrantes comenzó a definirse con la aprobación del Plan Interministerial para la Integración Social de los Inmigrantes, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 1994, momento en el cual se había ido fraguando ya en Europa la idea de que las políticas debían dirigirse a una adecuada integración de los inmigrantes, a controlar los flujos para que entrasen tantos inmigrantes como las sociedades de acogida pudieran integrar en buenas condiciones, y a pro-

mover en los países de origen un desarrollo económico que moderara las necesidades de emigrar. Por ello, dicho Plan contemplaba la necesidad de que la respuesta a la inmigración movilice el compromiso y solidaridad de la sociedad civil, y señalaba que la integración de este colectivo se verá garantizada si acceden al ejercicio de sus derechos y obligaciones en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles, a través de las mismas instancias y organismos. Pero para ello, al igual que en Europa, el Plan entiende que sólo deben entrar en España aquellos inmigrantes a los que se les pueda garantizar ese acceso a los derechos sociales y civiles, y esto sólo será posible para aquellos de los cuales se espere que van a incorporarse al mercado laboral y cotizar para mantener el funcionamiento del Estado de Bienestar. Este planteamiento era el mismo que daba lugar al sistema de contingentes autorizados anualmente, según el cual el número de inmigrantes recibidos dependería de la situación del mercado de trabajo español y que, al margen de sus ya comentadas limitaciones, contribuyó a priorizar las tareas de control y el cumplimiento de los trámites burocráticos sobre la necesidad de articular la convivencia mediante medidas de integración.

No se consideró en el Plan, sin embargo, el hecho de que la sociedad española tuviera que adaptarse a la nueva situación, sino que serían sólo los inmigrantes los que habrían de ajustarse a ella. Nada menos cierto si se tiene en cuenta, como se desprende de las breves pinceladas sobre las actitudes hacia la inmigración arriba mencionadas, el escaso grado de contacto cotidiano con extranjeros por parte de los españoles, los arraigados prejuicios en torno a determinadas nacionalidades y la presencia de actitudes que, si no xenófobas, cabría calificar como denotadoras de cierto recelo hacia otras culturas o hacia la idea de compartir sociedad y, sobre todo, trabajo, con los extranjeros.

Cambios en los instrumentos de participación: Foro y Observatorio

La participación y las vías de comunicación e interlocución que faciliten el contacto con la realidad de la inmigración constituyen una parte esencial de la política integral de inmigración, siendo éste el planteamiento que subyacía al Plan Interministerial para la Integración de los Inmigrantes de 1994, el cual, junto con los objetivos de integración, se refería a la creación de organismos nuevos y a los ámbitos de actuación prioritarios para llegar a alcanzar dicha integración. Para ello el Plan contempló dos instrumentos im-

prescindibles: el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes**,** creado por Real Decreto 490/1995, de 7 de abril, cauce de consulta y mediación entre las Administraciones Públicas, las organizaciones sociales y las asociaciones de inmigrantes, y el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), concebido como un macrosistema de información de la Administración del Estado, como herramienta para diagnosticar problemas y orientar las acciones dirigidas al proceso de integración, proporcionando información regular y de calidad.

El Foro es un complemento necesario para que se lleven a cabo las medidas recogidas en el Plan, ya que facilita el intercambio de opiniones entre el colectivo de inmigrantes legalmente establecidos y la sociedad de acogida, formulando propuestas tendentes a la integración de los refugiados, canalizando las de las organizaciones sociales relacionadas con el fenómeno migratorio, y manteniendo el contacto con otros órganos análogos internacionales, autonómicos o locales. En 1998 sufrió algunos cambios[152], como el hecho de que, cuando afecten a la integración social de los inmigrantes, las disposiciones normativas de la Administración General del Estado, los planes y programas de ámbito estatal o carácter general y los anteproyectos de programas presupuestarios, deben ser consultados con carácter preceptivo al Foro. Además, se modificó su composición, incorporando como vocales representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, del Interior y de Administraciones Públicas, por considerarlos necesarios para el adecuado funcionamiento del Foro.

En el año 2000, la LO 4/2000, modificada por la LO 8/2000, introdujo cambios en la regulación del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, planteando la necesidad de su desarrollo en cuanto a composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción administrativa, lo cual ha tenido lugar en abril del año 2001[153]. Su adscripción desde 1998 al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaria General de Asuntos Sociales (en el momento de su creación quedó adscrito al entonces

[152] RD 2816/1998, de 23 de diciembre, por el que se modifica el RD 490/1995, de 7 de abril, de creación del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

[153] RD 367/2001, de 4 de abril, por el que se regula la composición, competencias y régimen de funcionamiento del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

Ministerio de Asuntos Sociales), ha pasado en julio del año 2000 al Ministerio del Interior, a través de la Delegación[154] del Gobierno para la Extranjería e Inmigración[155], ya que se ha procedido a una reorganización con la finalidad de dotar a la estructura orgánica de la Administración General del Estado de los recursos necesarios para hacer frente al fenómeno creciente de la inmigración.

De la misma manera, se ha regulado el Observatorio Permanente de la Inmigración[156], cuya gestión fue atribuida al IMSERSO en 1997, y que ha pasado también a depender del Ministerio del Interior, mediante el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio.

Necesidad de reforzar ámbitos prioritarios de actuación

El Plan contemplaba cuatro ámbitos de actividad prioritarios por ser importantes órdenes de la vida social: educativo y cultural, marco legal, ámbito laboral y profesional, convivencia territorial, así como participación ciudadana, y en su desarrollo estos últimos años se han venido realizando especialmente programas de integración y promoción socio-laboral, que han buscado dar respuesta a las principales necesidades que este colectivo tiene en la sociedad española. En los programas de convivencia territorial se buscaba mejorar el acceso de la población inmigrante a una vivienda digna, valorándose el realojo de inmigrantes que residan en núcleos chabolistas, así como la mejora de condiciones de alojamiento para trabajadores de temporada. Para atender las necesidades educativas y culturales, se diseñaron programas de aprendizaje de lenguas y culturas españolas, que favorezcan la integración social de los inmigrantes y el intercambio y el conocimiento mutuo de las culturas. Se buscaba también fomentar la presencia de inmigrantes en asociaciones y organizaciones, a través de medidas de participación ciudadana. Sin embargo, se trata de aspectos en los que conviene reforzar las iniciativas adoptadas[157] ya que, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía son insuficientes los recursos administrati-

[154] RD 683/2000, de 12 de mayo

[155] RD 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Entre otras cosas, en este Real Decreto se establecen las competencias de la Delegación de Gobierno para la Extranjería e Inmigración.

[156] RD 345/2001, de 4 de abril, por el que se regula el Observatorio Permanente de la Inmigración.

[157] IMSERSO, *Documento de Desarrollo del Plan para la Integración Social de los Inmigrantes para el Bienio 1998-2000*.

vos, humanos y económicos para desarrollar plenamente las medidas de integración social a favor de los inmigrantes.

GRECO: planteamientos de futuro

Finalmente, cabe anticipar que tras la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería a través de la LO 8/2000, el Gobierno anunció la realización de un Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración (Programa GRECO), con la intención prioritaria de abordar la cuestión de la extranjería desde una perspectiva global, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 30 de marzo del año 2001[158], para los años 2001-2004, habiendo sido informado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. El Programa GRECO se estructura en cuatro líneas básicas de actuación: diseño global y coordinado de la inmigración como fenómeno deseable para España en el marco de la Unión Europea, integración de los residentes extranjeros y de sus familias que contribuyen activamente al crecimiento de España, regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia, y mantenimiento del sistema de protección para refugiados y desplazados. Cada una de estas líneas básicas se desarrollan en 23 acciones para poder ejecutarlas, que a su vez se estructuran en 72 medidas concretas.

Con independencia del desarrollo del Programa GRECO y de las posibilidades que ha introducido la nueva legislación de extranjería, es evidente que la integración social de los inmigrantes y la adaptación a la multiculturalidad, con las consecuencias que revisten en todos los órdenes, siguen representando uno de los mayores retos de la sociedad española en estos momentos. Un reto que justifica la necesidad de mantener vivo el debate que se encuentra abierto en estos momentos en torno a la inmigración, con el fin de reflexionar de forma constructiva sobre las respuestas a un fenómeno en el que se ha avanzado bastante en la detección de los problemas y las carencias —tanto desde el punto de vista normativo como de las políticas que competen a los poderes públicos— y menos en la definición de soluciones estructurales.

[158] Resolución de 17 de abril de 2001, de la Delegación de Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros del día 30 de marzo de 2001, por el que se aprueba el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración.

ÍNDICES

ÍNDICE DE CUADROS

CAPÍTULO I

I.1. Comercio y producción mundial, 1992-2001 11
I.2. Indicadores socioeconómicos internacionales, 1992-2001 15
I.3. Cuadro macroeconómico, 1997-2000 24
I.4. Agregados macroeconómicos, 2000..... 25
I.5. Actividad, empleo y productividad por sectores, 1998-2000..... 28
I.6. Medidas de reforma y liberalización de 23 de junio de 2000 30
I.7. Previsiones económicas para España y la Unión Europea, 2001 32
I.8. Evolución de la actividad económica por sectores, 1998-2000..... 35
I.9. Actividad, empleo y productividad por Comunidades Autónomas, 2000..... 56
I.10. Aportación de la demanda interna y del sector exterior al crecimiento del PIB, 1987-2000..... 70
I.11. Balanzas por cuenta corriente y de capital, 1999-2000 72
I.12. Balanza comercial, 1994-2000 74
I.13. Comercio de mercancías de España con la Unión Europea, 1985-2000..... 76
I.14. Comercio exterior por Comunidades Autónomas, 2000 78
I.15. Créditos FAD autorizados en 2000 79
I.16. Balanza financiera, 1999-2000..... 84
I.17. Componentes del IPC, 2000..... 89
I.18. Principales rúbricas del IPC, 2000..... 89
I.19. IPC por Comunidades Autónomas, 2000..... 91
I.20. Índice de Precios al Consumo Armonizado por grupos, 2000..... 95
I.21. Principales cambios del nuevo IPC..... 97
I.22. Tipos de interés reales de España, Alemania y Francia, 1992-2000 . 105
I.23. Necesidad de financiación de las Administraciones Públicas, 1999-2000..... 111

I.24. Déficit (–) o superávit (+) de caja no financiero, 1999-2000 113
I.25. Ingresos no financieros del Estado, 1999-2000 114
I.26. Pagos no financieros del Estado, 1999-2000 117
I.27. Necesidad (–) o capacidad (+) de endeudamiento del Estado, 1999-2000 119
I.28. Financiación neta recibida por el Estado, 1999-2000 120
I.29. Presupuesto de ingresos consolidados del Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social y otros Organismos, 2000-2001 122
I.30. Presupuesto de gastos consolidados del Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social y otros Organismos, 2000-2001 124
I.31. Políticas de gasto (capítulos I a VIII), 2000-2001 126
I.32. Medidas fiscales de estímulo al ahorro en el IRPF, 2000 129
I.33. Proyecciones presupuestarias. Actualización del Programa de Estabilidad, 2000-2004 132
I.34. Proyecciones presupuestarias. Programa de Estabilidad, 2000-2004. 133
I.35. Análisis de sensibilidad, 2000-2004 133
I.36. Algunos indicadores presupuestarios de las Comunidades Autónomas, 2000 136
I.37. Previsiones de la Comisión Europea. Informe de Primavera (abril 2001) 140
I.38. Recomendaciones de la Comisión para el año 2001 150
I.39. Tipos impositivos implícitos en la Unión Europea, 1980-1996 155
I.40. Calendario para la armonización fiscal del ahorro acordado en la Cumbre de Lisboa del 19 de junio de 2000 156
I.41. Impuestos especiales y tipos de IVA aplicados a los carburantes por litro en la Unión Europea, 2000 158
I.42. Programa Plurianual a favor de la empresa y el espíritu empresarial 160
I.43. Reparto de votos decidido en la Cumbre de Niza. Tratado de Niza . 172
I.44. Bloqueo de los países grandes por población. Tratado de Niza 173

CAPÍTULO II

II.1. Evolución del empleo por grandes etapas económicas, 1977-2000... 199
II.2. Estimaciones y previsiones sobre el empleo y el paro en la Unión Europea, 1999-2001 204
II.3. Tasas de actividad, empleo y paro, por sexo y grupos de edad, 2000 207
II.4. Crecimiento del empleo por sectores de actividad, 1998-2000 208
II.5. Ocupados por situación profesional, 1999-2000 210

II.6. Asalariados contratados por una empresa de trabajo temporal, por sexo y edad, 1999-2000 217
II.7. Asalariados temporales, total y contratados por una ETT, por ramas de actividad de la empresa usuaria, 2000 219
II.8. Ocupados y asalariados por tipo de jornada y sexo, 1999-2000 221
II.9. Tasas de temporalidad de los asalariados por tipo de jornada, 1995-2000 222
II.10. Tasas de empleo y paro por Comunidades Autónomas, 1999-2000 .. 224
II.11. Contratos registrados por modalidad de contratación, 1997-2000 228
II.12. Contratos de puesta a disposición por modalidad, 1996-2000 235
II.13. Contratos indefinidos: fomento y conversiones, 1999-2000 237
II.14. Contratos de duración indefinida por modalidad, 1997-2000 238
II.15. Contratos registrados por duración, 1997-2000 239
II.16. Acciones de inserción realizadas en el año 2000 272
II.17. Alumnos parados formados y colocados por familia profesional, gestión INEM y Comunidades Autónomas, 2000 321
II.18. Alumnos parados formados y colocados, gestión Comunidades Autónomas, 1999-2000 322
II.19. Beneficiarios de prestaciones por desempleo, por sexo, edad y tipo de prestación, 1998-2000 338
II.20. Impacto del programa de renta activa de inserción por Comunidades Autónomas 341
II.21. Beneficiarios de la renta activa de inserción, en el mes de diciembre de 2000, por Comunidades Autónomas 343
II.22. Gasto medio total por beneficiario y gasto medio en prestaciones por beneficiario, niveles contributivo, asistencial y subsidio REASS, 1994-2000 346
II.23. Convenios colectivos, 1996-2000 358
II.24. Número de convenios, de empresas y de trabajadores, 1986-2000 ... 360
II.25. Convenios colectivos por sectores de actividad, 2000 362
II.26. Composición de las comisiones negociadoras por convenios, trabajadores y representantes, 2000 363
II.27. Convenios colectivos según ámbito temporal, 2000 364
II.28. Convenios colectivos registrados con vigencia superior a un año, 1993-2000 365
II.29. Número de convenios y trabajadores por Comunidades Autónomas, 2000 367
II.30. Número y tipos de convenios (de empresa/otros ámbitos) por Comunidades Autónomas, 2000 368
II.31. Convenios, empresas y trabajadores afectados según ámbito funcional, 2000 369

II.32. Convenios sectoriales de ámbito provincial y nacional, 1992-2000.. 370
II.33. Convenios colectivos de grupo de empresas, 1993-2000..... 371
II.34. Aumentos salariales pactados en convenio, 1985-2000 376
II.35. Convenios, trabajadores afectados y aumento salarial pactado por ámbito funcional y de registro, 2000 377
II.36. Convenios, empresas y trabajadores afectados y aumento salarial pactado por sectores de actividad, 2000 378
II.37. Convenios de empresa, trabajadores afectados, jornada, disminución media y aumento salarial por tramos de número de trabajadores, 2000..... 379
II.38. Convenios afectados y aumento salarial pactado por Comunidades Autónomas, 2000..... 380
II.39. Convenios, empresas, trabajadores afectados, jornada y aumento salarial por tramos de jornada pactada, 2000 381
II.40. Convenios, trabajadores, ámbito de vigencia y aumento salarial, 2000..... 382
II.41. Convenios, trabajadores afectados y aumento salarial pactado por tramos de aumento salarial, 2000..... 383
II.42. Convenios con cláusula de salvaguarda o revisión salarial, 2000..... 384
II.43. Ganancia media por trabajador y mes, por sectores de actividad, 2000. 385
II.44. Ganancia media por hora trabajada, por sectores de actividad, 2000..... 386
II.45. Ganancia media por trabajador y mes por Comunidad Autónoma, 2000..... 387
II.46. Cláusulas salariales por ámbito funcional, 2000 389
II.47. Cláusulas relativas a incentivos ligados a la productividad, 1995-2000 391
II.48. Convenios colectivos de ámbito distinto del empresarial con cláusula de inaplicación del régimen salarial, 2000 392
II.49. Jornada pactada en convenios colectivos, 1989-2000..... 393
II.50. Convenios, empresas, trabajadores afectados y jornada según tramo de jornada pactada, 2000..... 395
II.51. Jornada media efectiva anual por actividad y tamaño del centro, 2000..... 396
II.52. Jornada media efectiva por trabajador según tipo de jornada, 1998-2000 397
II.53. Cláusulas sobre horas extraordinarias pactadas en convenios, 2000. 398
II.54. Horas extraordinarias realizadas, 1992-2000..... 399
II.55. Ganancia por hora normal y extraordinaria por sector y categoría, 2000..... 400
II.56. Cláusulas pactadas relativas a jornada, 2000..... 401

II.57. Cláusulas pactadas relativas a empleo, 2000 404
II.58. Cláusulas relativas a contratación, 2000 408
II.59. Cláusulas sobre clasificación profesional, 2000 417
II.60. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja, 1996-2000 424
II.61. Actividad de la Inspección de Trabajo en el área de la prevención de riesgos laborales, 1996-2000 437
II.62. Principales indicadores de huelga, 1991-2000 446
II.63. Cierres patronales, 1991-2000 450
II.64. Conciliaciones colectivas terminadas por tipo de solución, 1998-2000 450
II.65. Conflictos tramitados en el SIMA en 1998, 1999 y 2000 453
II.66. Actividad desarrollada por los órganos autónomos de solución de conflictos colectivos de las Comunidades Autónomas, 2000 460
II.67. Resultados de las conciliaciones-mediaciones colectivas ante los órganos autónomos de solución extrajudicial de conflictos, 2000 461

CAPÍTULO III

III.1. Alumnado por niveles de enseñanza, 1995/1996-1999/2000 479
III.2. Número medio de alumnos por unidad en educación infantil/ preescolar y educación primaria/EGB, 1995/1996-1999/2000 480
III.3. Alumnos universitarios por área de enseñanza y ciclo, 1994-2000 ... 486
III.4. Tasa de empleo y paro según nivel de formación alcanzado y sector de estudios, 2000 490
III.5. Atención primaria del Insalud. Indicadores de actividad, 1998-2000 512
III.6. Atención especializada del Insalud. Indicadores de actividad, 1998-2000 512
III.7. Gasto farmacéutico público por servicios de salud, 1995-2000 530
III.8. Stock de viviendas, viviendas iniciadas y crecimiento del stock, por Comunidades Autónomas 542
III.9. Licencias municipales de obra, 1996-2000 543
III.10. Índice de costes del sector de la construcción, 1996-2000 543
III.11. Precio por metro cuadrado de vivienda, 1996-2000 546
III.12. Hipotecas inmobiliarias, 1996-2000 549
III.13. Accesibilidad de la vivienda, 1992-2000 550
III.14. Precios de la vivienda y salarios medios, 2000 551
III.15. Accesibilidad a la vivienda por Comunidades Autónomas, 1999-2000 552

III.16. Actuaciones del Plan de Vivienda 1998-2001. Programa 2000 554
III.17. Construcción de viviendas según promotor, 1996-2000 556
III.18. Evolución de viviendas libres y protegidas visadas, 1999-2000 557
III.19. Porcentaje de ayuda directa a la entrada sobre precios totales de vivienda según tipo de vivienda 560
III.20. Gestión de residuos según diferentes sistemas recogidos en el Plan Nacional de Residuos Urbanos: datos de 1996 y objetivos para 2000 y 2006 570
III.21. Transferencias de recursos hídricos con origen en el río Ebro 573
III.22. Distribución de la inversión prevista en el PHN 577
III.23. Reparto territorial de la inversión del PHN 578
III.24. Estructura del gasto total y del gasto medio por hogar, 1998 585
III.25. Actitudes ante algunos objetos de equipamiento, 2000 586
III.26. Evolución del valor de compra de alimentos, 1994-1999 587
III.27. Distribución de las consultas y reclamaciones presentadas a las Asociaciones de Consumidores, 2000 592
III.28. Motivos de los usuarios para comprar en Internet 596
III.29. Medios de pago utilizados en el comercio electrónico 598
III.30. Tarifas de llamadas, servicios y operadores telefónicos, 1996-2000. 605
III.31. Situación de licencias de tercera generación en los Estados miembros 610
III.32. 21 acciones emblemáticas de INFO XXI, 2001-2003 612
III.33. Gastos de protección social en los países de la Unión Europea, 1993-1998 630
III.34. Indicadores de protección social en los países de la Unión Europea 632
III.35. Gastos de protección social en España por funciones 634
III.36. Evolución del PIB y de los gastos por funciones de la Seguridad Social, 1997-2001 643
III.37. Evolución de las pensiones contributivas de la Seguridad Social y su importe mensual, 1997-2000 648
III.38. Planes y fondos de pensiones 664
III.39. Evolución del patrimonio gestionado por los fondos de pensiones ... 665
III.40. La inmigración en la Unión Europea 670
III.41. Contingente y autorización para el empleo de ciudadanos extranjeros no comunitarios por sectores, 1993-2000 676
III.42. Evolución del número de trabajadores extracomunitarios en España por continente de origen, 1991-1999 678
III.43. Distribución de los trabajadores extracomunitarios en España 679
III.44. Regularización extraordinaria del año 2000 682

ÍNDICE DE GRÁFICOS

CAPÍTULO I

I.1. Ciclo económico en España y en la Unión Europea, 1975-2000 23
I.2. Ciclo de la actividad y del empleo, 1980-2000 27
I.3. Componentes sectoriales del PIB, 1997-2000 34
I.4. Resultados sectoriales, 2000 35
I.5. Crecimiento del VAB por Comunidades Autónomas, 2000 55
I.6. Consumo, inversión y PIB, 1990-2000 64
I.7. Auge del turismo, 1983-2000 81
I.8. IPC por sectores, 1999-2000 87
I.9. IPC e inflación subyacente, 1999-2000 92
I.10. Componentes del Índice de Precios Industriales, 1998-2000 93
I.11. Política monetaria del Banco Central Europeo, 2000 99
I.12. IPC de España y tipos de interés 103
I.13. Cotización del euro frente al dólar, al yen y a la libra esterlina 108

CAPÍTULO II

II.1. Crecimiento del PIB, el empleo en la EPA y la afiliación a la Seguridad Social, 1983-2000. Tendencia trimestral 1998-2000 200
II.2. Descenso del paro en la EPA y registrado en el INEM, 1983-2000. Tendencia trimestral 1998-2000 202
II.3. Paro registrado, demandas de empleo y colocaciones, 1998-2000 203
II.4. Crecimiento de la actividad, la ocupación y el paro, por sexo, 1995-2000 206
II.5. Empleo en España por sectores, 1988-2000 209
II.6. Tasas de temporalidad, 1990-2000 213
II.7. Asalariados por tipo de contrato, 1990-2000 214
II.8. Tasas de temporalidad por grupos de edad, 1987-2000 216

II.9. Tasas de temporalidad por sexo y edad en España y en la Unión Europea, 1999 217
II.10. Tasas de parcialidad por sexo y situación profesional, 1994-2000.... 221
II.11. Evolución del empleo en las Comunidades Autónomas, 1998-2000. 223
II.12. Evolución del paro en las Comunidades Autónomas, 1998-2000 225
II.13. Diferencias en el paro por sexos, Comunidades Autónomas, 2000... 227
II.14. Trabajadores afectados por medidas de extinción en expedientes autorizados, 1993-2000..... 259
II.15. Asuntos por despido: conciliaciones y Juzgados de lo Social, 1993-2000 260
II.16. Beneficiarios de prestaciones contributivas, subsidio y REASS, 1991-2000 335
II.17. Tasas de cobertura del sistema de protección por desempleo, 1991-2000 336
II.18. Gasto en prestaciones por desempleo y paro registrado, 1994-2000. 345
II.19. Evolución de la incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, accidentes leves, 1992-2000 424
II.20. Evolución de la incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, accidentes graves, 1995-2000..... 425
II.21. Evolución de la incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, accidentes mortales, 1995-2000 425
II.22. Incidencia total de accidentes de trabajo por sectores, 1988-2000.... 426
II.23. Incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja. Ramas por encima de la media, 1988-2000 427
II.24. Incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja. Ramas por debajo de la media, 1988-2000 428

CAPÍTULO III

III.1. Distribución de la población de 25 a 64 años de edad por nivel educativo alcanzado, 1998..... 491
III.2. Población que ha terminado al menos educación secundaria superior, por grupos de edad, 1998..... 492
III.3. Población que ha terminado al menos educación terciaria, por grupos de edad, 1998..... 496
III.4-5. Actitudes de la población ante el funcionamiento de la asistencia sanitaria pública 513
III.6. Evolución de la lista de espera quirúrgica del Insalud, 1996-2000 524

III.7. Evolución del gasto sanitario público y del gasto farmacéutico, 1990-2000 527
III.8. Viviendas iniciadas por Comunidades Autónomas, 1997-2000 544
III.9. Viviendas terminadas por Comunidades Autónomas, 1997-2000 545
III.10. Tipos de interés hipotecarios, 1993-2000 547
III.11. Evolución del gasto total trimestral, 1998-2000 584
III.12. Distribución de las consultas y reclamaciones según sector económico, 2000 593
III.13. Usuarios en España de ordenador e Internet, 1996-2000 595
III.14. Facturación generada a través del comercio electrónico, 1997-2000 595
III.15. Indicadores sociedad interactiva: España respecto a media UE 603
III.16. Conexiones y usuarios de Internet en los países de la Unión Europea, 1999-2000 604
III.17. Utilización de idiomas en Internet, 2000 605
III.18. Inversión en 21 acciones destacables de la iniciativa INFO-XXI 612
III.19. Empleo en el sector ICT en los países miembros, 1996 615
III.20. Comportamiento autonómico del mercado TIC 615
III.21. Teletrabajadores en los países miembros, 1999 616
III.22. Extranjeros residentes en España por continente de procedencia 672
III.23. Distribución de los residentes extranjeros por Comunidades Autónomas 673

ÍNDICE DE TABLAS

CAPÍTULO II

II.1.	Reforma del mercado de trabajo	251
II.2.	Incentivos 2000 (1 enero-31 diciembre 2000). Incentivos 2001 (4 marzo-31 diciembre 2001)	257
II.3.	Síntesis de resultados de medidas de fomento del empleo de las Comunidades Autónomas, 2000	284
II.4.	Acuerdos regionales en materia de empleo y balances, 2000	297

ÍNDICE DE ANEXOS

CAPÍTULO II

II.1. Muestra de convenios colectivos 418
II.2. Programas regionales de prevención de riesgos laborales para empresas de mayor siniestralidad 441

CAPÍTULO III

III.1.1. Educación primaria 501
III.1.2. Indicadores de educación 507
III.2. Indicadores de sanidad 532
III.3. Indicadores de vivienda 565
III.4. Indicadores de medio ambiente 580
III.5. Indicadores de consumo 601
III.6.1. Iniciativas autonómicas para la sociedad de la información 620
III.6.2. Indicadores de sociedad de la información 625